





INSTITUTA  
DE LA  
**JURISPRUDENCIA**

ESTABLECIDA POR LAS  
Exmas. CÁMARAS DE APELACIONES  
DE LA  
CAPITAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  
EN SUS SENTENCIAS, EN ORDEN NUMÉRICO Y ALFABÉTICO

POR EL  
DR. J. J. HALL  
(ABOGADO)

Comprende los tomos 7 y 8 de la Serie 3ª, Jurisprudencia Comercial y Criminal;  
5, 6, 7 y 8 de la Serie 5ª de la Jurisprudencia Civil;  
y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Serie 6ª de la Civil.

TOMO VIII—PRIMERA PARTE



BUENOS AIRES  
FELIX LAJOUANE, EDITOR  
79—PERÚ—85

BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA	
Nº DE	285
UBICACIÓN	
FICHA	



1. **Abandono**—De los hijos, en edad que la ley permite su tenencia exclusiva á la madre, importa una presunción de su indiferencia hacia ellos y permite su entrega al padre.—Civ., tom. 6, pág. 7, Ser. 6ª.

2. **Abandono**—Del juicio, hace procedente la declaración de rebeldía.—Civ., tom. 10, pág. 106, Ser. 6ª.

3. **Abandono**—Para que el abandono pueda servir de

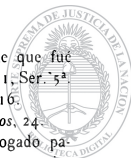
---

1—Se constató que durante cinco años que los esposos habían sostenido un juicio de divorcio, el esposo había tenido los hijos en su poder sin que la madre hubiese hecho ninguna diligencia tendente á conseguir la tenencia de los hijos menores de cinco años, á los cuales tenía derecho según lo dispone el art. 76 de la Ley de Mat. Civ. Esto revela de parte de la madre mucha indiferencia ó un gran descuido en el cumplimiento de sus deberes de tal. Por otra parte, el padre comprobó acabadamente su honorabilidad notoria, como también que poseía los medios necesarios para educar y atender á todos sus hijos.

2—El caso no se hallaba comprendido en el art. 45 del Cód. de Proc., sino en el 433 del mismo.

3—Se comprobó que el marido había salido, de la casa en que vivía con su esposa y otros parientes de ella, á causa de disgustos ocurridos con estos últimos; pero no se demostró, en modo alguno, que el esposo procediera con malicia, esto es, que tuviera el propósito de desconocer las obligaciones que las leyes imponen al marido con relación á su esposa. Por el contrario, se estableció en autos que, una vez que el marido salió de la casa indicada, fijó un nuevo domicilio, hizo gestio-





base al divorcio, debe justificarse plenamente que fué voluntario y malicioso.—Civ., tom. 8, pág. 211, Ser. 5ª.

**Abandono**—Véase: *Concurso*, 14; *Divorcio*, 16.

**Abintestato**—Véase: *Testamento*, 1; *Herederos*, 24.

1. **Abogado**—El cobro de honorarios del abogado patrocinante de los herederos, no puede conceptuarse incidente de la testamentaria.—Civ., t. 6, p. 213, Ser. 5ª.

2. **Abogado**—Del vencedor, carece de acción para exigir del condenado en costas, el pago de sus honorarios.—Civ., tom. 6, pág. 225, Ser. 5ª.

3. **Abogado**—Los honorarios del abogado patrocinante nes ante el juez, á fin de que su esposa fuera á habitar con él. Tales actos, posteriores á su retiro de la casa, demuestran bien á las claras su voluntad inequívoca de continuar llenando sus deberes de esposo; y prueban también que al alejarse momentáneamente del lado de su consorte, fué impulsado por el deseo de libertarse de la vida de sinsabores que llevaba, como lo afirmó, sin que entrara en su ánimo el propósito de retirarle á su compañera la protección y el amparo que le debía. El art. 51 de la Ley de Mat. Civ. dispone que: «El marido está obligado á vivir en una misma casa con su mujer, á prestarle todos los recursos que le fueren necesarios, y á ejercer todos los actos y acciones que á ella correspondan, haciendo los gastos judiciales necesarios aun en el caso de que fuese acusada criminalmente», etc. Se ve pues, que la ley ha impuesto al marido muy serias obligaciones con relación á su esposa, de las cuales no puede prescindir sin incurrir en malicia, por que malicia implica toda violación de la ley. El abandono voluntario es malicioso, cuando el esposo no ha tenido razón justificable para producirlo. En el caso que nos ocupa, tuvo un motivo muy atendible para separarse momentáneamente de su esposa, según se ha establecido. Quedando escluida toda idea de malicia por su parte.

1—Porque según la Cím. es una gestión personal del abogado.

2—Así lo tienen establecido constantemente los tribunales.—Véase: *Inst.*, tom. 7º, verb. *Abogado*, 8; tom. 5º, mismo verb. 15, tom. 4º, verb. *Honorarios*, 7; tom. 1º, mismo verb., núm. 5.

3—En este caso el abogado presta sus servicios á los menores por intermedio del representante legal de los mismos, como lo es el tutor, pesando en consecuencia sobre ellos, la obligación de remunerar dichos servicios.



del tutor, son de cargo de los menores.—Civ., tom. 6, pág. 302, Ser. 5<sup>a</sup>.

4. **Abogado**—Patrocinante, no puede ser presentado como testigo.—Civ., tom. 6, pág. 352, Ser. 5<sup>a</sup>.

5. **Abogado**—El procurador y abogado de una reparación pública, tienen derecho á cobrar honorarios al condenado en costas.—Civ., tom. 6, pág. 381, Ser. 5<sup>a</sup>.

6. **Abogado**—Los honorarios de abogado por trabajos estrajudiciales, deben ser determinados por peritos.—Civ., tom. 1, pág. 5, Ser. 6<sup>a</sup>.

7. **Abogado**—La ausencia del abogado del que debe presentar las posiciones, no es causal bastante para señalar nuevo día.—Civ., tom. 5, pág. 221, Ser. 5<sup>a</sup>.

8. **Abogado**—Justificada la intervención estrajudicial del abogado, procede el pago de los honorarios que determinen peritos—Civ., tom. 4, pág. 192, Ser. 6<sup>a</sup>.

9. **Abogado**—De uno de los herederos no puede le-

---

4—No se puede obligar á un abogado á revelar el secreto profesional de que se le hace depositario, porque esto importaría afectar los derechos de defensa de la parte. Además, el abogado de una de las partes no puede deponer en contra del interesado á quien patrocina, pues le corresponde las generales de la ley, según se desprende de lo dispuesto en los arts. 191, inc. 3º; y 207, inc. 3º del Cód. de Proc.

5—De acuerdo con el caso publicado en el tom. 7º, verb. *Abogados*, núm. 1 de la Inst.

6—Art. 1627 del Cód. Civ.

7—Era la segunda vez que la parte solicitaba nuevo día por la misma causa. Un temperamento contrario autorizaría á deferir á voluntad de las partes la celebración de las audiencias.

9—Si bien los jueces tienen amplia facultad en la designación de los terceros cuando por motivos especiales sea inconveniente encomendar á alguno de los herederos la administración del caudal hereditario—art. 643 del Cód. de Proc.—el propósito evidente de la ley es que el nombramiento recaiga en personas extrañas, no siendo posible reputar tales á los abogados ó procuradores de alguno de los interesados, atentas sus vinculaciones con los mismos.



galmente ser nombrado de oficio administrador de la herencia.—Civ., tom. 7, pág. 164, Ser. 6ª.

10. **Abogado**—Son de cargo de la testamentaria los honorarios del abogado y procurador del heredero en cuanto se refieran á medidas de interés común.—Civ., tom. 9, pág. 317, Ser. 6ª.

11. **Abogado**—Si existe embargo sobre la porción del heredero, solo pueden abonarse los honorarios del abogado patrocinante bajo su responsabilidad.—Civ., tom. 10, pág. 391, Ser. 6ª.

12. **Abogado**—Las causales de recusación no son aplicables al abogado patrocinante.—Civ., tom. 10, página 402, Ser. 6ª.

13. **Abogado**—Patrocinante de una de las partes no puede ser presentado como testigo por la contraria.—Civ., tom. 8, pág. 42, Ser. 3ª.

14. **Abogado**—Inscriptos en la matrícula hasta el año 1895.—Civ., tom. 8, pág. 419, Ser. 6ª.

10—Así lo tiene resuelto constantemente la jurisprudencia.—Véase: Inst., tom., 6º, verb. *Honorarios*, 22; tom. 5, mismo verb., núm. 28.—Pero el abogado solo tiene derecho á cobrar directamente de su patrocinado, sin perjuicio de que este repita de la testamentaria lo pagado por este concepto.—Véase: Inst., tom. 5º, verb. *Honorarios*, número 18.

11—Además de la responsabilidad personal del abogado, debe tenerse presente que los honorarios son privilegiados y en este carácter, el derecho de ser pagado con preferencia al otro acreedor podría fácilmente establecerse por medio de la correspondiente tercería de mejor derecho.

12—El juez se había escusado de entender en otro asunto en que el abogado era simple litigante como parte personalmente interesada en el pleito. Después apareció patrocinando en su carácter de abogado, en otro juicio y recusó al Juzgado: no se le hizo lugar porque el art. 366 en su inc. 11 no comprende el caso en que el abogado interviene como letrado.

13—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase el núm. 4.

**Abogado**—Véase: *Costas*, 40; *Recusación*, 3.

**1. Absolución del acusado**—Ante la jurisdicción crimi-

1.—La demanda tuvo por fundamento la muerte dada a un niño por un coche de una empresa de trenvías. El autor del hecho había sido absuelto de culpa y cargo ante la jurisdicción criminal. Después se instauró la acusación civil de daños y perjuicios contra la empresa. La cuestión fué resuelta por mayoría en la Cám. La minoría sostuvo que el art. 1103 del Cód. Civ., establece que después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución. El hecho principal sobre que versó la absolución en el juicio criminal, fué la supuesta culpa ó imprudencia en el suceso de referencia; luego ese mismo hecho, la culpa ó imprudencia del actor no se puede alegar en el juicio civil á los efectos de responsabilizársele por los daños que se hubiesen causado con arreglo al art. 1103 citado. Y entonces, la acción es improcedente, porque si la empresa es responsable del daño que causen las personas que están bajo su servicio, toda vez que medien los requisitos del art. 1109, Cód. Civ., es evidente que faltando esos requisitos, ó no habiendo procedido sus agentes con culpa ó imprudencia, no es pasible de responsabilidad alguna. Se argumentó que de que no haya constituido el hecho de la referencia un delito del derecho penal, no se sigue que no constituya un delito del derecho civil ó cuasi-delito por el que pueda responsabilizarse á la empresa. A esto se observó que el Código Penal ha definido como delito, la culpa ó imprudencia en el art. 3º, sec. 1ª, lib. 1º, precisamente las que en derecho común se califican de cuasidelito, es lo que la ley penal ha erigido en delito—art. 15, Cód. Pen.—De donde surge claro que el punto que se trata de decidir ante la jurisdicción civil, es el mismo que ha juzgado y decidido el Tribunal del crimen. La mayoría dijo que de la prueba deducida, resultaba debidamente acreditado que el accidente que acusó la muerte de la víctima se produjo por un hecho imputable al empleado de la empresa que conducía el coche: y teniendo el juicio civil por objeto la reparación del daño con prescindencia absoluta del delito criminal que consiste en la infracción de la ley penal, debe convenirse asimismo que los razonamientos fundados en la solución pronunciada en favor de dicho cochero por el Juez de instrucción, no puede perjudicar ni enervar el perfecto derecho que tiene el damnificado por los daños y perjuicios, conforme á lo establecido por la ley civil como consecuencia de todo acto ó negligencia imputable al que los haya causado. La Cámara lo





nal no impide que en la jurisdicción civil pueda justificarse su culpa ó negligencia á los efectos de indemnizar el daño civil.—Civ., tom. 10, pág. 214, Ser. 6ª.

2. **Absolución del acusado**—Si los hechos calificados como delito, pueden por circunstancias especiales, considerarse actos lícitos, procede la absolución del acusado.—Crim., tom. 7, pág. 176, Ser. 3ª.

**Absolución del acusado**— Véase: *Agravio moral*, 3, 4 y 6.

1. **Absolvente**—El ponente de las posiciones está obligado á contestar en aquel acto las preguntas que sobre las mismas le formule el absolvente.—Civ., tom. 10, página 350, Ser. 6ª.

**Absolvente**—Véase: *Idioma patrio*, 1.

**Abuso de autoridad**—V.: *Atentado á la autoridad*, 1.

tiene así declarado constantemente en reiterados fallos, como puede verse entre otras causas, las que se registran en la pág. 374, tom. 6º, Ser. 3ª, pág. 79, tom. 4º, pág. 155, tom. 6º, Ser. 4ª; como igualmente la de Ferrero de Nervo con el tramway La Nueva.

2—Argumento del art. 6º del Cód. Pen.—Haus, en sus Principios generales del derecho penal, núm. 559, dice lo siguiente: «Toda infracción se compone de dos elementos: un hecho contrario á la ley penal, y la culpabilidad del agente. Faltando una ú otra de estas condiciones esenciales, no hay delito; el hecho puede haber sido ejecutado en circunstancias particulares y escepcionales que lo hacen legítimo, aunque entre en la definición legal de un delito y haya sido cometido con consentimiento y voluntad, lo que tiene lugar cuando el actor tenía el derecho y el deber de cumplirlo. Las circunstancias de esta naturaleza tienen, pues por efecto, tomar la criminalidad misma de la acción y por consiguiente escluir el delito. La culpabilidad penal del agente consiste generalmente en la voluntad de cometer un acto, cuya criminalidad conoce.»

1—Arts. 127, 131 y 137 de Cód. de Proc.—Reus, tomo 2º, pág. 45; Manresa y Reus, tom. 3º, pág. 218, *in fine*—Las preguntas ú observaciones que se pueden formular deben referirse exclusivamente á los hechos materia de las posiciones puestas al contrario.

1<sup>a</sup> **Accidentes**—Las empresas de transporte no están obligadas al pago de los servicios prestados por facultativos á las víctimas de un accidente, aun cuando empleados subalternos, estralimitando el mandato, lo soliciten.—Civ., tom. 8, pág. 170, Ser. 5<sup>a</sup>.

**Accidentes**—Véase: *Fábrica*, 1.

1<sup>b</sup>. **Acción**—Los herederos que pretendan la exclusiva propiedad de los muebles dejados por el causante, deben deducir acción en forma.—Civ., tom. 3, pág. 76, Ser. 6<sup>a</sup>.

2. **Acción**—El heredero debe depositar la suma que adeude á la sucesión, sin perjuicio de las acciones que pretenda tener contra ella.—Civ., t. 3, pág. 77, Ser. 6<sup>a</sup>.

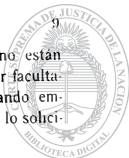
3. **Acción**—Si el demandado ha transferido la propie-

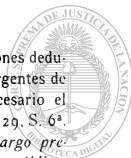
1<sup>a</sup>—No existe locación de servicios entre el médico y la empresa en los términos requeridos por el art. 1623 del Cód. Civ.

1<sup>b</sup>—Hay hechos controvertidos que deben ser materia de prueba, en cuyo caso corresponde la sustanciación de la causa por la vía ordinaria—art. 66 del Cód. de Proc.

2—El heredero adeudaba una suma de dinero al causante de la sucesión: se ordenó que depositara su importe sin perjuicio del derecho de deducir la acción correspondiente para reclamar el pago de lo que debía adeudarle á su vez de sucesión.

3—La propietaria de una finca espresó: que uno de sus linderos, comenzó á fines de 1890 la construcción de unos galpones haciendo uso al efecto de un muro provisorio asentado en terreno de su propiedad. Ese muro era antiguo, en barro y de un ladrillo de espesor, circunstancias que no impidieron que continuase su obra, elevando el muro con violación de las ordenanzas municipales. Espresaba la misma que el lindero en vez de enviar las aguas pluviales á la calle, las conducía por medio de un caño oculto al pozo de agua destinado á los usos de la casa. Como consecuencia de estos hechos promovió demanda á fin de que se le condenase á demoler el muro en cuestión, construyéndolo de acuerdo con las ordenanzas vigentes y á que se abstuviese de conducir las aguas de lluvia al pozo referido, cortando el caño de comunicación que existía. De autos resultaba que el demandado no era el propietario del fundo lindero al de la demandante, como no lo fué en la fecha de la interposición de la demanda. Con anterioridad á es-





dad del fundo, no pueden prosperar las acciones deducidas sobre cumplimiento de obligaciones emergentes de la propiedad y para cuyo cumplimiento es necesario el dominio y posesión del fundo.—Civ., t. 3, p. 329, S. 6ª.

**Acción**—Véase: *Fiador*, 4; *Arraigo*, 7; *Embargo preventivo*, 15; *Copias*, 4; *Depositario*, 8; *Escritura pública*, *Nulidad de sentencia*, 5; *Prueba plena*, 1; *Contrademanda*, 1; *Contrato de depósito*, 2; *Costas*, 55 y 82; *Prescripción*, 3 y 4; *Honorarios*, 14; *Alquileres*, 13; *Escrituración*, 2; *Menores*, 8; *Cosa juzgada*, 5; *Daños y perjuicios*, 1 y 54; *Contrato de arrendamiento*, 2; *Abogado*, 2; *Acción reivindicatoria*, 2; *Contrato*, 1 y 2; *Contrato de compraventa*, 2 y 5; *Boleto de compraventa*, 2; *Aval*, 2; *Escepción de falta de personería*, núm. 8.

**Acciones**—Véase: *Personería*, 1; *Desistimiento*, 4; *Escrituración*, 1; *Embargo*, 15; *Sentencia*, 7.

**Acción de los acreedores**—Véase: *Actos del deudor*, 1.

**Acción contra el administrador**—V.: *Administración*, 3.

1. **Acción civil**—Las acciones civiles no pueden ejercitarse como incidentes en jurisdicciones de escepción.—Com., tom. 8, pág. 74, Ser. 3ª.

ta había transferido su dominio á tercero, con la particularidad que la transferencia no era ignorada por la parte actora, pues según su propia confesión se halló en el acto del remate, en cuya circunstancia hizo presente al martillero que el muro estaba en litigio. Este hecho preexistente á la demanda obsta fundamentalmente á su progreso, pues no se puede obligar al demandado á que demuela y reconstruya un muro que ya no le pertenece.

1.—La acción deducida era la de nulidad de la venta de un inmueble por haber sido hecha en fraude de sus acreedores. Esa nulidad fué alegada ante la jurisdicción comercial con motivo de un pleito seguido ante ese Juzgado. Se resolvió que no le correspondía entender en él al Juez de lo Com. por cuanto esta jurisdicción es de escepción para los asuntos de esa naturaleza, siendo así que la acción de nulidad de la venta era puramente civil.

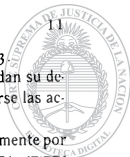
**Acción del comprador**—Véase: *Compraventa*, 3.

1<sup>a</sup>. **Acción conjunta**—Si los demandantes fundan su derecho en diversos créditos, no pueden acumularse las acciones.—Civ., tom. 6, pág. 233, Ser. 5<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Acción criminal**—Corregidos disciplinariamente por

1<sup>a</sup> - Siendo los créditos de diversa naturaleza, el demandado puede hacer distintas defensas y observaciones, cuya sustanciación sea difícil ó imposible en un mismo expediente, contrariando de esta manera los principios que rigen la continencia del litigio. Cada cobro puede ser materia de defensas especiales que requieran una tramitación.

1<sup>b</sup>—En un juicio seguido ante la jurisdicción civil se virtieron conceptos que el juez de la causa creyó que merecían una corrección disciplinaria, y procediendo en consecuencia mandó testar las frases y apercibió al procurador y letrado. La parte contraria se presentó ante la jurisdicción criminal querellándose por las injurias vertidas y que habían originado la corrección disciplinaria. El Juez de lo Correccional ante quien se presentó la querella la desechó, de oficio, diciendo: «Resultando del certificado, que los párrafos acusados como injuriosos han sido mandados testar por el juez á quien fué presentado el escrito que los contenía y apercibidos sus firmantes, es evidente á juicio del infrascripto que no puede nacer de esto un delito acusable ante esta jurisdicción. Efectivamente, en estos casos la facultad de corregir cualquier palabra incorrecta ó términos inconvenientes vertidos por las partes en los juicios que intervengan, aunque sean de abogados ó procuradores, es puramente facultativo del juez que conoce de la causa, pues de lo contrario serían innumerables los pleitos que nacieran y quedaría hasta cierto punto coartada la libertad de la defensa. Por esto, se declara que la jurisdicción para conocer en los casos previstos por los arts. 52 y 53 del Cód. de Proc. Civ., compete al juez ante quien se presenten los casos de mantener el buen orden en los juicios, y que de esto no nace delito alguno.» El Fiscal de la Cám. aconsejó la revocatoria de la sentencia diciendo que: «El art. 593 del Cód. de Proc. en lo Crim. dice testualmente lo siguiente: «Cuando la querella se dedujese por injuria ó calumnia, *inferido en juicio*, deberá acompañarse un testimonio del *escrito* ó *acta* en que se hubiese vertido, espedido por orden del juez que conociese de la causa». No es cierto, pues, como lo asevera el inferior, que la facultad de corregir cualquier palabra ó términos inconvenientes vertidos por las partes en los juicios, es puramente facultativo del juez que conoce de la causa.







el juez ante quien se virtieron los conceptos injuriosos estampados en una demanda, no procede la acción criminal.—Crim., tom. 8, pág. 298, Ser. 3ª.

**Acciones criminales**—Véase: *Simulación*, 2.

**Acción sobre cumplimiento**—Véase: *Boleto*, 2.

1. **Acción de daños y perjuicios**—Si el demandado por daños y perjuicios no ha intervenido en los actos que fundan la acción, debe rechazarse la demanda sin juzgar sobre su procedencia.—Civ., tom. 2, pág. 341, Ser. 6ª.

**Acción de daños y perjuicios**—Véase: *Contrato bilate-*

Cuando las partes crean que esas palabras ó términos importan una calumnia ó una injuria, pueden acusar, y los jueces criminales ó correccionales según el caso, son competentes para conocer del juicio de calumnia ó injuria que se entable. La facultad acordada por el art. 52 del Cód. de Proc. Civ., tiene por objeto mantener el decoro y buen orden en los juicios y no acordar reparaciones por agravios al honor ó dignidad de los litigantes. La calumnia ó la injuria en cualquier terreno que se produzca cae bajo el imperio de la ley penal, y son los jueces que están investidos de esta jurisdicción, los competentes para declarar si hay ó no delito y pronunciar la pena del caso. La Cám. confirmó el auto de 1ª Inst. por mayoría de tres votos contra uno, fundándose en que «teniendo en consideración que el procurador y letrado que firman los conceptos que han motivado la presente demanda, fueron corregidos disciplinariamente por el juez ante quien se virtieron y atento además á lo establecido en el art. 200 del Cód. de Proc. Crim.» La minoría dijo que procedía la acción de injurias y calumnias vertidos en juicio en los escritos presentados por las partes, de cuya responsabilidad no estaban exentos los abogados ó procuradores, dados los términos del art. 593 del Cód. de Proc. Crim. y la doctrina del derecho común, según la cual solo los miembros del Congreso no pueden ser enjuiciados por sus opiniones en el parlamento y los jueces por las vertidas en sus fallos.

1.—Porque no puede haber base para una indemnización de daños y perjuicios ocasionados por un tercero. Se trata de una *res inter alios acta*. Solo el autor del hecho es responsable de los daños por él causados—art. 1109 del Cód. Civ.—Salvo los casos de escepción espresamente determinados por la ley—art. 1113 y siguientes del mismo Código.

ral, 5; *Daños y perjuicios*, 3, 39, 40, 41, 44, 46 y 49; *Costas*, núm. 15.

1<sup>a</sup>. **Acciones deducidas**.—El convenio sobre lo que es materia de juicio, no importa una renuncia tácita de las acciones deducidas.—Civ., tom. 1, pág. 76, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Acción deducida**.—Véase: *Bienes embargados*, 17; *Costas*, 74; *Nulidad de sentencia*, 13.

**Acción de depósito**.—Véase: *Depositario*, 1 y 2.

1<sup>b</sup>. **Acción directa**.—El mandante tiene acción directa contra el sustituyente sin interpelar al sustituto.—Civ., tom. 6, pág. 217, Ser. 5<sup>a</sup>.

1<sup>c</sup>. **Acción ejecutiva**.—Solo procede por alquileres, en tanto se ocupe el predio arrendado.—Civ., tom. 3, página 57, Ser. 6<sup>a</sup>.

2. **Acción ejecutiva**.—El tenedor de una letra no protestada, carece de acción ejecutiva contra el librador.—Com., tom. 7, pág. 318, Ser. 3<sup>a</sup>.

**Acción ejecutiva**.—Véase: *Autenticación*, 1; *Alquileres*, 6 y 30; *Mandato*, 11.

1<sup>d</sup>. **Acción de escrituración**.—Demandada la escritura definitiva del contrato, aun cuando exista conformidad de partes sobre las cuestiones á resolver, debe ser rechazada la acción, si tiene por base un boleto privado de compraventa.—Civ., tom. 6, pág. 127, Ser. 5<sup>a</sup>.

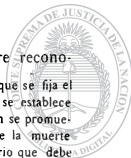
1<sup>a</sup>.—La renuncia de derechos no se presume, sino que debe constar espresamente.

1<sup>b</sup>.—Art. 1926 del Cód. Civ.

1<sup>c</sup>.—Arts. 466 del Cód. de Proc., y 1556 del Cód. Civ. El sumario está de acuerdo con la jurisprudencia. Véase: *Inst.*, tom. 5<sup>a</sup>, verb. *Alquileres*, núm. 2.

2.—Arts. 621 y 666 del Cód. de Com.

1<sup>d</sup>.—Un boleto privado de compraventa no autoriza sino el ejercicio de la acción tendente á reducirlo á escritura pública.



### 1. Acción de filiación—Las cuestiones sobre recono-

1—Son muy numerosos ya los fallos dictados, en los que se fija el verdadero alcance del art. 325 del Cód. Civ., en los que se establece cuál es la prueba que corresponde rendir cuando la acción se promueve en vida de los padres, ó cuando se inicia después de la muerte de éstos; y en los que se indican las reglas del criterio que debe presidir el exámen de aquella prueba, punto importantísimo, sobre todo, en juicio que, como el que nos ocupa, tanta trascendencia revisten. Es pues, de todo punto inútil repetir sobre estos tópicos lo que ya tantas veces y tan estensamente se ha dicho en otros litigios, como puede verse entre otros, los casos de Demarchi con Mosquera, y el de Pestaña, registrado este último en el tomo 3.º, pág. 296, ser. 4.ª de los fallos de la Cám. Civil. El caso debe regirse por las disposiciones del art. 325 del Cód. Civ. en su segunda parte, no sólo por que la demanda fué instaurada después de la muerte del pretendido padre, sino también porque el fallecimiento de éste ocurrió después de sancionada, por la ley llamada de correcciones, la segunda parte de ese artículo. En esta inteligencia, el actor debe rendir la prueba de la posesión de estado exigida por el citado precepto. El concepto legal que la jurisprudencia haya dado á esa prueba, es amplia y favorable, al no exigir como indispensable la concurrencia de los tres elementos, *nomen, tractatus, fama*, siempre que del conjunto de ella resulte el reconocimiento que es su objetivo. Pero en el caso que nos ocupa, había una cuestión que resolver que podía llamarse previa. Ella consiste en saber si la acción de filiación natural, está regida y debe juzgarse por la ley once de Toro y sus concordantes, que condensan la antigua legislación sobre la materia, ó por las disposiciones pertinentes del Cód. Civ. vigente. Para sostener la tesis de que la acción está regida por la ley once de Toro, se recuerda el principio de la no retroactividad de las leyes proclamado por el art. 3.º del Cód. Civ. Se observa que el hecho de la filiación de que se trata, ocurrió el año 1849, bajo el imperio de la legislación española, circunstancia que le da un derecho irrevocablemente adquirido de ser aquella juzgada y declarada con arreglo á la ley once de Toro, y no con sujeción al texto del art. 325 del Cód. Civ., que ha restringido los medios probatorios en relación á la ley española para casos como el presente y que altera por eso mismo el indicado derecho. Es verdad que el art. 3.º del Cód. Civ. enseña que las leyes disponen para lo futuro, que no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos ya adquiridos. La ley once de Toro dice: «E por que no se pueda dubdar

cimiento de filiación natural se rijen única y exclusiva-

cuales son hijos naturales, ordenamos é mandamos, que entónces se digan ser los hijos naturales cuando al tiempo que nacieren ó fueren concebidos sus padres podían casar con sus madres justamente sin dispensación, con tanto que el padre lo reconozca por su hijo, puesto que haya tenido la mujer de quien lo ovo en su casa, ni sea una sola: ca concurriendo en el hijo las calidades susodichas mandamos que sea hijo natural.» Como se ve, esta ley no da al hijo natural acción de reconocimiento de la filiación; todo está librado á la voluntad del padre quién puede ó no reconocerlo. Su derecho, pues, no nace del hecho del engendro. De aquí se desprende que el hijo natural por esta legislación solo tenía un derecho en expectativa. Puede decirse, siguiendo las ideas de algunos comentadores, que el reconocimiento á que alude la ley de Toro, puede ser tanto expreso como tácito, pero aunque así sea, punto desde luego controvertido, no por ello sería más favorable que el Cód., pues la posesión de estado asignada por éste, cuando el padre ha fallecido, no es otro caso que el reconocimiento tácito. Así lo explica el Dr. Segovia, cuando dice en el comentario al art. 325 del Cód. Civ. «Lo que en derecho francés se llama posesión de estado, no es propiamente una prueba determinada sino una presunción legal de reconocimiento ó confesión de la paternidad legítima—lo mismo puede decirse de la natural—que según los casos, es expresa, tácita ó presunta, y que á veces no es sino la fórmula de la conciencia ó convicción del juez.» Así lo ha comprendido el Dr. Cortés, como resulta de la lectura de las eruditas vistas, que ha producido sobre filiación natural. De aquí se sigue que el hijo natural no tiene, dentro del precepto de la ley once de Toro, un derecho actual, y concomitante con su concepción y nacimiento sino una mera expectativa; si no media el reconocimiento voluntario del padre. El hijo no adquiere jamás derecho alguno de filiación. El doctor Llerena, comentando el art. 3º del Cód. Civ., se expresa en estos términos: «Pensamos que el reconocimiento judicial de los hijos naturales, debe hacerse con arreglo á la actual legislación; aún de aquellos hijos nacidos antes de la vigencia del Cód. En efecto: el estado de hijo natural no resulta del hecho solo del nacimiento, por lo menos á los ojos de la ley, y en lo que respecta especialmente al padre. Para que ese estado se adquiriera, dice Chabot d'Alliere—hijos naturales—es indispensable un reconocimiento hecho con arreglo á las leyes existentes. Mientras él no exista, ninguna relación jurídica hay entre el padre y el hijo. La causa eficiente é inmediata, dice Demolombe,



mente por las leyes vigentes en la época en que se deduce

tom. 1º, sección 1ª, núm. 42 «de las relaciones legales de paternidad y filiación» no es el hecho único, el hecho absoluto y abstracto del nacimiento: á los ojos de la ley, esa causa consiste en el reconocimiento practicado ó en el fallo expedido en conformidad á las condiciones, prescripta por ella.» Jamás la condición del hijo natural, en cuanto al estado mismo, podrá equipararse á la del legítimo; éste desde el momento en que nace de un matrimonio tenido por válido, la ley le considera, *juris et de jure*, legítimo, aún cuando en realidad no lo sea, y para destruir esa presunción, habría que probar lo contrario; antes de esa prueba la ley exige á los padres y al hijo ciertos deberes recíprocos de los cuales no pueden substraerse. No sucede así con los nacidos en las condiciones del hijo natural; el nacimiento no crea entre ellos y sus padres relación alguna jurídica; son considerados por la ley como extraños, y es por esto que no les impone deber alguno inter no son reconocidos. Las obligaciones y derechos del hijo legítimo aparecen con el nacimiento, mientras que para los hijos naturales nacen después del reconocimiento. Antes de la sentencia declaratoria, el hijo tiene únicamente la esperanza de adquirir el estado de natural; por consiguiente, influyendo la ley inmediatamente, sólo destruye una esperanza, pero no un derecho adquirido. Si esto es así, es incuestionable que la ley aplicable á la acción que nos ocupa, es el Cód. Civ., de conformidad con el art. 4044 del Cód. Civ. que dice: «Las nuevas leyes deben ser aplicadas á los hechos anteriores, cuando sólo priven á los particulares de derechos que sean meros derechos en expectativa, pero no pueden aplicarse á los hechos anteriores, cuando destruyan ó cambien derechos adquiridos.» Como se ha dicho, en los primeros tiempos de la vigencia del Cód. Civ., el art. 325 dió lugar á largas controversias y surgieron fallos contradictorios de los diversos tribunales del país. De un lado se sostenía que la amplitud de prueba que él admite para probar la filiación natural, procedida ya, en vida, ya después de muerto el padre; del otro se afirmaba que el espíritu de la ley no podía ser otro, que muerto el padre, solo procedía la prueba de la posesión de estado, más no la directa de filiación. Esta diversidad de pareceres subsistió en el foro y en la jurisprudencia sentada por los Tribunales, hasta que el Congreso adicionó el artículo recordado por la ley de 9 de Sep. de 1882. Desde entónces no tiene asidero la duda sobre el particular. El art. 325 adicionado, dice en su integridad testual: «Los hijos naturales tienen acción para pedir ser reconocidos por el padre ó la madre ó para que el juez les declare

acción judicial para que los tribunales hagan la declaración correspondiente. —Civ., tom. 6, pág. 315, Ser. 6ª.

**Acción de filiación** —Véase: *Filiación natural*, 10.

**Acción en forma**—Véase: *Bienes embargados*, 10; *Daños y perjuicios*, 8; *Notificación*, 2; *Dominio público*, 3; *Honorarios*, 4; *Nulidad*, 1.

**Acción del locador**—Véase: *Construcción*, 5.

1ª. **Acción modificada**—Toda acción que modifique lo pedido en la demanda, después de contestada, como acción nueva, debe deducirse ante el juez en turno. —Civ., tom. 9, pág. 226, Ser. 6ª.

**Acción nueva** —Véase: *Acción modificada*, 1.

1ª. **Acción de nulidad**—Del procedimiento, debe resolverse sin más trámite, si se deduce durante la ejecución de la sentencia.—Civ., tom. 9, pág. 79, Ser. 6ª.

2. **Acción de nulidad**—Del juicio ejecutivo, solo puede

tales, cuando los padres negasen que son hijos suyos, admitiéndoseles en la investigación de la paternidad ó maternidad todas las pruebas que se admiten para probar los hechos y que concurren á demostrar la filiación natural. No habiendo posesión de estado, este derecho sólo puede ser ejercido por los hijos durante la vida de sus padres. En su origen, el art. sólo constaba del primer inciso: el último es la adición antes mencionada y ella dice que: no habiendo posesión de estado, el derecho de los hijos para deducir acción de filiación, sólo puede ser ejercido durante la vida de sus padres. Luego, muerto el padre, la única prueba pertinente es aquella que tienda á demostrar la posesión de estado, ó sea el reconocimiento expreso ó tácito que el padre haya hecho del que se dice su hijo.

1ª—Una vez trabado el litigio por demanda y contestación no se puede modificar la acción; y cualquiera nueva petición que implique una modificación, importa una nueva acción que debe ser materia de nuevo juicio.

1ª—No corresponde sustanciarla por la vía ordinaria, por estar la causa en estado de ejecución de sentencia, sometida por consiguiente al orden marcado en el tít. 15 del Cód. de Proc.

2—Así lo establece el art. 489 del Cód. de Proc. Los vicios ó erro-



interponerse como escepción ó como recurso; si se deduce como acción debe rechazarse.—Civ., tom 8, página 203, Ser. 6ª.

3. **Acción de nulidad**—De un remate de bienes testamentarios, debe tramitarse como juicio ordinario.—Civ., tom. 8, pág. 336, Ser. 5ª.

res contenidos en las acusaciones judiciales solo pueden ser reparados por medio de los recursos que las leyes de procedimientos establecen, y no por medio de acciones ordinarias, pues las que las leyes civiles acuerdan solo se refieren á actos de distinta naturaleza emanada de la voluntad de los ajentes y no de la autoridad pública de que están investidos los jueces — arts. 944, 946 y 1037 del Cód. Civ.

3—Si bien el art. 520 del Cód. de Proc. establece que una vez aprobado el remate se procederá á hacer efectiva la entrega de la cosa al comprador, no dice que la falta de aprobación prive de todo derecho á este último. El acto del remate no es un contrato de compraventa completamente concluido, pero si es una promesa de venta, que confiere derechos á cada parte, para obligar á la contraria á cumplirla, lo que no puede dejarse sin efecto, por petición de solo una de ellas y sin oírse á la otra. Para la aprobación del remate, debe oírse sumariamente á los interesados, confiriéndoseles vistas de los autos, á fin de que examinen lo que el martillero esponga sobre su resultado, para aprobarlo si no hicieren observación alguna. Para cuando estos interesados, haciendo uso de su derecho, se opongan á la aprobación, diciendo de nulidad del remate, es evidente que no puede resolverse la cuestión sin oírse á todos los interesados, sustanciándose este incidente de la testamentaria por los trámites del juicio ordinario, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 66 del Cód. de Proc., por cuanto no se ha establecido otra tramitación especial á este respecto. En sentido análogo se han pronunciado los Tribunales como puede observarse en los autos seguidos por el doctor Emilio Viale, contra la testamentaria de don Archibaldo Craig sobre nulidad de una venta, en los que la Cám. anuló la resolución, por no haberse sustanciado el incidente de nulidad de acuerdo con las formalidades establecidas para el juicio ordinario. Es cierto que en este caso el remate ya estaba aprobado, pero esto no implica que antes de la aprobación no exista la promesa de venta á que se ha hecho referencia, que confiere derecho á ambas partes para exigir la escrituración.

**Acción de nulidad**—Véase: *Compraventa*, 2; *Embargo preventivo*, 33.

**Acción ordinaria**—Véase: *Información hereditaria*, 15; *Fianza*, núm. 6.

1. **Acción pauliana**—Es requisito esencial para la procedencia de la acción pauliana: a) que el acto del deudor sea voluntario; b) que se haya celebrado en perjuicio ó fraude de los derechos, del acreedor que acciona. — Civ., tom. 1, pág. 128, Ser. 6ª.

2. **Acción pauliana**—La acción pauliana ó sea el derecho del acreedor para pedir la revocación de los actos del deudor que le causen perjuicios, se prescribe por un año.—Civ., tom. 2, pág. 202, Ser. 6ª.

1. **Acción personal**—Con un poder general otorgado

1—Arts. 961 y 962 del Cód. Civ.

2—Art. 4033 del Cód. Civ.

1—La cláusula pertinente del poder decía: «para que los presente en todos los asuntos judiciales en que sean partes, como actores ó demandados, que al presente tengan pendientes, ó en adelante se les ocurra, de cualquier clase ó naturaleza que fueren.» Del hecho de emplearse vocablos en plural, para espresar el objeto del mandato, no puede deducirse que se haya establecido vínculo alguno entre ambos comparecientes, porque es natural que siendo dos los sujetos que confieren idéntico mandato, los términos aplicables á ambos tienen que estar en plural. Es regla gramatical, que las cláusulas de construcción semejante á ésta, de sujeto compuesto, equivalen á tantos singulares como sujetos tengan, conviniendo particularmente á cada uno de ellos lo que se atribuye á todos; lo que demuestra que el simple hecho de la concurrencia de varios sujetos y del uso de términos que los comprendan á todos, no destruye la relación que existe entre cada sujeto con su predicado. Por consiguiente, de los términos gramaticales en que estaba concebido el mandato, no se deduce que haya establecido entre ambos sujetos un vínculo tal, que escluyendo la relación lógica que cada sujeto tiene con el predicado, solo deje subsistente una relación común. De las cláusulas del mandato no se desprendía tampoco, que las partes hubiesen querido establecer algún vínculo jurídico especial entre







por varios, pueden deducirse acciones á nombre de uno  
ellas, lo que debieran hacer si tal era su intención, porque la libertad se presume, y la obligación que es una escepción á esa regla general, debe espresarse siempre. Tampoco tal relación de derecho entre ambos sujetos surge de la ley, pues en ninguna parte la establece, por la simple concurrencia de varias personas á conferir, en un solo acto, un mandato para sus negocios. Lejos de presumirlo, los únicos arts. de nuestro Cód. Civ.—1941 y 1943—que hablan del mandato conferido por varias personas, hacen mención expresa de que se refieren al caso en que éstos confieran poder «para un negocio común»; de lo que se deduce que podrían conferirlo para un negocio que no lo fuera. Por otra parte, ¿qué objeto tendría la ley al legislar en especial sobre la relación de derecho entre los mandantes y mandatarios, para el caso que confieran mandato para un negocio común, si es que aquellas relaciones fueran la regla general á que quedarían siempre sujetos, por el simple hecho de concurrir juntos á otorgar el poder? Además, ¿cuál es la razón de la solidaridad que se establece entre los mandantes hacia el mandatario? Laurent, en el tom. XXVIII, de su obra, comentando el art. 2002 del Cód. francés, que es igual al 1945 de nuestro Cód. Civ., dice: «Es necesario que el mandato haya sido dado para un negocio común á los diversos mandantes. Si, pues, el mandato ha sido dado por un mismo acto, por las mismas personas y á un solo mandatario, pero que entre los mandantes existieran intereses diversos, opuestos, no habría solidaridad entre los mandantes; pues que no habría ningún vínculo entre ellos.» Luego pues, si aún en el caso de tratarse de un negocio común, deja de ser aplicable la regla preceptuada en el art. 1945 del Cód. Civ., cuando los mandantes tuvieran intereses opuestos, con mayor razón ninguna relación de derecho cabe entre ellos, cuando, no solo el negocio no es común, sino que no tienen interés alguno en él, uno de los mandantes. El doctor Llerena comentando el art. 1945 dice: que la espresión «para un negocio común», quiere decir «que á todos y á cada uno de ellos pertenezca el negocio ó gestión encomendada». El doctor Vélez Sarsfield, dice que: «cada mandante ha elegido el mandatario para un negocio propio y queda por lo tanto obligado al servicio».—Nota al art. 1945 del Cód. Civ.—Por consiguiente, si la razón de las relaciones que se establecen entre los mandantes, cuando se trata de un negocio común, se basa en el mandato que cada uno confiere para un negocio propio, es evidente que la falta de interés de uno de los mandantes en un negocio determi-

solo de los poderdantes.—Civ., tom. 5, pág. 197, Ser. 5ª.

2. **Acción personal**—El cumplimiento de una acción personal, aun cuando tenga por base un inmueble, corresponde á la jurisdicción del juez del domicilio del deudor.—Civ., tom. 4, pág. 388, Ser. 6ª.

3. **Acción personal**—Los Tribunales de la Capital son competentes para conocer en la acción personal sobre cumplimiento de un contrato, si el demandado tiene en ella su domicilio, aun que éste sea accidental.—Civ., tom. 6, pág. 223, Ser. 5ª.

**Acción personal**—Véase: *Administrador*, 11; *Daños y perjuicios*, 6; *Prescripción*, 6.

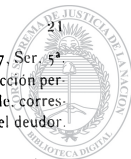
1. **Acción de petición de herencia**—Esta acción como reivindicatoria, permite el embargo preventivo.—Civ., tom. 10, pág. 95, Ser. 6ª.

nado, no destruye la intervención que corresponde al otro. Y si en el caso presente, no expresándose en el poder que el mandato es conferido exclusivamente para un negocio común, ni resultando tampoco esta comunidad del interés de los mandantes, es evidente que el mandatario estaba habilitado para representar únicamente al mandante que en el asunto tenía interés.

2—Lo que perseguía la parte actora era el cumplimiento de un contrato de permutación; y como es sabido, de los contratos nacen derechos y obligaciones personales. Ahora bien, las acciones son reales ó personales, según la clase de derecho que protegen; en el caso presente se trataba del cumplimiento de una obligación personal; luego la acción participa de este carácter, y á los efectos de la competencia de los tribunales rige el inc. 3º del art. 4º del Cód. de Proc. La S. C. N. ha resuelto lo contrario como puede verse en el caso de Denegri con Guastavino.

3—Art. 4º, inc. 4º *in fine* del Cód. de Proc.

1—Pero es necesario que se exhiban recaudos que funden el derecho. Véase: Inst., tom. 7º, verb. *Embargo preventivo*, núm. 21. En el caso del sumario se acompañaron partidas que informaban debidamente la petición de embargo preventivo.





1. **Acción posesoria**—El que ha enajenado con pacto de retroventa dando posesión, carece de derecho para ejercer á nombre propio acciones posesorias.—Civ., tom. 1, pág. 51, Ser. 6ª.

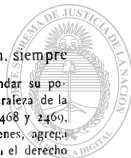
2. **Acción posesoria**—Los Tribunales de la Capital son

1.—Para que la posesión dé derecho á usar de la acción posesoria, no debe ser precaria sino á título de propietario.—Art. 248o del Cód. Civ.

2.—Nuestra legislación admite dos clases de acciones posesorias, mejor dicho, dos juicios. En el sumario se discuten brevemente ciertos hechos especiales; un procedimiento rapidísimo, adecuado para impedir que se turbe el orden público, análogo á los procedimientos policiales por su base y por su objeto. El derecho no está en cuestión, ni se invoca, ni se cita; solo se relacionan en la *litis* dos simples hechos: la posesión y su ataque en cualquier forma; el juez falla inmediatamente, dejando á salvo los derechos. Usando la frase de un autor célebre, el magistrado actúa como gendarme, evitando que los particulares recurran á la fuerza antes de discutir legalmente sus pretensiones. En la antigua legislación francesa era de competencia del Juez de Paz local; en la romana, canónica, española y en la nuestra, del Juez de la cosa; así lo dice el Dr. Cortés y se ha declarado por los tribunales de la Capital y Federales, pero no por razones de materia, sino de orden público, se trata de solucionar un conflicto ó evitar el ya producido, y nadie mejor que el Juez local para averiguar el hecho sobre el terreno, interrogar á los vecinos, examinar el muro destruido, los actos de atropello, las huellas visibles de la perturbación; y nadie mejor que él para conservar el orden mientras las partes discuten ante la autoridad correspondiente. Es la misión del interdicto posesorio, su rol policial de evitar violencias y garantizar la inmunidad de las personas á quienes se amenaza é inquieta en la disputa sobre los bienes. Debieron inventarse en épocas poco cultas, en los más violentos que registra la historia: la romana y la feudal. En la romana los crea el pretor; de su propia autoridad se interpone entre las partes y los remite al juez, dejando arreglado provisoriamente la cuestión de hecho; en la Edad Media, lo crea el rey, y tal vez por las necesidades de la época los hicieron más enérgicos y eficaces. Este origen ha penetrado de tal manera su naturaleza, que á pesar del Cód. Civ., el de Procedimiento saliendo de su esfera propia, los legisla con toda independencia, crea el interdicto de adquirir, expresa las

competentes para entender en las acciones posesorias de

condiciones de los demás, omitiendo las señaladas en el Cód. Civ., en ese análisis prolijo del legislador, preocupado ante todo de los derechos afectados y que exige al poseedor para estar en juicio una serie de requisitos que *prima facie*, y no obstante lo que se diga, sugieren la propiedad. Para encontrar el plenario debe procederse por un método de deducciones del texto y espíritu de la ley, de la comparación entre las leyes de forma y fondo. Dice el Código de Procedimientos: «Solo se admitirán las pruebas que tengan por objeto acreditar el hecho de la posesión ó no posesión del que haya promovido el interdicto, y la verdad ó falsedad de los hechos de perturbación atribuidos al demandado»; ni siquiera insinúa una referencia al Cód. Civ., que en los arts. 2473, 2478, 2479, 2480 y 2481, exige que la posesión no sea violenta, precaria, viciosa ó clandestina. Y en su nota al 2351, el legis'ador, dice: «Definimos la posesión por lo que tiene la mayor importancia jurídica... la que da acciones posesorias *adversus omnes*, dejando para otro lugar lo que solo sirve para los interdictos ó acciones posesorias. Luego hay distintas acciones posesorias con sus distintos procedimientos, sobre los que influye naturalmente la clase de derechos ó hechos de que surgen. Caravantes, al tratar de los interdictos, se refiere al juicio plenario de posesión. *Febrero dice: «que las causas de posesión se dividen en plenarias y sumarias. Llamaré plenarias las que se siguen por el modo y trámite de cualquier juicio ordinario; sumarias, aquellas que se sustancian y deciden brevemente. El que pretenda tener derecho sobre esta posesión momentánea, usa del interdicto que le corresponde, y en un breve juicio se declara quién ha de tener la posesión, mientras en otro más largo se ventila la propiedad á la verdadera posesión.»* No podía ser de otro modo, el interdicto fundado en derecho, con la discusión amplia que éste exige, acompañado del largo término probatorio, se desvirtuaría, perdiendo totalmente su eficacia con su rapidez, y viceversa, la acción posesoria discutida sumariamente en términos premiosos y con una prueba limitada, sería un sarcasmo jurídico. Ambas acciones difieren por su naturaleza intrínseca y por su fin; unos están regidos por la ley civil, los otros son creación exclusiva, desde su origen, de la ley de forma. Difieren por su naturaleza intrínseca, por que la causa del interdicto es siempre un delito ó un cuasi-delito. Bastan leer los artículos pertinentes de los Cód. de Proc. y Civ. Al través de los términos concisos de la ley, se vislumbran los hechos de fuerza, de dolo y fraude que reprime. Como principio general que domina y rije toda la materia, escribe el legislador las máximas cultas y civi-

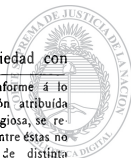


un inmueble situado fuera de su jurisdicción, siempre

lizadas; el que solo tiene derecho de poseer, debe demandar su posesión por las vías legales; y cualquiera que sea la naturaleza de la posesión, nadie puede turbarla arbitrariamente.—Arts. 2468 y 2469, Cód. Civ.—Y para precisar la naturaleza de estas acciones, agrega en el art. 2472.... «la posesión nada tiene de común con el derecho de poseer, y será inútil la prueba en las acciones posesorias del derecho de poseer del demandante ó demandado» Es decir, la ley defiende la tranquilidad del actual poseedor, turbado con ó sin derecho por medios ilegítimos; defiende ante todo la inviolabilidad de la persona contra cualquier ataque, aún fundado en el más amplio y completo dominio. La causa del interdicto es una obligación personal, *ex-delito*, tiende á reponer el estado anterior, corresponde al juez local por las razones ya espuestas. Las otras acciones posesorias *adversus omnes*, se refieren directamente á la cosa; su carácter es distinto, como que nacen de una posesión amplia y completa: tener una cosa bajo un poder con intención de someterla á un derecho de propiedad—art. 2351.—Sería la oportunidad de abordar el problema de la posesión que justifica en el derecho el escepticismo del pensador francés sobre la veracidad de las conclusiones científicas. Nuestro Cód. Civ. resuelve la cuestión adoptando una de las opiniones; la posesión no es seguramente un derecho real, no hay más derechos reales que los del art. 2303; será entonces un derecho personal, ó un hecho, pero generador de derechos personales, salvo los casos espresamente previstos por la ley, que se transforman en derecho real. Definidas y clasificadas las acciones posesorias ¿cuál es el juez competente? En este caso se trataba de una acción de devolución, iniciada en juicio plenario, no puede ser por lo tanto interdicto, es una de los analizados en la nota del art. 2351 del Cód. Civ., *adversus omnes*. Siguiendo el método de analogía, lógicamente se llega á la conclusión de que corresponden al juez local, pero tratándose de materia de orden público como la jurisdicción, no puede el magistrado interpretar extensivamente la ley si su texto es claro y esplicito; y si el legislador no incluyó las acciones posesorias en el art. 4º del Cód. de Proc., limitándolo á las acciones reales, no se debe suplir una omisión, tal vez intencional, sin que á ello obliguen razones muy imperiosas. Por otra parte, ¿no dice el art. 217 del Cód. de Proc. que la sentencia debe fundarse en el texto espreso de la ley, y solo á falta de éste, en los principios jurídicos vigentes? Resulta la cuestión en el sentido del sumario por el Juez Dr. García, la Cámara confirmó la sentencia por mayoría. Esta dijo:

que ambas partes tengan en ella su domicilio.—Civ., tom. 9, pag. 192, Ser. 6<sup>a</sup>.

«Que según resulta de la misma demanda, ésta se funda en las disposiciones del Cód. Civ., que acuerda acción posesoria al que hubiera sido turbado ó despojado de la posesión que tenía adquirida por más de un año, sin los vicios de precaria, violenta ó clandestina, y en las del Cód. de Proc., que prescribe que deben ser ventiladas en juicio ordinario las contiendas judiciales que no tengan señalada una tramitación especial—art. 66—y la que establece que cualquiera que sea la sentencia que se pronuncie en el interdicto de retener—art. 579—debe entenderse, sin perjuicio de las acciones de posesión ó de dominio que puedan corresponder al vencido. Los demandados, sin evacuar el traslado de la demanda, deducen contra ella la excepción de incompetencia de jurisdicción, manifestando que la acción deducida por los demandantes no es otra, que la reivindicación por el carácter de propietarios que se atribuyen al afirmar que el campo mencionado lo han comprado y que el vendedor les ha otorgado la respectiva escritura en cuya virtud los actores deben acudir al juez del lugar donde está situado aquel inmueble de conformidad con lo dispuesto en el art. 4º del Cód. de Proc. Dados estos antecedentes y lo espuesto por los demandantes, resulta que en el caso *sub-judice* no se trata de una acción de reivindicación ni de ninguna de las demás acciones reales que nacen del derecho de propiedad y que la ley autoriza como un medio de hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales—art. 2756 á 2758.—Por el contrario, la acción deducida, es la posesoria autorizada por el mismo Cód. Civ. en su art. 2482, al disponer que el que tuviere derecho de poseer, y fuese turbado ó despojado en su posesión, puede intentar la acción real que le compete ó servirse de las acciones posesorias, agregando que no podrá acumularse el petitorio y el posesorio, que si intentase acción real, perderá el derecho á intentar las acciones posesorias, pero si usase de las acciones posesorias, podrá usar después de la acción real, de lo que se deduce la naturaleza distinta que corresponde á una y otra acción, y la libertad que la ley deja para poder ejercitarlas en juicio con la separación y distintos efectos que la misma establece. Por consiguiente, no tratándose de ninguna de las acciones reales determinadas por la ley, carece en absoluto de fundamento legal la excepción de incompetencia de jurisdicción, siendo por lo mismo, innecesario establecer cuál es el carácter que corresponde á la acción deducida por los demandantes, fundada en el derecho que alegan tener para exigir de los



### 1. Acción reivindicatoria—Justificada la propiedad con

demandados la restitución del inmueble cuestionado, conforme á lo dispuesto por el art. 2487. Basta saber que la jurisdicción atribuida por la ley al juez del lugar donde está situada la cosa litigiosa, se refiere al caso en que se ejerciten acciones reales; que entre éstas no está comprendida la posesoria deducida en la demanda, de distinta naturaleza y con diversos efectos como se deduce claramente en presencia de lo dispuesto en el art. 2482 citado, y que, en fin, no podría tampoco considerársela por analogía en aquel carácter sin contrariar abiertamente los principios fundamentales á que deben ajustarse las resoluciones judiciales sin hacer distinciones donde la ley no las autoriza.» La minoría sostuvo la doctrina contraria diciendo: «Que no es sobre la procedencia de la acción deducida que el Tribunal está llamado á pronunciarse, pues lo único que por el momento está en tela de juicio es la competencia de los Tribs. de la Cap. para conocer en el juicio que la mencionada acción va á provocar. Por consiguiente, solo se trata de una cuestión que debe resolverse exclusivamente con arreglo á las leyes, principios y precedentes que rijen el derecho procesal, y con especialidad los relativos al poder jurisdiccional atribuido á los Tribs. A este respecto debe desde luego, recordarse que la jurisdicción, ó sea la facultad en lo que á la justicia se refiere, de decidir las contiendas surgidas por las colisiones de intereses ó derechos privados, es un atributo de la soberanía, y que estando la Nación Argentina regida por instituciones federales, en que cada estado ó provincia conserva los poderes innatos no delegados—art. 104 de la Const.—á cada una de ellas corresponde determinar los medios, las formas y demás condiciones tendentes á garantizar la efectividad de la jurisdicción dentro de sus respectivos territorios, pues solo han delegado en el gobierno central la facultad de dictar las leyes sustantivas, reservándose espresamente juzgar de su aplicación á los casos ocurientes—art. 67, inc. 11 de la Const.—Esto establecido y no habiéndose dictado hasta el presente, ley ó tratado—art. 107. Const. Nac.—que prevea los conflictos jurisdiccionales entre una ó más provincias, ó entre una de éstas con la Cap. de Rep. para solucionar el que el caso *sub-judice* ofrece, debemos acudir á los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso—art. 62 del Cód. de Proc.—El art. 4º del Cód. de Proc., no es aplicable ni es de aplicabilidad á caso alguno que pudiera ocurrir en el territorio

*Sigue en la pág. 27.*

1.—Arts. 2758 y 2759 del Cód. Civ.

justo título y posesión, debe prosperar la acción reivindicatoria.—Civ., tom. 5, pág. 286, Ser. 5ª.

de la Cap., donde los diversos Tribunales de un mismo fuero ejercen unidad de jurisdicción. Ese artículo se explica para la provincia de Buenos Aires, como que para ella fué dictado, cuyo territorio está dividido, á los fines de la administración de justicia, en departamentos judiciales con determinados radios jurisdiccionales y requería en consecuencia prefijar reglas á las que hubieran de acomodarse para prevenir conflictos y contiendas de competencia. Pero esas reglas no podrían aplicarse ni aun por analogía al caso *sub judice*, porque aquí no se trata de complicaciones de jurisdicción dentro de un mismo estado, sino entre la Cap. y una provincia autónoma, cada una de las cuales tienen ó pueden tener reglas diversas relativas á sus respectivas jurisdicciones. Carecen, pues, de oportunidad los razonamientos del actor tendentes á demostrar que para determinar la competencia jurisdiccional, tratándose de acciones personales, como califica á la deducida por él, solo debe tenerse en cuenta que el domicilio del demandado y la cosa litigiosa se encuentren sometidos á una misma jurisdicción como sucedería en la provincia de Buenos Aires, en que no obstante la subdivisión departamental, cada Trib. tiene *imperium* en todo el territorio de la provincia; pero cuando el domicilio del demandado no coincide con el lugar de la cosa litigiosa, cambia de aspecto la cuestión, pues vana é ilusoria sería toda decisión careciendo de los medios de hacerla efectiva, porque, como decía una ley romana, *Sine modica coercionem nulla est jurisdictio*. No toda acción personal, por otra parte, puede ser llevada ante el juez del reo, pues el mismo Cód. de Proc. nos proporciona casos de excepción—art. 609—y lo demuestra concluyentemente el ilustrado Dr. Cortés en una de sus magistrales vistas fiscales, que se registra en la pág. 380 del tom. 1º de sus obras. Debe tenerse presente, asimismo que aun cuando la acción deducida debiera calificarse exclusivamente de personal, tiende en definitiva á recuperar un bien raíz, y es un principio de derecho internacional, consignado igualmente por nuestra ley civil, que los bienes raíces se rigen por la *lex loci rei sitæ* á los efectos de su posesión ó dominio público y privado—art. 15, Cód. Civ. y ya hemos visto que los derechos inherentes á la soberanía se ejercen por la Nación ó provincia en la medida de sus respectivas delimitaciones. A la primera corresponde la legislación de fondo, *sin alterar la jurisdicción* de los segundos. Los juicios, pues, relativos á la posesión de bienes raíces situados en la Rep., son de la exclusiva competencia de los tribunales de la Rep.,





## 2. Acción reivindicatoria — Justificada la carencia de

que serían Federales ó locales, según que cayeren en la jurisdicción de cada provincia, con mayor razón deben prestarse entre sí igual respeto. El conflicto de jurisdicción en el caso *sub-judice*, proviene de la circunstancia de tener el demandado su domicilio en la Capital Federal y encontrarse la cosa materia de la acción posesoria deducida contra él en la provincia de Corrientes, y como la jurisdicción se ejerce sobre las personas y las cosas, la dificultad está en determinar cual de estos dos elementos debe prevalecer en el caso ocurrente. Si así como se trata de un bien raíz situado en una provincia argentina, se tratara de cosa ubicada en la Rep. Oriental, por ejemplo, no podría ser dudoso que el conocimiento del asunto correspondería al tribunal extranjero, no obstante estar domiciliados en la Rep. el actor y el demandado, pues así lo resuelve el derecho internacional y así está, además espresamente establecido en tratados celebrados al efecto— arts. 26 y 27 del tratado celebrado en Febrero de 1889, sobre materia civil y jurisdiccional aprobado en 1894.—Son, pues, estos principios los que por su notoria pertinencia deben aplicarse al caso *sub-judice*, pues las provincias argentinas son entre sí y dentro de su autonomía

*(Sigue en la pág. 29.)*

2.—Aquel á quien no se ha escriturado un inmueble no puede alegar la prescripción fundado en su justo título, pues la escrituración del inmueble es requisito indispensable en los contratos que tienen por objeto la transmisión de esta clase de bienes—art. 1884 del Cód. Civ.—Careciendo de título el poseedor, le falta á su posesión ese elemento indispensable para que pueda operarse la prescripción en los términos del art. 3999. Es necesario para que la prescripción se opere, que el adquirente del inmueble tenga buena fe y justo título—art. 3999 Cód. Civ.—debiendo observarse, como se dice en la nota al art., que éstas son dos condiciones distintas, y que el que quiera prescribir debe probar su justo título, lo que demuestra que no basta á ese efecto únicamente la buena fe. El art. 2355 establece que la posesión es ilegítima cuando se tiene sin título, ó se tuviese por un modo insuficiente para adquirir derechos reales. El art. 4010 dice: «que el justo título para la prescripción, es todo título que tiene por objeto transmitir un derecho de propiedad, estando revestido de las solemnidades exigidas para su validez» y el 4011, estatuye que: «el título debe ser verdadero y aplicado en realidad al inmueble poseído. El título putativo no es suficiente, cualquiera que sean los fundamentos del poseedor, para creer que tenía un título suficiente.

justo título á la posesión, debe prosperar la acción reivindicatoria, aun cuando el poseedor pueda exigir del propietario el cumplimiento de la obligación de hacer escritura.—Civ., tom. 6, pág. 16, Ser. 5ª.

3. **Acción reivindicatoria**—Si el embargo preventivo de los muebles se funda en la acción reivindicatoria, no debe deducirse acción contra el precio depositado. —Civ., tom. 6, pág. 259, Ser. 5ª.

4. **Acción reivindicatoria**—El proseedor de buena fe de la cosa demandada por acción reivindicatoria, está obligado á la devolución de los frutos desde la fecha de la demanda.—Civ., tom. 7, pág. 36, Ser. 5ª.

5. **Acción reivindicatoria**—Justificada la propiedad y posesión, debe prosperar la acción reivindicatoria.—Civ., tom. 7, pág. 104, Ser. 5ª.

---

equiparables á los estados independientes, en todo lo que se relaciona con sus derechos de soberanía no delegados en la Nación.—Causa XCV, tom. 4º, pág. 467 y XCIX; tom. 5º, pág. 18, Serie 2ª; Causa CCLVIII, tom. 6º, pág. 21, Serie 2ª. - En resumen, todo juicio posesorio, cualquiera que sea la forma de procedimiento legal que corresponda imprimirle, sumario ú ordinario, solo puede promoverse ante el juez del lugar en el cual exista la cosa sobre que la acción recaiga.»

3—El dueño de unos muebles dedujo acción reivindicatoria obteniendo un embargo preventivo, pues la persona en cuyo poder se encontraban no quiso entregarlos porque decía que el propietario le adeudaba una suma de dinero y hacía uso del derecho de retenerlos hasta tanto se le abonase esos gastos. Entonces el dueño depositó lo que se decía adeudar él, pidiendo la entrega. Después quiso que se le devolviera la suma depositada en garantía. Para esto no se necesita deducir acción alguna contra la suma depositada sino que la devolución dependería de la prueba que se produzca en autos, respecto á si se debe ó no lo cobrado por el poseedor precario que ejerce el derecho de retención.

4—Art. 2433 de ICód. Civ.

5—Arts. 2758, 3999 y 4015 del Cód. Civ.



6. **Acción reivindicatoria**—El que no ha tenido la posesión, carece de derecho para deducir acciones reivindicatorias.—Civ., tom. 1, pág. 259, Ser. 6ª.

7. **Acción reivindicatoria**—Procede si se justifica la

6—El art. 2758 del Cód. Civ. acuerda la acción reivindicatoria al propietario que *ha perdido la posesión*. El que nunca la ha tenido, no puede perderla.

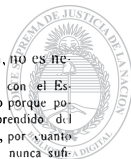
7—El litigio versaba sobre reivindicación de tierras poseídas por la empresa «Muelles y Depósitos de las Catalinas» y que el actor sostenía ser de su exclusiva propiedad por formar parte integrante del área que le daba sus títulos. El demandado desconoció en absoluto el derecho real que se atribuía el actor, por no estar comprendidas las tierras de que se trataba en los títulos invocados, las que por otra parte, agregaba, jamás habían sido poseídas por él. Como la acción instaurada, en este caso es la que nace del dominio á efecto de recuperar la cosa cuya posesión se ha perdido, de aquel que la tiene,—art. 2758 del Cód. Civ.—toda la cuestión se reduce á investigar si el actor perdió realmente la posesión de la cosa reclamada, y en caso afirmativo, si tenía sobre ella el derecho real de dominio. Se planteó en estos términos los puntos capitales del litigio, invirtiendo el orden de los extremos legales, por cuanto se consideró fundamental el hecho de la posesión y de la pérdida, pues de no haber existido no tendría transcendencia alguna el caso presente que el actor solo tuviera el derecho de poseer—art. 2468.—Entrando de lleno al examen de estos puntos y que constituyen, los únicos pertinentes para la debida solución del litigio, pocas consideraciones bastarán para fundar la opinión afirmativa respecto del que es reputado como fundamental. El demandado negó categóricamente que el actor haya estado alguna vez en posesión de la tierra que reclama y en consecuencia, que la haya perdido. Las actuaciones y pruebas producidas y agregadas constataban del modo más evidente é incontrovertible, que por lo menos, desde Marzo 5 de 1880, el actor tenía la posesión—arts. 2373 y 2384 del Cód. Civ.—de toda el área de tierra deslindada por medio de una operación pericial practicada por un agrimensor, y como dentro de esa área se encontraba comprendida la fracción ocupada posteriormente por el demandado, resultaba claro y plenamente comprobado uno de los extremos legales exigidos para que pueda prosperar la acción reivindicatoria—arts. 2445 y 2455.—Esta faz de la cuestión es más compleja y sería ciertamente materia de extenso desenvolvimiento si hubiera de

posesión fundada en títulos reconocidamente superiores á los que presente el demandado. — Civ., tom. 4, página 87, Ser. 6ª.

**8. Acción reivindicatoria**—Para que proceda la acción seguirse á los litigantes en todos y en cada uno de los detalles en que la debatieron. Indudablemente, el título exhibido por el actor como comprobante del dominio invocado, pudo prestarse á serias controversias acerca de la dimensión verdadera del inmueble á que se refería. Ese título, en efecto, si bien era esplícito respecto de la ubicación, era á todas luces deficiente desde que no espresaba superficie aproximada siquiera, ni determinaba tampoco los límites y rumbos que habrían servido, por lo menos, para investigar en el terreno su extensión real. Esto no obstante, la primera mensura judicial practicada á solicitud del actor y que previos los trámites de ley fué aprobada, suplió aquellas deficiencias por cuanto desde entonces quedó legalmente establecido cuál era la superficie y cuáles los linderos del terreno comprendido bajo las zanjas, único antecedente suministrado por el título. Obviada así la dificultad mayor para acordar al título toda su eficacia jurídica, pues que no se discutió ni se desconoció su valor intrínseco como título traslativo de la propiedad de cosa vagamente determinada, se tiene que desde 1859, fecha del auto aprobatorio de otra mensura que se practicó, el dominio del actor se extendía á una superficie de tierra ubicada sobre la ribera del Río de la Plata, con frente á la calle ó Paseo Colón, cuyos linderos eran perfectamente determinados, produciendo así un título perfecto á favor del actor.

8—El derecho que corresponde á la Mun. de la Cap. para reivindicar un inmueble sin necesidad de producir título alguno cuando el demandado no lo tiene por su parte y no puede tampoco ampararse de la prescripción, es incuestionable. Así se ha sostenido y resuelto en la causa LXV que se registra en la pág. 263, tom. 2º, Ser. 3ª, Jur. Civ. El Dr. Cortés funda este derecho en una de sus vistas. Decía entonces, de acuerdo con lo dictaminado por el señor Fiscal, el ilustrado maestro doctor Cortés, á propósito de la acción reivindicatoria sobre un inmueble: «El Estado tiene siempre un título general *pro suo* que le da su propia soberanía y mediante el cual tiene derecho á todo cuanto no aparezca pertenecer legítimamente al que lo posea, y que la diferencia de aquella acción entre particulares en la que el demandado se defiende tan solo con la posesión obligando al demandante á





de reivindicación interpuesta por la Municipalidad, no es necesario presentar un título, no procede cuando un particular litiga con el Estado. En este caso, no puede decir el particular «poseo porque poseo», cuando no aparece que el Estado se hubiese desprendido del dominio ó cuando no se le puede oponer la prescripción, por cuanto es también indudable que la posesión por sí sola no sería nunca suficiente para rechazar su acción, á diferencia de lo que sucede entre particulares. Por consiguiente, la Mun., procediendo como reivindicante, no necesita presentar un nuevo título general *pro suo*, emanado de la soberanía de la Nación que ella ejercitaba en tal caso por corresponderle con arreglo á la ley para obtener el pleno ejercicio de sus derechos de dominio sobre cualquier terreno dentro del municipio, imponiendo en consecuencia al demandado la obligación de acreditar su dominio ó la justificación de la prescripción por la cual pudiera haberlo adquirido. Todo título de dominio invocado por la Municipalidad emana del principio de la soberanía, por el cual el Estado tiene un título general *pro suo* que le acuerda la propiedad de todo aquello que encontrándose dentro del territorio de la Nación, carece de dueño. Véase nota del doctor Velez Sarsfield, al art. 3588 del Cód. Civ. Sabemos que leyes especiales han acordado á la Mun. de la Cap. el dominio de los terrenos del Estado que se encuentren dentro de sus límites. Entonces, pues, el título general del Estado, ha pasado á la Mun. y á ella le corresponde el dominio de todos los inmuebles fiscales que no hayan sido transferidos á particulares. El derecho de gentes enseña que entre los títulos en que las naciones fundan sus derechos de propiedad, se cuenta principalmente la conquista (Calvo, Derecho Internacional, tom. 1º, párrafos 126 y 128). El descubrimiento de esta parte de la América y la consiguiente conquista que realizó la España, dió á sus reyes el dominio de todos los territorios que hoy forman la Nación Argentina, dominio que pasó al gobierno patrio en razón de la emancipación. Así el primer origen del dominio que el Estado tiene sobre las tierras públicas, radica en el hecho de la conquista que le dió soberanía sobre los territorios á que alcanzó aquella. Y si bien al fundarse la ciudad de Buenos Aires, se dispuso que todas las tierras comprendidas dentro de cierto radio fueran repartidas entre los primeros fundadores, no es menos exacto que muchas de esas tierras no llegaron á salir del dominio del estado, porque las concesiones no tuvieron efecto, y que en cuanto á otros volvieron á quedar como pertenencia del Fisco, por haber sido abandonados por sus dueños ó concesionarios. De este modo se explica la existencia de leyes destinadas

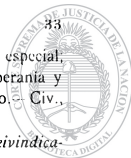
cesaria la presentación ó invocación de un título especial, le basta con el que reconoce en el fisco la soberanía y propiedad de todo terreno que carezca de dueño. Civ., tom. 4, pág 133, Ser. 6ª.

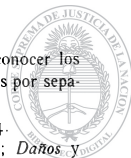
**Acción reivindicatoria**—Véase: *Terceria*, 3; *Reivindicación*, núm. 1 y siguientes.

**1. Acción separada**—Los acreedores tienen el derecho

á legislar sobre tierras públicas dentro de los límites de lo que hoy comprende el municipio de la Capital. Ostentándose, por la Mun. un título de tanta evidencia, carece de asidero legal para repeler la acción cualquier demandado. El Estado puede perder el dominio de las tierras públicas de alguno de los modos siguientes: por merced, por venta ó por prescripción. El demandado debió probar, en todo caso, que el terreno sobre que versa el juicio ha salido del dominio del Estado ó de la Mun. De la letra y del espíritu de la ley 14, tit. 12, libro 4º, Rec. de Indias, se deduce esa obligación para el demandado, toda vez que el Fisco reivindica un terreno que supone indebidamente detentado por un particular. Si el demandado no exhibe título alguno por el cual se le haya trasladado el dominio del inmueble de referencia si tampoco constata la prescripción, es manifiesto que no le pertenece la propiedad.

1.—Son parte legítima para promover el juicio de testamentaria, no solo los herederos, sino también los acreedores y todos los que tengan en la sucesión algún derecho declarado por las leyes, como lo dispone el art. 627 del Cód. de Proc. No solo es acreedor el que tiene derecho á cobrar una cantidad de dinero, sino también el que tiene derecho á exigir la cosa que es el objeto de una obligación, art. 496 del Cód. Civ. Es innegable que el acreedor tiene personería legal para iniciar la testamentaria de su deudor á fin de poder ejercitar contra sus herederos las acciones correspondientes para la consagración de su derecho. Esta doctrina está corroborada por la disposición consignada en el inciso 2º del art. 626 del Cód. de Proc. Pero si bien el acreedor tiene derecho para promover el juicio sucesorio del deudor á título de acreedor, no por eso lo tiene para intervenir en la tramitación del mismo juicio, una vez que han tomado en él, los herederos legítimos, la intervención que les corresponde. El derecho para promover el juicio sucesorio en este caso, tiene por objeto conocer cuáles son los herederos del deudor para poder ejercitar contra ellos ó contra la sucesión





de iniciar la testamentaria al solo objeto de conocer los herederos; después deben deducir sus acciones por separado. — Civ., tom. 9, pág. 83, Ser. 6ª.

**Acción del socio**—Véase: *Contrato social*, 4.

**Acción del tercerista**—Véase: *Simulación*, 2; *Daños y perjuicios*, núm. 29.

1. **Accionista** — De una sociedad anónima carece de misma, como entidad jurídica, las acciones que nacen de su derecho. Llenado este objeto debe cesar la intervención del acreedor en el juicio sucesorio, sin perjuicio de que ejercite aquellas acciones por separado como incidente de la testamentaria, en el que podrá pedir las medidas conducentes a su derecho, pero sin inmiscuirse en la tramitación de la sucesión, lo que solo corresponde a los herederos y legatarios.

1—El art. 355 del Cód. de Com. acuerda acción individual a todo accionista para protestar contra las deliberaciones tomadas en oposición a las disposiciones de la ley y de los estatutos, autorizándolo para requerir del juez competente la suspensión de su ejecución y declaración de nulidad, é imponiendo además a los socios que hayan tomado parte en esas deliberaciones una responsabilidad personal é ilimitada. En presencia de esta prescripción legal, no es posible desconocer la personería del accionista para ejercitar personalmente sus derechos en los casos espuestos, pudiendo recordarse, para mayor abundamiento, el pensamiento de la comisión revisora de dicho Cód., claramente espresado en su informe, donde manifiesta «que los intereses de los accionistas no están bien garantidos; que los directorios funcionan con un carácter demasiado arbitrario; y que era indispensable proyectar mayores garantías, tanto para los accionistas como para los terceros, etc.» Esta personería no abraza la representación de la sociedad, sino que está limitada al interés propio é individual del accionista, siendo esta la doctrina enseñada por los tratadistas y á que obedece la disposición del art. citado. Delirson, en su «Tratado de las sociedades comerciales,» después de establecer que los mandatarios sociales, en las sociedades anónimas, cuando estralimitan su mandato y obran contra la ley y los estatutos, pueden ser demandados por un accionista cualquiera por los perjuicios producidos, establece la limitación á su derecho personal y no en nombre de la sociedad, cuyas conclusiones se ajustan á la doctrina ya enseñada por Vidari en su «Curso de Derecho Comercial», tom. 2º, núms. 1961 y siguientes.

personería para demandar los daños y perjuicios causados á la sociedad. —Com., tom. 8, pág. 93, Ser. 3<sup>a</sup>.

1. **Acreeedor**—De un heredero, puede estraer los fondos, en tanto no sobrepasen evidentemente á su parte disponible. —Civ., tom. 1, pág. 109, Ser. 6<sup>a</sup>.

2. **Acreeedor**—Un acreeedor no verificado no puede suspender la distribución de dividendos á los acreeedores. —Com., tom. 8, pág. 50, Ser. 3<sup>a</sup>.

3. **Acreeedor**—De un fallido, tiene personería para deducir peticiones en los autos del concurso. —Com., tom. 8, pág. 100, Ser. 3<sup>a</sup>.

4. **Acreeedor**—A quien se hace saber la consignación,

1—El abogado patrocinante de un heredero pidió la extracción de sus honorarios los que debían imputarse al haber de su patrocinado, éste manifestó su conformidad y la Cám. ordenó la entrega por la razón contenida en el sumario.

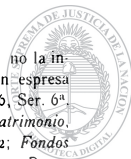
2—El art. 1845 del Cód. de Com. establece que no sean admitidos á la maza los acreeedores que no hubiesen presentado los documentos justificativos de sus créditos. El derecho de verificación concedida á su costa, por el mismo, debe *preceder* á su admisión á la maza. Cualquiera que sea la causa porque la verificación del crédito no haya tenido lugar en la oportunidad debida, el hecho es que esa verificación debe *preceder* á su admisión á la maza. Si se aceptase la pretensión de que se suspenda la distribución y no se entregue partida alguna de los bienes del concurso, importaría dar por establecido una verificación que no ha *precedido* á la participación, y dejar *indefinidamente* paralizada la distribución de los bienes del concurso.

3—El crédito contra el fallido estaba garantido por un tercero: éste depositó el importe de la obligación para salvar su responsabilidad y dejar espeditos sus derechos contra el concurso. El depósito fué extraído por orden del juez de dicho concurso, y entonces el acreeedor á cuyo favor se hizo el depósito reclamó de la entrega indebida. No puede hallarse más justificada la personería del acreeedor en casos como este en que se le despoja de su garantía; es decir, de lo propio, de lo que le pertenece.

4—El acreeedor á quien se paga por consignación, depositando judicialmente la cosa debida, tiene la facultad de impugnar aquel acto, sien-







está obligado á manifestar su conformidad; si no la impugna debe darse por verificado el pago con expresa condenación en costas.—Civ., tom. 3, pág. 196, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Acreedor**—Véase: *Fiador*, 3; *División de patrimonio*, 1; *Embargo preventivo*, 9; *Escritura pública*, 12; *Fondos embargados*, 2; *Adjudicación*, 1; *Embargo*, 10 y 11; *Daños y perjuicios*, 23 y 32; *Escepción de donación*, 1; *Espera*, 1; *Liquidación*, 5; *Consignación*, 2, 3, 5, 7 y 8; *Escepción de pago*, 4; *Honorarios*, 10 y 11; *Frutos*, 2; *Acción pauliana*, 1 y 2; *Gastos*, 8; *Inhibición*, 7; *Herederos*, 13; *Demanda de mejor derecho*, 3; *Intereses*, 1; *Contrato de préstamo*, 2; *Gravamen hipotecario*, 1; *Personería*, 6.

do este el medio directo que la ley ha puesto á su alcance para evitar los efectos legales que el mismo produce, art. 759, Cód. Civ. El acreedor no ejercitó esta facultad en los términos que correspondía para salvar su derecho, pues interpelado á este fin, no impugnó el acto de su deudor. No lo hizo en su primer escrito ni en los sucesivos, diciendo, por el contrario que por las razones aducidas en sus escritos anteriores, no podía por ahora aceptar ni tampoco impugnar la consignación hecha. Esta actitud indecisa no satisface, empero, las exigencias ni los propósitos de la ley. Consignada la cosa que se adeuda, el acreedor debe aceptar el acto ó impugnarlo espresamente, pues á falta de una ú otra cosa, no se tiene en realidad punto de partida para declarar la legalidad ó ilegalidad de la consignación. Cualquiera otra manifestación no puede tomarse en cuenta, por ser estraña á los puntos determinados por la litiscontestación. Se insistió en que no había habido ofrecimiento de pago al acreedor, en cuyo caso es improcedente la consignación. El ofrecimiento de pago y la negativa del acreedor á recibirlo, son efectivamente requisitos indispensables para que tenga lugar la consignación como así lo dispone el inc. 1º del art. 757 Cód. cit. Mas, es el caso, que son aplicables á este punto, las mismas consideraciones de que anteriormente se ha hecho mérito, en cuanto á no haber el acreedor alegado oportunamente aquella defensa, siendo de notar por el contrario, que según sus propias confesiones, si bien no se rehusó á recibir el alquiler, pues de esto se trataba, se negó á recibir la cantidad que caprichosamente quería abonarle una sociedad y no un miembro de ella que era su deudor.

1. **Acreeedores**—No reconocidos, solo pueden pedir medidas meramente conservatorias de los bienes testamentarios, pero no de los derechos que gestionan.—Civ., tom. 3, pág. 420, Ser. 6ª.

2. **Acreeedores**—En la facción de inventarios, solo pueden intervenir los acreedores reconocidos ó cuyos créditos aparezcan indiscutibles.—Civ., t. 3, p. 420, Ser. 6ª.

3. **Acreeedores**—El derecho de éstos para iniciar la testamentaria, solo puede usarse después del término que la ley fija.—Civ., tom. 4, pág. 386, Ser. 6ª.

4. **Acreeedores**—Rechazados en el acto de la verificación.

1—Art. 641 del Cód. de Proc.

2—Si bien los acreedores son parte legítima para la formación del inventario y deben en tal carácter ser citados, como se dispone en el art. 649 del Cód. de Proc., debe entenderse que esta disposición se refiere á los acreedores reconocidos que se hubiesen presentado ó respecto de los cuales resultase *prima facie*, acreditado su derecho por la presentación de un título. Esta interpretación se deduce lógicamente de la prescripción citada en cuanto por ella se equipara el cónyuge sobreviviente, los herederos ó representantes legales y los legatarios, con los acreedores que se hubiesen presentado, pues de no ser así resultaría que diciéndose acreedor sin haberlo justificado y sin presentar un título que lo acreditase, podría pedir se le citase á la formación del inventario.

3—Si bien los acreedores, como los demás interesados en los bienes de una persona muerta, están facultados para iniciar su juicio testamentario,—art. 627 del Cód. de Proc.—después de los nueve días del fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trate, pues antes de ese término, no es lícito provocar manifestación alguna de voluntad por parte de los llamados á recoger la herencia,—art. 3357 del Cód. Civ.

4—No existe precepto legal alguno por el cual los acreedores conocidos ó desconocidos, privilegiados ó personales, citados á los efectos del art. 748 del Cód. de Proc., deban retirarse de la junta por el hecho de rechazarse sus créditos por los demás acreedores, hayan éstos verificado ó no previamente los suyos, surgiendo por el contrario, del contexto del art. 733, que pueden permanecer hasta finalizar el acto de la verificación, con derecho á formular las observaciones

ción de créditos, tienen derecho á objetar y votar sobre las partidas posteriores.—Civ., tom. 5, pág. 267, Ser. 6ª.

que juzgasen convenientes sobre cada partida presentada al examen de la junta, pues á los efectos del acto que se realiza tan acreedor presente es el primero como el último de los concurrentes llamados sucesivamente á la verificación. La circunstancia de haberse pronunciado la mayoría ó la unanimidad de los demás acreedores presentes por el rechazo de un crédito, no implica privar al acreedor rechazado de objetar á su vez, en la oportunidad propicia, los créditos de los rechazantes, so pena de acordar á aquel pronunciamiento los efectos de resoluciones judiciales, abriendo ancha puerta á las confabulaciones de los falsos contra los verdaderos acreedores. Es, por otra parte, de tenerse presente las reglas prescriptas por el Cód. de Com. para casos análogos al presente: y en el citado Cód., no solo no se consagra la pretendida eliminación del acreedor, rechazado en la junta de verificación, sino que lleva su cordura y previsión hasta disponer que los créditos que en concepto del Síndico ofrezcan algunas dificultades sean los últimos y no los primeros en someterse al examen y resolución de la asamblea—art. 1446, inc. 2º—procurando con ello que la resolución sobre el crédito dudoso sea pronunciada por verdaderos acreedores reconocidos, hasta por el mismo interesado en el crédito, sobre cuya existencia y legitimidad van á pronunciarse. Más aun, el art. 1455 establece, que las cuestiones y recursos á que den lugar los créditos admitidos ó rechazados no interrumpirán la continuación de la junta, y como en éstas son admitidos todos los que se consideren acreedores, sin más requisito que la previa manifestación de sus pretendidos derechos—art. 1447—no habría razón legal alguna para eliminar a los que mantienen sus pretensiones, no obstante las observaciones hechas á sus créditos, pues la ley no distingue cuando dice: «Todos los acreedores concurrentes podrán hacer sobre *cada partida* las observaciones que juzguen convenientes—art. 1449—y dejarían de ser todos si á alguno de ellos se les privara del derecho de hacer observaciones á cada partida anterior ó posterior á la verificación de la suya. En resumen: el derecho de hacer observaciones no está limitado ni referido á momento determinado, sino que es amplio y absoluto á *todas y cada una* de las partidas consignadas en el estado presentado por el Síndico, de donde se sigue, que todo concurrente á la junta, admitido á ella en su calidad de presunto acreedor, puede permanecer hasta que haya terminado el objeto de la convocatoria.

**Acreeedores**—Véase: *Adjudicación*, 2; *Acción separada*, 1; *Honorarios*, 8; *Bienes del concurso*, 4; *Concurso*, 8 y 9; *Condominio*, 1; *Locatario*, 2; *Legatario*, 1; *Actos del deudor*, 1; *Arreglos privados*, 1; *Derecho de retención*, 1 y 2.

**Acreeedor embargante**—Véase: *Martillero*, 1.

**Acreeedor ejecutante**—Véase: *Recurso de apelación*, 1.

1. **Acreeedor hipotecario**—Del inmueble, tiene derecho

1—Los arts. 3110, 3168 y 3934 del Cód. Civ., resuelven esta cuestión en favor del acreedor hipotecario. Desde el art. 3931 hasta el 3933, el Cód. Civ., legisla sobre el privilegio que corresponde á los arquitectos, empresarios, albañiles, y otros obreros, á las personas que han prestado dinero para pagar á los arquitectos, empresarios, obreros, á los que han suministrado los materiales necesarios para la construcción ó reparación de un edificio. Inmediatamente viene el art. 3934 y dice: «Los hipotecarios son preferidos sobre los bienes gravados con la hipoteca. El privilegio se cuenta desde el día que se tomó razón de la hipoteca. Las inscripciones del mismo día concurren á prorrata.» De la letra y aun de la ubicación del art. se desprende bien claramente que él establece la prelación del acreedor hipotecario sobre todos los acreedores privilegiados que se relacionan en los arts. 3931, 3932 y 3933, y entre los cuales se comprende el constructor. Esta manera de entender la ley, se justifica más aun si cabe, en presencia del art. 3110 del Cód. Civ., el cual prescribe que la hipoteca de un inmueble se estiende á todos los accesorios, mientras estén unidos al principal, á todos los mejoras sobrevinientes al inmueble, sean mejores naturales, accidentales ó artificiales, aun que sean el hecho de un tercero, á las construcciones hechas sobre un terreno vacío, etc. El Dr. Llerena asigna al art. 3934 la misma inteligencia, según así se deduce del comentario que hace de dicha disposición legal, en su conocida obra sobre el Cód. Civ. Habría podido dudarse de la exactitud de esa interpretación, pero no cabe ya vacilación delante del art. 3916, último inc., que no es más que una aplicación del principio general consagrado en el art. 3934. Aquel artículo dispone *in terminis*, que los acreedores hipotecarios en el inmueble deben ser pagados primero que los obreros y los que han suministrado materiales para las construcciones ó mejoras. El Dr. Llerena comentándolo, se coloca en dos hipótesis. La primera es cuando la deuda de los obreros fuese anterior á la hipoteca; la segunda cuando las construcciones son hechas



à ser pagado con preferencia al constructor de la obra, con posterioridad à la constitución de la hipoteca. Con relación à la primera, el Dr. Llerena se espresa de este modo: «¿se aplicará el mismo principio cuando la deuda de los obreros es anterior à la hipoteca?» Este es uno de los casos que más demuestran la necesidad de la inscripción de los privilegios como está establecido por la ley belga que tanto ha seguido el Dr. Vélez. Por una parte, tenemos à un acreedor hipotecario que antes de dar su dinero ha podido tomar, y habrá tomado todas las medidas necesarias para conocer los gravámenes que pesan sobre la propiedad que se le quiere dar en hipoteca. Si en los registros de inscripción no encuentra gravamen alguno que pueda ser superior à su hipoteca, en ese supuesto seguramente habría aceptado la garantía. Los gravámenes ocultos él no los ha podido conocer, y por lo mismo parece justo que ningún crédito pueda tener prelación sobre el suyo. Por otra parte, tenemos un constructor que ha empleado su dinero y su trabajo en una construcción que comprendía, porque así debía serlo, le servía de garantía à su deuda. La buena fe parecía ponerlo al abrigo de la mala fe del dueño, pues no tenía como impedir ni las enajenaciones ni las hipotecas que podía constituir sobre el inmueble. «En la duda, la ley se inclina à sacrificar al constructor.» Un ejemplo de esto lo tenemos en el art. 3902, en el cual se establece, que el conservador de una cosa que para el caso pueda compararse al constructor, es preferido por el locador, por el prendario, etc., etc., aunque los gastos sean anteriores à la locación ó à la prenda, siempre que éstos ignoren la obligación precedente. «Hay, además una razón especial para decidir en contra del constructor en el caso supuesto, y es que el constructor al empezar la obra ha podido hacerse dar hipoteca sobre el terreno por el valor estimativo de la obra—art. 3109 y su comentario—y asegurar su crédito. Sin esa hipoteca, el constructor no podía tener sino un derecho personal contra el dueño de la obra, y no un derecho real, puesto que el privilegio no lo es tal—comentario al art. 3934.—Hasta el momento de la constitución de la hipoteca no pesaba sobre el inmueble ningún decho real; de consiguiente, él era el primero en adquirirlo sobre la finca, y ese derecho venía à darle un privilegio. Solo su mala fe podía hacerle perder estos derechos que los principios generales más elementale le dan.» En lo referente à la segunda hipótesis resuelve el punto diciendo: «¿Qué sucederá si la construcción es hecha con posterioridad à la constitución de la hipoteca? Para nosotros este es el caso resuelto por el artículo que estudiamos, es decir, no tendrá

cualquiera que haya sido la época de la construcción.  
—Civ., tom. 4, pág. 197, Ser. 6ª.

2. **Acreedor hipotecario**—No puede solicitar inhibición en tanto no resulte un saldo líquido después de la venta.  
—Civ., tom. 9, pág. 63, Ser. 6ª.

1. **Acreedor prendario**—El acreedor prendario que prelación el constructor.» «En efecto: el art. 3110 establece terminantemente que las construcciones hechas con posterioridad á la constitución de la hipoteca, aunque sean hechas por un tercero, quedan afectadas al pago de la hipoteca. Si la ley hubiera querido, por el presente artículo, dar preferencia á los créditos provenientes de esas construcciones, al afectarlos al pago de la hipoteca, hubiera declarado que esto solo tenía lugar cuando la construcción ó mejora estaba pagada.» «La Cámara de Apelaciones de la Capital se ha pronunciado ya en este sentido, como puede verse en el fallo que se registra en el tom. 1º, Ser. 2ª, pág. 313 de la colección de Fallos.» Como se habrá notado, en sentir del distinguido comentarista, ya sean anteriores ó posteriores á la hipoteca las construcciones, el hipotecario prima sobre el privilegio del constructor, opinión que se encuadra perfectamente en las disposiciones legales ya recordados y á que se refiere también el citado autor.

2—Para que proceda la inhibición general que establece el art. 474 del Cód. de Proc., es indispensable que le preceda el requerimiento estatuido en el 471, y que no se le conozcan bienes al deudor. Ejecutada una finca hipotecada, debe seguirse la anterior tramitación indicada por el saldo deudor, hasta llegar á la inhibición general si no se conociese ó no diese bienes á embargo el deudor.

1.—El acreedor prendario no puede enajenar los títulos que constituyen la prenda sino después del vencimiento de la obligación y en la forma prescripta en la segunda parte del art. 583 del Cód. de Com. Ningún antecedente del proceso hacía verosímil la autorización ó convenio que los encausados invocaron para vender los títulos de la prenda antes del vencimiento de la obligación y en otra forma que la legal. Nada puede objetarse contra la culpabilidad de los acusados por la calidad de la prenda, formada por títulos al portador, pues el art. citado del Cód. de Com. ha establecido la forma especial de enajenación de esta clase de prenda y su violación la ha calificado de estelionato por el art. 588 del mismo, pudiendo agregarse que el art. 207 del Cód. Pen. castiga al que defrauda á otro vendiendo, apropiándose ó dis-





vende los títulos al portador recibidos en caución antes del vencimiento y sin las formalidades de ley, comete estelionato.—Crim., tom. 7, pág. 352, Ser. 3<sup>a</sup>.

1<sup>a</sup>. **Acreedor quirografario**—De término no vencido, puede solicitar la formación de concurso civil.—Civ., tom. 7, pág. 333, Ser. 5<sup>a</sup>.

**Acreedor quirografario**—Véase: *Cesión de bienes*, 4.

**Acreedor rechazado**—Véase: *Jactancia*, 1; *Acreedores*, 4.

1. **Activo y pasivo**—El comprador de una casa de comercio que se hace cargo del activo y pasivo, solo puede ser responsable de las deudas anteriores que se encuentren anotadas en los libros de comercio.—Com., tom. 7, pág. 254, Ser. 3<sup>a</sup>.

**Acto**—Véase: *Documentos inventariados*, 1; *Posiciones*, 14, 21 y 24; *Rebeldía*, 3; *Documentos privados*, 7; *Escritura pública*, 2; *Bienes hereditarios*, 14; *Acusado*, 2; *Daños y perjuicios*, 22; *Interdicto de retener*, 1.

**Actos**—Véase: *Desposesión absoluta*, 1; *Filiación natural*, 8; *Acción de daños y perjuicios*, 1; *Personería*, 7.

**Actos de administración**—Véase: *Administración*, 8.

1<sup>b</sup>. **Acto anulable**—Solo puede ser confirmado, un acto anulable, por los que en él han intervenido; el viudo no representa á sus menores hijos herederos de su esposa poniendo sin las formalidades legales de la prenda sobre que prestó dinero, sin hacer excepción alguna para el caso de que los objetos empeñados fueron títulos de venta. Esta doctrina ha sido sostenida en una sentencia de la Corte del Sena, dictada en la causa seguida contra M. Merés presidente de la compañía *Caisse des Chemins de fer*, acusado de haber enajenado títulos que le habían sido entregados en caución; y otro de la Corte de Casación de 29 de Nov. de 1866, citado por Chauveau Adolphe. T. 5<sup>o</sup>, núm. 2301.

1<sup>a</sup>—Entre los requisitos exigidos por la ley no se encuentra el de que el crédito sea de fecha vencida—art. 719 del Cód. de Proc.

1<sup>b</sup>—Arts. 1059 á 1065 del Cód. Civ.

en la enajenación de bienes gananciales después de disuelta la sociedad conyugal.—Civ., t. 2, p. 184, Ser. 6<sup>a</sup>.

1<sup>a</sup>. **Actos caritativos**—Del presunto padre en favor del hijo, deben interpretarse como reconocimiento de paternidad.—Civ., tom. 10, pág. 125, Ser. 6<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Acto civil**—La cesión de derechos hereditarios es un acto civil y á esta jurisdicción corresponde el conocimiento de las controversias á que el acto de lugar.—Civ., tom. 9, pág. 8, Ser. 5<sup>a</sup>.

2. **Acto civil**—La locación ó sublocación de piezas amuebladas, es un acto civil —Com., t. 8, p. 316, Ser. 6<sup>a</sup>.

3. **Acto civil**—Corresponde á la jurisdicción civil la

1<sup>a</sup>—Aquí no fué éste el único elemento demostrativo de la filiación. Se comprobó asimismo entre otras cosas, por la propia confesión del padre, que había tenido relaciones carnales con la madre del niño y que el nacimiento coincidía con la época de sus relaciones.

1<sup>b</sup>—Una sociedad anónima fué la actora y se dijo que la única jurisdicción competente era la civil, pues según el art. 5<sup>o</sup> del Cód. de Com. los actos de los comerciantes se suponen siempre comerciales salvo la prueba en contrario. Una sociedad anónima aunque sea por su naturaleza comercial, puede ejecutar actos civiles, y en este caso el conocimiento de la causa cae bajo la jurisdicción civil. La naturaleza comercial de una institución, no obsta á que pueda celebrar actos civiles.

2—Se trataba de un contrato cuyo objeto era lucrar con la sublocación de habitaciones amuebladas de una casa. Tanto la locación como la sublocación de inmuebles es un acto civil, aunque se trate de casas amuebladas, pues los muebles no pueden reputarse sino un accesorio de la casa ó habitación que se alquile. El art. 1648 del Cód. Civ. rige este contrato. Tal sociedad no puede considerarse mercantil por cuanto su objeto no encuadra en la disposición del art. 282 del Cód. de Com. Estando el contrato regido por la ley civil, la competencia de esta jurisdicción surge de la disposición del art. 60 de la ley Org. de los Tribs.

3—Al pedir la rendición de cuentas el actor explicó que la sociedad tuvo por objeto contratar obras de albanilería, dividiéndose con su socio el producto, como asimismo verificar algunas compras de terrenos y hacer construcciones en ellos. Dados estos antecedentes, que



rendición de cuentas de la sociedad que tenía por objeto actos civiles.— Civ., tom. 9, pág. 99, Ser. 6<sup>a</sup>.

4. **Acto civil**—La construcción de un teatro es un acto

fueron reconocidos por la parte contraria, es evidente que se trataba de una sociedad civil, por versar sobre compras de inmuebles; y respecto de terceros, de una locación de servicios regida también por las disposiciones del Cód. Civ.

4—Para establecer la competencia civil en el caso del sumario, no debe perderse de vista los términos de la demanda porque estos antecedentes son los únicos que pueden servir de base para determinar la competencia ó incompetencia del Juzgado. Todo lo que no está consignado explícita ó implícitamente en la demanda, no puede traerse á colación, porque es materia extraña al punto discutido. Ciertamente es que nuestro Cód. de Com., al legislar sobre los actos que la ley declara comerciales en general, no ha querido restringir estos al número de los consignados en el art. 8°, porque hay muchísimos otros que aunque no están enumerados, toman un carácter comercial más pronunciado aun de los que se consignan en dicha disposición. No es menos exacto que el carácter dominante de los actos de comercio es la especulación, el ánimo de lucrar ó de percibir una ganancia; pero tampoco puede ponerse en tela de juicio que eso no es más que uno de los elementos constitutivos de los actos comerciales, quizás el principal, mas no el único; de tal manera que si para clasificar un acto solo bastase tener en vista el ánimo ó la intención del que lo efectúa, porque si así se procediera todos ó la mayor parte de los hechos de la vida humana serían comerciales, por la circunstancia de que se persigue con ellos una ganancia, un lucro. Un capitalista que vive de las rentas que le producen sus caudales depositados en los Bancos, resuelve retirarlos de esos establecimientos é invertirlos en la construcción de casas de alquiler lo que lleva á debido efecto. ¿Habría ejecutado con estos hechos una operación comercial? ¿son comerciales esos actos? Indudablemente que no. El mismo capitalista, en lugar de hacer construir casas para familia, edifica mercados, teatros, almacenes, etc., para arrendarlos. ¿Habría ejecutado con esto actos de comercio? Tampoco. El citado individuo, para ponernos en todos los casos, resuelve asociarse y se asocia con otros, á fin de hacer cincuenta ó cien edificios de los ya espresados, doscientos ó más, ¿ejecutaría un acto comercial? No. Pues bien, ¿que diferencia hay entre los casos pro-



civil, aun cuando se alegue la existencia de una sociedad.—Com., tom. 8, pág. 104, Ser. 3ª.

**Acto civil**—Véase: *Comerciante*, 2.

1. **Acto de comercio**—El préstamo ó mutuo garantido con hipoteca sobre un inmueble, no puede calificarse como acto de comercio, si ambos contratantes reúnen esta calidad.—Civ., tom. 2, pág. 401, Ser. 6ª.

2. **Acto de comercio**—Las obras de escultura en una finca, no pueden considerarse acto de comercio y su cobro corresponde á la jurisdicción civil. — Civ., tom. 4, pág. 406, Ser. 6ª.

3. **Acto de comercio**—Corresponden á la jurisdicción mercantil las demandas contra un comerciante por actos de su comercio.—Civ., tom. 5, pág. 14, Ser. 6ª.

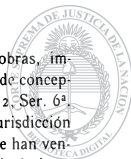
puestos y el del caso que nos ocupa, en que dos individuos se asociaron para construir un teatro. Ninguna. Y, con mayor razón no hay diferencia alguna, cuanto que el demandante, según los términos de la demanda, se asoció para la construcción de un teatro y no para su explotación. El actor no alegó, al demandar, la existencia de una sociedad destinada á la construcción y explotación de un teatro. Se limitó á afirmar que se organizó dicha sociedad para construir un teatro. Ahora bien: ¿la construcción de un edificio, aunque se le destine á espectáculos públicos, es acto comercial? No, seguramente, porque tal edificio podría estar destinado á ser vendido una vez terminado, ó á ser arrendado, y estos actos no son comerciales.

1 De acuerdo con la jurisprudencia citada en el tom. 8º, pág. 40, ser. 4ª. Véase: Inst., tom. 5º, verb. *Jurisprudencia civil*, 1. Sin embargo el sumario está equivocado pues el caso resuelto no sienta la doctrina allí espresada. Por el contrario, se estableció que si ambos contratantes eran comerciantes, la jurisdicción competente sería la comercial—art. 538 del Cód. de Com.

2—Para que la adquisición de una cosa mueble pueda constituir un acto de comercio, se requiere la intención de lucrar.—art. 8º, inc. 1º del Cód. de Proc.

3—La doctrina que ha prevalecido en nuestro Cód. es la que sujeta á la ley mercantil los actos emanados de un comerciante, sea éste actor ó demandado.—Arts. 5º, 6º y 7º del Cód. de Com.





4. **Acto de comercio**—La construcción de obras, importa una locación de servicios que no puede conceptuarse acto de comercio.—Civ., tom. 6, pág. 82, Ser. 6ª.

5. **Acto de comercio**—Corresponde á la jurisdicción civil, el conocimiento del concurso si resulta que han venido con exceso los términos en que procedía la declaratoria de quiebra en caso de haber ejercido actos de comercio.—Civ., tom. 6, pág. 275, Ser. 6ª.

6. **Acto de comercio**—Si el acto es comercial para el demandante, su conocimiento corresponde á la jurisdicción mercantil.—Com., tom. 8, pág. 76, Ser. 3ª.

**Acto de comercio**—Véase: *Excepción de incompetencia*, 3; *Comerciante*, núm. 3.

**Actos del demandado**—Véase: *Reivindicación*, 3.

1. **Actos del deudor**—La accion de los acreedores ó

4—Los constructores de obras no son comerciantes, pues apenas se limitan ellos á prestar sus servicios á los que lo solicitan para levantar edificios ó hacer otros trabajos análogos. Los actos ejecutados por ellos importan una locación de servicios, sujeta exclusivamente á la legislación civil. En el art. 8º del Cód. de Com. no está comprendido el caso, porque los actos realizados por el constructor de obras no son los de adquisición de una cosa mueble para negociar con ella en el mismo estado en que la obtuvo ó en otra forma, sino los de prestación de servicios, como se ha dicho antes.

5—El art. 718 del Cód. de Proc. acuerda al deudor no comerciante para que pueda hacer cesión de bienes en favor de sus acreedores, presentándose por escrito ante el Juez de lo civil de su domicilio. Según lo dispone el art. 1383 del Cód. de Com. la persona que ha dejado de ser comerciante puede ser declarada en quiebra, siempre que se compruebe que la cesación de pagos tuvo lugar cuando ejercía el comercio. Y no puede usarse de este derecho, sino dentro del término de seis meses á contar desde el día en que clausuró sus negocios.

6—El art. 7º del Cód. de Com. solo exige que el acto sea comercial para una de las partes para que surta el fuero mercantil.

1—Art. 4033 del Cód. Civ., y 1540, inc. 3º, Cód. de Com.

Síndico de un concurso para pedir la revocación de los actos del deudor ejecutados en perjuicio ó fraude de sus derechos, se prescribe al año. — Com., tom. 8, página 263, Ser. 3ª.

**Actos del deudor**—Véase: *Acción pauliana*, 1 y 2.

1. **Acto ilícito**—Justificada la culpa ó negligencia del autor del acto ilícito, procede la indemnización de los daños y perjuicios.—Civ., tom. 7, pág. 184, Ser. 6ª.

2. **Acto ilícito**—La falsa imputación de un delito importa un acto ilícito y hace á su autor pasible de los daños y perjuicios causados.—Civ., t. 6, pág. 25, Ser. 5ª.

3. **Acto ilícito**—Corresponde á la jurisdicción civil el

1—Así lo consagra el art. 1109 del Cód. Civ., al disponer que todo el que ejecuta un hecho que por su culpa ó negligencia ocasiona un daño á otro, está obligado á repararlo; agregando que esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas á los delitos del derecho civil, y que ella es extensiva á los daños que causaren los que están bajo su dependencia —art. 1113, *ibid* —Se trataba de la muerte de un niño causada por un trenvía, fijándose la suma de 8000 pesos como indemnización, teniéndose en cuenta que el niño era de 9 años de edad y el padre carpintero.

2—Está obligado á reparar el daño que ha ocasionado con motivo de la denuncia, el que debe comprender según lo dispuesto en el art. 1069 del Cód. Civ. no solo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también las ganancias de que fué privado el damnificado por el acto ilícito. Aun aceptando que el demandante no proceda maliciosamente al hacer la denuncia, si esa denuncia es la causa determinante de la prisión sufrida por el acusado, se trata de un hecho ilícito, que aunque no revista el carácter de un delito del derecho civil, no por eso lo exonera de la reparación del daño. Todo el que por su culpa ó negligencia ocasione un daño á otro está obligado á la reparación del perjuicio, —art. 1109 del Cód. Civ.

3—El conocimiento de toda acción civil por indemnización de daños y perjuicios procedentes de delitos corresponde á la jurisdicción civil como lo establece el art. 69 de la Ley Org. de los Trib. El hecho de ser comerciante tanto el actor como el demandado, no modifica la naturaleza de la acción deducida, ni la competencia del Tribunal,



conocimiento del juicio por indemnización de daños y perjuicios fundados en un acto ilícito, aun cuando sea entre comerciantes y por actuaciones de la jurisdicción comercial.—Civ., tom. 6, pág. 379, Ser. 5ª.

5. **Acto ilícito**—Cualquiera que sea el domicilio del demandado por daños y perjuicios, es competente el juez del lugar en que se cometió el acto ilícito que le da origen. Civ., tom. 10, pág. 60, Ser. 6ª.

6. **Acto ilícito**—Justificada la culpa del autor del acto ilícito, debe acordarse una indemnización proporcionada al daño sufrido.—Civ., tom. 10, pág. 214, Ser. 6ª.

7. **Acto ilícito**—El uso de un derecho no puede calificarse como acto ilícito, ni fundar en consecuencia una indemnización de daños y perjuicios.—Civ., tom. 10, página 236, Ser. 6ª.

puesto que los comerciantes no gozan de fuero especial sino para las cuestiones mercantiles, que versan sobre contratos de comercio. Tampoco puede influir en la competencia del Juzgado el hecho de producirse los delitos de que el actor haga emanar su acción, en actuaciones pasadas ante el Trib. de Com., puesto que la acción de daños y perjuicios no podría considerarse como un incidente del seguido ante el Juez de Comercio con el que no tiene conexión alguna. Esta es la doctrina sentada por la Cám. de lo Civ., pues la S. C. N. ha consagrado la jurisprudencia contraria. Véase: tom., 5º, pág. 390, Ser. 1ª, F. S. C. N.

5—Tratándose de acciones personales emergentes de hechos ó actos ilícitos, rige el inc. 3º. del art. 4º del Cód. de Proc. en la parte final, según el cual deben ejercitarse, á elección del demandante, ante el juez del domicilio del demandado ó el del lugar en que la obligación se contrajo, con tal que el demandado se halle él aunque sea accidentalmente, principio igualmente consagrado por la ley 15, tit. 1º, Part. 7ª, y 3ª, tit. 16, libro VIII, Rec. Cast., para los casos análogos de acusaciones por delitos del derecho criminal.

6—Arts. 1109, y 1083 del Cód. Civ.

7—Art. 1071 del Cód. Civ.

8. **Acto ilícito**—Los daños y perjuicios derivados de un acto ilícito, corresponde á la jurisdicción civil, aun cuando sean comerciantes.—Civ., t. 10, p. 334, Ser. 6ª.

**Acto ilícito**—Véase: *Daños y perjuicios*, 1 y 21; *Absolución del acusado*, núm. 2.

1. **Acto jurídico**—Al que alega la existencia de los vicios en que puede fundarse la nulidad de un acto jurídico, corresponde la prueba.—Civ., t. 4, p. 254, Ser. 6ª.

2. **Acto jurídico**—Siendo potestativo del Ministerio Fis-

8—La acción que ejercitaban los actores, si bien era la consecuencia de una demanda que ante el Juzgado de Comercio se había tramitado, no tenía por objeto un acto de los enumerados en el art. 8º, del Cód. de Com., no pudiendo, por tanto, ser calificado de mercantil para cualquiera de las partes litigantes. Se trataba de una demanda exclusivamente regida por la ley civil, encontrándose comprendida en lo que dispone el art. 60 de la Ley Org. de los Trib. de la Cap. No resultando los daños y perjuicios que se cobraban, directa ó inmediatamente de una relación de derecho comercial, en cuya ejecución la culpa ó dolo tenga conexión íntima en el acto de comercio, la jurisdicción civil se impone.

1—El dolo no se presume sino que debe probarse. La prueba incumbe al que afirma un hecho nuevo en juicio.

2—Ningún resultado práctico se puede conseguir en este caso. El art. 1047 del Cód. Civ., autoriza indudablemente al Min. Público para pedir la nulidad de los actos jurídicos, cuando ella sea absoluta y aparezca manifiesta en el acto; pero esta atribución es potestativa y por consiguiente puede ó no hacerse uso de ella. En el caso que nos ocupa, no aparecía interés fiscal ni principio de moralidad comprometido, siendo más arreglado á la equidad prescindir de los defectos de forma que puede ó no tener el testamento, sobre todo y muy especialmente cuando el vicio impugnado consistía en haberse empleado la locución «testigos presenciales», en lugar de «testigos que vieron al testador». No es tan manifiesta, pues, la nulidad como para promover la acción fiscal. Muchas veces los términos equivalentes, según la doctrina de los comentadores franceses, suplen á los términos consagrados en la ley. Siendo potestativo del Min. Público el pedir la nulidad de los actos jurídicos puede el Fiscal de la Cám. desistir de la apelación interpuesta por el Agente fiscal de 1ª Instancia.

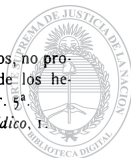
cal, la petición de nulidad de los actos jurídicos, no procede la de nulidad de un testamento á favor de los herederos forzosos. —Civ., tom. 5, pág. 222, Ser. 5<sup>a</sup>.

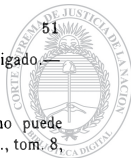
**Acto jurídico** — Véase: *Nulidad del acto jurídico*, 1.

**Acto material** — Véase: *Posesión*, 1.

1. **Acto piadoso** — El uso del nombre patronímico de una familia para un acto piadoso, no da derecho á uno de sus miembros para reclamar judicialmente del que lo usa,

1.—El actor entabló demanda contra un cuñado suyo porque incluyó su nombre en un aviso fúnebre. El aviso se refería á una hermana del actor, esposa del demandado, invitándose en él á las misas de cabo de año, que en sufragio del alma de la estinta se celebraban en uno de los templos de esta Capital. En el anuncio aparecía en primer término el nomb.c del demandado y á continuación el de las familias. El actor entendía hallarse incluido entre los invitantes, puesto que formaba parte de una de las familias invitantes y en consecuencia entabló acción contra su cuñado á efecto de que manifestase por la prensa de la Capital, que no había sido autorizado por él para hacer uso de su nombre en dicho aviso. Basta consignar este antecedente para hacer manifiesta la improcedencia de la demanda, no ya únicamente, por la singular prestación que en ella se perseguía, sino mayormente por lo infundado de los hechos que le servían de base. Era en primer lugar, inexacto que el nombre del declarante figurase en el aviso de referencia, pues allí sólo se hablaba de las familias de ambos. El actor no constituía, por otra parte, él solo la familia legítima invitante que aparecía juntamente con la de él, con otras personas en igualdad de grado al suyo y descendientes de un mismo tronco, como así se acreditó por la propia confesión del actor. Todos los hermanos gozan como él del mismo derecho inalienable absoluto de llevar y de invocar su nombre patronímico en los actos de orden puramente privado, como en los actos externos de la vida social. No había pues, usurpación de nombre ni usurpación de título por parte del demandado y de sus afines, ni menos hubo usurpación del nombre del demandante desde que éste no fué incluido en el aviso funerario que motivó la demanda. No comete abuso el que ejercita una facultad que le es propia, ni infiere agravio el que hace uso de su derecho, *non facit injuriam qui suo jure utitur*. Es el principio consagrado en el art. 1071 del Cód. Civil.





á ejecutar actos á que por la ley no está obligado.—Civ., tom. 4, pág. 345, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Acto simbólico**—Véase: *Posesión*, 1.

1<sup>a</sup>. **Actor**—Después de la litiscontestación no puede el actor cambiar el objeto de la demanda.—Com., tom. 8, pág. 263, Ser. 3<sup>a</sup>.

**Actor**—Véase: *Contrato bilateral*, 1 y 3; *Interdicto de recobrar*, 4; *Costas*, 41, 52 y 67; *Documentos acompañados*, 1, 6 y 17; *Excepción de defecto legal*, 5; *Daños y perjuicios*, 61; *Desalojo*, 13; *Embargo*, 5; *Incidente*, 1; *Rendición de cuentas*, 2; *Prueba*, 7.

1<sup>b</sup>. **Actuaciones**—Deben anularse las actuaciones tramitadas en contravención á la ley.—Civ., t. 3, p. 53, S. 6<sup>a</sup>.

**Actuaciones**—Véase: *Costas*, 80; *Nulidad del proceso*, 14; *Concurso*, núm. 3.

**Actuario**—Véase: *Notificación*, 19.

**A cuenta**—Véase: *Comprador*, 29; *Contrato de compra-venta*, 16; *Herederos*, núm. 19.

1<sup>c</sup>. **Acumulación**—Corresponde la acumulación cuando

1<sup>a</sup>—Según doctrina del art. 216 del Cód. de Proc. el juez debe resolver los pleitos de acuerdo y con arreglo á las acciones deducidas. Si de ellas se aparta, produce una sentencia nula. Una vez contestada la demanda, dice Escriche, Verb. *Contestación*, no puede el demandante mudar su acción contra la voluntad del demandado, ni al contrario, porque en su virtud queda celebrado entre los litigantes un cuasi-contrato.

1<sup>b</sup>—Habiéndose entablado por el actor demanda ordinaria, fué cambiada durante el término probatorio por la acción ejecutiva. Este procedimiento importa una violación de las disposiciones que rijen el juicio ordinario y el ejecutivo: no ajustándose lo actuado á lo dispuesto por el Cód. de Proc., todo es de ningún valor y debe declararse su nulidad.

1<sup>c</sup>—La demanda deducida se fundaba en la responsabilidad solidaria que correspondía á los demandados como directores del consejo de administración del Banco Constructor de La Plata, con motivo de dividendos percibidos é indebidamente acordados. La acción, como





la demanda se funda en la responsabilidad solidaria de los demandados, que nace no solo de la convención sino de la disposición del derecho.—Com., tom. 8, página 197, Ser. 3ª.

2. **Acumulación**—Las penas de delitos de distinta naturaleza no pueden acumularse; el menor se considera agravante del mayor.—Crim., tom. 8, pág. 250, Ser. 3ª.

3. **Acumulación**—No procede acumulación de juicios seguidos entre distintas partes, aun cuando tengan idéntico objeto.—Civ., tom. 5, pág. 233, Ser. 5ª.

1. **Acusación calumniosa**—La ausencia de dolo por

se ve, reposaba al iniciarse conjuntamente contra las personas mencionadas, en la disposición del art. 418 del Cód. de Com. antiguo, correspondiente al 364 del vigente; y tanto en una como en otra disposición, el carácter solidario de la responsabilidad nace del precepto legal. Es bien averiguado que la solidaridad emana no solo de la convención sino de la disposición del derecho en los casos determinados por la ley, como acontece en el presente. Ante estas conclusiones, la demanda se armonizaba con las reglas del buen procedimiento, por cuanto tiene por objeto evitar la posibilidad de que puedan pronunciarse resoluciones contradictorias en el caso de iniciarse separadamente los respectivos juicios contra cada una de las personas demandadas.

2—Se trataba de delitos de diversas especies, hurto y atentado á mano armada contra la autoridad. En esta virtud, y como por la poca importancia del delito de hurto, éste tenía pena de arresto, y el atentado la de prisión, no podían acumularse la pena del uno á la del otro, por ser de distinta naturaleza, y de conformidad al art. 85 debía aplicarse la pena del delito mayor, considerándose el otro como circunstancia agravante.

2—Se dijo que siguiéndose el juicio entre distintas personas puede dar lugar á distintos pronunciamientos, pero que no serían contradictorios entre sí, y por consiguiente, no procedía la acumulación.

1—Si en el proceso criminal no se ha comprobado el carácter de ser calumniosa la acusación, no puede darse este carácter á la denuncia; pero queda siempre á salvo para producir la prueba del dolo ó malicia en el juicio correspondiente que después puede iniciarse.

parte del querellante, hace improcedente la declaración de ser calumniosa la acusación.—Crim., t. 7, p. 124, Ser. 3ª.

**Acusación**—Véase: *Ausente*, 4; *Divorcio*, 15.

1ª. **Acusado**—En las acusaciones por injurias, no proceden los medios coercitivos para hacer comparecer al acusado.—Crim., tom. 7, pág. 120, Ser. 3ª.

2. **Acusado**—El registro del domicilio del acusado debe ser practicado por el Juez de instrucción, sin que el acto pueda ser delegado en el Secretario.—Crim., tom. 7, pág. 272, Ser. 3ª.

3 **Acusado**—Aun cuando se justifique el delito debe absolverse al acusado, si no se justifica que solo él pudo cometerlo.—Crim., tom. 8, pág. 24, Ser. 3ª.

**Acusado**—Véase: *Absolución del acusado*, 1 y 2; *Calumnia*, 2; *Agravio moral*, 3.

1ª. **Acusador**—En los juicios por calumnia, el acusador no está obligado á absolver posiciones.—Crim., tom. 8, pág. 103, Ser. 3ª.

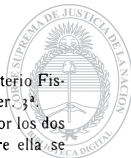
**Acusador**—Véase: *Adulterio*, 1; *Costas*, 4; *Daños y perjuicios*, núm. 17.

1ª—El art. 196 del Cód. de Proc. Crim. no autoriza la detención preventiva.

2—Arts. 407 y 408 del Cód. de Proc. Crim.

3—Es doctrina uniforme en materia criminal la de que debe aparecer probado no solo el cuerpo del delito, sino la persona del delincuente, para que pueda haber condena. En el proceso que nos ocupa, si bien aparecía comprobado que hubo la sustracción de gas que se denunció, no aparecía demostrado quién fuese su autor. En tal caso, solo quedaba la presunción que resulta del hecho de ser el encausado inquilino de la casa de donde se suponía cometida la defraudación, y esta presunción no reunía las condiciones fijadas por el art. 358 del Cód. de Proc.

1ª—De acuerdo con la jurisprudencia constante de nuestros tribunales. Véase: *Inst.*, tom 7º, verb *Calumnia*, 7.



**Ad effectum vivendi**—Véase: *Espediente*, 4.

1<sup>a</sup>. **Adhesión al recurso**—Hecho por el Ministerio Fiscal, es procedente.—Crim., tom. 7, pág. 405, Ser. 3<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Adjudicación**—Al acreedor, debe hacerse por los dos tercios de la tasación sin las rebajas que sobre ella se hayan hecho para el remate.—Civ., t. 9, pág. 26, Ser. 6<sup>a</sup>.

2<sup>a</sup>. **Adjudicación**—Los acreedores que han solicitado la adjudicación deben ser oídos sobre la oposición del Síndico á su propuesta.—Civ., tom. 9, pág. 110, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Adjudicaciones**—Véase: *Esposa*, 5; *Finca*, 1.

1<sup>c</sup>. **Administración**—Justificada la administración del condominio, es procedente la rendición de cuentas al condómino.—Civ., tom. 8, pág. 65, Ser. 5<sup>a</sup>.

2<sup>b</sup>. **Administración**—Justificada la mala administración del esposo, procede la separación de bienes de la sociedad conyugal y la posesión inmediata á la esposa de los que justifique haber aportado al matrimonio ó adquirido posteriormente con dinero propio.—Civ., tom. 7, pág. 395, Ser. 6<sup>a</sup>.

3. **Administración**—Justificada la aprobación estraju-

1<sup>a</sup>—Art. 522 del Cód. de Proc. Crim.

1<sup>b</sup>—Art. 516 del Cód. de Proc.

2<sup>a</sup>—Aunque ese trámite no está previsto en la ley, su otorgamiento no desnaturaliza el procedimiento.

1<sup>c</sup>—Art. 2701 del Cód. Civ.

2<sup>b</sup>—Art. 1294 del Cód. Civ.

3—Los actores tuvieron pleno conocimiento de la manera en que se procedía á la partición de los bienes de la testamentaria y que consideraron totalmente arreglados los intereses testamentarios con la cuenta particionaria practicada, teniendo igualmente conocimiento de las cuentas de administración después reclamadas, presentadas entonces por el demandado, las que comprendían todo el período en que estuvo administrando por cuenta de la testamentaria. Dados estos hechos de tan capital y decisiva importancia, el fundamento de la demanda desaparece por completo, robusteciéndose así un cúmulo de



dicial de las cuentas de administración antes de la formación de la cuenta particionaria y consentido el auto aprobatorio de ésta, no procede acción contra el administrador.—Civ., tom. 7, pág. 231, Ser. 6ª.

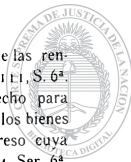
4. **Administración**—Los herederos universales, aun cuando entren en posesión de la herencia, no pueden administrar los bienes, si existen legatarios y otros interesados que invoquen igual carácter.—Civ., tom. 8, página 342, Ser. 6ª.

5. **Administración**—En tanto el esposo no rinda cuenta

antecedentes y circunstancias que obraban en autos para demostrar la razón que asistía al demandado al sostener que las cuentas cuya rendición se le exigían, ya habían sido rendidas y aprobadas por los actores. La falta de una prueba perfecta acerca de los hechos á que se refiere un pliego de posiciones presentado daba margen sin duda á la controversia tan hábilmente sostenida por los actores, pero después ya no puede ser cuestionable que, no obstante todas las irregularidades y deficiencias posibles, las cuentas que se reclamaron fueron oportunamente rendidas y aprobadas, pues no otra cosa significa el hecho comprobado de que los actores dieron por totalmente liquidados los bienes testamentarios con la aprobación de la cuenta particionaria. Después de aprobada la cuenta particionaria, ya no sería lícito hacer reclamación alguna, pues cualesquiera que hayan sido las incorrecciones é informalidades de procedimiento cometidas para la rendición de cuentas por parte del administrador, ellas hubiesen quedado cubiertas y subsanadas por no haberse reclamado su reparación en el momento oportuno, que lo era cuando se puso en conocimiento de los interesados la cuenta particionaria que la comprendía—art. 240 Cód. de Proc.—y lejos de ello, todos manifestaron entonces espresamente su asentimiento y conformidad.

4—Se trataba de herederos colaterales. El causante había nombrado albacea testamentario, el que fué igualmente investido con el carácter de administrador, por el Juzgado, en virtud de la autorización cumplida por el art. 3451 del Cód. Civ. del acuerdo entre partes. Los bienes estaban indivisos siendo en este caso de aplicación el art. 3451 del Cód. Civ.

5—Porque mientras no se rindan cuentas de la administración en



de la administración, está inhibido de gozar de las rentas administradas judicialmente.—Civ., t. 1, p. 111, S. 6<sup>a</sup>.

6. **Administración**—El socio carece de derecho para exigir remuneración por la administración de los bienes y fondos de la comunidad, salvo convenio expreso cuya prueba les corresponde.—Civ., tom. 3, pág. 284, Ser. 6<sup>a</sup>.

7. **Administración**—Si no existe conformidad entre los herederos, el juez puede nombrar un tercero administra-

debida forma, no se sabe á quién corresponden realmente las rentas, debiendo en consecuencia ser depositadas en el Banco de la Nación Argentina.

6—A falta de convención no existe disposición alguna que autorice á un socio que además de las utilidades que le correspondan, tenga facultad de exigir el pago de los trabajos que efectúa como administrador ó mandatario de la sociedad. La razón de esa estipulación espresa se impone si no se olvida que al formarse una sociedad los miembros de ella acuerdan la parte de utilidades que deben dividirse con arreglo á las prestaciones que aporten y obligaciones y responsabilidades que cada uno de los socios tome sobre sí. El socio que tiene á su cargo la administración de los bienes de la sociedad, administra lo que posee en común, ó de lo contrario podría resultar que ese socio administrador absorbiese la parte de utilidades perteneciente á los demás, si por ejemplo éstas ascendieran á una suma exigua, y la comisión que aquél quisiera cobrar equivaliera á otro tanto. El derecho que tenga el mandatario, que no revista el carácter de socio, como el tutor ó albacea, á cobrar una comisión sobre los bienes que administra, no es igual al del socio administrador aún cuando sus funciones sean casi idénticas, pues aquéllos no son co-partícipes directa ni indirectamente en las ganancias ó pérdidas de los bienes de sus administrados y solo perciben una remuneración por su trabajo, mientras que el último lo es, siendo por lo tanto su posición, puede decirse, semejante al del heredero beneficiario á quien por el art. 3384 Cód. Civ. le está prohibido pedir comisión alguna aunque los créditos absorban toda la herencia ó ésta sea abandonada á los acreedores y legatarios.

7—El juez acordó se nombrase administrador provisorio de la herencia inter se practicaban las diligencias necesarias para que todos los herederos estuviesen representados en el juicio, pues habían me-

dor de los bienes testamentarios.—Civ., t. 9, p. 41, S. 6ª.

8. **Administración**—No procede el embargo preventivo en el juicio de rendición de cuentas, en tanto no se justifique que existieron actos de administración.—Civ., tom. 9, pág. 263, Ser. 6ª.

**Administración**—Véase: *Nulidad*, 6.

1. **Administrador**—La esposa no puede ser nombrada administradora, de los bienes que le correspondan por herencia, sin la venia marital.—Civ., t. 8, p. 304, S. 6ª.

2. **Administrador**—No procede sin causa justificada la remoción del administrador nombrado por el Juzgado, de conformidad de partes.—Civ., t. 8, pág. 304, Ser. 6ª.

3. **Administrador**—Debe nombrarse administrador de la herencia al indicado por la mayoría de los herederos, si la oposición carece de fundamento legal.—Civ., tom. 5, pág. 193, Ser. 5ª.

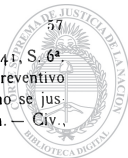
4. **Administrador**—El juez de la testamentaria es comenores que todavía no tenían su respectivo tutor, siendo además urgente que los bienes se asegurasen en beneficio de todos.

1—Art. 3847 del Cód. Civ.

2—Si bien la administración se rige por las disposiciones del mandato del Cód. Civ., de ahí no se deduce que tenga derecho cualquier heredero á exigir su revocación sin la existencia de causa justificada, porque siendo conferido por el Juzgado es irrevocable, aunque hubiese recaído en un coheredero con el acuerdo de otros. Así lo tiene resuelto esta Cám. en otro caso que corre publicado en el tom. 1º, pág. 156, Ser. 2ª

3—Los motivos especiales determinados en el art. 642 del Cód. de Proc. en su última parte, deben comprobarse en forma por quién los alegue.

4—El apoderado del administrador fundó su escepción en que *él nada tiene que ver con la testamentaria, porque ha sido apoderado del administrador*, y es éste quien debe rendir cuentas. A esto se contestó diciendo que el administrador no es más que un mandatario de la sucesión, y el apoderado del administrador no es otra cosa que un sustituto ó un sustituido, como en algunos pasajes le llama el Código al





petente para entender en el juicio de rendición de cuentas que se exige á los mandatarios del administrador.

—Civ., tom. 6, pág. 217, Ser. 5ª.

5. **Administrador**—De una sociedad, su remoción solo puede solicitarse por causas justificadas.—Civ., tom. 7, pág. 329, Ser. 5ª.

6. **Administrador**—Procede el cambio de administrador si en autos existen justificados los motivos en que se funda.—Civ., tom. 1, pág. 355, Ser. 6ª.

7. **Administrador**—Procede el nombramiento de administrador judicial con causa justificada en el juicio de rendición de cuentas.—Civ., tom. 2, pág. 153, Ser. 6ª.

8. **Administrador**—Nombrado para el bien que se reivindica, debe entenderse solo con el locatario principal.—Civ., tom. 3, pág. 68, Ser. 6ª.

9. **Administrador**—El nombramiento de administrador de la herencia, puede recaer en el tutor de los herederos menores.—Civ., tom. 3, pág. 95, Ser. 6ª.

10. **Administrador**—La falta de rendición de cuentas por el administrador judicial, hace procedente su cambio.—Civ., tom. 3, pág. 425, Ser. 6ª.

mismo administrador, en todo ó parte del mandato. Ahora bien: con arreglo al art. 1926 del Cód. Civ., el mandante tiene en todos los casos acción directa contra el sustituto, en razón de las obligaciones que hubiere contraído en virtud de la sustitución. De aquí resulta que el sustituto está obligado directamente á rendir cuentas á la sucesión, y ésta tiene personalidad para entablar acción contra él. La acción de rendición de cuentas contra el administrador de la sucesión ó lo sustituido por él, es un incidente de la testamentaria.

5—Art. 1684 del Cód. Civ.

9—El que se opuso al nombramiento no era el heredero mismo sino un cesionario de sus acciones y derechos. El cargo de administrador se confirió al tutor en virtud de su representación legal de los menores herederos.

10—Argumento del art. 682 del Cód. de Proc.



11. **Administrador**—La acción personal contra el administrador de una finca por devolución de rentas que pertenecen á terceros, debe deducirse ante el juez en turno.—Civ., tom. 5, pág. 284, Ser. 6ª.

12. **Administrador**—La viuda puede ser nombrada administradora, si no se funda debidamente la oposición.—Civ., tom. 6, pág. 29, Ser. 6ª.

13. **Administrador**—El marido puede ser arrendatario de un inmueble, si existe administrador judicial de los gananciales, en igualdad de condiciones á los terceros.—Civ., tom. 6, pág. 288, Ser. 6ª.

14. **Administrador**—Procede el nombramiento de administrador de la finca cuyos alquileres se embargan preventivamente.—Civ., tom. 10, pág. 354, Ser. 6ª.

**Administrador** — Véase: *Contrato de arrendamiento*, 9; *Liquidación*, 11; *Rendición de cuentas*, 1; *Abogado*, 9.

1. **Adoquinado**—El propietario que ha pagado, al empresario de adoquinado, mayor suma que la que por el contrato municipal correspondía, tiene derecho á repetir directamente por la diferencia.—Civ., tom. 5, página 292, Ser. 5ª.

2. **Adoquinado** —En tanto no se hayan hecho saber

---

11 La acción se dirigió contra una persona que no había sido nombrada judicialmente administradora de la finca cuestionada y no era parte en el juicio, cualesquier que sean los hechos que funden esta acción y la denominación que se les de, es incuestionable que ella no puede estimarse como un incidente del juicio, dado su objeto y los fines que en la misma se persiguen.

12—Art. 643 del Cód. de Proc.

14—Teniendo el administrador la facultad de entablar demandas por cobro de alquileres, puede pedir desalojo, alquilar el edificio en todo ó en parte, etc.

1—Art. 784 del Cód. Civ.

2 - La ley núm. 2328 del 1º de Oct. de 1888, da carácter ejecutivo



al deudor las cuotas, las cuentas por adoquinado visadas por la Municipalidad, carecen de fuerza ejecutiva.

—Civ., tom. 1, pág. 65, Ser. 6<sup>a</sup>.

3. **Adoquinado**—El hecho de consentir la construcción del adoquinado, hace obligatorio el pago, aun cuando no se haya firmado la solicitud.—Civ., t. 4, p. 376, S. 6<sup>a</sup>.

**Adquisición**—Véase: *Contrato*, 17.

1. **Adulteración**—De documentos de crédito, debe castigarse con dos años de prisión y trescientos pesos de multa

a las cuentas por derechos de afirmados que sean presentadas con los requisitos necesarios: en dichas leyes se establece también el pago por mensualidades. Si las cuentas no se han hecho al deudor, para que pueda efectuar el pago en la forma que dispone la citada ley, no procede la acción ejecutiva.

3.—Esta cuestión fué resuelta por mayoría de votos; ésta dijo: «Que de las constancias de autos se desprende, que el ejecutado consintió en que los ejecutantes construyeran el adoquinado en el frente de su propiedad. Que convencen de ello sus manifestaciones contradictorias afirmando en un caso, que no se debe lo que se cobra por haber pagado á la Mun., y en otro, que cedió el terreno en cambio del adoquinado, lo que vale tanto como sostener que su deuda se halla compensada.—Que el hecho de no ir suscrita por el ejecutado la solicitud presentada en la Intendencia por los vecinos carece de importancia, puesto que aquél resulta no saber firmar. Que constando que el ejecutado prestó su consentimiento para que se efectuara el adoquinado, existe un vínculo jurídico entre él y los empresarios que lo obliga á pagar el valor del adoquinado con arreglo al contrato que estos últimos celebraron con la Intendencia Municipal y de que se hace mérito en el curso de este asunto.—arts. 496, 505 y 1197, Cód. Civ.—Que de aquí se deduce la improcedencia de la escepción de inhabilidad del título, puesto que el ejecutado consintió en la ejecución de la obra, lo que hace que aquél sea hábil en su contra, esto es, que lo obligue.» La minoría dijo: «Resultando de las propias manifestaciones del actor, que el crédito que persigue, proviene de obras de pavimentación practicadas en condiciones que no se ajustan á la ley de Octubre 1<sup>o</sup> de 1888, no siendo, en consecuencia, de aplicación la citada ley, única que pudiera invocarse para acordar aparejada ejecución á la cuenta exhibida.»

compensables con tres meses de prisión después de cumplida la primera. — Crim., tom. 8, pág. 369, Ser. 3<sup>a</sup>.

2<sup>a</sup>. **Adulteración** — Para declarar la adulteración, los peritos no deben guardar las formas establecidas para la autenticidad de las firmas tachadas de falsas. — Civ., tom. 8, pág. 270, Ser. 5<sup>a</sup>.

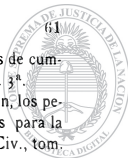
1. **Adulterio** — El reconocimiento del matrimonio por la acusada de adulterio y su cómplice, basta para justificar la personería del acusador. — Crim., tom. 7, página 311, Ser. 3<sup>a</sup>.

2<sup>b</sup>. **Adulterio** — La prueba del adulterio en el juicio civil

2<sup>a</sup> — En el presente caso se trataba de una prueba de peritos y no de un cotejo de letras; y además, de autos resultaba que las providencias que ordenaban el examen pericial se habían consentido por las partes, habiendo sido dictadas con la conformidad de ambas y sin haber recurrido de ellas en la oportunidad legal. Las formas establecidas en los arts. 149 y 152 del Cód. de Proc. se refieren pura y exclusivamente al cotejo que los jueces decretan cuando un documento ha sido presentado en juicio y el que aparece firmándolo niega su firma sosteniendo su falsedad, como se comprueba por los arts. 140, 143, 144 y siguientes del cap. 2<sup>o</sup>, tít. 2<sup>o</sup> del Cód. de Proc.

1. No tenía objeto principal la presentación de la partida de matrimonio, pues que la propia mujer acusada y su cómplice lo reconocieron acordando al querellante la investidura con que se había presentado al promover su gestión. Por otra parte, aquella prueba no es de estricto rigor, de suerte que no puede acudir a otra supletoria, como lo permite, entre otros casos que pudiera citarse, el art. 263 del Cód. Civ.

2<sup>b</sup> — Cuando se trata de constatar el adulterio, no es necesario analizar una por una las declaraciones de los testigos presentados, tanto menos si se tiene en cuenta que se trata de hechos que por su naturaleza no pueden ser comprobados como los hechos ordinarios de la vida ó de los negocios, ni como se acredita la existencia de los hechos demostrativos de los contratos ó de los actos jurídicos. El adulterio, á los efectos civiles del divorcio, puede acreditarse con toda clase de prueba — art. 70 de la ley de Mat. Civ. — lo que importa establecer, no solamente que se pueda probar por medio de testigos y





de divorcio no requiere la plenitud que la ley exige para la comprobación del delito, bastan que existan justificados hechos que indudablemente conduzcan a ese resultado.—Civ., tom. 3, pág. 306, Ser. 6ª.

3. **Adulterio**—Justificado, debe declararse el divorcio.—Civ., tom. 3, pág. 306, Ser. 6ª.

**Adulterio**—Véase: *Divorcio*, 14 y 15.

1. **Afirmados**—Aun después de rechazada la excepción de inhabilidad de título, los propietarios tienen derecho de repetir contra los constructores de afirmados los aumentos de precios acordados fuera de licitación

presunciones, sino también que no es requerida la prueba plena é indubitante que se necesite para aplicar la pena del delito de adulterio, y que por el contrario basta la prueba congetural cuando ella reúne los requisitos y condiciones necesarias para llevar al ánimo de los jueces la convicción de su existencia. No es necesaria la prueba directa del contacto carnal que constituye el adulterio, basta la de los hechos inductivos cuando éstos tienen el carácter de premisas de las que lógica y ordinariamente deriva aquél. No es posible determinar tampoco cuánto ni cuáles son los hechos que indirectamente prueban el adulterio, pues todo depende de las circunstancias especiales de cada caso. Es el conjunto de antecedentes, hechos y circunstancias que obrando sobre el criterio imparcial del juez, á la vez que apreciado por éste, lleva el convencimiento al espíritu.

3—Art. 72 de la ley de Mat. Civ.

1—Terminado un juicio ejecutivo por cobro de afirmados, se inició por el vencido acción ordinaria para recobrar lo que en dicho juicio se le había cobrado de más. Constaba en autos que la cuenta que sirvió de base á la ejecución que se siguió no se ajustaba á las condiciones de la ley de 1º de Oct. de 1888, por la que se prescribe la previa licitación pública para las obras de afirmados en todo el municipio de la Cap. por cuanto no se ajustaba á las bases anteriormente convenidas. A esto se agregaba que el H. Concejo Deliberante había declarado que el deudor del afirmado no estaba obligado á pagar por el adoquinado sino el precio de la licitación. Dados estos antecedentes, el excedente del precio de licitación debía necesariamente devolverse como cobrado indebidamente.

por la municipalidad.—Civ., tom. 8, pág. 50, Ser. 6<sup>a</sup>.

2. **Afirmados**—Si el propietario no fué requerido para

2.—Tratándose de cuentas por afirmados visadas por la Mun. solo se consideran ejecutivas para cobrar el importe de los afirmados en doce mensualidades y no en su totalidad, conviene recordar que el art. 6<sup>o</sup> de la ley de 1<sup>o</sup> de Oct. de 1888 establece claramente que el pago de los afirmados se hará por los propietarios en doce mensualidades, por partes iguales, y á la presentación de la cuenta, con el descuento de ocho por ciento sobre el importe. Bien clara es la mente de la ley, no obstante los defectos que puedan observarse en su redacción. Inspirada en el deseo de que los vecinos contribuyan á esta obra, que es requerida por apremiantes necesidades del municipio, ha preceptuado una forma tendente á facilitar á los propietarios el pago de los afirmados, disponiendo que puedan hacer el pago por cuotas, en doce mensualidades, ó en su totalidad, con el descuento del ocho por ciento. De la ley se desprende con igual claridad, que los pagos, bien sea en una ó en otra forma de las dos que se ha espresado, deben ser hechos á la presentación de la cuenta. Pero en la hipótesis de que el texto de la ley ofreciera dudas, habria que observar que se trata de una obligación en que no se ha fijado fecha para que los plazos legales empiecen á correr, y en tal virtud es claro que el acreedor debe presentar la cuenta al deudor, á fin de que éste haga uso del derecho de opción en la forma del pago que la ley le ha conferido. En el presente caso no se demostró con las exigencias de la prueba legal, que el ejecutante hubiese exigido del deudor el pago del afirmado, y siendo esto así, no podía promover la ejecución por el todo de la cuenta sino por el importe de las cuotas. No demostrando que se hubiese exigido al deudor el pago de las cuotas, y resultando que ni siquiera se le ha presentado la cuenta antes de la ejecución, no puede el ejecutado hacer uso del derecho que le confiere la ley, por cuya circunstancia no es posible el apremio por la totalidad de la cuenta porque un procedimiento semejante importaría menoscabar el derecho de uno, para estender el de otro, incurriendo así en una doble infracción de la ley. La ley de 1888 acuerda acción ejecutiva siempre que se llenen los requisitos á que se ha aludido, según se desprende de la comparación de los arts. 3<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup> y 5<sup>o</sup> de la espresada ley. Pero aún cuando así no fuera, basta la duda, para que deba interpretarse en el sentido espresado, porque es sabido que la ley ha querido aliviar al propietario, y porque tratándose de un procedimiento sumario, en que se mengua la defensa, hay que proceder siempre con un criterio restrictivo. Este caso está de acuerdo



el pago de las cuotas de afirmado, procede la escepción de inhabilidad de título contra la ejecución del total de la cuenta.—Civ., tom. 5, pág. 90, Ser. 5ª.

3. **Afirmados**—No procede la inhabilidad de título contra las cuentas por afirmados visadas por la Municipalidad, aun cuando se justifique que ellas alteran el precio estipulado en los contratos de licitación.—Civ., tom. 6, pág. 420, Ser. 5ª.

4. **Afirmados**—Los propietarios no están obligados á con la jurisprudencia constantemente establecida por este tribunal.— Véase: verb. *Empedrados*, núm. 1 del tom. 7º de la Inst.

3—Esta cuestión solo puede ventilarse en el competente juicio ordinario, según opinión de la Cám., sin decir en qué funda su opinión al respecto. Sinembargo en otros casos ha dicho que la amplitud de la defensa exige términos mayores que las perentorias señaladas para el juicio ejecutivo. Pero á esta contestaremos, en nuestro modo de pensar victoriosamente, como puede verse en la Inst., tom. 5º, verb. *Escepción de falsedad*, núm. 1, y *Escepción de inhabilidad de título*, núm. 12. En contra, véase el núm. 2.

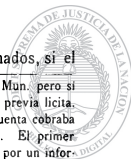
4—Esta demanda se dedujo por la vía ordinaria. Para procederse al adoquinado de la vía pública, no es necesario que los propietarios de los inmuebles que den frente á ella manifiesten su consentimiento expresa ni tácitamente. La facultad de ordenar la ejecución de tales obras corresponde al poder público, á quien le ha sido conferida, sin que los individuos que componen el municipio puedan oponerse á lo ordenado, sino en los casos y por los medios establecidos por la ley. Es atribución del poder legislativo dictar las leyes que al respecto deben regir; el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes—inc. 27 del art. 67, y art. 22 de la Const. Nac.— establecido á quién corresponde ordenar la construcción de obras como las de que se trata, veamos si la Munic. puede celebrar un contrato sobre adoquinado y si el propietario está obligado á abonar el importe de aquél. Por la ley de 28 de Octubre de 1881, se autorizó á la Mun. de la Capital para hacer obligatorio el adoquinado de varias calles de la Capital, comprendidas en un perímetro que en el art. 1º de esa ley se determina claramente, en cuyo perímetro no se encontraba el terreno cuestionado; posteriormente, por la ley núm. 1219, de fecha 6 de Oct. de 1882, se declaró obligatorio el empedrado en las

pagar otra clase de afirmado que la que por la ley les corresponda, cualquiera que sea el construido ó contratado por la municipalidad.—Civ., tom. 7, p. 73, Ser. 5ª.

5. **Afirmados**—Procede la escepción de falsedad con-

calles del municipio no comprendidas dentro del perímetro marcado en la ley anteriormente citada. Es esa ley la que rige el caso presente no pudiendo aplicarse á la núm. 2328 del 1º de Oct. de 1888, en la que se declara también obligatorio el pago de adoquinado de piedra, empedrado mixto y común, macadam, asfalto, pavimento y toda otra clase de afirmados que se mande ejecutar por la Mun., desde que según resultaba de un documento exhibido, el adoquinado de que se trataba debía haber sido construido antes de Mayo de 1888, es decir, antes de la promulgación de la citada ley núm. 2328, y por lo tanto, bajo el amparo de la núm. 1219, también citada. Desde luego, el propietario solo puede ser requerido á abonar el empedrado del frente de su propiedad en la proporción que designa la ley, y no puede imponérsele, aun cuando la Mun. lo haya resuelto, la obligación de satisfacer el importe del adoquinado construido. Aun cuando el demandado alegue que el empedrado no da mérito á su propiedad, esto no puede ser bastante para sustraerse de la obligación de pagar que le está impuesta, porque si ello fuera exacto, debe tenerse en cuenta que las leyes no solo miran el interés y bien particular, sino que tienen en cuenta razones de utilidad pública y bienestar general. Si bien de la inspección ocular practicada, resultaba que la vía del ferrocarril se encontraba próxima á la vereda y encerrada por una verja, la que impedía la salida de vehículos por esa calle, tampoco ese hecho hace cesar la obligación de pagar empedrado, pues ella les está impuesta á los propietarios de casas y terrenos que pagan contribución directa: no habiéndose alegado ésta circunstancia, el caso está comprendido en los términos del art. 2º de la ley de 6 de Oct. de 1882. Si al establecer el ferrocarril sus vías cerca de la propiedad obstruye el pleno goce y ejercicio de los derechos de propietario, podrá entablar las acciones que puedan asistirles, pero no es posible admitir que esa circunstancia sea razón bastante para libertarla de los cargos que las leyes le imponen. Era evidente, entonces, que debía satisfacer el importe de la construcción y el valor de los materiales empleados, y como ningún precio se convino, como se manifestó en la demanda, la cantidad á pagar debía ser fijada por árbitros—art. 1627 del Cód. Civ.

5—La escepción se fundó en los hechos siguientes: 1º que el afir-



tra las cuentas de la municipalidad por afirmados, si el

mado de que se trataba no había sido ordenado por la Mun. pero si por el Intendente; 2° que la obra había sido construída sin previa licitación, requisito indispensable según la ley; y 3° que la cuenta cobraba asfalto y adoquinado, cuando lo contratado fué macadam. El primer hecho no autoriza la escepción de falsedad, pues constaba por un informe, que el Concejo Deliberante facultó en distintas ocasiones al Departamento Ejecutivo para designar las calles donde debían efectuarse los empedrados. Si en tales autorizaciones no se excluyó la calle donde se construyó el afirmado que se cobraba, es evidente que la Intendencia pudo decretarlo en ésta como en cualquiera otra calle, y que por consecuencia, el que se hizo debía reputarse ordenado por la Municipalidad. El segundo argumento constituye indudablemente una falsedad civil, porque las cuentas en cuestión solo pueden expedirse ó visarse cuando se hayan cumplido todas las condiciones bajo las cuales la ley declara obligatorio el pago del empedrado. Para que los propietarios puedan ser compelidos al pago de éste, se requiere, según la ley de 1888, no solo la ejecución del empedrado, sino también que su construcción haya sido adjudicada previa licitación, de suerte que al dar carácter ejecutivo á las cuentas respectivas, es porque debiendo éstas formularse después de cumplidos todos los requisitos, la ley presume que su simple expedición y la atestación del Intendente constituyen la prueba de la observancia de aquéllas. Así, pues, las cuentas son ejecutivas porque en sí acreditan estos dos extremos independientemente de los demás que exige la ley: ejecución del empedrado y construcción previa licitación. Ahora bien, si se prueba que el empedrado no ha sido hecho, ó que no ha habido licitación, es indudable que la cuenta contiene una falsedad, desde que no son ciertos los hechos que espresa, y en tal situación ella pierde completamente su carácter ejecutivo, con arreglo al inc. 4° del art. 488 del Cód. de Proc. Esa prueba se produjo de una manera completa, en la que se refería á la falta de licitación, según resultaba del informe de la Mun. y por consecuencia, probada la falsedad que el título contenía, la escepción deducida debe necesariamente admitirse. Aunque se reputase hecho el empedrado por la Mun. y se considerasen á los constructores como simples locadores de servicios, de todos modos la Mun. no puede prescindir de la licitación para la adquisición de los materiales —art. 3° de la ley citada—y como según resultaba del testimonio agregado, estos fueron puestos por los contratistas sin licitación, siempre resultaba haberse omitido una formalidad esencial, y que el título

contrato de construcción se llevó á efecto sin licitación, requisito ineludible según la ley.—Civ., t. 7, p. 257, S. 5ª.

**6. Afirmados**—Es procedente la escepción de inhabi-

que la da por cumplida contiene á ese respecto una verdadera falsedad. Por otra parte debe tenerse presente, la falsedad no solo es material cuando se falsifica ó altera un documento con signo, sino que también es intelectual cuando el mismo encargado de su redacción establece en él hechos ó circunstancias falsas. Por lo tanto, como la ley, al admitir la falsedad como escepción, no hace distinción alguna, debe suponerse que ella se refiere y comprende á todas las formas en que se puede cometer falsedad. El otro hecho que servía de base escepcion, importaba también una falsedad. Según el afirmado contratado para la calle fué macadam, y como por tal razón es de suponerse que esa clase de afirmado fué la construída, resultaba que las cuentas contenían otra atestación falsa, cual es la de no haberse ejecutado adoquinado sino asfalto. Ahora, si lo construído es realmente lo que se cobra, la Mun. ha debido probarlo, porque dados los antecedentes del caso, la presunción que resulta de las cuentas se encontraba totalmente desvirtuada por la prueba que arrojaba un instrumento público de tanta más eficacia probatoria que aquéllas, como es el contrato celebrado entre la Mun. y la empresa constructora. Resumiendo lo espuesto, resultaba que el contrato, por la forma en que fué concluído y las cláusulas que contenía, importaba una violación manifiesta y flagrante de la ley de 1º de Oct. de 1888: que había igualmente, ó una enunciación falsa en el documento de la ejecución al cobrarse adoquinado, ó en su defecto una violación del mismo contrato, pues en este no se estipuló la construcción de esta clase de afirmado sino macadam. Este caso está en contra de otro resuelto.—Véase el núm. 3.

6—La Cám. declaró procedente esta escepción fundándose en que «hay en autos una prueba tan concluyente como irrecusable ante la justicia, prueba que por sí sola es bastante para establecer la improcedencia de la ejecución, desde que por la misma se demuestra que no existe la obligación cuyo pago se demanda.» La inspección ocular verificada por el Inferior, había constatado la verdad de lo afirmado por el ejecutado en cuanto á la falta ó no existencia del afirmado cuyo pago se le demandaba. Y bien; ante ésta prueba, y prescindiendo de la testimonial, puede considerarse que no obstante la autoridad del documento que servía de base á la ejecución, éste es inhábil para fundar esa ejecución desde que se había evidenciado que no se había realizado el hecho que





lidad de título contra una cuenta de la Municipalidad por afirmado, si se justifica que no ha sido construido.—Civ., tom. 7, pág. 269, Ser. 5ª.

7. **Afirmados**—Las cuentas de los contratistas de afirmados, visadas por la Municipalidad, son ejecutivas.—Civ., tom. 7, pág. 368, Ser. 5ª.

8. **Afirmados**—El propietario, haya ó no solicitado la servía de base á la obligación que quería hacerse pesar sobre el ejecutado. Se había justificado, por lo tanto, la escepción de inhabilidad del título, y siendo ésta de las comprendidas en la ley—art. 488, inc. 4º, Cód. de Proc.—se declaró su procedencia.

7—La ley de 29 de Set. de 1882, que era la que regía el caso, dispone espresamente que la Mun. contratará previa licitación, la construcción de las obras, y estipulará las condiciones del pago bajo la base de que el cobro de las cuotas se hará por las empresas constructoras, á cuyo efecto tendrán carácter ejecutivo las cuentas visadas por la misma corporación.

8—Cuando el vecino ó propietario no hubiese solicitado ni consentido la construcción del afirmado frente á su casa, solo debe pagar la parte del adoquinado que corresponde satisfacer á los vecinos ó propietarios, con arreglo á la ley de la materia. En 1881 se dictó la primera ley sobre afirmados, por la cual se hacía obligatorio el adoquinado en las calles comprendidas en el perímetro formado por las calles Callao, Entre Ríos, Caseros y la Rivera, escepción hecha de las calles Rivadavia, Piedad y Santa Fe, para las que se fijaba mayor extensión. Se establecía en dicha ley que los vecinos que pagasen contribución estarían obligados á abonar por los respectivos frentes, la mitad del valor total del adoquinado.—Ley de 28 de Oct. de 1881.—En 1888 se dictó otra ley por el Congreso Nac. declarando obligatorio en todo el territorio federal el pago de adoquinado de piedra, empedrado mixto y común ó macadám, asfalto, pavimento de madera y toda otra clase de afirmado que se mande ejecutar por la Mun. Como se ve, esta ley es más general que la anterior, puesto que extiende la obligación de los propietarios ó vecinos á toda clase de afirmado. Pero, al paso que la primera ley impone á los propietarios ó vecinos la obligación de pagar la mitad del valor del adoquinado comprendido en el frente de sus casas, la segunda solo les impone la obligación de pagar una tercera parte del valor total.—Ley de 1º de

construcción del afirmado, está obligado al pago de la parte que le fija la ley.—Civ., tom. 2, pág. 302, Ser. 6<sup>a</sup>.

1<sup>a</sup>. **Agentes auxiliares**—Siendo los corredores, consignatarios y comisionistas, agentes auxiliares del comercio, su calificación de comerciantes no anula su presentación como testigos.—Civ., tom. 6, pág. 384, Ser. 5<sup>a</sup>.

1. **Agente fiscal**—Si el Fiscal de la Cámara reconoce la competencia de los Tribunales de la Capital para entender en el juicio de divorcio, debe tenerse por desistido al Agente Fiscal, de la oposición.—Civ., tom. 4, página 327, Ser. 6<sup>a</sup>.

2. **Agente fiscal**—Importando conformidad con el auto apelado por el Agente Fiscal, el pedido de confirmación ante el superior, hecho por el Fiscal de la Cám., no procede resolución.—Civ., tom. 6, pág. 34, Ser. 6<sup>a</sup>.

3. **Agente Fiscal**—No puede desconocer el carácter hereditario de un heredero reconocido por los que han

Oct. de 1888, inc. 2<sup>o</sup>.—Esta última ley era la que regía el caso que nos ocupa. Véase: verb. *Empedrados*, núm. 5<sup>b</sup>.

1—Se dió como profesión de los testigos presentados, la de comerciantes. Como se comprobó que eran corredores y comisionistas, se dijo que no se había llenado el requisito del art. 181 del Cód. de Proc., que ordena se designe la profesión del testigo: se resolvió que la profesión de comerciantes estaba bien dada por cuanto según el art. 87 del Cód. de Com., los agentes auxiliares de comercio están sometidos á las leyes comerciales.

2—Porque esa petición importa un desistimiento.

3—Aquí solo se había justificado el carácter hereditario sin obtenerse aun declaratoria de herederos. Se dijo que esto era bastante para que se pudiese reconocer coherederos, sin dar razón alguna. Pero parece que la razón de esta resolución salta á la vista. El que reconoce como heredero á otro sin haber obtenido previamente la correspondiente declaratoria de herederos, efectúa el reconocimiento sujeto á la condición implícita de ser él declarado tal heredero, pues de lo contrario el reconocido tampoco será tenido como tal. Nadie puede conferir á otro un derecho mayor ni más estenso del que tiene.



justificado su calidad.—Civ., tom. 9, pág. 313, Ser. 6<sup>a</sup>.

4. **Agente Fiscal**—Está obligado á relacionar los antecedentes del proceso y fundar sus peticiones.—Crim., tomo 8, pág. 269, Ser. 3<sup>a</sup>.

5. **Agente Fiscal**—Es motivo de escusación del Juez, si en el sumario ha intervenido como Agente Fiscal.—Crim., tom. 8, pág. 311, Ser. 3<sup>a</sup>.

**Agente Fiscal**—Véase: *Escarcelación*, 1.

**Agravio**—Véase: *Albacea*, 2; *Obligación*, 2; *Sentencia*, 7.

1. **Agravio moral**—Si la indemnización de daños y perjuicios se funda en un delito del derecho criminal, debe comprender, además de las pérdidas é intereses, el agravio moral que el delito hubiese hecho sufrir al damnificado.—Civ., tom. 7, pág. 62, Ser. 5<sup>a</sup>.

2. **Agravio moral**—Solo puede ser reclamado y tenido en consideración cuando se trata de delitos del derecho criminal.—Civ., tom. 1, pág. 137, Ser. 6<sup>a</sup>.

5 —De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase Inst., tom. 7<sup>o</sup>, Verb. *Ajente Fiscal*, 6.

1—Así lo establece terminantemente el art. 1078 del Cód. Civ.

2—La acción de daños y perjuicios tuvo por causa la mordedura de un niño por un perro. Este caso cae bajo la sanción del art. 1124 del Cód. Civ. El art. 1078 no le comprende porque no se trata de un delito del derecho criminal. La Cám., al resolver la cuestión, se preguntaba: ¿Cuál es, desde luego el daño causado? La fractura de una pierna, curada en poco tiempo sin dejar deformación notable, ni imposibilitar en modo alguno á la víctima para el ejercicio normal del miembro lesionado, según resulta de las declaraciones de los facultativos que lo asistieron. La edad de la víctima, menor de 4 años, basta para revelar la imposibilidad de que haya sufrido, cesación de ganancias—lucro cesante—limitándose en consecuencia, todo el daño, á los gastos que haya demandado su curación—daño emergente.—Satisfechos como han sido los honorarios de los médicos quedarían pendientes los de medicamentos y demás que exigiera la atención adecuada del enfermo, sobre lo que no existía en autos antecedente

3. **Agravio moral**—Declarada la existencia del cuasi-delito del derecho civil por la absolución del acusado en el juicio criminal, los jueces deben, además de los daños y perjuicios sufridos, fijar una suma para indemnizar el agravio moral inferido al padre por la muerte de un hijo menor de edad.—Civ., tom. 6, pág. 406, Ser. 6ª.

**Agravio moral** — Véase: *Daños y perjuicios*, 53 y 55.

**Agregación** — Véase: *Espediente*, 5; *Posiciones*, 21.

**Agresión** — Véase: *Legítima defensa*, 1.

**A la orden** — Véase: *Excepción de falta de personería*, 1; *Embargo preventivo*, núm. 3.

**A la vista** — Véase: *Letra de cambio*, 1.

1. **Albacea** — O curador nombrado por el consul es-

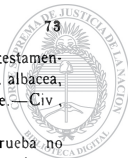
alguno que haga suponer que hayan podido ser superiores á los fijados por el Inferior.

3—En otras causas de idéntica naturaleza, la Cám. tiene resuelto que, de acuerdo con las prescripciones del Cód. Civ. y la doctrina generalmente reconocida y aceptada por ella misma, no puede desconocerse el perfecto derecho que tienen los padres, cualquiera que sea la edad de la víctima, para exigir una indemnización pecuniaria en relación á los sacrificios que les haya demandado el hijo, ó á la ayuda y sostén que de él pudieran esperar. Pág. 253, tom. I, y 154, tom. 6º, Ser. 4ª, Jur. Civ. En estos casos, la Cám., apreciando prudencialmente las circunstancias de cada caso, en uso de la facultad que le acuerda el art. 1083 del Cód. Civ., fijó la indemnización correspondiente. Véase Inst., tom. 7º, verb. *Acto ilícito*, 7; tom. 6, verb. *Agravio moral*, 1 y 2.

1—Los albaceas dativos que nombran los cónsules en virtud de lo dispuesto en el art. 3 de la ley de 30 de Set. de 1865, no son una entidad distinta de lo que se denomina en el Cód. Civ. curadores de la herencia. Ahora bien, las funciones de éstos principian cuando la herencia se reputa vacante, art. 3540; de modo que no parece procedente declarar cesante al albacea ante la sola presunción de la vacancia de la herencia. Si realmente se ha querido acordar una prerrogativa á los extranjeros que mueren *abintestato* sin dejar descendientes ó ascendientes, ni cónyuges residentes en el país, ó bajo testamento en que se instituya á extranjeros ausentes, esa prerrogativa

tranjero, no cesa aun cuando se declare vacante la herencia.—Civ., tom. 9, pág. 223, Ser. 6ª.

contenida en la ley citada y prevista en el art. 487 del Cód. Civ., no puede hacerse consistir en acordar intervención en el juicio sucesorio al cónsul ó al albacea que éste nombre, tan solo por el término de 30 días que dure la publicación de edictos que prescribe el art. 3539. Así se expresó el Dr. Marengo en su carácter de Fiscal de la Cám., y ésta por sus fundamentos revocó un auto bien fundado del Dr. Pizarro cuyos principales argumentos decía: «Que el decreto de 1862 no puede en manera alguna primar sobre leyes como son el Cód. Civ. y de Proc. El juicio de *abintestato* es diferente del de herencia vacante, aunque necesariamente lo precede. Si bien los cónsules de las naciones extranjeras están facultados para nombrar albaceas en los juicios de abintestato de sus connacionales cuando los tratados respectivos acuerdan ese derecho, esto debe interpretarse restrictivamente como una escepción á la ley común. El Juzgado aceptó la designación del albacea ó curador nombrado por el Sr. Ministro plenipotenciario de Francia en el juicio abintestato del causante de esta sucesión, quien ha desempeñado su cometido durante toda la tramitación del juicio. A pesar del tiempo transcurrido, casi tres meses, ninguna persona se ha presentado invocando derechos hereditarios, habiendo llegado la oportunidad prevista por los arts. 688 y 689 del Cód. de Proc., para declarar la herencia vacante y proveerla de un curador. Si los cónsules ó agentes diplomáticos extranjeros tienen facultad en los casos recordados para nombrar albaceas ó curadores en las sucesiones abintestato, es con el solo y exclusivo objeto de velar por los intereses de sus connacionales que puedan tener derechos en esas sucesiones. La declaración de la vacancia de la herencia se funda en la presunción legal de la no existencia de herederos, con lo que desaparece la razón de esa intervención. No sería correcto ni admisible, bajo ningún punto de vista, que la herencia vacante, deferida al fisco, fuera representada ó administrada por un curador nombrado por un cónsul extranjero. Habiendo terminado el juicio abintestato, termina igualmente la intervención del albacea ó curador nombrado para ese juicio, y con la iniciación del de herencia vacante, principia el de curador de ésta, que la representa ejerciendo activa y pasivamente los derechos hereditarios, con derechos y deberes iguales á los del heredero que ha aceptado la herencia bajo beneficio de inventario, art. 691. El art. 689 clara y terminantemente autoriza al juez para que, á petición de parte interesada, á solicitud del Ministerio fiscal, y también de oficio puede nombrar un curador á la herencia.



2<sup>a</sup>. **Albacea** — La sentencia que condena á la testamentaria al pago de una deuda, no causa agravio al albacea, aun cuando haya sido demandado personalmente. — Civ., tom. 9, pág. 329, Ser. 6<sup>a</sup>.

1. **Alegato** — Si la falta de agregación de la prueba no es imputable á la parte, suspende el término para alegar. — Civ., tom. 8, pág. 328, Ser. 6<sup>a</sup>.

2<sup>b</sup>. **Alegato** — El término para alegar el demandado, se cuenta desde que los autos se devuelven á la oficina. — Civ., tom. 5, pág. 196, Ser. 5<sup>a</sup>.

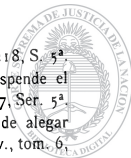
3. **Alegato** — La absolución de posiciones, no basta para

2<sup>a</sup> — La demanda se fundó en una de las cláusulas de la disposición testamentaria del causante, y se dirigió contra el heredero y el albacea conjuntamente: pero contra éste se dirigió en su carácter de representante de la sucesión: se hizo lugar á la demanda, y apelada la sentencia, la Cám. dijo que habiéndola consentido el heredero, la sentencia no causaba agravio al albacea, porque la demanda se dirigía también contra el albacea en su carácter de tal, no personalmente contra él, y la sentencia lo condenaba en el mismo carácter. Tal procedimiento se explica en el derecho de reconocer el crédito de la referencia como origen de una disposición del testador, en una de las cláusulas del testamento que contenía su última voluntad. Si la sentencia recurrida no afecta personalmente al albacea, no vemos qué agravios le pueda causar aquélla. No es necesario tratar la cuestión de si el albacea ha podido ó no intervenir en el juicio iniciado, pues aunque se llegara á establecer la negativa, su intervención indebida no podría perjudicar el procedimiento ni la sentencia consentida por el heredero respecto de quién se han observado todas las solemnidades del juicio.

1 — Después de sacar el espediente para alegar, el abogado se apercibió que no se había agregado á los autos un espediente pedido como prueba. La parte devolvió los autos pidiendo que previamente se agregara. Así se resolvió.

2<sup>b</sup> — Esta es la jurisprudencia establecida: Véase, Inst., tom. 7º, verb. *Alegato*, 6.

3 — Consideramos que hay que distinguir, si las posiciones se piden durante el término de prueba ó después de vencido éste. En



suspender el término para alegar —Civ., t. 5, p. 218, S. 5ª.

4. **Alegato**—El pedido de posiciones no suspende el término para alegar. —Civ., tom. 5, pág. 227, Ser. 5ª.

5. **Alegato**—Debe agregarse la prueba antes de alegar si la demora no es imputable á la parte.—Civ., tom. 6, página 318, Ser. 5ª.

6. **Alegato**—No procede alegar en juicio ejecutivo, aun cuando las partes hayan aceptado el término ordinario de prueba.—Civ., tom. 6, pág. 335, Ser. 5ª.

7. **Alegato**—Deben agregarse antes de alegar, las pruebas que se hayan solicitado en oportunidad.—Civ., tom. 8, pág. 341, Ser. 5ª.

8. **Alegato**—Si la prueba no se produce por negligencia de la parte, debe correr el término para alegar.—Civ., tom 8, pág. 343, Ser. 5ª.

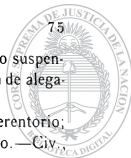
9. **Alegato** —Aunque haya habido desidia de la parte, si después de vencido el término de prueba, pide reiteración de diligencias pedidas durante él, y si siendo ordenadas, queda consentido el auto, las diligencias deben practicarse antes de los alegatos.—Civ., t. 8, p. 341, Ser. 5ª.

---

el primer caso no hay razón alguna para que no se cumpla lo preceptuado en la última parte del art. 118 del Cód. de Proc., exigiéndose que se practiquen antes de los alegatos: en el segundo el sumario es de estricta aplicación. Véase, Inst., tom. 7º, verb. Posiciones, núms. 15 y 33.

5—Se ordenó la agregación de la prueba, y que se pusieran los autos á la oficina para alegar; una de las partes reclamó, por cuanto no se había diligenciado un exhorto, y mientras se sustanciaba esta oposición, fué éste presentado. El juez mandó que se agregase por cuanto no había habido desidia de parte del interesado, y de acuerdo con el precepto del art. 118 del Cód. de Proc. en su última parte.

6—Según lo establece el art. 495 del Cód. de Proc., la diligencia prescripta por el art. 213 para el juicio ordinario, no es aplicable al juicio ejecutivo.



10. **Alegato**—La absolución de posiciones no suspende la agregación de la prueba ni la presentación de alegatos.—Civ., tom. 2, pág. 168, Ser. 6ª.

11. **Alegato**—El término para alegar no es perentorio; procede la prórroga pedida antes del vencimiento.—Civ., tom. 4, pág. 9, Ser. 6ª.

12. **Alegato**—Vencido el término para alegar, el secretario debe dar cuenta y agregar los presentados.—Civ., tom. 4, pág. 413, Ser. 6ª.

13. **Alegato**—Consentido el auto que manda tener como prueba las constancias de un expediente, puede ser agregado antes de los alegados.—Civ., t. 10, p. 42, S. 6ª.

14. **Alegato**—Presentado después de vencido el término y acusada rebeldía, debe ser devuelto.—Civ., tom. 10, pág. 316, Ser. 6ª.

15. **Alegato**—Debe agregarse la prueba antes de alegar si la demora no es imputable á la parte.—Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 6ª.

**Alegato**—Véase: *Posiciones*, 7 y 23; *Diligencias de prueba*, 21.

1. **Alimentos**—La cuota por alimentos á la esposa que ha deducido acción de divorcio, debe ser proporcionada al capital que posea el esposo.—Civ., t. 5, p. 74, S. 5ª.

2. **Alimentos**—Si la esposa pide para alimentos y litis-

---

10—Véase el núm. 3.

11—El término para alegar no es perentorio, pues no está enumerado entre los declarados tales por el art. 46 del Cód. de Proc., pero es perentorio el término acordado por el art. 213 para devolver los autos á la oficina. Véase. Inst., tom. 6º, verb. *Alegato*, núm. 2.

14—Art. 45 del Cód. de Proc.

1—El esposo tenía una botica de 7000 pesos de capital que producía 1000 al año; se fijó la cuota mensual en 40 pesos.

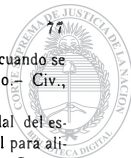
2—Este es un caso de evidente favoritismo de parte de la Cám. El Juez de 1ª Inst. con fecha 15 de Mayo dictó el auto no haciendo





expensas los frutos de sus bienes propios, no está obli-

gular á la entrega de la renta de la esposa. Con la misma fecha fueron elevados al Sup. los autos y con la misma fecha revocada la resolución y en el mismo día devuelto el expediente. El inferior dijo que, teniendo en coosideración: «que para que el juzgado pueda juzgar con acierto si es equitativa la suma que por alimentos se pide, se hace indispensable que previamente se produzca la justificación de ley. 1º Porque el art. 68 de la ley de Mat. Civ. que faculta á la mujer para solicitarlos, se regla por el art. 612 y siguientes del Cód. de Proc., desde que se trata de alimentos provisorios. 2º Porque los frutos que producen los bienes propios de un cónyuge, no son exclusivamente suyos, sino que pertenecen á la sociedad conyugal y con ellos ésta debe atender á las necesidades de la familia, y entran también á ese fin todos los que por cualquier concepto adquieran los esposos, ya sean procedentes de bienes ó trabajos personales, es recién cuando que conocido siquiera aproximadamente el monto ó el caudal de que dispone el matrimonio, que el juzgado se encuentra habilitado para asignar alimentos acerca de una suma determinada. Que por otra parte, á deferirse á las pretenciones de la actora, vendría á privársele al marido de la administración de los bienes si éstos consistieran únicamente en los denunciados y lo que es peor, sin que aquél pudiera hacer frente á las cargas que ella le impone, como ser conservación de esos bienes, contribuciones, impuestos públicos, etc. Que el argumento que se hace, de que el marido es el único que en caso de que no tuviera bienes para su subsistencia, podría solicitar se le pasara una pensión alimenticia, es inadmisibile, pues en tal caso se llegaría al extremo de ser dicha pensión fijada de la que se hubiese acordado á la mujer. Por último, la ley, al revestir al marido con los poderes de administrador, ha puesto bajo su guarda todos los bienes del matrimonio, de cuya administración no se le puede despojar sino cuando ocurriese alguno de los extremos que indica el art. 74 de la ley de matrimonio, justificando sumariamente, y esto ocurriera siempre en la hipótesis de que el demandado no tuviera otra cosa que administrar que las propiedades denunciadas de la esposa. Esta bien fundada resolución, fué revocada sobre el tambor por la Cám. en el mismo día y devuelto al Inferior en el mismo día también, diciendo: «Que en el caso ocurrente la esposa no solicitó que la prestación alimenticia y la suma para litisexpensas, se decrete de fondos pertenecientes al marido, sino que pide, que para ese efecto se le señale el importe de las



gada á justificar los extremos que la ley exige cuando se pide sobre los del esposo ó los del matrimonio.—Civ., tom. 5, pág. 216, Ser. 5ª.

3. **Alimentos**—Justificado el monto del caudal del esposo, la sentencia que fija una suma proporcional para alimentos no le causa agravio. —Civ., t. 6, pág. 203, Ser. 5ª.

4. **Alimentos**—Aun cuando el esposo no cumpla con su obligación de pasar alimentos, tiene derecho á á ver sus hijos en la forma y días señalados en la sentencia.—Civ., tom. 6, pág. 229, Ser. 5ª.

5. **Alimentos**—Justificados los extremos que la ley exige, es procedente la fijación de la pensión alimenticia. —Civ., tom. 8, pág. 206, Ser. 5ª.

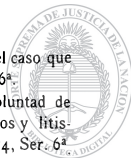
6. **Alimentos**—No debe modificarse la pensión alimenticia fijada en el sumario, si subsisten las mismas causales que se tuvieron en cuenta para la fijación provisoria.—Civ., tom. 2, pág. 355, Ser. 6ª.

7. **Alimentos**—La esposa solo puede pedir alimentos

rentas que devengan los bienes aportados al matrimonio, cuya propiedad encuéntrase acreditada con la hijuela que en testimonio corre agregada. Que desde entónces es innecesario, por el momento, la justificación del caudal del marido, puesto que en realidad éste no es demandado para que de su propio peculio suministre los alimentos. Que tampoco se hace necesaria tal justificación por la razón que se invoca en el auto, de pertenecer á la sociedad conyugal los frutos que producen los bienes propios de uno de los cónyuges, pues ella sería oportuna si el marido se viera en el caso de gestionar la entrega de parte de esas rentas para satisfacer sus propias necesidades ó las que reclame la administración de sus bienes.»

5—Arts. 602 y 604 del Cód. de Proc. y 68 de la Ley de Mat. Civ. La cuota fijada fué de 400 pesos siendo el haber del esposo, de 550.000 nacionales.

7—Para que la mujer casada pueda tener derecho á pedir judicialmente de su marido los alimentos necesarios, de conformidad con lo preceptuado en el art. 51 de la Ley de Mat. Civ., es necesario se entable contra éste la acción correspondiente, por cuanto dicha



justificando en juicio sumario, encontrarse en el caso que la ley determina.—Civ., tom. 3, pág. 84, Ser. 6ª.

8. **Alimentos**—Si el esposo confiesa su voluntad de vivir separado, procede la fijación de alimentos y litis-espensas á la esposa.—Civ., tom. 4, pág. 374, Ser. 6ª.

9. **Alimentos**—La suma destinada para alimentos no es embargable.—Civ., tom. 5, pág. 35, Ser. 6ª.

10. **Alimentos**—Justificada la obligación y el monto del caudal, el esposo está obligado á pasar alimentos á la esposa que ha deducido demanda de divorcio.—Civ., tom. 5, pág. 114, Ser. 6ª.

11. **Alimentos**—Las sumas fijadas para alimentos deben ser proporcionadas al capital justificado y á la clase social del que los solicita.—Civ., t. 5, p. 114, Ser. 6ª.

12. **Alimentos**—Debe rechazarse la escepción de litis-

---

obligación es correlativa de la que el art. 53 de la misma ley impone á aquélla, de habitar con su marido donde quiera que fije su residencia, so pena de que éste tendrá derecho á negarle alimentos cuando falte á tal obligación. El condenar al marido á la prestación de alimentos con solo los justificativos que acreditan que ha faltado al cumplimiento de esta obligación; importaría desconocer el derecho que éste tiene de negarlos cuando la mujer no cumple con la obligación de seguirlo y de habitar con él donde fije su residencia.

8—Arts. 602 del Cód. de Proc. y 51 de la Ley de Mat. Civ.

9—Así lo establece terminantemente el art. 374 del Cód. Civ.

10—Los principios que rigen en juicio la prestación provisoria de alimentos, son los siguientes: el que tenga derecho á solicitarlos debe justificar el título en que funda su pedido, y el caudal, aproximadamente por lo menos, del que deba darlos. En cuanto á la manera de producir estas dos justificaciones, dispone la ley que podrán hacerse por documentos, por confesión judicial ó información sumaria de testigos: la actora justificó su carácter de esposa del demandado y con ella el primer extremo legal—art. 602, Cód. de Proc.—como asimismo el divorcio instaurado—art. 68 de la Ley de Mat. Civ.

12—El juicio ordinario que se inicia después del sumario es una

pendencia fundada en el juicio sumario de alimentos si se opone al juicio ordinario.—Civ., t. 6, p. 39, Ser. 6ª.

13. **Alimentos**—Corresponde á los jueces de primera instancia la declaratoria de herederos para la petición de alimentos, aun cuando el causante carezca de bienes.—Civ., tom. 7, pág. 91, Ser. 6ª.

**Alimentos**—Véase: *Pensión alimenticia*, 3.

1. **Alquiler**—El locador no puede aumentar el precio consecuencia de lo dispuesto en los arts. 607 y 608 del Cód. de Proc. Ambos juicios no son iguales, sino consecuencia uno de otro, pudiendo el ordinario modificar ó no lo resuelto en el sumario, aumentando ó no la cuota.

13.—El juicio testamentario fué iniciado tan solo con el objeto de preparar el juicio de alimentos, y no para liquidar el haber testamentario. Como el juicio de alimentos es de competencia de los jueces ordinarios, parece ajustado á derecho que ese juicio se prepare ante el mismo juez que debe entender en lo principal.

1.—Al cobrar el alquiler de una mensualidad el locador escribió al dorso del recibo, estas palabras: «Se hace presente al señor Pellicer que la casa correrá desde el entrante mes á razón de 500 pesos moneda nacional mensuales.» Fundándose en que el locatario nada objetó, el demandante sostuvo que el aumento de precio por la locación, fué aceptada, siendo ese convenio tácito, el título en que fundó su acción. El demandado afirmó que no vió en el primer momento la nota puesta al dorso del recibo, pero que no manifestó conformidad con el aumento de alquiler, ni estuvo de acuerdo con él, por lo que no estaba obligado á pagarlo. Toda la cuestión se reduce así, á saber si el locatario está obligado á pagar el aumento del alquiler impuesto por el locador en la forma espresada. El contrato de locación queda concluido por el mutuo consentimiento de las partes, art. 1494 del Cód. Civ. y en este caso es indudable que ese mutuo consentimiento no ha existido respecto al precio que debía pagar el locatario. Sin la voluntad de éste, el locador no podía aumentarlo y solo tenía el derecho para demandar el desalojo, mediante los plazos que determina la ley, puesto que no había tiempo convenido para la duración del contrato. No puede, legal y razonablemente sostenerse que el silencio guardado importaba un consentimiento tácito en el aumento de alquiler, porque el silencio opuesto á ac-



del alquiler sin la conformidad expresa del locatario.—Civ., tom. 3, pág. 402, Ser. 6ª.

2. **Alquiler**—Si se consigna oportunamente el precio del alquiler, es procedente la escepción de pago.—Civ., tom. 3, pág. 402, Ser. 6ª.

3. **Alquiler**—La escepción de inhabilidad de título, es procedente si se cobran alquileres no convenidos.—Civ., tom. 3, pág. 402, Ser. 6ª.

4. **Alquiler**—El precio fijado como alquiler de la finca litigiosa no es susceptible de recurso.—Civ., tom. 3, página, 424, Ser. 6ª.

5. **Alquiler**—No procede el embargo de alquileres para

tos ó á una interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto ó á la interrogación, sino en los casos en que haya una obligación de explicarse por la ley ó por las relaciones de familia, ó á causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes,—art. 919 del Cód. Civ.—y no concurre ninguna de estas circunstancias en el que nos ocupa. Tampoco resulta esa conformidad de la presunción de la ley—art. 920—porque el consentimiento tácito solo resulta de hechos ó de actos que lo presupongan ó que autoricen á presumirlo—art. 1145—lo que solo tiene lugar en los casos prevenidos por el art. 1146, en los que no puede considerarse comprendido el que nos ocupa.

2 La consignación es una de las formas en que las obligaciones puedan extinguirse, art. 756 del Cód. Civ.

3—Porque el locador tiene título para cobrar los alquileres que le son debidos, pero no para demandar los que no se le deben, siendo así que el título lo forma el contrato de locación, esto es, el acuerdo de voluntades, que necesariamente debe referirse también al precio. Si el contrato es por un precio determinado, el locador no puede exigir el pago de otro mayor fijado á su arbitrio, y inenos aun cobrarlo ejecutivamente.

4—El auto fijando el alquiler fué una consecuencia de resoluciones ejecutoriadas.

5—La Cám. dijo: «No solicitándose el depósito de los alquileres á título de ampliación del embargo trabado exclusivamente sobre la propiedad, no procede el embargo de los alquileres.»



responder al pago de la hipoteca. —Civ., tom. 5, página 195, Ser. 5ª.

6. **Alquiler** —No procede acción ejecutiva para el cobro de los alquileres si se inicia después del desalojo. —Civ., tom. 6, pág. 228, Ser. 5ª.

7. **Alquiler** —Cualquiera que sea el valor de la prenda dada en garantía de alquileres, el sello debe pagarse con arreglo al monto total de éstos. —Civ., tom. 6, página 326, Ser. 5ª.

8. **Alquiler** —El juicio de desalojo debe seguirse independientemente del de cobro de alquileres. —Civ., tom. 8, pág. 396, Ser. 5ª.

9. **Alquiler** —Después del desalojo no procede el juicio ejecutivo para el cobro de alquileres. —Civ., tom. 8, página 312, Ser. 5ª.

10. **Alquiler** —La falta de comparecencia del demandado por cobro de alquileres permite librar mandamiento por los reclamados. —Civ., tom. 8, pág. 313, Ser. 5ª.

11. **Alquiler** —Si en el juicio sobre desalojo el locata-

6 —De acuerdo con la jurisprudencia y con la ley. Véase: verb. *Acción ejecutiva*, núm. 1.

7 —Lo que sirve para determinar el sello no es el valor de la cosa dada en prenda sino la cosa garantida.

8 —Son juicios de distinta naturaleza y que deben sustanciarse por distintos trámites. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3º del art. 74 del Cód. de Proc., no pueden acumularse y deben seguirse por separado.

9 —De acuerdo con la jurisprudencia. Véase el núm. 6.

10 —Por repetidas veces y bajo apercibimiento había sido requerido el demandado para que hiciese la manifestación ordenada en el art. 466 del Cód. de Proc. Su silencio, cuando tenía el deber legal de hacer dicha manifestación, debe ser considerado como una expresión de conformidad con los hechos sobre que ella debía versar —art. 919 del Cód. Civ.

11 —Este sumario está equivocado. No se trataba de un juicio



rio niega la deuda por alquileres, no procede embargo preventivo.—Civ., tom. 8, pág. 342, Ser. 5ª.

12. **Alquiler**—La responsabilidad del fiador por alquileres, subsiste en tanto existe el contrato de locación aun cuando el fiador subarriende el predio.—Civ., tom. 1, página 333, Ser. 6ª.

13. **Alquiler**—La acción directa entre locador y sublocatario no puede fundar la escepción de falta de personería si el segundo le reconoció ese carácter pagándole directamente los alquileres.—Civ., t. 2, pag. 404, Ser. 6ª.

14. **Alquiler**—La falta de manifestación del locatario hace procedente se libre mandamiento, en rebeldía, por los alquileres.—Civ., tom. 4, pág. 45, Ser. 6ª.

15. **Alquiler**—Aun después de vencido el contrato de de desalojo sino de cobro de pesos. El auto decía así: «Que el crédito del solicitante, según su escrito, es el derecho que en dicho escrito invoca para que le pague el demandado los alquileres que le debe por la locación de la finca que espresa el contrato; que si bien es cierto que el demandado ha reconocido el contrato de locación al absolver las posiciones, también lo es, que ha negado deber los alquileres que se le cobran; que, por consiguiente, la petición de embargo preventivo que se hace, no puede legalmente fundarse, como equivocadamente se ha hecho, en las disposiciones de los arts 443 y 448 del Cód. de Proc.»

12—Art. 2042 del Cód. Civ.

13—Art. 1592 del Cód. Civ.

14—De acuerdo con el núm. 10.

15—El precio de la locación no puede ser en ningún caso el que al propietario se le ocurra imponer, sino el que libremente hayan acordado locador y locatario. Es verdad que el alquiler que el actor pretendía cobrar al demandado era el que correspondía al tiempo en que el segundo continuó ocupando la finca después de haber vencido el contrato, pero aun así, siempre resultaría que la acción deducida era improcedente, pues hasta el día en que se pidió el desalojo, continuaba rigiendo el precio convenido en el contrato.—art. 1622, Cód. Civ.—y en cuanto al resto podría dar lugar, en todo caso, á una acción diversa

de locación, el locador no puede imponer al locatario un alquiler sobre el cual no exista conformidad de partes.—Civ., tom. 4, pág. 350, Ser. 6ª.

16. **Alquiler**—El alquiler embargado á los sublocatarios corresponde en primer término al propietario, solo la diferencia puede ser puesta á disposición de los locatarios.—Civ., tom. 5, pág. 15, Ser. 6ª.

17. **Alquiler**—Para que exista mora en el pago de alquileres, no habiéndose estipulado el lugar en que debía efectuarse, corresponde al locador justificar que ocurrió al domicilio del locatario para exigir el cobro.—Civ., tomo 5, pág. 353, Ser. 6ª.

18. **Alquiler**—Procede el embargo preventivo de los muebles fuera del local, si se justifica por información que son los mismos que corresponden al privilegio por alquileres.—Civ., tom. 6, pág. 32, Ser. 6ª.

19. **Alquiler**—Fijado al ocupante de un bien litigioso debe pagarse al administrador judicial.—Civ., tom. 7, página 85, Ser. 6ª.

20. **Alquiler**—Procede la escepción de inhabilidad de título contra la ejecución de alquileres, si no se justifica la existencia de la locación.—Civ., t. 7, p. 383, Ser. 6ª.

21. **Alquiler**—Si la ocupación del predio responde al derecho de retención alegado por el locador, no puede ser responsabilizado el locatario por el valor total de los alquileres.—Civ., tom. 7, pág. 383, Ser. 6ª.

emergente del hecho de la ocupación indebida. De acuerdo con lo resuelto en el núm. 1

16—Argumento del inc. 2º del art. 1901 del Cód. Civ.

17—Así se ha resuelto siempre por nuestros tribunales, fundándose en la práctica usada entre nosotros. Véase. Inst., tom. 5, verb. *Alquiler*, 1; y *Mora* núm. 1.





22. **Alquiler**—No puede despacharse ejecución por alquileres sin previo reconocimiento del carácter de locatario.—Civ., tom. 8, pág. 289, Ser. 6ª.

23. **Alquiler**—El auto que ordena el embargo de los alquileres del bien ejecutado por hipoteca, es apelable.—Civ., tom. 8, pág. 337, Ser. 6ª.

24. **Alquiler**—De los bienes hipotecados, no pueden ser embargados.—Civ., tom. 8, pág. 337, Ser. 6ª.

25. **Alquiler**—No procede el cobro ejecutivo de alquileres después de terminada la locación.—Civ., tom. 8, página 353, Ser. 6ª.

26. **Alquiler**—Procede el embargo preventivo en la demanda ejecutiva por cobro de alquileres.—Civ., tom. 9, página 45, Ser. 6.

27. **Alquiler**—Procede el desalojo por falta de pago de los alquileres, cualesquiera que sean las referencias del

22—Es necesario, con arreglo a lo dispuesto por el art. 466 del Cód. de Proc., para poder decretar la ejecución por alquileres, que la persona demandada manifieste si es ó no locataria y si está ocupando la casa locada. No constatando esas circunstancias ni por la manifestación hecha en juicio ni de ningún otro modo, no procede la ejecución.

23—Se dijo por la Cám. que la disposición del art. 305 del Cód. de Proc. no era aplicable al caso.

24—Al contrario, la Cám. resolvió que los alquileres pueden ser embargados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3116 del Cód. Civ. y «teniendo en cuenta el valor del crédito, el de los intereses adeudados, los gastos causídicos, el precio de compra de la finca rematada, el antecedente de que las otras dos propiedades no han podido enagenarse por las dos terceras partes de la tasación.»

25—De acuerdo con otros casos resueltos. Véase: verb. *Acción ejecutiva*, núm. 1.

26—Esta medida está comprendida dentro de los términos del art. 445 del Cód. de Proc.

27—De acuerdo con el caso resuelto en el tom. 11, pág. 377, ser. 4ª, Jur. Civ. Véase: Inst., tom. 7º, verb. *Alquileres*, 10.

contrato sobre el derecho de retrotraer la propiedad.—Civ., tom. 9, pág. 243, Ser. 6ª.

28. **Alquiler**—Cualquier que sea el precio del alquiler, la devolución de la fianza puede reclamarse ante la jurisdicción á que por su monto corresponda.—Civ., tom. 9, pág. 239, Ser. 6ª.

29. **Alquiler**—Son de cargo del locatario los alquileres é impuestos hasta el día en que el propietario se reciba de las llaves, si verificó el depósito judicial de éstas y consignación de aquéllos después de iniciado el juicio de desalojo ante distinto juez.—Civ., t. 10, p. 170, S. 6ª.

30. **Alquiler**—Después del desalojo, no procede acción ejecutiva por cobro de alquileres.—Civ., tom. 10, página 333, Ser. 6ª.

31. **Alquiler**—La obligación reconociendo alquileres debe ejecutarse ante la jurisdicción que corresponda por su cantidad; no se rige por las disposiciones sobre importe de la mensualidad.—Civ., tom. 10, pág. 416, Ser. 6ª.

28—El propietario demandaba al fiador por la suma de 1700 pesos. La circunstancia de que esta suma emana de una fianza dada sobre alquileres, en nada modifica la importancia del pleito.

29—Para ser procedentes los depósitos efectuados, era necesario que el locador se hubiera negado á recibir una y otra cosa—arts. 757, inc. 1ª, y 1611, del Cód. Civ.—por consiguiente, la demora en la entrega de la casa le era imputable al locatario, debiendo éste abonar los alquileres.

30—De acuerdo con los núms. 6, 9 y 25.

31—El alquiler fué solventado por medio de documentos de obligación. No se trataba del cobro de alquileres sino del cobro de una obligación general de entregar sumas de dinero; acciones que tienen el mismo origen, no hay que dudarlo, desde que ambas nacen del mismo contrato de locación, pero en la demanda iniciada no se reclamaba el cumplimiento de varias obligaciones que debieron ser abonadas en mensualidades de determinado monto, sino que se reclamaba el cumplimiento de una nueva obligación contraída por el deudor en el documento presentado.



32. **Alquiler**—El rechazo de la tercera de dominio no hace cosa juzgada sobre los alquileres percibidos por el tercerista.—Com., tom 8, pág. 292, Ser. 3<sup>a</sup>.

**Alquiler**—Véase: *Excepción de pago*, 3; *Contrato de arrendamiento*, 7; *Bienes*, 1; *Desalojo*, 12; *Consignación*, 9; *Embargo preventivo*, 40; *Acción ejecutiva*, 1.

**Amistad**—Véase: *Recusación*, 3.

**Animal**—Véase: *Daños y perjuicios*, 52 y 57.

1. **Apelable**—Para el ejecutante son apelables todos los autos del juicio ejecutivo.—Civ., t. 6, p. 260, Ser. 5<sup>a</sup>.

2. **Apelable**—El auto aprobatorio de una liquidación resultante de una sentencia, es apelable.—Civ., tom. 7, pag. 331, Ser. 5<sup>a</sup>.

32—Se pidió la devolución de alquileres percibidos por el tercerista vencido. La sentencia solo rechazó la tercera deducida guardando silencio sobre los alquileres; luego la ejecución de esa sentencia no podía abarcar lo que en ella no estaba comprendida.—Arts. 535 y 542 del Cód. de Proc. Ese punto debe ser materia de una acción nueva la que debe deducirse ante el juez de turno.

1—Son apelables todos los autos, siempre que causen gravamen irreparable ó decidan algún artículo, pues el art. 505 del Cód. de Proc. ha sido establecido por la ley en beneficio del acreedor, como lo ha sido todo el juicio ejecutivo. Esta es la jurisprudencia establecida hoy por la Cám.—Véase: Inst., tom. 5<sup>o</sup>, verb. *Autos inapelables*, 1; tom. 3<sup>o</sup>, verb. *Juicio ejecutivo*, 1; tom. 1<sup>o</sup>, verb. *Apelaciones*, 183; y tom. 4<sup>o</sup>, verb. *Inapelables*.

2—Las liquidaciones que se mandan practicar con posterioridad á las sentencias y á los efectos de su ejecución, deben ser consideradas como parte integrante de aquéllas, desde que vienen á llenar el vacío de que adolecen con relación á las cantidades que constituyen uno de los puntos sobre que debió recaer pronunciamiento expreso y positivo - art. 216 del Cód. de Proc. - En consecuencia, si la sentencia complementada posteriormente, era susceptible de recursos, debe serlo igualmente el auto complementario relativo á la determinación de las cantidades. Por otra parte, el art. 547 del Cód. de Proc., consagra espresamente la apelabilidad de dicha resolución.



3. **Apelable**—La denegación de una diligencia de prueba es apelable.—Civ., tom. 8, pág. 366, Ser. 5ª.

4. **Apelable**—El auto apelable que manda pasar el espediente sin más trámite á otro Juzgado, es apelable ante el nuevo juez.—Civ., tom. 2, pág. 166, Ser. 6ª.

5. **Apelable**—La resolución sobre nulidad ó validez del juicio ejecutivo, es apelable.—Civ., t. 8, p. 196, Ser. 6ª.

6. **Apelable**—El auto aprobatorio de una liquidación objetada, es apelable aun cuando se trate de un juicio ejecutivo.—Civ., tom. 9, pág. 52, Ser. 6ª.

7. **Apelable**—El auto que deniega intervención al de-

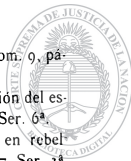
3.—De acuerdo con las prescripciones de los arts. 220 y 229 del Cód. de Proc.

4—El auto se mandó pasar el espediente al otro juez sin más trámite, de manera que no le corre término hasta no ser notificado en el nuevo juzgado que va á conocer.

5—La nulidad se dedujo después de vencido el término para oponer escepciones. El ejecutado dijo de nulidad alegando haber el ejecutante denunciado mal su domicilio, silenciándolo para de ese modo impedirle la defensa. En este caso, como en el que corre publicado en el tom. 10, pág. 213, sér. 4ª, la Cám. de lo Civ. ha establecido que no es aplicable la disposición del art. 305, del Cód. de Procedimientos.

6—La Cám. dijo que la resolución causa gravamen irreparable y que por consiguiente no es aplicable el art. 305 del Cód. de Proc. Padece error cuando la Cám. de lo Com. da como fundamento de su resolución, la razón espresada, pues precisamente el art. 305 del Cód. de Proc. declara la inapelabilidad de los autos, porque pueden sus agravios repararse en el correspondiente juicio ordinario.

7—El Juez de 1ª Inst. dijo que no procedía la presentación del insano, pues estaba representado por el curador provisorio, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 147 del Cód. Civil. La Cámara revocó el auto por mayoría, diciendo que en virtud del gravamen irreparable causado por el auto, procedía la apelación denegada. La minoría sostuvo la inapelabilidad del auto fundándose en el caso resuelto, de Cáceres con Dudgeon.



nunciado como insano es apelable. — Civ., tom. 9, página 301, Ser. 6<sup>a</sup>.

8. **Apelable**—El auto que deniega la tramitación del expediente es apelable.—Civ., tom. 10, pág. 379, Ser. 6<sup>a</sup>.

9. **Apelable**—El auto que da por contestada en rebel-  
día la demanda, es apelable.—Com., t. 7, p. 297, Ser. 3<sup>a</sup>.

10. **Apelable**—El auto que ordena el reconocimiento de la firma de una letra es apelable.—Com., tom. 7, página 318, Ser. 3<sup>a</sup>.

11. **Apelable**—La sentencia de trance y remate es apelable aun cuando no se hayan opuesto excepciones, si resuelve sobre la nulidad deducida.—Com., tom. 8, página 57, Ser. 3<sup>a</sup>.

12. **Apelable**—No es apelable el auto que ordena ó no hace lugar a la compulsa de libros de comercio.—Comercial, tom. 8, pág. 300, Ser. 3<sup>a</sup>.

13. **Apelable**—El auto que no hace lugar á la suspensión de una audiencia decretada á efecto de absolver posiciones, es apelable.—Civ., tom. 10, pág. 410, Ser. 6<sup>a</sup>.

8—Porque causa gravamen irreparable.

9—Es apelable con sujeción al art. 226 del Cód. de Proc.

10—Si el art. 466 del Cód. de Proc. permite que se prepare la vía ejecutiva con el reconocimiento, *á contrario sensu*, debe admitirse que cuando la ejecución no procede, es impertinente la diligencia de reconocimiento. En el caso que nos ocupa tenía lo espuesto su debida aplicación, pues se trataba de un título que no traía aparejada ejecución, y entón-  
ces el reconocimiento era inútil por no poderse, con esa medida, proseguir la vía ejecutiva.

11—Es procedente el recurso, de acuerdo con el art. 501 del Cód. de Proc., por cuanto la nulidad es una excepción admitida por el art. 489 del mismo Cód.

12—La persona que debía exhibir sus libros dijo que no los llevaba porque en su carácter de albañil no estaba obligado á ello. Entón-  
ces el juez no hizo lugar á la compulsa y concedió el recurso. La Cám. dijo que el auto no era apelable.

13—Causa gravamen irreparable—art. 220 del Cód. de Proc.



**Apelable**—Véase: *Alquiler*, 23.

1. **Apelación**—Es improcedente el recurso de apelación de resoluciones municipales fuera de los casos espresamente determinados por la ley.—Civ., t. 5, p. 27, Ser. 5<sup>a</sup>.

2. **Apelación**—El juez que entiende por apelación, puede ser recusado sin causa en el término que la ley fija.—Civ., tom. 5, pág. 248, Ser. 5<sup>a</sup>.

3. **Apelación**—Aun después de concedida la apelación, el juez está obligado á pronunciarse sobre las costas á solicitud de parte.—Civ., tom. 6, pág. 313, Ser. 5<sup>a</sup>.

1—Se ha resuelto en varios casos que el recurso establecido por la ley Org. de los Trib. de la Cap., atribuyendo á la Cám. el conocimiento en última instancia contra las resoluciones de la Mun., solo procede cuando dichas resoluciones son pronunciadas por aquella corporación en uso de las atribuciones que le corresponden por la ley en las secciones de higiene, seguridad y moralidad pública, cuyo cumplimiento no puede impedirse ni retardarse sin perjudicar los intereses de la comunidad. La causa que nos ocupa no se encontraba comprendida en ninguno de estos casos. Se trataba en ella del cobro de un impuesto establecido por la Mun., impuesto que la Compañía Unión Telefónica del Río de la Plata consideró ilegal é inconstitucional, pidiendo que así se declarase, y que se ordenara, además, la devolución de todo cuanto se le había exigido y pagado con tal motivo. Por consiguiente, no se trata de un juicio contencioso-administrativo, en el que procede el recurso establecido para ante la Cám. Civ., sino de obtener una declaración y condenación de la Mun. la que solo podría pronunciarse en juicio ordinario, previos los trámites del caso, juicio que la compañía recurrente podría promover, ejercitando las acciones que viere convenirle ante quien corresponda.

2—Art. 367 del Cód. de Proc.

3—Dictada sentencia sin pronunciarse el juez sobre las costas, una de las partes pidió ampliación de la sentencia respecto de las costas después que la otra parte había deducido el recurso y el juez concedióselo. Por el hecho de haber acordado el recurso se consideró desprendido del conocimiento de la causa, apelada esta resolución fué revocada, por cuanto el recurso de aclaración fué introducido dentro del término.



4. **Apelación**—No procede apelación del auto que deniega el recurso, debe interponerse recurso de hecho ante el superior.—Civ., tom. 6, pág. 371, Ser. 5ª.

5. **Apelación**—Adolece de nulidad la resolución recaída en los incidentes de prueba, si el principal se encontraba en apelación.—Civ., tom. 7, pág. 315, Ser. 5ª.

6. **Apelación**—Para el ejecutante no rige la disposición sobre apelación en juicio ejecutivo.—Civ., tom. 8, pág. 297, Ser. 5ª.

7. **Apelación**—El juez de la causa tiene jurisdicción para decretar un embargo preventivo, no obstante haber concedido apelación de la sentencia.—Civ., t. 5, p. 41, S. 4ª.

8. **Apelación**—El auto que da por reconocido el carácter de locatario, es apelable.—Civ., t. 5, pág. 252, Ser. 6ª.

9. **Apelación**—El auto que da por reconocida la firma para iniciar el juicio ejecutivo, es apelable.—Civ., tom. 5, pág. 261, Ser. 6ª.

10. **Apelación**—No puede fundarse aun cuando se inter-

---

4—La Cám. dijo: No es recurrible ante el mismo juez que la dicta el auto denegatorio del recurso de apelación, pues el art. 234 del Cód. de Proc. solo faculta en esos casos á interponer la queja ante el Superior. En contra.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Auto*, 1.

5—Concedido el recurso de apelación y consentido ese auto, el juez se desprende del conocimiento del asunto y cesa su jurisdicción.

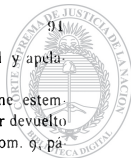
6—Véase: verb. *Apelable*, núm. 1.

7—Arts. 222 y 448 del Cód. de Proc. Véase: Inst., tom. 7º, verb. *Embargo preventivo*, 28.

8—Es una providencia dictada en la *preparación* del juicio ejecutivo por cobro de alquileres, no en la ejecución misma, no siéndole aplicable el art. 505 del Cód. de Proc.

9—Por la misma razón del núm. precedente. Véase: verb. *Apelable*, 10, resuelto en este mismo sentido.

10—El art. 227 del Cód. de Proc., establece que el escrito deberá limitarse á la mera interposición del recurso, y si esta regla fuera infringida *se mandará devolver el escrito*, previa anotación que el



pongan conjuntamente los recursos de nulidad y apelación.—Civ., tom. 8, pág. 276, Ser. 6<sup>a</sup>.

11. **Apelación**—El escrito en que se interpone estemporáneamente el recurso de revocatoria, debe ser devuelto aun cuando se conceda el de apelación. — Civ., tom. 9, página 24, Ser. 6<sup>a</sup>.

12. **Apelación**—Si el apelante no repone los sellos, puede dársele por desistido del recurso.—Civ., tom. 10, pág. 324, Ser. 6<sup>a</sup>

13. **Apelación**—No es apelable el auto que dispone la

Secretario pondrá en los autos, determinando el recurso y la fecha de su interposición. Ante todo, debe hacerse presente, que bajo el amparo de la interposición de un recurso de nulidad, no puede fundarse el de apelación, pues si esto fuese permitido, siempre se infringiría la ley que prohíbe fundar el recurso de apelación. Pero es el caso que el recurso de nulidad tampoco puede fundarse ante el Superior, porque el art. 239 del Cód. de Proc. establece que el recurso de nulidad se interpondrá conjuntamente y en el mismo término que el de apelación. La naturaleza del recurso de apelación, es la misma que la del de nulidad, y así como el primero no puede fundarse al ser interpuesto, tampoco puede serlo el segundo. Esta es la jurisprudencia sentada en nuestro Trib., en algunos casos sometidos á su decisión. Así en el tom. 6<sup>o</sup>, pág. 444, Ser. 2<sup>a</sup>, se dijo que el recurso de nulidad no puede fundarse ante el Superior; esta resolución ha sido materia de un estudio detenido por parte de la Cám. al resolver la cuestión. Véase: Inst., tom. 3<sup>o</sup>, verb. *Nulidad*, 7.

11—Art. 227 del Cód. de Proc.

12—Concedido un recurso con cargo de reponer los sellos, no fueron repuestos: entonces el juez ordenó que se repusieran dentro de 24 horas, bajo apercibimiento de tener á la parte por desistida del recurso de apelación. Recurrido este auto fué confirmado por la Cám. fundándose en que él consulta la buena marcha que debe observarse en los juicios.

13—Dijo el Trib. que el auto no causa gravamen irreparable—art. 226 del Cód. de Proc.—El Inferior tuvo en cuenta, al ordenar la ratificación, la circunstancia de que en ese escrito aparecía por primera vez la firma en autos y que no constaba su autenticidad. Es la



ratificación de una firma. — Com., t. 8, p. 177, Ser. 3ª.

**Apelación** — Véase: *Notificación*, 7; *Recurso*, 1; *Sentencia*, 6 y 7; *Embargo preventivo*, 27; *Nulidad*, 1; *Denunciante*, núm. 2.

1ª. **Apellido** — La resolución de cuestiones sobre uso de un apellido como muestra ó marca de fábrica, corresponde á la jurisdicción federal. — Civ., t. 7, p. 314, S. 6ª.

1. **Apercibimiento** — Si el auto no contiene el apercibimiento solicitado, no produce efecto legal. — Civ., tom. 10, pág. 104, Ser. 6ª.

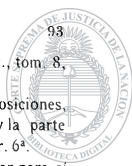
**Apercibimiento** — Véase: *Prueba*, 1.

1. **Apoderado** — Consentido el auto que ordena la absolución de posiciones por el apoderado, procede la rebel-

primera vez que se declara inapelable el auto que manda ratificar la firma de un escrito, pues siempre que tal providencia ha sido llevada al Superior en grado de apelación, éste ha entendido siempre en el recurso sin que se le hubiese ocurrido declararlo inapelable.

1ª — Se ha establecido por la Cám. en otra causa análoga á la presente, que los Tribs. ordinarios de la Capital, no pueden atribuirse, sin incurrir en flagrante nulidad, el conocimiento de las causas de resorte primitivo de la justicia federal. Véase el juicio seguido por Schwartz y Marolda contra Heriberto Hermida, en la que se planteó la misma cuestión, resolviéndose por unanimidad de votos en el sentido espresado. La cuestión debatida por las partes en el caso presente, se encuentra en idéntico caso, pues en una y otra causa se trataba del uso del apellido que correspondía á uno de los litigantes como título industrial ó comercial, invocándose por una de ellas la prescripción de la ley de marcas de fábrica y comercio, para oponerla al derecho gestionado por la otra en favor de la acción deducida sobre la nulidad de la cláusula que comprende el uso de ese apellido en la enajenación del establecimiento. Tratándose como aparecía de los propios términos de la demanda, de la usurpación de un apellido puesto indebidamente como título ó designación en un establecimiento de farmacia y droguería, y del derecho que para el uso de su apellido le corresponda con arreglo á un contrato á que se hacía referencia por el actor y á lo establecido en la ley de marcas de fábrica, no cabe duda que los Tribs. de la Capital son incompetentes para conocer en la cuestión.





dia si éste no comparece sin justa causa.—Civ., tom. 8, pág. 349, Ser. 5ª.

2. **Apoderado**—No está obligado á absolver posiciones, aun cuando el poder contenga esa facultad y la parte contraria lo exija.—Civ., tom. 6, pág. 248, Ser. 6ª.

3. **Apoderado**—Del ejecutante, puede comprar para si en remate judicial los bienes ejecutados.—Civ., tom. 7, página 17, Ser. 6ª.

4. **Apoderado**—Las modificaciones que durante el litigio sufra la personería del apoderado, no son causal para suspender la tramitación.—Civ., tom. 10, pág. 410, Ser. 6ª.

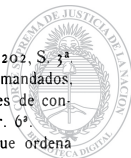
5. **Apoderado**—La querella por calumnia puede instau-

2—Si bien el art. 136 del Cód. de Proc. establece que en los casos que especifica las posiciones serán absueltas por el apoderado, no consagra sanción alguna que garanta la eficacia de ese medio probatorio; y antes por el contrario, prevé el caso de que por *cualquier circunstancia* no sea posible la realización de ese acto, se limita á indicar los medios que deben adoptarse para que las posiciones sean absueltas por el mandante en el lugar en que se encuentra. Este caso está de acuerdo con la Jurisp. Véase: Inst., tom. 5º, verb. *Posiciones*, 3.

3—La venta así verificada no cae bajo la prescripción del inc. 6º del art. 1361 del Cód. Civ., por cuanto no se trataba de un bien que hubiese estado en litigio, pues éste lo constituía un contrato de préstamo que dió origen á la acción deducida, y no de la realización de la hipoteca que es su accesorio; por otra parte, aun cuando la prohibición contenida en el citado art. comprendiera igualmente las cosas afectadas al litigio, y no solo las litigiosas propiamente dichas, su aplicación no sería procedente sino con relación al mandatario del ejecutado, y en manera alguna con respecto al del ejecutante, para quien no militan las consideraciones de orden moral que informan aquel precepto.

4—El apoderado de una de las partes fué nombrado Juez de Paz, cargo que lo inhabilitó para ejercer la personería. El contrario pidió que cesara dicha representación y que se postergara una audiencia pendiente hasta que se presentara como parte una persona habilitada. No se hizo lugar á la suspensión de la tramitación.

5—Esta es la doctrina hoy sentada por la Cám., en contraposición



rarse por sí ó por apoderado. —Crim., t. 8, p. 202, S. 3<sup>a</sup>

1. **Apoderado único**—Si son varios los demandados, deben constituir un solo apoderado, aun antes de contestar la demanda. —Civ., tom. 8, pág. 372, Ser. 6<sup>a</sup>.

2. **Apoderado único**—Consentido el auto que ordena á los demandados constituir un solo apoderado, no puede deducirse recusación. —Com., tom. 8, pag. 291, Ser. 3<sup>a</sup>.

3. **Apoderado único**—El apoderado aun cuando sea á la antigua. Véase: Inst., tom. 7<sup>o</sup>, verb. *Apoderado especial*, 2; y tom. 5<sup>o</sup>, mismo verb., núm. 1; y *Apoderado*, 12.

1—El Dr. Berrenechea, en su carácter de Fiscal, sostuvo que la unificación de la representación solo procede después de resueltas las articulaciones y de contestada la demanda. El juez resolvió previamente la escepción y ordenó la constitución inmediata de la representación única. Todo fué confirmado por la Cám. Puede verse en contra del sumario el verb. *Apoderado único*, 2 del tom. 7<sup>o</sup> de la Inst.

3—Se nombró representante común á uno de los codemandados conjuntos. Este designó un perito en el curso del juicio, y regulados sus honorarios, ejecutó al apoderado único personalmente y no por la representación ejercida. La Cám. declaró inhábil el título fundándose en que, en virtud de que el ejecutado es un simple apoderado, bien sea por la intimación judicial decretada con arreglo á la ley de partida citada en el auto apelado, ó bien lo sea á consecuencia del poder. Tal carácter inhabilita el título del acreedor por honorarios devenidos en la periciz que se le encomendó, rigiéndose este punto por el Cód. de Proc., según el art. 1852 del Civil. En ese Cód. figura el art. 15, que resuelve la cuestión, puesto que si el apoderado no es responsable de los gastos judiciales debidos al adversario, menos puede serlo de los derivados en defensa del comitente; porque es un principio de justicia referente al mandato, que el mandatario no queda personalmente obligado para con los terceros con quienes contrató—art. 1930 del Cód. Civ. —y que los actos jurídicos hechos por su intermedio se consideran como hechos personalmente por el mandante —art. 1946.—No produce la menor variación la circunstancia de que el apoderado sea uno de los obligados en la cuestión de que provienen los honorarios que se reclaman, porque constituido por varios el mandato, no quedan éstos solidariamente obligados, según el art. 1941, sino cuando el mandatario fué autorizado para imponerles tal obligación.

parte en el pleito, no es responsable del pago de honorarios á los peritos.—Com., tom. 8, pág. 114, Ser. 3ª.

**Apoderado**—Véase: *Contrademanda*, 1; *Fallido*, 1; *Li-quidación*, 4; *Documento acompañado*, 14; *Domicilio*, 18; *Herederos*, núm. 23.

**Aporte social**—Véase: *Sociedad accidental*, 2.

1. **Apremio**—El procedimiento de apremio no es aplicable al depositario particular, aun cuando judicialmente se haya embargado el depósito y se le haya notificado.—Civ., tom. 8, pág. 367, Ser. 6ª.

**Aprobación judicial**—Véase: *Escepción de prescripción*, 1; *Honorarios*, núm. 12.

**Arancel**—Véase: *Comisión*, 1 y 4.

1ª. **Arbitros**—Justificada la prestación de los servicios, el precio debe ser determinado por árbitros.—Civ., tom. 5, pág. 50, Ser. 5ª.

2. **Arbitros**—En la locación de servicios que no exista ajuste, el precio debe determinarse por árbitros.—Civ., tom. 7, pág. 345, Ser. 5ª.

3. **Arbitros**—Si durante la secuela del juicio se justifica por peritos el precio de las obras construidas, carece de objeto el nombramiento de árbitros para fijar el precio de la locación de servicios.—Civ., tom. 5, página 342, Ser. 6ª.

4. **Arbitros**—Los honorarios de un juicio arbitral, deben ser regulados por los árbitros, si así se estipuló en el compromiso.—Com., tom. 8, pág. 307, Ser. 3ª.

1ª—Art 1627 del Cód. Civ.

3—Carece de objeto y de razón legal deferir á un nuevo juicio el justiprecio de las obras, puesto que con la pericia se habían llenado cumplidamente los fines del art. 1627 del Cód. Civ.

4—Con arreglo al art. 1197 del Cód. Civ. las convenciones son ley para las partes.





**Arbitros** — Véase: *Servicios*, 2.

1. **Arbitros - arbitradores** — Los peritos arbitradores nombrados por contrato no pueden conceptuarse arbitros á los efectos del procedimiento.—Civ., t. 3, p. 92, S. 6<sup>a</sup>.

2. **Arbitros-arbitradores**—Las causales de nulidad de un laudo de árbitros-arbitradores, deben interpretarse en sentido restrictivo, y en consecuencia solo evidentemente justificadas, procede esa declaración.—Civ., tom. 3, página 360, Ser. 6<sup>a</sup>.

3. **Arbitros-arbitradores**—Las resoluciones de los árbitros-arbitradores, son inapelables.—Civ., tom. 7, página 122, Ser. 6<sup>a</sup>.

4. **Arbitros-arbitradores**—Si los peritos nombrados tienen el carácter de árbitros, deben resolver todas las cuestiones que se susciten.—Civ., t. 8, pág. 378, Ser. 6<sup>a</sup>.

5. **Arbitros-arbitradores**—Las cuestiones entre socios durante la existencia de la sociedad, deben ser resueltas por árbitros.—Civ., tom. 8, pág. 97, Ser. 3<sup>a</sup>.

6. **Arbitros-arbitradores** —Consentido por las partes el

1—El documento no contenía las cláusulas requeridas por el tít. XXVII del Cód. de Proc., para constituir un verdadero compromiso arbitral.

2—El art. 808 del Cód. de Proc. establece una escepción á la regla general por él consignada al admitir la acción de nulidad contra el laudo de amigables componedores por haberse fallado fuera del término ó sobre puntos no comprometidos. La interpretación en la ley de esta materia, es restrictiva, precisamente porque se trata de una escepción á la regla general de que el laudo es irrecurrible y por la circunstancia de que no sería posible declarar otras nulidades que las espresamente consignadas en la ley.

3—Art. 808 del Cód. de Proc.

5—Art. 448 del Cód. de Com.

6—Según lo tiene resuelto la Cám. en el tom. 2<sup>o</sup>, Ser. 2<sup>a</sup>, pág. 211, Jur. Com., una vez reconocida judicialmente la existencia de la sociedad, la resolución de las cuestiones que se hayan suscitado entre



auto señalando juicio verbal para constituir tribunal arbitral, no puede oponerse excepción de incompetencia de jurisdicción.—Com., tom. 8, pág. 290, Ser. 3ª.

1ª. **Arboles**—El propietario de una heredad tiene derecho á exigir que el lindero retire, á más de un metro del muro divisorio, los árboles que le perjudiquen.—Civ., tom. 8, pág. 219, Ser. 5ª.

1. **Area**—No procede la devolución del precio al comprador por disminución del área, en tanto ésta no se justifique por medición judicial.—Civ., t. 6, p. 266. Ser. 6ª.

2. **Area**—El que posee un terreno de área determinada,

los socios, deben someterse á la jurisdicción arbitral. Debe asimismo tenerse presente que el auto que señaló día para el juicio verbal, á fin de constituir el Tribunal arbitral, se encontraba consentido por las partes.

1ª—Art. 2628 del Cód. Civ.

2—Los actos materiales ejercidos por el poseedor estaban limitados á la parte del terreno cercado por el mismo á raíz de su adquisición; pero ¿caso es necesario é indispensable ejecutar actos *materiales* en cada centímetro cuadrado del terreno comprado para llenar las exigencias de la ley relativas á la tradición? No, basta practicarlas en cualquiera de sus partes, basta poner el pié en uno de sus extremos para entrar en posesión legal, plena y perfecta de la totalidad del terreno que le fué enajenado. «Son actos posesorios de cosas inmuebles; dice el art. 2384 del Cód. Civ., tales y cuales en general, *su ocupación de cualquier modo que se tenga, bastando hacerla en alguna de sus partes*»; y el art. 2380 admite que la tradición puede operarse ejerciendo el adquirente *actos posesorios* sin oposición alguna del anterior poseedor, ó de terceros, que es lo que había pasado en el caso presente, pues hasta el mismo demandado reconoció que el poseedor fué el primero en edificar en la manzana en que estaban ubicados los terrenos de ambos. Luego, pues, si al actor se le hizo tradición de todo el terreno descrito en la escritura, no puede desconocerse que existía en autos prueba legal de su posesión anterior á la del demandado, de la fracción que le faltaba para integrar su título. Esta es, por otra parte, la doctrina que fluye lógicamente del art. 2411 del Cód. Civ., al preceptuar que «la posesión fundada sobre un título solo comprende la es-

posee cada una de sus fracciones.—Civ., t. 6, p. 393, S. 6<sup>a</sup>.

3. **Area**—Para que la disminución del área locada pue-

tención del título.» Podría objetarse que el precedente raciocinio no basta para convencer que la fracción que le faltaba al actor debía ubicarse precisamente en el costado lindero con el demandado, pues lo mismo ha podido estar en el costado opuesto, pero es que en el caso presente, no podía haber duda al respecto, porque era en la parte limitrofe con el demandado donde el muro divisorio presentaba irregularidades que no debían existir, á estar á las especificaciones de los títulos de ambos que determinaban una línea recta de separación.

3—El caso presente debe ser juzgado con arreglo á la disposición del art. 1531 del Cód. Civ. Si el locador es vencido en juicio sobre una parte de la cosa arrendada, puede el locatario *reclamar una disminución del precio, ó la rescisión del contrato, si la parte de que se le priva fuera una parte principal de la cosa ó del objeto del arrendamiento.* En el caso, solo pudo reclamar la disminución proporcional del arrendamiento, porque en los términos del art. 1531 citado, el locatario solo puede reclamar la rescisión del contrato, *si la parte de que se le priva fuera una parte principal de la cosa ó del objeto del arrendamiento.* No puede sostenerse en efecto, que tratándose de un terreno que tiene, una superficie de 16,347 metros cuadrados, se considere una parte principal del mismo la fracción que ocupa una calle abierta por la Mun., cuya superficie no alcanza á 2200 metros cuadrados. No puede sostenerse tampoco, que privándose al locatario de esa fracción, se le prive de una parte principal del *objeto del arrendamiento*, porque en el contrato no se espresaba que el terreno arrendado debía dedicarse á un objeto especial y determinado. Es cierto que el locatario lo había destinado á horno de ladrillo; pero no se probó en manera alguna que el inquilino, por la falta de esa fracción ocupada por la calle abierta, se encontrase imposibilitado de continuar la explotación de ese negocio, y lejos de eso, del mismo escrito de demanda resultaba que uno de los pisaderos, el pozo y la bomba *quedaban en el terreno cuya posesión se dió á otro*, pero de cuya posesión material y efectiva nunca fué en realidad privado el locatario, y que la parte demandada adquirió en propiedad, asegurando así su uso y goce por todo el tiempo del contrato. De suerte que la apertura de la calle privaba al locatario solo del uso de una parte del terreno, pero no le impedía ó al menos no comprobó que le impidiese la explotación del negocio de horno de ladrillos. Esta solución legal se ajusta, por otra parte, á los principios de justicia y equidad; porque en verdad, que no sería justo

da fundar la rescisión del contrato, debe espresarse en éste el objeto que se tuvo en vista, y de aquel hecho resultar la imposibilidad de continuar.—Civ., t. 9, pág. 361, Ser. 6ª.

4. **Area**—Si existe prueba plena de que el vendedor no

ni equitativo que después de haber el locador rebajado á la mitad de su importe el alquiler originariamente convenido y de haber el locatario destruido ó desmejorado el terreno arrendado, dedicándolo á hornos de ladrillos, pudiera el mismo locatario demandar la rescisión del contrato con los daños y perjuicios y demás emergentes, por el hecho de haber la Mun. ordenado la apertura de una calle, y de verse por el mismo hecho privado de una fracción relativamente pequeña del terreno arrendado. Resultaba igualmente, que la apertura de la calle efectuada por la Mun. si bien disminuyó una parte del área del terreno arrendado, no impidió ni dificultó, al menos, el objeto á que era destinado, ó sea el trabajo de los hornos de ladrillos que en él se estableció, de modo que puede decirse que falla por su base el fundamento de la demanda.

4 Los enajenantes demandan el cumplimiento definitivo del contrato de compraventa. El demandado resiste este cumplimiento, fundándose en que los actores no son propietarios de toda el área vendida, circunstancia que los coloca en la imposibilidad de entregar el inmueble dentro de los 50 días subsiguientes á la fecha del contrato como se estipuló: se observa, además, que excediendo notoriamente esa falta, de un vigésimo con relación al área total, es aplicable al caso la disposición del art. 1345 del Cód. Civ. El juez desestimó las pretensiones del demandante, declarando que el demandado no estaba obligado á cumplir el boleto de compraventa. La Cám. confirmó la sentencia fundándose en distintos argumentos, y así decía: que el litigio se hallaba especialmente regido por el art. 1412, en razón de que, á mediados de Octubre de 1891, los demandantes no tenían el dominio de toda el área vendida, pues una parte pertenecía á tercero, lo que venía á reducir á la mitad, más ó menos, el frente. El art. 1412 prescribe efectivamente, que si el vendedor no entrega la cosa al tiempo fijado en el contrato, el comprador puede pedir la resolución de la venta ó la entrega de la cosa. Pero se advierte, desde luego, que en nuestro caso falta el hecho sustancial que debe instruir legalmente las disposiciones invocadas por el Inferior, esto es, la determinación de un plazo para la entrega de la cosa. Ese plazo no existe en la promesa privada, ni en el instrumento público que le ha dado valor jurídico, como no existe





podía entregar el área vendida, el comprador no está obligado á cumplir el contrato, aun cuando con posterioridad pudiera integrarla.—Civ., tom. 8, pág. 104, Ser. 6ª.

tampoco en convenciones ulteriores de las partes. No es exacto como lo afirma la sucesión, que con arreglo á una de las cláusulas espresadas del boleto, los vendedores debieron entregar el terreno dentro de los 50 días subsiguientes á su fecha, pues dicho término se estableció con referencia á la compradora, ó mejor dicho, á la seña entregada por ella, y la que perdería dentro de dicho plazo de 50 días si no escrituraba. La acción resolutoria no nace directamente por solo la falta de entrega de la cosa, sino por no efectuarla el deudor á la espiración del término convenido. Si es evidente que no existiendo término, corresponde al acreedor interpelar al enajenante para la entrega, sin que antes que ese hecho se produzca pueda hacerse efectiva la sanción de la ley, por no haber en rigor de derecho incurrido en mora el vendedor para la tradición de la cosa.—Véase Troplong y otros comentadores sobre el art. 1610 del Cód. francés, fuente del nuestro.—Pero si el derecho del demandado no tiene apoyo legal en el precepto de que hace mérito la sentencia recurrida, su progreso no es sinembargo dudoso, si como antecedente de hecho tenemos la diligencia pericial que demostraba la falta del caso, y como antecedente legal lo dispuesto en el art. 1345. En el contrato de venta se espresa que el inmueble tiene 475 varas de frente al sud por 416 de fondo. De la diligencia de mensura resulta entre tanto, que dicho frente al sud quedó reducido á 269 metros, 60 centímetros. La venta de un bien raíz puede realizarse de diversos modos y con cláusulas determinadas. Puede realizarse, entre otras maneras, sin indicación del área, por un solo precio, ó á razón de un precio la medida; ó con indicación del área bajo un cierto número de medidas, ó por un precio cada medida; y finalmente, como en la convención actual, por un precio único y no á tanto la medida. La misma ley, previendo dificultades posibles, se coloca en el caso de que el vendedor se halle en la imposibilidad material de entregar la totalidad de la superficie vendida, estableciendo soluciones distintas, según sea el grado ó importancia de esta imposibilidad. Así, la diferencia entre el área espresada en el contrato y el *area real* del inmueble, puede ser menor ó exceder en un vigésimo con relación á la superficie total. Si excede, como en el caso presente, el comprador tiene el derecho para dejar sin efecto el contrato,—art. 1346 y Ser. 4ª, tom. 1ª, pág. 245, Jur. Civ.



**Area**—Véase: *Posesión*, 8.

**Armas**—Véase: *Legítima defensa*, 1; *Disparo de arma de fuego*, núm. 1.

1. **Arraigo**—El monto del arraigo solo debe responder de las costas del juicio.—Civ., t. 5, p. 194, Ser. 5<sup>a</sup>.

2. **Arraigo**—La oposición, al fiador de arraigo aceptado por el Juzgado, debe ser fundada.—Civ., t. 5, p. 254, S. 5<sup>a</sup>.

3. **Arraigo**—La fianza debe ser por suma determinada la que deberá figurar el juez: la fianza indeterminada no es bastante.—Civ., tom. 5, pág. 254, Ser. 5<sup>a</sup>.

4. **Arraigo**—No procede la escepcion de arraigo fundada en el poder, si por testigos se justifica el domicilio del demandante en la jurisdicción del Juzgado.—Civ., tom. 4, pág. 418, Ser. 6<sup>a</sup>.

5. **Arraigo**—Al que opone la escepción de arraigo, corresponde justificar su procedencia.—Civ., tom. 7, página 32, Ser. 6<sup>a</sup>.

6. **Arraigo**—Si el demandante tiene su domicilio fuera de la Capital, procede la escepción de arraigo.—Civ., tom. 7, pág. 81, Ser. 6<sup>a</sup>.

7. **Arraigo**—Del juicio, no debe ser opuesto como es-

1—Así lo tiene resuelto la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 7<sup>a</sup>, verb. *Arraigo*, 5.

2—No se hizo objeción alguna respecto de la responsabilidad del fiador propuesto.

4—El actor dijo que por error se había dado en el poder, la ciudad de Dolores como su domicilio, comprobando esto suficientemente por medio de testigos—art. 204 del Cód. de Proc.; y ley 32, tit. 16, Part. 3<sup>a</sup>—que su domicilio real era en esta Capital desde hacía más de dos años.

5—El demandado, en la escepción, se hace actor.—Leyes 8<sup>a</sup> y 11, tit. 8<sup>o</sup>, Part. 3<sup>a</sup>.

6—Art. 85 del Cód. de Proc.

7—Desde que el actor ofrece arraigar el juicio no hay para que



cepción, si el demandante ofrece la fianza al iniciar su acción.—Civ., tom. 8, pág. 270, Ser. 6ª.

8. **Arraigo**—Justificado por el poder, el domicilio del demandante fuera de la jurisdicción del Juzgado, procede la escepción de arraigo.—Civ., t. 8, pág. 369, Ser. 6ª.

9. **Arraigo**—La fianza de arraigo puede constituir la una propiedad ubicada fuera de la jurisdicción del Juzgado.—Civ., tom. 10, pág. 32, Ser. 6ª.

10. **Arraigo**—La escepción de arraigo debe ser justificada por el que la opone.—Civ., t. 10, p. 352, Ser. 6ª.

**Arraigo**—Véase: *Escepción de arraigo*, 1 y 2.

1ª. **Arreglos privados**—Entre corredores de Bolsa y sus acreedores, aun cuando intervengan las autoridades internadas de la Bolsa de Comercio, no obligan á los que no los han suscrito.—Com., tom. 8, pág. 254, Ser. 3ª.

1ª. **Arrendamiento**—Si el contrato de arrendamiento es posterior al embargo, no basta para fundar el desistimiento del comprador.—Civ., tom. 5, pág. 175, Ser. 5ª.

2. **Arrendamiento**—Si del contrato no consta la obligación de pagar adelantado el arrendamiento, el recibo á cuenta se presume que corresponde al año de su fecha  
oponer esa medida legal, como escepción, cuando no hay controversia al respecto.

8—Porque la escritura de poder hace plena fe, no solo entre las partes sino también entre terceros—art. 993 y siguientes del Cód. Civ.—Salvo prueba en contrario.—Véase el núm. 4.

9—El requisito exigido por el art. 1998 del Cód. Civ. se refiere á la fianza personal y no á la real.

1ª—Esos arreglos son para el acreedor *res inter alios acta*—art. 1199 del Cód. Civ.

1ª—El arrendamiento posterior no perjudica en nada al comprador, pues no tiene ningún valor á su respecto—art. 229 de la Ley Org. de 1881, modificada en 1886.

2—Un recibo á cuenta no es otra cosa que el descargo parcial de una obligación existente y exigible.

salvo prueba en contra que corresponde al demandado.—Civ., tom. 1, pág. 217, Ser. 6ª.

3ª. **Arrendamiento** —Para percibir el precio del arriendo de una finca, debe probarse que la ha ocupado el demandado en el lapso de tiempo de referencia.—Civ., tom. 7, pág. 374, Ser. 5ª.

**Arrendamiento**—Véase: *Excepción de incompetencia*, 9; *Administrador*, núm. 13.

1. **Asamblea**—La suspensión de las resoluciones de una asamblea y de la comisión en ella nombrada, deja subsistente el anterior directorio, y en consecuencia, los mandatarios de éste tienen personería para continuar el juicio, omitiendo el último mandato.—Civ., t. 6, p. 394, S. 5ª.

**Asegurador**—Véase: *Nulidad*, 1.

1ª. **Asesor de menores** — En los diversos asuntos en que sean parte los menores, pueden intervenir distintos asesores.—Civ., tom. 6, pág. 307, Ser. 5ª.

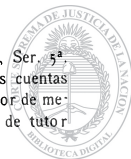
2. **Asesor de menores**—En tanto no se resuelva la petición de herencia en que tengan interés los menores, el Asesor no es parte en la testamentaria, si los herederos son mayores.—Civ., tom. 8, pág. 289, Ser. 5ª.

3. **Asesor de menores** — Si los menores se encuentran debidamente representados, el Asesor no puede pedir

3ª —El demandado negó la ocupación de la finca en la fecha á que correspondían los alquileres cobrados, entonces el actor debía comprobar ese extremo.—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

1ª Si bien la representación promiscua de los incapaces atribuida al Min. Pupilar, puede ser ejercida indistintamente por cualquiera de las dos reparticiones en que aquél está dividido para facilitar el desempeño de las funciones que le están encomendadas; sin embargo, en el caso presente, se ordenó por razones especiales, que el mismo Asesor entendiera en él.

2 — La sola acción de petición deducida, basta para demostrar que el Asesor no es parte porque no hay menores y porque ambas cosas son contradictorias.



nuevos antecedentes.—Civ., tom. 8, pág. 334, Ser. 5ª.

4ª. **Asesor de menores**—En el examen de las cuentas rendidas por el tutor, debe intervenir el Asesor de menores, sin que sea necesario el nombramiento de tutor especial.—Civ., tom. 9, pág. 64, Ser. 6ª.

**Asesor de menores**—Véase: *De oficio*, 12.

**Asistencia médica**—V: *Honorarios*, 10 y 20; *Costas*, 70.

1ª. **Atentado á la autoridad**—Aun cuando haya sido lesionado el agente, no puede darse por probado el delito de atentado á la autoridad, si por parte de ésta pudo existir abuso.—Crim., tom. 7, pág. 208, Ser. 3ª.

2. **Atentado á la autoridad**—A mano armada contra la autoridad sin circunstancias, debe ser castigado con año y medio de prisión.—Crim., tom. 7, pág. 244, Ser. 3ª.

3. **Atentado á la autoridad**—Y con armas, debe ser castigado con año y medio de prisión.—Crim., tom. 8, página 109, Ser. 3ª.

4. **Atentado á la autoridad**—Y con armas, debe ser castigado con dos años de prisión, si existen agravantes.—Crim., tom. 8, pág. 250, Ser. 3ª.

1ª. **Audiencia**—No pueden darse por absueltas las posi-

4ª—No hay oposición de intereses que haga necesario ese nombramiento—art. 397, inc. 4º del Cód. Civ.

1ª—En atención á la falta de antecedentes probatorios de la delincuencia del reo en el incidente con el agente de la autoridad. Las heridas fueron reciprocas, y no basta que sea herido el agente para que se dé por establecida la responsabilidad criminal del primero. Pudo haber desacato, como también abuso de autoridad, y en la duda debe seguirse el precepto de la ley, que fue el aconsejado por Ministerio fiscal, fundado en el art. 13 del Cód. de Proc.

2 - Arts. 56 y 235 del Cód. l'en.

3—Art. 235 del Cód. Pen.

1ª—Esta es la jurisprudencia sentada por la Cám. de lo Civ., en su afán por introducir el caos en nuestra legislación, creando obstáculos á la administración de justicia é introduciendo corruptelas reprobadas



ciones en rebeldía, si no se abrió la audiencia.—Civ., tom. 6, pág. 351, Ser. 5ª.

2. **Audiencia**—No pueden darse por absueltas en rebeldía las posiciones, si no se abre la audiencia.—Civ., tom. 8, pág. 357, Ser. 5ª.

3. **Audiencia**—Debe señalarse nuevo día para la absolución de posiciones, si no se abre la audiencia.—Civ., tom. 5, pág. 12, Ser. 6ª.

4. **Audiencia**—No puede fijarse nueva audiencia, si la fijada contenía apercibimiento expreso de ser la última.—Civ., tom. 8, pág. 375, Ser. 6ª.

5. **Audiencia**—En los juicios de interdicto puede ser prorrogada para otro día.—Civ., t. 10, pág. 89, Ser. 6ª.

**Audiencia**—Véase: *Hora vencida*, 2; *Posesión*, 11; *Posiciones*, 10 y 28; *Cesión*, 2.

1. **Ausencia**—Si de autos consta la ausencia de la

---

que redundan en su manifiesto desprestigio. Se aduce como fundamento de la resolución el precepto del art. 128 del Cód. de Proc. Véase: Inst., tom. 7º, verb. *Audiencia abierta*; y tom. 5º, verb. *Audiencia*, 1

3—El que pidió las posiciones compareció, no así el citado pero no se abrió la audiencia siendo de aplicación al caso la jurisprudencia sentada la Cám.

5—El juez mandó suspender la audiencia por ser la hora avanzada, señalando nuevo día, la Cám. confirmó el auto.

1—El auto confirmado por sus fundamentos por la Cám. decía así: «Atento lo que resulta de la diligencia de notificación y no negándose que la parte esté ausente de esta Capital, y tratándose de una notificación personal, no ha lugar á la notificación en el domicilio.» Cuando el actuario iba á notificar se le decía en el domicilio, que la parte se hallaba ausente. En casos como éstos, la notificación debe hacerse por cédulas por cuanto esta forma de notificación basta cuando la ley requiere que ella sea hecha personalmente. Así lo tiene resuelto la jurisprudencia.—Véase: Inst., tom. 6º, verb. *Ausente*, 2. Las únicas notificaciones que deben hacerse en el lugar en que se encuentre la parte litigante son, la citación ó emplazamiento—art. 78 del Cód. de Proc.—y el auto en que se ordena la absolución de posiciones.



parte, no debe practicarse la notificación de diligencias que la ley exige lo sean personalmente.—Civ., tom. 2, pág. 430, Ser. 6ª.

2. **Ausencia**—Justificada la del demandado en la fecha de la notificación, ésta no surte efectos legales.—Civ., tom. 3, pág. 59, Ser. 6ª.

3. **Ausencia**—Del deudor, no es causa legal para interrumpir la prescripción.—Civ., tom. 5, pág. 46, Ser. 6ª.

4. **Ausencia**—Si el representante del citado al reco-

---

Las demás providencias deben notificarse por nota ó por cédula en el domicilio del litigante.

2—El demandado se hallaba en Chile el día en que fué notificado aquí de la demanda. Esa diligencia es nula, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 78 del Cód. de Proc.

3—No se discutía el hecho de haber transcurrido el término legal establecido para declarar estinguida la obligación contraída por el demandado. Se sostuvo tan solo que la prescripción quedaba suspendida durante el tiempo en que el deudor estaba ausente del lugar en que la obligación se contrajo. La ausencia, y mucho menos cuando es conocida del acreedor el nuevo domicilio del deudor, no es causa legal para suspender el término de la prescripción, pues el Cód. de Proc. arbitra los medios para poder ejercitar con éxito, la acción emergente del crédito. La ausencia, en efecto, no constituye la dificultad ó imposibilidad á que se refiere el art. 3980 del Cód. Civ., pero aun cuando estuviera comprendida, no por eso mejoraría el derecho alegado, por cuanto si bien el mencionado art. autoriza á los jueces para librar al acreedor de los efectos de la prescripción operada, lo hace en el concepto y espresa condición de que el acreedor haya hecho valer sus derechos inmediatamente de haber cesado el impedimento, y resultaba de los propios términos del escrito de demanda, que cuando ésta se dedujo, hacía ya más de ocho meses que el actor sabía que el deudor había regresado y fijado nuevamente su domicilio en esta Capital, de donde se sigue que el acreedor fué doblemente negligente en el ejercicio de sus derechos.

4—Se señaló día para el reconocimiento de firma: al notificarse al interesado el auto no se hizo en persona, y un apoderado general se presentó manifestando que su principal se hallaba fuera de la Capital, por lo que no podría comparecer á la audiencia decretada. Es-

nocimiento de la firma hace presente su ausencia, no procede la rebeldía —Civ., tom. 5, pág. 261, Ser. 6ª.

5. **Ausencia**—Del que debe absolver posiciones, no suspende la secuela del juicio, pero sí la resolución definitiva.—Civ., tom. 8, pág. 412, Ser. 5ª.

6. **Ausencia**—Temporaria, fuera de la Capital, no basta para declarar justificada la escepción de incompetencia.—Civ., tom. 9, pág. 319, Ser. 6ª.

**Ausencia**—Véase: *Abogado*, 7; *Escepción de arraigo*, 3 y 4; *Testigos*, 10.

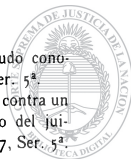
1. **Ausente**—Debe declararse la nulidad de todo lo  
tos antecedentes demuestran suficientemente que no había habido el propósito de desatender los mandatos del Juez inferior, no existiendo, por lo tanto, la rebeldía para justificar la procedencia del auto dando por reconocida la firma.

5.—Un litigante pidió que el contrario absolviese posiciones á cuyo efecto debía el juez intimar al apoderado que denunciase su domicilio bajo apercibimiento de que se suspendería la secuela del juicio: se ordenó que se hiciese la manifestación ordenada; pero el apoderado dijo que no sabía el domicilio, prestando el juramento de ley. No se hizo lugar á la suspensión de la causa, pero sí se declaró que no se llamaría autos para sentencia, «aunque la causa se encuentre en estado, hasta tanto no se encuentren agregadas las posiciones pedidas y ordenadas oportunamente.» De acuerdo con este caso. Véase: tom. 7º, pág. 330, Ser. 2ª, y en el caso de Rochetti con Gilly, de Mayo 22 de 1893.

6.—Para que la habitación cause domicilio y surta los efectos del fuero es necesario que la residencia sea habitual y no accidental aunque se tenga la intención de fijar allí para siempre.—Art. 92 del Cód. Civ., F. S. C. N., tom. 14, pág. 491, Ser. 2ª.

1.—En este caso especial se dijo: «que teniendo en consideración los antecedentes que la causa suministra y las mismas manifestaciones del ejecutante, fácil es convencerse de la improcedencia de la citación en la forma que ha sido hecha, puesto que tratándose de una finca locada, ha podido, si sus informaciones particulares en las oficinas fiscales, ó cerca de los locatarios, no le daban resultado, solicitar judicialmente las medidas necesarias para que el inquilino manifestase el nombre y domicilio del propietario —art. 246 del Cód. Civ.





actuado contra el ausente, si el ejecutante pudo conocer su domicilio.—Civ., tom. 5, pág. 147, Ser. 5ª.

2. **Ausente**—La nulidad del juicio seguido contra un ausente, procede cualquiera que sea el estado del juicio desde que se presenta.—Civ., t. 5, pág. 147, Ser. 5ª.

3. **Ausente**—Si el demandado ha comparecido, no procede dar intervención al Defensor de ausentes, aunque abandone el juicio.—Civ., tom. 6, pág. 337, Ser. 5ª.

4. **Ausente**—El Defensor de un procesado ausente, puede oponer durante el sumario la prescripción del derecho de acusar á su defendido.—Civ., t. 8, p. 219, S. 3ª.

5. **Ausente**—Debe hacerse la notificación en el domicilio indicado en la letra, aun cuando el firmante se encuentre ausente.—Com., tom. 7, pág. 138, Ser. 3ª.

**Ausente**—Véase: *Término extraordinario*, 2.

1. **Autenticación**—Procede la autenticación de todo documento de obligación, aun cuando no esté firmado, á

2—Si bien el Cód. de Proc. al legislar sobre el juicio ejecutivo señala términos para que pueda deducirse la nulidad como escepción ó como recurso, ello presupone la intervención en el asunto de las partes que tienen interés en él y que han tenido ó podido tener oportunidad de reclamar en tiempo y forma de la violación de la ley que engendra la nulidad.

3—El nombramiento de Defensor solo procede en el caso del art. 471 del Cód. de Proc., muy diverso al del sumario, en que el ejecutado intervino en el juicio y opuso escepciones.

4—El art. 150 del Cód. de Proc. Crim. no obsta á que el Defensor haga uso del derecho acordado por el art. 444 del Cód. de Proc.

5—La ausencia momentánea de su domicilio no quiere decir que allí no viva. La Cám. dijo que: «Estando indicado el lugar del pago en el documento acompañado y afirmándose que el demandado que no es su domicilio, y sin que la ausencia mencionada en la diligencia de notificación deba obstaculizar la notificación en el lugar espresado, de acuerdo con el art. 39 del Cód. de Proc. que determina la forma de la notificación en el caso que se trata.»

1—Se trataba de cupones cuyo importe se quería ejecutar.

fin de preparar la acción de ejecución.—Com., tom. 7, pág. 304, Ser. 3ª.

**Autenticación**—Véase: *Ratificación*, 1; *Firma*, 3; *Documentos privados*, 4; *Embargo preventivo*, 3.

1. **Autenticidad**—Justificada la autenticidad de los documentos en que se funda la obligación, debe ser condenado el demandado al pago de la suma reclamada.—Civ., tom. 3, pág. 271, Ser. 6ª.

2. **Autenticidad**—Si los herederos no desconocen la autenticidad del documento atribuido al causante, puede formar el principio de prueba escrita que la ley exige para hacer procedente la testimonial.—Civ., tom. 4, página 314, Ser. 6ª.

3. **Autenticidad**—Para el cotejo y á los efectos de comprobar la autenticidad de las firmas, pueden agregarse documentos durante el término de prueba.—Civ., tom. 5, pág. 273, Ser. 6ª.

4. **Autenticidad**—Reconocida la autenticidad del docu-

1—La autenticidad de la firma se estableció por medio del correspondiente dictamen pericial, terminantemente asertivo, constituyendo prueba plena de acuerdo con lo preceptuado en el art. 178 del Cód. de Proc.

2—La vaguedad en la contestación á la demanda hace aplicable la disposición del art. 100 del Cód. de Proc., y consiguientemente la del art. 180 del mismo Cód.

3—Los documentos fueron agregados al solo efecto de que sirvieran de comparación para el cotejo con cargo de ser desglosados y devueltos, una vez hecha la pericia.

4—El demandado reconoció su firma pero agregó que unas palabras habían sido agregadas por la parte contraria sin su consentimiento y después de escritas dichas firmas: es indudable que á él le correspondía acreditar esta escepción, so pena, en caso de no hacerlo así, de tenerse por reconocido el contenido de esos documentos, de acuerdo con lo prescripto por el art. 1028 del Cód. Civ., y el principio procesal de que la prueba incumbe al que afirma y no al que niega un hecho nuevo en juicio.





mento que justifica el arreglo de cuentas hasta una época determinada, corresponde al que alega la existencia de agregaciones justificarlas plenamente.—Com., tom. 7, pág. 374, Ser. 3<sup>a</sup>.

**Autenticidad**—Véase: *Contrato de arrendamiento*, 7; *Boleto de compraventa*, 2 y 4; *Prescripción*, 5; *Transacción*, 5; *Documentos privados*, 1 y 5; *Embargo preventivo*, 2.

**Auto**—Véase: *Documentos*, 1; *Testigos*, 3; *De oficio*, 4 y 10; *Recurso*, 1; *Recurso de apelación*, 2; *Prueba*, 7; *Nulidad*, 6; *Notificación*, 5, 17 y 18; *Prueba agregada*, 1; *Cédula*, 5; *Comprador*, 22; *Costas*, 63; *Escepción de incompetencia*, 15; *Liquidación*, 6; *Remate judicial*, 6; *Apelación*, 8 y 9; *Cuestión de puro derecho*, 2; *Embargo*, 14; *Información*, núm. 14.

1<sup>a</sup>. **Auto agravante**—Que ordena el reconocimiento de la firma para preparar el juicio ejecutivo, no causa agravio.—Civ., tom. 10, pág. 20, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Auto apelable**—Véase: *Apelable*, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12 y 13; *Apelación*, núms. 4 y 12.

**Auto apelado**—Véase: *Término*, 3.

1. **Auto aprobatorio**—Debe dejarse sin efecto el auto aprobatorio de una transacción imposible según sus mismas cláusulas.—Civ., tom. 6, pág. 257, Ser. 6<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Auto consentido**—Consentido el auto que reproduce

1<sup>a</sup>—Decretado un comparendo para el reconocimiento de una firma, fué apelado, siendo confirmado por la Cám., porque se ajustaba el procedimiento á lo preceptuado en los arts. 465, 466 y 470 del Cód. de Proc.

1<sup>b</sup>—El caso resuelto decía así: «Que en el auto ejecutoriado se aceptaron los fundamentos del escrito estableciéndose que sus referencias eran exactas y arregladas á las constancias de los autos principales: que en dicho escrito se impugnaba las observaciones hechas en otro, tanto respecto á la falta de conveniente ubicación en el título del terreno vendido, como á los defectos que éste atribuía al procedimiento seguido, reconociéndose únicamente que una persona aparecía con diferentes nom-

un escrito por sus fundamentos, hace ejecutoria sobre los puntos discutidos.—Civ., tom. 2, pág. 394, Ser. 6<sup>a</sup>.

2<sup>a</sup>. **Auto consentido**—Si el auto se encontraba consentido, el Juzgado no puede revocarlo á petición de parte.—Civ., tom. 3, pág. 73, Ser. 6<sup>a</sup>.

3. **Auto consentido**—Si el auto no provee á lo pedido sin denegacion espresa, no puede considerarse consentido.—Com., tom. 7, pág. 341, Ser. 3<sup>a</sup>.

1. **Auto inapelable**—Lo son los de primera instancia en juicios seguidos ante la justicia de paz.—Civ., tom. 6, pág. 374, Ser. 5<sup>a</sup>.

2<sup>b</sup>. **Auto inapenable**—La disposición que declara inapables los autos en juicio ejecutivo, solo es apelable al ejecutado.—Civ., tom. 3, pág. 98, Ser. 6<sup>a</sup>.

bres, así como su hija, no obstante tratarse de las verdaderas herederas, circunstancia que se ofrecía subsanar en breve término.» Por consiguiente, el recordado auto estableció que estas diferencias de nombres eran las únicas objeciones atendibles de las formuladas en el escrito.

2<sup>a</sup>—Se dijo que el término para interponer revocatoria de un auto, es de tres días, y para apelar de cinco—arts. 224 y 228 del Cód. de Proc.—El art. 236 del mismo Cód. prescribe que, transcurridos los términos espresados sin interponerse la apelación, quedarán consentidas de derecho las sentencias, ya sean definitivas ó meramente interlocutorias. Así, habiéndose dejado vencer con exceso los términos indicados sin usar de los recursos que la ley le acordaba contra el auto, éste quedó consentido de derecho desde el vencimiento de aquéllos, y por lo tanto, ejecutoriado, sin que le fuera permitido ya contestarlo como pretendió. En consecuencia, el Inferior tampoco se encontraba habilitado para dictar el auto revocando el consentido. Sinembargo la Cám. ha resuelto, puede decirse, constantemente que los jueces pueden revocar por contrario imperio sus providencias aun después de consentidas, habiendo nosotros impugnado siempre una teoría tan contraria al derecho procesal vigente; teoría que se pretende fundar en la Ley 2<sup>a</sup>, tit. 22, Partida 3<sup>a</sup>. Véase: Inst, tom. 7<sup>o</sup>, verb. *De oficio* 5; y tom. 6<sup>o</sup>, verb. *Revocar* 1. El sumario consagra la buena doctrina.

1—Art. 26 de la Ley de Justicia de Paz, vigente en 1893.

2<sup>b</sup>—Así lo tiene resuelto la jurisprudencia. Véase: verb. *Apelable*, 1.



3. **Auto inapelable**—La inapelabilidad de los autos del juicio ejecutivo no es aplicable al ejecutante.—Civ., tom. 8, pág. 266, Ser. 6<sup>a</sup>.

4. **Auto inapelable**—La inapelabilidad de un auto inapelable debe declararse de oficio por el superior.—Com., tom. 8, pág. 38, Ser. 3<sup>a</sup>.

5. **Auto inapelable**—Es inapelable el auto que manda practicar una compulsa.—Com., tom. 8, pág. 48, Ser. 3<sup>a</sup>.

4—En un juicio ejecutivo se trabó embargo en bienes municipales. El Intendente pidió reposición del embargo y dedujo apelación en subsidio. Dijo que de acuerdo con el art. 66 de la Ley Org. de la Mun., esos bienes no podían ser materia de embargo por cuanto eran los que producían la renta necesaria para llenar su vida administrativa. Se resolvió que la renta no era la cosa que producía esa renta, y que por consiguiente el embargo había sido bien trabado. Concedida la apelación, la Cám. declaró por mayoría, la inapelabilidad del auto, porque no se trata de incidente alguno que por su naturaleza deba pronunciarse el Trib., pues tal no puede considerarse la oposición del ejecutado para que se embargue el bien denunciado por el ejecutante, por cuanto tal diligencia es de las correspondientes al procedimiento ejecutivo, en cuyo caso conforme al art. 305 del Cód. de Proc., el auto no es apelable. La minoría dijo: «Habiéndose consentido el auto en la parte que concede el recurso de apelación, y bastando esta circunstancia para que la Cám. no se preocupe de si es ó no apelable la resolución sobre embargo, puesto que á este respecto hay conformidad de partes para que se resuelva esa cuestión por el superior; y considerando, sobre ella, que por la Ley Org. de la Mun.—art. 66—no pueden embargarse las rentas municipales, en las que se comprenden, según el art. anterior los arrendamientos de sus propiedades municipales; que si bien no se ha embargado la cosa que la produce, lo que no puede admitirse sin violar la ley, porque de esta suerte se hace desaparecer por completo la renta.»

5—Según el art. 226 del Cód. de Proc., solo son apelables las sentencias definitivas y las interlocutorias que decidan algún artículo ó traigan gravamen irreparable, en ninguno de cuyos casos se encuentra el auto que manda hacer la compulsa de libros. Debe entenderse que la denegación de la prueba pedida es apelable, mientras que su concesión es inapelable para la parte contraria.

**Auto inapelable**—Véase: *Inapelable*, 1, 2, 3, 4 y 5; *Embargo preventivo*, 28; *Desalojo*, 1 y 2.

1ª. **Auto notificado**—Que da por reconocida en rebel-  
día la firma de la letra, debe notificarse al firmante.  
—Com., tom. 8, pág. 56, Ser. 3ª.

1º. **Auto para sentencia**—Los escritos y peticiones pre-  
sentados antes de llamar autos, deben sustanciarse y re-  
solverse.—Civ., tom. 5, pág. 265, Ser. 6ª.

**Auto de prueba**—Véase: *De oficio*, 5; *Notificación*, 3 y 4.

**Auto de quiebra**—Véase: *Quiebra*, 2.

1º. **Auto revocable**—Los autos revocables le oficio, no  
causan estado.—Civ., tom. 7, pág. 144, Ser. 6ª.

**Auto revocatorio**—Véase: *Inapelable*, 6.

1. **Autor**—No constando el nombre del autor de un  
artículo calumnioso, no puede procederse contra el su-  
puesto por el querellante.—Crim., t. 8, p. 188, Ser. 3ª.

1ª—Citado por edictos el firmante de un pagaré para que recono-  
ciera su firma, no compareció, teniéndose por reconocido en su rebel-  
día. Se pidió entonces que se declarase en quiebra al deudor, á lo  
que no se hizo lugar, fundándose en que el auto, en que se daba por  
reconocida la firma de las letras, importa una rebeldía parcial por parte  
de los demandados. En este caso, es indispensable notificarles dicho  
auto y máxime tratándose de personas cuya citación ha tenido que ha-  
cerse por los periódicos por ignorarse sus domicilios. Sin llenar ese  
requisito, no es posible acceder á la declaratoria de quiebra. Esta  
misma resolución ha merecido la confirmación de la Cám., como en el  
espediente seguido ante el Juzgado del Dr. Cigorraga por el Banco  
Hip. de la Cap. con Micaela B. de Cabral.

1b—Art. 215 del Cód. de Proc.

1c—Al resolver esta cuestión se dijo que: «No causando estado el  
auto, y siendo por el contrario de aquellos que aún de oficio pueden  
ser modificados—ley 2ª, tit. 22, part. 3ª—careciendo en consecuencia  
de ulterioridad la circunstancia de encontrarse consentido, máxime  
cuando resulta plenamente evidenciado el error de hecho que lo  
informa, como se ha demostrado el escrito, corresponde revocar  
el auto.»





**Autoridad**—Véase: *Atentado á la autoridad*, 2, 3 y 4.

1<sup>a</sup>. **Autoridad local**—Manifestada en autos la voluntad de dar la posesión, y pedidas para que ella sea dada por la autoridad local, la concurrencia de la parte es innecesaria.—Civ., tom. 8, pág. 278, Ser. 6<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Aval**—Procede mandamiento si el avalista justifica haber verificado el pago de la letra protestada personalmente al deudor.—Com., tom. 7, pág. 507, Ser. 3<sup>a</sup>.

2. **Aval**—La falta del protesto de un pagaré comercial priva al tenedor de la acción contra el girante que firmó el aval.—Com., tom. 8, pág. 430, Ser. 3<sup>a</sup>.

**Avaluación**—Véase: *Peritos*, 6.

**Avalúo**—Véase: *Bienes hereditarios*, 24.

1<sup>a</sup>—Condenado el demandado á la entrega de un campo en Santa Fe dentro de tercer día, y vencido el término para darse la posesión, el representante del demandado pidió que se librase exhorto á las autoridades de la localidad para que se pusiese en posesión del campo al demandante. Este auto fué consentido por el actor, lo que importa aceptar por su parte que la posesión ordenada había de darse en la forma y por los medios propuestos por el demandado. Por otra parte, en la sentencia no se determinó que la posesión había de darse necesariamente por medios directos, pues atenta la distancia á que se encontraban las tierras y la diversa vecindad de las partes, podrían presentarse dificultades para el cumplimiento oportuno de la obligación impuesta al demandado, y es precisamente para obviarlas que se indicó un temperamento apropiado, procurando al mismo tiempo dejar constancia de su disposición de cumplir la mencionada sentencia.

1<sup>b</sup>—Según resultaba de la letra, se trataba de un aval absoluto á mérito del que se pagó la letra. Desde luego, habiendo sido ella personalmente protestada, es de aplicarse al caso lo dispuesto en los arts. 443, inc. 2<sup>a</sup> del Cód. de Proc.; y 645 del Cód. de Com.

2—Arts. 676, 679, 682 y 683 del Cód. de Com. Se trataba de un aval absoluto.



## 1. Banco Nacional—Debe declararse procedente la es-

1.—Cuando se inició el juicio, el Banco Nacional que estaba legalmente habilitado para exigir el pago íntegro de la obligación por la vía ejecutiva, dejó de estarlo en la época en que se pidió se citara de remate al deudor, pues en esa fecha ya había sido promulgada la ley de liquidación del Banco, según la cual sus derechos de acreedor no podían ejercitarse sino con las limitaciones que establecía—art. 42 de la Ley de liquidación.—Por ella, todas las ejecuciones pendientes que no hubieran terminado por sentencia ejecutoriada, quedaban *ipso facto* sin efecto ulterior, desde que esa ejecución no estaba excluida de las moratorias concedidas á todos los deudores del establecimiento. En consecuencia, el Banco no podía, en Marzo de 1892 cuando se dictó la Ley, continuar la ejecución pendiente: pues, como se ha dicho, en esa fecha, su derecho quedó limitado á exigir el afianzamiento del crédito, y en manera alguna, el pago íntegro del capital é intereses devengados. Se alega, sinembargo, que el Banco recupera la plenitud de sus derechos de acreedor por no acomodarse el deudor al cumplimiento de las condiciones establecidas para ampararse de las moratorias. Esto no es exacto, pues la citada ley no impone condición alguna á los deudores para acojerse á los beneficios de las moratorias que se les acuerdan. El art. 42 solo dice que: «el Banco *podrá exigir* de sus deudores el afianzamiento de sus créditos, pero *no podrá exigir* el pago de éstos con amortizaciones mayores de la que á continuación espresa.» Como se vé, el afianzamiento del crédito no es una obligación impuesta á los deudores, como condición *sine qua non* del beneficio que les concede, sino una *facultad* acordada al Banco, de la que puede ó no hacer uso y



cepción de espera á los deudores del Banco Nacional si la sentencia recae después de promulgada la ley de liquidación.—Civ., tom. 7, pág. 275, Ser. 5<sup>a</sup>.

**Banda**—Véase: *Homicidio*, 5.

1. **Bautismo**—El bautismo del hijo natural, como le-

que cualquiera que fuera su resultado no lo autorizaría para exigir el pago con amortizaciones mayores á las establecidas. Concretando, al Banco Nacional, debe limitar sus exigencias al afianzamiento del crédito, lo que se obtiene con la traba del embargo, y que en lo que se relaciona con el pago, debe ajustarse á los términos explícitos del art. 42 de la ley recordada.

1.—Según las partidas de matrimonio y bautismo, los padres bautizaron al hijo como legítimo pocos días después de contraer matrimonio, resultando que el nacimiento había tenido lugar antes de celebrarse el matrimonio. Ocurrido el fallecimiento del padre, se inició su juicio testamentario á nombre de su esposa y de sus hijos, produciéndose una información para acreditar, entre otras cosas, las relaciones carnales mantenida entre los esposos antes de casarse, siendo ambos de estado solteros, y de las que resultó el hijo bautizado después como legítimo. Con estos antecedentes, el Inferior declaró que dicho hijo era hijo legítimo de los esposos, legitimado por el subsiguiente matrimonio de los mismos. De esta resolución se interpuso el recurso de apelación por el Ministerio Fiscal, por considerar que no se había llenado los requisitos establecidos por el Cód. Civ.—arts. 317 y 318.—Se consideró, por la Cám., equivocada esta oposición. La ley civil, tratándose de la legitimación, dispone, que para que el reconocimiento tenga efecto, los padres del hijo natural, han de reconocerlo antes de la celebración del matrimonio, ó al inscribirse éste en los registros parroquiales, ó dos meses después de celebrado—art. 317.—Se agrega, que este reconocimiento deberá hacerse, ó en la partida de nacimiento, ó ante el juez del lugar, levantándose el acta correspondiente, ó por escritura pública, ó en presencia del párroco y testigos del matrimonio, si se hiciese al contraerse éste—art. 318.—Como se ve, la ley prescribe diversos modos de verificar la legitimación, y entre ellos, el de la partida de nacimiento. Ahora bien, si no puede negarse que la partida de bautismo es un instrumento público, debidamente autorizado por el párroco como tal instrumento público, prueba concluyentemente la verdad del acto que espresa. Si por otra parte, no existe tampoco cuestión alguna sobre su autenticidad, ella es bastante para



gítimo después del matrimonio, importa el reconocimiento, que la ley exige en forma expresa, para la legitimación.—Civ., tom. 5, pág. 121, Ser. 5<sup>a</sup>.

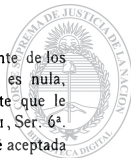
1<sup>a</sup>. **Beneficiario**—La falta de presentación de herederos, basta para que el importe del seguro sobre la vida del causante, ingrese á la masa en beneficio de los acreedores de la sucesión concursada.—Civ., t. 5, p. 172, S. 6<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Beneficios**—La renuncia á la sociedad que tenga por probar el reconocimiento y legitimación del hijo conforme á lo dispuesto por el Cód. Civ. en el art. 318—aunque esa partida no aparezca firmada por los padres. Las formalidades del reconocimiento no están libradas, indudablemente, al capricho ni á los actos de dudosa significación, pero cuando resulta plenamente acreditado en uno de los modos determinados por la ley, y cuando no se pone en duda la autenticidad de ese acto, y cuando éste aparece revestida de todas las formalidades exigidas por derecho, no pueden ni deben rechazarse, bajo la única consideración de no estar suscripta la partida por los padres, sin tenerse presente que esta formalidad no aparece haberse exigido, y que hablan otros antecedentes que concurrían á demostrar la verdad del reconocimiento, tales como el matrimonio celebrado pocos días antes por los padres del menor, y las pruebas de testigos que se produjo conforme al interrogatorio.

1<sup>a</sup>—La póliza de seguro no estaba otorgada á nombre de persona determinada, sino que la compañía se obligaba en ella á pagar su importe, dentro de los 90 días de acreditado el fallecimiento del asegurado, á los herederos legales de éste, ó á sus albaceas, administradores ó causahabientes. Estos términos del contrato demuestran que el seguro fué constituido, no á favor de las personas que tuviesen derechos hereditarios con respecto al asegurado, con entera independencia de su sucesión actual, sino á favor de los herederos efectivos, puesto que los beneficiarios son los herederos legales, los albaceas, los administradores, los causahabientes de la persona asegurada. Por consiguiente, siendo el síndico del concurso formado á una sucesión, el administrador de los bienes perteneciente á la misma—art. 727 del Cód. de Proc.—el asegurador está obligado á pagarle el importe del seguro, aparte de que también representa á la masa de acreedores del causante que son sus verdaderos causahabientes.

1<sup>b</sup>—Arts. 1739 y 1741 del Cód. Civ.





objeto aprovechar el renunciante exclusivamente de los beneficios que se tuvieron en vista al formarla, es nula, y en consecuencia, debe al otro socio la parte que le corresponde en las utilidades. — Civ., t. 3, p. 341, Ser. 6<sup>a</sup>.

1<sup>a</sup>. **Beneficio del inventario**—Si la herencia fué aceptada bajo beneficio de inventario, la escepción de nulidad por haberse intimado el pago al mandatario, debe ser rechazada.— Civ., tom. 5, pág. 223, Ser. 6<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Bienes**—No puede darse por existente el consenti-

1<sup>a</sup>—En una ejecución seguida contra una testamentaria, se opuso la escepción de nulidad por cuanto el mandamiento no se había diligenciado con los herederos en persona sino contra sus respectivos apoderados. No se hizo lugar á la nulidad, porque uno de ellos tenía poder general para intervenir en todos los asuntos judiciales y el otro apoderado tenía facultad para intervenir en los incidentes de la sucesión. Por consiguiente, no era indispensable que la intimación se entendiera directamente con sus mandantes, bastando al objeto de la ley, que se haya hecho á los referidos apoderados, quienes, tenían facultad expresa para intervenir en los juicios ó incidentes que se promoviesen.—art. 1884 del Cód. Civ.—Se tuvo además en cuenta, que la herencia había sido aceptada bajo beneficio de inventario, encontrándose los herederos beneficiarios, representados por mandatarios especiales, siendo en consecuencia arreglado á derecho que las gestiones de los acreedores, para el cobro de sus créditos, se entiendan con los representantes de los herederos del deudor, por abarcar sus facultades todo lo relativo á la liquidación de la testamentaria—arts. 17, Cód. de Proc., y 1905, Cód. Civ.

1<sup>b</sup>—Uno de los interesados en una sucesión, pidió la venta de todos los bienes proponiendo martillero. El juez ordenó que la manifestación se hiciese dentro de 24 horas, bajo apercibimiento de hacerse el nombramiento de oficio. Quien debía hacer la manifestación, presentó escrito, diciendo que no estaba conforme con que se vendieran todos los bienes, y que no se consideraba, por otra parte, obligado á hacer dicha manifestación por cuanto había otra diligencia pendiente y de carácter previo. En presencia de esta esposición, es evidente que la intimación no podía hacerse efectiva mientras no se sustanciase la oposición formulada, de si se vendían ó no, todos los bienes.

miento para nombrar martillero, en tanto no exista acuerdo sobre los bienes que deban venderse. —Civ., tom. 9, pág. 254, Ser. 6ª.

2ª. **Bienes**—El juez de la ejecución, puede ordenar el remate, en esta capital, de bienes situados fuera de su jurisdicción. —Civ., tom. 10, pág. 369, Ser. 6ª.

**Bienes**—Véase: *Inhibición*, 4; *Cesión de bienes*, 8; *Concurso*, 11; *Contrato de arrendamiento*, 9; *Mandato*, 8; *Poseción*, 7; *Procurador*, 1; *Contradocumento*, 1; *Escritura pública*, 4 y 5; *Embargo*, 7; *Alimentos*, 2 y 13; *Administración*, 6; *Administrador*, 1.

**Bien afectado**—Véase: *Gravamen hipotecario*, 1; *Personería*, núm. 6.

**Bienes del ausente**—Véase: *Testamentaria*, 1.

**Bienes cedidos**—Véase: *Cesión de bienes*, 1, 2, 3, 5 y 7; *Boticario*, 1.

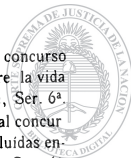
**Bienes comunes**—Véase: *Condominio*, 1; *Herederos*, 6.

1. **Bienes del concurso**—El concursado está obligado a presentar al síndico los títulos de sus propiedades, dándole todos los antecedentes que sean necesarios para hacer ingresar al concurso los bienes omitidos.—Civ., tom. 6, página 72, Ser. 6ª.

2ª. **Bienes del concurso**—No siendo bienes realizables

2ª. Se trataba de la enajenación de bienes situados en el Chaco. Se pretendió que el remate debía verificarse en el lugar de la situación de los bienes. Se resolvió no hacer lugar, porque la Cap. Federal es el mercado principal de la Rep. para transacciones sobre tierras, siendo además el asiento y jurisdicción del juzgado de la ejecución: todo sin perjuicio de dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 513 del Cód. de Proc.

2ª—Recién se habían pagado 3 ó 4 cuotas, y había que pagar otras durante 15 años. El concurso no reportaría ventaja alguna en pagar esas cuotas, para recibir al finalizar el seguro, más ó menos la misma suma. Por otra parte, el seguro es un derecho en expectativa del

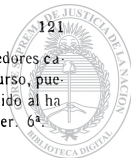


los derechos en expectativa, no corresponden al concurso las cuotas pagadas por contratos de seguro sobre la vida que el deudor haya tomado.—Civ., t. 6, p. 72, Ser. 6<sup>a</sup>.

3. **Bienes del concurso**— Las entradas, que al concursado produzca su profesión, no pueden ser incluidas entre los bienes del concurso.—Civ., t. 6, pág. 72, Ser. 6<sup>a</sup>.

que debe gozar el asegurado, como de los mismos beneficios de los bienes que adquiera en lo futuro.

3—La cesión de bienes comprende todos aquellos que se poseen en la época en que esta se hace; y con respecto á los que se adquieren en lo futuro hay reglas determinadas á seguir. El Cód. de Com., al tratar de las quiebras, cuya legislación es más severa que la ley civil, no va hasta privar al fallido del producto de su trabajo; porque supone muy juiciosamente, que esa persona tiene necesidades en la vida, que es necesario llenar. Si lo que gana con su trabajo tuviera que entregarlo á sus acreedores ¿con qué mantendría su familia? Por otra parte, si un deudor tuviera que trabajar para el solo provecho de sus acreedores, bien pronto se abandonaría, desde que su trabajo no le dejaría medios de subsistencia. Si á un concursado le conviene trabajar para adquirir bienes, á sus acreedores les conviene también que los adquiera, porque así podría pagarles. Estas son las razones que ha tenido en vista la ley, para dejar al fallido el producto de su trabajo personal: y si la ley comercial, tan exigente, procede así ¿con cuánta mayor razón no lo hará la ley civil, que conceda al deudor que hace, cesión de bienes ciertas franquicias? El art. 776 del Cód. de Proc. concede al deudor que hace cesión de bienes el goce del beneficio de competencia, en los términos y bajo las condiciones establecidas en el título «Del pago» del Cód. Civ. El inc. 6º del art. 850 del Cód. Civ., concede este beneficio, al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes y es perseguido en los que después ha adquirido. Según el art. 779 del Cód. Civ., el beneficio de competencia es el que se concede á ciertos deudores—Inc. 6º, art. 800—para no obligarles á pagar más de lo que buenamente pueden, dejándoles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia según su clase y circunstancia, y con cargo de devolución cuando mejore de fortuna. El concursado se encuentra en este caso, y solo que adquiera bienes, ó que su modo de vivir fuera lujoso con arreglo á su clase, estaría obligados á compartirlos con sus acreedores.



4. **Bienes del concurso**—Aun cuando los acreedores carecen de personería para intervenir en el concurso, pueden denunciar los bienes que el fallido haya omitido al hacer la presentación.—Civ., tom. 6, pág. 72, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Bienes del concurso**—Véase: *Honorarios*, 8.

**Bienes depositados**—Véase: *Tercería*, 3.

1<sup>a</sup>. **Bienes del deudor**—La existencia de créditos privilegiados sobre bienes del deudor, no basta para exigir la formación de concurso civil; sólo puede fundarse tal medida, en créditos quirografarios.—Civ., t. 7, p. 184, S. 6<sup>a</sup>.

**Bienes divididos**—Véase: *Sociedad*, 1; *Compraventa*, 2; *Comprador*, 14; *Condominio*, 1; *Heredero*, 7.

**Bienes ejecutados**—Véase: *Apoderado*, 3; *Alquiler*, 23.

1<sup>b</sup>. **Bienes embargados**—No puede citarse de remate al deudor si no existen bienes embargados.—Com., tom. 7, página 325, Ser. 3<sup>a</sup>.

2. **Bienes embargados**—Denunciados como del ejecu-

4—Cuando se presentan en el carácter de meros denunciantes, tienen derecho á ser oídos, desde que lo hacen para no ser perjudicados en sus intereses.

1<sup>a</sup>—El art. 719 del Cód. de Proc., determina cuáles son los requisitos exigidos para que se declare el concurso civil. La ejecución ha de proceder de créditos quirografarios, y han de estar embargados todos á la mayor parte de los bienes del que se ha de concursar, á consecuencia de ejecuciones iniciadas en virtud de créditos quirografarios. La ley no habla de créditos hipotecarios, por hallarse sujetos á privilegios especiales.

1<sup>b</sup>—De acuerdo con algunos casos resueltos por esta Cám. Véase: *Ins.*, tom. 7º, verb. *Bienes embargados*, 3 y 9; y *Citación de remate*, 1 y 2. El sumario consagra la antigua jurisprudencia, la que ha sido modificada con toda razón. Cuando el deudor pretende que se le cite de remate sin haber bienes embargados es de aplicarse la doctrina del sumario. El acreedor puede renunciar á ese beneficio. Véase: *Inst.*, tom. 6º, verb. *Bienes embargados*, 3 y 7; y *Citación de remate*, 2.

2—No hay disposición legal que lo prohiba, siempre que esté en posesión de ellos el deudor.—Art. 478 del Cód. de Proc.



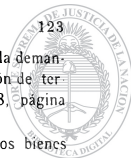
tado son embargables, sin que obste la circunstancia de que el embargo pueda dar origen á un juicio de preferencia.—Com., tom. 8, pág. 30, Ser. 3ª.

3. **Bienes embargados** — Solo pueden embargarse los que estén en posesión del deudor. —Com., tom. 8, página 101, Ser. 3ª.

4. **Bienes embargados** — La escritura pública de cesión

3 — Así lo dispone el art. 478 del Cód. de Proc.

4 — Notificado de la demanda y llamado á absolver posiciones, el deudor extendió, á favor del tercerista, escritura de enajenación de los bienes embargados, consistentes en créditos á su favor, dándolos en pago de deudas que se decía tener con el tercerista. Este era tenedor de libros del deudor que le enajenaba los bienes embargados, y como tal tenedor de libros, tenía que conocer el estado de insolvencia del enajenante. El enajenante, y á la vez el deudor ejecutado, confesó que esa enajenación la hizo para sustraer del embargo sus bienes, y después de notificado de la demanda. Nos encontramos, pues, con un caso de dolo manifiesto, en que un deudor ejecutado, pendiente el juicio, enajena sus bienes en fraude del acreedor ejecutante. En tal enajenación es indiferente que haya ó no, el tercerista, tenido créditos pendientes con el deudor. Se encuentran en el caso, reunidas las condiciones previstas por el art. 932 del Cód. Civ., para que el dolo sea causa de nulidad del acto jurídico acreditado por escritura pública. Ha sido la causa determinante del acto, porque el ejecutado confesó que lo hizo para escapar al embargo del ejecutante. Ha ocasionado un daño importante, porque esa enajenación dejó completamente insolvente al deudor ejecutado. Cumplidas estas condiciones, es indiferente que haya habido ó no dolo, por parte del tercerista, porque su inocencia solo podría invocarse si tratase de anular el contrato, la parte con quien trató. En el caso es aplicable el art. 935, que lo hace igualmente anulable el dolo proveniente de un tercero: además, concurrían en el caso las condiciones previstas en el art. 962 del Cód. Civ. Porque el deudor quedó insolvente; el acreedor ejecutante, perjudicado por la enajenación de los créditos embargados, y su crédito era de fecha anterior al acto de la enajenación del deudor. Por manera que, sea que se juzgue la nulidad del documento como causada por dolo, sea que se considere como acto fraudulento, se concluye por la nulidad, fundada en lo espuesto y en los arts. 737 y 1044 del Cód. Civ., como en



en pago, hecha después de la presentación de la demanda, carece de valor legal para fundar una acción de tercera sobre los bienes cedidos.—Com., tom. 8, página 129, Ser. 3ª.

5. **Bienes embargados**—No siendo bastantes los bienes conocidos y embargados preventivamente al deudor para garantizar su crédito, procede la inhibición.—Com., tom. 8, pág. 223, Ser. 3ª.

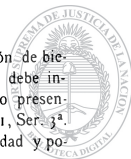
6. **Bienes embargados**—No habiendo bienes embargados, no procede la citación del remate al ejecutado.—Com., tom. 8, pág. 66, Ser. 3ª.

la doctrina establecida por la Cam. Civ. en el caso del concurso de Carlos Van Cauvelaer con León Walls. Esto lo dijo la mayoría de la Cám.: la minoría llegó á igual conclusión, pero dando otros fundamentos legales: «en cuanto á los fundamentos que se aducen en la terminación del voto precedente y que hacen referencia á la revocación de los actos jurídicos del deudor en fraude de sus acreedores es procedente, pues la calidad de ser el cesionario dependiente, tenedor de libros del cedente, hace presumir su complicidad en el fraude, según la disposición del art. 969 del Cód. Civ., ya que tal circunstancia debe establecerse como requisito indispensable por tratarse de un acto ó título oneroso—art. 968.—La razón que tenía para no aceptar la primera parte del voto, es bien sencilla puesto que la nulidad de los actos producidos por dolo no afecta á terceros, según la reglamentación que establecen los arts. 931 y siguientes del Cód. citado. Se trata de simples actos, llevados á cabo por medio de la estafa, y la ley consagra su nulidad entre las mismas partes, dadas las circunstancias que determina por la falta de consentimiento perfecto, ó como dice el codificador, porque si las partes han consentido, han sido engañadas sobre la causa principal del acto; en una palabra, cuando el dolo da causa al acto, la acción que de aquí se deriva, se ejercita tan solo entre las partes por ministerio de la ley. Nada tiene, pues, que hacer en la cuestión *sub-judice*, el cap. 20, que trata de los hechos producidos por dolo.»

5—El art. 461 del Cód. de Proc. consagra el derecho de solicitar la inhibición cuando no se le conocen bienes al deudor.

6—Véase el núm. 1.





7. **Bienes embargados**—El dueño, en posesión de bienes embargados por cuenta de un tercero, no debe interponer tercería; le basta oponerse al embargo presentando su título de dominio.—Com., t. 8, p. 101, Ser. 3<sup>a</sup>.

8. **Bienes embargados**—Justificada la propiedad y posesión de los bienes embargados, debe declararse procedente la tercería de dominio.—Com., t. 8, p. 163, S. 3<sup>a</sup>.

9. **Bienes embargados**—La comisión del martillero nombrado para el remate de los bienes embargados, es á cargo del ejecutante si el remate se suspende.—Com., tom. 8, pág. 169, Ser. 3<sup>a</sup>.

10. **Bienes embargados**—Adolece de nulidad la resolución que ordena á un tercero la entrega de bienes que niega tener en su poder, en tanto no se deduzca contra

7—La simple oposición al embargo, hecha por el poseedor, basta para impedirlo ó levantarlo, acompañándose á la vez, por quien se opone el título en que se funda, según está establecido por la Cám. de lo Civ., Ser. 1<sup>a</sup>, tom. 7<sup>o</sup>, págs. 106 y 453; y tom. 8<sup>o</sup>, pág. 510, y tom. 3<sup>o</sup>; é Inst., tom. 6<sup>o</sup>, verb. *Bienes embargados*, 8.

8—Argumentos del art. 478 del Cód. de Proc.

9—El ejecutante solicitó la venta y el nombramiento del martillero. La comisión es á su cargo, por cuanto la doctrina conforme á las disposiciones legales que rijen el mandato, ha establecido que en tales casos dicha comisión es á cargo del ejecutante, sin perjuicio de establecer después quién es el deudor de éste para ir contra el ejecutado, respecto del reembolso de dicha comisión si ello fuese procedente según los casos. Aquí el remate se suspendió en virtud de un arreglo celebrado entre ejecutante y ejecutado.

10—Dictada sentencia de remate, el mismo ejecutante se presentó pidiendo que se intimara al tercero, el depósito en el Banco de la Nación, de una cantidad de acciones suficientes á cubrir el crédito adeudado, que se decían de propiedad del ejecutado, á lo cual se opuso éste, sosteniendo que él no adeudaba suma alguna al ejecutado, en virtud de las consideraciones que se adujo. En tal situación, y no tratándose de bienes existentes en poder del deudor, corresponde sustanciar la oposición formulada por el interesado tercero en el juicio, observando los procedimientos análogos prescriptos para las tercerías.

él acción en forma.—Civ., tom. 7, pág. 318, Ser. 5ª.

11. **Bienes embargados**—Si el juicio en que se nombró depositario de los bienes embargados preventivamente, se resuelve sin especial condenación en costas, los gastos y honorarios, de aquél, son á cargo del que solicitó el embargo.—Civ., tom. 7, pág. 135, Ser. 5ª.

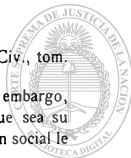
12. **Bienes embargados**—El embargo de bienes en poder de un tercero que niega su existencia, debe ser tramitado y resuelto como tercería.—Civ., t. 7, p. 318, S. 5ª.

13. **Bienes embargados**—El embargo decretado en un juicio entre los socios, no impide que terceros puedan

11—El derecho del depositario, al cobro de la comisión que le corresponde, surge de la constitución del depósito de los bienes embargados en juicio. Su acción no la dedujo contra el demandado exclusivamente, pues se limitó á presentar su cuenta para que le fuera abonada por quien correspondiera. En el estado en que se encontraba el juicio cuando esa cuenta fué presentada, no era posible determinar cuál de los dos litigantes era el verdadero responsable por los gastos del depósito. Esta responsabilidad recién viene á quedar legalmente establecida, cuando el juez de la causa pronuncia su sentencia y declara á quién corresponde el pago de las costas causadas, entre las que están comprendidos los gastos del depósito y comisión del depositario. Esa sentencia se pronunció, declarándose que las costas debían satisfacerse en el orden causadas. Ahora bien, dada esa declaración, ¿puede responsabilizársele al demandado por los gastos provenientes del depósito? En manera alguna, pues el embargo, y por consiguiente el depósito, fué trabado á solicitud del actor como medida de garantía preventiva, de unos daños y perjuicios demandados, y en esta parte de la demanda fué absuelto el demandado. Luego, pues, no sería justo hacer cargar á éste con gastos que él no ha causado, más aun, que fueron originados por su contrario en previsión de un derecho que en definitiva le fué desconocido.

12—Es una controversia ordinaria que no tiene tramitación especial, siéndole aplicable la disposición del art. 66 del Cód. de Proc.

13—Las diferencias suscitadas entre socios no pueden afectar las medidas de carácter meramente conservatorias á que tienen derecho los terceros.



exigir igual medida sobre los mismos bienes.—Civ., tom. 6, pág. 71, Ser. 6ª.

14. **Bienes embargados**—La ley exceptúa del embargo, determinados bienes del deudor, cualquiera que sea su valor, y según las necesidades que su posición social le imponga.—Civ., tom. 6, pág. 72, Ser. 6ª.

15. **Bienes embargados**—Debe levantarse la inhibición, si el deudor presenta bienes á embargo.—Civ., tom. 8, pág. 283, Ser. 6ª

16. **Bienes embargados**—Al tercerista corresponde justificar su derecho esclusivo á los bienes embargados, sin que pueda en ese juicio discutir el derecho del embargante.—Civ., tom. 8, pág. 89, Ser. 6ª.

17. **Bienes embargados**—Siempre que el objeto de la

14—Los acreedores denunciante incluyeron todos los muebles, aun los exceptuados por la ley. El concursado no incluyó en la cesión de bienes los muebles de la casa habitación, solo podía obligársele á que entregue aquellos que por la ley no están exceptuados del embargo, pero los que no pueden embargársele solo se incluyen voluntariamente. El art. 480 del Cód. de Proc. dice, que no se trabará nunca embargo en el lecho cotidiano del deudor, de su mujer é hijos. No se hace distinción, si los muebles son de escaso valor ó lujosos, y donde le ley no distingue no es permitido al juez hacerlo. La frase «no se trabará *nunca* embargo en el lecho cotidiano», indica que está exceptuado aunque sea de gran valor. El empleo de la palabra *nunca* no ha podido tener otro sentido que escluir del embargo el lecho, cualquiera que fuese su valor. El art. citado escluye de la misma manera los muebles de indispensable uso, y las circunstancias de ser de valor en nada influye respecto á su aplicación.

15—Se comprobó que el bien ofrecido á embargo estaba inscripto en el Registro de la Propiedad, y que no reconocía gravamen alguno. En cuanto á su valor, no se hizo cuestión de si era bastante ó no.—arts. 467 y 474 del Cód. de Proc.

16—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

17—La cuestión se hizo con el objeto de impedir la venta de un inmueble en un juicio ejecutivo. Pero la demanda se presentó ante el juez de turno haciéndose á un lado al juez de la ejecución. Se

acción deducida pretenda el dominio sobre el bien embargado, importa tercería y su conocimiento corresponde al juez de la ejecución.—Civ., tom. 8, pág. 247, Ser. 6ª

18. **Bienes embargados**—Justificada la propiedad y posesión á título de dominio de los bienes embargados, debe declararse procedente la tercería.—Civ., tom. 7, página 350, Ser. 6ª.

19. **Bienes embargados**—No procede embargo contra bienes inmuebles que se reconoce haber sido transferidos á terceros, cualquiera que sea el privilegio invocado.—Civ., tom. 9, pág. 105, Ser. 6ª.

**Bienes embargados** —Véase: *Daños y perjuicios*, 33 y 34; *Hipoteca*, núm. 1.

**Bienes entregados** —Véase: *Daños y perjuicios*, 29

1. **Bienes de la esposa** —Debe levantarse el embargo de los alquileres, decretado por deudas del esposo, si se justifica que los bienes son propiedad exclusiva de la esposa. —Civ., tom. 1, pág. 340, Ser. 6ª.

ordenó la remisión de los autos á este último juez, porque el actor aclarando su escrito de demanda dijo, que si no había usado la palabra tercería era una simple omisión, pero que esa había sido su mente, y que se tuviera presente que deducía tercería. En presencia de esta manifestación no había cuestión posible.

19—El privilegio no importa un derecho real que afecte al bien que se encuentra en poder de un tercero, porque el privilegio no cambia la naturaleza de la relación de derecho personal que constituye el crédito y por lo tanto, solo puede ejercitarse mientras el bien pertenezca al deudor

1—Se entiende que siempre que exista separación de bienes, porque mientras tal estado no se produzca, los alquileres son gananciales de la sociedad—art. 1272, inc. 3º del Cód. Civ.—y por consiguiente, responden de las deudas del marido contraídas durante la sociedad—art. 1275, inc. 5º.—Si la sociedad conyugal se ha disuelto por separación judicial de bienes—art. 1291—cada cónyuge recibe lo suyo propio—art. 1299—sin que ni uno ni otro tenga parte en lo que cualquier de ellos gana después de la separación—art. 1301.



2. **Bienes de la esposa** --Adquiridos por ella durante la sociedad conyugal, responde de las deudas del esposo.—Civ., tom. 1, pág. 318, Ser. 6ª.

3. **Bienes de la esposa**—En tanto no exista separación de bienes, los frutos de los bienes propios de la esposa pueden ser embargados por deudas del marido—Civ., tom. 9, pág. 21, Ser. 6ª.

4. **Bienes de la esposa**—El esposo que ha consentido las enunciaciones de la escritura de compra de un bien durante el matrimonio á nombre propio de la esposa, no puede exigir su inclusión entre los gananciales, en caso de separación de bienes.—Civ., t. 5, p. 104, Ser. 5ª.

5. **Bienes de la esposa**—Debe declararse la nulidad de

---

2—Arts. 1272, aparte, 1º; y 1275, inc. 3º del Cód. Civ.

3—De acuerdo con lo resuelto en el núm. 1.

4—Arts. 994, 996, 1246 y 1266 del Cód. Civ.

5—El marido pidió la declaratoria de insania de su esposa. Los médicos iniciaron ejecución, entendiendo en el juicio el esposo, y embargaron bienes de la mujer. Se dijo de nulidad de la ejecución, ya si se resolvió fundándose la Cám. en: «Que como se reconoce en el propio escrito de iniciación del juicio, no está determinada quién sea en definitiva la persona responsable por los servicios profesionales prestados por el actor en el juicio de insania que los motivó. Que se reconoce igualmente que tanto puede serlo uno ú otro de los cónyuges, pues si bien los servicios fueron prestados á consecuencia de la denuncia que el marido hizo de la demencia de su esposa, ésta resultó beneficiada con ellos, siendo, en consecuencia, una cuestión á debatirse entre los esposos. Que dados estos antecedentes, es de toda evidencia que existe verdadera oposición de intereses entre los cónyuges en lo que á este asunto se refiere, y desde que la acción se dirige contra la esposa exclusivamente, es con ella que ha debido sustanciarse el proceso, con absoluta prescindencia del marido, pues la representación legal que ejerce, quedaba de hecho y de derecho suspendida en virtud de la mencionada oposición de intereses—argumentos de los arts. 397 y 1908, Cód. Civ.—Es esta, por otra parte, la doctrina que surge del art. 57 de la ley Mat., pues tratándose de actos relacionados con intere-



la ejecución seguida contra bienes de la esposa sin su intervención, si no existe declaración especial que la obligue al pago.—Civ., tom. 7, pág. 160, Ser. 6ª.

6. **Bienes de la esposa**—Si no existe oposición de terceros, la esposa no está obligada á justificar la propiedad de los bienes no incluidos en la testamentaria del esposo.—Civ., tom. 5, pág. 166, Ser. 5ª.

1. **Bienes gananciales**—Los bienes muebles y cosas fungibles aportados al matrimonio, se conceptúan gananciales, en caso de disolución de la sociedad conyugal.—Civ., tom. 5, pág. 104, Ser. 5ª.

2. **Bienes gananciales** --Debe declararse nula la venta, de bienes de la sociedad conyugal, verificada por el marido, después del fallecimiento de la esposa sin autorización judicial, si existían menores interesados.—Civ., tom. 2, pág. 184, Ser. 6ª.

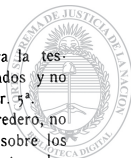
**Bienes gananciales**—Véase: *Acto anulable*, 1.

ses encontrados, sería absurdo que la ley exigiera á la mujer una previa autorización del marido para estar en juicio y defender personalmente sus intereses, en pugna con los de él. Que habiéndose omitido en el juicio la audiencia de la demandada, pues la dada al marido es ilegal, se ha incurrido en un vicio de absoluta nulidad.—Leyes 12 y 15, tít. 22, Part. 3ª.»

6—La esposa sobreviviente dijo, que ciertos bienes eran suyos propios, pues constituían su dote. El Juez de oficio ordenó la justificación de ese extremo. La Cám. revocó el auto diciendo, que no habiendo oposición de terceros y atento lo dispuesto en los arts. 1246 y 1266 del Cód. Civ. la justificación era innecesaria.

1—Así lo establece el art. 1224 del Cód. Civ.

2—Por el fallecimiento del cónyuge se disuelve la sociedad conyugal existente entre los esposos—art. 1291 del Cód. Civ.—los hijos suceden en los derechos de la madre, quedando desde luego los bienes en condominio con el cónyuge sobreviviente—art. 1315.—La venta hecha por uno de los condóminos es nula, según terminante disposición del art. 1331.—Siendo la nulidad manifiesta—art. 1038, *ibid.*



1. **Bienes hereditarios**—La jurisdicción para la testamentaria, debe fijarse por los bienes denunciados y no por los realizados.—Civ., tom. 6, pág. 377, Ser. 5<sup>a</sup>.

2. **Bienes hereditarios**—El cesionario del heredero, no puede desconocer los gravámenes que pesen sobre los bienes hereditarios, entre los cuales se encuentran las costas causídicas.—Civ., tom. 6, pág. 344, Ser. 5<sup>a</sup>.

3. **Bienes hereditarios**—La testamentaria del fallecido

1—Parte de los bienes denunciados como de la sucesión había sido realizada, mientras que los demás no. La no realización de algunos de ellos hace que sea desconocido el monto total del caudal testamentario. Mientras no se conozca con precisión que la manifestación de bienes no es exacta, debe tenérsela como verdadera.

2—Arts. 3266 y 3270 del Cód. Civ.

3—Los jueces argentinos son incompetentes para conocer en una testamentaria en que el causante ha fallecido fuera de la República, sin tener en ella su último domicilio. La pluralidad de sucesiones está proscrita por nuestra legislación. La herencia de una persona es una universalidad, es un todo, que no puede estar sometido á tantos jueces como bienes raíces ó muebles haya en los distintos países en donde el causante ha podido vivir y adquirir bienes. Esta es la sana doctrina y la que sostiene nuestro codificador el Dr. Vélez Sarsfield. Es de acuerdo con ella que la Cám., resolvió el caso de la testamentaria de José Raffeto, fundándose en la vista fiscal del Dr. Cortés. Sin embargo, posteriormente la misma Cám. ha resuelto lo contrario en la testamentaria de Claudio Eugenio Couturier, Juzgado, del Dr. Centeno, como asimismo en varios otros casos. Véase. Inst. tom. 7º, verb. *Bienes hereditarios*, 10. Pero el principio de la unidad de las sucesiones reconoce como escepción lo que en el Cód. Civ. se dispone relativamente á la transmisión de los bienes raíces que forman parte del territorio del Estado, los que solo pueden transferirse y adquirirse de conformidad con las leyes de la Rep.—art. 10 y nota al 3283 del mismo Cód.—En su consecuencia, si el autor de la sucesión hubiese fallecido, y sus herederos legítimos ascendientes ó descendientes, como en el caso del sumario, estuviesen fuera de la Rep. ó fuera de la provincia, donde se hallan los bienes, para tomar la posesión de la herencia, deben pedirla al juez del territorio, acreditando la muerte del autor de la sucesión y sus títulos á la herencia—art. 3411—



en el extranjero, debe iniciarse ante el juez que tenga jurisdicción territorial sobre los bienes cuya posesión se pide.—Civ., tom. 5, pág. 177, Ser. 5<sup>a</sup>.

4. **Bienes hereditarios**—La testamentaria de los fallecidos en el extranjero, debe iniciarse en la jurisdicción donde están situados los bienes.—Civ., t. 8, p. 284, S. 5<sup>a</sup>.

5. **Bienes hereditarios**—La acción de nulidad de un remate de bienes testamentarios, debe tramitarse como juicio ordinario.—Civ., tom. 8, pág. 336, Ser. 5<sup>a</sup>.

6. **Bienes hereditarios**—No pueden tasarse como bie-

---

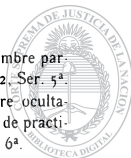
así como los instituidos en un testamento sin vicio alguno—art. 3413.—Esto no obstante, habiendo fallecido la consorte en su domicilio fuera de la Rep., y tratando de justificar sus herederos su derecho á la herencia para tomar posesión de los inmuebles hereditarios situados en la ciudad de La Plata, el Juzgado de la Capital federal es incompetente para conocer en el juicio sucesorio, por no ser ni el del último domicilio del difunto, ni el del territorio donde están situados los inmuebles hereditarios cuya posesión se persigue.

4—Con arreglo á lo dispuesto en el art. 3284 del Cód. Civ. y 634 del Cód. de Proc., el juez competente para conocer en el juicio sucesorio es el del domicilio del difunto al tiempo de su fallecimiento. Pero, como en el art. 10 del Cód. Civ., se dispone que los bienes raíces situados en la Rep., son exclusivamente regidos por las leyes del país, respecto á su calidad de tales, á los derechos de las partes, á la capacidad para adquirirlos, á los modos de transferirlos, á las solemnidades que deben acompañar, esos actos á la jurisprudencia de nuestros Tribs. ha establecido que, respecto á la sucesión de tales bienes, predomina la jurisdicción territorial, es decir, la del lugar donde están situados. De los tres sistemas relativos á la ley que debe regir las sucesiones, es el sistema intermediario ó misto, sostenido por Story, Félix y otros, el imperante en nuestro país. Es decir, á los inmuebles se aplica la ley de la situación, y á los muebles la ley del domicilio del difunto, y de aquí se hace derivar el orden de la jurisdicción. Véase el núm. 3.

5—Véase: verb. *Acción de nulidad*, 3.

6—Sin perjuicio de que los demás interesados hagan uso de su derecho en el juicio correspondiente, á fin de que se declaren de pro





nes testamentarios los que se encuentran á nombre particular de un heredero.—Civ., tom. 8, pág. 302, Ser. 5ª.

7. **Bienes hereditarios** — Las denuncias sobre ocultación de bienes, solo pueden resolverse después de practicado el inventario.—Civ., tom. 3, pág. 91, Ser. 6ª.

8. **Bienes hereditarios** — Los bienes heredados por la esposa, deben entregarse al marido, si no existe separación de bienes. —Civ., tom. 3, pág. 65, Ser. 6ª.

9. **Bienes hereditarios** — Si se dan bienes testamentarios para garantizar el impuesto fiscal, debe trabarse embargo sobre los que sean necesarios para el pago.—Civ., tom. 3, pág. 98, Ser. 6ª.

10. **Bienes hereditarios** — Los acreedores no reconocidos solo pueden pedir medidas meramente conservatorias de los bienes testamentarios, pero no de los derechos que gestionan. —Civ., tom. 3, pág. 420, Ser. 6ª.

11. **Bienes hereditarios** — El embargo preventivo trabado sobre bienes testamentarios que se encuentran en poder de terceros, debe ser decretado por el juez de la testamentaria.—Civ., tom. 4, pág. 32, Ser. 6ª.

.....  
piedad de la sucesión y sean consiguientemente incluidos entre los de su exclusiva pertenencia.

7—Esa es la oportunidad determinada por el art. 660 del Cód. de Procedimientos.

8—El marido es el administrador legítimo de los bienes de la esposa, y en ese carácter puede percibir todos los bienes que á ella correspondan, mientras sus facultades no estén limitadas—arts. pertinentes de la Ley de Mat. Civ.

10—Véase: verb. *Acreedores*, 1.

11—Por tratarse de una medida de seguridad de los bienes que se dicen pertenecer á una sucesión, en cuyo caso es al juez que conoce del juicio testamentario á quien corresponde conocer y resolver de la procedencia ó improcedencia de las medidas solicitadas, como un incidente del mismo juicio.



12. **Bienes hereditarios**—Debe mantenerse su indivisión, si es conveniente á los intereses de los menores.—Civ., tom. 2, pág. 155, Ser. 6ª.

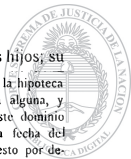
13. **Bienes hereditarios**—La obligación de reservar los bienes heredados de los hijos del primer matrimonio, que la ley impone al cónyuge supérstite, solo nace por el hecho de contraer segundas nupcias.—Civ., tom. 2, pág. 367, Ser. 6ª.

14. **Bienes hereditarios**—El viudo puede hipotecar los

12—No hay ley que se oponga á la indivisión temporaria de estos bienes: por el contrario, el art. 3464 del Cód. Civ., lo autoriza claramente.

13—Art. 237 del Cód. Civ.—El caso va más detenidamente estudiado en el núm. siguiente.

14—Se dijo de nulidad de una hipoteca, deduciendo al efecto la correspondiente tercera, en un juicio ejecutivo, fundándose en que la finca embargada y sobre la cual se constituyó el gravamen hipotecario, era de propiedad de un menor, correspondiendo únicamente el usufructo de la misma á su padre, el deudor hipotecario, por cuanto la casa embargada había pertenecido por herencia á la primera esposa del hipotecante; por fallecimiento de esta señora le correspondió en herencia á uno de sus hijos y por fallecimiento de éste pasó el usufructo de esa casa al cónyuge supérstite, de conformidad con lo que dispone el Cód. Civ. en su art. 237, cuando establece: «que el viudo ó viuda que teniendo hijos del precedente matrimonio, pase á ulteriores nupcias, está obligado á reservar á los hijos del primer matrimonio, ó á sus descendientes legítimos, la propiedad de los bienes que por testamento ó *abintestato* hubiese heredado de alguno de ellos, conservando solo durante su vida el usufructo de dichos bienes.» El ejecutante pidió el rechazo de la tercera, alegando que la finca hipotecada correspondía por herencia materna á los dos hijos del hipotecante, en condominio por mitad. Muerto uno de ellos le heredó el padre, quien adquirió la otra mitad y vino á ser dueño único de ella por permuta hecha con el hijo sobreviviente. En este estado y antes de contraer segundas nupcias, el padre hipotecó esa finca, de la que era único propietario; desprendiéndose de estos hechos que respecto de la mitad de la casa permutada, el tercerista no tenía derecho alguno, pues su dominio se estinguió, recibiendo en cambio otra propiedad, y



bienes adquiridos como heredero de uno de sus hijos; su que la otra mitad pudo ser hipotecada, porque á la fecha de la hipoteca el padre se conservaba viudo y no estaba obligado á reserva alguna, y toda vez que el padre hereda el pleno dominio del hijo, y este dominio pleno se convierte en simple usufructo, recién desde la fecha del segundo matrimonio. No existe razón alguna, ni en el texto por demás claro de la ley, ni en su espíritu, para estender más allá la limitación del derecho. De los antecedentes de hecho y de derecho que someramente quedan consignados, surge que el punto capital á investigar, es desde cuando empieza la obligación de la reserva: si desde que los bienes se adquieren por herencia *abintestato* ó por testamento, ó si solo desde que tienen lugar las segundas nupcias; ó en otros términos, si antes de ocurrir éstas, el padre hereda el pleno dominio ó simplemente le corresponde el usufructo. Antes de resolver el caso con arreglo á la letra y al espíritu del art. 137 y sus concordantes, es conveniente estudiar con la brevedad posible los antecedentes, de legislación, de doctrina que informan el recordado precepto, porque de esa manera será más fácil fijarle su verdadero significado y alcance. Desde luego, todos los Códigos modernos, según lo expresa el legislador en la nota al artículo, y es así en efecto, están en contra del precepto que aquél contiene. El ha sido tomado de la legislación romana y de la española, con la limitación, de que la reserva solo comprende los bienes heredados de los hijos del primer matrimonio. El principio que rige en la materia, según un eminente juriconsulto, es que los bienes procedentes del cónyuge premuerto y adquiridos á título lucrativo, por el cónyuge que pase á segundas nupcias, debe conservarse por éste para los descendientes comunes. Al establecer ésto, el legislador ha querido satisfacer la justa esperanza que tienen tales descendientes de suceder por sí solos en esos bienes, fundándose también en la voluntad presunta del que falleció, según la cual aquéllos deben ser preferidos en este respecto, á los hijos de un segundo lecho y á las demás personas en general. No falta quien haya pretendido que el principio dominante en la materia es el de la penalidad, aplicada á la viuda por pasar á segundas nupcias. Esto importaría afirmar que el derecho mira con repugnancia la segunda unión. Pero no es así. Esta proposición no puede defenderse, ni en la legislación civil, ni en la legislación canónica. La iglesia condenó en el *Concilio de Nicea*—325— en el de *Cártago*—425—y en el *Florentino*—1439-45—el error de los que sostenían que son ilícitas las segundas nupcias. Antonio Gómez, en el número 9 de sus comentarios á las leyes 14, 15 y 16 de Toro, exa-

posterior matrimonio no anula el acto.—Civ., tom. 2.ª, página 367, Ser 6ª.

minando la cuestión de si la viuda, cuando se casa por segunda vez, pierde el legado ó *fidei comiso* hecho por el primer marido, bajo la condición de que viva honestamente, dice: «que no lo pierde por que en el matrimonio hay castidad y gran pudor.» No es, pues, la reserva, una institución penal. Se funda, en las justas esperanzas de los descendientes comunes de ambos cónyuges y en la voluntad presunta del fallecido. El origen de las disposiciones sobre bienes reservables de la antigua legislación española y de nuestro Cód. Civ., se halla en el tit. 9º, lib. 5º del Cód. Romano. Cujacio, comentando la ley 3ª, del tit. y lib. 5º citado de este Cód., espone así el precepto legal: «Todo lo que la mujer recibió de los bienes del primer marido por causa de donación—*propter nuptias*—ó por regalo esponsalicio ó por causa de institución ó de legado ó de *fidei comiso*, todo ésto debe reservarlo para los hijos del primer marido, como bien paterno.» El jurisconsulto usa, como la ley 3ª, la palabra *liberi*, que se traduce generalmente por hijos; pero como dice el párrafo 220, tit. 17, lib. 50 del Digesto, bajo la determinación de *liberi* se entienden comprendidos, no solo los hijos en sentido estricto, sino también los nietos y bisnietos y los individuos que de ellos descienden. Agrega Cujacio, que por la misma ley 3, tit. 9º, lib. 5º del Cód., la viuda que pasa á segundas nupcias debe reservar para los hijos del primer matrimonio lo que adquiriese *ab-intestato* por sucesión de uno de los hijos del mismo matrimonio, y que así, si hay tres hijos del primer matrimonio, no solo debe reservar para ellos lo que recibió del primer marido, sino que también para los hijos supérstites de aquel matrimonio, lo que recibió de los hijos muertos intestados. Comentando las leyes 7ª y 8ª del mismo título y libro, dice: que si hubiera fallecido un hijo del primer matrimonio sin dejar descendientes, antes ó después de segundas nupcias del padre ó de la madre, sus hermanos del primer lecho son llamados á tomar la porción de bienes reservables pertenecientes al fallecido, por disposición de la ley; en tales bienes los hermanos excluyen al padre ó madre que no se abstuvo de segundas nupcias. En el *Fuero Juzgo* y en el *Fuero Real* hay vestigios de reserva. La ley 267, tit. 13, Part. 5ª, previene que si una viuda contrae segundo matrimonio, tenga que conservar en favor de los hijos del anterior las arras y donaciones que hubiera recibido del primer marido, quedando hipotecados todos sus bienes para la seguridad de su restitución. La Ley 14 de Toro excluye de la reserva á los «bienes multiplicados» y la ley 15 dispone: «que en to-



### 15. Bienes hereditarios — La declaratoria de herede-

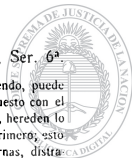
dos los casos en que las mujeres casándose segunda vez, son obligadas á reservar á los hijos del primer matrimonio, la propiedad de lo que hubieron del primer matrimonio ó heredasen de los hijos del primer matrimonio, en los mismos casos el varón que casase segunda ó tercera vez, sea obligado á reservar la propiedad de ellos á los hijos del primer matrimonio; de manera, que lo establecido cerca de este caso en las mujeres que casasen segunda vez, aya lugar con los varones que pasasen á segundo ó tercer matrimonio.» En ausencias de disposiciones detalladas sobre la reserva en derecho español, sus espositores acuden al derecho romano para la esplicación de la materia. Basta para cerciorarse de ello, leer los comentarios de Antonio Gómez, á las leyes de Toro: no da un paso sin apoyarse en las romanas. La ley 15, es tomada de la 5ª, tit. 9º, lib. 5º, del Cód. de Justiniano que fué la que hizo extensiva al viudo la obligación de reservar.. Las otras leyes que forman sistema con ésta en ese Cód., faltan en la legislación española y por eso los intérpretes tienen que suponerlas incorporadas en ellas, para resolver los casos que ocurran sobre bienes reservables. Empero, por poco que los jurisconsultos españoles abundan en detalles sobre esta materia, con respecto al punto que hace más directamente al caso de la controversia, se encuentran opiniones que se reputan tan terminantes como decisivas. Escriche, verb. «Bienes reservables», que no por ser uno de los escritores de derecho á todo lo más familiar no deba considerarse como de los más autorizados y de los de mayor seguridad de interpretación, tratando de la materia se espresa en los siguientes términos: «El cónyuge sobreviviente conserva toda su vida el usufructo de los bienes reservados; y la propiedad, solo mientras se mantiene en el estado de viudez, pasando ésta á los hijos desde el momento en que contrae segundas nupcias. No puede por tanto disponer de dichos bienes desde que vuelve á casar, de modo, que será nula cualquiera enajenación que hiciese de ellos, pero no lo será si la hubiese verificado antes, pues aun no había incurrido en la pena de la reservación. Sinembargo, aunque sea nula la enajenación que hizo el cónyuge sobreviviente después de pasar á segundo matrimonio, se sostiene durante su vida y no se revoca hasta después de su muerte, en cuya época podrán los hijos repetir contra el poseedor de

(Sigue en la pág. 137)

15— Importa el ejercicio del derecho que acuerda el art. 3411 de Cód. Civ.; y por otra parte, encuadra dentro de lo dispuesto en los arts. correlativos del Cód. de Proc.

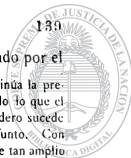
ros hace procedente la posesión en condominio de los

los bienes para su restitución como dueños y propietarios; y por el contrario, aunque sea válida la enajenación hecha durante el estado de viudez, no por eso quedan los hijos sin derecho alguno con respecto a los bienes enajenados en caso de que el enajenante contraiga después segundo enlace, pues podrán sacar su importe de los bienes propios del enajenante si le sobreviven, como hipotecados en su favor por la ley 26, tit. 13, Part. 3<sup>a</sup>, para seguridad de los bienes sujetos á reserva. De la Serna, tom. 2<sup>o</sup>, pág. 133, se expresa en el mismo sentido: «Las enajenaciones hechas por el marido ó la mujer antes de pasar á segundo matrimonio son válidas, pero algunos creen que los hijos del primero tendrán derecho á reclamar su importe del caudal paterno ó materno respectivamente, cuya opinión no nos parece aceptable—en este punto es más radical que Escriche,—porque en tanto está obligado el cónyuge á la reserva, en cuanto pasa á segundas nupcias; los actos anteriores á ellos son completamente perfectos y válidos y solo podrán obligar á quien los hizo en el caso de que los hubiera ejecutado en fraude de la ley». Gutiérrez, «Códigos Fundamentales», tom. 5<sup>o</sup>, págs. 713 y 714, ocupándose de la ley 15 de Toro, dice: «Empieza la obligación de reservar desde que el marido y la mujer contraigan segundas nupcias, casando segunda vez»; lo cual está de acuerdo con ambos precedentes, el romano, y el patrio. La ley 5<sup>a</sup>, tit. 9<sup>o</sup>, lib. 5<sup>o</sup> del Cód. La ley 1<sup>a</sup>, tit. 2<sup>o</sup>, lib. 3<sup>o</sup> del «Fuero Real» y ley 51 de «Toro», proceden de igual supuesto, de que el cónyuge sobreviviente hubiese contraído segundas nupcias.» Más adelante agrega: «El cónyuge supérstite podrá enajenar los bienes antes de contraer nuevo enlace por no existir todavía la obligación de reservar, si bien probando los hijos que había procedido con fraude, lograrían rescindir las enajenaciones ó sacar su valor de los bienes propios del enajenante. Aunque los enajene después de haber contraído segundo matrimonio, no por eso se anulan las enajenaciones mientras viva; porque puede suceder muy bien que hayan fallecido todos los hijos sin haber dejado descendientes, en cuyo caso cesan los efectos de la reservación». Sala, tom. 1<sup>o</sup>, pág. 258, núm. 16, concuerda con esta opinión y no admite que antes del fallecimiento del viudo ó viuda, los hijos puedan anular la enajenación, en cuya razón, de que su derecho es eventual si le sobreviven. Por último, en la moderna legislación, en el art. 974 del Cód. Civ. vigente en España, establece la validez de las enajenaciones de los bienes inmuebles reservables, hechas por el cónyuge sobreviviente antes de contraer segundas nupcias, con la obligación en éste de indemnizar á



bienes hereditarios. — Civ., tom. 5, pág. 236, Ser. 6<sup>a</sup>

los hijos y descendientes del primer matrimonio. Resumiendo, puede concluirse: 1° Que la obligación de la reserva, se ha impuesto con el propósito de evitar que los hijos de un segundo matrimonio, hereden lo que de no haberse contraído hubiesen heredado los del primero; esto es, que no se menoscaben las legítimas paternas y maternas, distra-  
yendo los bienes en favor de hijos de ulteriores matrimonios: 2° Que según las leyes romanas y españolas, la obligación de la reserva se produce en virtud de las segundas nupcias, y de consiguiente, empieza desde que éstas se celebran: 3° Que esta es también opinión de los es-  
positores del derecho español. Vengamos ahora al análisis de las dispo-  
siciones de nuestra ley civil sobre la materia. El art. 237 del Cód. Civ. que rige el punto, dice así: «El viudo ó viuda que teniendo hijos del precedente matrimonio «pase á ulteriores nupcias», está obligado á reservar á los hijos del primer matrimonio, ó á sus descendientes legí-  
timos, la propiedad de los bienes que por testamento ó *ab-intestato* hu-  
biese heredado de alguno de ellos, conservando solo durante su vida el usufructo de dichos bienes». La interpretación de este precepto se  
facilita reparando en los antecedentes de legislación que la informan. El ha sido tomado de las leyes romanas y españolas analizadas, y como  
ellas y con arreglo á la opinión de sus opositores, dispone que la  
obligación de la reserva surge con las ulteriores nupcias. Los términos  
de él son claros, y es elemental en derecho la regla que enseña que cuan-  
do la ley está concebida en palabras tan claras, que en ellas aparece  
bien espresa y terminante la voluntad del legislador, no debemos elu-  
dir su tenor literal á pretexto de penetrar en su espíritu,—Escríbe,  
verbo Interpretación doctrinal. — Pero, aun cuando se proceda con  
diverso criterio y se entre á investigar el espíritu de la disposición,  
llegase siempre al mismo resultado. Fijemos la atención en otras dis-  
posiciones del Cód., que es necesario tener presente, como quiera que  
legislan sobre el derecho sucesorio de los padres, y establecen la regla  
de que el art. 237 debe considerarse como excepción. Los arts. 3410,  
3417 y 3418 del Cód. Civ. que se pueden citar con oportunidad en este  
caso, establecen que el padre es propietario de los bienes que les co-  
rresponden por herencia de sus hijos, desde el día en que ocurre la  
muerte de éstos. Así el art. 3410 preceptúa, que cuando la suce-  
sión tiene lugar entre ascendientes y descendientes, el heredero entra  
en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de  
la sucesión, sin ninguna formalidad ó intervención de los jueces. El  
art. 3417, establece que el heredero que ha entrado en posesión de la he-

**16. Bienes hereditarios**—El curador nombrado por el

rencia, que ha sido puesto en ella por juez competente, continúa la persona del difunto, y es propietario, acreedor, ó deudor de todo lo que el difunto era propietario, etc., etc., y el 3418, dice que el heredero sucede no solo en la propiedad sino también en la posesión del difunto. Con arreglo pues, al sistema sucesorio del Código, el padre tiene tan amplio derecho, desde que ocurre el fallecimiento del hijo. Si entra en la posesión de la herencia desde la muerte del autor de la sucesión, si desde entonces se convierte en propietario de todos los bienes del difunto, forzoso es convenir que estos preceptos constitutivos de la regla en favor del padre, no podrán ser limitados sino en los términos espresos de la excepción, y solo en la extensión que se determina en el art. de la ley en que aquélla se establezca. Es también elemental que las disposiciones que consagran una excepción á la regla, ó una limitación al derecho, son de restrictiva interpretación, y no puede de consiguiente, interpretárselas extensivamente. Así, pues, heredando el padre la plena propiedad en la sucesión del hijo muerto, y no convirtiéndose en usufructuario de los bienes heredados, sino en el caso de la excepción prevenida en el art. 237 mientras conserva la plenitud de dominio, puede sin duda venderlos ó gravarlos libremente. Con esta conclusión se observa, que los propósitos del legislador resultarían frustraneos, si se diera al que la ley obliga á reservar, los medios de eludirla. Este argumento, en mi concepto, carece de importancia, su fuerza es meramente de efecto y ha sido victoriosamente rebatido en los párrafos precedentes. Es exacto lo que se observa asimismo de que el Cód. Argentino no se previene contra el padre ni lo trata con desconfianza, siendo de ello la prueba más evidente, la amplitud de facultades que le confiere con respecto á la administración de los bienes de los hijos, que si consisten en bienes fungibles ó consumibles, por considerable que sea su valor, pueden ser recibidos por el padre sin otorgar fianza alguna. ¿Y por qué esta liberalidad de la ley para los padres? ¿Por qué no se han adoptado mayores precauciones en salvaguardia de los derechos de los hijos? La contestación la tiene dada la Cám. Civ. en términos bien espresivos—tom. 7º, pág. 236, Ser. 1ª, Jur. Civ.—Dijose en ese caso, en el cual se trataba de proveer de un tutor especial á los hijos. . . . \*Que sería una imputa-

*(Segue en la pag. 40)*

16—Se trata de una medida de carácter conservatorio, conforme á las facultades que le corresponden con arreglo á lo dispuesto por el art. 3851 del Cód. Civ.





cónsul, puede pedir la venta de los bienes hereditarios ción deprimente, humillante y vejatoria á la patria potestad, establecer como regla general, que desde que se practica la cuenta particionaria, hay contradicción entre los intereses de los padres con los de los hijos, nombrando á éstos un tutor especial, es decir, un extraño al que lo conceptuara más honrado para defender los intereses de sus pupilos que al mismo padre para respetar los de sus hijos. Que esto repugna á la naturaleza de las cosas, invirtiendo el orden de los sentimientos de los seres racionales de la humanidad, entre los que, salvo excepciones rarísimas, los padres superan por su nobleza, por su abnegación y por el sacrificio para sus hijos, pues no hay amor más puro, más desprendido que el de aquéllos para éstos». El Tribunal, pues, ha entendido también, como muy bien se ha dicho, que la ley tiende á realzar la autoridad del padre, y no á abatirla y rebajarla á los ojos del hijo. Para arribar á las conclusiones del sumario debe resolverse la siguiente cuestión: ¿Corresponde al hijo el dominio de los bienes que el padre está obligado á reservarle para después de su muerte? No nos es lícito juzgar del valor intrínseco ó de la equidad de la ley—art. 59, Cód. de Proc.—El art. 237 del Cód. Civ. en que el actor fundaba su derecho, dice así: el viudo ó viuda que teniendo hijos del precedente matrimonio, pasa á ulteriores nupcias, está obligado á reservar á los hijos del primer matrimonio ó á sus descendientes legítimos, la propiedad de los bienes que por testamento ó *ab-intestato* hubiese heredado uno de ellos, conservando solo durante su vida el usufructo de dichos bienes», se dice que si el viudo que pasa á segundas nupcias, solo conserva el usufructo de los bienes que hubiese heredado de alguno de los hijos del primer matrimonio, la nuda propiedad corresponde á los hermanos bilaterales del hijo premuerto. Este raciocinio que en el primer momento seduce, es falso, falsísimo, si bien habrá que reconocer la habilidad con que se puede esplotar la impropiedad de los términos empleados por el codificador para espresar su pensamiento. ¿Qué es en efecto, lo que el codificador propone al estatuir el precepto consignado en el art. 237? ¿Será por ventura, privarle, retirarle, revocarle al viudo, por el hecho de contraer segundas nupcias, el dominio perfecto que le reconocía hasta entonces sobre los bienes que hubiese heredado de alguno de sus hijos del primer matrimonio? No cabe suponerle semejante propósito, porque importaría atribuirle una monstruosa é inconcebible incongruencia con los principios de alta moral y orden público consagrados por el mismo—arts. 531 y 3609.—Sería ciertamente original que se tuviera por no escrita la cláu-

de gravosa conservación. —Civ., tom. 5, pág. 285, Ser. 6ª.

sula de un testamento por la cual un hijo impusiera al padre la condición de no casarse y la ley por otro lado la estableciera en todos los casos, hubiera ó no testamento. El art. 237, está por otra parte, concebido en términos tan espresivos y categóricos, que hacen de todo punto insostenible la interpretación sustentada por el tercerista, y á que parecía adherir el mismo demandado. El art. 237 citado, no tiene ni puede tener más alcance que el de convertir el dominio pleno y perfecto que el viudo ó viuda tienen sobre determinados bienes hasta el momento de pasar á ulteriores nupcias, en dominio menos pleno ó imperfecto, pero siempre atribuyéndolo á la misma persona. Breves razonamientos bastarán para demostrar la verdad de esta tesis. La frase final del art. «conservando el usufructo», puesta sin duda para aclarar su verdadero concepto, no hace más que obscurecerlo, pues de tomarlo al pie de la letra, resultaría que el artículo contiene dos preceptos que se excluyen y repudian mutuamente. Si en realidad, solo se conservara el usufructo, querría decir que el dominio anterior se habría perdido, y mal podría entonces obligársele á reservar la propiedad de una cosa que ya no se tiene á ese título. Luego, el adverbio «solo» está demás, ó no es usufructo, en su significación jurídica, lo que se ha querido dejar al viudo que pasa á ulteriores nupcias. Por otra parte, conservar, según todos los diccionarios de la lengua, es hacer que dure una cosa manteniéndola en su mismo estado, y para ello es indispensable que la cosa exista, pues si no existe ó recién va á existir, no será por conservación, sino por adquisición lo que determine su existencia. Conservar el usufructo, supone pues, necesariamente haberlo tenido desde antes, y como no era usufructo lo que tenía el viudo antes de su segundo matrimonio, sino pleno dominio, sería este derecho real, en todo caso, lo que la ley podía conservar ó convertirselo en otro, si su propósito fuera revocarle aquél. Pero conservar no es sinónimo siquiera de convertir, y en consecuencia, no puede interpretar como conversión del dominio en usufructo, la desgraciada frasefinal de que nos ocupamos. ¿Qué es lo que ha querido decir entonces la ley al espresar que el viudo conservará *solo* durante su vida el usufructo de los bienes heredados de algunos de sus hijos del primer matrimonio? Lo que la ley ha querido espresar, valiéndose de una terminología incorrecta, es que el viudo solo continuará gozando libremente del uso de los bienes heredados de su hijo, quedándole restringidos todos los demás derechos emergentes del dominio. Esta interpretación es la única que concilia y armoniza las dos partes de que se



### 17. Bienes hereditarios—Los tribunales de la Capital

compone el debatido art. 237, pues cualquiera otra que se adoptara nos conduciría por fuerza á dar eficacia á una sola, con absoluto olvido de la otra. Si se ha de considerar, en efecto que solo hay usufructo, como parece desprenderse de la segunda parte ¿qué objeto ó aplicación tendría la primera parte referente á la obligación de reservar la propiedad? Ninguno, porque sería establecer una obligación de imposible cumplimiento, porque para reservar la propiedad es indispensable tenerla, conservarla. Luego, pues, si la obligación de reservar se ha de considerar subsistente, debe eliminarse, ó darse otro significado y alcance á la frase final. Una de dos: ó se tiene el usufructo perdiendo la propiedad, ó se conserva la propiedad limitando sus efectos. Lo primero no resulta del contexto del art. 237, mientras que lo segundo, si no lo dice claramente, es lo único razonable que se desprende de su defectuosísima redacción. Que la ley no se propone privar al padre ó madre viudos de la propiedad de los bienes heredados de sus hijos, es al parecer de toda evidencia, pues si ese hubiera sido su propósito, lo habría dicho espresamente y sin circumloquios, como lo hace siempre que por un hecho ó acto deba seguirse á su autor la pérdida de derechos adquiridos—arts. 178, 307 y 308, entre otros.—Todo lo que la ley dice, es que está obligado á reservar esa propiedad para transmitirla á los otros hijos del primer matrimonio ó sus descendientes, transmisión que se operará recién después de la muerte del padre, y esto mismo si le sobreviven aquellos hijos ó sus descendientes; pues de lo contrario, cesa la obligación de la reserva, y el padre puede disponer libremente de los bienes—art. 238,—lo que viene á ratificar una vez más, que la propiedad no ha dejado un momento de corresponder al padre, más ó menos plena. La obligación misma de reservar la propiedad impuesta al padre, es condicional resolutive, porque se le hace depender de que su fallecimiento preceda al de sus hijos—arts. 288, 528 y 553;—luego, si la condición no se realiza, la obligación desaparece como si nunca hubiese existido—arts. 543 y 554—antes de contraer la obligación condicional que la ley impone, el dominio que el padre

*(Sigue en la pág. 41).*

17—Tratándose de adquirir bienes pertenecientes á una sucesión, la jurisdicción corresponde á los jueces del lugar del último domicilio del difunto—art. 3284, Cód. Civ.—Esta disposición solo sufre excepción en los casos en que el causante tuviera bienes raíces en la República, aunque su último domicilio hubiera existido fuera de ella. Véanse: los números 3 y 4.

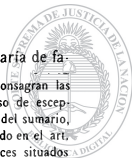
son incompetentes para entender en la testamentaria de un fallecido en el extranjero, aun cuando existan bienes muebles en su jurisdicción.—Civ., t. 5, pág. 266, Ser. 6<sup>a</sup>.

18. **Bienes hereditarios**—Si se dividen en legados, los gastos y honorarios deben ser pagados de la masa.—Civ., tom. 5, pág. 242, Ser. 6<sup>a</sup>.

19. **Bienes hereditarios**—Los jueces de la República tenía sobre los bienes materia de la obligación, era pleno y perfecto, pues la ley se refiere á los que hubiere heredado, esto es, á aquellos cuyo dominio hubiese adquirido por sucesión en los derechos del propietario—art. 2324, inc. 6<sup>o</sup>,— y los derechos de los hijos se transmiten á los padres sin cortapisas ni reatos—arts. 3410, 3417 y 3418.—Pendiente de obligación, ¿Cambia ó se modifica la naturaleza del dominio? Indudablemente, puesto que se le subordina al advenimiento de determinados acontecimientos, y se limita el derecho del propietario á la percepción de los frutos naturales ó civiles. ¿Qué clase de dominio es éste, se dirá? El Código mismo se encarga de contestar: «Dominio *fiduciario* es el que se adquiere en un *fidei comiso* singular, subordinado á durar solamente hasta el cumplimiento de una condición resolutive ó hasta el vencimiento de un plazo resolutive, para el efecto de restituir la cosa á un tercero.—art. 2662, título «del dominio imperfecto».—Véase, pues, como la obligación de reservar la propiedad impuesta al padre, por el art. 237, es para los hijos, acreedores en esa obligación, un verdadero *fidei comiso*, y nada más que un *fidei comiso*. El dominio aunque imperfecto ó fiduciario, permanece siempre en poder del padre hasta el cumplimiento de la condición resolutive á que está subordinado, en cuya oportunidad, ó pasa á aquel en cuyo beneficio se ha establecido el *fidei comiso*, ó se consolida en la persona del fiduciario—art. 238.—Los hijos no tienen durante la existencia del *fidei comiso* ningún derecho real, sino un simple derecho personal en expectativa, eventual, análogo al derecho sucesorio que tiene sobre los demás bienes de su padre, y en consecuencia, es obvio que no puede arrancarse de él una acción de dominio. Esta ha sido una de las pocas cuestiones bien estudiada y resuelta por la Cám. Civ., por lo general tan poco escrupulosa en la decisión de las delicadas cuestiones sometidas á su imperio.

18—Se trataba de trabajos hechos en interés común de la testamentaria, siendo aplicable por analogía, el art. 3795 del Cód. Civ.

19—De acuerdo con los núms. 3, 4 y 17. Las disposiciones conte-



son competentes para conocer en la testamentaria de familias en los arts. 7, 3283, 3284 y 3821 del Cód. Civ., consagran las reglas generales, y dejan por consiguiente, á salvo el caso de excepción. *In toto jure generi per speciem derogatur*. En el caso del sumario, la ley especial la constituye el principio absoluto contenido en el art. 10 del mismo Código, según el cual: «Los bienes raíces situados en la República son exclusivamente regidos por las leyes del país, respecto á su calidad de tales, á los derechos de las partes—sobre aquéllos;—á la capacidad de adquirirlos; á los modos de transferirlos;—esos derechos—y á las solemnidades que deben acompañar á esos actos—de transferencia.—El título, por lo tanto, á una propiedad raíz, solo puede ser adquirido, transferido, ó perdido de conformidad á las leyes de la República.» No es posible exigir una disposición más explícita y terminante; ella constituye una excepción á la regla del art. 3283, como lo espresa el codificador en la nota de ese artículo, y los magistrados no pueden hacer otra cosa que conformarse á ella. El principio consignado en el art. 10 transcripto, se halla ya establecido en los Voet—padre é hijo—y es el seguido en Inglaterra y Estados Unidos.—Véase á Juan Voet, *Ad Pandectas*, libro XXVIII, tit. 17, núm. 34.—Efectivamente, nuestro art. 10 es tomado del § 424 de Story.—*Conflict of laws*—y se hallaba ya consagrado en la ley 13, tit. 14, Part. 3ª, en el art. 3º del Cód. Napoleón, y en todos sus numerosos imitadores, inclusive el viejo Cód. de Com.—regla VI.—De modo, que la regla aludida forma, puede decirse, un principio de derecho universal. A igual conclusión llegan Aubry y Rau, § 31, núm. 3, y nota 3ª; Asser y Rivier, *Droit international privé*, núm. 61 y otros. Y la consecuencia necesaria de este principio, es que hay tantas herencias cuantos sean los territorios—nacionales—en que hayan inmuebles. En este sentido el primer argumento lo suministra el propio codificador en la recordada nota al art. 3283, al decir: «Pero cuando esos bienes están diseminados en lugares diferentes, tendríamos que admitir muchas sucesiones independientes unas de otras. Puede llamarse una excepción á este principio general, lo que está dispuesto en el art. 10, respecto á la trasmisión de bienes raíces situados en el territorio del Estado, y cuyo título debe ser siempre transferido de conformidad á las leyes de la República.» Más explícito es aun nuestro codificador en la nota puesta al pie del artículo 3598, donde se espresa en términos de no dejar duda alguna: «Cuando en los cinco artículos anteriores hablamos de las porciones legítimas, nos referimos á los bienes que existen en la República. Supónganse que una persona



## llecidos en el extranjero, á los efectos de la transmisión

muere en Buenos Aires, dejando *cien mil pesos* aquí y *cien mil* en Francia. *Los bienes que están en la República* se regirán por nuestras leyes, y los que están en Francia, por las de aquel país. Habrá, pues, *tantas sucesiones cuantos sean los países* en que hubiesen quedado bienes del difunto. Así, la máxima común es: *quo sunt bona diversis territoriis obnoxia totidem patrimonium intelligentur.*» La doctrina de esta nota puede, acaso, pecar por absoluta, en cuanto se refiere á toda suerte de bienes, pero no puede ser más explícita y decisiva en favor de la proposición planteada en el presente caso. El segundo argumento lo suministra la doctrina corriente entre los juristas extranjeros, y para no citar uno á uno, tan solo bastará transcribir lo que á este propósito dice Vincent y Pénaut: «La mayor parte de los autores aplican la *lex rei citæ*, y dividen el patrimonio del difunto en tantas herencias especiales cuantos sean los países en que se encuentren bienes, *quot sunt bona diversis territoriis obnoxia totidem sunt patrimonium*; pero someten la sucesión mueble á una sola ley, cuya distinción es conforme á la tradición *estatutaria*, y se apoya en el art. 3º del Cód. Napoleón.» Este sistema es el de la jurisprudencia francesa. «La herencia inmueble se rige por la ley de la situación real de los bienes, y aquí es muy exacto decir que, *hay tantas herencias como territorios*. Así, cuando un difunto, cualquiera que sea su nacionalidad ó el lugar de su domicilio, deja inmuebles en Francia, la transmisión de estos bienes á sus herederos se opera según la ley francesa»—*Dictionnaire de droit international privé.*—París 1888, pág. 824, núm. 6, verb. *Sucesión*.—Los autores citan en apoyo una docena de fallos, y otra de juristas distinguidos. Lo mismo Fiore.—*Derecho civil internacional*, núm. 81, nota 2ª.—Weis—págs. 753 y 755—y el mismo Fiore—núm. 82—afirma que el principio de nuestro art. 10, es unánimemente sostenido por los escritores angloamericanos, y así, ningún acto de cesión ó traslación de dominio de inmuebles, puede considerarse como título valedero, según el *common law*, si no se han observado las formalidades prescriptas por la ley territorial—Story *Conflict of laws*,—Cap. X, parte 2ª y cap. XII.—Agrega Fiore, que esta es también la doctrina inglesa, y basta leer la obra de Dicey.—*Le statut personnel anglais*, París, 1887—para convencerse de ello. Efectivamente, en ese libro se establece la regla de que la ley del domicilio no gobierna los bienes raíces, los cuales se rigen exclusivamente por la ley territorial y por ello nunca se refiere sino á la herencia ó *universalidad mueble*—tom. II, págs. 197 y 198.—La obra de Dicey no es común, y por su gran autori-



de bienes raíces sobre los cuales ejerzan jurisdicción.—  
Civ., tom. 10, pág. 114, Ser. 6ª.

dad, el Fiscal va á transcribir uno de sus pasajes más explícitos: «El principio general del derecho consuetudinario inglés, es que la propiedad inmueble, es regida exclusivamente por la ley de la situación de los bienes—*lex situs*—en lo referente al derecho de las partes, á los modos de transferencia y las formalidades que deben acompañarlos.»—Story, §§ 424 y 428.»—Este principio aplicado á los bienes raíces en Inglaterra, tiene las siguientes consecuencias: 1ª *En cuanto á la capacidad*: La capacidad de enajenar ó adquirir bienes raíces depende absolutamente de las reglas ordinarias del derecho inglés, sin tener en cuenta para nada la ley del domicilio del propietario,—*Adde*, núm. 122. 2ª Lo mismo en cuanto á las restricciones impuestas para esas enajenaciones. 3ª *En cuanto á las formas de la enajenación*: La tierra, en Inglaterra, debe ser transferida según las formas ordinarias del derecho inglés. 4ª *En cuanto al matrimonio*: Los derechos recíprocos del marido y la mujer sobre inmuebles de cada uno de ellos, en Inglaterra, son regidos—salvo las estipulaciones de su contrato de matrimonio—por las reglas ordinarias de la ley inglesa, sin consideración á la ley del domicilio del marido, ni á la del país en que el matrimonio fué celebrado—Ley de Matrimonio Civil Argentino, art. 6º.—5ª *En cuanto á la quiebra*: La quiebra no transfiere al Síndico las tierras situadas fuera del país en que la falencia ha sido declarada. De aquí se sigue que la quiebra abierta en Francia ó en Australia no afecta á las tierras que el fallido posee en Inglaterra,—cita dos fallos y á Westlake, §§ 282 y 283—y salvo la excepción mencionada más abajo, la propiedad raíz en Inglaterra, no es afectada en nada por la quiebra abierta en país extranjero. 6ª *En cuanto á la muerte*: La herencia de una propiedad raíz en Inglaterra, se rige exclusivamente, salvo la excepción mencionada enseguida, por las reglas ordinarias de la ley inglesa, sin tener en cuenta para nada la ley del domicilio del dueño. Si el difunto muere estando domiciliado en Francia é intestado, el heredero sucede en la plena propiedad raíz—*freeholds*—y los *leaseholds* se distribuyen exactamente como si hubiera muerto domiciliado en Inglaterra—cita cuatro fallos—pero á condición de que el heredero sea hijo legítimo; por esto puede suceder que la ley francesa ejerza una influencia indirecta en la partición de inmuebles poseídos en arriendo. Si muere domiciliado en Francia, dejando testamento, la validez y efecto de ese testamento, relativamente á los bienes raíces se determinan de un modo absoluto por la ley inglesa.» Idénticos principios prevalecen en Estados

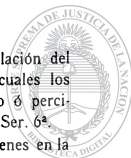
## 20. Bienes hereditarios—No puede eximirse al here-

Unidos, como puede verse en Story y también entre nosotros, sin la excepción relativa al hijo natural. Esos principios serían aplicados en Inglaterra, aunque se tratara de un argentino domiciliado en la República y muerto en ella; y afortunadamente, nos encontramos habilitados para aplicar los mismos, cuando se trate de la adquisición, por título hereditario ú otro, de inmuebles situado en la República, aunque el *deujus* sea inglés, estuviera domiciliado en Inglaterra y hubiese muerto allí. Veamos el caso de un *deujus* muerto en dicho país, donde se hallaba domiciliado, y deja bienes raíces en esta República, formada en Inglaterra su testamentaria: tres casos serían posibles: 1º Se hiciera la división de los bienes muebles únicamente. 2º Se dividieran también los inmuebles. 3º Se declarará heredero único al primogénito. En el primer caso, se habría procedido conforme al principio recibido en Inglaterra, de considerar como herencias independientes los bienes raíces existentes en un país extranjero, regidas por las leyes y tribunales del mismo. En tal caso, parece que no podría desconocerse razonablemente el derecho de nuestros magistrados para reabrir la testamentaria, á excitación de parte ó del Ministerio público, á fin de establecer si, según nuestras leyes, hay herederos, ó si la herencia debe pasar al fisco; quiénes son los sucesores, y qué parte debe corresponderles con arreglo á las leyes argentinas en los inmuebles á dividirse. Esta sería también la oportunidad de corregir las desigualdades en la partición hecha en el extranjero á que se refiere el art. 3470 del Cód. Civ. En el segundo caso, que es muy improbable, el título hereditario adquirido en Inglaterra en virtud de la ley inglesa sobre inmuebles situados en nuestro país, parecería de eficacia, en virtud de la disposición terminante del art. 10 de nuestro Cód. Civ. y no podría obtenerse un título hereditario válido sin abrir previamente el juicio testamentario, y finalizarlo por todos sus trámites. Ya que no hay otro medio de conocer si según nuestras leyes existen herederos sucesibles ó si los bienes deben pasar al fisco, si han sido comprendidos los verdaderos herederos sin exclusión nin-

(signe en la pág. 148)

20—El art. 2467 del Cód. Civ. solo tiene aplicación cuando se trata de sucesiones completamente líquidas. Los cálculos que puedan efectuarse para conocer el haber de cada heredero, no son sino presunciones. Por otra parte, cuando los demás coherederos no pueden hacer uso de igual derecho por no existir otros bienes en igualdad de condiciones, resultaría un notorio perjuicio para ellos, lo que haría improcedente la oneración del depósito.





dero, comprador en remate judicial, de la oblación del precio, si no existen otros bienes sobre los cuales los demás herederos puedan ejercer igual derecho ó percibir cantidad líquida.—Civ., tom. 6, pág. 282, Ser. 6<sup>a</sup>.

## 21. Bienes hereditarios—La exclusión de bienes en la

guna y sin ninguna inclusión indebida, y qué parte debe tocarles en los inmuebles hereditarios. *En el tercer caso:* desaparecería toda duda posible, ya que nuestras leyes no admiten una clase privilegiada de ciudadanos, ni admiten que el primogénito se lleve todo ó la mayor parte de la herencia, y profesan el principio de la no vinculación de los bienes raíces. Debe advertirse que análogas conclusiones han sido establecidas por los representantes del Ministerio público y por la Jur. Civ.—Ser. 2<sup>a</sup>, tom. II, pág. 502.—Estos son los verdaderos principios que se consagran, tanto en las legislaciones como en los autores, en materia de sucesiones, y que el Dr. Vélez ha seguido. Puede asimismo invocarse la autorizadísima opinión de los juristas redactores del proyecto del Cód. de Proc. para los tribunales nacionales, concebidas en estos términos: «Si el difunto en la época de su fallecimiento tuviere su domicilio fuera de la República y hubiera dejado en ésta bienes inmuebles ó muebles regidos por las leyes del lugar de la situación —argentinas—conocerán en el juicio de sucesión, en lo que respecta á esos bienes, el juez —argentino—donde estuvieren todos ó la mayor parte de ellos.»—Art. 59, núm. 4. También la Ley de Enjuiciamiento civil española de 1881, establece en su art. 13. «5<sup>o</sup> En los juicios testamentarios ó *ab-intestatos*, si el finado hubiere tenido su último domicilio en país extranjero, será juez competente el del lugar de su último domicilio, en España ó donde *estuviere la mayor parte de sus bienes.*»

21—Existía pleito pendiente sobre inclusión ó exclusión de un inmueble que algunos herederos pretendían ser de la sucesión y otro sostenía ser exclusivo de él. En este estado se designó administrador de los bienes de la sucesión; se pretendió que el inmueble de cuya exclusión se trataba, no debía entrar en administración. Se dijo que debía quedar sujeto á administración porque lo contrario implicaría un prejuzgamiento de parte del juez, respecto de la cuestión principal, y porque se trataba de medidas conservatorias que no podían dilatarse ni entorpecerse por los interesados, tanto más cuanto que en el fondo esa administración no afectaba el derecho de la parte.

testamentaria, no puede declararse antes de pronunciarse sentencia.—Civ., tom. 7, pág. 93, Ser. 6ª.

22. **Bienes hereditarios**—Después de liquidada la testamentaria y adjudicados los bienes, los acreedores deben seguir el fuero de los herederos para exigir el cumplimiento de las obligaciones.—Civ., t. 8, pág. 314, Ser. 6ª.

23. **Bienes hereditarios**—Los herederos universales, aun cuando estén en posesión de la herencia, no pueden administrar los bienes, si existen legatarios y otros interesados que invoquen igual carácter.—Civ., tom. 8, pág. 342, Ser. 6ª.

24. **Bienes hereditarios**—Su avalúo puede verificarlo separadamente cada perito.—Civ., t. 8, pág. 356, Ser. 6ª.

25. **Bienes hereditarios**—Si la transacción entre los pretendientes á la herencia recae sobre los bienes, sin mencionar espresamente el estado civil, puede aprobarse.—Civ., tom. 9, pág. 231, Ser. 6ª.

26. **Bienes hereditarios**—El Consejo Nacional de Edu-

---

22—El art. 634 del Cód. de Proc., establece que las demandas deben deducirse ante el juez de la testamentaria cuando se trata de acciones personales del difunto, *antes de la división de la herencia*—inc. 4º.

23.—Art. 3451 del Cód. Civ.

24—Las disposiciones de los arts. 172 y 175 del Cód. de Proc., son manifiestamente inaplicables, desde que solamente rigen la prueba pericial en juicio ordinario. Las simples diligencias de avalúo en las testamentarias están reglamentadas por otras disposiciones de la ley—arts. 655 y siguientes—entre las cuales no hay una sola que prescriba, con respecto á los avaluadores, la forma de procedimiento establecida para los peritos en general.

25—A ello no se opone la disposición del art. 845 del Cód. Civ.—Véase: Aubry y Rau, citado en este artículo, § 420.

26—El Agente Fiscal representa la acción pública y los derechos del Estado, no pudiendo intervenir el Consejo de Educación mientras el juez no ordene la venta total de los bienes y su entrega al Gobierno Nacional ó Provincial, según el caso, previo pago de las costas caus-



cación solo debe intervenir en los juicios de herencia vacante, después de realizados los bienes.—Civ., tom. 9, pág. 325, Ser. 6ª.

27. **Bienes hereditarios**—El juez de la testamentaria carece de jurisdicción sobre los bienes situados fuera de la República.—Civ., tom. 10, pág. 16, Ser. 6ª.

28. **Bienes hereditarios**—El interdicto sobre posesión de los bienes hereditarios corresponde al juez en turno, sin perjuicio de la jurisdicción del juez de la testamentaria para resolver sobre la propiedad.—Civ., tom. 10, pág. 27, Ser. 6ª.

**Bienes hereditarios**—Véase: *Heredero*, 7; *Testamentaria*, 1; *Administración*, 7.

1. **Bienes hipotecados**—No debe levantarse la inhibición si resulta que los bienes hipotecados según tasación,

dicas y reposición de sellos, como lo establece el art. 3544 del Cód. Civ. Véase: tom. 2º, Ser. 2ª, pág. 255; tom. 4º, Ser. 3ª, pág. 360.

27—En el tratado sancionado por el Congreso Sud americano de Derecho Internacional Privado, instalado en Montevideo, relativo al derecho civil, se dispone: «Art. 26: Que los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen, en cuanto á su calidad, á su posesión y á su enajenabilidad, absoluta ó relativa, y á todas las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles. Art. 44: Que la ley del lugar de la situación de los bienes hereditarios rije todo lo relativo á la sucesión legítima ó testamentaria; y finalmente—Art. 66: Que los juicios á que dé lugar la sucesión por causa de muerte, se seguirán ante los jueces de los lugares en que se hallen situados los bienes hereditarios». De la manera más clara é inequívoca, consagran los artículos citados, la pluralidad de sucesiones, de manera que ni los jueces extranjeros tienen nada que hacer con los bienes hereditarios situados acá, ni los jueces de la Rep. con los bienes situados en el extranjero.

28—El interdicto fué deducido á nombre personal de los herederos, y no á nombre de la sucesión.

1—El embargo debe trabarse en bienes bastantes para cubrir el capital, intereses y costas—art. 471 del Cód. de Proc.



no cubren el crédito.—Civ., tom. 6, pág. 355, Ser. 3.<sup>a</sup>.

**Bienes hipotecados**—Véase: *Gravamen hipotecario*, 1; *Personería*, 6; *Alquiler*, 23 y 24.

**Bienes inmuebles**—Véase: *Competencia*, 3; *Inhibición*, 1; *Contrato de cesión*, núm. 1.

**Bien letigioso**—Véase: *Alquileres*, 19.

1. **Bienes de menores**—Si los bienes en que tienen interés los menores no han sido tasados, no puede autorizarse la venta particular.—Civ., t. 1, pág. 57, Ser. 6.<sup>a</sup>.

2. **Bienes de menores**—Si la oferta excede de la tasación, pueden venderse en venta particular los bienes de menores.—Civ., tom. 5, pág. 278, Ser. 6.<sup>a</sup>.

3. **Bienes de menores**—No debe autorizarse al tutor para hipotecar los bienes de los menores.—Civ., tom. 3, pág. 61, Ser. 6.<sup>a</sup>.

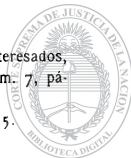
4. **Bienes de menores**—Las prohibiciones de la ley so-

1—En el art. 442 del Cód. Civ., se preceptúa que solamente puede dispensarse, de la venta en pública subasta, los bienes de menores cuando por algunas circunstancias extraordinarias se ofrezca un precio que exceda al de la tasación. Cuando no hay tasación se carece de poder para proceder á la venta.

2—Se anunciaron varios remates siempre con resultado negativo, y el inmueble constituía un condominio con otros coherederos, siendo éstos los que ofrecieron adquirirlo por el precio de tasación. La operación realizada por algo más del precio de tasación, teniéndose en cuenta estos antecedentes, era de evidente conveniencia para los menores—art. 442 del Cód. Civ.

3—La operación importa un verdadero contrato de compraventa—art. 1366 del Cód. Civ.—Por regla general, los inmuebles pertenecientes á menores solo pueden venderse en remate público, no pudiendo los jueces autorizar la venta extrajudicial de dichos bienes, sino en los casos de manifiesta conveniencia, y siempre que el precio ofrecido sea mayor que el de la tasación—arts. 441 y 445 del Cód. citado.—En el caso de que nos ocupamos, la suma ofrecida en hipoteca era muy inferior al de la tasación.

4—Con diferencias de detalles, nuestro art. 1316, Cód. Civ., está



bre compra de bienes en que haya menores interesados, no comprenden á los condóminos.—Civ., tom. 7, página 396, Ser. 5<sup>a</sup>.

**Bienes muebles**—Véase: *Daños y perjuicios*, 25.

**Bienes presentados**—Véase: *Inhibición*, 7.

**Bienes propios**—Véase: *Nulidad*, 6; *Esposa*, 4.

1. **Bienes públicos**—El uso que el Estado concede de bie-

tomado de los arts. 1395 y siguientes del Código de Napoleón, cuya interpretación demuestra que las prohibiciones se refieren á cosas que se hallan enteramente en el dominio de los menores, corporaciones, etc., pero no á cosas comunes de éstos y de los guardadores ó administradores, quienes no pierden los derechos que les da su posición de condóminos.—Laurent, tom. XXIV, núm. 45.

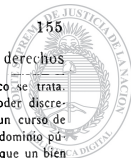
1.—Una empresa de trenvías se presentó deduciendo interdicto de retener porque el Intendente Municipal había ordenado el levantamiento de una de las dos vías que le fueron concedidas. La Intendencia se fundaba para ello en una ordenanza del año 1886, la cual establece el ancho de las calles que permiten dos vías y que siendo la calle—se trataba de Piedad—más angosta, no era permitido sino una sola vía. La empresa se amparaba, 1º en que habien doreclamado, ante el Intendente, de esa resolución, no se hizo lugar, levantándose la vía como estaba ordenado, por lo que la empresa entabló interdicto de despojo ante el Juzgado del Dr. Garay, Secretaría de Giménez, el que fué fallado en favor de la empresa el 4 de Agosto de 1861, y cuya sentencia fué confirmada por la Cám. el 24 de Oct. del mismo año, reponiéndose, en consecuencia, la vía levantada fué repuesta. 2º Que según la comunicación que adjuntaba la Intendencia Municipal, le ordenaba el levantamiento de la vía dentro de 24 horas, bajo apercibimiento de levantarse por la Oficina de obras públicas, y que, fundado en el art. 2495 del Cód. Civ., entablaba el interdicto de retener, pues la empresa ha estado en posesión desde hacia 17 años y se trataba de inquietarse en dicha posesión. El Juez de 1.ª Inst. declaró procedente el interdicto, siendo revocado por la mayoría de la Cám., fundándose en que, el art. 574 del Cód. de Proc. dice: «Para que tenga lugar el interdicto de retener, se requiere: 1º que el que lo intente se halle en actual posesión; 2º que se haya tratado de inquietarlo en ella, por actos materiales que espresarán en la demanda.» Como se ve, para que tenga lugar el interdicto de retener, es necesario que el que lo in-

nes de dominio público, es revocable por el mismo, en  
tente se encuentre en actual posesión y que haya sido turbado en  
ella. Dando por sentada que ha existido turbación, solo queda que  
averiguar, si concurre el otro extremo, esto es, si la empresa se halla  
en actual posesión de la cosa sobre que versa el interdicto. Cuando  
el inc. 1.º del art. citado habla de posesión, se refiere necesariamente  
á la que define el Cód. Civ. La empresa sostiene que el Gobierno  
enajenó en su favor parcialmente el uso de la vía pública por don-  
de hace circular sus coches, y que está en posesión de esa vía. El  
art. 2351 del Cód. Civ., dispone: «Habrá posesión de las cosas, quan-  
do alguna persona, por sí ó por otro, tenga una cosa bajo su poder,  
con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad.»  
El art. 2352, agrega: «El que tiene efectivamente una cosa, pero  
reconociendo en otro la propiedad, es simple tenedor de la cosa, y re-  
presentante de la posesión del propietario, aunque la ocupación de  
la cosa repose sobre un derecho.» Como complementos de ambas  
disposiciones, el art. 2480—Cód. citado—prescribe que la posesión  
para dar derecho á las acciones posesorias, no debe ser precaria, si-  
no á título de propietario. Entonces, para que proceda en nuestro  
caso el interdicto apuntado, es menester que la empresa posea la vía  
de tramway de que se trata, con intención de someterla al ejercicio  
de un derecho de propiedad, *animus domini*. Si la posesión que la em-  
presa invoca tiene ese carácter habrá de prosperar su acción: mas, si  
es precaria, tendrá que seguir la suerte de las demandas injustas.  
Por los contratos que corrían agregados á los autos, el Gob. de la  
Prov. de B. Aires, no enagenó el uso de la calle Piedad; acordó sim-  
plemente á la empresa del tramway una concesión de uso de la vía  
pública, al objeto que se indica. Dichos contratos le acuerdan el  
derecho de usar de la vía pública, no le dan en manera alguna la pose-  
sión civil á título de dueño, como puede demostrarse con los princi-  
pios pertinentes de esta doctrina. Las calles son bienes del dominio pú-  
blico—art. 2340, inc. 7.º—Las personas particulares tienen el uso y  
goce de los bienes públicos del Estado ó de los Estados, pero esta-  
rán sujetas á las disposiciones de este Cód. y á las ordenanzas ge-  
nerales ó locales—art. 2341, Cód. Civ.—El codificador enseña en la  
nota puesta á ese art., que tales derechos son esencialmente tempora-  
rios, porque la existencia á perpetuidad de los mismos no sería una  
simple modificación sino una verdadera destrucción de la propiedad.  
Los bienes del dominio público, son inalienables é imprescriptible, co-  
mo que están fuera del comercio—arts. 953, 1167 y 1327, Cód. Civ.—



la época y forma que lo considere necesario, sin que

El dominio público y el dominio del Estado, son dos nociones distintas que no deben confundirse. Respecto del primero, el Estado no tiene sino derechos de custodia y administración en su calidad de poder público administrador, ó persona de derecho público, y no puede enajenar. Respecto del segundo, tiene la propiedad en las condiciones de un particular, en su calidad de persona jurídica, y puede gravar á perpetuidad ó enajenar. Pradier Fodéré, estudiando este punto, condensa así su pensamiento: «Los bienes que hacen parte del dominio público, pertenecen á todos, en cuanto al goce. El Estado, guardián de los intereses de todos, no tiene sobre esos bienes sino derechos de vigilancia y de administración. El dominio público es esencialmente inalienable é imprescriptible.» *Droit administratif*, Cap. XII. Véase también A. Batbié, *Droit public et administratif*, tom. 5º, núms. 331 y 332. Goyena hace notar, que en los bienes del dominio público, el uso pertenece á todos y la propiedad á ninguno, por no ser susceptibles de propiedad privada, y que el Estado no ejerce en ellos sino un derecho de protección para asegurar su goce á todos.—Comentario del art. 483, proyecto del Código Civil para España.—El Estado, con arreglo á la doctrina precedente, no podía enajenar el uso de la calle Piedad, ni total ni parcialmente. Es por eso que se limitó á hacer lo único que le era permitido, á efectuar una concesión de uso de la vía pública, con el carácter temporario que el Cód. Civ. impone, en el art. 2480 y nota antes citada. Es así como el Gobierno no enajenó el suelo que ocupa la Empresa con su vía; es así que ese suelo no es tampoco prescriptible; luego la Empresa, por más que tenga, como tiene, una concesión de uso, no puede sostener legalmente que posee, *animus domini*, la vía. Es evidente que falta en el caso presente este elemento esencial, que hace viable una acción posesoria. La Empresa había dicho, que no pretendía el dominio de la calle, pero sí la posesión y uso de sus vías, adquiridas mediante un contrato, y que á salvaguardar ese derecho se dirigía su acción. Pero precisamente esa posesión del derecho de uso, del que cree no poder ser privada, es de índole precaria y revocable, como lo establecen claramente el art. 2341 y su nota. La teoría predominante en el terreno doctrinario, es también que las concesiones del género de la que nos ocupa, ó que versan sobre bienes del dominio público, llevan siempre implícitas las condiciones de ser modificadas ó revocadas por el poder administrador, toda vez que así lo aconseje el interés público, sin que los concesionarios puedan impedirlo á nombre de derechos adquiridos ú otra consideración



el usuario pueda alegar, contra la resolución, derechos

análoga, que no podría primar cuando del orden público se trata. Pradier Fodéré, en el lugar citado, expresa: «Incumbe al poder discrecional de la administración, fijar la destinación pública de un curso de agua, de un edificio ó un terreno, y colocarlos así en el dominio público. El Gobierno tiene también el derecho de declarar que un bien deja de hacer parte de este dominio, desde que no sea más necesaria su destinación.» El jurisconsulto Laurent, cuyo criterio siempre levantado y clarovidente domina todas las cuestiones, resume la doctrina sobre el particular, con motivo de estudiar especialmente las concesiones hechas á los ribereños sobre usos de aguas en los ríos navegables ó flotables. En tratándose de bienes del dominio público, ellos son regidos por idénticos principios. La tesis que Laurent sustenta, sobre usos de aguas de los ríos navegables, por los ribereños, es perfectamente aplicable al uso de las calles ó vías públicas que hagan los particulares en virtud de una concesión. En el núm. 255, tom. 7º, *Droit Civil Français*, el citado autor razona de esta manera: «Los ríos navegables no son susceptibles de apropiación, y las concesiones que la administración hace á los ribereños, no pueden transmitirles un derecho de propiedad sobre las aguas; toda concesión queda subordinada al interés general, del cual el Gobierno es el guardián, de ahí se sigue, que las concesiones hechas á los ribereños, son siempre revocables; y si ellas son revocadas, el Estado no debe ninguna indemnización á los ribereños, puesto que no les arrebató ningún derecho. La Corte de Casación de Bélgica, ha deducido de ahí esta consecuencia: que los ribereños no tienen acción posesoria contra el Estado. En efecto, las acciones posesorias no pueden ser deducidas más que por aquellos que poseen á título no precario, y la posesión de los ribereños, de un curso de agua navegable, es precaria en el sentido de que la concesión, en virtud de la cual ellos usan de las aguas, pueden serles siempre retirada. Una otra consecuencia del mismo principio, es que los ribereños no pueden quejarse de ser turbados en su posesión, cuando el Gobierno hace trabajos en los ríos navegables, con un objeto de utilidad general: este es su derecho y su deber, y no se le puede objetar que, causando un perjuicio á los ribereños, lesiona sus derechos, pues ellos no tienen derecho que oponer al Estado, de quien tiene su goce precario.» «En el caso sometido á la Corte de Casación, el Ministerio público había sustentado conclusiones contrarias. El consideraba, que las concesiones hechas á los ribereños, les confería un derecho real, derecho de que no podía privárseles sino mediante una





poseorios, ni interponer recursos que tengan por base la posesión.—Civ., tom. 4, pág. 320, Ser. 6ª.

justa y previa indemnización, puesto que venía á resultar una extra-espropiación por causa de utilidad pública. Esto era desconocer la naturaleza de estas concesiones, y los derechos que el Estado tiene como guardián del dominio público. Los ríos navegables no están en el comercio, y el Gobierno no puede enajenarlos; tampoco puede gravarlos con un derecho real, porque el derecho real es una desmembración de la propiedad. La concesión de un derecho real, es una enajenación parcial, y el Estado no tiene más el derecho de enajenar las aguas navegables parcialmente ni totalmente. Si, pues, los ribereños no tienen un derecho real sobre los ríos navegables, no se puede decir que el estado debe espropiarles, cuando les priva de un goce que no les había acordado sino bajo la reserva de modificar y aun de revocar esas concesiones, si la utilidad pública así lo requiriera.» Goyena, en el lugar citado, ocupándose de concesiones de bienes del dominio público, formula esta opinión: «Las concesiones mismas no serán sino un acto de policía y administración, revocable cuando no subsistan ya los motivos porque fueron hechas, ó cuando las circunstancias exijan disposiciones diferentes y aun contrarias. No son enajenaciones absolutas, no pueden ser, ni son más que concesiones precarias, facultades revocables cuando lo exijan el interés y las necesidades públicas.» En el sentir de Batbié, toda concesión ó autorización del Estado á favor de un particular ó de una empresa, que descansa sobre el dominio público, es un principio revocable—*ad nutum*; tom. 5º, núms. 378 á 412, obra citada.—Como resultante de lo que queda espuesto, tenemos que la concesión que el Gobierno de la Prov., hizo á la Empresa de tramway, para circular sus coches por la calle nombrada, es de naturaleza revocable, y no dá la Empresa concesionaria acciones posesorias, por el hecho de ser precarios los derechos emergentes de la concesión. La concesión tiene que subordinarse al interés y á las necesidades públicas de actualidad, que aconsejan á la Mun. á revocarla, mandando levantar la vía ó rieles de la referencia. Es un principio consagrado por el art. 5º del Cód. Civ., que ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público, y revisten este carácter las ordenanzas que la Mun. dicta sobre viabilidad. La Empresa adujo otro argumento: «Que al celebrar el contrato, el poder público procedió en su carácter de persona jurídica, y que como tal, tiene que someterse á todas las consecuencias de dicho contrato, sin que le sea dado proceder en seguida como poder

**Bienes reivindicados — V.: *Administrador, 8; Donación, 2.***

público, dejando sin efecto por sí y ante sí, el convenio; y que, en consecuencia, si se considera tener derecho para hacer levantar la vía, ha debido ocurrir á la justicia ordinaria.» Este es un concepto erróneo, de todo punto.» La concesión ó autorización que dió origen al litigio, es un acto esencialmente administrativo ó de gobierno, desde que él importa el ejercicio de la facultad de reglamentar el uso de las vías públicas, que corresponde al poder administrador. Al efectuar el referido acto, el Gobierno de la Prov. de Bs. Aires obró como poder público administrador, y no como persona jurídica. En derecho público administrativo, se conocen dos categorías de bienes: bienes del dominio público y bienes del dominio del Estado, como ya se hizo notar, división que también la establece el Cód. Civ., en los arts. 2340 y 2342. — Pradier-Fodéré, lugar citado. — Dejose sentado, asimismo, que sobre los bienes del dominio público, como son las calles el Estado, no tiene más que derechos de vigilancia y administración, pues que están fuera del comercio, y son, por lo tanto, inalienables é imprescriptibles. — Pradier-Fodéré, lugar citado. — Finalmente se dijo que en relación á los bienes del Estado, éste tenía pleno y exclusivo goce en el carácter de persona jurídica, y que en esa calidad podría grabarlos ó enajenarlos en las condiciones de un simple particular. — Pradier-Fodéré, lugar citado. — Si esta entidad que se llama el Estado, reviste una doble personalidad, según la doctrina de Pradier-Fodéré y de los más afamados tratadistas, una personalidad de derecho público para todo acto que tenga atinencia con los bienes de dominio público, y otra de derecho privado ó jurídico para los actos que solo se rocen con los bienes del dominio del Estado; si la concesión afecta un bien del dominio público, es al parecer de toda evidencia que el Gob. de la Prov. procedió, en ese acto, como poder público administrador. De ahí se desprende, que no es justa la queja de la Empresa de que la Mun. sucesora del Gob. de la Prov., proceda como poder público, á dejar sin efecto por sí y ante sí la concesión de referencia. Se hacía este otro argumento: «Que en derecho, no siempre es indispensable la posesión Civil para dar lugar á las acciones posesorias»; y se recuerda en apoyo de esta tesis las disposiciones contenidas en los arts. 2876 y 2950 del Cód. Civ., por las cuales el usufructuario y el usuario gozan de dichas acciones, no obstante de no poseer las cosas con la intención de adquirirlas como dueños.» A ser exacto que estos arts. consagran el principio sustentado en el argumento, ellos estarían en contradicción con lo que preceptúan los arts. 2351, 2352 y 2480,



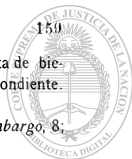
1. **Bienes secuestrados**—La reivindicación de los secuestrados en virtud de un delito, debe ejercitarse ante el juez que los tenga á su disposición.—Crim., tom. 8, pág. 286, Ser. 3<sup>a</sup>.

1<sup>a</sup>. **Bienes de terceros**—No procede el levantamiento del embargo por simple oposición, si se funda en privilegios acordados por la ley, aun cuando los bienes pertenezcan á terceros.—Civ., tom. 5, pág. 246, Ser. 5<sup>a</sup>.

**Bienes testamentarios**—V.: *Bienes hereditarios*, 9 y 10.

que exigen la condición *sine qua non* que se posea á título de dueño, para poder interponer acciones posesorias. El doctor Vélez previene la objeción en la nota al art. 2480, en éstos términos: «Se dirá que el usufructuario, sin ser propietario, tiene las acciones posesorias, pero el usufructuario es *juris-possessor*: es un poscedor precario respecto á la cosa que posee á nombre del otro, y no precario en su calidad de *juris-possessor*, pues que ejerce su derecho como derecho distinto, como una fracción de la propiedad, que para él constituye un *dominio juris*.» Puede verse sobre este punto á Laurent, núm. 365, tom. 11. Iguales reflexiones conviene al usuario, ya que el contrato de uso no es más que un usufructo restringido. Es por las circunstancias especiales que apunta el mismo codificador, que la ley concede al usufructuario y al usuario, acciones posesorias, á pesar de no ser poseedores de la cosa *animus domini*. Mirando dichas disposiciones legales desde otro punto de vista, ellas no podrían considerarse sino como una escepción á la regla general que fijan los arts. 2351, 2352 y 2480 del Cód. Civ. Ahora bien: los casos, ó las leyes de escepción son de interpretación estricta; lo que nos coloca en la imposibilidad legal de hacer una aplicación analógica de los arts. 2876 á 2950 al caso presente. Las concesiones de que se trata, están por su naturaleza sugetas á principios de derecho público, mientras que el usufructo y el uso que tienen lugar entre particulares, se rigen únicamente por el derecho común.

1<sup>a</sup>—Se trata del embargo de bienes muebles sugetos al privilegio del locador,—art. 3881, del Cód. Civ. y 445 del Cód. de Proc.—Para sustraer al embargo esos muebles sugetos á privilegio, se requiere comprobar que el privilegio no existe, todo lo que debe ser materia de tercera deducida en forma.



1. **Bienes vendidos**—El boleto de compraventa de bienes muebles, debe otorgarse en el sello correspondiente.—Com., tom. 8, pág. 183, Ser. 3<sup>a</sup>

**Bienes vendidos**—Véase: *Comprador*, 15; *Embargo*, 8; *Honorarios*, núm. 5.

1<sup>a</sup>. **Bigamia**—El delito de bigamia debe castigarse con cuatro años y medio de penitenciaría.—Com., tom. 8, pág. 434, Ser. 3<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Boleto de compraventa**—Privado, no puede fundar ninguna acción que tenga por base la existencia de un contrato.—Civ., tom. 5, pág. 264, Ser. 5<sup>a</sup>.

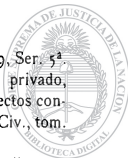
2. **Boleto de compraventa**—Privado, solo da derecho á exigir su conversión á escritura pública; el reconocimiento de su autenticidad, en juicio, no basta para convertirlo en instrumento público.—Civ., tom. 6, pág. 127, Ser. 5<sup>a</sup>.

3. **Boleto de compraventa**—Aun cuando las partes consientan y admitan la eficacia del boleto privado de compraventa, los Tribunales deben de oficio rechazar la demanda que no exija como requisito previo su conver-

1<sup>a</sup>—Art. 143 del Cód. Pen.

1<sup>b</sup>—El boleto privado no prudece más efecto legal que el que le concede el art. 1185; esto es, solo autoriza á exigir que sea reducido á escritura pública, pues sin ella *no queda concluido* el contrato que las partes se proponen celebrar. Y bien, si el contrato de compraventa, *no ha quedado concluido* como tal contrato, por la falta de escritura pública, ¿cómo puede dar margen á una acción emergente de él? Si al contrato le falta algo para que la ley lo reputa perfeccionado, es evidente que mientras esa omisión no se subsane, no puede producir ninguno de los efectos propios del contrato perfecto. Esta es la jurisprudencia sentada siempre por la mayoría de la Cám. Véase: Inst., tom. 7º, verb. *Boleto de compraventa*, 2, 4, 7 y 8; y *Comprador* 5; tom. 6º, verb. *Boleto de compraventa*, 9, 12, 13 y 16; y *Acción de escrituración* de este, tom. 8º.

3—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase el núm. precedente, y Verb. *Acción de escrituración*, 1.



sión á escritura pública.—Civ., tom. 7, pág. 279, Ser. 5ª.

4. **Boleto de compraventa**—Por documento privado, aun reconocida su autenticidad, solo produce efectos contra terceros, desde su presentación en juicio.—Civ., tom. 2, pág. 308, Ser. 6ª.

5. **Boleto de compraventa**—Nombrado el escribano y fijado el término para el otorgamiento de la escritura ción del boleto, debe archivar el expediente.—Civ., tom. 4, pág. 54, Ser. 6ª.

6. **Boleto de compraventa**—Convertido en instrumento público, el boleto privado de compraventa, debe conde- narse al demandado al cumplimiento definitivo del con- trato.—Civ., tom. 4, pág. 360, Ser. 6ª.

7. **Boleto de compraventa**—Debe rechazarse la acción sobre cumplimiento ó rescisión de un contrato de com- praventa de inmuebles, si se funda en un boleto privado, solo puede demandarse la reducción del instrumento pri- vado á escritura pública.—Civ., tom. 7, pág. 304, Ser. 6ª.

8. **Boleto de compraventa**—Siendo la conversión del boleto simple, en escritura pública, una condición ineludi- ble para discutir sobre la nulidad ó validez del contrato de compraventa de inmuebles, las convenciones que so- bre eliminación de este requisito establezcan las partes, carecen de valor legal.—Civ., tom. 8, pág. 144, Ser. 6ª.

---

4—Art. 1035 del Cód. Civ.

5—Porque con estas medidas queda terminado el juicio.

6—El boleto privado fué escriturado, exigiéndose después la escritura definitiva del inmueble. Llenado así el requisito del art. 1184, inc. 11 del Cód. Civ., el cumplimiento del contrato se impone—art. 1197, ibid.

7—De acuerdo con los núms. 1 y 2.

8—Porque según la Cám., las disposiciones que rijen sobre las for- mas de los contratos son de orden público, y por consiguiente, el acuerdo de partes, no puede producir el efecto de dar por salvadas las formalidades que bajo pena de nulidad exige la ley.

**Boleto de compraventa**—Véase: *Contrato de compraventa*, 6; *Acción*, 1; *Escritura pública*, 2 y 2<sup>b</sup>; *Nulidad*, 5; *Escrituración*, 2; *Bienes vendidos*, 1.

1<sup>a</sup>. **Boleto de impuesto**—Debe rechazarse la escepción de inhabilidad de título, si tratándose de boletos de impuestos, el ejecutado reconoce su obligación y el pago hecho por el ejecutante—Civ., tom. 5, pág. 219, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Bolsa**—Véase: *Arreglos privados*, 1.

1<sup>b</sup>. **Boticario**—El ejercicio de farmacéutico, no importa

1<sup>a</sup>—Según los arts. 726, 727 y 728 del Cód. Civ., pueden hacer el pago todos los que tengan algún interés en el cumplimiento de la obligación, quedando éstos con el derecho de pedir al deudor el valor de lo que hubiesen dado en pago.

1<sup>b</sup>—Esta cuestión fué resuelta por mayoría de votos, constituida la Cám. en Tribunal de Interlocutorias, fundándose en que, en virtud de lo dispuesto en el art. 2º del Cód. de Com., debe considerarse que el farmacéutico no reviste el carácter de comerciante. El punto ha sido siempre controvertido. Lepoitvin, tomando por punto de partida un precepto jurídico que hace más al caso, como lo es el que contiene el art. 8º, inc. 1º, en la parte que establece que es acto mercantil la adquisición de una cosa mueble para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado en que se adquirió, ó después de darle otra forma de mayor ó menor valor, dice, que esto no debe entenderse sino de un trabajo que tiene por objeto perfeccionar la mercadería sin desnaturalizar la sustancia. En otros términos, agrega, para que la compra sea acto de comercio, es necesario que la mercadería no deje de ser el objeto principal, que la elaboración no sea sino un accesorio. Los farmacéuticos venden sin duda productos nuevos que ellos fabrican, pero lo que constituye en realidad el valor de las preparaciones farmacéuticas, es la ciencia del farmacéutico y no las materias primas que entran en su composición. Namur, respondiendo á la pregunta que se hace, de si los farmacéuticos ejecutan actos de comercio comprando y vendiendo drogas, dice: desde luego el estado del farmacéutico, á diferencia del negocio, no es libre para todos, no se le puede ejercer sino después de exámenes prescritos por la ley, y estos exámenes exigen largos estudios. Los conocimientos comprobados por el diploma y las preparaciones farmacéuticas forman incontestablemente la cosa principal; pues es en razón de estos conocimientos y manipulaciones que el farmacéutico, revendiendo

un comercio, y en consecuencia procede la cesión de bienes del boticario—Civ., tom. 9, pág. 289, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Bóvedas**—Véase: *Bienes*, 8.

**Buena fe**—Véase: *Papeles de comercio*, 1; *Acción reivindicatoria*, 4; *Prescripción*, 7.

sus drogas convertidas en medicamentos, realiza un beneficio relativamente más considerable que el realizado en el comercio libre. En resumen, como dice Nouguiet, la farmacia es la hermana de la medicina, y se puede agregar que no es la hija del comercio. La minoría sostuvo la tesis contraria diciendo: «Que si bien los actos que comunmente practican los farmacéuticos, en el ejercicio de su profesión, dan lugar á las controversias que en todo tiempo se han suscitado acerca de su naturaleza y efectos mercantiles.—Dalloz, verbo *Actes de commerce*, núms. 106 y 107,—es de notoriedad, y en el caso *sub judice* lo revela el inventario de las existencias de la farmacia del ocurrente, que independientemente de los actos propios y exclusivos de su profesión, realiza otros, con la frecuencia requerida, para reputarlos habituales, que por sí solos constituyen al que los celebra en comerciante—arts. 1º y 2º del Cód. de Com.—La provisión de los artículos enumerados en la primera parte del referido inventario, está demostrando que el ocurrente ejercía habitualmente actos de comercio, pues no otra cosa importa la adquisición de esas mercaderías para revenderlas en el mismo estado y condición en que fueron compradas por él, como podría hacerlo cualquier otro que no tuviera título académico—art. 8º, inc. 1º del citado Cód.—Respecto de estos actos, el farmacéutico hace operaciones análogas á las que se practican en el ramo de droguería, sin más diferencia de que los hace al por menor. El mismo recurrente, además, ha considerado como acto de comercio, la compraventa de la farmacia, pues el contrato respectivo fué estenlido y otorgado ante un escribano del fuero comercial, según se comprueba por la escritura presentada. El hecho de que se exija á los farmacéuticos preparación científica para su desempeño, para la garantía contra los riesgos, y que el ejercicio de tal profesión por persona que no estuviese así autorizada podría traer, no puede preponderar sobre la clasificación legal de comerciante que debe atribuirse al farmacéutico que hace su profesión habitual de la venta de artículos, ya sea en la misma forma que los adquirió, ya en otra que les dé mayor valor.»





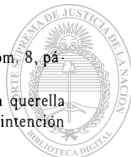
1. **Calumnia**—Impresa, su acusación, debe deducirse ante el juez del lugar en que se haga la publicación—Crim., tom. 7, pág. 312, Ser. 3ª.

2. **Calumnia**—La retractación del acusado por calum

1—Esta cuestión fué resuelta por mayoría, en la Cám. En 1ª Inst. se dijo que: «Resultando del diario acompañado, que la publicación acusada no ha sido hecha en esta Capital, ocurra esta parte donde corresponda.» La mayoría que confirmó la resolución dijo que, no desconociéndose el fundamento invocado en el auto recurrido, y deduciéndose que aquél no puede establecer que el conocimiento de la causa haya de corresponder al juez de esta Capital, de conformidad á la regla de derecho «de que el lugar donde se ejecuta el acto estimado como delictuoso, es el que determina la jurisdicción.» La disidencia sostuvo que de los mismos términos de la publicación, resulta que el delito de calumnia escrita ha sido cometido en esta Capital. El diario acompañado, «El Pueblo», dice: «La Sociedad Nacional de Farmacia establecida en Buenos Aires ha pasado la siguiente circular á todos los farmacéuticos de la provincia.» Es, pues, en esta Capital y no en La Plata, que aparece cometido el delito de calumnia escrita, el que siempre hubiese existido aun cuando no hubiera reproducido «El Pueblo» la circular. «El Pueblo» hasta aquí, lo único que parece haber hecho, es reproducir el escrito calumnioso, hecho y dado á luz aquí, y como aquí están también los autores, es evidente la jurisdicción de estos tribunales para conocer de él.

2—Esta resolución fué dictada por mayoría de votos, fundándose en





nia hace obligatorio el sobreseimiento —Crim., tom. 8, página 79, Ser. 3ª.

3. **Calumnia** —Procede el sobreseimiento de la querella por calumnia, cuando resulta probada la falta de intención dolosa —Crim., tom. 8, pág. 85, Ser. 3ª.

4. **Calumnia** —En las querellas por calumnia, no procede el sobreseimiento —Crim., tom. 8, pág. 117, Ser. 3ª.

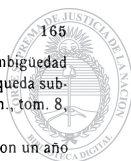
5. **Calumnia** —El conocimiento de las querellas de calumnia, corresponde al juez del crimen —Crim., tom. 8, pág. 213, Ser. 3ª.

los arts. 177 y 186 del Cód. Pen.; y 595 del Cód. de Proc. Crim. La minoría dijo, que no teniendo otro alcance el art. 595 del Cód. de Proc., que el de establecer la oportunidad de la retractación, y debiendo resolverse el caso por la disposición de la ley de fondo, que legisla sobre los delitos y determina las causas que eximen de pena, es de considerarse que el art. 186, resuelve el punto en cuestión, en sentido negativo á la parte acusada: 1º Porque la querella es por calumnia, y solo el primer inc. abraza este delito, pero no se trata del perdón del ofendido; 2º Porque el inc. que le sigue se limita á las injurias, y es á éstas tan solo que se refiere el último inc., al introducir el medio de las retractaciones; y 3º Porque su propia redacción no autoriza diversa inteligencia, pues de otra suerte no se habría empleado el concepto *en los mismos*, ya que el art. viene hablando espresamente de la calumnia y de la injuria, habría bastado decir «si consiente en hacer una retractación pública», con lo cual se habría salvado toda dificultad.

3—Este caso es igual al anterior, y fué resuelto por mayoría del Tribunal, sosteniendo siempre la minoría que el sobreseimiento no procede en las causas de calumnia, salvo el caso del art. 595 del Cód. de Proc. Crim.

4—Esta resolución fué dictada por unanimidad de votos, pero fundándose los Camaristas en razones distintas. Cuatro de ellos dijeron, que no procedía el sobreseimiento porque en los delitos de calumnia no hay sumario, y aquél solo puede tener lugar en los juicios en que se formen sumarios. Otros dijeron que el escrito presentado no era bastante á los efectos de considerarlo como una retractación.

5—Arts. 178 del Cód. Pen., y 28, inc. 2º del Cód. de Proc. Crim.



6. **Calumnia**—La falta de personería por ambigüedad del poder especial para querellar de calumnia, queda subsanada por la ratificación del poderdante—Crim., tom. 8, pág. 202, Ser. 3<sup>a</sup>.

7. **Calumnia**—Encubierta, debe castigarse con un año de prisión—Crim., tom. 8, pag. 420, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Calumnia**—Véase: *Acusación calumniosa*, 1; *Acusador*, 1; *Apoderado*, 5; *Autor*, 1; *Daños y perjuicios*, 27.

1<sup>a</sup>. **Calle pública**—El uso de calle pública, para la colocación de vías de transporte, se rige especialmente por las disposiciones del derecho público; las del derecho común que definen y reglamenten el contrato de uso entre las particulares, no son aplicables á dichas concesiones—Civ., tom. 4, pág. 320, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Cámara**—Véase: *Costas*, 22; *Revocatoria*, 7; *Tutor*, 2.

**Campo mensurado**—Véase: *Comprador*, 9.

**Cantidad**—Véase: *Consignación*, 13.

1<sup>b</sup>. **Cantidad demandada**—El juez que entiende en la demanda, es el competente para entender en la reconvención, cualquiera que sea la cantidad—Civ., t. 5, p. 26, Ser. 6<sup>a</sup>.

2. **Cantidad demandada**—Después de regulados los ho-

6—Porque la ratificación equivale al mandato, y desautoriza y desvanece toda duda respecto á la extensión de los poderes conferidos.

7—Arts. 178 y 183 del Cód. Pen.

1<sup>a</sup>—Véase la nota del verb. *Bienes públicos*, 1.

1<sup>b</sup>—Esta resolución se fundó en las leyes 4<sup>a</sup>, 10, y 32, tit. 2<sup>o</sup>, Part. 3<sup>a</sup>; F. S. C. N., causa CXXX; y Jur. Civ., tom. 13, pág. 264, Ser. 4<sup>a</sup>. La Cám. de lo Com. ha establecido la competencia del Juzgado, aunque se contrademande mayor suma, pero se entiende deducida tan solo hasta el límite establecido por la ley, por que la jurisdicción por razón de cantidad, es de orden público, y no puede ser alterada por voluntad de las partes. Véase: Inst., tom. 4<sup>o</sup>, verb. *Incompetencia*, 1.

2—Después de terminado un juicio, el apoderado obtuvo una regulación de sus honorarios, los que fueron estimados en una suma de la



norarios por el juez del expediente, su cobro debe exigirse ante la jurisdicción que corresponde según la cantidad—Civ., tom. 6, pág. 5, Ser. 6<sup>a</sup>.

1<sup>a</sup>. **Cantidad indeterminada**—En documentos de garantía, el valor del sello no debe regularse por la cantidad total garantizada sino como cantidad indeterminada—Com., tom. 8, pág. 69, Ser. 3<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Cantidad líquida**—No procede juramento estimatorio para fijar el monto de la deuda, si de autos resulta cantidad líquida—Civ., tom. 5, pág. 52, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Cantidad líquida**—Véase: *Embargo preventivo*, 13 y 37; *Excepción de inhabilidad*, 12 y 15; *Mandamiento*, 2 y 3; *Nulidad*, 12; *Sentencia*, 10; *Intereses*, 5 y 8; *Bienes hereditarios*, 20; *Contrato bilateral*, 4.

1. **Capital realizado**—Las sociedades anónimas, deben abonar el impuesto fiscal, no por el capital realizado, sino por el que según sus estatutos puedan tomar en préstamo—Com., tom. 8, pág. 34, Ser. 3<sup>a</sup>.

competencia de la Justicia de Paz. Iniciada ejecución por su importe, el ejecutado opuso la excepción de incompetencia, fundándose en que el conocimiento del asunto correspondía á la Justicia de Paz. Así lo resolvió la Cám., fundándose en que no tratándose de una incidencia del juicio principal, ya terminado, pues las cuestiones surgidas entre mandatario y mandante, una vez hecha la estimación correspondiente de los servicios de aquél, no tienen relación alguna con lo que fué materia de lo principal—art. 403 del Cód. de Proc.—Debiendo en consecuencia el actor ocurrir ante quien corresponda—art. 430 citado.

1<sup>a</sup>—Por razones especiales al caso, se consideró que no se podía precisar el *quantum* de la garantía, y entonces la suma debía considerarse como indeterminada, según el art. 2º de la Ley de sellos de 1892.

1<sup>b</sup>—El art. 220 del Cód. de Proc. no es aplicable, porque se trataba de una rendición de cuentas presentada por un mandatario, habiéndole exigido el mandante la comprobación de algunas partidas no reconocidas. No habiéndolas comprobado no procedía el juramento estimatorio.



**Capital de la República**—Véase: *Impuestos*, 9.

1<sup>a</sup>. **Cargo**—El cargo puesto por escribano público, basta para declarar como presentado un escrito dentro del término—Civ., tom. 8, pág. 262, Ser. 6<sup>a</sup>.

2. **Cargo**—Debe tenerse por válido, el cargo puesto por escribano público, al escrito antes de vencerse el término, en tanto se justifique la falsedad—Civ., tom. 7, pág. 100, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Cargo**— Véase: *Corredor*, 3.

1<sup>b</sup>. **Carta**—Su apoderamiento, y el de documentos aje-

1<sup>a</sup>—El cargo fué puesto por un escribano de registro. El juez dijo, que ese cargo era bastante para tenerlo por presentado en tiempo, sin alegar ningún otro fundamento. La Cám. confirmó el auto *por sus fundamentos*. Hemos combatido esta doctrina, porque entraña una corruptela introducida por la Cám. en materia de procedimiento. Puede verse tratada esta cuestión, en el verb. *Actuario*, núm. 2, del tom. 7<sup>o</sup> de la Inst. La S. C. N. se ha pronunciado en sentido contrario al del sumario. Véase: tom. 12, pág. 9, Ser. 2<sup>a</sup>; tom. 20, pág. 366, Ser. 2<sup>a</sup>; tom. 7<sup>a</sup>, pág. 53, Ser. 4<sup>a</sup>.

2—También esta providencia fué confirmando otra de 1<sup>a</sup> Inst., *por sus fundamentos*. El escrito fué presentado á un escribano de registro á las 4.30 p. m., cuando aun estaba abierta la Secretaría actuarial, pero según el Inferior esa circunstancia en nada podría influir respecto de la validez del cargo, puesto que no se dijo de falsedad en la enunciación contenida, de haber sido presentado al escribano de registro á la hora espresada, y además que en este caso este señor obra, cuando así procede, dentro del límite de sus atribuciones. En tal concepto, reuniendo las condiciones necesarias para su validez, el acto cuya anulación se pretende, hace plena fe en cuanto á la fecha y hora de la presentación del escrito. Estos fundamentos bien sofisticos y faltos de solidez están contestados en los casos citados en el número precedente.

1<sup>b</sup>—El art. 173 del Cód. Pen. dice, que el que se apodere de papeles ó cartas de otro, será castigado, etc. Lo que la ley tiene en vista es el apoderamiento, al que puede llegarse por los diferentes medios que se emplearan para la adquisición de las cosas ajenas. No puede entonces hacerse aparecer como un hurto especial é individua-



nos, constituye el delito de descubrimiento y revelación de secretos; no puede calificarse de hurto—Crim., tom. 8, pág. 5, Ser. 3ª.

2ª. **Carta**—La fuerza probatoria de una carta presentada y reconocida durante la prueba, solo puede resolverse al dictar sentencia—Civ., tom. 7, pág. 102, Ser. 6ª.

3. **Carta**—Misiva, aun debidamente reconocida, no puede fundar un procedimiento ejecutivo—Civ., tom. 3, pág. 58, Ser. 6ª.

4. **Carta**—De terceros, que no son parte en el juicio, no debe ser reconocida—Civ., tom. 8, pág. 273, Ser. 5ª.

5. **Carta**—No formando prueba las cartas de los interesados en el juicio de divorcio, no debe decretarse su reconocimiento—Civ., tom. 8, pág. 273, Ser. 5ª.

**Cartas**—Véase: *Divorcio*, 18.

1. **Carta de pobreza**—Debe aprobarse la información y espedirse carta de pobreza, si se justifican los extremos de la ley—Civ., tom. 6, pág. 242, Ser. 5ª.

2ª. **Carta de pobreza**—Para litigar, solo puede otorgar-

---

lizado, al hecho de apoderarse de papeles ó cartas de otros, porque entonces siempre se llegaría á descubrir dos delitos, donde la ley no ha querido que exista más que uno.

2ª—De acuerdo con el principio general sentado en el art. 108 del Cód. de Proc.

3—Si bien en la carta se reconocía la obligación, no era ella exigible, pues carecía de plazo. El art. 465 requiere que la deuda sea además de líquida, exigible, para que proceda la acción ejecutiva.

1—Art. 70 de la Ley de Mat. Civ.

2ª—Los extremos que deben justificarse para obtener la declaratoria de pobreza, son la pobreza misma, la imposibilidad material de obtener recursos, y la necesidad; siendo entendido que no obsta á la declaratoria, la circunstancia de que aquel que la solicita tenga apenas como procurarse su subsistencia—art. 595, Cód. de Proc.—Estos requisitos que la ley reputa indispensables, deben comprobarse por medio de testigos cuyo número no puede ser menos de tres—art. 594.—Si bien se



se, si la información llena los requisitos de la ley—Civ., tom. 10, pág. 383, Ser. 6ª.

3. **Carta de pobreza**—Justificados por información, los extremos de la ley, debe otorgarse carta de pobreza—Civ., tom. 7, pág. 104, Ser. 6ª.

4. **Carta de pobreza**—Justificados por información, los extremos de la ley, debe concederse carta de pobreza—Civ., tom. 6, pág. 96, Ser. 6ª

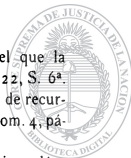
5. **Carta de pobreza**—No basta la caución juratoria

había presentado el número de testigos que se requiere por la ley, todas sus declaraciones no eran bastantes para comprobar los requisitos que se exigen para acordar la declaración de pobreza. Uno de los testigos decía, que el padre del peticionante dejó varios bienes; y los otros dos testigos declararon que vivía de su trabajo, sin establecer que el producto de éste fuera tan insignificante que apenas le alcanzase para su subsistencia. Si se aceptaran, pues, esas declaraciones como medio de comprobación, tendríamos que todo aquel que no tiene rentas, y viviera únicamente de su trabajo, y tuviera necesidad de litigar, recurriría al medio socorrido de hacerse declarar y autorizar para litigar como pobre, lo que no ha sido seguramente el espíritu de la ley.

3—Según opinión de la Cám., se comprobó que el interesado era pobre de solemnidad, en cuyo caso procedía la aplicación del art. 592 del Cód. de Proc.

4—Se comprobó que el que pedía carta de pobreza estaba empleado sin determinar el sueldo; y además dos de los testigos presentados manifestaron que eran deudores del mismo. Sin embargo, se declaró haberse comprobado los extremos requeridos por el art. 595 del Cód. de Proc., y se autorizó al postulante a litigar por pobre.

5—El Inferior, dando cumplimiento á la expresa disposición del art. 444 del Cód. de Proc., ordenó que el demandante diera caución para asegurar su responsabilidad por los daños y perjuicios que el embargo, si hubiera sido solicitado sin derecho, pudiese ocasionar. Esa caución fué prestada por el demandante, ofreciendo la responsabilidad de sus propios bienes. Entretanto, de autos resultaba la más completa falta de responsabilidad, pues constaba que el demandante se había visto en la necesidad de solicitar carta de pobreza para litigar en el juicio. En consecuencia, el embargo no puede subsistir bajo una responsabilidad que en realidad no existe, cuando el art. 444 establece *in terminis*, co



como fianza para el embargo preventivo, si el que la presta litiga con carta de pobreza—Civ., t. 5, p. 22, S. 6<sup>a</sup>.

6. **Carta de pobreza**—Justificada la carencia de recursos, debe otorgarse la carta de pobreza—Civ., tom. 4, página 415, Ser. 6<sup>a</sup>.

7. **Carta de pobreza**—Para pedirla no se requiere cláusula especial en el poder—Civ., tom. 4, pág. 431, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Carta de pobreza**—Véase: *Declaratoria de pobreza*, 1.

**Casa**—Véase: *Depósito*, 5; *Esposa*, 5; *Desalojo*, 12.

1<sup>a</sup>. **Casa de comercio**—El comprador del activo y pasivo de una casa de comercio, tiene derecho á exigir del vendedor todos los comprobantes de obligaciones á su favor que no hayan sido esceptuados del contrato—Civ., tom. 1, pág. 34, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Casa de comercio**—V.: *Activo y pasivo*, 1; *Personería*, 7.

1<sup>b</sup>. **Casa locada**—Las mejoras hechas en ella, son de pro-

piedad del actor, para que el embargo se decrete bajo la sola responsabilidad del actor, que éste sea reconocidamente abonado. En contra, véase: Inst., tom. 3<sup>o</sup>, verb. *Declaratoria de pobreza*. Sin embargo, hay diferencia entre ambos casos, porque en el del sumario se trata de un embargo preventivo y en el otro del arraigo del juicio.

6—Los testigos declararon que sabían el estado de pobreza del recurrente y que trabajaba de peón, ganando apenas lo necesario; lo que decían constarles por el conocimiento personal del mismo y por ser público entre todos sus compañeros. Esto constituye la justificación de los extremos requeridos por el art. 395 del Cód. de Proc.

7—La facultad de promover esta gestión, se encuentra comprendida dentro de los términos generales de un poder, y no está enumerada entre las que requieren cláusula especial—art. 1881 del Cód. Civ.

1<sup>a</sup>—Esta obligación es una consecuencia del contrato celebrado.

1<sup>b</sup>—La sentencia decía así: «En cuanto á la reclamación de las mejoras verificadas en la casa por el locatario, y que éste reconoce en su contestación haberlas retirado, pienso igualmente que la sentencia no es justa, pues la cláusula 6<sup>a</sup> del contrato determina espresamente, que debían quedar á beneficio del propietario. La defensa alegada por el demandado es á todas luces sofisticada y maliciosa, pues la fra-

riedad del locador, si así se estipuló en el contrato, aun cuando para construirlas no se hayan llenado las condiciones que aquél exigía —Civ., tom. 10, pág. 170, Ser. 6ª.

2. **Casa locada**—Los desperfectos que provienen del uso natural y apropiado de la cosa, no pueden fundar una acción por daños y perjuicios —Civ., t. 10, p. 170, S. 6ª.

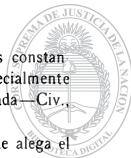
3. **Casa locada**—La prueba testimonial, cualquiera que

se «con consentimiento por escrito del propietario» no tiene, ni puede tener el carácter de una condición, como lo pretende el demandado, porque si así fuera, resultaría que dependía de su voluntad el cumplimiento de su obligación de dejar á beneficio del locatario las mejoras que hiciere, desde que bastaba no cumplir la verdadera condición impuesta para hacer mejoras, el previo consentimiento por escrito en cada caso, para burlar y defraudar á su acreedor, y sería absurdo suponer que una condición establecida en favor exclusivo del acreedor había de redundar en su perjuicio con solo eludir su cumplimiento. La regla de derecho invocada por el actor: «*Nemo fraus sua vel dolus patrocinari debet*», es de perfecta aplicación al caso presente, pues la circunstancia de tratarse de mejoras hechas sin el previo consentimiento del propietario, todo lo que demuestra que es el fraude y el dolo con que procedió el locatario al verificarlas, desde que habiéndose convenido que todas las mejoras que se hicieran quedarían á beneficio del locador, y la frase subsiguiente «y con consentimiento por escrito», significa claramente que solo bajo esa condición podían hacerse, pero no que si se hacían sin ese requisito, dejarían de corresponderle al propietario. Al no requerir al locatario el previo consentimiento para hacer las mejoras que reconoce haber hecho, obró con fraude porque faltó al contrato, ley de las partes; pero ese fraude no puede aprovecharle en el sentido que pretende, porque burla el derecho del actor, expresamente estipulado de hacer suyas, sin cargo alguno, todas las mejoras que en su concepto procuran un beneficio á la finca locada, y á cuyo fin se reservaba la facultad de conceder ó no en cada caso el consentimiento para que se hicieran. Es ésta, al menos á mi juicio, la única, la racional y lógica interpretación de la cláusula 6ª del contrato, y en consecuencia, opino que el demandado debe pagar el valor de las mejoras indbidamente levantadas.»

2 —Arts. 1561, 1573 y 1615 del Cód. Civ.

3 —En el expediente de desalojo, existía la diligencia del oficial de





sea su profusión, no basta para modificar las constancias de una diligencia de desalojo en que especialmente se hagan constar los deterioros de la casa locada—Civ., tom. 10, pág. 170, Ser. 6<sup>a</sup>.

1<sup>a</sup>. **Caso fortuito**—Al depositario judicial que alega el caso fortuito en que pereció la cosa, corresponde justificarlo plenamente—Civ., tom. 2, pág. 401, Ser. 6<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Caución**—Siendo potestativa del Juzgado la forma de la caución, su exigencia en efectivo no causa agravio—Civ., tom. 6, pág. 353, Ser. 5<sup>a</sup>.

2. **Caución**—La resolución sobre embargo preventivo,

---

justicia, que se levantó de acuerdo con lo convenido por los interesados en un acta de juicio verbal, en la que se hizo constar «que las paredes de la casa baja y el piso de la cocina estaban deteriorados; que aquéllas habían sido revocadas con material diferente y con blanqueos diversos, y que en la casa alta faltaban vidrios y algunos desgastes de paredes.» En el informe pericial se manifestaba que se notaban como posturas, aunque de pequeñas dimensiones en los reboques del piso bajo. El hecho mismo de haberse suscrito por los interesados la diligencia referida, en que se hacían constar los deterioros que había, y en cuyo acto se recibió, recién de las llaves, el propietario, importa el reconocimiento más completo, quedando de esa manera demostrada la existencia de daños ó deterioros en la propiedad en la época en que la desocupó el inquilino. La prueba testimonial tendente á demostrar lo contrario, no podía destruir en manera alguna la resultante de la confesión de la parte interesada.

1<sup>a</sup>—Demandado el depositario de un carruaje, por devolución del mismo, alegó que había perecido por un incendio, que era un caso fortuito—art. 2203 del Cód. Civ.—La prueba de esta escepción ó defensa correspondía al demandado que la alegaba—Ley 3<sup>a</sup>, tít. 3<sup>o</sup>, Part. 3<sup>a</sup>; Bonnier, tom. 1<sup>o</sup>, pág. 30.

1<sup>b</sup>—Solicitada una inhibición, el juez la decretó «previa caución en efectivo» que debía prestarse. Se apeló de este auto, confirmando la Cám. fundada en el art. 444, del Cód. de Proc.

2—Porque si se declarase la improcedencia del embargo preventivo, sería inútil la presentación de la caución.

es previa á la presentación de la caución—Civ., tom. 10, pág. 100, Ser. 6ª.

**Caución**—Véase: *Embargo*, 16 y 17; *Embargo preventivo*, 38; *Carta de pobreza*, 5; *Acreedor prendario*, 1.

**Causal**—Véase: *Posiciones*, 11; *Venia supletoria*, 2.

**Cedente**—Véase: *Competencia*, 11.

1. **Cédula**—La citación á los testigos debe hacerse en oportunidad, aun cuando la parte no haya suministrado papel sellado para las cédulas—Civ., t. 5, p. 201, Ser. 5ª.

2. **Cédula**—Solo deben notificarse en esta forma, las providencias que la ley determina—Civ., tom. 4, página 15, Ser. 6ª.

3. **Cédula**—La devolución de los autos á la oficina, debe notificarse por cédula, si procede la reapertura del término de prueba—Civ., tom. 4, pág. 409, Ser. 6ª.

4. **Cédula**—El apercibimiento hecho al comprador, de dársele por desistido, debe notificársele personalmente ó por cédula—Civ., tom. 4, páo. 426, Ser. 6ª.

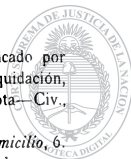
---

1—Porque el art. 182 del Cód de Proc. dispone que los testigos deben ser citados en papel común. Parece que la Cám. de lo Civ. quiere derogar la jurisprudencia sentada antes de ahora en sentido contrario al del sumario. Véase: Inst., tom. 7º, verb. *Papel sellado*, 4; tom. 5º, mismo verb., núm. 4; *Cédula*, 2; y *Diligencias de prueba*, 29.

2—Arts. 32 y 33 del Cód. de Proc.

3—Esta es la jurisprudencia constantemente establecida por ambas Cámaras, tanto la Civ. como la Com.; doctrina que hemos combatido siempre porque ella entraña una violación de los art. 32 y 33 del Cód. de Proc. Véase: Inst., tom. 7º, verb. *Cédula*, 2; Puede verse la jurisprudencia sentada en el tom. 9º, pág. 282, Ser. 4ª, Cám. Com.

4—Ningún fundamento trae la Cám. al respecto, solo dijo que «no habiendo sido notificado el interesado personalmente ó por cédula, como corresponde, de la intimación que se le decretó, en cuyo caso no procede el apercibimiento del que de autos resulta no haber tenido conocimiento.» A esto debe contestarse diciendo, que la enunciación contenida en el art. 33 del Cód de Proc. es taxativa: ella no puede ampliarse á otros casos no determinados espresamente.



5. **Cédula**—Si el auto aprobatorio fué notificado por cédula y consentido, no debe modificarse la liquidación, aun cuando ésta se haya hecho saber por nota—Civ., tom. 3, pág. 70, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Cédula**—Véase: *Notificación*, 10, 11 y 14, *Domicilio*, 6.

1. **Celos**—Para que ellos puedan ser calificados como causa atenuante, debe existir vínculo legal; el concubinato no puede ser tomado en consideración para darles origen—Crim., tom. 7, pág. 25, Ser. 3<sup>a</sup>.

1<sup>a</sup>. **Certificados**—Los espedidos por las Obras de Salubridad sobre deuda por provisión de agua, tienen fuerza ejecutiva—Civ., tom. 8, pág. 323, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Cesación de pagos**—Véase: *Liquidación*, 10.

1<sup>b</sup>. **Cesión**—Debe declararse improcedente la escepción de incompetencia por corresponder el conocimiento de la causa al fuero federal, si la letra no pertenece originariamente á quien pueda invocarlo por vecindad ó nacionalidad, y no por cesión ó mandato—Com., tom. 8, pág. 151, Ser. 3<sup>a</sup>.

2. **Cesión**—Si existe oposición, el cesionario no puede

---

5—Porque el auto pasa en autoridad de cosa juzgada.

1<sup>a</sup>—Tratándose de un servicio de agua, declarado obligatorio por el art. 1º de la Ley núm. 1917, de Nov. 29 de 1886, y constando que ese servicio se ha prestado, según resultaba del instrumento público exhibido, que hace plena fe de las anunciaciones en él contenidas, con arreglo á lo dispuesto en los arts. 979, inc. 5º, y 944 del Cód. Civ., y teniendo en cuenta lo dispuesto en los art. 464 y 465, inc. 1º del Cód. de Proc., es evidente que proceda ejecución por su importe.

1<sup>b</sup>—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la S. C. N. Véase: tom. 3º, pág. 255, Ser. 1º; y tom. 4º, pág. 315, Ser. 2º.

2—En un juicio testamentario se presentó el cesionario de los derechos de un heredero, acreditando la cesión con la correspondiente escritura, solicitando se le tuviese por parte; el juez proveyó de conformidad. Entonces otro cesionario del mismo heredero que ya se había presentado antes, también con su escritura de cesión de los mismos

ser tenido por parte, sin previa audiencia y resolución —Civ., tom. 7, pág. 336, Ser. 5ª.

3. **Cesión**—Consentida la providencia en que se tiene por parte al cesionario, no puede exigirse continúe la intervención del cedente —Civ., tom. 6, pág. 246, Ser. 6ª.

5. **Cesión**—Cualquiera que sea el monto de la indemnización por daños y perjuicios que demande el damnifi-

derechos, se opuso á que así y sin más trámite se le hubiese tenido como parte, cuando él ya lo había sido, en su carácter de cesionario de los mismos derechos hereditarios. Es evidente la justicia del su-  
mario, por cuanto de lo contrario, resultaría una doble representación del mismo heredero. Dada la situación que ya tenía creada el cesionario que primero se presentó, es fuera de duda que el juez no pudo aceptar la intervención del último presentado, sin más trámites y sin oír al otro presentado que ya tenía en la sucesión su personería reconocida, y teniéndose en cuenta las responsabilidades que pueden importar tanto para el cedente como para los cesionarios, la doble enajenación de los mismos derechos.

3—Una vez consentida una providencia, no es posible volver sobre ella.

5—Las dificultades que presentan, por lo general, las causas relativas á indemnización de daños y perjuicios causados por delitos ó cuasidelitos del derecho civil, son de tal naturaleza, en lo referente á la fijación de su monto, que por más que la ley lo haya librado al prudente arbitrio de los jueces, es materialmente imposible el arribar á un resultado que satisfaga, no ya los encontrados intereses de los litigantes, pero ni aun siquiera la propia conciencia del magistrado. ¿Cómo determinar, en efecto, el valor de la vida humana? ¿qué regla de criterio ha de adoptarse, para apreciar pecunariamente el agravio moral que causa la muerte violenta de un padre, de un hijo, ó de un esposo? El mismo daño material en lo que al porvenir se refiere, ¿cómo es posible precisarlo con exactitud siquiera aproximada? El contrato de cesión que el mandante hace á un tercero de todas sus acciones y derechos pendiente de un litigio, por una suma determinada y comprobada por escritura pública, demuestra que el interesado se tiene por suficientemente compensado de los daños y perjuicios inferidos por el hecho ilícito, con la suma que reciba en pago de la cesión, y ante esta apreciación hecha por el propio interesado, no sería justo obligar al responsable á indem-



cado, solo puede acordársele la suma en que los estime al ceder sus derechos á un tercero—Civ., t. 8, p. 58, S. 6ª.

**Cesión**—Véase: *Crédito*, 3; *Escepción*, 6; *Contrato de cesión*, 1; *Bienes embargados*, 5.

1. **Cesión de bienes**—El martillero con casa abierta, no puede hacer cesión de bienes—Civ., t. 10, p. 376, Ser. 6ª.

2. **Cesión de bienes**—Deben mandarse agregar las ejecuciones que fundan la cesión de bienes, antes de levantar el auto de concurso—Civ., tom, 10, pág. 422, Ser. 6ª.

3. **Cesión de bienes**—Las deudas de una testamentaria liquidada, deben gestionarse en la parte que corres-

---

zar una suma mayor. Parece entonces que en justicia y equidad debe adoptarse el precio de la enajenación, como monto razonable de los daños y perjuicios.

1—El art. 8º, inc. 3º del Cód. de Com. declara acto de Comercio toda operación de remate. El art. 87 declara que los martilleros y rematadores son agentes auxiliares de comercio, y como tales sujetos á la jurisdicción y leyes mercantiles; y en su inc. 2º, coloca á los martilleros ó rematadores entre los mismos. De acuerdo con el art. 1379, última parte, estos agentes pueden ser declarados en quiebra, y no pueden hacer cesión de bienes como los no comerciantes, ante la jurisdicción civil - art. 718, Cód. de Proc.

2—Hecha cesión de bienes por el deudor, un acreedor se opuso á ella, y habiéndose citado por edictos á los acreedores ninguno concurrió al concurso. El juez. entonces desechó la cesión, por cuanto esa falta de presentación de acreedores era una presunción de que no existían, siendo así que la Ley 1ª, tit. 15. Part. 5ª, establece que: «Puede desamparar sus bienes todo ome que es libre, *non auiendo de que pagar lo que deve.*» Apelada por el concursado esta resolución, fué revocada porque no se había dado cumplimiento á la preceptuado en el art. 720 del Cód. de Proc., y porque el concursado había determinado con precisión las varias ejecuciones que se le seguían con espresión de los jueces que entendían en ellas y las secretarias actuarias.

3—Aun cuando el crédito era contra la sucesion ésta se hallaba ya dividida, correspondiendo en consecuencia que la acción se dirija contra cada heredero por la cuota parte que le corresponda—art. 634, inc. 4º del Cód. de Proc.

ponda ante el concurso de los herederos que hayan hecho cesión de bienes—Civ., tom. 8, pág. 314, Ser. 6ª.

4. **Cesión de bienes**—Debe compelerse al deudor á hacer cesión de bienes, si un acreedor quirografario justifica los extremos que exige la ley—Civ., tom. 7, página 124, Ser. 6ª.

5. **Cesión de bienes**—Aun cuando el Síndico en ejercicio haya hecho cesión de bienes, no debe declararse la nulidad de lo actuado—Civ., tom. 4, pág. 391, Ser. 6ª.

6. **Cesión de bienes**—Solo después de declarada la procedencia del concurso comercial, puede formarse contienda de competencia con el que entiende en el juicio de cesión de bienes—Civ., tom. 3, pág. 102, Ser. 6ª.

7. **Cesión de bienes**—Solo procede el concurso civil, si el que hace cesión de bienes, no reúne los requisitos que la ley exige para ser considerado comerciante—Civ., tom. 1, pág. 78, Ser. 6ª.

8. **Cesión de bienes**—Puede ser retractada, en tanto no

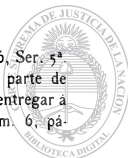
4—Art. 719 del Cód. de Proc.

5—Se trataba de un abogado que había hecho cesión de bienes, y que fué nombrado Síndico de un concurso. Se dijo de nulidad, de todo lo obrado, en virtud de esta causal. El Fiscal de la Cám. opinó que: «Tratándose de un cargo que el abogado desempeña en su carácter profesional, la circunstancia de haber hecho cesión de bienes no lo inhabilita para ejercer la abogacía.» La Cám. dijo que: aun en el caso de haber sido incorrecto el nombramiento objetado, no existiría motivo ni causa legal para invalidar lo actuado con intervención del síndico nombrado, porque sería de aplicación analógica el precepto contenido en el art. 1897 del Cód. Civ., según el cual no es lícito impugnar la validez de los actos ejecutados por incapaces, cuando lo han sido á nombre y en provecho de un tercero.

6—De acuerdo con los principios sentados en los arts. 410, 411 y siguientes del Cód. de Proc.

7—El art. 718 del Cód. de Com. dice, que el deudor no comerciante puede hacer cesión de bienes. Véase el art. 1379 del Cód. de Com.

8—La Cám. de lo Civ. en un caso análogo—Scarpa y Cª.—de Agosto



cause perjuicio á terceros—Civ., t. 8, pág. 396, Ser. 5ª.

9. **Cesión de bienes**—Las bóvedas forman parte de los bienes que el concursado está obligado á entregar á sus acreedores, en caso de concurso—Civ., tom. 6, página 72, Ser. 6ª.

**Cesión de bienes**—Véase: *Boticario*, 1.

1. **Cesión de herencia**—La cesión de derechos hereditarios, no comprende los adquiridos con posterioridad á la fecha de la escritura—Civ., tom. 8, pág. 326, Ser. 5ª.

**Cesión de herencia**—Véase: *Acto civil*, 1.

27 de 1892, resolvió que la cesión de bienes verificada espontáneamente por el deudor puede ser retractada, si con ello no se causa perjuicio ó lesiona el derecho de tercero, porque al hacerlo el deudor ejercita una facultad acordada por la ley y no el cumplimiento de una obligación ineludible. El levantamiento del concurso cuando aun no se ha producido alguno de sus efectos, por no haberse presentado acreedor alguno, no afecta intereses de terceros, que en todo caso tienen siempre espedita la acción que les acuerda el art. 719 del Cód. de Proc.

9—Es cierto que por el derecho antiguo las tumbas no estaban en el comercio de los hombres, porque se las consideraba lugares sagrados, pero actualmente no es así. En los diarios de la Capital se encuentran constantemente avisos de remates judiciales de sepulcros en el Cementerio del Norte, ya sea por ejecuciones seguidas, ya por divisiones de condominio. Por otra parte, la Municipalidad acepta las transferencias á título de oneroso aunque el sepulcro tenga cadáveres.

1—Un heredero cedió las acciones y derechos que le correspondían en la herencia de sus padres. Las hermanas del cedente habían fallecido antes de la cesión sin sucesión y por consiguiente le correspondía asimismo la parte de las hermanas en la herencia de sus padres. El cesionario sostuvo que la cesión comprendía tanto la herencia que le cupo al cedente en la sucesión de sus padres como los que después adquirió como heredero de sus hermanas. Se resolvió que la cesión solo comprendía la herencia de los padres. El título de cesión hablando de la sucesión de los padres decía: que esa venta se refería á todos los bienes que pertenezcan al cedente, por razón de esas herencias de cualquier naturaleza que fueran, las que se determinaban con toda precisión, y por consiguiente, sin otorgarle otro título que autorizase incluir la parte de herencia que al cedente correspondía por fallecimiento de sus hermanas.



**Cesionario**— Véase: *Bienes hereditarios*, 2

**Circunstancias**— Véase: *Atentado á la autoridad*, 2; *Homicidio*, 4, 6 y siguientes; *Lesiones*, 1 y 3; *Robo*, 1 y siguientes; *Hurto*, 2; *Acumulación*, 2; *Estafa*, 2.

**Citación**— Véase: *Cédula*, 1; *Edictor*, 2; *Interrogatorio*, 1; *Información*, 9; *Papel común*, 1; *Interdicto*, 1; *Domicilio*, 1; *Escepción de nulidad*, 1.

1<sup>a</sup>. **Citación de remate**—Las manifestaciones ó escritos del ejecutado anteriores á la citación de remate, no enervan su derecho para oponer la escepción de incompetencia—Civ., tom. 2, pág. 406, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Citación de remate**— Véase: *Incompetencia*, 1; *Recusación*, 17; *Bienes embargados*, 1 y 6.

**Ciudadano argentino**— Véase: *Escepción de incompetencia*, núm. 2.

**Clandestinidad**—Véase: *Interdicto de obra nueva*, 2.

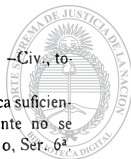
**Cláusula**— Véase: *Contrato de compraventa*, 4; *Carta de pobreza*, 7; *Auto aprobatorio*.

1<sup>b</sup>. **Cláusula especial**— No procede cláusula especial

1<sup>a</sup>—Se trataba de la escepción de incompetencia por razón de la nacionalidad de las partes. Los escritos presentados antes de la citación de remate, no pueden importar prórroga de esa jurisdicción, por que el art. 12 de la Ley nacional de 14 de Septiembre de 1863 se refiere al extranjero que contesta la demanda sin oponer la escepción de declinatoria. En los juicios ejecutivos, la oportunidad de oír al demandado es al hacérsele la citación de remate, y recién entonces es cuando puede hacer valer las escepciones que crea tener—art. 483 del Cód. de Proc.

1<sup>b</sup>— El auto que fué confirmado por sus fundamentos decía: Del mismo mandamiento devuelto por el interesado consta que se ha facultado al oficial de justicia para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio, y si bien no se ha incluido la facultad especial que solicita el interesado para violentar la persona del demandado, es porque tal medida contraria á los mismos fines de la ley en materia de embargo, no se halla autorizada por disposición legal alguna; se entiende





prendaria en el mandamiento contra el deudor —Civ., tomo 6, pág. 328, Ser. 5<sup>a</sup>.

1<sup>a</sup>. **Cobrador fiscal**—Su nombramiento justifica suficientemente el mandato, para ejercerlo judicialmente no se requiere poder en forma—Civ., tom. 3, pág. 10, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Código de Procedimientos**—Véase: *Espediente*, 3.

1<sup>b</sup>. **Coherederos**—La inhibición general que pese sobre uno de los coherederos, no obsta á la libre disposición de la cosa común; debe subsistir el embargo sobre la parte de precio que corresponde al inhibido—Civ., tom. 10, pág. 56, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Coherederos**—Véase: *Herederos*, 10.

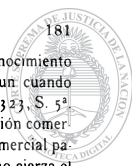
1<sup>c</sup>. **Comerciante**—Corresponde á la jurisdicción civil, el juicio sobre cobro de un préstamo, si el deudor no es comerciante—Civ., tom. 6, pág. 288, Ser. 5<sup>a</sup>.

que tales facultades son concedidas al solo objeto de poner en secuestro los bienes que se hallen en poder del deudor, y en su domicilio, como lo establece el art. 457 del Cód. de Proc., pero no para ejercer actos de violencia contra la persona. Además, el procedimiento de apremio es de interpretación restrictiva, y el Juzgado no puede autorizar una medida que no está espresamente acordada por la ley.

1<sup>a</sup>—Así lo tiene también resuelto lo S. C. N. en el caso del Fisco Nacional con P. A. Costa. Igual doctrina se sienta en el verb. *Escritura Pública*, 8.

1<sup>b</sup>—Porque lo contrario importaría atribuir á la inhibición un alcance y efecto más estenso que el que produciría un gravamen directo impuesto por el mismo comunero—arts. 2678 y 2682 del Cód. Civ.—Por otra parte, los efectos de la inhibición decretada no se malogran ni contrarian por el hecho de enajenarse un bien en que el inhibido tenga una parte indivisa, siempre que queden subsistentes sobre la parte del precio que le correspondiera en definitiva —argumento de los arts. 3123, 3893 y 3897 del Cód. Civ.

1<sup>c</sup>—El art. 558 requiere, para que el mutuo ó préstamo sea considerado mercantil, que por lo menos el deudor tenga el carácter de comerciante.



2. **Comerciante**—Si el acto es civil, el conocimiento del litigio corresponde á esta jurisdicción, aun cuando el demandado sea comerciante—Civ., t. 6, p. 323, S. 5ª.

3. **Comerciante**—Corresponde á la jurisdicción comercial el conocimiento del juicio, si el acto es comercial para el demandante, aun cuando el demandado no ejerza el comercio—Civ., tom. 5, pág. 189, Ser. 5ª.

4. **Comerciante**—La demanda fundada en una locación de servicios, corresponde á la jurisdicción civil, aun cuando el demandado sea comerciante—Civ., tom. 5, página 203, Ser. 5ª.

5. **Comerciante**—El cobro de la locación de servicios, corresponde á la jurisdicción civil, aun cuando el demandado sea comerciante—Civ., tom. 6, pág. 33, Ser. 6ª.

6. **Comerciante**—Para que proceda el concurso ante la jurisdicción comercial, es indispensable el ejercicio del comercio por el concursado—Civ., t. 4, pág. 39, Ser. 6ª.

7. **Comerciante**—Un establecimiento médico, cualquie-

---

2—De acuerdo con otros casos resueltos fundados en la ley respectiva. Véase: Inst., tom. 6º, verb. *Acto civil*, 4.

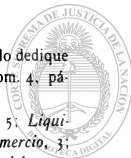
3—Véase: Inst., tom. 7º, verb. *Acto de comercio*, 4.

4—De acuerdo con otros casos resueltos. Véase: Inst., tom. 7º, verb. *Contrato de arrendamiento*, 5.

5—De acuerdo con el caso precedent:.

6—La segunda parte del art. 1511. Cód. de Com. dice, que del estado de quiebra solo son susceptibles los comerciantes y colectividades que revisten este carácter.

7—Un facultativo fundó en esta ciudad un establecimiento médico-hidroterápico llegando al estado insolvencia. Se discutió si debía reputarse comercial el establecimiento de que era director y propietario, ó si se trataba de una industria civil, y como consecuencia, si el juicio de concurso correspondía á una ú otra de las dos jurisdicciones que conocen de esa diversa índole de actos jurídicos. El Juez de 1ª Inst. se pronunció por la jurisdicción civil. El Cód. de Com., en las diferentes clasificaciones de comerciantes que hace en los arts. 2º, 3º y 4º, no



ra que sea la especialidad á que su director lo dedique no importa el ejercicio del comercio—Civ., tom. 4. página 39, Ser. 6ª.

**Comerciante**—Véase: *Libros de comercio*, 4 y 5; *Liquidación*, 10; *Cesión de bienes*, 7; *Acto de comercio*, 3; *Concurso*, 6; *Boticario*, 1; *Competencia*, 11; *Quiebra*, 4.

**Comerciantes**—Véase: *Acto ilícito*, 3; *Agentes auxiliares*, 1; *Libros de comercio*, 2; *Préstamos*, 1; *Quiebra*, 3; *Acto ilícito*, 8.

#### 1. **Comisario**—Las correcciones disciplinarias á im-

comprende indudablemente las operaciones de la categoría de las que absorven la actividad de un médico. El art. 1º da el concepto genérico del comerciante, haciendo de ello profesión habitual. ¿Qué es un acto de comercio? El Cód. se ha atenido de condensar en fórmula precisa el concepto de esa locución. Enumera simplemente los actos declarados comerciales; y en ninguno de los once incisos del art. 8º encuentra ubicación natural el hecho de un médico que funda y dirige un establecimiento hidroterápico.

1.—La policía es una institución de carácter administrativo que presta su concurso al poder judicial, porque éste necesita de la fuerza para hacer cumplir sus resoluciones y para facilitar su acción en la represión de los delitos; pero esto no implica que la policía sea repartición dependiente del poder judicial; debe prestarle su concurso, debe cumplir sus resoluciones, pero conserva su independencia orgánica y la jerarquía establecida en sus reglamentos. De la terminante disposición del art. 194 del Cód. de Proc. Crim., resulta que las faltas de los comisarios de policía, en no dar cuenta al juez de las causas inmediatamente de los delitos públicos, ó no remitir las diligencias de los sumarios de prevención, deben ser corregidas disciplinariamente por el superior que corresponda á requisición del juez. En el inc. 2º del mismo artículo, se establece que en caso de reincidencia podrá pedir la destitución ó suspensión del funcionario, lo que revela que tanto las correcciones disciplinarias cuanto la reprensión de la reincidencia escapa á la jurisdicción del juez, desde que están conferidas á la autoridad jerárquica superior. Cualquiera que sea la buena doctrina que debiera imperar, estando ella adoptada y definida en la ley, debe aplicarse su disposición.

nerse á los comisarios por faltas en el desempeño del cargo de auxiliares del poder judicial, deben ser pedidas por el juez al jefe de policía—Crim., tom. 8, pág. 277, Ser. 3<sup>a</sup>.

1. **Comisión**—Si no consta de autos convención sobre comisión del martillero, debe pagarse la que fija el arancel de rematadores—Civ., tom. 6, pág. 222, Ser. 5<sup>a</sup>.

2. **Comisión**—El martillero tiene derecho á cobrar media comisión, si el remate se suspende á pedido de los interesados—Civ., tom. 6, pág. 386, Ser. 5<sup>a</sup>.

3. **Comisión**—El tutor no puede retener el importe de su comisión, sin que haya sido regulada—Civ., tom. 9, pág. 306, Ser. 6<sup>a</sup>.

4. **Comisión**—Debe pagarse á los martilleros la comisión que fija el arancel, si no existe convenio previo en contrario—Civ., tom. 7, pág. 61, Ser. 6<sup>a</sup>.

5. **Comisión**—Aun cuando no se verifique el remate judicial por falta de postores, el martillero tiene derecho á la comisión que le fije el Juzgado—Civ., tom. 7, página 89, Ser. 6<sup>a</sup>.

1—Arancel del Trib. de Com. de 2 de Junio de 1860, que es de 2 9/10, sobre inmuebles. Véase: Inst., tom. 5<sup>a</sup>, verb. *Remate judicial*, 9, y especialmente su nota.

2—La mitad de la comisión en este caso no es procedente, sino que se fija por el juez, en atención á los trabajos realizados. Véase: Inst., tom. 6<sup>o</sup>, verb. *Comisión al martillero*, 5.

3—La comisión referida excedió del máximo establecido por el art. 451 del Cód. Civ.

4—Véase el núm. 1.

5—El Inferior no hizo lugar al pago de comisión alguna, por cuanto el remate no se verificó por falta de licitadores, de acuerdo con la jurisprudencia antes sentada por la Cám., siendo esa resolución revocada fundándose ésta en que: «Habiéndose declarado por esta Cám. que por el remate no realizado, el martillero tiene derecho á percibir una retribución proporcional á su trabajo como mandatario que es de la función que desempeña, procede lo resuelto en el sumario.»



6. **Comisión**--El cobro de la comisión del corredor corresponde á la jurisdicción civil, si no resulta indiscutible la comercial—Civ., tom. 4, pág. 18, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Comisión**— Véase: *Asamblea*, 1; *Martillero*, 1; *Bienes embargados*, 9.

1<sup>a</sup>. **Comisión investigadora**. Cualquiera que sea el objeto de la nombrada por el Poder Legislativo, carece de facultad para modificar los términos fijados por la ley para dictar sentencia los jueces— Civ., tom. 8, pág. 204, Ser. 3<sup>a</sup>.

**Comisión de salubridad**— Véase: *Multa*, 3.

1<sup>b</sup>. **Comisionista**—No cabe la acción de venta directa

6—No se probó que el actor fuese corredor ni tampoco que el demandado fuese comerciante, y no estando prohibido que el no corredor preste servicios á terceros, procurando un préstamo de dinero, de lo que se trataba, por parte de algún capitalista, parece que no es posible decidir que un asunto como el presente sea de la competencia comercial. Lo será ó nó, según lo que resulte de la averiguación de aquellos puntos, pero mientras no estén esclarecidos, es más natural inclinarse en favor de la jurisdicción civil que es la común ó general, y no por la de excepción.

1<sup>a</sup>—La resolución decía así: «Que la comisión de investigación que ha requerido la remisión original del proceso, no tiene, por el acto de su nombramiento, la facultad de suspender la jurisdicción de un tribunal ordinario, ni de inhabilitarlo para fallar la causa sometida á su decisión. Que de admitirse el procedimiento adoptado en la nota de petición de remisión, resultaría la suspensión indefinida de la jurisdicción de los Trib. ordinarios en el territorio en que ella ha sido declarada por el poder competente. Que por el art. 494 de la ley de Proc., el juez debe dictar sentencia en el término en él fijado, lo que en este proceso está inhabilitado de hacer, por haberse desprendido de la causa á requisición de dicha comisión. Se resuelve, que el Juez del crimen recabe la remisión del proceso de que se ha desprendido, sin perjuicio de que espida los testimonios que se le requieran, y proceda á dictar sentencia.»

1<sup>b</sup>—Se confesó que las mercaderías que se cobraban fueron consignadas á los demandados para que las vendiesen por cuenta de los remitentes, entonces no cabe otra acción que la que establece el art. 277

contra comisionistas ó corredores de mercaderías que deban realizarlas por cuenta de los comitentes—Com., tomo 8, pág. 118, Ser. 3ª.

**Comisionista**—V.: *Agentes auxiliares*, 1, *Comitente*, 1.

1ª. **Comitente**—Es responsable por las sumas que el comisionista, en cumplimiento del mandato, hubiese pagado á terceros—Com., tom. 7, pág. 284, Ser. 3ª.

**Comparecencia**—Véase: *Posiciones*, 8.

1ª. **Compensación**—Procede esta escepción siempre que concurren los requisitos que exige la ley para que resulte de pleno derecho—Civ., tom. 8, pág. 62, Ser. 5ª.

**Compensación**—Véase: *Escepción de compensación*, 1 y siguientes.

1ª. **Compañía de seguros**—La investigación judicial he-  
del Cód. de Com., pero no la de venta, porque á la verdad aquéllos no fueron compradores. ¿Y en virtud de qué título, se les puede imponer que paguen un precio que no se ha estipulado y que sin duda alguna está fuera de las condiciones de la convención?

1ª—Arts. 232, 233 y 276 del Cód. de Com.

1ª—Art. 818 del Cód. Civ.

1ª—Es un principio general de derecho consagrado por el art. 1197 del Cód. Civ., que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla á la cual deben someterse como á la ley misma. En virtud de este principio, es fuera de duda que los derechos y obligaciones de asegurador y asegurado deben regirse por el contrato de seguro que ambos celebren. En la póliza suscrita por el actor, no aparecían consagradas las cláusulas y condiciones del contrato, pero ellas se detallaban en un impreso agregado bajo el rubro de condiciones generales, condiciones que no fueron negadas ni desconocidas por el actor al contestar el traslado que con motivo de ese y otros documentos acompañados se le confirió. Se establecía en la segunda parte del art. 1º como condición para el derecho del asegurado, la obligación de parte de éste, de promover su demanda dentro de las dos semanas siguientes al vencimiento de los tres meses después de producido el siniestro; luego, se evidente que si esa condición no se cumplió, no existe el derecho que al cumplimiento de ella se había subordinado.



cha por una compañía de seguros para valorar el siniestro, no interrumpe el plazo pactado para la reclamación del seguro, ni por consigniente para la prescripción del derecho—Com., tom. 8, pag. 139, Ser. 3<sup>a</sup>.

1. **Competencia.**—El juez que entendió en la demanda, es competente para la ejecución del laudo arbitral—Com., tom. 7, pag. 109, Ser. 3<sup>a</sup>.

Con arreglo á la convención de las partes, caducó el derecho del actor á toda indemnización, por no haberse ajustado á lo que disponían las condiciones del seguro. Tratándose de una prescripción convencional, puede decirse con la mayor exactitud, que ese medio de extinguir las obligaciones no se había interrumpido por ninguno de los modos que autoriza el derecho y no tiene tal carácter la investigación judicial que hacía para conocer y valorar los procederes del asegurado en el desastre producido: 1º porque no se trataba de un juicio criminal, para el que no estaba autorizado el juez investigador; 2º porque aun en ese caso, de haberse promovido ese juicio, esa circunstancia no habría obstado á que el actor iniciase la acción civil, en razón de que, aun admitido que fuese aplicable el art. 1101 del Cód. Civ., su disposición clara y terminante, solo suspende la condenación en el juicio civil, hasta tanto no tenga lugar la condenación del acusado en el juicio criminal; y 3º porque además, ni ese artículo era, á la verdad, aplicable al caso, puesto que su disposición se concreta y reconoce por base la indemnización de los daños causados por los delitos, esto es, los hechos de que derivan contra la misma persona, la acción civil y la acción penal. Entonces, no teniendo excusa alguna la infracción por parte del asegurado, de las obligaciones que le conciernen de las condiciones generales del seguro, correspondía que con arreglo á la convención pactada por los contrayentes se resolviera la cuestión en la forma del sumario.

1.—Cuando se pide la ejecución de una sentencia arbitral, no se inicia un juicio nuevo sino el cumplimiento del juicio fenecido. La ejecución de la sentencia pronunciada en grado de apelación, debe sustanciarse por el juez originario á quien se devuelven los autos. Así lo tiene resuelto la S. C. N.—Ser. 1<sup>a</sup>, tom. 5º, pag. 111.—Es doctrina corriente que el juez que ha conocido en el mismo asunto, es competente para entender en él, cuando después de terminado aquél se promueve el correspondiente juicio ordinario.



2. **Competencia**-- Los jueces de mercado carecen de jurisdicción para entender en las demandas sobre cobro de pesos por compraventa de frutos del país: ellas corresponden al Juez de Comercio ó al de Paz, según su cuantía—Com., tom. 8, pág. 52, Ser. 3ª.

3. **Competencia**—La jurisdicción comercial no es competente para conocer en la demanda sobre simulación de la venta de bienes inmuebles—Com., t. 8, p. 74, Ser. 3ª.

4. **Competencia**—La ejecución de un crédito que tiene

2—La demanda fué deducida en el año 1874, por cobro de pesos, ante el Juez de 1ª Inst. del Mercado Constitución. En el escrito se decía que: «después de largos años de litigio fué anulado todo el procedimiento judicial seguido, quedando en pié solo la referida demanda.» Como esa demanda fué por cobro de una suma de dinero, y hoy los jueces de mercado solo entienden sobre entrega de ganados y frutos, sobre fletes de los transportes terrestres en que los frutos hayan sido conducidos, y sobre exactitud de precios y medidas—art. 50 de la Ley Org. de los Trib.—era evidente la incompetencia del juez del Mercado Constitución para entender en la demanda de la referencia.

3—No es posible determinar la jurisdicción del juicio de simulación, por lo que se conozca de un juicio, cuyos resultados se pretendan burlar por medio de actos de aquella naturaleza. La simulación ha de caer bajo la competencia del juez que deba conocer del asunto, según la naturaleza de los bienes, y tratándose en este caso de bienes inmuebles, debe ser la jurisdicción civil la llamada á conocer en la controversia pendiente. Porque es una acción de naturaleza civil sin que pueda atribuírsele el carácter de incidente por presentarse en el juicio que se espresa. Por lo tanto, ninguna de las disposiciones del Cód. de Proc. sobre tercería podrían invocarse para determinar la jurisdicción comercial, jurisdicción que lo es de escepción, debiendo, entonces, seguirse el fuero del demandado, por razón de la acción enunciada.

4—Esta resolución entraña en grave error jurídico. La Cám. como siempre resuelve las cuestiones de derecho ya sean ellas fáciles ó intrincadas, con todo desparpajo. El punto de procedimiento que resuelve el sumario ha sido materia de resoluciones contradictorias en la Cám. de lo Civ. Esta circunstancia debió ella tener en cuenta al resolver este nuevo caso que se traía á su conocimiento. Desgraciadamente este Tribunal poco se preocupa de que sus resoluciones sean fundadas ó no, lo





privilegio sobre un inmueble, es de la competencia del juez del lugar donde está situado—Civ., tom. 6, página 211, Ser. 5ª.

5. **Competencia**—Justificado el ánimo de volver, del causante, los tribunales argentinos son competentes para entender en la testamentaria de un fallecido en el extranjero—Civ., tom. 6, pág. 251, Ser. 5ª.

6. **Competencia**—Cualquiera que sea el domicilio del demandado, para fijar la competencia, basta su residencia en la jurisdicción del Juzgado al iniciar el juicio—Civ., tom. 7, pág. 368, Ser. 5ª.

7. **Competencia**—Consentida por las partes la providencia que somete el juicio al tribunal arbitral, no puede

que quiere es resolver. Así es que en este fallo de adujo como único fundamento que «tratándose de ejercitar un privilegio acordado por el Cód. Civ., con respecto al crédito demandado sobre el inmueble á que se refiere la demanda, es competente el juez del lugar donde esté situado.» Sin embargo, como hemos dicho, esta cuestión ha sido materia de resoluciones contradictorias dictadas por el mismo Tribunal. De acuerdo con el mismo sumario. Véase: Inst., tom. 6º, verb. *Competencia*, 3; en contra, véase: Inst., tom. 4º, verb. *Préstamo hipotecario*, 1. Lo resuelto en el sumario está de acuerdo con la opinión de la S. C. N. Véase: tom. 8º, pág. 181, Ser. 4ª.

5—Con arreglo á la doctrina establecida en nuestro Cód., el domicilio subsiste mientras no se muestra la intención de cambiarlo: es precisamente la prueba de esa intención lo único que pueda variar el domicilio anteriormente constituido. El domicilio se determina por la residencia con intención de permanecer en el lugar en que se habite—art. 91, Cód. Civ.—y la prueba producida demostró que el causante manifestó siempre su intención de volver á esta Capital, donde residió durante tantos años; es indudable que en el caso, debe aplicarse lo dispuesto en el inc. 7º, art. 90 del Cód. citado, según el cual el domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión.

6 - Art. 4º, inc. 3º del Cód. de Proc.

7 - Las partes manifestaron que estaban de acuerdo en que el juicio se sometiera á árbitros, aprobándose por el Juzgado. No es posible volver sobre lo que está ejecutoriado y pasado en autoridad de cosa juzgada,

discutirse nuevamente la competencia del juez que intervino—Civ., tom. 10, pág. 22, Ser. 6ª.

8. **Competencia**—Si la competencia se produce por inhibitoria, no procede condenación en costas contra el escepcionante—Civ., tom. 10, pág. 33, Ser. 6ª.

9. **Competencia**—El juez de la testamentaria, es el único competente para conocer en las demandas que contra ella se deduzcan—Civ., tom. 10, pág. 76, Ser. 6ª.

10. **Competencia**—Adolece de nulidad la resolución sobre competencia, si no existe en autos justificado el hecho que se invoca—Civ., tom. 9, pág. 76, Ser. 6ª.

11. **Competencia**—Debe hacerse lugar á la inhibitoria, no obstante la declaración de competencia del concurso

9—Art. 703 del Cód. de Proc.

10—El sumario no expresa con exactitud el caso resuelto. Iniciado un juicio por un cesionario y por cobro de pesos, el demandado dijo que correspondía el conocimiento del asunto al fuero federal, por ser él extranjero: el actor dijo, que esta escepción no era procedente por cuanto el art. 8º de la Ley de 14 de Set. de 1863, esceptúa el caso en que el derecho que se disputa se haya tenido por cesión ó mandato. Pero como el actor dijo, que también su cedente era extranjero, y como la escepción se resolvió sin abrirse la causa á prueba, la Cám. anuló la resolución, por cuanto habiéndose afirmado este último extremo, era necesario abrir la escepción á prueba para justificarlo, produciendo su omisión la nulidad de lo actuado.

11—El caso es el siguiente: Hecha cesión de bienes por un deudor, uno de los acreedores se opuso, alegando que la cesión debería remitirse al Juez de Comercio por ser el concursado comerciante. Fue vencido en 1ª y 2ª Inst. quedando radicado el concurso ante la jurisdicción civil. Después, otro acreedor se presentó al Juez de Comercio y allí comprobó el carácter de comerciante que revestía el concursado: entonces se ofició al Civil para que remitiera los autos, quien proveyó de conformidad diciendo, que si en el primer incidente no dio resultado la incompetencia, fué porque no se demostró el carácter de comerciante que revestía el concursado; pero que comprobado después, procedía la remisión de los autos al Juez de Comercio, para que el concursado fuese declarado en quiebra.





civil, si se demuestra que el cedente ejercía el comercio — Civ., tom. 9, pág. 103, Ser. 6ª.

12. **Competencia**—Entre tribunales de distante jurisdicción territorial, no es facultativa de las partes—Civ., tom. 7, pág. 76, Ser. 6ª.

13. **Competencia**—Corresponde al escepcionante justificar la competencia del fuero federal—Civ., tom. 3, página 80, Ser. 6ª.

14. **Competencia**—La comparecencia para diligencias

12—Por resolución de la Cám. se declaró la competencia del Juzgado de esta Cap. para entender en la demanda que promovió una heredera contra su tutor, sobre rendición de cuentas, ante el Juez de 1ª Inst. en La Plata. Los Trib. de La Plata, se declararon igualmente incompetentes, y trabado el conflicto, se elevaron los autos á la S. C. N. Este alto Trib. no resolvió la competencia, por creer que este caso no cae bajo su jurisdicción. Ante este estado de cosas, que dejaba subsistente el conflicto de competencia entre dos autoridades que se creen igualmente incompetentes para conocer de un mismo juicio, se reunieron los interesados buscando el medio de solucionar los intereses comunes, y sin entrar á reconocer ó desconocer la jurisdicción que se atribuía cada uno de los jueces, creyeron que habría conveniencia en seguir el juicio ante los Trib. de La Plata; y al efecto pidieron se sirviera ordenar se pasaran de la Cap. Federal estos autos al Juzgado de La Plata, poniendo á su disposición un depósito existente en el Banco de la Nación Argentina. No se hizo lugar á este pedido porque la prórroga de jurisdicción á que se refiere el art. 1º del Cód. de Proc., tiene por objeto facilitar la tramitación de los juicios dentro de un mismo orden judicial, es decir, dentro de los Trib. de la provincia de Buenos Aires, que juntos constituían una misma entidad. Pero esa prórroga nunca se ha considerado extensiva á la jurisdicción de distintas entidades judiciales, y por eso no se ha hecho extensiva la medida cuando se ha presentado el caso de jurisdicciones de distintas provincias ó de éstas con respecto á la Capital, que para tales efectos puede considerarse una entidad provincial.

13.—*Reus in excipiendo fit actor.*

14—El fuero federal es un privilegio que las leyes acuerdan á los extranjeros, de tal suerte, que ellos pueden renunciarla y demandar ó ser demandados ante los Trib. ordinarios de la Capital, ó de las pro-



preparatorias, importa reconocer la competencia del Juzgado, y hace improcedente la declinatoria de jurisdicción—Civ., tom. 2, pág. 114, Ser. 6ª.

**Competencia**—Véase: *Incompetencia*, 1; *Acto ilícito*, 5 y 8; *Locatario*, 1. *Bienes hereditarios*, 19, 27 y 28; *Acción personal*, 3; *Administrador*, 4; *Divorcio*, 1 y 8; *Prescripción*, 5; *Cesión de bienes*, 6; *Escepciones*, 19; *Quiebra*, 1; *Agente fiscal*, 1; *Jurisdicción*, 2 y 3; *Cantidad demandada*, 1; *Concurso*, 6; *Sentencia*, 5; *Delito*, 1; *Domicilio*, 6; *Acto comercial*, 6.

**Complacencia**—Véase: *Escepción de inhabilidad*, 4.

1. **Cómplice**—Si la publicación injuriosa se publicó como solicitada, el editor del diario no puede ser responsabilizado como cómplice—Crim., t. 7, pág. 116, Ser. 3ª.

**Cómplice**—Véase: *Adulterio*, 1.

vincias. En el caso ocurrente, la parte ejecutada había hecho manifestaciones por sí y por apoderado que importaban someterse á la jurisdicción ordinaria de la Capital, según se desprendía con toda claridad del contenido y peticiones de varios escritos fundados en el expediente. Habiendo reconocido y acatado la jurisdicción sin dejar ni siquiera á salvo sus derechos para declinar de ella en la oportunidad del procedimiento, concurren los antecedentes bastantes para declarar que no se ha entendido acojerse al fuero federal, pues habría verdadera arbitrariedad en declarar perjudicada al ejecutante, dado el acatamiento del ejecutado á la jurisdicción de que después declina. Nada importa que recién en la oportunidad de la citación de remate está autorizado para defenderse, por que con ello no desaparecen los precedentes ocurridos, encargados de demostrar, como se ha dicho, que el ejecutado había acatado la jurisdicción ordinaria renunciando al privilegio del fuero federal que las leyes le han conferido.

1.—Respecto al editor del diario en que se inserta una publicación acusada, su responsabilidad solo puede ser juzgada con arreglo al derecho común, en el caso de establecer previamente su delincuencia. Cuando el artículo acusado ha sido publicado como solicitada y no como editorial ó materiales pertenecientes á la redacción del diario, ese solo hecho no es bastante para fundar la complicidad del derecho común.



**Complot**—Véase: *Homicidio*, 5.

**Compra**—Véase: *Bienes de la esposa*, 4; *Contrato de cesión*, 1; *Prescripción*, 7; *Apoderado*, 3; *Estafa*, 1; *Simulación*, 1.

1. **Comprador**—Siempre que el rematador estralimitase las facultades que el mandatario le haya impuesto, puede ser responsabilizado por el comprador—Civ., tom. 6, página 44, Ser. 5<sup>a</sup>.

2. **Comprador**—Antes de otorgarse la escritura, no pueden extraerse fondos sin la conformidad del comprador—Civ., tom. 6, pág. 284, Ser. 5<sup>a</sup>.

3. **Comprador**—Si en autos existen referencias exac-

1—Cuando el mandatario contrata á nombre de su mandante, éste queda directamente obligado con los terceros, y por consecuencia, es contra él que deben dirigirse las acciones emergentes de las obligaciones cuyo cumplimiento le incumba por razón de aquellos actos—art. 1930 del Cód. Civ.—Pero el art. 1933, estatuye que quedará personalmente obligado el mandatario, y podrá ser demandado por el cumplimiento del contrato ó por indemnización de pérdidas é intereses, toda vez que hubiese pasado los límites del mandato, si la parte con quien contrató no conocía los poderes dados por el mandante.

2—Ninguna razón legal trae la Cám. como fundamento de esta resolución. Solo dijo que no estando escriturada la propiedad y no habiendo prestado su conformidad el comprador, no procedía la entrega de los fondos. Este caso está de acuerdo con otro. Véase: Inst., tom. 5<sup>a</sup>, verb. *Depósito judicial*, 1, en cuya nota combatimos el principio sentado por la Cám.

3—El auto de 1<sup>a</sup> Inst. que fué confirmado por sus fundamentos, decía así: «Teniendo en consideración que es inexacto que en autos no existe agregado el título de propiedad de la finca vendida, como lo expresa el comprador, pues se encuentra agregado un testimonio de aquél; que si bien éste se ha espedido al solo efecto de acreditar el título con Que el actor inició su acción, es de tener presente que con los antecedentes que él arroja ha podido dicho comprador impugnarlo dentro del término prescripto en el art. 521 del Cód. de Proc., que además se ha denunciado por el ejecutante que la copia espedida á favor del ejecutado se encuentra depositada en el Banco Hipot. de la Prov. de B. Aires.



tas sobre los títulos, el comprador en remate judicial debe objetarlos en tiempo, aun cuando no puedan ser agregados—Civ., tom. 5, pág. 149, Ser. 5ª.

4. **Comprador**—En remate judicial, solo puede desistir sin responsabilidad por deficiencias en los títulos—Civ., tom. 5, pág. 168, Ser. 5ª.

5. **Comprador**—No debe hacerse lugar al desistimiento del comprador, si los defectos de los títulos son de fácil subsanación—Civ., tom. 5, pág. 241, Ser. 5ª.

6. **Comprador**—Debe oblar el precio, aun cuando en el acto del remate manifieste comprar para un tercero—Civ., tom. 10, pág. 40, Ser. 6ª.

---

4—Para que el comprador en remate pueda desistir de la compra sin responsabilidad alguna, se requiere que los títulos adolezcan de algún vicio que no pueda subsanarse en breve tiempo.—art. 522 del Cód. de Proc.—No apuntándose vicio alguno del título, su desistimiento por otras razones que las consignadas en el art. 522 citado, no puede verificarse, sin cargar con las responsabilidades previstas por el art. 519 del Cód. citado.

5—El defecto atribuido por el comprador á los títulos de propiedad, consistía en que la escritura era de 12 de Oct. de 1866, y en las transmisiones posteriores se ubicaba aquélla en la esquina de la calle Rivadavia y Maipú, siendo así que la finca adquirida por él formaba esquina á las de Rivadavia y Chacabuco. Esta deficiencia es fácilmente subsanable, y así lo reconoció la misma parte, estableciendo que el error apuntado no tenía otra causa que una inadvertencia en que se había incurrido al otorgarse la enunciada escritura de 1866. De aquí no se infiere que puedan surgir dificultades serias para establecer la verdadera ubicación del inmueble. La opción que permite el art. 522 del Cód. de Proc., solo es procedente cuando los vicios no pudiesen subsanarse en breve tiempo, lo que no sucedía en el caso actual, según los antecedentes espuestos.

6—La Cám. no hizo lugar á la sustitución de comprador, porque en el boleto no se espresó que la compra hubiese sido hecha por cuenta de un tercero y porque el vendedor no estaba conforme con admitir esa sustitución.



7. **Comprador**—En remate judicial, no está obligado á depositar el precio, en tanto no pueda revisar los títulos —Civ., tom. 10, pág. 48, Ser. 6ª.

8. **Comprador** — Si las observaciones del comprador en remate judicial, hechas al título carecen de fundamento, deben ser rechazada —Civ., t. 10, p. 109, Ser. 6ª.

9. **Comprador**—No puede exigir la entrega del campo, mensurado y deslindado; puede optar por el desistimiento —Civ., tom. 10, pág. 353, Ser. 6ª.

10. **Comprador**—No es responsable de los intereses del precio, sino de los que correspondan á la diferencia de éste—Civ., tom. 9, pág. 52, Ser. 6ª.

11. **Comprador** — En remate judicial, no está obligado á oblar el precio, en tanto no se proceda á la mensura y ubicación del lote comprado—Civ., tom. 9, página 287, Ser. 6ª.

12. **Comprador**—Si tenía conocimiento de las mejoras llevadas á cabo por el locatario, no puede negarse á que

7.—Según lo prescribe el art. 521 del Cód. de Proc., el comprador podrá pedir, antes de hacer la oblación del precio, que se exhiban los títulos de propiedad para examinarlos, y el juez así lo proveerá, mandando que se pongan de manifiesto en la escribanía del actuario por tres días perentorios. La prescripción de este artículo no fué cumplida.

9 —Art. 522 del Cód. de Proc. En contra, véase el núm. 11.

10—El postor solo es responsable de la disminución del precio del segundo remate y de los intereses acrecidos, que es lo que establece el art. 519 del Cód. de Proc., de modo que la liquidación debe hacerse en esa forma. Deben cargarse al deudor solamente los intereses de la diferencia del precio entre el segundo remate y el primero.

11 —La individualización y entrega de los lotes vendidos dependía de la mensura á practicarse, según las referencias de los autos, en cuyo caso es de aplicación el principio consignado en la primera parte de los arts. 1426 y 1409 del Cód. Civ., desde que el comprador está sujeto al resultado eventual de la operación indicada.

12—Art. 1621 del Cód. Civ.

éste las retire á la terminación del contrato—Civ., tom. 7, pág. 388, Ser. 6ª.

13. **Comprador**—Si no depositó el precio, debe responsabilizársele por la diferencia del nuevo remate y las costas é intereses—Civ., tom. 6, pág. 31, Ser. 6ª.

14. **Comprador**—En remate de un bien en condominio, solo puede retener la parte que en la herencia corresponda á su deudor hipotecario, cualquier que sea el monto de la deuda—Civ., tom. 6, pág. 79, Ser. 6ª.

15. **Comprador**—En remate judicial, no está obligado

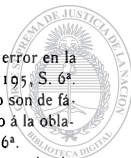
---

13—Art. 519 del Cód. de Proc.

14—Porque el acreedor no puede tener un derecho mejor ni más estenso que el de su deudor, sobre la cosa sujeta al derecho de este último.

15—La venta se había hecho diciendo que el terreno tenía «el frente de pared á la calle de Córdoba.» Del informe municipal resultó que la pared se encontraba doce metros adentro de dicha línea. De ese informe se deduce que la delineación anterior de la calle Córdoba, y á que se refería el título de propiedad, había sido modificada por la Mun. á tal punto que el terreno había dejado de tener su frente á la mencionada calle Córdoba. Estas variaciones en las trazas de las vías públicas serán legales ó arbitrarias, pero el hecho es que por el momento y mientras no se dilucide el punto con la Mun., el vendedor carecía de título completo para transmitir la propiedad del terreno tal como lo había vendido; esto es, con frente á la actual calle Córdoba, y en consecuencia, no se le puede obligar al comprador á que pague el precio y que espere indefinidamente á que el vendedor se ponga en condiciones de entregar la cosa; pues, no se puede pretender también obligar al comprador á recibir la cosa cargando con un pleito con la Mun. «Si el vendedor se hallare imposibilitado de entregar la cosa, el comprador puede exigir que inmediatamente se le devuelva el precio que hubiere dado, dice el art. 1413 del Cód. Civ., sin estar obligado á esperar que cese la imposibilidad del vendedor» y va de suyo, que si no ha pagado el precio, puede resistir el pago ó por lo menos suspenderlo. «Antes de hacerse la oblación del precio, podrá el comprador pedir que se exhiban los títulos de propiedad para examinarlos; si adolecieran de algún vicio que no puede subsanarse en breve tiempo, deberá optar entre el desistimiento de la compra, sin responsabilidad al-





á la oblación del precio si resulta que existe error en la ubicación del inmueble vendido—Civ., t. 6, p. 195, S. 6ª.

16. **Comprador**—Si los defectos del título no son de fácil subsanación, el comprador no está obligado á la oblación del precio—Civ., tom. 6, pág. 215, Ser. 6ª.

17. **Comprador**—Es responsable por la diferencia de precio; no puede exigir que la nueva venta en remate judicial se practique bajo nuevas bases—Civ., tom. 6, página 262, Ser. 6ª.

18. **Comprador**—Subsanadas las deficiencias opuestas por el comprador en remate judicial á los títulos, debe intimársele la oblación del precio—Civ., t. 6, p. 269, S. 6ª.

19. **Comprador**—Las disposiciones del Código de Pro-

guna, ó la realización de ella con los defectos de que adolezcan los títulos.» Estas prescripciones de los arts. 521 y 522 del Cód. de Proc., cuya aplicación á casos como el presente es de jurisprudencia constante é invariable, proporcionan el medio de zanjar con toda justicia y equidad las dificultades presentadas para consumir lealmente la compraventa celebrada. El título del vendedor presentaba indudablemente un defecto, de fácil ó difícil subsanación, no es ésta la cuestión por el momento, pero defectos al fin, desde que no se ajustaba á la realidad de los hechos, pues da al terreno una ubicación que no tiene ó ha dejado de tener. Lo razonable es entonces adoptar el procedimiento indicado por el citado art. 522 del Cód. de Proc.

16—Este caso es exactamente igual al precedente y se refiere á otro lote del mismo terreno.

17—El art. 519 del Cód. de Proc. establece de una manera categórica é imperativa que «se procederá á un nuevo remate»; quiere decir, que el anterior queda sin efecto y solo pena al licitador moroso con la responsabilidad en la diferencia del precio, etc., pero no lo hace parte ni puede hacerlo en juicio ejecutivo, en que nada tiene que ver, por eso agrega el mismo artículo, que el remate se verificará en la forma establecida, es decir, con arreglo á los trámites establecidos para este juicio. Por otra parte, este artículo no autoriza al comprador para que pueda solicitar se efectúe por su cuenta la nueva venta del bien.

18—Desaparece toda razón de oposición.

19—El actor demandó la resolución de la compra fundado en que

cedimientos, que permiten al comprador desistir de la compra por defectos de los títulos, no son aplicables á las ventas en remate particular—Civ., t. 3, p. 179, Ser. 6ª.

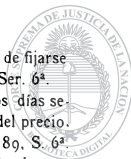
20. **Comprador**—Sin anuencia de éste, no pueden extraerse los fondos depositados judicialmente—Civ., tom. 3, pág. 17, Ser. 6ª.

21. **Comprador**—Subsanadas las deficiencias de los ti-

los títulos referentes al inmueble vendido adolecían de defectos graves, y pidió que se le diese por desistido de la compra sin responsabilidad alguna, en los términos del art. 522 del Cód. de Proc. El demandado contestando la demanda reconvino por cumplimiento del mismo contrato, negando la supuesta existencia de defectos en los títulos. Como se ve, se trataba al presente de un contrato bilateral—art. 1138, Cód. Civ.—y es un principio sentado que en estos no es permitido, á ninguna de las partes disolver el contrato si la otra no lo cumple, sino que debe pedirse su cumplimiento, salvo la existencia de pacto comisorio, circunstancia esta última que no concurre en el caso que nos ocupa. Las dificultades, ó la imposibilidad en que se encontraba el demandado para dar cumplimiento á las obligaciones que le imponía el contrato, no autorizaban para disolverlo. A este último, no le que daba otro camino legal que demandar su cumplimiento—arts. 1203 y 1204 del Cód. Civ.—El art. 522 del Cód. de Proc., consagrando una escepción á los principios generales dominantes en materia de contratos, prescribe, que si los títulos del inmueble comprado en remate adoleciesen de algún vicio que no pueda subsanarse en breve tiempo, el comprador deberá optar entre el desistimiento de la compra, sin responsabilidad alguna, ó la realización de ella con los defectos de que adolezcan los títulos. Esta disposición se refiere indudablemente á las subastas de que habla el art. 1184, inc. 1º del Cód. Civ., es decir, á los remates que se verifican por mandato judicial en los pleitos. La ubicación misma del art. 522, así lo demuestra, pues él se encuentra comprendido en el título 19 del Cód. de Proc., que legisla especialmente sobre el juicio ejecutivo. El remate que dió origen al contrato, fué un remate particular; y entonces mal pueden los contratantes ampararse de la escepción consignada en el art. 522 citado, puesto que ella procede únicamente cuando de un remate judicial se trata.

20—Se había decretado la entrega de los fondos, pero el auto que la ordenaba no fué notificado al depositante.

21—Porque es necesario saber si el comprador encuentra suficientes



tulos, debe darse traslado al comprador, antes de fijarse plazo para la oblación—Civ., tom. 3, pág. 78, Ser. 6<sup>a</sup>.

22. **Comprador**—Si tiene conocimiento de los días señalados, el auto en que se le intima la oblación del precio puede serle notificado por nota—Civ., t. 3, p. 89, S. 6<sup>a</sup>.

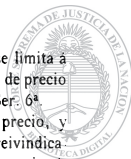
23. **Comprador**—Si en la debida oportunidad, el comprador no, las diligencias que con posterioridad se han practicado para salvar las deficiencias de los títulos, pues si dicho comprador las encontrase suficientes, no tendría objeto la fijación de plazo alguno.

22—Porque esa providencia no está incluida entre las que taxativamente enumera el art. 33 del Cód. de Proc., como que deben ser notificados personalmente ó por cédula.

23—Esta cuestión fué resuelta por mayoría. La sentencia decía así: «En 1874, D. José S. Lezama prometió vender á D. M. Antola, un terreno en la provincia de Entre Ríos que estaba ocupado por los compradores, obligándose á escriturarlo luego que el Gobierno de la Provincia revalidara su título de conformidad con la ley allí vigente. Recibió el otorgante la tercera parte del precio pactado y el resto debía pagarlo el comprador, una parte al ser escriturado y otra después de algún tiempo.» Esta promesa de venta era un contrato bilateral que al mismo tiempo que creaba derechos, imponía obligaciones, tanto al uno como al otro de los contrayentes—art. 1138 del Cód. Civ.—y ninguno de ellos podía exigir su cumplimiento sin aceptar por su parte las obligaciones que el mismo contrato imponía—art. 1201, Cód. Civ.—Y por la misma razón cada uno de los contrayentes al cumplir sus obligaciones tenía derecho indiscutible á exigir igual cumplimiento por par parte de quien con él había contratado, ó de su sucesor legítimo. Legalizados los títulos de propiedad en Dic. de 1879, llegó para Lezama la oportunidad prevista de cumplir por su parte el contrato, escribiendo el terreno en propiedad á favor de D. M. Antola, y recibiendo de él el resto del precio en la forma que estaba convenida; pero en el tiempo transcurrido habían ocurrido hechos que habían modificado sustancialmente la situación del contrayente, el comprador Antola, había vendido en remate público, en Marzo de 1876, el terreno que era todavía propiedad de Lezama y á que se refería la promesa de venta, juntamente con otros terrenos, siendo el comprador D. Hugo Mac Duggall. En virtud de este hecho, la venta realizada, se extinguieron los derechos que Antola ó su concurso podía tener para exigir de Lezama el cumplimiento del contrato, pasando á su sucesor particular.

prador ó sus sucesores singulares renunciaron tácitamente.

No solamente el concurso no se encontraba en situación de poder cumplir las obligaciones que le imponía el contrato bilateral de promesa de venta, y habían quedado perjudicadas por causa de la quiebra las letras que debían entregarse á Lezama, sino que cualesquier derechos que pudiera tener el concurso Antola, los había transmitido á Mac-Duggall, vendiéndole el terreno de que se trataba. Por consiguiente, para Lezama desaparecía como contrayente, Antola, y había venido á sustituirle Mac-Duggall, comprador al concurso y ocupante del terreno. Era á Mac Duggall á quien podía y debía escriturar Lezama, y era el mismo Mac Duggall quien debía cumplir las obligaciones pendientes, impuestas por el contrato de promesa de venta. En tal situación, Lezama exigió de Mac-Duggall el cumplimiento de esas obligaciones, y no obteniéndolo por la sentencia que se dictó, debía considerarse desobligado de tal contrato. Este hecho constaba en autos de las actuaciones testimoniadas. En 20 de Febrero de 1880, el apoderado general de Lezama da poder á D. P. Ezeiza para que se otorgue escritura de venta á favor de D. Hugo Mac Duggall, como cesionario del concurso de M. Antola, del terreno de que se trata. En 20 de Febrero del mismo año, Ezeiza demandando á Mac Duggall, hace relación de la promesa de venta que del terreno mencionado había hecho Lezama á favor de Antola; manifiesta la quiebra de éste y la venta hecha por el concurso á Mac-Duggall, y el deseo de otorgar á su favor la escritura de propiedad, siempre que pague el resto del precio y que éste no ha querido aceptar esta proposición ni cumplir las obligaciones resultantes del contrato de promesa de venta. Todos estos hechos quedaron reconocidos, por cuanto Mac Duggall no contestó la demanda, se constituyó en rebeldía y se dictó la correspondiente declaratoria. Después de esto, se pronunció por el juez competente sentencia que fué consentida, por la cual Lezama obtuvo la reivindicación del terreno. En su consecuencia, quedó sin efecto la promesa de venta hecha por Lezama á Antola, desde que Mac-Duggall, sucesor por compra, del concurso de Antola, se resistió á cumplir el contrato por su parte y resultó vencido en el juicio sobre la posesión del terreno. Se pretendió que el concurso de Antola volvió á adquirir los derechos al terreno que había vendido á Mac-Duggall, y que en tal carácter se deduce la acción instaurada para el cumplimiento de la promesa de venta. Las actuaciones desautorizan esta afirmación; la sentencia pronunciada en el litis entre Lezama y Mac-Duggall, solamente reservaba al concurso de Antola el derecho de ser reembolsado de lo que hubiera entregado á Lezama



te al cumplimiento del contrato, su derecho se limita á exigir del vendedor, la devolución de la parte de precio que hubiese pagado—Civ., tom. 3, pág. 125, Ser. 6ª.

24. **Comprador**—Que tiene pagado parte del precio, y al ser demandado y vencido en el juicio por reivindicación, no exige el cumplimiento del contrato, renuncia tácitamente al derecho de exigir se lleve adelante con posterioridad—Civ., tom. 3, pág. 125, Ser. 6ª.

25. **Comprador**—Debe obligarse al comprador al cumplimiento del contrato, si se declara judicialmente la bondad de los títulos—Civ., tom. 3, pág. 179, Ser. 6ª.

26. **Comprador**—Puede desistir de la compra, si conceptúa que no hay la estención estipulada, pero no pedir la mensura antes de la oblación del precio—Civ., tom. 2, pág. 151, Ser. 6ª.

27. **Comprador**—Que rescinde el contrato de compra si cuenta del campo, aunque el concurso de Antola, al transar sus diferencias con los herederos de Mac-Duggall en el juicio de 1887, se reservó el derecho de ejercitar contra Lezama las acciones que por derecho hubiera lugar, el mismo concurso no entendía que se tratase de otra cosa sino de la devolución de la cantidad que Antola había entregado á Lezama como tercera parte del precio, según resulta de la exposición del Síndico definitivo del concurso hecha en Agosto de 1888, de la del juez comisario, de lo resuelto por el Juzgado, sobre el crédito á cobrar á Lezama, y del testamento cuyo testimonio había agregado.» Los arts. 656, 873 y 888 rijen el caso.

24—Este caso está comprendido en el núm. presente.

26—La operación de mensura puede demandar un tiempo mas ó menos largo para practicarse. En este caso es de aplicación el art. 522 del Cód. de Proc.

27—Este punto no fué materia de resolución. La Cám. dijo: «La parte pidió aclaratoria de este pronunciamiento, en razón de que no se ordenaba la devolución de la seña entregada al demandante, á lo que no se hizo lugar por el Inferior. Debo desde luego observar, que este punto y los demás enunciados en la espresión de agravios no pueden ser motivo de pronunciamiento para el Tribunal, porque ni ha sido ar-

venta, no puede reclamar la devolución de la seña—Civ., tom. 8, pág. 11, Ser. 5ª.

28. **Comprador**—Aun cuando se haya rechazado el desistimiento del comprador en remate judicial, la acción de nulidad de la venta que deduzca, debe sustanciarse como demanda ordinaria -- Civ., tom. 8, pág. 226, Ser. 5ª.

29. **Comprador**—El vendedor, no obstante su derecho a cobrar daños y perjuicios si el comprador no cumple el contrato, está obligado á devolver la suma percibida á cuenta de precio, sin intereses—Civ., t. 8, p. 238, S. 5ª.

ticulados en tiempo por el recurrente, ni han constituido capítulo de la contestación—arts. 216 y 217, Cód. de Proc.

28.—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase: *Acción de nulidad*, 3.

29.—Estudiando casos análogos al presente, el Dr. Gelly ha tenido la oportunidad de expresar que en este punto sobre indemnización de daños, cualesquiera que sean las causas que la originen, los jueces se hallan siempre habilitados para proceder discrecionalmente. Si la responsabilidad es siempre una, sus graduaciones son distintas, pudiendo variar al infinito por actos ó hechos no solo del acreedor sino del mismo deudor, siendo precisamente para que no pase de un justo límite, para que no se abulten las consecuencias de la culpa, ó se aminore inconsiderablemente el daño, que debe intervenir el prudente arbitrio del juez. Recordaba con este motivo la opinión de un distinguido tratadista, Guisierrez Fernández, según la cual, en esta materia, la regla es no entender indefinidamente los efectos de la reparación; porque si se abriese la puerta, de uno en otro, podría formarse una escala de perjuicios que no tuviese fin. Así, tratándose del dolo, que es el más reprobable según este autor, el menos digno de consideración, la indemnización no debe, á pesar de eso, exceder de los daños conocidamente ocasionados por él, entendiendo el Cód. por daños conocidos, en la imposibilidad de presentar una regla más segura, los que tal concepto merezcan al prudente arbitrio del juez, aunque no sea su consecuencia directa, inmediata é inevitable. La devolución de la suma entregada, se ordenó teniendo en cuenta como antecedentes de hecho, que la cantidad que se mandaba devolver y fué entregada como anticipo sobre el valor de la compra, y como antecedente de doctrina, la regla contenida en la Ley 17, título 34, Part. 7ª.



30. **Comprador**—De una finca con pacto de retroventa, está obligado al pago de los impuestos—Civ., tom. 8, página 265, Ser. 5ª.

31. **Comprador**—Debe rechazarse las observaciones a los títulos, hechas por el comprador en remate judicial, si son infundadas—Civ., tom. 8, pág. 391, Ser. 5ª.

**Comprador**—Véase: *Area*, 1 y 4; *Activo y pasivo*, 1; *Cédula*, 4; *Contrato rescindido*, 1; *Embargo*, 2; *Mercederías*, 1; *Arrendamiento*, 1; *Boleto de compraventa*; *Remate judicial*, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 12; *Casa de comercio*, 1; *Escrituración*, 1; *Posesión*, 2, 4, 5 y 8; *Martillero*, 1 y 3; *Precio*, 3; *Daños y perjuicios*, 27; *Plazo*, 1; *Bienes hereditarios*, 20; *Edificación*, 1; *Frutos*, 1.

1. **Compraventa**—Justificada por escritura pública la existencia del contrato verbal de compraventa de un inmueble y la recepción del precio, el vendedor debe otorgar escritura definitiva, bajo pena de responder por las pérdidas é intereses—Civ., tom. 8, pág. 38, Ser. 6ª.

2. **Compraventa**—La ratificación del condómino, hace procedente el rechazo de la acción de nulidad del contrato de compraventa fundada en la falta de intervención de todos los propietarios del bien en condominio—Civ., tom. 5, pág. 407, Ser. 6ª.

3. **Compraventa**—Debe rechazarse la acción del com-

30—Siendo el comprador el dueño de la propiedad y debiendo soportar como tal las cargas que sobre ella pesan, como la contribución directa, poco importa que su derecho de propiedad esté sujeto á una cláusula resolutoria como el pacto de retroventa. El art. 1371 del Cód. Civ. establece que en las ventas de esta naturaleza, el vendedor y comprador quedan obligados como si la venta no fuera condicional.

1—Arts. 1185, 1187 y 1188 del Cód. Civ.

2—Arts. 1330 y 1331 del Cód. Civ.

3—Un documento privado solo importa una simple obligación de hacer—arts. 1185 y 1187, Cód. Civ.—desde que los contratos que

prador de un inmueble por instrumento privado, que exige el cumplimiento del contrato de compraventa—Civ., tom. 1, pág. 410, Ser. 6ª.

4. **Compraventa** Para que el director de la obra pueda ser responsable de los materiales, debe justificarse que él contrató la compraventa, y no el propietario y constructor—Civ., tom. 6, pág. 199, Ser. 5ª.

**Compraventa** — Véase: *Bienes vendidos*, 1; *Boleto de compraventa*; *Contrato de compraventa*; *Acción de escrituración*, 1; *Comprador*, 27; *Escritura pública*, 8; *Nulidad de sentencia*, 5.

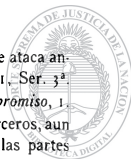
**Comprobantes** — Véase: *Casa de comercio*, 1; *Mandato*, 7.

1. **Compromiso arbitral**—Todo defecto del compromiso

tengan por objeto la transmisión de inmuebles, deben ser hechos en escritura pública—art. 1184, inc. 1º, Cód. Civ.—La obligación de hacer á que se refieren los artículos citados, es la de reducir á escritura pública el instrumento privado, según jurisprudencia constante establecida por la Cám. de lo Civ., para recién demandar la escrituración definitiva.

1.—Se trataba de un laudo de amigables componedores, y contra el que la ley especial no acuerda otro remedio que la acción de nulidad, limitada á las causas espresadas en el art. 808 del Cód. de Proc. Ejercitándose esta acción, no puede pretenderse la anulación de ese laudo, amparándose de esa escepción de falsedad, cuando la propia es posición de la parte condenada por ese laudo no desconocía su autenticidad. Si no se desconoce la verdad de ese pronunciamiento, y si solo por falta de procedimiento ó de formas del compromiso se hace oposición á su cumplimiento, tiene que reconocerse que esta oposición es por demás injustificada: 1º porque como decía una ley de partida, falsedad es *mançamiento de la verdad*, y ni siquiera se invocó el menor detalle que implicase una simple alteración del laudo que se ejecutaba; y 2º porque aquella escepción no puede encubrirse como motivo ó causas de nulidad, sobre todo tratándose de amigables componedores, desde que la disposición legal que especialmente les concierne, limita la nulidad á los casos en que el laudo se hubiese dado fuera de término ó sobre puntos no comprendidos. Por lo demás, si tuvieran entrada





arbitral queda subsanado y consentido, si no se ataca antes de recaer sentencia—Com., tom. 8, pág. 11, Ser. 3ª.

**Compromiso arbitral**—V.: *Excepción de compromiso*, 1.

1. **Compulsa**—No procede la de libros de terceros, aun cuando en ellos pudiera tener interés una de las partes—Civ., tom. 8, pág. 255, Ser. 6ª.

2. **Compulsa**—De libros, no procede la de los que no son parte en el juicio—Civ., tom. 2, pag. 143, Ser. 6ª.

3. **Compulsa**—No procede la de libros de terceros, sin su autorización—Civ., tom. 6, pág. 86, Ser. 6ª.

4. **Compulsa**—No procede la de los libros de comercio de terceros que no son parte en el juicio—Civ., tom. 6, pág. 287, Ser. 6ª.

**Compulsa**—Véase: *Auto inapelable*, 5; *Apelable*, 12; *Libros de comercio*, 6.

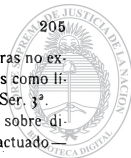
**Concubinato**—Véase: *Celos*, 1; *Sociedad*, 1.

1ª. **Concurrencia de delitos**—Corresponde la escarcela-

en la excepción opuesta, de falsedad, las causas invocadas para demostrarlo, se iría abiertamente contra la ley que de un modo claro y terminante, no ha acordado otro remedio que la acción de nulidad, basada en las causales ya indicadas, debiendo agregarse que el alcance legal de aquella excepción ha sido fijado en otras resoluciones de la Cám. Las opiniones de Manresa y Caravantes como que están calcadadas en legislación bien distinta de la nuestra carecen de aplicación legal; y por último que como es dominante en la materia el principio referente á los arbitradores, consignado en el art. 801, puesto que si todo defecto del compromiso queda subsanado cuando no se le ataca antes de pronunciar sentencia, y los amigables componedores deben proceder con sugestión á las formas legales, es de toda evidencia la justicia del sumario.

3—Porque no son parte en el juicio.

1ª—El juez no hizo lugar á la escarcelación, porque existiendo concurrencia de delitos el art. 377 del Cód. de Proc. Crim. así lo establece: «En la hipótesis de no mediar esta circunstancia, existe la concurrencia de delitos, puesto que se le procesa por estafa y circulación



ción aunque haya concurrencia de delitos, mientras no excedan las penas correspondientes, de las fijadas como límite para concederla —Crim., tom. 8, pág. 64, Ser. 3ª.

1ª. **Conciliación**—Su omisión en las causas sobre divorcio, no basta para fundar la nulidad de lo actuado—Civ., tom. 6, pág. 360, Ser. 5ª.

1ª. **Concurso**—Los honorarios del letrado y procurador del fallido en el juicio de rendición de cuentas, no son de cargo del concurso —Com., t. 8, pág. 68, Ser. 3ª.

2. **Concurso**—El nombramiento de peritos es facultativo del juez del concurso —Com., t. 8, p. 71, Ser. 3ª.

3. **Concurso**—Los fallidos no tienen personería para intervenir como parte en las actuaciones ordinarias del concurso—Com., tom. 8, pág. 192, Ser. 3ª.

4. **Concurso**—Aun cuando el juicio se haya seguido contra un concurso, los honorarios solo pueden regularlos el juez que ha intervenido—Civ., t. 10, p. 98, S. 6ª.

5. **Concurso**—Los gastos del remate son de cargo del ejecutante, sin perjuicio de repetirlos contra el concurso —Civ., tom. 9, pág. 87, Ser. 6ª.

de billetes de loterías, mediando en este delito igualmente la reiteración, pues según las constancias del sumario, hace dos años que viene perpetrando ese hecho», decía el juez. La Cám. revocó el auto fundándose en que: «No excediendo la pena correspondiente al delito de que se trata, de la fijada como límite de la escarcelación, esta es procedente.»

1ª—El juicio de conciliación es un trámite marcado para las demandas de divorcio; pero no es indispensable ni necesario hasta el grado de que su omisión pueda causar nulidad de lo obrado.

1ª—Porque no son ocupados por el concurso.

3 - Solo puede formular las peticiones espresamente autorizadas por el art. 1403 del Cód. de Com.

5—El ejecutante es directamente responsable respecto del martillero, por ser él quien pide el nombramiento para llevar adelante su ejecución. Es el ejecutante el beneficiado inmediato por la operación de remate.



6. **Concurso** —Al que alega la competencia de la jurisdicción comercial, para conocer en el concurso, corresponde la prueba de que el deudor ejercía el comercio —Civ., tom. 7, pág. 156, Ser. 6ª.

7. **Concurso** —Debe declararse la nulidad de las ejecuciones seguidas ante otros jueces, después de declarada la apertura del concurso —Civ., tom. 6, pág. 16, Ser. 6ª.

8—**Concurso**—Solo pueden entregarse fondos del concurso á los acreedores, cuando se verifique la distribución general—Civ., tom. 6, pág. 15, Ser. 6ª

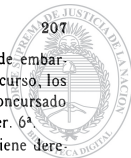
9. **Concurso**—Para gestionar la división del condominio basta la autorización del juez del concurso, pero se requiere autorización expresa de los acreedores para demandar á terceros —Civ., tom. 6, pág. 51, Ser. 6ª.

6 - En virtud del principio general de que al que afirma un hecho nuevo corresponde la prueba—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

7—El concurso civil de acreedores es un juicio universal—art. 720 del Cód. de Proc.—y por consiguiente, el único juez competente para conocer en los juicios pendientes y en los que se promuevan contra el concursado desde la fecha de la declaración del concurso, es el juez del concurso. Tramitándose el juicio ante juez incompetente, carece de valor legal todo lo actuado, con violación de las citadas disposiciones del Cód. de Proc. Aparte de esto, la demanda ejecutiva no puede entenderse con el concursado, sino con el Síndico del concurso, de acuerdo con lo que dispone el art. 727, de manera que no tramitándose el juicio ejecutivo con el representante legal, lo actuado no puede perjudicar al concurso, careciendo así de eficacia legal.

8—Lo contrario importaría declarar que el crédito que se reclama goza de una preferencia superior á todos los demás créditos; superior aun á los mismos gastos judiciales, lo que es completamente contrario á derecho. El crédito, que no goza de preferencia alguna especial por la ley, tiene que esperar, como los otros, á las resultas del concurso y sujetarse á la forma de distribución que le corresponda en la masa concursada.

9—Art. 737 del Cód. de Proc.



10. **Concurso**—Se conceptúan exceptuados de embargo, y en consecuencia no corresponden al concurso, los muebles y objetos de uso necesario para que el concursado ejerza su profesión—Civ., tom. 6, pág. 72, Ser. 6<sup>a</sup>.

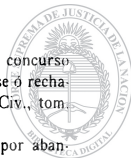
11. **Concurso**—El concursado civilmente, tiene derecho para deducir la nulidad del remate judicial de los bienes del concurso—Civ., tom. 1, pág. 321, Ser. 6<sup>a</sup>.

12. **Concurso**—Justificados los extremos que la ley exige, procede la formación del concurso civil—Civ., tom. 1, pág. 114, Ser. 6<sup>a</sup>.

10—Se trataba del concurso de un escribano y la cuestión versó sobre si la caja de fierro podía ó no embargarse. El art. 480 del Cód. de Proc. dice, que no se trabará embargo en los instrumentos necesarios para la profesión, arte ú oficio que ejerza el ejecutado. Aquellos bienes que no estén sujetos á la traba, no pueden ser incluidos entre los del concurso. Indudablemente, la caja de fierro no es un instrumento y mucho menos de los que se emplean en la profesión del concursado. Tampoco son instrumentos los escritorios y demás muebles de oficina, y sin embargo no están sujetos á la traba, porque son de un indispensable uso para el ejercicio de su profesión. Los protocolos tienen que guardarse en lugar seguro, así como los papeles que los interesados le confien como escribano, pues por el art. 200 de la ley Org. de los Trib. de la Cap., es responsable de su conservación.

11 - Se quiso aplicar por analogía la disposición del art. 1402 del Cód. de Com., pero la Cám. pensó de otra manera porque, si bien como regla general está escludida la intervención del deudor en la sustanciación del juicio de su concurso de acreedores, existen casos escepcionales previstos por la ley, ó amparados por la doctrina y opinión uniforme de los jurisconsultos en que esa intervención es procedente con las limitaciones que el caso mismo sugiera, como lo tiene resuelto la Cám. Civ., en el caso de la testamentaria concursada del Dr. Hugo A. Bunge, tratándose en el caso presente, del ejercicio por parte del concursado, de un acto meramente conservatorio, tendente á salvaguardar sus intereses, que reputaba comprometidos por la forma en que aparecían enajenados los únicos bienes con que contaba para solventar sus obligaciones, debe considerarse incluido entre los de escepción referidos.

12—Art. 719 del Cód. de Proc.



13. **Concurso**—Los créditos presentados al concurso civil, después de la verificación, deben aceptarse ó rechazarse con la simple intervención del Síndico—Civ., tom. 8, pág. 397, Ser. 5ª.

14. **Concurso**—Concursada la testamentaria por abandono de la herencia, las demandas deben entenderse con el Síndico—Civ., tom. 8, pág. 399, Ser. 5ª.

15. **Concurso**—Los honorarios del Síndico del con-

---

13—Así lo establece el art. 756 del Cód. de Proc.

14—Toda demanda debe sustanciarse con el demandado ó su representante legal. Aquí el demandado era el concurso y su representante legal el Síndico. Luego, es con éste con quien debe sustanciarse el juicio.

15—Según lo previene el art. 727, Cód. de Proc., declarado el concurso se nombrará Síndico, con el cual deberán entenderse todas las operaciones ulteriores del mismo, y las cuestiones que el deudor tuviese ó las que hubieren de iniciarse. Esta intervención es en tal caso ineludible, no solo para la prosecución y validez de sus trámites, sino también para que puedan fijarse y aclararse los derechos de los acreedores, pues la declaratoria del concurso hace desaparecer la personalidad del deudor en sus relaciones jurídicas con aquéllas. El Sindicato según lo enseña la doctrina, tiene los caracteres de un mandato público confiado por la autoridad judicial en nombre de la ley; desempeñando las personas llamadas á dirigir la quiebra un triple deber, pues representan simultáneamente á los acreedores, al fallido y á la ley. De consiguiente, los emolumentos ú honorarios de la sindicatura tienen calidad preferente para su pago, cualquiera que sea la naturaleza de sus créditos y las seguridades y privilegios con que hubieran sido constituidos, desde que en ningún caso podrían haberse hecho ejecutivos, sin la presencia é intervención de aquella sindicatura. La circunstancia de haberse formado un concurso particular para el cobro especial de un crédito privilegiado, no obsta á que el acreedor continúe siendo de la masa común y en tal carácter tiene en el juicio general la intervención que legalmente le corresponde, como que en él debe ser y es efectivamente verificado y graduado su crédito, lo que revela que todos los gastos causídicos redundan en su beneficio, pues de otro modo no podría ejercitarse válidamente la acción real que le corresponde, ni podría conservar acción alguna contra el fallido.

curso, tienen prelación sobre el crédito hipotecario, aun cuando se haya formado concurso especial—Civ., tom. 8, pág. 404, Ser. 5ª.

16. **Concurso**—Corresponde á la jurisdicción civil, el conocimiento del concurso de constructores de obras—Civ., tom. 6, pág. 82, Ser. 6ª.

**Concurso**—Véase: *Cesión de bienes*, 2, 3 y 7; *Fallido*, 1; *Honorarios*, 8; *Bienes del deudor*, 1; *Bienes del concurso*, 1, 2, 3 y 4; *Acto de comercio*, 5; *Acreeedor*, 3; *Actos del acreedor*, 1; *Competencia*, 11; *Acreeedor quirografario*, 1; *Comerciante*, 6; *Consignación*, 8, *Condominio*, 9; *Boleto de compraventa*, 8.

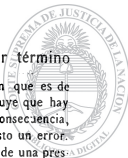
1. **Condición**—El legado condicional no puede ser entregado sin justificar que se ha llenado la condición—Civ., tom. 5, pág. 234, Ser. 5ª.

2. **Condición**—Si el donante ha establecido como con-

16—Porque no son comerciantes. Véase la nota del verb. *Acto de comercio*, núm. 4.

1—Sería contrariar la voluntad espresa del testador, si se entregaran los legados, en todo ó en parte, sin haberse cumplido las condiciones á que los subordinó en su disposición de última voluntad.

2—Es de precepto legal que los donantes ó testadores no pueden prohibir á los donatarios ó sucesores en sus derechos, que enajenen los bienes muebles ó inmuebles que les donaran ó dejaran en testamento por mayor término que el de diez años—art. 2613, Cód. Civ.—pero la ley no contiene disposición alguna con respecto al exceso del límite que se establece, y en este caso sería contraria al ejercicio de una facultad reconocida espresamente al donante—art. 1802—declarar, que esa prohibición debe tenerse por no escrita cuando excede un solo día ó un año. El Dr. Segovia dice, que si se acordó mayor plazo que el diez años, debe reducirse á ese límite, como sucede con relación al contrato de locación, según lo establece el art. 1505 del mismo Cód. En el caso espresado, la voluntad del donante debe respetarse, y cumplirse la cláusula durante el término que la ley le permite restringir la libertad de enajenar la cosa donada, con tanta más razón si se considera que esa limitación tiende á beneficiar al mismo donatario cuando es menor



dición, una prohibición de enajenar por mayor término de edad, como sucedía en el caso ocurrente, consideración que es de suponer, haya determinado aquella cláusula. Pero se arguye que hay que estar á lo dispuesto en los arts. 18 y 1039, y como consecuencia, que la cláusula en cuestión es de ningún efecto. Hay en esto un error. Las nulidades se fundan exclusivamente sobre la violación de una prescripción legal, dice Zachariæ, citado en la nota del art. 18. Pero de aquí no se deduce que todo acto contrario á la ley debe ser considerado como nulo, si ella no deriva de una declaración expresa que así lo autorice, y se sabe que según nuestra ley civil, los jueces no pueden declarar otras nulidades de los actos jurídicos que las que ella establece—Zachariæ, tom. 1º, pág. 145, y art. 1037, Cód. Civ.—En el presente caso no existe esa nulidad declarada espresamente, ni puede establecerse como consecuencia de un exceso del término por el que el donante ha podido limitar la facultad de enajenar la cosa donada, de manera que no es de aplicación lo dispuesto en los artículos citados. Esta cuestión fué resuelta por mayoría de votos. La minoría opinó de otro modo. El Dr. Llerena piensa que una tal condición debe reputarse como no escrita. El distinguido jurista, en la nota comentario al artículo, se propone esta cuestión: «Si la prohibición excede de este término—diez años—¿se tendrá por no escrita la condición ó se deberá reducir á diez años?» Después de sólidos y atinados razonamientos llega á la conclusión de que debe tenerse por no escrita la condición, como sucede en el caso del arrendamiento—art. 1505—argumentando á la vez con la doctrina que fluye de los arts. 3732 y 3781, que legislan sobre idénticos casos al actual. En el siguiente pasaje de su interesante nota, el Dr. Llerena condensa su pensamiento sobre el punto que refiere á esta cuestión: Hasta la colocación en que están esos artículos demuestran su alcance.» En efecto, en el presente título se trata de las restricciones que en principio general tiene el dominio de las cosas; como principio general, dice el artículo que estudiamos, que el donante ó testador no puede disponer que los bienes donados ó legados sean inenajenables por más tiempo que el de diez años.» Este es el principio general; vienen después los títulos que hablan especialmente de la institución de herederos y de los legados ¿Qué dice en esos títulos? Que cuando se ha faltado al principio general puesto en el título correspondiente, imponiendo una condición que debe durar más tiempo que el ordenado, «la cláusula de no enajenarse se tendrá por no escrita»—son las palabras del testo del art. 3781—«Son de ningún valor las disposiciones del testador. . . .

que el que permite la ley, la cláusula solo es nula por el exceso—Civ., tom. 3, pág. 225, Ser. 6ª.

**Condiciones** — Véase: *Nulidad del seguro*, 1; *Obligación condicional*; *Constructor*; *Embargo preventivo*; *Contrato de compraventa*, 18.

**Condición social** — Véase: *Daños y perjuicios*, 45 y 56; *Alimentos*, 11.

**Condominio** Véase: *Administración*; *Compraventa*, 2; *Comprador*, 4.

1. **Condómino** — La venta hecha por uno de los condóminos de la totalidad del bien común, es de ningún efecto, y debe declararse la nulidad, á solicitud del que no intervino en ella—Civ., tom. 6, pág. 70, Ser. 5ª.

2. **Condómino** — La ejecución seguida contra uno solo

---

por las que el causante declare inenajenable el todo ó parte de la herencia, dice el art. 3732.

1—Arts. 1331 y 2680 del Cód. Civ.

2—Un acreedor hipotecario demandó á su deudor por el capital prestado é intereses. Librado el correspondiente mandamiento, el ejecutado se negó á abonar el importe del crédito manifestado que la finca hipotecada en su garantía la había vendido á tres señores que adquirieron en común la cosa. Atenta esta manifestación y fundándose en la disposición del art. 3163 del Cód. Civ., el ejecutante solicitó se intimara á uno de los tres adquirentes el pago de la deuda con los intereses, ó el abandono del inmueble hipotecado. Hecha la intimación en la forma pedida, á falta de pago se trabó embargo en la finca hipotecada, y haciéndose, saber se citó de remate al deudor originario y á uno de los adquirentes posteriores para que opusieran las escepciones que tuvieran. El deudor originario no hizo uso de este derecho, y sí el adquirente que opuso la escepción de falta de personería en el demandado, que autoriza el art. 488, inc. 2º del Cód. de Proc. Se fundaba en que el juicio se había iniciado por un crédito hipotecario que afectaba á toda la propiedad que pertenecía en condominio también á otros dos señores, y que representando él solo una parte, no podía responder á este juicio, en el que se había escludido á sus condóminos á quienes no representaba. El ejecutante, evacuando el traslado con-



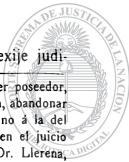


de los condóminos por la totalidad de la deuda hipote-

ferido de la escepción opuesta, pidió su rechazo. La ejecución no podía prosperar, pues la posición jurídica del deudor y del tercer poseedor del inmueble, con respecto al acreedor hipotecario, se halla claramente definida en nuestro derecho. Dos son las personas que en esta clase de juicios deben responder á la acción del acreedor, tendente á hacer efectivo el cobro de su crédito: el deudor, que está obligado principal y personalmente al pago de la deuda, que garantiza con una obligación accesoria, cual es la hipoteca; y el tercer poseedor que es extraño á la obligación principal y nada tiene que ver con el acreedor, sino en tanto es el poseedor actual del inmueble hipotecado. «Cuando un crédito está garantido por una hipoteca, dice Laurent—tom. XXXI, § 238—los acreedores tienen dos derechos y dos acciones: un derecho y una acción contra todo detentador de la misma. Mientras el deudor posee el inmueble hipotecado, la hipoteca es el accesorio de la obligación principal y el derecho que da sobre el inmueble es el accesorio del derecho que el acreedor tiene contra la persona obligada. Cuando el deudor enajena el inmueble hipotecado, las dos acciones se dividen; el acreedor tiene una acción contra el deudor tendente al pago de la deuda y una acción contra el detentador del inmueble tendente á la venta de éste. Nuestro Cód. Civ., aceptando estos principios ha dispuesto en el art. 3163, que antes de pedir el pago de la deuda al tercer poseedor, el acreedor debe hacer intimar al deudor el pago del capital é intereses exigibles en el término de tercero día; y si éste no lo verificase, cualquiera que sea la escusa que alegase podrá recurrir al tercer poseedor, exigiéndole el pago de la deuda ó el abandono del inmueble que la reconoce. Es decir, que nuestra ley requiere que previamente se intime al deudor el cumplimiento de la obligación principal, y en su defecto, y sin oírsele escusa alguna, prospera la acción accesoria contra el inmueble afectado. En el caso presente se dió cumplimiento á cada exigencia de la ley, intimando el pago al deudor principal y en su defecto, de acuerdo con las disposiciones de los arts. 3162 y 3163 del Cód. Civ., se inició la acción ejecutiva contra el tercer poseedor del inmueble hipotecado, á fin de hacer efectiva la obligación accesoria con que se garantizaba el crédito reclamado. Tal procedimiento se halla en completa armonía con la disposición contenida en el art. 1479 del Cód. de Proc., y que dice imperativamente: «Si hubiese bienes dados en prenda ó hipoteca, se procederá contra ellos antes que contra ningunos otros.» De acuerdo también con esta disposición, el actor manifestó que hace reserva expresa de los derechos que le corresponden contra

caria, hace procedente la escepción de falta de personería en el ejecutado—Civ., tom. 6, pág. 5, Ser. 5ª.

el deudor primitivo, para el caso en que ejecutada la propiedad no alcanzare á cubrir el capital, intereses, costas y accesorios», reserva perfectamente ajustada á los principios jurídicos que rigen el caso. Llegada esta ejecución al estado de citación de remate, fué notificada tanto al deudor originario cuanto al adquirente, á los efectos de lo dispuesto en el art. 3166 del Cód. Civ., por ser esa la oportunidad de oponer las escepciones que uno y otro tuvieron. El Dr. Llerena, estudiando este punto en el tom. 5º, pág. 349 de sus comentarios, dice: Que el art. 3166 viene á complementar las disposiciones del art. 3163, dándole su verdadero alcance. Según esta combinación, las escepciones que tenga el deudor contra su acreedor no pueden ser materia de juicio en el incidente que se forme con motivo de la intimación, sino que deben ser opuestas en el juicio ejecutivo que se siga contra el tercer poseeder. Recién entonces ese tercer poseedor puede hacer valer todas las escepciones que podía oponer el deudor y que no fueran personales. El juicio viene á trabarse recién cuando se demande al tercer poseedor, pues antes cualquiera que sea la causa que el deudor alegare para no pagar, no puede dar por resultado impedir que el acreedor haga uso del derecho que el citado art. le acuerda respecto al tercer poseedor. Así, si intimado el deudor originario dijera que no paga por ser nula la hipoteca, por estar paga ó por cualquier otra causa, esta escepción no podría desde luego, ponerse en tela de juicio; el acreedor en tal caso se dirigiría contra el tercer poseedor, y *recién en esta demanda* podrían oponerse todas las escepciones legítimas que el tercero ó el deudor pueden tener para resistir el pago.» Se dice que el art. 3166 del Cód. Civ., no permite al tercer poseedor oponer otras escepciones que las que en ese artículo se mencionan. A este respecto debe tenerse presente la disposición del art. 3165 del mismo Cód. El tercer poseedor no tiene obligación alguna respecto al acreedor; éste tiene la acción personal contra el deudor y la acción real contra la cosa hipotecada, cuya venta puede perseguir con independencia de la persona del detentador; pero esto no quiere decir que el poseedor del inmueble no tenga el derecho de satisfacer el crédito para conservar el bien afectado, ó el de abandonarlo como lo indica el art. 3169, ó aun más, el de hacer frente á la ejecución del bien por él poseído. Si bien no existe relación alguna de derecho entre el acreedor hipotecario y su deudor, sin embargo la ley establece espresamente el vínculo jurídico á que se refiere el art. 3165. El derecho del acreedor



### 3. Condómino—Si uno de los condóminos exige judi-

se limita á perseguir la venta del inmueble; pero el tercer poseedor, sin estar obligado á ello, tiene el derecho de pagar la deuda, abandonar el inmueble, ó responder á la ejecución, á su elección y no á la del acreedor. Y en tal virtud, siendo el tercer poseedor parte en el juicio ejecutivo, le es permitido en principio general, dice el Dr. Llerena, «oponer al acreedor todas las excepciones que habría podido oponer el primitivo deudor hipotecario y las propias del tercer poseedor»—Comentario al art. 3166—y debiendo el acreedor gestionar la venta del inmueble por los trámites del juicio ejecutivo establecido en el respectivo Cód., es evidente que el tercer poseedor puede oponer las excepciones que se indican en el art. 488 del Cod. de Proc., y las que permite el art. 3166 del Cód. Civ., que en manera alguna es limitativa ni excluyente de las establecidas en el primer Cód. Debe, pues, tomarse en consideración la excepción opuesta por el tercer poseedor. Este manifestó que él solo no era poseedor de la finca, sino que lo eran también los otros dos señores. De las constancias de la escritura de venta del inmueble de referencia resultaba que los compradores eran tres, como también que el juicio se había iniciado por el cobro íntegro del crédito hipotecario. Basta observar la disposición del art. 2677 del Cód. Civ., para percibirse que la excepción opuesta era procedente y que la acción no podía prosperar en la forma que había sido iniciada. En efecto, el espresado art. dice, que cada condómino puede enajenar su *parte indivisa* y sus *acreedores pueden hacerla embargar* y *vender* antes de hacerse la división entre los comuneros. En el caso ocurrente no se trataba de la ejecución de la parte indivisa correspondiente al condómino, que es la única que podía válidamente enajenarse con su sola intervención. El juicio se inició por el cobro total del crédito que afectaba á toda la propiedad hipotecada, debiendo por consiguiente, dirigirse la acción contra todos los condóminos, que debían ser oídos, su-

(*Sigue en la pág. 215*).

3—Se dedujo demanda conjuntamente sobre pago de mejoras y división de condominio. El demandado se opuso á lo primero estando de acuerdo con lo segundo, y pidió que sin perjuicio de seguirse adelante el pleito sobre aquél se procediese en seguida á la división. No se hizo lugar por cuanto el pleito fué sobre las dos cosas conjuntamente y no podía ser materia de dos fallos separados. La litiscontestación comprendió los dos puntos y no era posible innovar en ella. Además debía necesariamente esperarse el fallo para saber hasta dónde alcan-  
zaban los derechos de una y otra parte.

cialmente el pago de las mejoras, no procede la división hasta la resolución del litigio—Civ., t. 8, p. 295, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Condóminos**—V.: *Bienes de menores*, 4; *Compraventa*, 2.

1<sup>a</sup>. **Confesión**—Del demandado, reconociendo la deuda al declarar como testigo en otro juicio, hace prueba plena—Civ., tom. 6, pág. 171, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Confesión**—Véase: *Contrato bilateral*, 4.

1<sup>b</sup>. **Confesión calificada**—Dividua, forma prueba plena; al confesante corresponde justificar la calificación, por otros medios, para cohonestar lo que de ella resulte—Civ., tom. 8, pág. 5, Ser. 5<sup>a</sup>.

**Confesión calificada**—Véase: *Embargo preventivo*, 18.

1<sup>c</sup>. **Confesión estrajudicial**—De la deuda, basta para que

puesto qu: ninguno de ellos aisladamente puede ejecutar actos materiales ó jurídicos que importen el ejercicio del derecho de propiedad sobre la cosa común—art. 368o del Cód. Civ. -Concordando con lo espuesto, la Cám. de lo Civ., en el tom. 2º, pág. 412, Ser. 2ª, ha resuelto que «los condóminos *no pueden oponerse á la ejecución seguida por un acreedor, siempre que solo se ejecute la parte indivisa del condómino ejecutado*», que aunque distinto del caso actual corrobora los principios espuestos. La misma parte ejecutante reconoció la necesidad de la intervención de los otros condóminos ó terceros poseedores, cuando pidió que se practicara con ellos, las mismas diligencias que se habían hecho con el otro. Pero debe observarse respecto á esto último, que en esa oportunidad del procedimiento no podían practicarse dichas diligencias, por cuanto se violarían las formalidades legales á que necesariamente debían ajustarse los interesados para el mejor ejercicio de sus derechos, pues ya se había hecho la citación de remate.

1<sup>2</sup>—Ley 1,ª tit. 13, Part. 3ª.

1<sup>b</sup>—Véase: Inst., tom. 7º, verb. *Confesión calificada*, 1; tom. 6º, mismo verb., 1; tom. 4º, verb. *Confesión indivisible*; y tom. 3º, verb. *Confesión*.

1<sup>c</sup>—El reo al contestar la demanda dijo que era deudor del actor, pero no por la suma demandada sino de una cantidad mucho menor. Se consideró esta confesión parcial de la deuda como un principio de prueba escrita, aceptándose en consecuencia la tistifical que se produjo para comprobar la totalidad de lo demandado—art. 18o del Cód.



se tenga por existente, si el demandado no justifica su extinción—Civ., tom. 2, pág. 45, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Confirmación**—Véase: *Acto anulable*, 1.

**Congreso Nacional**—Véase: *Impuestos*, 9.

**Connivencia**—Véase: *Delito*, 5.

1. **Consejo de educación**—Cualesquier que sean sus derechos, solo debe intervenir después de declarada vacante la herencia—Civ., tom. 6, pág. 342, Ser. 5<sup>a</sup>.

2. **Consejo de educación**—Su representante, tiene personería para gestionar el cobro de las multas por infracción á la Ley de Registro Civil—Civ., t. 5, p. 5, Ser. 6<sup>a</sup>.

3. **Consejo de educación**—En tanto exista quien repre-  
de Proc., y 1191 del Cód. Civ.—Resulta de lo espuesto que el su-  
marío no espresa con fidelidad el caso resuelto.

1—El Consejo de Educación solo debe intervenir en las herencias vacantes, después de declararse que los bienes pertenecen al Fisco, según resulta de los arts. 693, 694 y 697 del Cód. de Proc., y 3544 del Cód. Civ., como asimismo de la jurisprudencia establecida á este respecto por la Cámara—Véase: tom. 2<sup>o</sup>, pág. 526 Ser. 2<sup>a</sup>, y tom. 3<sup>o</sup>, pág. 360, Ser. 4<sup>a</sup>—no estando hecha aun la declaratoria á favor del Fisco, no es llegada la oportunidad de que el Consejo intervenga.

2—Art. 76 de la Ley de Educación.

3—Véase el núm. 1, y el verb. *Cónsules extranjeros*. El Fiscal Dr. Barrenechea, al estudiar esta cuestión decía: «El decreto dando intervención, en los juicios sucesorios en que no hubiere herederos conocidos, al consul respectivo de la nación á que perteneció el estinto, no puede considerarse derogado por las disposiciones del Cód. Civ. y de Proc., desde que éstas no están en oposición con aquél, ni lo excluyen, por consiguiente, en su aplicación. La intervención de los cónsules, no impide la designación de las demás personas que ejercen funciones en una sucesión intestada por razón de las disposiciones ya mencionadas. La misión de estos delegados de los gobiernos extranjeros, es velar por los intereses de los herederos que pudiera tener el causante y su intervención no puede estar en pugna con la de los demás causídicos, como no lo está la de los diversss interesados en el juicio. Por lo demás, el Consejo Nac. de Educación es parte en un juicio de sucesión en que no haya herederos conocidos, por-



sente á los herederos, aunque sean desconocidos, el Consejo Nacional de Educación no es parte en la testamentaria—Civ., tom. 5, pág. 250, Ser. 6<sup>a</sup>.

4. **Consejo de Educación**—Solo debe intervenir en los juicios de herencia vacante, después de realizados los bienes—Civ., tom. 9, pág. 325, Ser. 6<sup>a</sup>.

5. **Consejo de educación**—En el espediente sobre protocolización de un testamento ológrafo, no es parte el Consejo Nacional de Educación ni el consul respectivo—Civ., tom. 4, pág. 403, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Consejo de educación**—Véase: *Bienes hereditarios*, 26.

1. **Consejo de higiene**—Cualquiera que sea la estimación de los honorarios médicos presentada, ella subsiste aunque el Consejo de Higiene los regula en mayor suma—Civ., tom. 10, pág. 331, Ser. 6<sup>a</sup>.

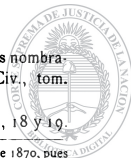
2. **Consejo de higiene**—Es la única autoridad competente que la ley declara con derecho á intervenir en esta clase de juicios á los que tienen interés en él, y sabido es que el Consejo de Educación tiene ese interés. Sinembargo, es exacto que se ha resuelto en repetidas ocasiones por el Superior, que dicho Consejo no es parte en los juicios mencionados, sino después que se ha declarado la vacancia de una sucesión.»

4—Véase: verb. *Bienes hereditarios*, 26.

5—Sería una anomalía jurídica, que estando pendiente un juicio de protocolización de un testamento ológrafo, cuyo resultado no puede preverse, se siga por todos sus trámites un juicio *abintestato*, entretanto nadie tiene derecho á ser curador de los bienes, ni tampoco á pretender herencia á nombre del Fisco. En el juicio de protocolización, si hay controversia, debe adoptarse las medidas conservatorias necesarias.

1—Apreciando los honorarios, aquella repartición, en una suma mayor de la estimada por la parte, queda de hecho establecido que la estimación de ésta es equitativa. Lo contrario importaría ir más allá de lo pedido, *ultra petita*, lo que implicaría una nulidad, pues no se puede dar más de lo que se demanda.

2—Esta cuestión fué resuelta por mayoría, la que se fundó en que el Consejo de Higiene es el único tribunal competente para apreciar



tante para regular los honorarios de los médicos nombrados para el reconocimiento de una incapaz—Civ., tom. 6, pág. 254, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Consejo de Higiene**—Véase: *Honorarios*, 3, 15, 18 y 19.

los honorarios médicos, con arreglo á la ley de 26 de Julio de 1870, pues así lo ha declarado la Cám. de lo Civ. La minoría dijo: «al presente no se trata de servicios profesionales prestados fuera de juicio, que es cuando una vez constatados aquéllos debe prevalecer la estimación del Departamento Nac. de Higiene, lo cual en tales casos basta á satisfacer la exigencia del art. 1627 del Cód. Civ., sino de un examen pericial verificado en el juicio mismo, cuya importancia, en cuanto á su mérito científico y legal á los efectos de la retribución, puede y debe estimar el juez que la decreta, estando habilitado, si lo juzga necesario, á ilustrarse con el dictamen de la corporación técnica. Que así también lo ha entendido la Cámara al tomar en consideración el recurso de apelación y resolver sobre el monto de la regulación en el juicio de insania de la señora Piñero de Escribano, en el cual fueron estimados los honorarios médicos del perito don Leon Antonio Piñero por el juez de la causa directamente, y sin previo dictamen del Consejo Nac. de Higiene.» Además, se comprende toda la autoridad que puede revestir la opinión del Departamento de Higiene, pero nunca será una opinión, más que un elemento auxiliar del criterio de los jueces. Estos son los llamados á regular los honorarios de los peritos no sujetos á arancel cuando no se hallan sujetos á una disposición escepcional, como la que contiene el art. 625 del Cód. de Proc. Si alguna vez se ha aplicado la ley de la provincia de B. Aires, de 26 de Julio de 1870, que atribuía—ha sido derogada por la ley de 1888—al Consejo de Higiene la regulación de los honorarios médicos, esto ha sido por error, pues dicha ley no ha sido incorporada nunca al cuerpo de leyes de la Capital federal. La única ley de dicha provincia declarada vigente en la Capital, es la de 18 de Julio de 1877, que se refiere únicamente á la vigilancia del ejercicio de la medicina y de la farmacia. Fué declarada vigente por la ley nacional de 3 de Oct. de 1891. El art. 1627 del Cód. Civ., no es de aplicación al caso; y si lo fuera, no sería el Departamento de Higiene al llamado á fijar arbitrariamente el monto de los honorarios que se cobran. La única disposición aplicable, es la del art. 58 del apéndice al Cód. de Proc.; si así no fuera, habría que convenir en que esa disposición y las siguientes son de todo punto inútiles.



1. **Consignación**—En los juicios ejecutivos, los incidentes sobre consignación en pago, no suspenden la tramitación; deben sustanciarse en juicio ordinario—Com., tom. 8, pág. 43, Ser. 3<sup>a</sup>.

2. **Consignación**—Declarada válida, las costas son de cargo del acreedor que la impugnó—Civ., tom. 6, página 225, Ser. 5<sup>a</sup>.

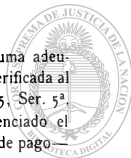
3. **Consignación** —Justificado que en la fecha y lugar

1—Los fondos depositados como pertenecientes al juicio y á otro de igual procedencia, atribuyéndoseles fuerza cancelatoria y con carácter de pago por consignación, fué considerado como que importaba un incidente cuya resolución previa es de aquellas á que se refiere el art. 405 del Cód. de Proc. Dicho incidente, como todos los de su clase, debe sustanciarse con arreglo á los trámites establecidos en dicho Cód. en el título respectivo. Tal incidente implica el ejercicio de una acción ordinaria sobre pago por consignación y por lo tanto, no puede tramitarse en los autos ejecutivos, desde que en éstos se ejercita una acción ejecutiva y atento su diversa naturaleza, no pueden acumularse.

2—Art. 760 del Cód. Civ.

3—El pago por consignación se verificó de acuerdo con las disposiciones de los arts. 756 y 758 del Cód. Civ. El demandado, sin negar el pago ofrecido por el deudor el día del vencimiento de la obligación, y sin negar tampoco que la suma ofrecida era la que correspondía á su crédito, insistió sin embargo, en impugnar la consignación, por no haber sido hecha la oblación en el día mismo en que fué ofrecido el pago, deduciendo de aquí que faltaba uno de los requisitos legales para que pueda ser válida. La oblación fué hecha efectivamente al día siguiente del ofrecimiento al acreedor; pero reconocido por éste que ese pago le fué ofrecido en tiempo oportuno, es decir, el mismo día que vencía la obligación, después de las 4 p. m., y que se negó á recibirlo por no aceptar un recibo que le fué presentado; parece incuestionable que falla por su base la razón de la oposición y cuanto puede argüirse al respecto, sin tener presente que sean cuales fueren los efectos que pudieran atribuirse á la obligación del deudor, no puede, en manera alguna, decirse que hubiera incurrido en mora habiéndose reconocido también que el depósito en el Banco se hizo imposible en el mismo día, dada la hora en que el encargado de hacer el pago á nombre del deudor, fué á casa del acreedor para verificarlo.





convenidos, el acreedor se negó á recibir la suma adeudada, debe declararse válida la consignación verificada al día siguiente del vencimiento— Civ., t. 6, p. 225, Ser. 5<sup>a</sup>.

4. **Consignación** — Hecha después de diligenciado el mandamiento, no puede fundar la escepción de pago— Civ., tom. 10, pág. 11, Ser. 6<sup>a</sup>.

5. **Consignación** — Basta la simple manifestación de vo-

---

Lo contrario importaría dejar establecido que un acreedor requerido en tiempo por su deudor podría negarse bajo cualquier pretexto á recibir el pago de su crédito para impugnar al día siguiente la consignación, haciendo recaer sobre su deudor todas las consecuencias de una falta que no había cometido.

4 - La consignación se hizo además ante un juez que no era el de la ejecución, siendo así que no podía hacerlo sino ante el de la ejecución, pues de lo contrario quedarían trastornadas todas las reglas del procedimiento.

5—Era un argumento fundamental en el juicio, la simulación atribuida al acto jurídico celebrado entre actor y demandado, bajo la forma de una retroventa. Espresaba el deudor en su escrito de demanda, que existía de parte de su contrario el propósito de hacer efectivo un pacto que era simulado y más adelante afirmó, corroborando las manifestaciones anteriores, que de la misma escritura resultaba tratarse de una operación simulada. Era un simple préstamo según el demandante, que, en ningún caso podría conferir á la persona que facilitó el dinero, el derecho de adquirir una finca que representaba cuatro ó cinco veces la suma prestada. La parte demandada pasó por alto en su escrito de contestación, el vicio atribuido al contrato, y en el que se insistió por el deudor durante toda la secuela de la causa. Su situación legal sobre este extremo, aparecía entre tanto definida por la propia confesión del demandado, que es la prueba de mayor fuerza en derecho—Ley 2<sup>a</sup>, tit. 13, Part. 3<sup>a</sup>.—Declaró en efecto el comprador, contestando á las preguntas pertinentes, que facilitó en préstamo al deudor cuatro mil pesos, dando éste, en garantía del crédito, unos terrenos de su propiedad, empleándose la forma de un pacto de retroventa; confesando igualmente que al celebrar ese contrato no entendió ni tenía el propósito de efectuar un contrato de compra, sino simplemente asegurar la devolución de la cantidad entregada. Esta confesión conduce derechamente á la resultante de que el acto de referencia no era



luntad de retrotraer el inmueble vendido con pacto de el que aparecía del instrumento público agregado á los autos, esto es un verdadero contrato de compraventa, subordinado en sus efectos á una cláusula ó modalidad espresamente autorizada y prevista por la ley. El acto concluído entre los litigantes fué un contrato de préstamo, en conformidad al art. 2240, del Cód. Civ. Dentro de este orden de ideas es incuestionable que el demandado no se hallaría derechamente habilitado para adquirir derechos irrevocables á la propiedad, que es la sanción impuesta contra el deudor moroso, como así lo prescribe el art. 1382 del Cód. Civ. Más aun, aceptando que el vicio mencionado en la demanda no se hubiese formalmente comprobado, la procedencia de la acción habría no obstante quedado comprobada. La voluntad del demandante para recuperar el inmueble vendido aparecía manifiesta en la causa, siendo los actos y las manifestaciones constatadas en juicio, suficientes á acreditar los fines propuestos en la demanda. La constatación de esos actos legitiman entre tanto el derecho del actor al amparo de las disposiciones pertinentes de nuestro Cód. y de la jurisprudencia declarada por nuestros tribunales. En un caso análogo al presente—tom. 7º, pág. 353, Ser. 6ª—se hizo notar, que aun cuando la forma en que el vendedor debía espresar su voluntad de rescatar la cosa, había sido muy controvertida, había no obstante prevalecido el principio de que ni la consignación ni las ofertas reales eran indispensables al ejercicio del derecho de retracto. En demostración de esta doctrina se recuerda allí la opinión entre otros, de los siguientes espositores: de Troplong, quien después de un estudio profundo de la materia llega á este resultado: que en tesis general la consignación no es necesaria, sino simplemente facultativa para asegurar la posesión al vendedor, y que las ofertas verbales satisfacen las exigencias de la ley y conservan los derechos del vendedor—*Vente*, 720 y 723—Marcadé, á su vez, va más lejos aun, pues á su juicio no es indispensable que se formalicen ofertas, bastando la declaración hecha por el vendedor al comprador, de su voluntad de ejercer el retracto, pues ella implica é importa de derecho la demostración del deseo de efectuar el reembolso. No es necesario, agrega este autor, que las ofertas sean constatadas por escrito; hechas verbalmente y de una manera irregular, no dejan por ello de ser una manifestación, dada por el comprador al vendedor, de su voluntad de rescatar la cosa, sin perjuicio de regularizarlas si fuese menester, ó probarlas después de la espiración del término. En la misma corriente de ideas, se halla Laurent, quien entiende que no puede hacerse cuestión de ofertas reales ni de consignación, por cuanto el vendedor no paga una deuda, hace



de retroventa para la conservación del derecho después del vencimiento del término, sin que sea indispensable la consignación del precio ni manifestación en forma determinada—Civ., tom. 9, pág. 112, Ser. 6ª.

**6. Consignación**—Cualquiera que sea la manera en que

una declaración de voluntad, en cuyo caso nada tiene que ofrecer ni consignar. Si la intención de la ley hubiese sido que el vendedor hiciese ofertas, lo habría dicho, porque corresponde al legislador en ausencia de una convención, determinar las condiciones del rescate; no encontrándose de consiguiente en la ley, la palabra *ofertas*, su silencio es decisivo. Es indudable que lo único que exigen los principios generales, es una declaración de voluntad—tom. 24, pág. 388.—La doctrina de estos autores se desenvuelve al rededor del art. 1662 del Cód. Napoleón, que es una de las fuentes de nuestro derecho, concordando con ella la jurisprudencia que se ha pronunciado generalmente en sentido que, ni la consignación, ni aun las ofertas reales son necesarias para el ejercicio del retracto—Dalloz. *Vente*, 1500.

6—Esta cuestión casi idéntica á la precedente, fué resuelta por mayoría de votos constituida la Cám. en tribunal pleno. La minoría dijo: En materia de contratos bilaterales es un principio que una de las partes no podrá demandar su cumplimiento si no probase haberlo ella cumplido ú ofreciese cumplirlo—art. 1201, Cód. Civ.—La escritura presentada envuelve un contrato bilateral, supuesto que no es más que un contrato de compraventa con pacto de retroventa, por el cual se obliga el actor á devolver al demandado el precio de venta, y el demandado á restituir la cosa una vez vencido el plazo de cinco meses que se estipula. Es en virtud de este contrato que se ha promovido el presente juicio. El actor deduce demanda para que se condene al demandado, á recibir el pago que ofrecía y á escriturar la propiedad; que el demandado le prestó 20.000 \$ por cinco meses, otorgándole en garantía la venta con pacto de retroventa de una casa; que ésta reconocía al Banco Hip. de la Prov., dos hipotecas que sumaban 30.000 \$, consignándose en la escritura respectiva que el prestamista podría le vantar dichas hipotecas, cosa que dice no notó en el momento del otorgamiento; que antes, y en día del vencimiento del plazo, el prestamista había pretendido que le pagara á la par las cédulas que él había entregado al Banco en pago de las hipotecas, á lo que no accedió y formuló la protesta que acompaña; que la escritura en ninguna parte dice, que si el comprador cubría las cédulas, estuviera el actor obligado



el vendedor haga constar su voluntad de retrotraer el

á pagárselas á la par; que estaba dispuesto á entregar los 20.000 \$ recibidos más el valor corriente de las cédulas con que el demandado levantó las hipotecas, y que así lo manifestaba. Cabe averiguar, entonces, si el accionante ha cumplido ú ofrecido cumplir las obligaciones que le imponía el contrato, porque solo así habría estado habilitado para demandar al comprador, con sujeción al art. 1201 citado. Conceptúo que el actor no ha hecho un ofrecimiento formal y serio demostrando con hechos evidentes la verdadera voluntad de llevar á cabo lo convenido, como era necesario para que hubiese podido surtir efecto. El Dr. Llerena, comentando los arts. 1382 y 1383 concordantes, y ambos relativos á la duración ó plazo del pacto de retroventa y á las acciones del vendedor, se hace cargo de las condiciones en que éste se hace cargo de su derecho de retrotraer, y se espresa así: «En qué forma deberá el vendedor hacer constar la voluntad de recuperar la cosa vendida? ¿Deberá hacer intimación judicial? Pensamos que de cualquier modo que se pruebe que el vendedor ha manifestado al comprador la intención de hacer uso de su derecho, basta para obligar á este último á las consecuencias de su morosidad.» Tenemos pues, que el Dr. Llerena, de acuerdo en esto con la opinión del jurisconsulto Laurent, tom. 24, pág. 399 de su obra titulada «Droit Civil Français», considera que basta que el vendedor manifieste de cualquier modo al comprador su intención de hacer uso de su derecho, para que le obligue á este último á las consecuencias de su morosidad. Ciertamente, la ley no ha establecido una forma dada para esa manifestación, y así la opinión del Dr. Llerena se basa en la ley misma; pero el mismo Dr. Llerena establece que la oferta debe ser tal, que sea capaz de constituir en mora al comprador, lo que demuestra que, en el concepto de ese jurista, la oferta debe ser seria y razonable para que pueda tener efecto legal. Según la autorizada opinión de Aubry Rau, las ofertas deben ser sinceras, y el vendedor debe encontrarse en situación de poderlas realizar inmediatamente — tom. 4, § 357—Y no puede ser de otro modo. Si bastara un simulacro de ofrecimiento sin ninguna seriedad y eficacia, estaría siempre en manos del vendedor el estorbar los efectos del pacto de retroventa, con grave daño y menoscabo de los intereses del comprador. El Inferior ha estado en lo cierto al afirmar, con las constancias de autos, que no existía al presente una oferta propiamente dicha, de parte del actor. El actor confiesa en su demanda, y así consta de autos, que el día del vencimiento del plazo acordado para el retracto, no ofreció devolver al comprador el precio



inmueble vendido con pacto de retroventa, basta para con-

estipulado en el contrato, sino una suma inferior, amparado del hecho de haber levantado las hipotecas con cédulas que se vendían en plaza á un precio que estaba muy abajo de su valor escrito, según lo afirma. Tal ofrecimiento no se aceptó á causa de no ser conforme con el contrato, como lo manifestó en su oportunidad. Si el ofrecimiento hecho por el actor no se ajustaba á los términos del convenio; si en vez de ofrecer para el retracto el precio acordado en la escritura que era el de cincuenta y seis mil pesos, si se cancelaban las hipotecas por el comprador, solo pretendió entregar una cantidad inferior á la indicada, mal puede sostenerse que ha mediado por parte del actor un ofrecimiento serio y formal de cumplir sus obligaciones dentro de lo convenido en el contrato. Si no ha existido una oferta seria y formal del vendedor es manifiesto que el comprador no ha caído en mora. Tampoco consta que el día del vencimiento del plazo, el vendedor se encontrara en situación de cumplir inmediatamente su oferta, en el supuesto de que ésta se hubiese ofrecido en forma, como lo quiere Aubry Rau en el lugar antes citado. Ahora bien; si el actor dejó vencer el plazo señalado de cinco meses sin usar en forma legal del derecho de retrotraer la cosa, su derecho de resolver la venta quedó extinguido, y el comprador quedó propietario irrevocable —art. 1382, Cód. Civ.—La demanda no es posible que prospere dado los antecedentes que dejo apuntados. El demandante ha atacado duramente la faz moral del convenio. Pero observaré que él se contrajo por personas hábiles y que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla á la cual deben someterse como á la ley misma, con arreglo al art. 1197, Cód. Civ., sin otras limitaciones que las que consignan los arts. 21, 502 y 953. Hay más; el art. 1360, Cód. Civ., se coloca en la hipótesis de que el vendedor al recuperar la cosa vendida restituya al comprador el precio recibido con exceso. De donde resulta que el convenio en lo relativo al precio, se ajusta nada menos que á un caso previsto por la ley misma. El actor ha dicho, «cuando se redactó la espresada escritura de venta con pacto de retroventa, se consignó en ella que el prestamista podría levantar dichas hipotecas, cosa que no noté en el momento.» Esta manifestación carece de valor legal, desde que la referida escritura no ha sido tachada de falsedad, ni otro vicio alguno. Ese instrumento hace plena fe y debe producir sus efectos en toda su integridad, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 994, Cód. Civ., Por otra parte, es un principio de derecho, que nadie puede volver contra sus propios actos. La mayoría después de algunas conside-



servar su derecho, sin que sea requisito ineludible la consignación—Civ., tom. 7, pág. 407, Ser. 6<sup>a</sup>.

raciones, dijo: «Si de cualquier modo que se pruebe que el vendedor ha manifestado al comprador su intención de recuperar la cosa vendida, queda salvado su derecho, como lo sostiene el doctor Llerena en su comentario de los arts. 1381 y 1382 del Cód. Civ., de acuerdo con la doctrina definida por Laurent; si el vendedor puede hacer esta declaración, verbalmente ó por escrito desde que no existe una forma determinada en la ley, y si todo se reduce á la prueba que debe admitírsele para justificar que notificó ó hizo saber en tiempo al comprador que quería usar de la facultad que se había reservado en el contrato, de retomar la misma propiedad, como lo dice el mismo Laurent—tom. 24. num. 399 --Si, en fin, esta prueba se ha producido cumplidamente, y de ella aparece que, efectivamente el vendedor trató de usar de su derecho en tiempo y no pudo llevarlo á efecto por las diferencias suscitadas en cuenta á las condiciones del precio que debía restituir, me parece que es incuestionable la procedencia de la demanda. Pero se observa que el ofrecimiento hecho por el actor era inferior á la cantidad indicada en el contrato, es decir, que no ofreció los cincuenta y seis mil pesos estipulados como precio del inmueble vendido, incluyendo en ese precio el importe de las obligaciones hipotecarias canceladas por el demandado, deduciéndose de aquí que dicho ofrecimiento carecía de valor. Pero aparte de que esta consideración prueba por sí sola la declaración formal del vendedor, pienso también que su oferta en los términos en que aparece, es la que correspondía con arreglo á las estipulaciones que se han consignado en el contrato, como pienso que carecería de toda base legal una exigencia mayor ó contraria. Según resulta de la escritura citada, el precio de venta estipulado comprendía el importe de los gravámenes hipotecarios cuya cancelación el comprador tomó á su cargo, pero en las formas y condiciones establecidas en la respectiva escritura de hipoteca. El vendedor recibió tan solo en dinero la suma de veinte mil pesos, los mismos que se obligó á devolver al comprador dentro de los cinco meses fijados para la retroventa si no levantaba las hipotecas, ó bien el importe total del precio si las hubiera cancelado para entonces, y es lógico suponer que en este caso su obligación no era la de entregarle íntegra esa suma sino la que resultase haber pagado el comprador para cancelar aquellos gravámenes. La cláusula á que me refiero dice así: «Esta escritura contiene el pacto de retroventa, como ya se ha espresado, mediante el cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar la propiedad deslindada dentro



7. **Consignación**—A la orden de juez incompetente, sin notificación al acreedor, no puede fundar la excepción de pago—Civ., tom. 5, pág. 205, Ser. 6<sup>a</sup>.

8. **Consignación**—Si fué aceptada por el acreedor antes de la formación del concurso, la suma consignada en pago, no forma parte de la masa—Civ., t. 5, pág. 225, Ser. 6<sup>a</sup>.

9. **Consignación**—No procede el embargo preventivo

del término de cinco meses á contar desde hoy, en cuyo acto devolverá al comprador la misma suma de veinte mil pesos, si las cancelara; es convenido igualmente que el vendedor quedará como inquilino pagando un alquiler mensual de 400 \$.<sup>1</sup> Conforme con lo convenido en esta cláusula, el comprador ha cancelado dichos gravámenes hipotecarios, y entiendo por esto que la vendedora debe entregar el importe total del precio sin deducción alguna, es decir, pagarle por su valor escrito, las cédulas con que él canceló aquellos gravámenes, y que en la época en que lo verificó se cotizaban abajo del 30 % de su valor nominal. ¿Es esto justo? Me parece que basta enunciar la cuestión para resolverla negativamente, porque aparte de los propios términos de la cláusula transcrita, y de lo que sin duda fué la intención de las partes al celebrarla, estaría la equidad para rechazar las pretensiones del demandado como contrarias á toda razón de derecho y de justicia. Estas consideraciones deciden un voto por la negativa en la cuestión propuesta.»

8—Los fondos depositados quedaron desde entonces á la disposición del acreedor, como efecto propio del pago por consignación—arts. 759 y 761, Cód. Civ.—no pudiendo en consecuencia, ingresar á la masa del concurso, porque ello importaría acordar al deudor la facultad de retirar el depósito, ó lo que es lo mismo, de ceder un bien que ya no le pertenecía, cuando se presentó haciendo cesión de todos sus bienes á sus acreedores.

9—Para que pueda decretarse el embargo preventivo, es preciso que exista un crédito por una cantidad líquida ó determinada. En el caso del sumario no ocurría esto, pues que el juicio versaba sobre consignación de alquileres, la que aun cuando había sido contestada, no había sido reconocida, ni se encontraba comprobada en autos. La disposición del art. 2700 del Cód. Civ., es inaplicable al caso, por no tratarse de una acción sobre división de condominio y sustanciada entre condóminos; no siendo tampoco de aplicación los arts. 448 y 449 del Cód. de Proc. porque no concurren los extremos á que éstos se refieren.



por alquileres si existe consignación, aun cuando haya sido contestada—Civ., tom. 3, pág. 41, Ser. 6<sup>a</sup>.

10. **Consignación**—El acreedor á quien se hace saber la consignación está obligado á manifestar su conformidad ó disconformidad; si no la inapugna debe darse por verificado el pago con expresa condenación en costas—Civ., tom. 3, pág. 196, Ser. 6<sup>a</sup>.

11. **Consignación**—Aceptada la consignación en pago, el deudor no puede retirar los fondos consignados—Civ., tom. 2, pág. 158, Ser. 6<sup>a</sup>.

12. **Consignación**—El depósito judicial del importe de una deuda, no puede fundar la escepción de pago, si no llena los requisitos de la consignación—Civ., tom. 8, página 39, Ser. 5<sup>a</sup>.

13. **Consignación**—Debe hacerse ante el juez á cuya jurisdicción corresponda, según la cantidad—Civ., tom. 6, pág. 214, Ser. 5<sup>a</sup>.

14. **Consignación**—Los interesados en un depósito judicial, deben reclamarlo ante el juez que conoce del juicio en que se ha hecho la consignación y no al que lo tiene á su orden—Civ., tom. 6, pág. 364, Ser. 5<sup>a</sup>.

**Consignación**—Véase: *Acreedor*, 4; *Alquiler*, 2, 29 y 31; *Contrato de compraventa*, 15; *Plazo*, 1; *Escepción de pago*, núm. 6.

10—Véase: verb. *Acreedor*, 4.

11—Habiendo el acreedor aceptado la consignación, quedó terminado el juicio iniciado al efecto, y perdido por parte del deudor el derecho á retirar la suma consignada, derecho que solo conserva mientras no se acepte la consignación judicial que la tenga por válida—art. 761 del Cód. Civ.

12—Para que la consignación produzca efecto de pago, es necesario que concorra alguno de los requisitos contenidos en el art. 557 del Cód. Civil.





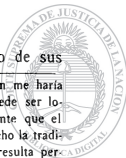
**Consignatarios**—Véase: *Agentes auxiliares*, 1.

**1. Construcción**—De obra, importa una turbación de

1.—La sentencia del Inferior que fué revocada por la Cám., estableció que el *constitutum possessorium* de los romanos no existe en nuestras leyes, y que de consiguiente, los recaudos que hizo valer el demandante sobre este particular no tienen la eficacia suficiente para determinar el éxito de su acción, tanto más cuanto que el art. 2387 del Cód. Civ. debe interpretarse restrictivamente, como que importa una escepción á los principios generales establecidos para la adquisición de la posesión. La Cám. dijo, que el juez *a quo* no había penetrado la verdadera razón jurídica del artículo, pues á hacerlo se habría apercibido sin dificultad, y cualquier que fuese su criterio de interpretación, que el precepto en él contenido reproduce en principio el *constitutum* de las antiguas leyes. No es necesaria la tradición de la cosa, sea mueble ó inmueble, para adquirir la posesión, dice el artículo, cuando es tenida á nombre del propietario, y éste por un acto jurídico pasa el dominio de ella al que la poseía á su nombre, ó cuando el que la poseía á nombre del propietario principia á poseerla á nombre de otro. ¿Cuáles son, entre tanto, las fuentes de esta disposición? El mismo codificador las enumera en su nota ilustrativa. Cita, en primer término, la ley 47, tit. 28, Part. 3ª, según la cual: «Logado auiendo algund ome, ó emprestado ó encomendado á otro alguna su cosa, si despues desso le vendiesse aquella cosa misma, maguer entonces non estuuiesse la cosa delante, nin le apoderasse della, con todo esso gana el señorío della aquel á quien la vende, ó la da.—Otros dezimos, que por todas aquellas razones ó maneras, que passa la tenencia de las cosas de los vnos omes á los otros, maguer non sean apoderados dellas corporalmente, segun dice en Tit. que fabla de la manera en que puede ome ganar, ó perder, tenencia de las cosas non fuessen apoderados corporalmente.» Tenemos otra ley que fija con más claridad la inteligencia del punto que nos ocupa. Es la 9ª, tit. 30 de la misma Part.: «Enagenan los omes, dice, los vnos á los otros sus heredamientos á las vegadas á tal pleito, que retienen para sí en toda su vida el vsufructo dellos, ó despues que lo han enagenado, antes que apoderen dellos á aquellos á quien los enagenaron, arriendan los de los compradores. E en cualesquier destos casos dezimos, que gana la possession de la cosa aquel á quien es enagenada, é aun ha el señorío en ella, bien assi como si fuesse apoderado corporalmente della. Esso mismo seria, si aquel que enagena la cosa, discesse: Otorgo, que de aqui adelante tengo la possession della en vuestro nomtre.» La glosa de esta ley es abundante en doctrina, llegando

la posesión, sin que el hecho de haberla terminado ener-

en definitiva sus espositores, con la opinión de la mayoría de los intérpretes, á la conclusión de que basta que coexista el título traslativo de dominio con el acto mismo de tomar la cosa en arriendo, ó con la retención del usufructo, para que éstos induzcan la tradición fingida de la posesión. Después de la ley 47 de Part., el codificador recuerda estos dos pasajes del Digesto: L. 9, 55, Dig. De adq. rerum dom, y L. 18, Dig. De adquirvel amit posses. La primera de estas leyes se expresa así: «Tal vez sin entregar la cosa, sólo la voluntad del señor es bastante para transferir el dominio de ella: v. g., si lo que te di en comodato ó en arrendamiento, ó deposité, lo entregué por esta causa, por el mismo hecho de permitir que tú lo tengas por razon de la venta la hago tuya.» «Lo que poseo en mi nombre, dice la segunda ley, lo puedo poseer en nombre de otro, porque no mudo la causa de la posesión, sino que dejo de poseer, y por mi propio hecho y voluntad, hago que otro posea, porque no es lo mismo pöseer que poseer en nombre de otro; pues sólo posee aquel en cuyo nombre se posee, y el poseedor presta su propio hecho y consentimiento para la posesión de otro.» Finalmente: Molitor, en el lugar que indica la nota, habla en estos términos: «Convertirse de poseedor en detentador en nombre de otro á quien se transfiere la posesión resolviéndose á poseer por él, es lo que los jurisconsultos modernos han llamado *constitutum possessorium*. El *constitutum* es, en cierta manera, la *brevi manu traditio* á la inversa, porque si ésta hace al detentador, á nombre de otro, propietario ó al mero poseedor, el *constitutum* transforma en detentador á aquel que ha sido propietario ó poseedor. Sinembargo, del mismo modo que la *traditio brevi manu* no se aparta de las reglas ordinarias sobre adquisición de la posesión, el *constitutum* tampoco se separa de ellas, pues que comprende todas las condiciones requeridas para la adquisición por un tercero. En efecto, continúa este autor, cuando se analiza el acto, se encuentra primero: la voluntad de poseer para un tercero, que es, en tal caso, el mismo transmitente, el cual manifiesta la intención de transmitirnos la posesión; segundo, la voluntad de un tercero de poseer por nosotros; tercero: la *rei presentia*, ó la detención corporal del tercero que preexiste al *animus* como en la *traditio brevi manu*. El *constitutum* posesorio no presenta pues, nada de ficticio, y tan cierto es esto, que si llegase á faltar una de las tres condiciones mencionadas, no habría tradición ni *constitutum*. No obstante, agrega por último este tratadista, si la voluntad de poseer para el adquirente no se presume, puede sinembargo, espresarse de una manera tácita. Si después de



ve el derecho del propietario para el ejercicio de sus

haber hecho donación del fundo lo arriendo, esta locación me haría detentador á nombre del donatario, porque como no se puede ser locatario de su propia cosa, debe considerarse necesariamente que el donante ha transferido la propiedad, es decir, que ha hecho la tradición. La inteligencia y la razón filosófica de nuestra ley, resulta perfectamente definida con los testos y con el comentario citados. Se observa todavía que la letra del Digesto, especialmente el de la ley 18: *Quod meo domine possideo*. ., es el que ha servido como punto de partida á la doctrina de los autores sobre el *constitutum*. Savigny hace notar que este término no se encuentra en el derecho romano, aunque sí la cosa que designa, agregando que aun cuando no hubiera sido expresamente designada, no por ello sería menos incontestable. Posesión, pág. 290.-- La teoría de este tratadista puede resumirse en estos términos: El *constitutum* presenta el caso inverso de una *brevi manu*, pues así como en éste el que hasta entonces tenía la detentación, puede adquirir la posesión por el *animus possidendi*, sin verificar ningún nuevo acto, del mismo modo la simple voluntad transforma la posesión en detentación y hasta el derecho de posesión es transmitido inmediatamente á otra persona. La posesión se adquiere en este caso, por simple convención y sin necesidad de ningún acto exterior ejercido sobre la misma cosa. Estudiando Mainz la *traditio ficta* de los romanos, llega al *constitutum* y lo explica con el ejemplo siguiente: Pablo vende su casa á Pedro, pero continúa habitándola á título de locación. Para hacer tradición Pablo podría entregar la casa á Pedro, el cual lo haría entrar en seguida como locatario. En lugar de esto, es mucho más fácil que Pablo continúe ocupando la casa, no ya en su nombre propio, sino como representante de Pedro. Se ve, pues, que en uno como en otro de estos dos casos—el otro se refiere á la *traditio brevi manu*—hay realmente toma de posesión con el consentimiento del poseedor actual, y de consiguiente, tradición. Lo que hace parecer un tanto complicada la operación, es que la misma persona obra á la vez en su nombre propio y como mandatario del otro contratante. Todos los intérpretes del derecho bien conocidos, coinciden con las conclusiones apuntadas refiriéndose preferentemente, al ocuparse de este modo de adquisición, á los pasajes del Digesto ya recordado, y que constituyen el fundamento y la razón de ser del art. 3287. Es forzoso, en consecuencia, concluir que la sentencia de que se ha alzado el demandante, no está en lo cierto al considerar que el *constitutum* posesorio no ha sido incorporado á la ley argentina. El mismo Llerena, después de

derechos posesorios — Civ., tom. 6, pág. 115, Ser. 5ª.

expresar su pensamiento en los términos invocados por el Inferior, establece, que si bajo la misma denominación de *constitutum* se comprenden los casos enumerados por Savigny, el art. resuelve la cuestión en favor de esta clase de *constitutum*, que no es otra cosa que una *traditio brevi manu*. Segovia fija con claridad sus ideas sobre la materia. Según este autor, no es necesario un acto material de tradición; pero interviene una tradición implícita, consistente en que el propietario autoriza al adquirente a poseer la cosa como dueño, lo cual es más conforme con la disposición absoluta de los arts. 577 y 3267, y también a la razón, pues que existiendo ya el poder único sobre la cosa, es decir, la ocupación y aprehensión, el cambio de voluntad que sobreviene constituye la tradición y posesión de la cosa. En este mismo orden de ideas se produce el Dr. Rafael García, una de nuestras primeras autoridades en la ciencia del derecho, cuando asegura que el convenio entre un vendedor y los compradores de constituirse el primero en simple tenedor, ó sea el *constitutum*, es un medio legítimo de transmitir la posesión, y se trasmite en efecto, tan real y verdaderamente, como si se hiciese la entrega material de la cosa vendida — Escritos jurídicos, tom. 1º, pág. 183. — Si el art. 2387 fuese una excepción a los principios generales que rigen la manera legal de adquirir la posesión, de aquí solo resultaría que el caso occurrente cae en su término ó fórmula de resolución, bajo el imperio de la excepción y no de la regla. En cuanto á los hechos, bastaba relacionarlos en sus puntos permitientes para persuadirse que se encuadran sin dificultad dentro de la doctrina que queda espuesta. Aparecía acreditado así por la propia confesión del demandado y por las enunciaciones del instrumento público, que en Marzo de 1873 el demandado transfirió al demandante sus derechos de propiedad sobre el inmueble, como igualmente que aquél continuó ocupándolo como locatario del comprador. En la escritura se expresó que el comprador quedaba constituido en la obligación de respetar el contrato de arrendamiento que la Mun. tenía celebrado con el vendedor, y como faltaban algunos meses en favor del último, el mismo se obligó á respetar al demandado sin remuneración de ninguna clase. Más tarde, en Setiembre del mismo año 1873, el demandado se dirige por escrito al comprador, diciéndole que ponía en su conocimiento que algunos empleados de la Mun. de B. Aires habían penetrado en el terreno de su propiedad, que ocupó el vendedor como inquilino. Respecto al segundo extremo, el despojo, la absolución es más sencilla. El demandado confesó que á mediados del año 1892, mientras el apo-



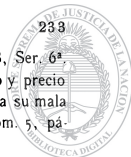
2. **Construcción**—De obras, en tanto no se terminen por el constructor las obras exigidas por los peritos y ordenadas por el juez, no procede la entrega de los fondos depositados—Civ., tom. 7, pág. 170, Ser. 6<sup>a</sup>.

3. **Construcción**—El privilegio que la ley concede sobre el inmueble por los materiales suministrados para la construcción, no puede ser invocado contra terceros ad-

derado de los herederos del comprador se encontraba en Europa, había edificado en el costado norte del terreno. Esplicando en seguida su contestación, dice que la casa á que se refería era un ranchito que había compuesto... Es incuestionable, en tal caso, la procedencia de la acción, porque según nuestra ley, hay despojo cuando la turbación consiste en obra nueva que se comenzare á hacer en terrenos é inmuebles del poseedor ó en destrucción de las obras existentes, siendo clandestina la posesión cuando los actos por los cuales se tomó ó se continuó fueron ocultos ó se tomó en ausencia del poseedor—arts. 2366 y 2498 del Cód. citado. El agregado que hace el confesante, no modifica en manera alguna la resultante de las disposiciones recordadas, porque la ley no toma en cuenta para el ejercicio de la acción posesoria, la importancia ó magnitud de la obra, sino el hecho mismo de la turbación, que es su causa generadora. Es también errónea la consideración que puede hacerse valer que esa acción solo se acuerda mientras se construye la obra nueva ó se destruyen las existentes en el inmueble del poseedor, pero no cuando aquélla está terminada ó cuando la destrucción de la obra existente ya se haya producido. Para darse cuenta de este error, basta recordar que el derecho del poseedor, para ser amparado en caso de despojo, dura un año desde el día en que se cometió, y es por demás evidente que este derecho quedaría vulnerado si hubiera de prevalecer la doctrina contraria. La ley no hace, además, distinciones ni podría hacerlas, á menos de desnaturalizar el mismo principio *spoliatus ante omnia restituendus*, de que hace mérito el juez *a quo* y que domina soberanamente la materia del litigio »

2—La no entrega en este caso no importa un embargo preventivo, sino la simple retención del dinero, estando sujeta la entrega al cumplimiento de una condición, mientras esa condición no se cumpla la obligación no es exigible.

3—Art. 2310 del Cód. Civ.



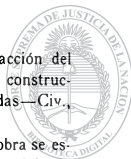
quirentes á título oneroso—Civ., t. 6, pág. 158, Ser. 6<sup>a</sup>.

4. **Construcción** —Al que, existiendo contrato y precio determinado para la locación de servicios, alega su mala construcción, corresponde la prueba—Civ., tom. 5, página 107, Ser. 6<sup>a</sup>.

5. **Construcción**—Si por el contrato no se estipuló es-

4—El demandado confesó la existencia del contrato, precio y demás condiciones, para alegar la mala ejecución de la obra. Este es un hecho nuevo traído á juicio por él, incumbiéndole su constatación, de acuerdo con los principios que rijen la prueba

5—El juez de 1<sup>a</sup> Inst., cuyo fallo fué confirmado, por sus fundamentos, decía lo siguiente: El demandado reconoce el contrato manifestando simplemente que éste da una interpretación equivocada á sus diferentes cláusulas y fundándose en el mismo contrato, pide que se rechace la demanda. Las conciones hechas en los contratos forman para las partes una regla á la cual deben someterse como á la misma ley -- art. 1197, Cód. Civ.—de donde resulta que la cuestión debe resolverse según la interpretación que se dé á los artículos del documento. Desde luego, puede afirmarse con la simple lectura del contrato, que el inquilino no estaba obligado á la reposición de las piezas de madera construídas por él. En primer lugar, debe observarse que no se trata del alquiler de toda una propiedad, sino simplemente de cuatro piezas de una casa; esta observación tiene su fundamento, pues si el arrendamiento versara sobre toda la propiedad, y estuviere estipulado que las mejoras hechas por el locatario quedarían á beneficio del locador, sería fuerza concluir que esa cláusula se refería á todas las mejoras practicadas; y en segundo lugar, conviene advertir que el contrato que se estudia, tiene sus particularidades, como se ve por las estipulaciones contenidas en los arts. 5<sup>o</sup> y 6<sup>o</sup>. El art. 3<sup>o</sup> determinaba que todas las obras que fueren necesarias *en las piezas ya mencionadas*, serían hechas por cuenta del inquilino y á su costa sin que tuviese derecho á pretender ninguna cantidad del locador. El art. 4<sup>o</sup> repetía lo mismo, pues decía: «las mejoras que el inquilino hiciere en las cuatro piezas quedarán á beneficio del locador, sin que tenga que abonar ninguna cantidad por ellas.» Como se ve, estos arts. hablan de mejoras y obras á ejecutarse *en las cuatro piezas alquiladas*, como serían empapelado, colocación de puertas, tabiques, pisos, etc; pero de aquí no puede pretenderse que las piezas de madera construídas por el inquilino, que han podido perfectamente



presamente la obligación, debe rechazarse la acción del locador que pretenda calificar como mejoras, construcciones independientes de las piezas arrendadas—Civ., tom. 1, pág. 143, Ser. 6<sup>a</sup>.

6. **Construcción**—Si la construcción de la obra se estipuló á tanto la medida, sin determinación de medida total, el locador puede rescindir el contrato en cualquier tiempo, sin que el constructor pueda reclamar la utilidad que pudiera reportar terminada la obra—Civ., tom. 6, pág. 5, Ser. 5<sup>a</sup>.

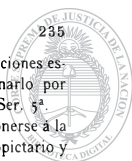
**Construcción**—Véase: *Contrato de construcción*; *Daños y perjuicios*, 58; *Obra*; *Acreeedor hipotecario*, 1; *Arbitros*, 3; *Acto de comercio*, 4.

1. **Constructor**—Aun cuando el constructor prometa

repararse sin deterioro del edificio, estén compendidas en las obras y mejoras á que se refieren los arts. citados. La mayor prueba de que la intención de los contratantes no ha sido que las piezas construidas por el locatario quedasen á beneficio del locador, la tenemos en lo que establecen los arts. 4º y 6º del contrato. El 1º dice: «en el caso que el locador edifique de altos sobre las piezas ya mencionadas, deberá dar la preferencia al inquilino, haciéndole una rebaja de 50 % sobre el precio de alquiler, etc.» El 2º dice: «si el locador no hiciese el edificio á que se refiere el art. anterior, el inquilino podrá hacerlo por su cuenta, siempre que las piezas le sean necesarias para ocuparlas él, y en caso de no necesitarlas él, se las dará al locador con una rebaja de 50 % sobre el alquiler.» Ahora bien, pongamonos en el caso de la última parte de este art. El inquilino edifica las piezas, él no las necesita, ó no las ocupa, y en este caso está obligado á cedérselas al locador con una rebaja de 50 % en el alquiler y todavía á la conclusión del contrato, debe dejar las piezas á beneficio del locador, lo que es un absurdo.

6—Art. 1639 del Cód. Civ.

1—Esta facultad autorizada por la ley para el cumplimiento de las obligaciones de hacer, solo puede acordarse, según el art. 629 del Cód. Civ., cuando el deudor no quisiere ó no pudiese ejecutar el hecho convenido. El art. 625 del Cód. Civ., dispone, que el hecho debe ejecutarse en un tiempo propio, y que si así no se hiciere se tendrá por



cumplir el contrato, si no lo hace en las condiciones estipuladas, debe facultarse al locador para terminarlo por cuenta del locatario—Civ., tom. 7, pág. 94, Ser. 5ª.

2. **Constructor**—Carece de derecho para oponerse a la continuación de la obra acordada entre el propietario y el empresario, aun cuando invoque derecho de retención por las sumas que se le adeuden—Civ., t. 5, p. 281, S. 6ª.

3. **Constructor**—El propietario no está obligado al pago del saldo del precio, en tanto el constructor no entregue las llaves de la finca completamente terminada—Civ., tom. 2, pág. 138, Ser. 6ª.

**Constructor**—Véase: *Compraventa*, 4; *Construcción*, 6; *Daños y perjuicios*, 9; *Acreedor hipotecario*, 1; *Concurso*, 16; *Afirmados*, 1.

1. **Cónsules extranjeros**—No deben intervenir en los juicios sobre demencia de sus connacionales, aun cuando hayan hecho la denuncia—Civ., t. 5, pág. 210, Ser. 5ª.

no hecho. La promesa de efectuarlo, en contra de lo convenido, debe tenerse por no hecha y considerarse por lo tanto, que no se puede ó no se quiere cumplir la obligación. Los contratos deben cumplirse de acuerdo con la intención de las partes, y si éstas han querido que la construcción se haga en un término dado, no puede librarse á la voluntad de una de ellas dilatar su terminación, sino que, una vez transcurrido el término designado, debe compelerse al deudor en la forma que establece el art. 630.

2.—El constructor se presentó reclamando en un juicio que no era parte, y así se declaró, no haciéndose lugar á lo pedido; dejando á salvo los derechos que le correspondían al mismo constructor para hacer valer sus derechos en la forma que viere convenirle. El sumario pues, está equivocado; el caso es muy distinto.

3.—Se trataba de la ejecución de un laudo arbitral que había establecido que el propietario no estaba obligado á entregar al constructor el saldo del precio, hasta tanto éste no hiciera entrega de las llaves. El juez le fijó el término de diez días, bajo apercibimiento.

1.—En el juicio de insania, las únicas partes son: el curador nombrado y el Min. Pupilar—art. 147, Cód. Civ.





2. **Cónsules extranjeros**—No tienen facultad de intervención en la testamentaria, cuando existe en el país cónyuge legítimo del causante—Civ., t. 6, pág. 266, Ser. 5<sup>a</sup>.

**Cónsules extranjeros**—Véase: *Curadores*, 1; *Consejo de educación*, 5; *Bienes hereditarios*; *Albacea*, 1.

1. **Contador**—La liquidación del crédito en juicio ejecutivo, debe ser practicada por el Secretario, sin que sea necesario el nombramiento de contador—Civ., tom. 9, pág. 271, Ser. 6<sup>a</sup>.

2—Debe aplicarse el art. 9° del decreto del Gob. Nac. de Nov. de 1882, que reglamenta la intervención de los cónsules extranjeros, y que estatuye que los albaceas nombrados por el consul quedarán reducidos al carácter de representantes de los herederos ausentes. El art. 1° dice: «Falleciendo *abintestato* algún extranjero sin dejar ascendientes, descendientes, ni cónyuges legítimos, públicamente reconocidos como tales, residentes en el país, ó con testamento si fueran extranjeros los herederos, y estuvieran ausentes y ausente también el albacea testamentario, el consul de su nación podrá intervenir en su testamentaria.» El art. 2° dice así: «No tendrá lugar la intervención de los cónsules, cuando algún argentino, reconocido notoriamente por tal, fuese heredero ascendiente ó descendiente.» Del art. 1° transcripto, se deduce clara y llanamente, que el consul no puede intervenir cuando existe viuda. Esto resalta más aun, leyendo el art. 2°. El art. 9° dice así: «Si hubiese herederos legítimos colaterales en el país, tendrán el derecho de pedir al juez de la causa el nombramiento de albacea, quedando entonces los nombrados por el consul, reducidos al carácter de representantes de los herederos ausentes que no hubiesen nombrado apoderados especiales

1—El art. 523 del Cód. de Proc. dice, que hecha la oblación del precio se mandará hacer por el juez la liquidación del capital, intereses y costas del juicio, sin prescribir que la operación sea efectuada precisamente por un contador. Para practicar la liquidación que pueda considerarse sencilla, es manifiesto que no se requieren conocimientos especiales de contabilidad—art. 161, Cód. de Proc.—En consecuencia, y dado los términos del art. 523 citado, la liquidación en estos casos debe considerarse como función propia del actuario. Esta interpretación se conforma con el espíritu de nuestras leyes procesales, en cuanto ellas propenden á que la justicia sea barata.



2. **Contador** —Aun cuando existan menores interesados, no procede la regulación de honorarios al contador si hay convención particular—Civ., t. 8, p. 382, S. 6ª.

3. **Contador**—Su nombramiento para la división de la herencia, solo es necesario, si existen dificultades para la partición—Civ., tom. 5, pág. 289, Ser. 6ª.

4. **Contador**— Producida la disconformidad para el

2—El Asesor de menores y el tutor estuvieron conformes en el convenio, siendo entonces aplicable el art. 679 del Cód. de Proc. y no el 678.

3—El art. 668 del Cód. de Proc., legisla para el caso general en que la liquidación y división de la herencia requieran, por la naturaleza de las operaciones á practicarse, la intervención de un contador. En el caso ocurrente no aparecía la necesidad de esa intervención, desde que no constaba en modo alguno que existiesen dificultades ú operaciones complicadas de contabilidad, relativamente á la división de la herencia.

4—Si bien el art. 668 del Cód. de Proc., estatuye en su acápite primero, que por el mismo auto en que se mande proceder á la liquidación y división se convoque á las partes á junta, con el fin de nombrar contador, éste art. ni ninguna otra disposición de la ley, prohíbe que dicho nombramiento pueda hacerse en otra forma. Lo contrario resulta de la misma disposición citada, en su acápite segundo, que establece: que estando conformes los interesados, el nombramiento lo pueden hacer en un solo escrito sin esperar el día de la junta. La junta de que trata el art. citado no tiene otro fin que el de ver si las partes se acuerdan para el nombramiento de partidór, indudablemente con el propósito de evitar trámites y demoras á las partes. Esa y no otra es la interpretación que debe darse á la disposición del art. 668. Como una de las partes propuso contador sin haberse convocado á junta y produciéndose disconformidad al respecto, se renunció al trámite establecido en la primera parte del art. 668; trámite por otra parte, en este caso, innecesario, desde que él daría por resultado proceder al nombramiento de oficio. Entonces, ninguna razón existe para convocar á las partes á junta. El nombramiento de oficio se hizo en virtud de la disconformidad de las partes con el perito propuesto, usando así de un derecho que la ley confiere en tales casos al Juzgado, y que consagra también el artículo citado, en su parte final.



nombramiento de contador, debe nombrarse de oficio, sin que sea necesaria la convocatoria á juicio verbal—Civ., tom. 4, pág. 22, Ser. 6ª.

1. **Contrademanda** —Solo puede interponerse al contestar la acción; si el apoderado carecía de poder bastante,

1.—El mandato era especial y en él solo se autorizaba al apoderado para que representase al demandado en la acción que por cumplimiento de un contrato se le había iniciado. No contenía facultad para reconvenir y ella era indispensable, porque la reconvencción es una nueva demanda que el reo pone al actor, después de contestada la interpuesta por éste, siendo diversas en todas sus partes de la anterior.—Febrero, y Conde de la Cañada, verb. *Reconvencción*.—Si se contrademanda sin poder bastante se estralimita en sus facultades desde que, por disposición del art. 1884 del Cód. Civ., el mandato especial para ciertos actos de una naturaleza determinada, debe limitarse á los actos para que ha sido dado, y no puede estenderse á otros análogos, aunque pudieran considerarse como consecuencia natural de los que el poderdante ha mandado hacer. La circunstancia de que el mandante se presente, tomando intervención directa en el espediente ó manifestando que su apoderado procedió en un todo con arreglo á sus instrucciones, en virtud de lo que ratifica todo lo hecho en su representación, en nada modifica la posición en que se encontraba colocado el contrademandado: 1º porque con arreglo á lo establecido por el art. 101 del Cód. de Proc., en el mismo escrito de contestación el demandado debe deducir la reconvencción, si se creyere con derecho á proponerla; 2º Porque si se admitiese que con la ratificación quedara subsanada la falta de personalidad en el apoderado cuando dedujo aquélla, sería admitir también que la contrademanda se puede entablar después de contestada la demanda principal, lo que está espresamente prohibido por la segunda parte del art. últimamente citado; 3º porque la ratificación importa pretender conferir al apoderado un mandato con efecto retroactivo; 4º porque el mandato para actos de la naturaleza del que se trata; no puede conferirse sino por escritura pública—inc. 7º del art. 103 del Cod. de Proc.—y no podía modificarse ese estado por la reconvencción. Sin embargo de todas estas razones bien poderosas, la Cám. ha resuelto lo contrario con posterioridad, sin emitir fundamento alguno para destruir esta jurisprudencia por ella misma sentada. Es cierto que en esa resolución hubo influencias poderosas del lado del vencedor. Véase el caso de Carrié con Carrié del año 1887. Sin embargo, en el caso

debe tenerse por no opuesta en tiempo—Civ., tom. 6, pág. 178, Ser. 6<sup>a</sup>.

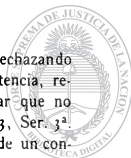
**Contrademanda**—Véase: *Costas*, 1 y 55; *Cantidad de mandada*, 1; *Personería*, 3; *Poder especial*.

1<sup>a</sup>. **Contradocumento**—De una escritura pública, debe pagar el impuesto de sellos, aun cuando los bienes se encuentren ubicados fuera de la Capital—Civ., tom. 5, pág. 258, Ser. 6<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Contrato**—Aun cuando se demanden daños y perjuicio que corre publicado en el tom. 6<sup>o</sup>, pág. 178, Ser. 6<sup>a</sup> de la Jurisp. Civil, se consagra el mismo principio del sumario, lo que demuestra, que el caso citado en contra fué hecho de encargo.

1<sup>a</sup>—El contenido de un instrumento público puede ser modificado por un contrainstrumento privado—art. 996, Cód. Civ.—El documento otorgado para modificar una escritura pública, está autorizada por la ley y puede hacerse sin que se considere indispensable su reducción á escritura pública, de manera que debe llevar sello. Nada importa que los bienes de la referencia se hallen situados fuera de la Capital, desde que ese documento fué otorgado en ésta, y debiendo, por consiguiente, observarse en él las prescripciones legales vigentes. Ley de sellos de 1887, art. 2<sup>o</sup>, último inciso.

1<sup>b</sup>—El poder era para demandar la cantidad de pesos que se le adeudaba, procedentes de daños y perjuicios; pero al final de la demanda espresaba que cobraba esa suma como sueldos á razón de ochenta pesos mensuales que pudo ganar en un almacén de primera clase. El demandado entendió que se le cobraba esa suma por sueldos, y en ese sentido contesta la demanda. Tanto por esto, como por que el apoderado no tenía poder para demandar daños y perjuicios, sino para cobrar cantidad de pesos por sueldos devengados, así debió entenderse la demanda; en ésta se decía que los sueldos del actor como gerente del almacén del demandado, se establecieron en una forma anual, y que le serían abonados con el precio de cesión del almacén que le prometió hacerle próximamente. Según la demanda misma, los sueldos eran anuales y no mensuales; no se espresaba cuánto debía asignarse al actor anualmente, ni en qué tiempo el demandado debía cederle el almacén. La parte se obligó á ceder al actor su almacén, debiéndole ceder como precio ó como parte del precio los sueldos, y si á juicio de éste, aquél había faltado al contrato, debió demandarle para



cios y la sentencia los declare injustificados rechazando la acción, el Superior puede, sin anular la sentencia, resolver sobre el contrato invocado, y declarar que no existe prueba sobre él—Com., tom. 8, pág. 393, Ser. 3<sup>a</sup>.

2. **Contrato**—Demandado el cumplimiento de un con-

que le cumpliera ó le pagase daños y perjuicios; pero no para que le pagase sueldos en dinero, cuando, según el mismo, debían serle pagados con la cesión del almacén. Además, decía la Cám., «importando el contrato referido en la demanda más de doscientos pesos, y no habiendo principio de prueba por escrito, la testimonial producida debe ser desestimada—art. 209 del Cód. de Com.—no siendo por otra parte, aunque fuera admisible, suficiente para probar los hechos alegados en la demanda y negados de contrario.»

2 -El actor se presentó esponsiendo que el demandado compró al Banco Hip., en público remate, un terreno situado en la Avenida Alvear, afectado con hipoteca al mismo Banco, transfiriéndole sus derechos á la compraventa por una suma dada que debería abonarle una vez aprobada la venta por el Banco; que el demandado consecuente con el convenio celebrado verbalmente, se presentó al Banco solicitando que la escritura se otorgase á favor del actor, el cual deseaba continuar con la hipoteca y firmó en prueba de ello la solicitud que posteriormente el demandado faltando á la buena fe de lo pactado, se presentó al Banco solicitando el retiro de la anterior solicitud, ó que á lo menos se le tuviese por desistido de ella, porque el cesionario no había cumplido con las obligaciones contraídas; que éste en conocimiento de ese hecho, ocurrió al Banco Hip., pidiendo no se hiciese lugar al desistimiento, por considerarlo ilegal, desde que se trataba de un acto bilateral que no podía dejar de cumplirse sino mediante conformidad de partes; que esta oposición no dió resultado porque el Banco creyó que no era de su resorte dirimir la controversia suscitada, y escrituró el terreno á favor del demandado, que por lo tanto, entablaba formal demanda, para que se le condenase á cumplir directamente, en defecto del Banco, el convenio de transferirle el terreno, ó en su defecto, á resarcirle los daños y perjuicios. Para resolver si la acción deducida por el actor era procedente, debía establecerse previamente si se había comprobado la existencia del contrato que invocaba para fundarla. Es evidente que se trate de una cesión de crédito, que, como lo dice el art. 1434 del Cód. Civ., tiene lugar cuando una de las partes se obliga á transferir á la otra, el derecho que le compete contra su deudor, en-



trato que por la ley requiere formas especiales, debe entregándole el título del crédito si existiese. El actor no comprobó debidamente haber celebrado con el demandado el contrato de cesión invocado. Toda cesión debe ser hecha por escrito, dice el art. 1454, bajo pena de nulidad, cualquiera que sea el valor del derecho cedido, y aunque él no conste de instrumento público ó privado. El art. 1184, incs. 9º y 10, también requiere que se haga en escritura pública, bajo pena de nulidad, la cesión de acciones ó derechos procedentes de actos consignados en escritura pública, y los actos que sean accesorios de contratos redactados en escritura pública, y la compraventa de inmuebles á que se refería la cesión invocada, debe ser hecha en escritura pública. Los arts. 976, 1038 y 1044 imponen la nulidad de los actos y contratos, cuando éstos no revisten la forma exclusivamente determinada por la ley. De manera que aun siendo cierto que el contrato de cesión invocado por el actor se hubiese celebrado verbalmente, carecería de eficacia y de valor legal. En tal caso procedería quizás la acción para obligar á revestir el contrato de la forma que le falta; pero entonces la demanda debió entablarse en otra forma y no pedir que se obligase al demandado á cumplir directamente el convenio de transferencia, ó lo que es lo mismo, á cumplir las obligaciones emergentes de la cesión, porque hasta la demanda no existía legalmente esa cesión y por consiguiente, el contrato que se decía celebrado verbalmente no produce los efectos que la ley le atribuye á la cesión legalmente contratada por escrito. El demandado en su presentación al Banco decía: «Solicito que la escritura se otorgue á favor de X, quien desea continuar con la hipoteca, firmando conjuntamente en prueba de conformidad.» ¿Es esta cesión hecha por un precio, ó por otra cosa, ó por otro derecho, ó gratuitamente?—art. 1435 á 1437—Según fuese la causa de la cesión, serían las leyes á que el contrato estaría sometido. Por lo pronto debería haberse hecho constar en un doble ejemplar por tratarse de un contrato bilateral—art. 1021.—La demanda, en la forma en que había sido deducida, esto es, para que se condenase al demandado á cumplir directamente el convenio de transferencia del inmueble, no podía prosperar, de acuerdo con el mismo art. 1187, y su correlativo 1185 del Cód. Civ., pues aquel contrato carecía de valor legal como tal por no haberse observado al celebrarle—art. 1184—las formalidades prescriptas en derecho. Es de consiguiente, el cumplimiento de la obligación de que habla el primer artículo citado, ó sea la reducción á escritura del convenio, lo que pudo ser demandado, pero no la transferencia definitiva, para lo cual carecía de derecho el recurrente. La sentencia debe por lo tanto

chazarse la acción, sin que los jueces estén obligados á condenar al demandado al cumplimiento de la obligación de hacer que no ha sido exigida —Civ., t. 6, p. 101, S. 3<sup>a</sup>.

### 3. Contrato—Sus obligaciones accesorias, meramente

limitarse á lo pedido, es decir, á rechazar la demanda que exigía el cumplimiento directo del contrato.

3.—La Mun. celebró un contrato con una empresa de tramway, según el cual aquélla se obligaba á empedrar una calle y ésta á contribuir al pago del empedrado con una suma determinada. Se estableció asimismo que una estación fúnebre del tramway sería refaccionada por la Mun. en lo que fuese necesario, agregándose que ésta se reservaba el derecho de clausurarla cuando lo creyere conveniente. Se alegó que la empresa no estaba obligada á pagar el empedrado porque la Mun. no había cumplido con una de sus obligaciones refaccionando la estación. Se resolvió que la última cláusula demostraba de una manera evidente, que la entrega de esa estación no era para la Mun. una obligación, sino simplemente una facultad; ella podía entregarla, como podía ordenar su clausura cuando lo estimara necesario. Si por convenio expreso de las partes, la Mun. se reservó el derecho de clausurar la estación es claro que el ejercicio de ese derecho no le podía traer responsabilidad alguna, ni excusar al demandado del cumplimiento de sus obligaciones. Por la misma razón era de todo punto injustificada la preteución del demandado de que el actor no podía exigirle el cumplimiento de su obligación por no haber él cumplido con la suya. Sosteniendo aquél que la falta de la Mun. consistía en no haber entregado la estación, y resultando que el actor no tenía semejante obligación, queda por el mismo hecho demostrado, que la única defensa del demandado era insubsistente. Siendo inadmisibile la causa alegada para resistir el pago de la suma demandada, su obligación de satisfacerlos resulta del contrato y de las disposiciones de los arts. 505, 1197 y 1201 del Cód. Civ. La cláusula de la entrega de la estación, no es de las comprendidas en el art. 542 del Cód. Civ., porque ella no impide en manera alguna el ejercicio de los derechos que el contrato acordaba al demandado, quien, según uno de los arts., estaba autorizado para hacer el servicio fúnebre desde cualquier punto de sus líneas de tranways. No dependía, pues, de la sola voluntad de la Mun. que los derechos del demandado se hiciesen ó no efectivos. La buena fe que debe guardarse en el cumplimiento de los contratos, no impide tampoco que se de al que nos ocupa la interpretación que sostiene la Mun. desde que



potestativas de una de las partes, no pueden afectar el derecho de los contratantes para exigir el cumplimiento de las claramente determinadas—Civ., t. 7, p. 249, S. 5ª.

4. **Contrato**—Debe declararse de oficio la incompetencia del Juzgado, si en el contrato no se fijó lugar para su cumplimiento, y si el demandado se encuentra fuera de la jurisdicción del Juzgado—Civ., t. 10, p. 34, S. 6ª.

5. **Contrato**—Debe rechazarse la excepción de incompetencia, si la demanda se deduce ante el juez del lugar designado para el cumplimiento del contrato—Civ., tom. 6, pág. 54, Ser. 6ª.

6. **Contrato**—El cumplimiento del contrato, solo puede ser exigido por los que en él han sido parte, ó por los que legalmente los representen—Civ., t. 6, p. 389, S. 6ª.

7. **Contrato**—Si no se presenta el contrato cuya existencia reconocen las partes, debe pagarse la multa por infracción á la Ley de papel sellado—Civ., tom. 4, página 407, Ser. 6ª.

8. **Contrato**—La litiscontestación, se forma sobre el no obstante la falta de entrega de la estación, el demandado podía hacer el servicio que constituía su derecho.

4—Arts. 3º y 4º del Cód. Civ.

5—Se trataba de un contrato de arrendamiento de un inmueble situado fuera de la Capital, habiéndose estipulado que el pago se haría en esta Ciudad. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 4º, inc. 4º del Cód. de Proc., el sumario consagra la doctrina correcta.

6—A no ser en los casos de excepción expresados en los arts. 1161 y 1162 del Cód. Civ.—Véase el art. 1199.

7—Siempre que no se justifique por otros medios la existencia del contrato en el sello correspondiente—art. 57 de la Ley de sellos de 1895.—Es bajo el imperio de la ley vigente, en la forma que se presenta el documento, que deben aplicarse las multas, es decir, cuando se le hace valer.

8—El sumarlo no determina con precisión el caso resuelto. Al contestarse una demanda se opuso la excepción de falta de personería en





fondo del asunto; las cuestiones dilatorias pueden ser el actor, fundándose en que la representación invocada, no era bastante para instaurar la acción. Así quedó trabado el cuasi-contrato de litiscontestación. Después, durante la secuela del juicio, se presentó por el actor el documento ó poder bastante á los efectos de la iniciación del juicio. La minoría dijo, que no era legal la presentación del poder en ese estado del juicio, porque ello importaría separarse abiertamente de los términos en que quedó planteado el cuasi-contrato de la litiscontestación, conforme al cual debe pronunciarse la sentencia, ya porque los documentos habilitantes de la personería deben presentarse con el escrito en que la controversia judicial se inicia; y ya, finalmente, porque en esta instancia, con arreglo á lo establecido en el art. 245 del Cód. de Proc., procede la agregación de documentos únicamente cuando las partes juren no haber tenido conocimiento de ellos, hasta entonces, ó no haber podido proporcionárselos en tiempo oportuno. La mayoría sostuvo que la cuestión acerca de la personería para deducir las acciones iniciadas, había quedado eliminada de la decisión judicial con la presentación del nuevo poder, por el que se comprobaba legalmente la autorización que el demandado había exigido del actor para reconocerle personería, desapareciendo así todo el fundamento en que basaba la escepción opuesta. La objeción que se aduce respecto á la oportunidad en que esa autorización debió comprobarse, carece de toda trascendencia, pues aun considerando al documento presentado recién en la Cám. como la constatación del mandato conferido al actor y que debió éste exhibir con su primer escrito—art. 14 del Cód. de Proc.—La única consecuencia que podría deducirse de tal circunstancia, sería la de que el demandado procedió correctamente al oponer su escepción. Pero de aquí no se sigue que el que invoca una personería de controvertida legalidad, no pueda más adelante subsanar los vicios ó defectos que se le imputen á los documentos con que entendía acreditar su personalidad en el juicio. La comprobación plena del título invocado por el representante del actor, aunque sea tardía, priva á la escepción de toda ulterioridad, cuando ésta se opone por vía de artículo de previo y especial pronunciamiento, pues siendo de carácter exclusivamente dilatorio, no existe ya razón alguna para continuar dilatando la entrada al juicio. Es verdad que en el caso presente, la escepción no se había opuesto por vía de artículo previo, sino al contestar la demanda, pero esta modalidad, si bien imprime á la cuestión un carácter más complejo por lo que se rosa con los efectos de la litiscontestación, no altera las conclusiones á que arriba el sumario.

invocadas en cualquier estado del juicio, sin que ello importe una alteración del cuasi-contrato—Civ., tom. 3, página 125, Ser. 6ª.

**Contrato**— Véase: *Acción personal*, 3; *Peritos*, 2 y 3; *Arrendamiento*, 2; *Posiciones*, 26; *Arbitros-arbitradores*, 1; *Comprador*, 19, 23 y 24; *Locación de servicios*, 5; *Esposo*, 4; *Prueba testimonial*.

# 1. Contrato de arrendamiento · El locatario que suba-

Si el nuevo poder presentado se limitara á comprobar que el actor, estaba plena y legalmente autorizado para demandar en la forma en que lo había sido, no estaría distante de pensar, decía uno de los Cam., que sus efectos solo podrían producirse desde la fecha en que esa autorización fué acordada, ó lo que es igual, que lo obrado por el Síndico con anterioridad á esa autorización, no obligaba al mandante por exceso en los límites de su mandato—art. 1911, Cód. Civ.—y como lo obrado por el actor sería precisamente todo el juicio, la conclusión lógica debía ser que la causa se repusiera al estado de contestación á la demanda. Pero es el caso que el mandante, no solo confirió la autorización reclamada por el demandado, sino que fué hasta ratificar espresamente todo lo hecho por él en el juicio. Ahora bien: como la ratificación equivale al mandato y tiene entre las partes efecto retroactivo al día del acto—el cuasi-contrato de la litiscontestación en el presente caso—art. 1936—aplicable á las procuraciones judiciales en el inc. 6º del art. 1870—no existiría motivo ni causa legal para empezar nuevamente el juicio, desde que la demanda ya había sido contestada, y el demandado había hecho valer todas las defensas relativas á las acciones contra él deducidas. En consecuencia, debe considerarse solucionada de hecho la escepción de falta de personería con la ratificación del demandante. Ciertamente es que durante la litiscontestación, las partes ya no pueden innovar las cuestiones; pero ello solo reza con las alteraciones, enmiendas ó agregaciones que se rocen con lo sustancial de las acciones ó derechos.—Véase: Esteves Sagui, *Procedimientos judiciales*, núms. 226 y 323, inc. 2º.

1.—El arrendatario prometió al sublocatario que no le aumentaría el alquiler mientras fuese puntual en su pago, y se obligó á que nadie lo molestara en el uso y goce de la cosa, y que nadie le pediría el desalojo. Pero el primero cedió á un tercero el contrato que tenía con el propietario, y el tercero recindió el contrato con el propietario pi-



rienda verbalmente una parte del predio por el tiempo que fija su contrato, responde de los daños y perjuicios que al sublocatario cause la transferencia, del contrato de locación, á un tercero que exija el desalojo—Civ., tom. 7, pág. 211, Ser. 5ª.

2. **Contrato de arrendamiento**—Los preliminares inherentes á la formación de un contrato de locación, no bastan para darlo por establecido y fundar una acción por falta de cumplimiento—Civ., tom. 7, pág. 240, Ser. 5ª.

3. **Contrato de arrendamiento**—Reconocido el carácter del locatario y la falta de pago á dos mensualidades, el auto que ordena el desalojo es inapelable, aun cuando exista contrato de locación por tiempo determinado—Civ., tom. 5, pág. 31, Ser. 5ª.

4. **Contrato de arrendamiento**—El locatario no puede

diendo éste el desalojo del sublocatario. En este caso son de aplicación los arts. 1526, 1527 y 1600 del Cód. Civ.

3—Arts. 590, 591 y 592 del Cód. de Proc. Si bien el art. 1579 del Cód. Civ. acuerda al locador la acción ordinaria para rescindir el contrato, no hay disposición en dicha ley que se oponga á que se siga el juicio sumario de desalojo y que sirva para impedir la aplicación del art. 591 del Cód. de Proc., en estos casos.

4—El art. 1515 del Cód. Civ., dispone que: «Después que el locador entregue la cosa, está obligado á conservarla en buen estado y á mantener al locatario en el goce pacífico de ella por todo el tiempo de la locación, haciendo todos los actos necesarios á su objeto y absteniéndose de impedir, minorar ó crear embarazos al goce del locatario.» El art. 1519, dispone que: «Si el locador se dispusiese á hacer las reparaciones que son de su cargo, y ellas interrumpiesen el uso ó goce estipulado en todo, ó en parte, ó fuesen muy incómodas al locatario, podrá éste exigir, según las circunstancias; ó la cesación del arrendamiento ó una baja proporcional al tiempo que duren las reparaciones.» Por fin, el art. 1525, prescribe: «El locador responde de los vicios ó defectos graves de la cosa arrendada que impidieran el uso de ella, aunque él no los hubiese conocido ó hubiese sobrevenido en el curso de la locación, y el locatario puede pedir la disminución del precio ó la

reclamar contra el locador daños y perjuicios por la rescisión del contrato, si las refacciones que lo fundaron eran debidas á fuerza mayor—Civ., t. 10, p. 258, S. 6ª.

5. **Contrato de arrendamiento**—Si la turbación en el uso de la cosa locada ha sido transitoria, no basta para fundar la rescisión del contrato de locación—Civ., tom. 9, pág. 361, Ser. 6ª.

7. **Contrato de arrendamiento**—Reconocida la autenticidad del contrato de locación y no justificado el pago de

rescisión del contrato, salvo si hubiese conocido los vicios ó defectos de la cosa.» Según esas disposiciones, el actor tiene derecho para pedir disminución de precio ó rescisión del contrato pero no indemnización de daños y perjuicios por el hecho del desalojo de la cosa, efectuado á causa de una orden de la Mun. por ejemplo, porque tal acción no la consagran en favor del locatario los arts. recordados. Si la acción de daños compete en nuestro caso al actor, en razón de los derechos propios del locatario, veamos si aquélla puede estribar en las reglas generales que consigna el Cód. Civ. El art. 511, establece que: «El deudor de la obligación es también responsable de los daños é intereses, cuando por culpa propia ha dejado de cumplirla.» El art. 1109, dice: «Todo el que ejecuta un hecho que por su culpa ó negligencia ocasiona un daño á otra, está obligado á la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas á los delitos del derecho civil.» De conformidad con estos preceptos, es indispensable para que un agente responda del daño que un hecho causó á otro, que ese hecho se haya producido por su culpa ó negligencia. Con arreglo á esa doctrina, seria necesario que el propietario Puddicomb hubiese tenido conocimiento de las malas condiciones de seguridad en que se encontraba el edificio cuando se celebró el contrato de arrendamiento, para que se le pudiera imputar negligencia ó culpa y por lo tanto, responsabilidad por el daño que el desalojo haya podido causar al locatario. El doctor Sogovia, comentando el art. 1525 del Código citado—1527 de su obra—sostiene esta misma teoría, y cita en su apoyo los arts. 900, 934, 1109 y 2170.

5—El art. 1526 del Cód. Civ. se refiere al caso en que el locatario se vea privado del uso y goce de la cosa arrendada en su totalidad. Puede verse á mayor abundamiento la nota del verb. *Arca*, 3.

7—Art. 465 del Cód. de Proc.



alquileres, debe rechazarse la excepción de inhabilidad de título—Civ., tom. 7, pág. 20, Ser. 6ª.

8. **Contrato de arrendamiento**—La estipulación de una pena para la falta de cumplimiento á un contrato de locación, no exonera al locatario del pago de todas las prestaciones á que por el mismo estaba obligado independientemente de la duración—Civ., tom. 6, pág. 124, Ser. 6ª.

9. **Contrato de arrendamiento**—No puede nombrarse administrador del bien materia de un contrato de locación—Civ., tom. 3, pag. 41, Ser. 6ª.

10. **Contrato de arrendamiento**—La existencia de terceros subarrendatarios, no altera las disposiciones sobre desalojo por falta de pago, si por el contrato estaba prohibido ese hecho—Civ., tom. 2, pág. 391, Ser. 6ª.

11. **Contrato de arrendamiento**—Procede parcialmente

8—Arts. 655 y 1202 del Cód. Civ.

9—Se solicitó que la cosa fuese puesta en administración fundándose en un embargo preventivo que se había solicitado. No se hizo lugar á esta última medida y por consiguiente, no procedía la segunda.

10—El Cód. de Proc., tratando del juicio de desalojo dispone especialmente que si el demandado no asistiere á la citación del comparendo verbal que se le hiciere por segunda vez, bajo la prevención que establece el art. 587, debe procederse como lo pida el actor llegado el caso, es decir, que se pasará por lo que este último esponga. En el presente caso se había hecho esa citación en la forma indicada, sin que el demandado hubiese comparecido á la audiencia señalada, procediéndose en consecuencia á hacer efectivo el apercibimiento decretado. La circunstancia de tener el demandado subarrendada la finca cuya devolución se pide, no es una consideración que se oponga al cumplimiento de lo dispuesto por la ley en las disposiciones citadas, si se tiene presente especialmente que le estaba prohibido por el contrato subarrendar en todo y en parte dicha propiedad sin previo permiso del locador y porque habiéndose dirigido la demanda directamente contra el locatario como el único obligado, es éste quien debe responder de la violación del contrato en contra quien procederían las responsabilidades que de ese hecho pudieran resultar.

11—Porque en este caso hay *plus-petición*.

la escepción de inhabilidad de título, si se pretende mayor precio del estipulado en el contrato —Civ., tom. 2. pág. 404, Ser. 6ª.

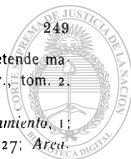
**Contrato de arrendamiento**—Véase: *Arrendamiento*, 1; *Daños y perjuicios*, 44; *Alquileres*, 12, 13, 15 y 27; *Area*.

1. **Contrato bilateral**—Cumplido por el actor, y con obligaciones pendientes, hace procedente el embargo preventivo—Com., tom. 7, pág. 306, Ser. 3ª.

2. **Contrato bilateral**—Procede el embargo preventivo

1—Con estos antecedentes, no puede desconocerse el derecho que el acreedor tiene á usar de esta medida—art. 44?, inc. 3º del Cód. de Proc.

2—Esta cuestión fué resuelta por mayoría, la que dijo: que el embargo preventivo solicitado, reconocía por origen y fundamento las obligaciones contraídas por el demandado á favor del actor. Para decidirse de la justicia ó injusticia de esa verdad, basta tener presente el contrato bilateral que contiene obligaciones aceptadas por el demandado, y si el derecho correlativo á ellas autoriza el embargo de que se trata, conforme al inc. 3º, art. 443 del Cód. de Proc. Tratándose de un contrato bilateral, es incuestionable el derecho que asiste á una de las partes para demandar su cumplimiento contra la otra, siempre que la parte demandante haya cumplido la que le corresponde con arreglo al art. 1201 del Cód. Civ. A ese respecto el demandado no desconoció la obligación de dar que pesaba sobre él, pues se limitó á oponer el desistimiento anterior de otros embargos y se dedujo también contra la medida de dicho embargo la circunstancia de estar sujeta á condición la citada obligación de dar, afirmándose que dependía de una emisión de bonos que el deudor debería hacer. Desde luego, se nota que las razones aducidas y de que se hace mérito, deben estimarse como razones generales de oposición, cuya decisión corresponde á la sentencia definitiva que deberá pronunciarse en el juicio que se crean con derecho á deducir el actor y el demandado invocando esos derechos. En tal concepto, no puede ponerse en duda que la medida de embargo preventivo entre la existencia de la obligación reconocida por el demandado es perfectamente procedente, de conformidad al art. 443, inc. 3º, Cód. de Proc., desde que la condición á que alude dicho art. no es de la naturaleza de la que se trata en estos autos, por cuanto si es potestativa ó suspensiva correspondería también su resolución á la sentencia definitiva de que se ha hecho mención. La minoría opinó en sentido contrario, te-





en un contrato bilateral, aun cuando la obligación sea condicional—Com., tom. 8, pág. 229, Ser. 3ª.

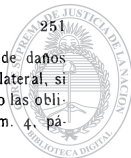
3. **Contrato bilateral**—Justificado el cumplimiento de las obligaciones que al actor impone el contrato bilateral, procede el embargo preventivo—Civ., tom. 9, página 265, Ser. 6ª.

4. **Contrato bilateral**—No procede la inhabilidad del título fundada en la existencia de un contrato bilateral, si la ejecución se sigue por la confesión expresa de adeudar cantidad líquida—Civ., tom. 7, pág. 24, Ser. 6ª.

niendo en consideración: 1º que el actor desistió de los embargos anteriormente decretados en virtud de transacciones con la compañía, las que no se han traído á tela de juicio, y sin su consentimiento perfecto no es posible acordar medidas del género de las que se tratan, por las variantes que pueden haber introducido respecto del contrato principal; y 2º que no procede tal medida tratándose de obligaciones sujetas á condición, y aquel contrato pone de manifiesto que los derechos acordados al actor, dependían de la emisión de bonos, condición suspensiva y válida, prevista por el art. 443, inc. 5º y que se opone al derecho ejercitado por el cesionario.»

3—Art. 443, inc. 3º del Cód. de Proc.

4—La escepción de inhabilidad de título opuesta á la ejecución, fundándose en la existencia de un contrato bilateral entre ejecutante y ejecutado es inadmisble, en razón de que el origen de la ejecución no es en el caso presente el convenio, sino la confesión pura y simple sin condición alguna, hecha en juicio por el ejecutado, reconociendo adeudar al actor una cantidad líquida que éste le reclamaba con espresión de causa. Aun suponiendo la existencia de obligaciones recíprocas en la realización del acto jurídico que motivó el convenio que se invocó, la confesión de la deuda hecha con arreglo con lo dispuesto en el inc. 3º del art. 465 del Cód. de Proc., no puede hacerse valer como escepción en el juicio ejecutivo la falta de cumplimiento de dichas obligaciones por el ejecutante, puesto que la escepción no afcta al título en virtud del cual se procede; siendo, en consecuencia, ilegítima la escepción deducida, imponiéndose, por tanto, su rechazo, y mandando prosperar la acción, sin perjuicio de que pueda hacerse valer los derechos en el juicio respectivo, y que el mismo Cód. de Proc. establece.



5. **Contrato bilateral**—No procede la acción de daños y perjuicios por inejecución de un contrato bilateral, si el que la deduce no cumplió á su debido tiempo las obligaciones que el mismo le imponía—Civ., tom. 4, página 80, Ser. 6<sup>a</sup>.

6. **Contrato bilateral**—No procede su disolución, si no existe conformidad de partes—Civ., t. 3, p. 179, Ser. 6<sup>a</sup>.

1<sup>a</sup>. **Contrato de cesión**—De los derechos á comprar un bien raíz, debe ser hecho en forma legal; el simple pedido por escrito hecho al vendedor para que otorgue escritura al cesionario, no basta para justificar la existencia del contrato—Civ., tom. 6, pág. 101, Ser. 5<sup>a</sup>.

2. **Contrato de cesión**—Justificada la existencia del crédito cedido al tiempo en que tuvo lugar el contrato, no procede la restitución del precio, aun cuando el deudor se negase al pago—Civ., tom. 2, pág. 247, Ser. 6<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Contrato comercial**—Los daños y perjuicios procedentes de la inejecución de un contrato comercial, deben gestionarse ante el juez de comercio—Civ., tom. 6, página 348, Ser. 5<sup>a</sup>.

5—La falta de cumplimiento de la obligación de parte del demandado procedía única y exclusivamente de falta imputable al actor, siendo en este caso de estricta aplicación el art. 1201, Cód. Civ.

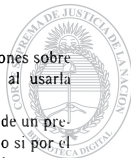
6—Arts. 1201 y 1203 del Cód. Civ.

1<sup>a</sup>—En la forma legal establecida en los arts. 1184, incs. 9 y 10, y 1454 del Cód. Civ.

2—Arts. 1476 y 1477 del Cód. Civ.

1<sup>b</sup>—No porque se resuelva en indemnización de daños y perjuicios la inejecución de un contrato comercial, dejan las relaciones jurídicas de afectar este carácter y de quedar sometidas á la jurisdicción mercantil. Se trataba de un contrato comercial regido, entre otras disposiciones por el art. 162 del Cód. de Com.; la jurisdicción mercantil es incompetente en virtud de la disposición del art. 62 de la ley Org. de los Trib. de la Cap.





1<sup>a</sup>. **Contrato de compraventa**— Las reclamaciones sobre la calidad de la cosa comprada, deben hacerse al usarla —Com., tom. 8, pág. 390, Ser. 3<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>.—**Contrato de compraventa**— La ocupación de un predio, creyéndolo propio, no obliga á espropiarlo si por el contrato solo era obligatoria la espropiación de lo necesario para un objeto determinado—Civ., t. 7, p. 246, S. 6<sup>a</sup>.

2. **Contrato de compraventa**—Si el comprador reconoce

---

1<sup>a</sup>—Art. 473 del Cód. de Com. vigente, igual al 547 ant.

2—Según el argumento, lo compra se hizo en cédulas hipotecarias, sin espresarse en el acto de la operación, el banco, serie, ni clase de cédulas, habiendo entendido el comprador que compraba por el valor de la cédula corriente en plaza, según la cotización que éstas tenían en la Bolsa el día anterior á dicha operación, porque ésta se hizo en día feriado. El precio de la compraventa no fué entonces, en dinero efectivo, pagadero con cédulas, según su valor corriente en plaza, sino que fué en cédulas, lo que es bien diferente, pues en el primer caso existiría siempre un precio conocido, que se podía pagar con una cantidad mayor ó menor de cédulas hipotecarias, según el valor corriente en plaza, mientras que en el segundo caso lo único fijo sería el valor nominal de las cédulas, variando el precio real en dinero con el aumento ó disminución del valor de las cédulas corriente en plaza. La diferencia del valor de las cédulas es tan notable, según sea el banco á que pertenece, la serie y la clase de moneda á que se refiere, que no es creíble que todo ésto hubiese sido indiferente al comprador, á tal punto que ningún antecedente se hubiese pedido al vendedor en el acto del remate, ni se hubiese hecho constar en los boletos. Además, una venta en cédulas hipotecarias por su valor nominal en remate público, no solo sale de los límites ordinarios en negocios análogos, sino que por lo mismo se habría anunciado la venta en esa forma extraordinaria, mientras que según se veía por un diario agregado, la venta que motivó el pleito fué anunciada en términos bien diferentes que no salen de los casos comunes. Y prescindiendo de todo esto, el contrato en la forma y condiciones que afirmaba el demandante haberlo celebrado con el demandado, aparte de lo aleatorio para los contratantes, por las alternativas diarias del valor corriente en plaza de las cédulas hipotecarias, no sería nunca un contrato de compraventa cuya reducción y otorgamiento en escritura pública se demandaba, porque carece de los ele

que no se estipuló precio en dinero, carece de acción para exigir el cumplimiento de este contrato —Civ., tom. 6, pág. 44, Ser. 5<sup>a</sup>.

### 3. Contrato de compraventa—Aun cuando las partes

mentos que constituyen ese contrato. En la compraventa el precio no solo debe ser cierto, sino que también debe consistir en dinero—art. 1323 del Cód. Civ.—y según lo sostuvo el comprador, él compró por cédulas hipotecarias, que no es dinero, moneda. No pudo pues existir contrato de compraventa.

3—El sumario no expresa en manera alguna el caso resuelto. El actor se presentó diciendo, que había vendido al demandado una chacra cuya ubicación y superficie aparecían determinados en el respectivo boleto de compraventa que acompañó; que el precio de venta establecido en dicho boleto fué el de 12.000 ps., pagaderos en los plazos determinados en dicho boleto, debiendo verificarse la última entrega en una fecha determinada, en cuyo día debía hacerse la escrituración; que no obstante haberse dado al comprador la posesión del terreno, de acuerdo con lo estipulado en el contrato, éste no había cumplido con sus obligaciones, y que la escrituración de la chacra, según los términos del boleto, debía efectuarse, abonada la totalidad de su importe, por lo que no podía demandarse por la obligación de hacer escritura pública, porque ésta depende de la convención del pago preciso de los seis plazos; que esos seis plazos se encontraban vencidos con exceso y ninguno había sido cumplido; que ellos constituyen una obligación previa, independiente de toda otra cuestión é indispensable para exigir la escrituración; que por su parte, se había cumplida la única obligación que le imponía el boleto, que era la de darle la posesión, la que tenía desde hacía mucho tiempo el comprador; y estando pronto a otorgar la escritura inmediatamente que se verifique el pago establecido, venía a interponer formal demanda contra el comprador, por la cantidad de 12.000 ₡ que importaban los seis plazos estipulados en el boleto. El juez de 1<sup>a</sup> Inst. dijo: «El comprador debe cumplir con las obligaciones que establece el boleto, satisfaciendo las sumas de dinero en él consignadas, con los intereses estipulados por las partes contratantes que son las que deben regir en este caso, de acuerdo con lo que prescribe el art. 621 del Cód. Civ. Tratándose de dar sumas de dinero en determinados plazos, el deudor ha debido cumplir con las obligaciones contraídas, y no habiéndolo hecho, deben aplicarse las disposiciones contenidas en los arts. 505 y 622 del Cód. Civ.» La Cámara revocó esta





estipulen por instrumento privado que el precio del inmueble debe ser pagado antes de la escrituración, el vendedor no puede exigir el pago, sino en el acto de otorgar la escritura definitiva del contrato—Civ., tom. 6, pág. 96, Ser. 5ª.

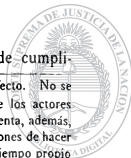
4. **Contrato de compraventa**—Si la intención de las partes se manifiesta en estos términos. «La demanda se ha instaurado con el propósito de obtener el pago del precio correspondiente al inmueble a que se hace referencia en el documento simple presentado. Tal demanda es improcedente á todas luces, pues son bien conocidos y de frecuente aplicación los preceptos legales que así lo establecen. El art. 1184 del Cód. Civ. dispone, que deben ser hechos en escritura pública, con escepción de los que se hubiesen celebrado en subasta pública; y el 1185 preceptúa, que los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública, fuesen hechos en instrumento particular, como al presente ocurre con el de que instruye el boleto, no quedan concluidos sino al solo efecto de poderse exigir el cumplimiento de la obligación de hacer escritura pública —art. 1187—pero en manera alguna para habilitar al vendedor á exigir el pago del precio, para lo cual necesariamente debe suponerse un contrato concluido con todas las solemnidades que la ley requiere, bajo pena de nulidad. Debe recordarse, entre las muchas resoluciones de la Cám., que han sentado uniforme jurisprudencia, consagrando la doctrina brevemente espuesta, las que se registran en el tom. 1º, pág. 424, Ser. 2ª; y tom. 2º, pág. 351, Ser. 4ª. Siendo, pues, improcedente la acción deducida, es ineludible la revocación de la sentencia, desde que en ella se resuelve en conformidad á lo que en la demanda se solicita.»

4—El sumario tiene su fundamento en que la compra era á condición de que se escrituraría el terreno un mes después de estar terminada la testamentaria á que pertenecía, y en que la propiedad debía mensurarse en el acto de la entrega, debiendo previamente escriturarse. El contrato no contenía pacto comisorio, luego los contratantes no podían exigir su rescisión sino su cumplimiento, según doctrina uniformemente sentada por la Cám. interpretando el art. 1204 del Cód. Civ. Pero este Trib. encontró fundamentos para dar visos de legalidad á una heregía jurídica. La cláusula del contrato establecía que la compra se hacía á condición de que se escrituraría el terreno un mes después de estar terminada una testamentaria, siendo entendido que los títulos serían á satisfacción de los compradores, y al final de la misma escritura se esti-



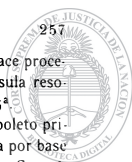
tes fué que la escrituración del contrato de compraventa

puló que el terreno sería medido en mensura judicial al tiempo de entregarlo. Se pidió la caducidad del contrato ó su resolución por no haberse cumplido por los contrarios la obligación que contrajeron de hacer la escritura de compraventa en el tiempo convenido, esto es, en los treinta días siguientes á la terminación de la testamentaria. El convenio de entregar el terreno judicialmente mensurado, no se opone á la condición estipulada de que la escritura de compraventa se extendería al mes de terminada la testamentaria, ya porque el otorgamiento de esta escritura debía ser previa á la entrega del terreno, y por consiguiente á la mensura judicial, ya porque ésta pudo y debió hacerse antes de la escritura poniéndose los vendedores en condiciones de cumplir las obligaciones que les incumbía como tales, y también porque no es aceptable que estableciéndose en la misma escritura esas dos cláusulas, la una derogue la otra: si esa hubiera sido la intención de los contratantes no se habría consignado la cláusula relativa á la condición de escriturar en un mes después del arreglo de la testamentaria. Establecido así que los demandados no cumplieron con la obligación que contrajeron de hacer la escritura pública de compraventa al mes de terminada la testamentaria, ¿procede legalmente la demanda entablada? ¿Qué importancia jurídica y legal tiene la cláusula mencionada, de que el contrato de compraventa se celebró á condición de que la escritura se firmaría al mes de terminada la espresada testamentaria? ¿Esa cláusula importa una condición resolutoria del contrato? No, porque el hecho incierto y futuro á que se refiere el art. 553 del Cód. Civ., no puede constituirlo nunca el cumplimiento ó falta de cumplimiento de la obligación misma, sino que debe ser un hecho extraño de la obligación á cuya realización queda subordinado. ¿Sería ese mes para escriturar, un plazo suspensivo ó resolutorio? Más bien resolutorio, porque el ejercicio del derecho para pedir la resolución del contrato por inejecución estaría subordinado al vencimiento de ese plazo —arts. 566, 67 y 69.—Esta interpretación está también más en armonía, no solo con la intención de los contratantes, como resultaba de autos, sino también con el significado común de las palabras. Así, cuando en la escritura se dice que dicha compraventa fué según el mencionado boleto, á condición de que se escriturara el terreno un mes después de terminada la testamentaria, es lo mismo que establecer que si la escritura no se hace al mes convenido, la compraventa, el contrato, queda sin efecto. Esta es la única interpretación razonable que tiene esa estipulación, de donde resulta que el contrato se celebró con la cláusula resolutoria de que no haciéndose



se hiciera en un término brevisimo, la falta de cumpli-

la escritura en el tiempo convenido, aquél quedaría sin efecto. No se opone entonces el art. 1204 del Cód. Civ., al derecho de los actores para pedir la resolución del contrato. Debe tenerse en cuenta, además, que las obligaciones que nacen del contrato, son obligaciones de hacer y que el obligado á hacer debe ejecutar el hecho en un tiempo propio y del modo que fué la intención de las partes que el hecho se ejecutara, y que si de otra manera se hiciese, se tendrá por no hecho—art. 625.—En el presente caso, la intención de las partes, al celebrar el contrato, fué de que la escritura de compraventa se otorgase en un breve plazo, al mes de terminarse la testamentaria, y los demandados no cumplieron su obligación en ese tiempo convenido, que importa la forma de cumplirlo. Después no podían ya cumplir con esa obligación de hacer, porque no sería en el tiempo propio que fué la intención de las partes que se efectuara; en todo caso se tendría por no cumplida la obligación, por no efectuado el hecho, según lo dispone el artículo antes recordado. De manera, que el hecho á que estaban obligados los demandados, resulta imposible legalmente. Y cuando el hecho resultase imposible sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida para ambas partes, y el deudor debe devolver al acreedor lo que por razón de ella hubiese recibido—art. 627, Cód. Civ.—pero si la imposibilidad fuese por culpa del deudor, como en el caso presente, estará obligado á satisfacer al acreedor los perjuicios é intereses—art. 628.—Los demandados confesaron que para poder otorgar la escritura de compraventa, con título á satisfacción del comprador, como se obligaron también, ó con buenos títulos, tuvieron que producir una información que no les permitió hacer esa escritura al mes de terminarse la testamentaria. Bastaría esto solo, aparte de lo anteriormente expresado, para ver de manifiesto, que ha sido por culpa de los demandados que se ha hecho legalmente imposible el cumplimiento de la obligación de hacer la escritura de compraventa, en el tiempo propio y del modo que fué la intención de las partes que el hecho se ejecutara. Queda entonces extinguida para ambas partes la obligación de hacer la escritura pública á que se obligaron en el contrato, y los demandados á devolver lo que por razón de esa obligación han recibido. Este caso, como se ha dicho, está en contra de lo resuelto por este mismo Tribunal en numerosos fallos, pero estamos seguros que será una escepción, pues los argumentos que dejan transcripto, no resisten el más ligero análisis. Véase en contra, Inst., tom. 6º, verb. *Boleto de compraventa*, 6; y tom. 5º, verb. *Condición resolutoria*, 1.



miento por culpa ó negligencia del vendedor hace procedente la resolución, aun cuando no exista cláusula resolutoria expresa—Civ., tom. 7, pág. 190, Ser. 5ª.

5. **Contrato de compraventa**—Constante en boleto privado, no puede fundar ninguna acción que tenga por base la existencia de un contrato—Civ., t. 5, pág. 264, Ser. 5ª.

6. **Contrato de compraventa**—No procede su rescisión tratándose de inmuebles, en tanto el boleto privado no sea reducido á escritura pública—Civ., t. 5, p. 264, S. 5ª.

7. **Contrato de compraventa**—La diferencia de más del vigésimo, al tiempo de escriturar, permite al comprador la rescisión del contrato de compraventa, aun cuando ella resulte de hechos posteriores á la fecha del contrato—Civ., tom. 9, pág. 127, Ser. 6ª.

8. **Contrato de compraventa**—Deben exhibirse los títulos de propiedad, aun cuando el contrato privado se considere rescindido—Civ., tom. 9, pág. 229, Ser. 6ª.

9. **Contrato de compraventa**—Los jueces deben de oficio, rechazar las demandas que sobre validez del contrato

5—El boleto privado no confiere, según la jurisprudencia sentada por la mayoría de la Cám., ningún derecho que no sea el de reducirlo á escritura pública. Véase: Inst., tom. 7º, verb. *Boleto de compraventa*, 2, 7, 8, 9, y demás fallos citados en esos números.

6—A no ser que contuviese el pacto comisorio espresamente determinado como lo resolvió la Cám. en otro caso. Véase: Inst., tom. 7º, verb. *Boleto de compraventa*, 5ª; y tom. 6º, mismo verb., núm. 5.

7—Arts. 1345 y 1409 del Cód. Civ.

8—El contrato no estaba rescindido aun, se había deducido sí, la acción de nulidad, pero su rescisión no se había declarado. Por consiguiente, la presentación del título procede sin perjuicio del resultado que pueda tener la acción de rescisión deducida.

9—Esta es la jurisprudencia sentada por la Cám. Véase: verb. *Boleto de compraventa*, 3 y 8; y *Acción de escrituración*, 1. ¿Dónde está la ley que establece el principio de que las disposiciones que rijen sobre la forma de los contratos son de orden público? ¿Dónde queda el pre-

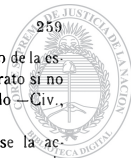
de compraventa por instrumento privado se presenten sin exigir previamente la reducción á escritura pública—Civ., tom. 8, pág. 144, Ser. 6ª.

**10. Contrato de compraventa.—El vencimiento de un**

cepto del art. 1197 del Cód. Civ., que establece que las convenciones son ley para las partes?

10.—Este fallo está en abierta oposición con el núm. 4. Con cuánta razón decíamos allí que ese caso es de escepción y que probablemente ha sido resuelto así especialmente. En el pleito del sumario se había establecido un término *perentorio* de 40 días para otorgarse la escritura *dentro* de él, y sin embargo se resolvió que no procedía la rescisión del contrato y que solo podía pedirse su cumplimiento. La Cám. dijo: «Desde luego, es exacto que en la promesa se establecía un término perentario para escriturar, siendo exacto igualmente que este término se halla vencido. ¿Pero cuál es el derecho que esta espiración del plazo acuerda el demandante? ¿Es acaso la de resolver el contrato, como así se pretende? ¿Es solo la de exigir su cumplimiento como lo declara la sentencia? El art. 1204 del Cód. Civ. dispone, que si no hubiera pacto expreso que autorice á una de las partes á disolver el contrato si la otra no lo cumpliere, el contrato no podrá disolverse y solo podrá pedirse su cumplimiento. Ahora bien; en el contrato no existe cláusula ó salvedad de derechos dentro de la letra de este artículo y por latamente que se interprete la intención de las partes al determinar un plazo, á los efectos ya indicados, no podría en manera alguna declararse que dicho contrato contiene una condición resolutoria. Las convenciones son la ley de las partes, y es precisamente por este motivo, de orden puramente jurídico, que no puede imponerse á las mismas responsabilidades que no han sido escritas, infligirse sanciones que no surgen de su letra ni de su inteligencia. En esta situación es por demás evidente que el derecho respectivo de las partes debe definirse en conformidad á las reglas ó principios dominantes en la materia, y éstos como ya se ha visto, son los consagrados en el art. 1204. El punto podría presentar dificultades si en nuestro derecho, á semejanza del derecho francés, la condición resolutoria se sobreentendiese siempre en todo contrato sinalagmático y si dejase á voluntad de la parte á quien no se cumplió lo pactado, exigir la ejecución del contrato ó su rescisión. Pero toda dificultad desaparece cuando la condición resolutoria no acompaña implícitamente al contrato ni constituye para las partes un derecho inseparable del mismo; cuando por el contrario esa con-





plazo perentorio, estipulado para el otorgamiento de la escritura, no basta para pedir la rescisión del contrato si no existe pacto comisorio espresamente determinado—Civ., tom. 7, pág. 338, Ser. 6<sup>a</sup>.

11. **Contrato de compraventa**—Debe rechazarse la acción sobre cumplimiento ó rescisión de ese contrato de compraventa de inmuebles, si se funda en un boleto privado, y solo puede demandarse la reducción del instrumento privado á escritura pública—Civ., t. 7, p. 304, S. 6<sup>a</sup>.

12. **Contrato de compraventa**—No habiéndose convenido un pacto espreso, á favor del comprador, que lo autorice á disolver el contrato por falta de cumplimiento del vendedor dentro del plazo estipulado, debe rechazarse el pedido de rescisión que se funde en ese solo hecho—Civ., tom. 6, pág. 99, Ser. 6<sup>a</sup>.

dicción no se presume y debe resultar espresamente de las cláusulas ó términos de la convención. Nuestra legislación es esencialmente conservadora en esta materia, pudiendo facilmente constatarse en el conjunto de sus disposiciones pertinentes, una tendencia marcada y uniforme á asegurar la firmeza y la estabilidad de los contratos. El art. 1412 citado, con arreglo al cual el comprador puede pedir la resolución de la venta cuando el vendedor no entrega la cosa al tiempo fijado en el contrato, no es aplicable ni favorece de consiguiente el derecho del apelante, pues aquella disposición supone que ha habido pago ó entrega de precio, siendo para este caso que legisla, caso que no es el ocurrente, pues como lo observa con acierto el Inferior, el contrato solo obliga al vendedor á otorgar la escritura pública de venta dentro del término perentorio allí convenido. Observaré para terminar, que este Tribunal en casos que tienen analogia con el actual, ha establecido entre otras conclusiones concordantes con las que dejo espuestas, que la fijación de un término para escriturar no importa un pacto comisorio, y solo confiere á las partes el derecho de exigir judicialmente el cumplimiento del contrato—causa XXIX, Ser. 3<sup>a</sup>.—Esta es la sana doctrina, consagrada por los tribunales cuando no hay que fallar alguna causa fundándose en razones personales oscureciendo las legales.

11—Así lo declaró de oficio la Cám., como en el núm. 9.

12—Véanse los núms. precedentes.





13. **Contrato de compraventa**—El tercero extraño al contrato, carece de derecho para exigir su cumplimiento, si el que afirma ser su mandatario contrató á nombre propio y sobre un objeto que decía ser de su exclusiva propiedad—Civ., tom. 6, pág. 132, Ser. 6ª.

14. **Contrato de compraventa**—La existencia del error de hecho á que pueda ser inducido el comprador por falta de individualización de la cosa, permite la rescisión del contrato de compraventa en remate judicial—Civ., tom. 6, pág. 195, Ser. 6ª.

15. **Contrato de compraventa**—No puede declararse su rescisión fundándose en la falta de cumplimiento en el término estipulado, si no existe espresamente consignado el pacto comisorio—Civ., tom. 3, pág. 360, Ser. 6ª.

16. **Contrato de compraventa**—Aun cuando en él se estipule la pérdida de la seña, no pueden aplicarse las disposiciones pertinentes, si consta que la suma fué entre-

---

13—Arts. 1199, 1869 y 1929 del Cód. Civ.—Es regla de derecho en materia de contratos, que estos solo crean vínculos entre las partes contratantes, y no con terceros extraños á la convención.

14—Esta resolución es un corolario del principio sentado en el verb *Comprador*, 15 y su nota.

15—Se dijo que no existía el pacto comisorio que autorizara al demandado al desistimiento del contrato, y por considerar también que no podía ampararse en lo dispuesto en el art. 1202 del Cód. Civ., desde que no resultaba del boleto que se hubiera dado una señal para asegurar su cumplimiento sino únicamente la entrega de una suma á cuenta del precio, lo que no podía autorizar la aplicación de la disposición legal que se refiere á casos muy distintos.

16—El art. 1198 del Cód. Civ., rije únicamente para los casos en que los contratantes hayan pactado cláusula penal ó arras en previsión de que se haría efectiva la pena sino cumplen el contrato, pero no cuando la pena se estipula por la demora en su cumplimiento. La exactitud de esta interpretación la corrobora el texto de los arts. 322, 652 658, 659, 1202, y por analogía los arts. 1203 y 1204, Cód. Civ.

gada á cuenta de precio—Civ., tom. 4. pág. 369, Ser. 6ª

17. **Contrato de compraventa**—No basta para justificar el dominio, y en consecuencia solo importa un derecho á la adquisición que debe ser justificada por otros medios—Civ., tom. 1, pág. 259, Ser. 6ª.

18. **Contrato de compraventa**—Si del contrato resulta que la compraventa se estipuló al contado, el comprador no puede responsabilizar al vendedor por la falta de cumplimiento, en tanto no justifique que él cumplió por su parte, la condición—Civ., tom. 1. pág. 382, Ser. 6ª.

19. **Contrato de compraventa**—No puede declararse res-

17—Arts. 577, 2377, 2379, 2601, 2602 y 2758 del Cód. Civ.

18—Se trataba de una venta de haciendas, y desde que ésta era al contado, el vendedor no estaba obligado á entregarlas sin que previamente el comprador pagara el precio estipulado—arts. 1418 y 1428, Cód. Civ. —Luego pues, para imputar al vendedor culpabilidad ó falta de cumplimiento de sus obligaciones era indispensable probar que dejó de cumplirlas, á pesar de haber cumplido el comprador con las suyas. Solo así habría acto indebido por parte del vendedor, pues de lo contrario no habría hecho más que ejecutar un derecho de cuyas perjudiciales consecuencias no se le podría responsabilizar.

19—La parte fué condenada á elevar á escritura pública un boleto privado en el término de diez días: en cumplimiento de la sentencia pidió la exhibición de los títulos y propuso escribano, los que examinados por éste fueron tachados de defectuosos: el vendedor pidió que se le intimara al comprador para que depositara el precio previamente, bajo apercibimiento de darse por rescindido el contrato, petición que fué proveída de conformidad, declarándose la rescisión por el Inferior. El Superior lo revocó por cuanto de los antecedentes espuestos que el demandado, no había resistido el cumplimiento de la ejecutoria, produciendo, por el contrario, actos que ponían de manifiesto su intención de hacerla efectiva. Es además evidente, que no pudo darse por rescindido el contrato después de lo mandado y de las dificultades suscitadas cuya solución previa la imponían, entre otros motivos, la forma en que fué concluído el acto jurídico de la venta. Independientemente de esta consideración, deben tenerse en cuenta los términos en que fué proveída, por el oficial público, la declaratoria que al amparo de esa



cindido, siempre que el comprador exija el cumplimiento de la obligación de hacer—Cv., t. 8, pag. 318, Ser. 5<sup>a</sup>.

20. **Contrato de compraventa**—Si la posesión del inmueble no se transfiere por culpa del comprador, no puede darse por resuelto el contrato á solicitud del mismo—Civ., tom. 8, pag. 324, Ser. 5<sup>a</sup>.

21. **Contrato de compraventa**—Procede el embargo preventivo por la suma dada por el demandante como garantía del cumplimiento del contrato—Civ., t. 8, p. 383, S. 5<sup>a</sup>.

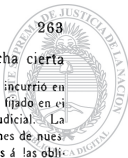
**Contrato de compraventa**—Véase: *Comprador*, 12; *Boleto de compraventa*; *Boleto privado*; *Precio*, 3; *Compraventa*; *Escritura pública*, 8; *Area*, 4; *Acción*, 1.

1. **Contrato de construcción**—Cuando en el contrato providencia provocó el recurrente y la oportunidad en que hizo valer en juicio su derecho. No habiendo, de consiguiente, incurrido en mora el deudor en el cumplimiento de la obligación emergente de la ejecutoria, el auto del Inferior que hace ejecutiva la pena subsidiariamente impuesta en la misma, es improcedente y contraria á derecho.

20—Verificada la venta de un inmueble, el vendedor no dió la posesión de estilo, y demandado al efecto por la entrega de la cosa, se le acordó diez días con este objeto. Se libró exhorto para la entrega de la cosa, pues el inmueble se hallaba en la Provincia: el comprador no compareció á tomar la posesión en el día que el vendedor concurrió y éste no lo hizo el día que aquél se presentó. Entonces el comprador pidió se declarara la rescisión por falta de entrega, á lo que no se hizo lugar por que al vendedor no le era imputable la falta de cumplimiento.

21—La parte manifestó estar dispuesta á cumplir con las obligaciones que le incumbían, siendo en este caso aplicable el principio del art. 443, inc. 2º del Cód. de Proc.

1—Esta cuestión fué resuelta por mayoría, la que dijo: «Se trataba de una obra que debía quedar terminada en Enero de 1890, y llegado ese día se acordó al constructor una prórroga por la que se estableció que debía entregarse á los cinco meses y bajo la pena de pagar 1000 pesos de multa por cada mes de retardo; tampoco se cumplió con este segundo plazo y entonces se presentó el actor pidiendo se condenase al demandado al pago de 1000 pesos por cada mes de retardo hasta que



de construcción de obra se haya estipulado fecha cierta se le entregase la obra. Se trata aquí de averiguar si se incurrió en mora, y desde cuándo. La mayoría dijo que, desde el día fijado en el contrato: y la minoría sostuvo que desde la interpelación judicial. La mayoría dijo que: «Sin detenerse á estudiar si las disposiciones de nuestra legislación civil relativas á la mora son también aplicables á las obligaciones con cláusula penal, ó si tratándose de obligaciones de este género, el simple vencimiento del plazo hace incurrir al deudor en la pena estipulada, punto sobre el cual discuten los autores. Atendiendo á los términos de la cláusula primera del recordado contrato, que es la ley de las partes, y á los antecedentes y elementos del juicio que la causa suministra, en el caso que nos ocupa no ha sido menester la interpelación previa que por regla general exige el art. 509 del Cód. Civ. para determinar la mora del deudor, porque á él es de toda aplicación la escepción que á tal regla consagra el inc. 2º del mismo art., toda vez que de la naturaleza y circunstancias de la obligación resulte que la designación del tiempo en que aquélla debía cumplirse, fué un motivo determinante por parte del acreedor. Esta escepción á la regla general, es la que rije en el caso, desde que la cláusula penal que constituye una de las principales modificaciones introducidas al primitivo contrato, fué sin duda establecida con el propósito de asegurar la conclusión de las obras en el término preciso que nuevamente se estipulaba y sin la demora que hasta entonces había sufrido.» La minoría sostiene «que el demandado está en mora desde la interpelación judicial, en razón de no hallarse comprendido el caso en las excepciones previstas en el art. 509 del Cód. Civ. El inc. 2º de este art., que es el que se invoca para retrotraer las responsabilidades del deudor á la fecha del vencimiento del plazo señalado en el contrato, prescribe que no es necesario el requerimiento cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resulte que la designación del tiempo en que debía cumplirse la obligación fué un motivo determinante por parte del acreedor. No basta, según la inteligencia de la disposición precitada, que se haya estipulado espresamente, como en el caso actual, que el empresario pagará una cantidad determinada por cada mes de retardo, ni que esta cláusula haya tenido por motivo la demora en el cumplimiento de convenciones anteriores, para que el acreedor goce del beneficio que importa la escepción á los principios comunes incorporados al art. 509. Para aplicar los términos del inciso, es necesario ante *omnia* darse cuenta del objeto ó naturaleza de la obligación de la cual el plazo fijado para su cumplimiento es por lo general su consecuencia. Sería, si, el



para su entrega y una pena en caso de mora, ésta se cuenta desde la fecha estipulada y no desde la interposición judicial—Civ., tom. 6, pág. 94, Ser. 5ª.

2. **Contrato de construcción**—Procede la escepción de falsedad contra las cuentas de la Municipalidad por afirmados, si el contrato de construcción se lleva á efecto sin licitación, requisito ineludible según la ley—Civ., tom. 6, pág. 257, Ser. 5ª.

3. **Contrato de construcción**—A este contrato corresponde un sello con arreglo al valor y forma del pago, sin que pueda modificarlo el plazo para la entrega de la obra—Civ., tom. 8, pág. 387, Ser. 6ª.

4. **Contrato de construcción**—Si se estipuló que un tercero proveería una parte de los materiales, no puede aplicarse al constructor pena por la demora, si se justifica que ella era imputable al tercero—Civ., tom. 4, página 289, Ser. 6ª.

**Contrato de construcción**—V.: *Constructor; Construcción*.

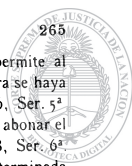
1. **Contrato cumplido**—El cumplimiento, durante el

---

caso de la escepción, si se hubiere tratado por ejemplo, de una construcción para un destino previsto de antemano y que al acreedor tuvo en mira utilizar en una época ó tiempo determinados, pero de la cual no podría obtener provecho alguno si le era entregado después de los plazos convenidos. El codificador, respecto á este inciso, se refiere á la ley 54, tit. 14, Part. 5ª, cuyos términos los resume Goyena sobre el art. 1007 de su proyecto, en esta forma: «Yo te doy tanto para que corras la posta á Cádiz, y llegues antes del día 6 en que sale el correo de ultramar; te detienes por tu gusto, y das principio á correrla el mismo día 6 ó la vispera: caes en mora.» Rogrón, sobre el art. 1146 del Cód. francés trae este otro ejemplo: «Me he obligado á entregáros unos caballos para que los vendais en una feria que se celebra en día determinado; si pasa el día de la feria sin hacer yo la entrega, caigo en mora.»

2.—Véase: verb. *Afirmados*, 5.

1.—Demandado el cumplimiento de un contrato de construcción de



juicio, de la obligación de hacer demandada, permite al juez pronunciarse sobre la pena que por la mora se haya estipulado en el contrato—Civ., t. 5, pág. 276, Ser. 5<sup>a</sup>.

1<sup>a</sup>. **Contrato de depósito**—Sin plazo fijo, debe abonar el sello de medio por ciento—Civ., t. 10, p. 388, Ser. 6<sup>a</sup>.

2. **Contrato de depósito**—Deducida acción determinada por devolución de depósito, debe rechazarse si no se justifica la existencia del contrato—Civ., t. 6, p. 310, S. 6<sup>a</sup>.

**Contrato de depósito**—Véase: *Depósito*.

1<sup>b</sup>. **Contrato escrito**—Aun cuando exista éste, procede la demanda de desalojo previa á la de rescisión del contrato—Civ., tom. 7, pág. 48, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Contrato hipotecario**—Véase: *Acto de comercio*, 1.

1<sup>c</sup>. **Contrato de licitación**—No procede la inhabilidad obras, y la aplicación de la pena establecida para el caso de inejecución, y ejecutadas las obras durante la secuela del juicio, se declaró que no había lugar á pronunciamiento respecto de las obras pero que se había incurrido en la pena por la mora estipulada, pues el pronunciamiento sobre lo primero se había hecho inutil por esa misma ejecución que implicaba el cumplimiento del contrato en esa parte, sin que ello lo exonerara del pago de la pena debido á la mora en que había incurrido.

1<sup>a</sup>—Art. 6<sup>o</sup> de la Ley de sellos de 1895.

2—Porque al actor incumbe la prueba de la acción deducida—Ley 1<sup>a</sup>, tít. 14, Part. 3<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>—De acuerdo con la jurisprudencia—Véase: Inst., tom. 7<sup>o</sup>, verb. *Desalojo*, núm. 2.

1<sup>c</sup>—Esta escepción se hizo consistir en haberse fijado el precio del afirmado en una suma mayor de la estipulada en la licitación. Parece pues, que no procedía la de inhabilidad sino la en falsedad. De todas maneras ella fué resuelta bajo el primer aspecto, fundándose en que el documento con que se instruyó la ejecución había sido espedido en conformidad á las disposiciones de la ley de 1<sup>o</sup> de Octubre de 1888 que rije la materia, y las cuales dan carácter ejecutivo á las cuentas visadas por la Intendencia. Sería así necesario, para que pudiese prosperar la inhabilidad, que se hubiera constatado la autenticidad de las firmas que suscriben aquel documento, produciéndose las comprobaciones



de título contra las cuentas por afirmado visadas por la Municipalidad, aun cuando se justifique que alteran el precio estipulado en los contratos de licitación—Civ., tom. 6, pág. 420, Ser. 5ª.

1. **Contrato de locación de servicios**—En los servicios técnicos, la cláusula que exige que ellos sean completos y en forma, no importa que deban ser aprobados por la respectiva autoridad para poder exigir su pago—Civ., tom. 4, pág. 309, Ser. 6ª.

del caso, ó que la diligencia de visación se hubiese extendido contra los proceptos de la misma ley, ó finalmente, que adoleciera el instrumento de la ejecución de cualquier defecto ó vicio capaz de quitarle su fuerza ejecutiva. Pero tales reparos no aparecían formalmente alegados por el deudor, pues las observaciones hechas respecto á la diferencia ó aumento en los precios, son de manifiesta impertinencia en lo que á la excepción misma se refiere. El derecho que á su respecto pueda asistir al ejecutado, deberá si lo estima conveniente, reservarlo para el juicio ordinario, de acuerdo con lo prevenido en el art. 500 del Cód. de Proc. Esta cuestión ha sido resuelta en una forma contradictoria por la jurisprudencia de la Cám.

1.—Se trataba de trabajos de ingeniería y del contrato no resultaba espresamente convenido que la aprobación técnica de los planos fuera una condición necesaria para que el ingeniero tuviera derecho á cobrar su trabajo. Bastaba para ello que los planos estuvieran hechos en forma y completos, y este requisito se había cumplido aun cuando los trabajos no habían sido aceptados por la autoridad. Tratándose de contratos de locación de servicios, que constituyen el modo de vivir del que los presta, la presunción de la ley es que son onerosos salvo estipulaciones espresas en contrario, de donde resuelta que no es posible interpretar el contrato con el alcance que le atribuye la parte demandada. Además, un contrato en que el derecho del que presta el servicio queda subordinado en su existencia y ejercicio á que el trabajo fuera aprobado por la autoridad, sería un convenio de carácter eventual, sujeto á una condición suspensiva, y es sabido que las condiciones, como que son elementos accidentales del contrato, no se presumen sino que por el contrario deben estipularse de una manera clara y concluyente.



**Contrato de locación de servicios**— Véase: *Daños y perjuicios*, 3, 6 y 7; *Servicios*; *Locación de servicios*.

**Contrato municipal** Véase: *Adoquinado*, 1.

1<sup>a</sup>. **Contrato nulo**—Justificada la existencia de dolo, debe declararse la nulidad del contrato, obligándose al deudor al pago de las sumas percibidas y sus intereses—Com., tom. 7, pág. 259, Ser. 3<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Contrato de permuta**—Siendo prohibidos los contratos entre padres, é hijos menores, no procede la permuta de un inmueble adjudicado en la cuenta particionaria aprobada y consentida—Civ., t. 8, pág. 347, Ser. 6<sup>a</sup>.

1<sup>c</sup>. **Contrato de prenda**—Su existencia no basta para fundar la escepción de nulidad de la ejecución—Com., tom. 7, pág. 370, Ser. 3<sup>a</sup>.

1<sup>a</sup>—El dolo revistió los caracteres fijados en el art. 932 del Cód. Civ.; fué grave, pues se afirmó la verdad de un hecho que se apoyaba en una escritura pública cuyas cláusulas no eran verdaderas. Como dice Charbon: «Tal hecho puede inducir en error aun á los hombres prudentes»—Dolo y fraude, tom. 1<sup>o</sup>, pág. 21—En materia de dolo tratándose del punto de si él ha sido determinante del contrato ó meramente incidental, los tribunales tienen un gran poder de apreciación. La nulidad de un acto jurídico vuelve las cosas al mismo é igual estado en que se encontraban antes del acto anulado—art. 1050 del Cód. Civ.—y obliga á las partes á restituirse mutuamente lo que han recibido en virtud del acto anulado—art. 1052.

1<sup>b</sup>—Arts. 18, 279, 397, inc. 1<sup>o</sup>, 1043, 1359, 1361, 1490 y 1492 del Cód. Civ.—Ley 2<sup>a</sup>, tit. 5<sup>o</sup>, Part. 5<sup>a</sup>.

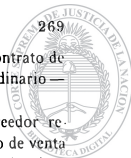
1<sup>c</sup>—Se dijo de nulidad porque se trataba de un pagaré garantido con prenda y al practicarse el embargo no se trabó en los bienes prendarios. La nulidad solo es procedente cuando se hubieran violado las formas sustanciales que la ley ha establecido para la validez del juicio ejecutivo, como lo dispone el art. 489 del Cód. de Proc. Si en el presente juicio no hace violación alguna de las formas la nulidad, no puede prosperar. Constaba por el contrario, que el embargo se trabó al diligenciarse el mandamiento, con todas las formalidades del caso, sin que pudiera obstar á su realización el de haber firmado el deudor un





1. **Contrato de préstamo**—En tanto el instrumento lleve los requisitos que la ley exige, deben rechazarse las excepciones de falsedad é inhabilidad del título; opuestas contrato de prenda y cuyo cumplimiento no se había pedido en el presente juicio, sino la ejecución del pagaré.

1—La Cám. al resolver la cuestión, decía: «La sentencia del Inferior después de consignar que no es materia de discusión que el instrumento acompañado sea auténtico y cierto, con lo que queda justamente desestimada la excepción de falsedad, y entrando al examen de la inhabilidad, llega á la conclusión de que el título de la ejecución es inhábil en lo que se refiere á los menores hijos de la ejecutada, siendo hábil en lo que á ella se refiere. El Inferior considera que la escritura pública, no reúne todos los recaudos de forma preceptuados por derecho para su validez, pues le falta la procuración ó documento habilitante para representar á los menores en la relación de derecho que contrajo con el actor. El art. 1004 del Cód. Civ. previene, en efecto, que son nulas las escrituras que no tuvieran, entre otras cosas, las procuraciones ó documentos habilitantes, pero esta disposición no parece que sea pertinente al caso presente. El instrumento contiene los recaudos habilitantes que la naturaleza del acto jurídico hacía indispensable para su otorgamiento; en él se ha transcrito íntegramente el mandato conferido por la señora al actor, y la resolución expedida por juez competente concediendo la venia correspondiente para constituir la obligación hipotecaria que ha dado motivo á este juicio. No es posible, de consiguiente, afirmar que falte en la escritura la formalidad externa á que se alude y en la cual podría fundarse la excepción de inhabilidad, de acuerdo con la doctrina de nuestro Código. La inhabilidad procede cuando el título exhibido por el ejecutante no se halla comprendido entre los enumerados por la ley, ó cuando se constatan defectos ó vicios en el mismo, capaces de quitarle su fuerza ejecutiva. La misma sentencia reconoce que no es pertinente al pronunciamiento la validez ó nulidad del acto en sí mismo, declarando, no obstante, la inhabilidad parcial del título de la ejecución, en razón de las omisiones ya aludidas. No ha observado empero, la sentencia, que al establecer que en el caso actual falta la procuración ó documento habilitante para representar á los menores, entra á juzgar directamente sobre puntos ó modalidades que afectan la sustancialidad del contrato, la validez intrínseca del acto. Esa procuración no ha existido y de consiguiente, el oficial público no ha podido transcribirlo en el cuerpo del instrumento, siendo, por lo demás evidente, que los efectos de esa



á la ejecución de la hipoteca, la nulidad del contrato de préstamo solo puede ser resuelta en juicio ordinario—Civ., tom. 6, pág. 81, Ser. 5<sup>a</sup>.

2<sup>a</sup>. **Contrato de préstamo**—Aun cuando el acreedor reconozca la existencia de préstamo, en el contrato de venta con pacto de retroventa, no está obligado á devolver los títulos al deudor—Civ., tom. 4, pág. 36, Ser. 6<sup>a</sup>

1. **Contrato rescindido**—El comprador que no ha recibido la cosa comprada en el contrato, puede pedir su rescisión—Com., tom. 7, pág. 39, Ser. 3<sup>a</sup>.

2<sup>b</sup>. **Contrato rescindido**—La demanda de daños y perjuicios por falta de una obligación de hacer, debe acumularse á la rescisión del contrato deducida por el contrario—Civ., tom. 6, pág. 375, Ser. 5<sup>a</sup>.

falta de representación pueda producir en orden á la subsistencia ó insubsistencia del contrato, no serían materia de este juicio, sino del ordinario, en los términos previstos en el art. 500 del Cód. de Civ.

2<sup>a</sup>—Se hizo uso del derecho de retención acordado por el art. 3939 del Cód. Civ.

1 —Art. 524 del Cód. de Com. ant. igual al 467 del vigente.

2<sup>b</sup>—Porque la rescisión demandada se refería al mismo contrato cuyo incumplimiento motivó la acción de pérdidas é intereses promovida, y teniendo presente, además, que esta misma causal la que sirve de fundamento á ambas acciones, en cuyo caso no solo habría manifestado inconveniencia para las partes en la prosecución de dos juicios diversos ante jueces distintos, sino que con ello se comprometería la unidad de los procedimientos, que es deber de los tribunales mantener en lo posible. Parece que esta resolución no consulta debidamente los principios que rijen la acumulación de acciones, por cuanto por una de ellas se demandaba la indemnización de daños y perjuicios, es decir, la obligación subsidiaria que emana de la falta de cumplimiento de la obligación de hacer escritura pública, por la otra demanda se pedía la rescisión del contrato: de aquí resulta que aunque las mismas partes son las que intervienen, no había identidad de causa en ambas acciones, circunstancia sin la cual no puede haber litispendencia, condición necesario para que proceda la acumulación de acciones.



### 3. Contrato rescindido --Al que demanda la rescisión

3—El actor espuso que había comprado un terreno, bajo las siguientes condiciones: que el comprador entregaría 10.000 pesos nacionales al firmar el boleto, y el resto del precio al firmarse la escritura, la que se otorgaría dentro de los noventa días, prorrogables si el comprador lo necesitase; y que el comprador podría solicitar, en nombre de los vendedores, del Banco Hip. de la Prov. de B. Aires, la cantidad de cédulas que creyere conveniente para facilitar la adquisición del terreno, las cuales serían tomadas por los vendedores a cuenta del precio al tipo que se cotizasen el día de la entrega; que todo lo espuesto constaba en la escritura pública de compromiso otorgada ante escribano público cuya copia simple acompañaba; que el comprador adquirió el terreno por especulación, para obtener alguna ganancia, lo que no pudo efectuar, pues al querer presentar la solicitud al Banco Hip., encontró el grave inconveniente de que el terreno pertenecía una parte al vendedor y otra a un tercero, y que se encontraba indivisa, cuya circunstancia ni se hizo constar en el boleto, ni se le comunicó particularmente; que el plazo para escriturar había vencido y recién de esto le había comunicado que la indivisión había cesado y que estaba listo para escriturar, que por la imposibilidad en que se hallaban los vendedores de escriturar en el término convenido, no pudo presentarse la solicitud al Banco y el comprador tuvo que rechazar ofertas muy ventajosas de compra; y que por lo tanto entablaba demanda contra el vendedor sobre rescisión del compromiso de compraventa, pidiendo que se declare rescindido el contrato por culpa de los vendedores, condenándolos a la devolución de los 10.000 pesos nacionales que como parte de precio recibieron. El demandado dijo, que no era cierto que se hubiese comprado el terreno que indicaba la demanda, pues ese contrato no fué una venta sino una promesa de venta para fecha dada; que la facultad acordada para solicitar una cantidad en cédulas no fué para ayudar una especulación, sino para facilitar la adquisición del terreno. Negando todo lo demás contenido en la demanda. Como se ve, era un compromiso de venta, lo que es muy diferente del contrato de compraventa. Aquél solo crea obligaciones de hacer, y éste da origen a obligaciones de dar. Las personas que convienen en un compromiso de venta se obligan a celebrar ese contrato, y las que estipulen una compraventa se obligan, el vendedor a transferir la propiedad de una cosa al comprador, y éste a recibirla y pagar por ella un precio cierto en dinero, como lo dice el art. 1323 del Cód. Civ. Basta enunciar esta diferencia radical entre esos diversos contratos, para percibirse desde lue

del contrato antes de su existencia, corresponde justificar que los motivos en que la fundan fueron la causa determinante de la convención—Civ., t. 7, p. 24, Ser. 5<sup>a</sup>.

1<sup>a</sup>. **Contrato de seguro**—No pueden deducirse reclamaciones resultantes de un contrato de seguro, después del plazo estipulado en la póliza—Com., t. 8, p. 139, S. 3<sup>a</sup>

**Contrato de seguro**— Véase: *Bienes del concurso*, 2.

1. **Contrato social**—El que contrató con la sociedad no

go que los derechos y obligaciones que de ellos nacen no están ni pueden estar sometidos á las mismas disposiciones legales; y por consiguiente, los artículos del Cód. Civ., tomados del título de la compraventa, carecen de aplicación porque no hubo contrato de compra venta sino promesa de venta. El primer fundamento invocado para demandar la rescisión, es que el actor compró el terreno por especulación, para negociarlo á su vez, sacando alguna utilidad, lo que no pudo realizar por falta de cumplimiento de las obligaciones del vendedor. De los términos del contrato no resultaba que ese fuese el propósito y menos la razón determinante para celebrarlo. El demandante negó el hecho y el demandado no lo probó. Los demás hechos alegados como fundamento de la acción tampoco se comprobaron. Pero prescindiendo de todo esto, ¿faltó el demandado á las obligaciones que le imponía el contrato de venta? indudablemente no. Según ese compromiso, la escritura de compraventa debía otorgarse dentro de los noventa días de su fecha, prorrogables por otros noventa días si el comprador los necesitaba. Esto quiere decir que la obligación de los compromitentes era á término, es decir, que solo se podría exigir su cumplimiento vencidos los noventa días, pero ni de la escritura ni de la prueba producida resultaba que ese término de noventa días fuese resolutorio sino simplemente suspensivo—art. 566 del Cód. Civ.—Vencido el plazo, recién podían los contratantes exigirse el cumplimiento de las obligaciones contraídas, que es la que pudo demandar el comprador, y no la rescisión ó la resolución del contrato, porque cuando no hay pacto expreso que autorice á una de las partes á devolver el contrato, si la otra no lo cumpliese, el contrato no puede disolverse, y solo puede pedirse su cumplimiento—art. 1204, Cód. Civ.

1<sup>a</sup>—Está comprendida en la nota del verb. *Compañía de seguros*, 1.

1.-Arts. 301 y 302 del Cód. Civ. Véase: *Jurisp. Com.*, tom. 6<sup>o</sup>, pág. 409, Ser. 1<sup>a</sup>.



puede desconocer su existencia, ni exigir la presentación del contrato social al serle reclamadas las obligaciones emergentes de dicho contrato —Com., tom. 7, página 360, Ser. 3ª.

2. **Contrato social**—Los firmantes de un contrato de sociedad pueden establecer á su voluntad la firma social, pues el interés de terceros se garantiza con la inscripción del contrato—Com., tom. 8, pág. 35, Ser. 3ª.

3. **Contrato social**—Si por el contrato de disolución de sociedad se reconoce á favor de uno de los socios la propiedad de todas las existencias, debe rechazarse la demanda de reivindicación, que fundada en la propiedad exclusiva, deduzca el otro socio —Civ., t. 6, p. 296, S. 6ª.

4. **Contrato social**—Si de él resulta la existencia de una sociedad accidental, debe ser rechazada la acción del socio que pretenda la devolución del capital, alegando la existencia de un contrato de préstamos—Civ., tom. 1, pág. 246. Ser. 6ª.

5. **Contrato social**—Si el poder es otorgado por los so-

2—Arts. 277 y 298 del Cód. de Com.

3—Porque el contrato de disolución transfiere la propiedad de todas las existencias á favor del socio que queda á cargo del activo y pasivo social.

4 - Es natural que así sea desde que los interesados celebraron un contrato de sociedad para un negocio determinado con el derecho de obtener los beneficios que proporcionalmente les reportara y con la obligación consiguiente de afectar el capital á las pérdidas que se produjeran.

5 - Los otorgantes del mandato fueron los socios ostensibles de la sociedad y en consecuencia, las directa y personalmente responsables á terceros arts. 1668 y 1669 del Cód. Civ. —El estar en juicio importa un acto de administración—art. 1694—y ésta se reputa ejercida válidamente por cada uno de los socios, si no constare el nombramiento de administrador determinado—art. 1676—Por otra parte, la constitución de la sociedad puede hacerse verbalmente, y en tal caso no cabe la



cios, no es necesaria la transcripción del contrato de sociedad—Civ., tom. 8, pag. 331, Ser. 5<sup>a</sup>.

**Contrato social**—Véase: *Rendición de cuentas*, 1.

**Contrato de uso**—Véase: *Calle pública*, 1.

1<sup>a</sup>. **Contribución directa**—En su ejecución, solo son admisibles las escepciones espresamente determinadas en la ley especial dictada para su cobro—Civ., tom. 6, página 123, Ser. 5<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Convención**—El mandante queda obligado por las convenciones de su mandatario hechas con terceros; las estralimitaciones que contra sus intereses pueda alegar, no afectan la convención—Com., t. 7, pag. 218, Ser. 3<sup>a</sup>.

**Convención**—Véase: *Acumulación*, 1; *Costas*, 63; *Boleto de compraventa*, 8; *Escribano*, 1<sup>b</sup>; *Contrato rescindido*, 3.

**Convenio**—Véase: *Intereses*, 1; *Acciones deducidas*, 1; *Sociedad*, 1; *Comisión*, 4; *Nulidad del peritaje*, 1.

1<sup>c</sup>. **Cónyuge**—Los cónsules extranjeros no tienen facultad de intervenir en la testamentaria, cuando existe en el país cónyuge legítimo del causante—Civ., tom. 6, página 266, Ser. 5<sup>a</sup>.

2. **Cónyuge**—Las ejecuciones contra el cónyuge su-

transcripción de documento habilitante alguno en el otorgamiento del mandato.

1<sup>a</sup>—Art. 13 de la Ley de Contribución territorial.

1<sup>b</sup>—El mandato se constituyó para que el mandatario arreglase una cuestión de daños y perjuicios, «según lo creyere más conveniente.» Cualquier arreglo que se haga está dentro de los límites del mandato, y por consiguiente, obliga al mandatario, según precepto del art. 1946 del Cód. Civ.

1<sup>c</sup>—Véase: verb. *Cónsules extranjeros*, 2.

2—El art. 1275, inc. 3º del Cód. Civ. legisla para las obligaciones privadas de los esposos y á los efectos de la liquidación de la sociedad conyugal; pero no se refiere á las obligaciones que los cónyuges pueden contraer personalmente con terceros. Esta misma doctrina ha sido



pérstite, no son incidentes de la testamentaria de la esposa—Civ., tom. 9, pág. 286, Ser. 6<sup>a</sup>.

3. **Cónyuge**—Ej supérstite, tiene derecho para transigir los asuntos de carácter personal pendientes al fallecimiento de la esposa, sin que para su validez sea necesaria la intervención de los herederos—Civ., tom. 2, página 104, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Cónyuges**— Véase: *Esposos*.

1. **Copias**—Llegibles, suspenden el término para contestar la demanda—Com., tom. 7, pág. 334, Ser. 3<sup>a</sup>.

2. **Copias**—El término para evacuar un traslado solo

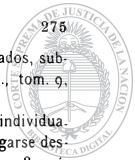
---

consagrada por la Cám. de lo Civ. en el caso de Iriondo de Basualdo D<sup>a</sup>. Mercedes, su testamentaria, y en otros análogos.

3—El esposo sobreviviente había devengado durante la vida de su esposa, honorarios procuratorios. Fallecida ésta transó el juicio que había seguido para su cobro. Se dijo de nulidad de esa transacción, fundándose en que esos honorarios pertenecían a la sociedad conyugal y que en la transacción debían intervenir todos los que tenían derecho a la herencia. Se rechazó la nulidad por cuanto el acto solo había tenido por objeto el cobro de trabajos personales efectuados por el sobreviviente, siendo únicamente con éste con quien debía entenderse el juicio, en virtud de lo dispuesto en el art. 1272 del Cód. Civ. Si bien el crédito reclamado constituye un bien ganancial, como el cónyuge sobreviviente tiene la administración amplia de la sociedad conyugal, en virtud de lo dispuesto en el art. 1276 del Cód. Civ., el silencio del esposo, como asimismo de sus coherederos, no puede jamás viciar de nulidad una transacción sobre una acción personal en la que el viudo no ha concurrido como tal.

1—El art. 21 del Cód. de Proc., preceptúa que las copias deben acompañarse en papel común y bajo firma. Esta copia es para que se imponga de su contenido la parte contraria. Si las copias no son legibles no puede conseguirse este propósito de la ley y por consiguiente no es justo que corra el término del traslado que se hubiese conferido. En el caso que nos ocupa el juez consideró que las copias eran legibles, pero la Cám. declaró la contrario.

2—Según la jurisprudencia establecida por la Cám. de lo Civ., la parte que no acompaña las copias de un escrito debe presentarla des-



empieza á correr el primer día de los señalados, subsiguiente á la presentación de las copias—Civ., tom. 9, pág. 102, Ser. 6<sup>a</sup>.

3. **Copias**—Si al notificarse no se exigió la individualización de las copias entregadas, no puede alegarse después la falta de algunas de ellas—Civ., tom. 8, página 302, Ser. 6<sup>a</sup>.

4. **Copias**—El demandante debe acompañar copia del poder al iniciar la acción, aun cuando el testimonio se halle agregado á otro expediente — Civ., tom. 7, páginas 74 y 120, Ser. 6<sup>a</sup>.

5. **Copias**—De los documentos mencionados en la demanda, no existe obligación de presentar copia—Civ., tom. 7, págs. 74 y 120, Ser. 6<sup>a</sup>.

6. **Copias**—El hecho de no acompañar las copias, no

---

pués. Para saber si ellas se han presentado, el litigante solo está obligado á concurrir á secretaría los días designados, y por consiguiente, únicamente al día siguiente hábil debe empezar á correr el término—art. 32 del Cód. de Proc.—Es práctica de que cuando se presentan las copias, se hace saber á la parte por medio de la correspondiente providencia.

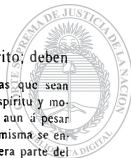
3—El recibo de las copias sin observación, hace presumir que todas fueron entregadas.

4—La parte debe presentar la copia del poder que acredita su personería, pues aun cuando aquél esté agregado á otro expediente, ello no obsta á que la contraria pueda exigir dicha copia, toda vez que se trata de un recaudo indispensable para la iniciación de un juicio que la ley, como se ha dicho, impone la obligación de presentar.

5—Art. 72 del Cód. de Proc.

6—Esta resolución dictada en 1<sup>a</sup> Inst., fué confirmada por la Cám., por sus fundamentos. El Inferior decía: Que el motivo determinante de la disposición del art. 21 del Cód. de Proc. no ha sido otro que suplir por ella la entrega de expedientes que antes se hacía y que el actual Cód. prohíbe, á la vez que consultar la brevedad del procedimiento. Teniendo en vista ese propósito de la mencionada disposición, no puede darse tanta extensión á sus términos, de que su omisión haga que el





es bastante para tener por no presentado el escrito; deben escrito se tenga por no presentado, pues por más absolutas que sean las excepciones de dicho art. 21, no debe olvidarse su espíritu y motivo determinante para interpretarlo acertadamente. Que aun á pesar de la forma imperativa de esa disposición legal, en ella misma se encuentra su genuina y verdadera interpretación en la primera parte del inc. 2º de ella, cuando dice: «Que las copias se entregarán á la otra parte al notificarle la providencia que recaiga.» Luego, si como es natural y lo dispone la ley, las copias no se entregan hasta notificarse la providencia que recaiga en el escrito que se presenta, solo entonces procede la rebeldía, cuando al tiempo de notificarse la providencia no están las copias. Porque solo entonces se causa perjuicios á la otra parte demorando el juicio por falta de esa formalidad. Por otra parte, las copias no son requisitos esenciales de las peticiones que se formulan, son simples accesorios de ellas, formalidades intrínsecas y coadyuvantes, á las cuales no puede darse más importancia que á la petición misma, que es la principal; de lo contrario, sucedería el absurdo de que un escrito ó petición debiera devolverse, aunque haya sido presentado en término, por el simple hecho de no haberse acompañado la copia, aunque ésta estuviese lista en Secretaría al tiempo que ella debe producir los efectos que la ley ha tenido en vista, que es cuando ella misma ordena que debe ser entregada. Supóngase un escrito contestando la demanda é interponiendo conjuntamente con ella reconvencción, el Secretario por un descuido no nota al presentarse un escrito que contiene la última petición y lo recibe. Advertido el litigante de que no ha acompañado la copia, la exhibe antes de notificarse á la contraparte la providencia que ha recaído; ¿deberá darse por contestado en rebeldía el traslado de la demanda y como no presentada la contrademanda por el simple hecho de no haber presentado el escrito y la copia conjuntamente? Tal conclusión sería repugnante á los principios dominantes del derecho y de la justicia y daría lugar á consecuencias muy inconvenientes para la buena administración de ella. Es verdad que el Secretario debió no recibir el escrito, pero si por equivocación ó por descuido lo recibiese, la rebeldía no procede, porque esta surge del hecho de no recibirlo, pero no de la falta de copia. Cuando el Secretario no lo recibe, se da por no presentado, eso es lo que la ley dice; pero si lo recibe, aunque sea equivocadamente, la sanción legal no existe, porque la ficción no puede ir tan lejos, y no ha ido tan lejos, como sería dar como no existente una petición formulada que se ha recibido por el oficial público. Así resulta de los términos del art. 21,

presentarse en tiempo para su entrega á la parte contraria—Civ., tom. 5, pág. 7, Ser. 6ª.

7. **Copias**—Después de pedida prórroga para contestar la demanda, no puede exigirse copias—Civ., tom. 8, página 359, Ser. 5ª.

8. **Copias**—En el juicio ejecutivo, no existe la obligación de entregar copias de los escritos—Com., tom. 7, pág. 380, Ser. 3ª.

9. **Copias**—El auto que las declare ilegibles, es apelable—Com., tom. 7, pág. 334, Ser. 3ª.

cuando se espresa así: «Si no se exhibiesen las copias, el Secretario no recibirá el escrito, produciendo el efecto de no presentados.» ¿Cuándo se da por no presentado? cuando no recibe el escrito, dice el art. La falta del Secretario podrá merecer recomendación de ajustarse á la ley, ó á una corrección, si se quiere, pero de esa falta no pueden derivarse efectos jurídicos que la ley no ha sacado de ella sino de lo contrario, del cumplimiento de su deber, cuando no recibiese el escrito. Por último, ya que la premura del despacho no permite al Juzgado fundar más estensamente el punto, no debe olvidarse jamás, que si las leyes han ordenado siempre que los resoluciones judiciales no se atengan á sutilezas del derecho, tampoco ellas deben atenerse á nimias formalidades de importancia secundaria, con tal que esas formalidades se hayan cumplido, sin que se fustren los propósitos y la intención de la ley que las exigió, y la ley queda completamente cumplida, cuando sus exigencias se han llenado en el tiempo y oportunidad que ellas deben producir sus efectos. Tal es el caso del litigante que exhibe las copias que deben agregarse á su petición, antes de ser notificada á su adversario la providencia que en ella ha recaído.»

7—Al pedir la prórroga, es la oportunidad última para pedir la entrega de las copias, pues de lo contrario se presume que se consiente en evacuar el traslado sin ellas. Por otra parte, las copias fueron entregadas al que debía evacuar el traslado, sin objeción alguna y después de pedir la prórroga se dijo que no estaban en forma.

8—Al resolverse esta cuestión se dijo: «Que en el juicio ejecutivo no existe escrito alguno que demande la entrega de copias.» Parece que esto es avanzar demasiado. ¿En la reposición que se solicita, no debe acompañarse copias del escrito?





**Copias**—Véase: *Documentos acompañados*, 9; *Excepción de inhabilidad*, 8.

**Correcciones disciplinarias** Véase: *Comisario*, 1.

1ª. **Corredor**—Corresponde al juez el nombramiento de corredores para la venta de títulos durante la sindicatura provisoria—Com., tom. 8, pág. 63, Ser. 3ª.

2. **Corredor**—Siendo los corredores, consignatarios y comisionistas, agentes auxiliares del comercio, su calificación de comerciantes no anula su presentación como testigos—Civ., tom. 6, pág. 384, Ser. 5ª.

3. **Corredor**—Solo deben entregarse al corredor, los fondos necesarios para la operación, y no una suma indeterminada, con cargo de rendir cuenta—Civ., tom. 5, página 240, Ser. 5ª.

**Corredor**—Véase: *Arreglos privados*, 1; *Comisión*, 6; *Comisionista*, 1; *Mercaderías*, 2.

**Cosa comprada**—Véase: *Escritura pública*, 4.

**Cosa común**—Véase: *Coherederos*, 1.

**Cosa fungible**—V.: *Depósito*, 4; *Bienes gananciales*, 1.

1. **Cosa juzgada**—Las deficiencias de los títulos, no

1ª—Así se desprende del espíritu del art. 1436 del Cód. de Com.

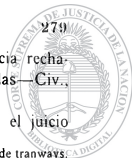
2—Véase: verb. *Agentes auxiliares*, 1.

1—Opuestos los defectos á los títulos, se dijo después que estos no eran los únicos. El Juez de 1ª Inst. rechazó como inexistentes los defectos opuestos, dejando á salvo los derechos de la parte para oponer después los mismos defectos notados. La Cjm. revocó esta parte del pronunciamiento, aduciendo consideraciones tendentes á evitar las nuevas objeciones que entonces solo se insinuaban. En tal concepto quedaba cerrada toda discusión sobre la posibilidad de aducir nuevos defectos quedando terminado el juicio y pasando dicho pronunciamiento en autoridad de cosa juzgada. Por otra parte, el art. 521 del Cód. de Proc. acuerda el término perentorio de tres días para objetar los títulos. De manera, que dentro de ese término deben oponerse todas las objeciones, sin que pueda él suspenderse.

pueden fundar diversas demandas; la sentencia rechazando las opuestas, hace cosa juzgada para todas—Civ., tom. 10, pág. 428, Ser. 6<sup>a</sup>.

## 2. Cosa juzgada — La sentencia recaída en el juicio

2.—Se trataba de una indemnización contra una empresa de tranways. Ocurrido el accidente y puesto el suceso en conocimiento de las autoridades policiales y elevado el correspondiente sumario á la justicia correccional, fué condenado en definitiva el conductor del tranway á sufrir la pena de tres meses de arresto, esta condena se pronunció después de oído el Ministerio Público y con la conformidad del mismo defensor del procesado. Ahora bien, el art. 1102 del Cód. Civ. establece, que después de la condenación del acusado en el juicio civil, la existencia del hecho principal que constituye el delito, ni puede impugnar la culpa del demandado. La jurisprudencia interpretativa de este precepto no nos ofrece divergencias sustanciales, pues éstas se han producido en realidad, al rededor del precepto contenido en el art. subsiguiente, cuya inteligencia jurídica mantiene aun dividida la opinión de los magistrados. Ni podrían haberse suscitado esas divergencias, ni menos ofrecer la disposición de referencia, dificultades en los casos por ella regidos. Es bien sensible la discrepancia de pareceres entre los viejos comentadores citados en su nota por el Dr. Vélez. Toullier sostiene que la cosa juzgada en lo criminal, carece de influencia sobre la acción civil, debiendo en consecuencia, los tribunales de esta última jurisdicción considerar como *res inter alios acta* las decisiones dadas por los tribunales criminales. Merlin entiende á su vez, que la cosa juzgada en lo criminal debe considerarse como cosa juzgada en lo civil, debiendo igualmente considerarse al Min. Público, cuando intenta esa acción criminal, como representando todos los intereses tanto generales como privados, en cuanto se trata de hacer consignar judicialmente la existencia del delito. Haciéndose cargo Bonnier de estas opiniones encontradas—tom. 2<sup>o</sup>, pág. 448—y después de recordar que la doctrina de Merlin ha prevalecido en la jurisprudencia, piensa que en el fondo hállase la verdad por parte del sistema último. Las reservas que el mismo tratadista insinúa en su comentario, son estrañas al caso presente. Estos antecedentes fijan el verdadero criterio de nuestro derecho sobre la materia. La empresa insistió observando que no podía oponerse la cosa juzgada en razón de no haber intervenido en el juicio que terminó con la condenación del procesado. Era también insubsistente la consideración de que cuando se infligió al procesado la pena, ésta estaba ya agotada





criminal, hace cosa juzgada para el tercero civilmente responsable de los daños y perjuicios causados á la víctima—Civ., tom. 5, pág. 314, Ser. 6<sup>a</sup>.

3. **Cosa juzgada**—Las resoluciones sobre tenencia de los hijos, no hacen cosa juzgada—Civ., t. 3, p. 410, S. 6<sup>a</sup>.

4. **Cosa juzgada**—La sentencia de divorcio, en cuanto dispone sobre la tenencia de los hijos, no hace cosa juzgada; pero solo puede modificarse, si se justifica plenamente que su subsistencia es contraria á los menores—Civ., tom. 2, pág. 355, Ser. 6<sup>a</sup>.

5. **Cosa juzgada**—La revocación de la sentencia, por no haberse pedido en la demanda la resolución del punto, no hace cosa juzgada, si la nueva acción tiene por objeto lo que en aquella se había omitido—Civ., tom. 1, página 184, Ser. 6<sup>a</sup>.

con la prisión preventiva, pues dar por compurgado un delito con la prisión sufrida, no importa declarar la inexistencia de aquél, ni menos declarar al segundo exento de pena. Y es de advertirse por otra parte, que en la ejecutoria se condenaba espresamente al procesado á la pena de tres meses de arresto, y si es verdad que se ordenó su libertad, fué á mérito de la prisión sufrida y con arreglo al art. 49 del Cód. Pen.

3—Pueden los jueces volver sobre tales autos en cualquier tiempo, siempre que lo haga necesario el interés de los mismos hijos. Además en el caso presente no fué oída la madre en cuyo poder estaba el hijo. Es práctica constante en casos como éste, en que los padres invoquen preferente derecho á la tenencia de sus hijos, convocarlos á juicio, é informándose sumariamente de los antecedentes, resolver sobre la tenencia, procurando armonizar el derecho de los padres con el interés de los hijos.

4—De acuerdo con la doctrina que informa el caso precedente.

5—Es bien sabido que para la procedencia y eficacia de la cosa juzgada, es indispensable que haya identidad de objeto, de causa y de personas. Es necesario, como lo dice Escriche, que la demanda se instaure sobre la misma cosa, por la misma causa, contra las mismas partes y con la misma calidad. En el caso presente faltaba el primero de los requisitos enunciados.



**Cosa juzgada**—Véase: *Daños y perjuicios*, 43, 46 y 47; *Embargo preventivo*, 23; *Excepción de cosa juzgada*.

1. **Costas**—No procede su imposición contra el demandante vencido, si tampoco el demandado justifica la contrademanda—Com., tom. 7, pág. 31, Ser. 3ª.

2. **Costas**—Si la nulidad del juicio es imputable al Secretario, no procede condenación en costas á las partes—Civ., tom. 7, pág. 308, Ser. 3ª.

3. **Costas** Las costas en materia criminal, son de cargo del vencido—Crim., tom. 7, pág. 318, Ser. 3ª.

4. **Costas**—El rechazo de la querella, hace procedente la condenación en costas al acusador—Crim., tom. 7, página 349, Ser. 3ª.

5. **Costas**—No procede la imposición de costas al ejecutado, si no se ha hecho el requerimiento de pago—Com., tom. 8, pág. 38, Ser. 3ª.

6. **Costas**—Es ejecutivo el auto que condena al pago de costas, aunque se hayan dejado sin efecto las resolu-

1—Porque en realidad de verdad, ninguno de los dos sale vencido, siendo así que el art. 221 del Cód. de Proc., establece que las costas serán á cargo del *vencido*.

2—La nulidad fué originada por una diligencia mal asentada por el Secretario. Sin embargo en rigor de derecho, el juez es el único responsable de las costas aun en este caso, pues el art. 240 así lo establece que las costas en caso de nulidad declarada, son á cargo del juez; pero como ya lo tengo dicho la Cám. trata, por todos los medios, de atenuar el rigorismo de esta ley, viniendo en auxilio del Inferior, en virtud del espíritu de cuerpo que la domina, aunque la justicia sufra en su integridad.

3—Art. 144 del Cód. de Proc. Crim.

5—El ejecutado pagó antes de librarse mandamiento, en cuyo caso debe aplicarse el art. 483 del Cód. de Proc.

6—Una misma providencia contenía varios pronunciamientos con imposición de costas: después se dejó sin efecto parte de ese pronunciamiento, pero no en cuanto á la imposición de las costas. Es evidente la justicia del sumario.



ciones de trámite que lo informan—Com., tom. 8, página 158, Ser. 3ª.

7. **Costas**—En los incidentes criminales entre partes, las costas deben imponerse al vencido, salvo el caso del art. 145 del Cód. de Proc.—Crim., t. 8, p. 202, Ser. 3ª.

8. **Costas**—En las querellas por injurias, las costas son de cargo del que se retracta—Crim., t. 8, p. 212, S. 3ª.

9. **Costas**—No habiendo temeridad ni malicia en la oposición á la demanda, no procede condenación en costas—Com., tom. 8, pág. 254, Ser. 3ª.

10. **Costas**—El que no consigue todo lo que exigió al trabarse el juicio, no puede considerarse agraviado por la sentencia que exonera de las costas al contrario—Civ., tom. 6, pág. 33, Ser. 5ª.

11. **Costas**—Procede la escepción de transacción, si las costas fueron especialmente incluídas en la celebrada

8—Arts. 186, inc. 3º, Cód. Pen., y 595 del Cód. de Proc. Crim.

9—El demandado se opuso á la demanda en virtud de un arreglo privado que había hecho con sus acreedores en la Bolsa de Comercio, considerando que esos arreglos y transacciones celebrados por intermedio de sus autoridades internas tenían carácter obligatorio aun para aquellos que se rehusan á intervenir en ellos.

10—Porque en este caso el exonerado del pago de las costas, tuvo razón probable para oponerse al pago de lo que él consideraba un exceso en la demanda, y entonces no hay temeridad ni malicia.

11—En la transacción se estableció que las costas las pagaría el mismo litigante, que después se presentó cobrándolas del procurador de la parte contraria, fundándose en el art. 15 del Cód. de Proc., que declara que el procurador es responsable de las costas, pero no de los honorarios de abogado, de peritos y de procurador. Si el representado transó el pleito, declarándose las costas á cargo de la parte contraria, mal puede ésta exigir el pago de honorarios de cuya cancelación se encargó él. Si al apoderado se le obligase á pagar, éste á su vez tendría derecho á repetir de su principal lo pagado por él, y en resumen sería en último resultado el mismo exonerado por la transacción quien vendría á abonar, en contra de lo pactado, lo que no sería legal.



con el mandante, aun cuando su pago se exija al mandatario—Civ., tom. 6, pág. 82, Ser. 5ª.

12. **Costas**—No procede condenación en costas, cuando la sentencia, sin desconocer el derecho del demandante, declara legítima en parte la defensa—Civ., tom. 6, página 136, Ser. 5ª.

13. **Costas**—Si la demanda no ha prosperado en todas sus partes, debe exonerarse de las costas al demandado—Civ., tom. 6, pág. 143, Ser. 5ª.

14. **Costas**—Debe exonerarse de las costas al demandado, si tenía en parte derecho ó oponerse sin temeridad, á las exigencias del demandante—Civ., t. 6, p. 159, S. 5ª.

15. **Costas**—La falta de comprobación de la demanda, y aun el abultamiento de los hechos en que se funda una acción por daños y perjuicios, no bastan para condenar en costas al demandante, si tuvo razón probable para litigar—Civ., tom. 6, pág. 166, Ser. 5ª.

16. **Costas**—La ejecución por las costas, debe seguirse

12—Ni la demanda ni la defensa prosperó en todas sus partes, en cuyo caso es de aplicarse la excepción establecida en el art. 221 del Cód. de Proc.

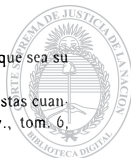
13—Porque no puede decirse que la parte haya sido *vencida* en los términos del art. 221 del Cód. de Proc.

14—No hubo razón alguna para exonerar al demandado del pago de las costas, por cuanto la demanda prosperó en todas sus partes, y por consiguiente hubo verdadero *vencido* en el concepto del art. 221 del Cód. de Proc. Ninguna de las defensas opuestas por el demandado prosperó, no procedía pues su exoneración de las costas.

15—La Cám. decía: «Que las modalidades del juicio y los antecedentes con que fué instruida la demanda persuaden que ha habido razón probable para litigar por parte del actor.»

16—A este respecto hay jurisprudencia contradictoria. De acuerdo con el sumario, véase: Inst., tom. 6º, verb. *Honorarios*, 2 y 12. Aquí se declaró que la ejecución por honorarios es un incidente del principal—tom. 7º, mismo verb., núms. 5, 7, 10 y 12; tom. 3º, mismo verb.





ante el mismo juez del expediente, cualquiera que sea su monto—Civ., tom. 6, pág. 243, Ser. 5<sup>a</sup>.

17. **Costas**—No procede la condenación en costas cuando se hace lugar al recurso de revocatoria—Civ., tom. 6, pág. 262, Ser. 5<sup>a</sup>.

18<sup>a</sup>. **Costas**—El favorecido por la condenación en costas, está obligado al pago del total de los honorarios, sin perjuicio del derecho de repetición—Civ., tom. 6, página 279, Ser. 5<sup>a</sup>.

18<sup>b</sup>. **Costas**—Los honorarios del Escribano que revisó los títulos, son de cargo del vencido con costas—Civ., tom. 6, pág. 339, Ser. 5<sup>a</sup>.

18<sup>c</sup>. **Costas**—El litigante vencedor no tiene derecho á cobrar honorarios por sus trabajos personales—Civ., tom. 6, pág. 279, Ser. 5<sup>a</sup>.

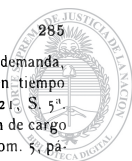
núms. 10 y 14.—En contra se cita el caso de Pedro Argerich con María de la Paz Álvarez de Reynal O'Connor, donde se dijo que estas gestiones no con incidentes sino nuevas acciones que se deducen.

17—En este caso debe aplicarse por analogía el precepto de la Ley 1<sup>a</sup>, tit. 22, lib. IV, R. C., haciéndose procedente la escepción á la regla general contenida en el art. 221 del Cód. de Proc. El sumario está de acuerdo con otras resoluciones.

18<sup>a</sup>—Se trataba del cobro de honorarios llevado á cabo por el procurador contra su cliente. éste dijo que no estaba obligado al pago, por que se habían declarado las costas á cargo de la parte contraria. Es evidente que semejante defensa no podía prosperar, porque ninguna relación de derecho existe entre el procurador de la parte vencedora y el vencido. La locación de servicios crea relaciones directas entre el cliente y su representante.

18<sup>b</sup>—En un juicio sobre escrituración á petición de la parte vencedora, se había nombrado un Escribano para que examinara unos títulos de propiedad. Los honorarios correspondientes á esta diligencia deben pagarse por el vencido en el pleito—Leyes 1<sup>a</sup> y 8<sup>a</sup>, tit. 22, Part. 3<sup>a</sup>; arts. 8<sup>o</sup> del Reg. de Justicia de 1813, y 221 del Cód. de Proc.

18<sup>c</sup>—Art. 62 del apéndice al Cód. de Proc.



19. Aun cuando exista *plus-petitio* en la demanda, debe condenarse en las costas al vencido, si en tiempo el demandado rectifica el error—Civ., t. 7, p. 221, S. 5<sup>a</sup>.

20. **Costas**—Los gastos de la tercería, son de cargo del ejecutante que desiste del embargo—Civ., tom. 5, página 155, Ser. 5<sup>a</sup>.

21. **Costas**—La oblación hecha antes del requerimiento, exonera de las costas al ejecutado—Civ., tom. 5, página 191, Ser. 5<sup>a</sup>.

22. **Costas**—Si la sentencia de la Cámara no resuelve sobre las costas, no existe obligación de pagar las de segunda instancia—Civ., tom. 5, pág. 245, Ser. 5<sup>a</sup>.

23. **Costas**—Procede la condenación en costas, si de autos resulta evidente la temeridad del vencido—Civ., tom. 5, pág. 330, Ser. 5<sup>a</sup>.

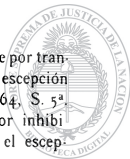
19—Esta cuestión fué resuelta por mayoría, la que sostuvo que la rectificación posterior, salvó el error en que el actor incurrió en la *plus-petitio*. La minoría dijo: «que la salvedad era estemporánea, pues ya la causa estaba concluida para definitiva cuando la rectificación se hizo, estando el debate ya terminado.» La Ley 43, tit. 2<sup>a</sup>, Part. 3<sup>a</sup>, ordena que «el demandador debe pagar las costas ó comisiones que hizo el demandado, por razón de aquello que se le demandare de más.» Esta sanción es aplicable al caso actual.

20—El mismo embargante reconoció que los bienes pertenecían al tercerista y no al ejecutado. El ejecutante pues, fué el causante de las costas causadas, siendo éstas á su cargo. Además, es de tenerse presente que todo el que desiste debe pagar las costas.

21—El depósito se hizo antes de ser requerido el deudor, presentándose al Juzgado el recibo del banco. Se pagó por consignación. El art. 483 del Cód. de Proc. exonera al deudor de las costas en este caso.

22—La parte dispositiva de la sentencia es la que debe ejecutarse, si ella no condena en costas, no hay término hábil para su cobro.

23—El art. 221 del Cód. de Proc. establece una regla de la cual los jueces no deben apartarse, á menos que se hayan ventilado en la controversia cuestiones de derecho aun no resueltas por los tribunales, ó puntos de ardua solución que por lo menos den razón probable para litigar.



24. **Costas**—Aun cuando la ejecución termine por transacción, el ejecutado debe pagar las costas si la escepción era plenamente improcedente—Civ., t. 5, p. 364, S. 5<sup>a</sup>.

25. **Costas**—Si la competencia se produce por inhibitoria, no procede condenación en costas contra el escep-  
cionante—Civ., tom. 10, pág. 33, Ser. 6<sup>a</sup>.

26. **Costas**—No estando obligados los herederos á reconocer la firma del causante, no procede la condenación en costas contra la testamentaria—Civ., tom. 10, página 201, Ser. 6<sup>a</sup>.

27. **Costas**—Los sellos invertidos en el espediente, son de cargo del vencido con costas—Civ., tom. 10, página 319, Ser. 6<sup>a</sup>.

28. **Costas**—El condenado en costas, debe abonar to-

---

24—Hallándose la causa en estado de sentencia, las partes se presentaron al Juzgado, diciendo que habían celebrado un arreglo por el cual quedaban canceladas las cuentas que habían motivado el juicio, y que en cuanto á los gastos causídicos estarían á lo que el Juzgado resolviera. El Inferior declaró, que las costas debían ser satisfechas en el orden causado. La Cám. revocó el auto, fundándose en que el demandado no desconoció su calidad de deudor, y aunque resistió la ejecución, oponiendo á ella la escepción de transacción, resultaba de autos que la había instruido únicamente, como un recurso que parecía muy dudoso hubiera podido determinar la prosperidad de la defensa. La circunstancia de no haber llegado el caso de dictarse sentencia, no es fundamento que pueda invocarse útilmente, desde que esta situación se produce en el juicio por la propia voluntad de las partes, siendo la consecuencia directa é inevitable del convenio celebrado por ellas.

25—Véase: verb. *Competencia*, 8.

26—Porque al desconocer un documento atribuido al causante, usan de un derecho acordado por la ley—arts. 1033 del Cód. Civ., y 141 del Cód. de Proc.

27—Porque forman parte de las costas causadas.

28—Se pretendió que el importe del poder otorgado para el pleito y los gastos ocasionados en una inspección ocular llevada á cabo, no debían incluirse, pero esa pretensión fué rechazada, por que son gastos del pleito.



dos los gastos causados—Civ., t. 10, pág. 343, Ser. 6<sup>a</sup>.

29. **Costas**—Siendo precepto de la ley, la suspensión del juicio civil, hasta la terminación del criminal, no procede la condenación en costas al demandante—Civ., tom. 9, pag. 51, Ser. 6<sup>a</sup>.

30. **Costas**—Son de cargo del que solicitó irregularmente el mandamiento contra la esposa—Civ., tom. 9, pág. 75, Ser. 6<sup>a</sup>.

31. **Costas**—El mandatario tiene derecho á cobrar honorarios en los casos de condenación en costas, aun cuando sea parte personalmente en el juicio—Civ., tom. 9, pág. 269, Ser. 6<sup>a</sup>.

32. **Costas**—Librado mandamiento, las costas del juicio son de cargo del deudor—Civ., t. 9, p. 299, Ser. 6<sup>a</sup>.

33. **Costas**—Comprobados los extremos de la demanda, corresponde la condenación en costas al demandado que no justifica su resistencia—Civ., t. 9, pág. 356, Ser. 6<sup>a</sup>.

34. **Costas**—No procede condenación en costas en ju-

---

29—El auto que se dicte de acuerdo con el precepto de los arts. 1077 y 1081 del Cód., no tiene otro alcance que suspender forzosa-mente la tramitación del juicio, siendo improcedente la imposición de las costas. Se tiene resuelto en otro caso que la suspensión voluntaria del juicio, autoriza la imposición de las costas.

30—El que origina las actuaciones inútiles, es quien debe abonarlas.

31—El mandatario representaba á sus mandantes y también sus derechos propios.

32—Art. 483 del Cód. de Proc.

33—El art. 221 del Cód. de Proc., así lo preceptúa.

34—Deducida acción ejecutiva por el cobro de afirmados, el ejecutado se negó al pago porque se le cobraba el metraje más de lo convenido, consignando lo que él manifestaba adeudar y alegando su derecho á una rebaja por el pago al contado que hacía. Se resolvió que el precio cobrado por el actor era mayor del que correspondía, y que el deudor no tenía derecho á la rebaja por haber dejado pasar la oportunidad establecida. No procedía la imposición de las costas porque la



cio ejecutivo, si ninguna de las partes consigue sus pretensiones—Civ., tom. 9, pág. 391, Ser. 6ª.

35. **Costas** —Reconocida la capacidad del denunciado como insano, todas las costas del juicio son á cargo del denunciante—Civ., tom. 8, pág. 123, Ser. 6ª.

36. **Costas** —No puede ser exonerado de las costas, el litigante cuya temeridad es manifiesta—Civ., tom. 8, página 155, Ser. 6ª.

37. **Costas** —Si la escepción dilatoria de falta de personería se funda en la falta de derecho, debe ser rechazada con costas—Civ., tom. 8, pág. 243, Ser. 6ª.

resistencia del deudor era legítima, pues se le cobraba más de lo convenido; y por otra parte, quería pagar menos de lo que correspondía. En realidad de verdad, no hay verdadero vencedor en el juicio.

35—Si bien en nuestra legislación sustantiva no se registran disposiciones como ocurre en otras, estableciendo las reglas que deben observarse con respecto al pago de los gastos de un juicio de demencia, el caso empero puede fácilmente solucionarse, aplicando los preceptos generales de la legislación sobre perjuicios y los particulares de la procesal sobre la responsabilidad de las costas - art. 221 del Cód de Proc. Es fuera de duda, que un juicio ocasiona siempre no solo gastos, sino también molestias y perjuicios, que el legislador ha querido que se indemnizen por el que indebidamente los causa. Y si esto sucede en la generalidad de los casos, ¿con cuánta mayor razón no será ineludible en un juicio de la naturaleza de éste tan grave por sus proyecciones morales y legales? Concurría además, en el caso presente, una circunstancia decisiva: ocultación hecha por el denunciante del estado civil, al pedir su reconocimiento médico legal.

36—Los antecedentes de autos y las consideraciones que fundaron la sentencia, pusieron de manifiesto la falta de toda razón probable para litigar. Los hechos ó extremos que sirvieron de base á la acción, no aparecían en manera alguna comprobados, habiéndose demostrado por el contrario, la completa inexactitud de las afirmaciones de la demanda, y con esa demostración su absoluta irresponsabilidad legal.

37—Porque es un punto de derecho ya resuelto hasta el cansancio, y suscitándolo nuevamente, implica temeridad.



38. **Costas**—Debe rechazarse con costas la recusación, si no se justifica la causa—Civ., t. 8, pág. 371, Ser. 6ª.

39. **Costas**—Si las excepciones opuestas son improcedentes, deben ser rechazadas con costas—Civ., tom. 8, pág. 330, Ser. 6ª.

40. **Costas**—El vencedor puede ejecutar al vencido con costas, por los honorarios del abogado que lo patrocinó; la excepción de falta de personería, es improcedente—Civ., tom. 7, pág. 19, Ser. 6ª.

41. **Costas**—El desistimiento de la demanda trae aparejada la condenación en costas al actor—Civ., tom. 7, pág. 57, Ser. 6ª.

42. **Costas**—Al resolver la excepción, no es obligatorio el pronunciamiento sobre las costas—Civ., tom. 7, pág. 65, Ser. 6ª.

43. **Costas**—Los gastos del juicio sobre venta de la

38—Deducida la recusación, se elevaron los autos al Superior. Abierto á prueba el incidente, se dejó vencer el término sin producir ninguna. La desestimación de la recusación con causa, será siempre con costas, dice el art. 383 del Cód. de Proc.

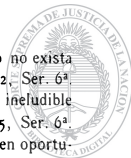
39—No hay razón para que no se aplique la regla general sentada en el art. 221 del Cód. de Proc.

40—Se trataba de honorarios regulados en una sentencia. La excepción de falta de personería no puede oponerse á la ejecución de sentencia. Por otra parte, el condenado en costas debe abonarlas á la parte contraria, porque las relaciones de derecho creadas por la sentencia solo rijen entre las partes litigantes.

41—La jurisprudencia á este respecto es contradictoria. Véase: Inst., tom. 6º, verb. *Desistimiento*, 1, especialmente la nota; y verb. *Costas*, 13, 14 y 19; tom. 5º, mismo verb., núms. 37 y 63; tom. 3º, verb. *Desistimiento*, 1; tom. 2º, verb. *Costas*, 11; y *Desistimiento*, 3.

42—Se dijo que en el estado en que se encontraba el juicio, no procedía pronunciarse respecto de la imposición de todas las costas del juicio

43—Dada la naturaleza del procedimiento autorizado por la ley para hacer efectivos los derechos del acreedor, y teniendo presente además,



prenda, son de cargo del deudor, aun cuando no exista condenación en costas—Civ., tom. 7, pág. 112, Ser. 6<sup>a</sup>.

44. **Costas**—La temeridad del vencido, hace ineludible su condenación en costas—Civ., t. 7, pág. 215, Ser. 6<sup>a</sup>.

45. **Costas**—No procede su imposición, si en oportunidad no fué solicitada por el vencedor—Civ., tom. 7, página 227, Ser. 6<sup>a</sup>.

46. **Costas**—Aun cuando se declare procedente la excepción de inhabilidad de título, no debe condenarse en costas al ejecutante, si se dejan sus derechos á salvo—Civ., tom. 7, pág. 383, Ser. 6<sup>a</sup>.

47. **Costas**—En los juicios seguidos contra una sucesión por deudas del causante, no procede la condenación en costas, puesto que los herederos no están obligados á reconocer la firma del causante—Civ., tom. 6, página 221, Ser. 6<sup>a</sup>.

48. **Costas**—Debe eximirse al vencido, de la condenación en costas, si tuvo razón derecha para litigar—Civ., tom. 6, pág. 422, Ser. 6<sup>a</sup>.

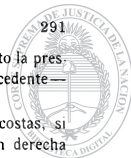
49. **Costas**—Procede su imposición al vencido, si no tuvo razón derecha para litigar—Civ., t. 5, p. 89, S. 6<sup>a</sup>.

los privilegios que la misma acuerda á su crédito, es evidente que los gastos de la venta ó adjudicación de la prenda deben ser á cargo del deudor—Goyena, sobre el art. 1775 de su proyecto—sin que para ello sea necesario una declaratoria ó condenación expresa de parte del juez.

45—El art. 221 del Cód. de Proc. requiere, para la imposición de las costas, que la parte lo solicite. En el caso del sumario, la Cám. dijo, que la oportunidad para pedir la imposición de las costas, es al entablar la demanda. De acuerdo con el sumario, véase: tom. 8<sup>o</sup>, pág. 475, Ser. 2<sup>a</sup>; tom. 4<sup>o</sup>, pág. 257, Ser. 4<sup>a</sup>.

46—Esta cuestión fué resuelta así por la mayoría; la minoría sostuvo que la exoneración de las costas no es posible en el juicio ejecutivo, atento el precepto imperativo del art. 507 del Cód. de Proc.

47—De acuerdo con lo resuelto en el núm. 26.



50. **Costas**—Si el deudor ha opuesto con éxito la prescripción, la exoneración de las costas, es procedente—Civ., tom. 5, pág. 46, Ser. 6ª.

51. **Costas**—No procede la condenación en costas, si no existe temeridad en el vencido y si tuvo razón derecha para litigar—Civ., tom. 5, pág. 107, Ser. 6ª.

52. **Costas**—Debe rechazarse la demanda con costas, si el actor no justifica los hechos en que funda su derecho—Civ., tom. 5, pág. 157, Ser. 6ª.

53. **Costas**—En los daños y perjuicios causados por falta de cumplimiento á una obligación de hacer, no pueden incluirse las costas de los juicios anteriores, si en las respectivas sentencias no existe condenación—Civ., tom. 5, pág. 164, Ser. 6ª.

54. **Costas**—Si el vencido tuvo razón probable para litigar, procede la exoneración de las costas—Civ., tom. 5, pág. 170, Ser. 6ª.

55. **Costas**—No procede la condenación en costas al demandado por divorcio, aun cuando no justifique su ac-

---

50—Porque así como esa defensa no puede suplirse de oficio—art. 3964 del Cód. Civ.—el actor puede suponer que tampoco el demandado se acogiera á ella, y en este caso le asiste perfecto derecho para accionar, no pudiendo considerársele como un litigante temerario.

53—Las costas, en los pleitos, están regidas por las leyes de procedimientos especialmente, y en cada caso deben los tribunales pronunciarse sobre la obligación de satisfacerlas.

55—La Cám. al resolver esta cuestión, se expresó así: «En una demanda deducida por el marido y la otra por la esposa, desde que ambos han solicitado el divorcio invocando diversas causales, ninguna de estas acciones ha prosperado y desde entonces la resolución del Inferior en cuanto á las costas, tenía que ser necesariamente en el sentido de la que se ha pronunciado. Esto no obsta á que más adelante, hecha la estimación correspondiente por los trabajos que comprende la dirección profesional prestada á la esposa, se busque hacer efectiva la responsabilidad del marido como administrador de la sociedad conyugal.»





ción, si la contrademanda por el mismo objeto, no prosperó por falta de prueba—Civ., t. 5, pág. 181, Ser. 6ª.

56. **Costas**—Si el ejecutante reconoce la procedencia de la escepción de incompetencia, debe ser condenado en las costas—Civ., tom. 5, pág. 201, Ser. 6ª.

57. **Costas**—Son de cargo del padre natural las costas del reconocimiento judicial de ese carácter—Civ., tom. 5, pág. 305, Ser. 6ª.

58. **Costas**—Forman parte integrante de la indemnización, en las demandas por daños y perjuicios—Civ., tom. 5, pág. 360, Ser. 6ª.

59. **Costas**—Si la ejecución se inicia por mayor cantidad de la que concede la sentencia de trance y remate, las costas deben pagarse en el orden causado—Civ., tom. 5, pág. 423, Ser. 6ª.

60. **Costas**—Rechazada una escepción opuesta, debe ser condenado en costas el demandado—Civ., tom. 4, página 14, Ser. 6ª.

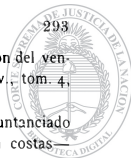
56—Art. 307 del Cód. de Proc.

57—Según resultaba de los antecedentes de la causa, el padre no tuvo razón alguna para resistir el reconocimiento de la filiación, siendo lógico y de justicia que pague los gastos ocasionados y que pudo evitar con un reconocimiento voluntario.

58—Así lo tiene resuelto constantemente la Cám.

59—De acuerdo con otros pronunciamientos de la Cám., entre los cuales se pueden citar los publicados en el tom. 2º, págs. 285 y 529, Ser. 1ª. En el caso del sumario hubo disidencia, la que se fundó en que en definitiva la cantidad que se mandó abonar, si bien era menor que la primitivamente demandada, era mucho mayor de la que reconoció el deudor, y exactamente la misma á que el actor limitó su acción con posterioridad, no habiendo por consiguiente, mérito para separarse de la regla general establecida en el art. 221 del Cód. de Proc.

60—Se opuso como escepción dilatoria un medio de defensa que hacía al fondo de la cuestión. Corresponde la imposición de las costas, de acuerdo con el caso resuelto en el núm. 37.



61. **Costas**—Si aparece evidente la sinrazón del vencido, debe ser condenado en las costas—Civ., tom. 4, pág. 309, Ser. 6ª.

62. **Costas**—El desistimiento después de sustanciado el incidente, trae aparejada la condenación en costas—Civ., tom. 4, pág. 380, Ser. 6ª.

63. **Costas**—El auto que declara las costas de un incidente á cargo de la testamentaria, no afecta á las convenciones que sobre su pago hayan hecho las partes—Civ., tom. 3, pág. 24, Ser. 6ª.

64. **Costas**—Declarada la nulidad, las costas son á cargo del juez, si la parte lo solicita—Civ., t. 3, p. 44, S. 6ª.

65. **Costas**—Aun cuando el Superior declare las costas á cargo del vencido, no comprende las de segunda instancia, si espresamente no se determina—Civ., tom. 3, pág. 69, Ser. 6ª.

66. **Costas**—Debe ser condenado en ellas el tercerista que no prueba su acción—Civ., t. 2, pág. 214, Ser. 6ª.

67. **Costas**—Aun cuando se rechace la demanda, no procede la condenación en costas al actor, si la sentencia se funda en consideraciones no alegadas por el demandado—Civ., tom. 2, pág. 96, Ser. 6ª.

---

62—De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia. Véase el núm. 41.

63—El arreglo se había hecho con un anterior apoderado respecto de los gastos causídicos de una testamentaria. Ese arreglo no obsta á una declaración judicial sobre su pago, pues á las partes les queda siempre el derecho de repetición.

64—Art. 240 del Cód. de Proc.

67—El demandado fué absuelto por consideraciones completamente estrañas á los medios de defensa empleados por él, lo que basta para demostrar que los gastos del juicio, aun cuando tengan su origen en la demanda, se invirtieron en diligencias y debates impertinentes, y siendo esto así, no es justo cargárselos al actor.



68. **Costas**—Si el demandante paraliza la secuela del juicio, debe abonar las costas causadas al demandado—Civ., tom. 2, pág. 152, S. 6ª.

69. **Costas**—No procede condenación al vencido, si de la causa resulta que se movió sin temeridad ni malicia—Civ., tom. 2, pág. 347, Ser. 6ª.

70. **Costas**—Si no se justifica la asistencia médica en la extensión demandada, no procede condenación en costas al vencido—Civ., tom. 2, pág. 396, Ser. 6ª.

71. **Costas**—No procede la condenación en costas al vencido, si el precio fijado por los peritos es menor que el que exigía el demandante—Civ., t. 1, pág. 19, Ser. 6ª.

72. **Costas**—Son á cargo del vencido en los pleitos por daños y perjuicios, no obstante la disminución de la suma demandada, si además del monto de la indemnización se discutió la obligación del demandado—Civ., tom. 1, página 27, Ser. 6ª.

68—Porque esa paralización importa un desistimiento tácito de la acción, y es sabido que el que desiste de cualquiera acción ó incidente debe pagar las costas.

69—La causa del pleito fué un documento de difícil interpretación y que ambas partes creían favorecer sus pretensiones, según el sentido en que se tomaba su contenido. Es claro que las costas deben pagarse en el orden causado.

70—El actor no produjo prueba alguna, y si prosperó su demanda fué debido á que el demandado confesó, al contestarla, la asistencia médica prestada, y solo esta asistencia se le obligó á pagar por sentencia.

71—Se trataba de un contrato de locación de obra, por el que cobraba el actor 1550 \$, sentenciándose tan solo el pago de 1160: la resistencia del demandado al pago de una suma mayor quedó justificada por el resultado del pleito.

72—En toda demanda por daños y perjuicios, debe hacerse la estimación de ellos, á fin de establecer la competencia del Juzgado; pero la estimación debe hacerse siempre sin perjuicio de que el juez fije el monto que según su criterio corresponda. De acuerdo con el sumario, véase el núm. 58.



73. **Costas**—No procede su imposición, si ninguna de las partes ha conseguido todo lo que pretendía—Civ., tom. 1. pág. 120, Ser. 6ª.

74. **Costas**—Procede su imposición, si existe evidente temeridad en la acción deducida—Civ., t. 1, p. 128, S. 6ª.

75. **Costas**—La diferencia entre la suma en que el damnificado aprecia la indemnización y la fijada por el Tribunal, no importa *plus-petición* que permita exonerar de las costas al demandado—Civ., t. 1, pág. 156, Ser. 6ª.

76. **Costas**—Siendo la condenación al vencido un precepto espreso de la ley, debe existir fundamento legal para que proceda su exoneración—Civ., t. 1, p. 199, Ser. 6ª.

77. **Costas**—Si los daños y perjuicios solo se demandan subsidiariamente, la sentencia que condena el cumpli-

73—El litigio versó sobre dos puntos discutidos en un contrato de compraventa, uno de los cuales fué resuelto en contra del actor, que consintió ese pronunciamiento. En la demanda y durante el juicio, se sostuvo que la venta fué simple y al contado, y el demandado negaba ambas circunstancias, sosteniendo á su vez que fué condicional y á plazo. La sentencia declaró que fué simple y á plazo, luego ninguno de los dos puede pretender haber tenido toda la razón de su parte; y en consecuencia, desde que no existe un vencedor, ni un vencido en absoluto, no cabe aplicar la regla contenida en el art. 221 del Cód. de Proc., y si su escepción, puesto que la circunstancia indicada constituye en favor del demandado, un mérito para eximirlo de la responsabilidad de las costas del juicio.

75—Esta es la jurisprudencia constante de la Cám. Véase el núm. 23, verb. *Costas*, Inst., tom. 7º.

76—La Cám. dijo: «El que pierde el pleito debe pagar las costas —art. 221 del Cód. de Proc.—Solo por escepción puede exonerarse de esa obligación á la parte vencida: en el presente no se encuentra justificada circunstancia alguna que autorice en justicia á librar de las costas á la parte actora.»

77—La demanda se inició por escrituración, y en subsidio por daños y perjuicios. La sentencia hizo lugar á lo primero pero no á lo segundo, sin costas, porque el actor no obtuvo todo lo que quiso. La

miento de la obligación no puede exonerar de las costas al vencido—Civ., tom. 1, pág. 214, Ser. 6ª.

78. **Costas**—Son á cargo del vencido: la exoneración debe ser fundada—Civ., tom. 1, pág. 259, Ser. 6ª.

79. **Costas**—No procede su exoneración, si el vencido no tuvo razón derecha para litigar—Civ., tom. 1, pág. 297, Ser. 6ª.

80. **Costas**—Las actuaciones en papel simple deben

Cám. dijo, que este antecedente carecía de importancia en este caso, porque la desestimación hecha de la petición subsidiaria, no es causal bastante para apartarse de la regla establecida en el art. 221.

78—La Cám. dijo: «La regla general consagrada por el Cód. de Proc., es que el vencido abone los gastos causídicos del contrario, si éste lo pidiere, facultando sinembargo á los jueces para eximir de esa responsabilidad cuando encontrasen mérito para ello—art. 221 — ¿Qué antecedente ó circunstancia podría invocar en su favor una persona que obliga á otra á seguir un juicio dispendioso, en virtud de una acción real de que carecía en absoluto? La ignorancia de las leyes ó el error de derecho, no sería ciertamente una causal atendible y de que pudiera hacerse mérito, en presencia de la doctrina que consagra el art. 923 del Cód. Civ.»

79 --La demanda prosperó en todas sus partes, y en autos no aparecía razón alguna para justificar su resistencia y satisfacer lo pedido.

80—La petición del fiscal, Dr. Barrenechea, explicará con toda claridad el caso: «Los jueces y demás funcionarios públicos de la Nación están autorizados para actuar en papel común, pero con cargo de reposición por quien corresponda—art. 53, ley de sellos vigente en 1895 —según esta disposición legal, es entendido que la reposición de sellos debe hacerse siempre, terminando un pleito que sigue de oficio el Min-Público, por la persona que haya sido condenada en él, sin necesidad de que exista pronunciamiento sobre la condenación en costas. Los expedientes iniciados por el Fiscal en papel común, se tramitan bajo la condición ya espuesta, de que la parte vencida debe reponer los sellos respectivos. En el caso *sub-judice* no podrá archiversse este expediente sin que se haga esa reposición, y V. S. debe ordenarla aunque no haya condenado en costas al demandado, porque esa falta de condenación no puede tener el efecto de hacer inaplicable la disposición legal citada; por el contrario, sería indispensable para que no se cumpla dicha dis-



reponerse con papel sellado por el interesado, aun cuando no exista condenación en costas—Civ., tom. 1, página 341, Ser. 6ª

81. **Costas**—No procede su imposición, si por no haberse ajustado precio por la locación de servicios se ordena lo resuelvan peritos—Civ., t. 8, pág. 103, Ser. 5ª.

82. **Costas**—El tercerista no debe ser condenado en costas, si su acción se rechaza por falta de dominio, no obstante haber justificado su derecho á la propiedad—Civ., tom. 8, pág. 107, Ser. 5ª.

83. **Costas**—Si la sentencia no se pronunció sobre ellas, no deben incluirse en la liquidación los honorarios—Civ., tom. 8, pág. 264, Ser. 5ª.

84. **Costas**—Debe rechazarse con costas, la escepción de defecto legal, si la demanda llena los requisitos de la ley—Civ., tom. 8, pág. 267, Ser. 5ª.

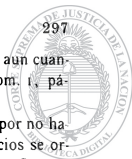
65. **Costas**—La confirmación de la sentencia, con costas, hecha por el Superior, solo comprende las de segunda instancia—Civ., tom. 8, pág. 407, Ser. 5ª.

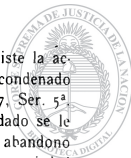
posición, que hubiera pronunciamiento espreso, eximiendo á la parte vencida de toda responsabilidad.»

81—El actor sostuvo que el precio se había estipulado: el demandado negó esa estipulación: no habiéndose comprobado ese extremo de la acción, no procedía la imposición de las costas.

82—Deducida tercería de dominio sobre unos muebles embargados fundándose en un título de compraventa de los mismos, fué rechazado porque el tercerista no comprobó que hubiera adquirido el dominio por medio de la tradición. De todas maneras, el tercerista procedió con razón probable para litigar.

85—Porque si fuese la intención del Superior declarar que las costas de 1ª Ins. son á cargo del vencido en esa misma instancia, si esa sentencia fuese sin costas, tendría en 2ª instancia que revocarse la parte de la de 1ª que no imponía las costas, declarando espresamente revocada la sentencia de 1ª. Inst. en esa parte.





86 . **Costas**—El poseedor precario que resiste la acción reivindicatoria del propietario, debe ser condenado en las costas del juicio—Civ., tom. 5, pág. 37, Ser. 5<sup>a</sup>.

86<sup>b</sup>. **Costas**—Para que al poseedor demandado se le pueda eximir del pago de las costas, debe hacer abandono de la cosa inmediatamente de comprobada la propiedad del reivindicante—Civ., tom. 5, pág. 37, Ser. 5<sup>a</sup>.

**Costas**—Véase: *Abogado*, 1, 2 y 5; *Apelación*, 3; *Bienes embargados*, 11; *Consignación*, 2; *Arraigo*, 1; *Daños y perjuicios*, 14; *Comprador*, 13; *Acreedor*, 4; *Embargo*, 13; *Mandato*, núm. 11.

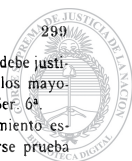
1. **Cotejo**—La indicación de firmas auténticas, puede hacerse aun después de vencido el término, si el cotejo se pidió y ordenó en oportunidad—Civ. tom. 5, página 153, Ser. 5<sup>a</sup>.

**Cotejo**—Véase: *Autenticidad*, 3.

86<sup>a</sup>—Porque esa resistencia es maliciosa, y esa actitud coloca á la parte en la categoría de litigante de mala fe, haciendo procedente la sanción del art. 221 del Cód. de Proc.

86<sup>b</sup>—Porque hasta ese momento su resistencia no es de mala fe y tiene razón de ser.

1—En el comparendo que se celebró en oportunidad, se convino en que se procediera al cotejo, se señalaron los documentos que servirían como medios de comparación, afirmándose por ambas partes que no conocían otros documentos. En ese estado y antes de haberse decretado la audiencia prevenida en el art. 149 del Cód. de Proc., una de las partes denunció á los efectos de la pericia, la existencia de otras firmas auténticas, señalándose entre ellas las que se registraban en el Banco de la Provincia y en el protocolo del escribano Pérez. No se trataba pues, de las diligencias probatorias solicitadas por la parte, sino simplemente de medidas indicadas, ó recabadas del Juzgado para mejor acierto de la operación pericial convenida y decretada de común acuerdo. No es de consiguiente, aplicable la disposición del art. 118, desde que se limita á designar otros documentos que pueden servir de cotejo á las firmas designadas en el comparendo anteriormente celebrado dentro del término de prueba.



1. **Crédito**— Si existen menores interesados debe justificarse el crédito; no basta la conformidad de los mayores para su pago—Civ., tom. 8, pág. 309, Ser. 6<sup>a</sup>.

2. **Crédito**— Aun cuando existiese reconocimiento expresado de los herederos mayores, debe producirse prueba si el Ministerio de Menores desconoce el crédito reclamado—Civ., tom. 1, pág. 365, Ser. 6<sup>a</sup>.

3. **Crédito**— El cedente de un crédito litigioso responde al cesionario del precio, sus intereses y los daños y perjuicios, si resulta que al verificar la cesión, el crédito ya no existía—Civ., tom. 1, pág. 373, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Crédito**— Véase: *Acción conjunta*, 1; *Bienes embarga-*

1 De acuerdo con otros casos resueltos. Véase: Inst., tom. 7<sup>o</sup>, verb. *Menores*, 1; y tom. 5<sup>o</sup>, verb. *Herederos mayores*, 2.

3—En la época de la cesión ya había caducado el crédito cedido, y por consiguiente carecía de existencia legal—Véase: Llerena, comentario al art. 1476 del Cód. Civ.—Este art. prescribe que el cedente de buena fe responde de la existencia y legalidad del crédito al tiempo de la cesión. La escepción es que no responde cuando lo ha cedido como dudoso. Esta última circunstancia debe estar espresa en el contrato, pues no se presume: En este caso se cedió el crédito pura y simplemente y no como dudoso. Luego, el cedente estaba obligado a responder de la existencia y legitimidad del crédito al tiempo de la cesión. Cuando se vende pura y simplemente un crédito, la buena fe exige que el vendedor quede obligado, de pleno derecho, y por la sola naturaleza del contrato, a la garantía y saneamiento; en ello no hace más que responder de su propio hecho, que no debe ignorar cómo es la existencia de la cosa cedida. Pero no sucede lo mismo cuando el crédito se vende como dudoso, porque entonces se vende una cosa ó derecho incierto, una esperanza—Goyena, Comentario al art. 1460 de su Proyecto de Cód. Civ. para España.—Tal es la filosofía de la escepción consignada por el art. 1476. En el mejor caso para el cedente esto es, en el de que sea de buena fe, él responde de la existencia del crédito, como se ha dicho. El art. 1477, Cód. Civ., dispone que si el crédito no existía al tiempo de la cesión, el cesionario tendrá derecho a la restitución del precio pagado, con indemnización de partidas é intereses.



*dos*, 5; *Excepción*, 6; *Demanda*, 3; *Contador*, 1; *Embargo*, 7; *Excepción de falta de personería*, 2; *Excepción de transacción*, 1; *Competencia*, 4; *Excepción de compensación*, 1; *Bienes hipotecados*, 1; *Contrato de cesión*, 2; *Acreedores*, 2 y 3; *Embargo preventivo*, 16 y 26; *Transacción*, 1; *Bienes del deudor*, 1; *Liquidación*, 5; *Concurso*, 13 y 15.

**Cuasi-contrato**—Véase: *Contrato*, 8.

**Cuasi-delito**—Véase: *Daños y perjuicios*, 56; *Agravio moral*, núm. 3.

1. **Cuenta**—Cualquier que sea el total de una cuenta, procede la prueba testimonial si se compone de partidas de menor valor—Civ., tom. 6, pág. 76, Ser. 5ª.

2. **Cuenta**—No procede la entrega de los legados, en tanto no sea aprobada la cuenta de división y partición—Civ., tom. 7, pág. 111, Ser. 6ª.

3. **Cuenta**—El saldo de una cuenta corriente sin plazo fijo, no puede fundar un embargo preventivo—Civ., tom. 4, pág. 395, Ser. 6ª.

1.—Si bien es verdad que la cantidad que se cobraba excedía de *doscientos* pesos, ella no constituía el monto ó valor único de un contrato sino la suma de diversas partidas por suministros ó ventas á crédito, hechas en distintas fechas en el transcurso de un año. Como ninguna de esas ventas ascendía á 200 pesos, es evidente que cada una de ellas puede probarse por testigos—art. 1191 del Cód. Civ.—ya sea parcialmente ó en su totalidad. Exigir para cada una de esas operaciones, tan usuales y frecuentes, una prueba escrita, equivaldría á dificultar inmensamente uno de los medios más expeditivos de subvenir á las necesidades apremiantes de la vida, cual es la venta á crédito por pequeñas cantidades de artículos de consumo, pues es ese seguramente, el propósito de la ley, no es el monto total de la acumulación de las diversas y pequeñas ventas, sino estas mismas, las que debían servir de norma para fijar el valor del contrato, de cuyo cumplimiento se trataba, como ha sido resuelto repetidas veces por la Cám. en casos análogos.

3—Art. 465, inc. 4º del Cód. de Proc.



4. **Cuenta**—Debe aprobarse la del martillero, si en el término fijado no se deduce oposición—Civ., tom. 3, página 60, Ser. 6ª.

**Cuenta**—Véase: *Documento sin fecha*, 1; *Administración*, 3; *Asesor de menores*, 4; *Afirmado*, 2, 3, 5, 6 y 7; *Empedrados*, 1; *Excepción de pago*, 1.

1ª. **Cuentas**—Para la revisión de las cuentas del tutor, debe nombrarse un tutor especial—Civ., tom. 8, pág. 385, Ser. 6ª.

**Cuenta corriente**—Véase: *Intereses*, 1; *Autenticidad*, 4.

**Cuenta particionaria**—Véase: *Contrato de permuta*, 1.

1. **Cuestiones**—La sentencia puede resolver las cuestiones propuestas por distintas razones que las invocadas por las partes—Civ., tom. 10, pág. 307, Ser. 6ª.

2. **Cuestiones**—Consentido el auto que declara la cuestión de puro derecho, no puede administrar pruebas—Civ., tom. 5, pág. 265, Ser. 6ª.

**Cuestiones**—Véase: *Acción*, 1; *Arbitros-arbitradores*, 4 y 5; *Herencia*, 4; *Municipalidad*, 1; *Contrato*, 8; *Hono-*

1—El tutor que rinde cuentas, se halla inhabilitado para representar á su pupilo en esa rendición de cuentas, pues debido al carácter que inviste surge la oposición de intereses de que la ley nos habla. Cuando un padre rinde cuenta, no es lo mismo que cuando lo hace un tutor, pues aquél ejerce la administración de los bienes de sus hijos por ministerio de la ley, estableciendo la misma los casos en que debe nombrarse tutor á los hijos fuera de los cuales no existe oposición de intereses—arts. 239, 272, 282, 285 y 303 del Cód. Civ.—en cuyos casos no se hallan los menores que están bajo su tutela; ni la ley determina, los actos que constituyen intereses opuestos con los tutores, como lo hace respecto de los padres; por consiguiente, basta que en el carácter que inviste el tutor, y del interés que tiene en el acto que ejecuta, surja esa oposición para que sea procedente el nombramiento de tutor especial. El art. 397 es de pertinente aplicación al caso que nos ocupa.

2—Arts. 105, 212 y 214 del Cód de Proc.



rarios, 6; *Nulidad de sentencia*, 4 y 7; *Acción de filiación*, núm. 1.

**Culpa**—Véase: *Daños y perjuicios*, 3, 10, 13, 28, 31, 35, 41, 43, 45 y 51; *Acto ilícito*, 1 y 6; *Absolución del acusado*, 1; *Contrato de compraventa*, 4 y 20.

**Cuotas**—Véase: *Adoquinado*, 2; *Bienes del concurso*, 2; *Rendición de cuentas*, 4.

1<sup>a</sup>. **Curación**—Corresponde a la jurisdicción correccional las causas por lesiones que no impidan al paciente dedicarse por más de un mes al trabajo, aunque la curación dure mayor tiempo—Crim., t. 8, pág. 185, Ser. 3<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Curador**—La intervención del demandado como demente, en el juicio de insania, es personal y concurrente con la del curador provisorio, sin que pueda intervenir por medio de apoderado—Cv., t. 9, pag. 301, Ser. 6<sup>a</sup>.

2. **Curador**—Procede la remoción del curador negligente en el cumplimiento de las obligaciones que la ley

1<sup>a</sup>—Arts. 120, inc. 2º del Cód. Pen., y 28 del Cód. de Proc.

1<sup>b</sup>—El representante legal del demandado como demente, es el curador provisorio que el juez debe nombrar en los juicios de insania para que lo represente y defienda en el pleito con arreglo a la terminante disposición del art. 147 del Cód. Civ. Dar acceso al apoderado de un insano, valdría tanto como admitir una doble representación de la misma parte, lo que sería contrario a derecho y aun al buen orden del procedimiento. La Cám. tiene resuelto, que el presunto insano puede intervenir y hacerse oír en los juicios de insania, pero personal y concurrentemente con el curador provisorio, como puede verse en los casos de Cáceres con Dudgeón; y Michelena con García.

2—Se comprobó que el curador del insano no había procedido en el desempeño de sus funciones con la diligencia y atención que la ley exige, debiendo juzgarse sus actos con arreglo a lo dispuesto en el art. 475 del Cód. Civ. De las propias declaraciones del tutor resultaba que él no tuvo para la persona y bienes del insano, los cuidados de un buen padre de familia, como lo ordenan los arts. 412 y 413 del Cód. Civ., y que él fué remiso en el cumplimiento de lo prescripto por el art. 421, en cuanto a la rendición de cuentas que judicialmente debió exigir



le impone para la guarda de la persona y bienes del insano—Civ., tom. 8, pág. 73, Ser. 6ª.

3. **Curador**—Para la declaratoria de incapacidad debe nombrarse curador especial; el derecho á la curatela solo puede resolverse después de la declaratoria —Civ., tom. 7, pág. 117, Ser. 6ª.

4. **Curador** —El nombrado al incapaz que tiene representante legal, solo tiene personería para intervenir en el juicio para que fué nombrado — Civ., tórn. 6, página 139, S. 6ª

5. **Curador**—Debe suspenderse la testamentaria hasta

---

al curador que le precedió en el ejercicio del cargo, inmediatamente de discernírsele éste.

3—Se trataba de suplir la incapacidad de una mujer casada. El su mario se basa en los arts. 147 y 476 del Cód. Civ.

4—El curador fué nombrado para representar á una mujer casada menor de edad, en el juicio de divorcio— art. 69 de la Ley de Mat. Civ. — Un acreedor de la esposa, por honorarios, la ejecutó con intervención del curador especial. Después de consentida la sentencia de trance y remate, el esposo dijo de nulidad del juicio, fundándose: en que el único que podía representar á su esposa en esa ejecución era él; que el curador especial carecía de facultad al efecto. Así se declaró. El art. 74 de la Ley de Mat. Civ. tiene en su propio texto y aun por su propia ubicación bien definido su alcance. Así, después de determinar la misma ley las facultades de los jueces, puesta la demanda de divorcio con referencia á las personas de los cónyuges y al cuidado de los hijos, y los alimentos de unas y otros y á las espensas necesarias á la mujer para el juicio, establece que, si alguno de los cónyuges fuese menor de edad, no podrá estar en juicio como demandante ó demandado, sin la existencia de un curador especial, que para este solo fin elegirá la parte, y en su defecto nombrará el juez. Refiriéndose, pues esa curatela, solo á la asistencia en el juicio de separación, á sus trámites, á sus especialidades; conservándose por otra parte, en toda su integridad legal la potestad marital, mientras se instruye el juicio, en lo que concierne á tales bienes y su administración. El derecho del marido para representar á la esposa en cualquier otro juicio, es incuestionable.

5—No puede proseguirse el juicio, mientras todos los interesados



que se nombre curador al denunciado como insano —Civ., tom. 8, pág. 358, Ser. 5<sup>a</sup>.

6. **Curador**—No puede recaer declaración de incapacidad, sin nombramiento de curador provisorio —Civ., tom. 6, pág. 393, Ser. 5<sup>a</sup>.

**Curador**—Véase: *Insania*, 4; *Bienes hereditarios*, 16; *Albacea*, núm. 1.

1. **Curadores**—Los nombrados por los cónsules en las testamentarias de extranjeros, pueden actuar en papel común con cargo de reposición —Civ., t. 7, p. 341, S. 5<sup>a</sup>.

**Curatela**—Véase: *Curador*, 3.

estén legalmente representados. Denunciado como incapaz uno de ellos, no puede estar en juicio sino por medio de su representante legal, y para ello se hace necesario que ante todo se declare su incapacidad para que el curador definitivo que se le nombre asuma su representación.

6—Así lo exige el art. 147 del Cód. Civ.

1 —La facultad concedida á los cónsules para nombrar curador de la herencia, en las sucesiones, deriva de los tratados especiales, celebrados por la Nación con las potencias extranjeras, en cuyo caso dichos nombramientos deben equipararse á los que verifican los jueces, en virtud de facultades que le son propias, á los efectos de presentar los escritos en papel simple con cargo de oportuna reposición.

---

## CH

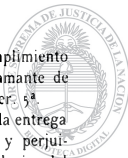
**Chancelación**—Véase: *Excepción de pago*, 4; *Gravamen hipotecario*, 1.

1. **Daños y perjuicios**—Provenientes de un acto ilícito, solo proceden si el hecho es imputable al demandado; la simple irregularidad, no basta para fundar la acción—Civ., tom. 6, pág. 166, Ser. 5ª.

2. **Daños y perjuicios**—La sentencia que condena al

1—El art 1067 del Cód. Civ. establece: que no habrá acto ilícito punible para los efectos legales, si no hubiera daño causado ú otro acto esterno que lo pueda causar, y sin que á sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa ó negligencia. Como se ve, cualquier de estos tres elementos, el dolo, la culpa ó negligencia, le da el carácter de ilícito á todo acto voluntario y prohibido por la ley. Calificado de ilícito, nace la obligación de reparar el daño que pueda producir como consecuencia del principio: *sua cuique culpa nocet*. Es por esto que los arts. 1067 y 1109, han establecido la obligación de reparar el daño causado, sea por razón de un acto doloso que constituye el delito, ó por un acto voluntario y prohibido, practicado con culpa ó negligencia, que constituye el cuasi-delito. En uno y otro caso, pues, nace la obligación legal á que se alude, que se estiende no solo al perjuicio que efectivamente se produzca, sino también á las ganancias de que fué privado el damnificado, como una consecuencia inmediata del acto ilícito, ó en otros términos, á las pérdidas é intereses—arts. 1068 y 1069.

2—Se había iniciado demanda solicitando la rescisión del contrato y la responsabilidad por los daños y perjuicios del que dejó de cumplirlo. Así se resolvió. Después se inició la acción de daños y perjuicios, pero no se comprobó su monto.



pago de los daños y perjuicios por falta de cumplimiento de una obligación de hacer, no exime al reclamante de justificar su monto—Civ., tom. 7, pág. 43, Ser. 5<sup>a</sup>.

3. **Daños y perjuicios**—Para que la mora en la entrega de la obra, pueda fundar una acción de daños y perjuicios, el locador debe justificar que fué culpa exclusiva del locatario—Civ., tom. 7, pág. 56, Ser. 5<sup>a</sup>.

4. **Daños y perjuicios**—En las demandas por daños y perjuicios, el pago de las costas son parte integrante de la indemnización—Civ., tom. 8, pág. 62, Ser. 5<sup>a</sup>.

5. **Daños y perjuicios**—La falta de cumplimiento de una obligación de hacer, solo hace pasible de los daños y perjuicios que se justifiquen plenamente ó que resulten ineludibles de las constancias del expediente—Civ., tom. 7, pág. 174, Ser. 5<sup>a</sup>.

6. **Daños y perjuicios**—Causados por un desalojo indebido, como acción personal, solo se prescribe en el término de diez años—Civ., tom. 7, pág. 211, Ser. 5<sup>a</sup>.

7. **Daños y perjuicios**—El locatario que subarrienda

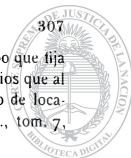
3—Para que exista la obligación de reparar el perjuicio, es necesario que se ataque algún derecho de propiedad del que reclama el perjuicio, ó que se le haga algún mal en su persona, derechos ó facultades—art. 1068 del Cód. Civ.—La prueba de este extremo corresponde al que alega su existencia.

4—Así lo tiene resuelto la jurisprudencia. Véase: verb. *Costas*, números 58, 72 y 77.

5—En toda demanda por daños y perjuicios procedentes de inejecución de obligaciones de hacer, hay que comprobar dos extremos: 1º La obligación de reparar los daños; y 2º Su existencia efectiva. Esta prueba incumbe al que afirma su existencia.

6—No procede la prescripción fundada en el art. 4038, Cód. Civ., por no tratarse de una acción posesoria, sino de una acción personal por cobro de una indemnización que tiene por causa la violación de un contrato, en cuyo caso rige el art. 4023.

7—Véase: verb. *Contrato de arrendamiento*, 1.



verbalmente una parte del predio por el tiempo que fija su contrato, responde de los daños y perjuicios que al sublocatario cause la transferencia del contrato de locación á un tercero que exija el desalojo—Civ., tom. 7, pág. 211, Ser. 5ª.

**8. Daños y perjuicios**—La sentencia que condena á una obligación de hacer no puede ejecutarse, debe deducirse acción en forma por los daños y perjuicios—Civ., tom. 7, pág. 306, Ser. 5ª.

**9. Daños y perjuicios**—Los daños y perjuicios por mora en los trabajos, no proceden si no se demuestra que es imputable al constructor—Civ., t. 7, pág. 345, Ser. 5ª.

**10ª. Daños y perjuicios**—Reconocida la existencia del daño sufrido por el pasajero, la culpabilidad de la empresa de transportes es una presunción de la ley que corresponde al reo destruir—Civ., tom. 5, pág. 78, Ser. 5ª.

**10º. Daños y perjuicios**—El pronunciamiento que deja

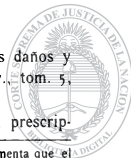
8—Se dictó sentencia condenándose al cumplimiento de un contrato de compraventa en el que se había entregado seña en garantía de su cumplimiento. Vencido el término sin darse cumplimiento á la sentencia, la parte vencedora pidió se librara mandamiento por la seña y las costas del juicio. Se resolvió que la ejecución procedía por las costas pero no por la seña, pues ésta debía ser materia de una acción separada de daños y perjuicios.

9—Es de precepto legal que el actor debe producir la prueba sobre los hechos ó alegaciones que fundan su demanda y fueran negados por el reo; del mismo modo que éste debe probar los que constituyan su defensa, deduciéndose de la regla general de que al que afirma una cosa es á quien corresponde acreditarla y no al que la niega. Tal es la doctrina aceptada por todos los prácticos, la que ha sido consagrada por la ley y la jurisprudencia desde el derecho romano—Ley 3ª, tit. 14, Part. 3ª, y 1ª del Digesto.

10ª—Art. 184 del Cód. de Com.

10º—Porque esa indemnización es de precepto legal—Art. 2356 del Cód. Civil.





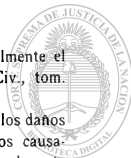
á salvo los derechos del reivindicante por los daños y perjuicios causados, no causa agravios—Civ., tom. 5, pág. 37, Ser. 5ª.

### 11. Daños y perjuicios.—El término para la prescrip-

11.—La Cám. al resolver esta cuestión dijo: «Se argumenta que el término de un año establecido por el art. 4037 del Cód. Civ. para la prescripción de la responsabilidad civil que se contrae por injuria ó calumnia, como la de daños causados por animales ó por delitos ó cuasi-delitos, debe contarse desde el momento en que se produjo el hecho generador de la obligación, deduciéndose de aquí que la acción de los demandantes se encuentra prescrita, desde que fué deducida en 7 de Junio de 1890, es decir, después de vencido el año de ocurrido el hecho que la motivó, y que, como queda espresado, tuvo lugar en 13 de Junio del año anterior. La sentencia, ocupándose de esta escepción, establece que cuando la ley dice «prescribese igualmente por un año», hace referencia á las disposiciones consignadas en los artículos anteriores, y que esas palabras equivalen á estas otras: «prescribese del mismo modo por un año.» El Código en los arts. espresados, anteriores al 4037, dispone que la prescripción principia á correr desde que el hecho generador se produjo ó desde que llegó á conocimiento del acreedor, por que de otra manera no cabe el abandono en cuya presunción se basa el principio jurídico de la prescripción, y que ésta es, en fin, la doctrina razonable en la materia, que se encuentra en la Ley 22, tit. 9º, Part. 7ª, que el Codificador cita como fundamento de su disposición. Esta opinión del Inferior consagra la verdadera doctrina y la interpretación razonable y lógica que debe admitirse con relación al tiempo desde que comienza á correr la prescripción establecida por el art. 4037 citado. De no ser así, se llegaría forzosamente á la conclusión de que, la prescripción limitada de un año ha podido correr no solo contra el ignorante del daño causado á su persona ó á sus bienes, sino también contra aquel que se encontraba en la absoluta imposibilidad de ejercitar sus derechos. Semejante conclusión sería indudablemente contraria á la doctrina que acreditan los autores y á los precedentes establecidos desde el derecho romano, recordados por Gregorio López en su comentario á la Ley de Partida, concordante con el art. 4037 citado. No es menos espreso García Goyena en sus concordancias del Cód. Civ. español. Comentando el art. 1976 de su Proyecto, indicado como una de las fuentes en que se ha inspirado el art. 4037 de nuestro Cód., menciona el art. 1677 del

ción del derecho á exigir indemnización de daños y perjuicios causados por un delito del derecho civil, solo em-

Cód. de Vaud, según el cual las acciones por daños é intereses se prescriben por un año á contar desde el día en que se conoció el daño. El Cód. austriaco que señala el término de tres años, y después de relacionar la materia de la responsabilidad civil de que se trata, establece que el término debe contarse desde que lo supo el agraviado. Esta era la opinión más común, dice, fundada en el derecho romano y patrio: «el año debía ser útil, no bastaba el continuo.» Pothier, con su estilo claro y con la erudición que distingue á todas sus obras, tratando este mismo punto, propone esta cuestión: ¿Desde qué tiempo y contra quién corre la prescripción? «El tiempo de la prescripción, dice, empieza á correr desde el día que el acreedor pudo haber entablado la demanda, puesto que no puede tachársele de descuido mientras no ha estado en su mano intentarla, y de ahí toma origen el axioma: *Contra non valentem agere nulla currit prescriptio*»—Pothier, Tratado de las obligaciones, § 680. No es menos espresa y terminante la opinión del Dr. Segovia en su esplicación del art. 4037 en cuestión, con relación al término desde el cual debe contarse la prescripción. «Entendemos, dice, que este plazo se contará desde que la injuria y su autor fueran conocidos ó pudieran serlo—argumento de los arts. 2496, 4035, 4036 y nota 39. Desde que lo supo el agraviado, dice el art. de Goyena. Parece que lo mismo debería decirse de los demás delitos y cuasi-delitos.» Y bien, después de estas opiniones, que son sin duda autorizadas, parece innecesario abundar en otras consideraciones para llegar á la misma conclusión á que arriba el Inferior, máxime si se tiene presente la naturaleza de esta escepción opuesta por la empresa demandada, y por los fundamentos de este medio de defensa establecidos por la ley. Consta en autos que el hecho que ha dado base á la acción deducida, tuvo lugar en 23 de Junio de 1889. Consta, asimismo, que cuando se produjo ese hecho, los demandantes se encontraban en España; y finalmente, que su demanda la promovieron en 7 de Julio de 1890. Por consiguiente, dada la imposibilidad absoluta en que se encontraban de conocer la muerte de su hijo, la distancia que los separaba del lugar del suceso los Trib. ante los cuales debían ocurrir á ejercitar sus derechos, y dado en fin, el tiempo que necesariamente tenían que emplear para esto, es fuera de duda que esa demanda ha sido entablada antes del término de la prescripción, y por consiguiente, que ésta no se ha operado.»



pieza á contarse desde la fecha en que materialmente el hecho llegó á conocimiento del reclamante—Civ., tom. 5, pág. 54, Ser. 5ª.

12. **Daños y perjuicios**—La indemnización de los daños y perjuicios, debe ser proporcionada á los gastos causados y á lo que el lesionado haya dejado de ganar durante el tiempo de imposibilidad para el trabajo—Civ., tom. 5, pág. 78, Ser. 5ª.

13. **Daños y perjuicios**—Justificada la culpa ó negligencia del demandado, procede la acción por daños y perjuicios—Civ., tom. 5, pág. 303, Ser. 5ª.

14. **Daños y perjuicios**—Debe desecharse con costas, la acción de daños y perjuicios fundada en el deterioro de la finca locada, si no se justifica plenamente su estado cuando empezó la locación—Civ., t. 5, p. 319, Ser. 5ª.

15. **Daños y perjuicios**—Aun cuando por sentencia se

---

12—Así lo tiene resuelto la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 5º, verb. *Daños y perjuicios*, 36.

13—Arts. 902 y 1109 del Cód. Civ.

14—Al resolver esta cuestión la Cám. dijo: «Se ha discutido una cuestión de hecho, en la que ha sido vencido el demandante por la insuficiencia de su prueba, y como en autos no existe ningún antecedente ó circunstancia demostrativo de su razón probable para litigar, pienso que el Inferior debió aplicar la regla establecida en el art. 221 del Cód. de Proc.»

15—El demandado se había presentado pidiendo que *bajo su responsabilidad* se ordenase un embargo preventivo en bienes del actor, suficientes á cubrir la suma de 914 pesos, que según sus libros le adeudaba; espresando, con tal motivo, que siendo él y el demandado comerciantes y temiendo que éste tratara de evadir toda responsabilidad, burlando los resultados del juicio, pedía aquella medida, previa compulsas de sus libros comerciales, los que se encontraban conformes con la cuenta que presentaba. El embargo fué decretado de acuerdo con lo solicitado, y después de sustanciado el juicio respectivo, se declaró en definitiva que el actor tan solo era deudor de 13 pesos, rechazándose en lo demás la acción deducida, de acuerdo con lo establecido por la

declare indebido el embargo preventivo, debe justificarse que fué pedido con dolo para que pueda prosperar la acción de daños y perjuicios—Civ., t. 10, p. 268, Ser. 6ª.

16. Daños y perjuicios — Las demandas por daños y per-

Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª. Esto es lo que resultaba de un expediente que se agregó, de cuyos antecedentes hizo mérito el actor para pedir la condenación del demandado al pago de los daños y perjuicios que decía haber sufrido á consecuencia de aquel pleito y embargo de sus bienes, contra el que protestó en el acto de trabarse. ¿Procedía esta demanda? ¿Estaban obligados los demandados á la reparación del daño que puedan haber causado como consecuencia de las medidas de seguridad que solicitaron y que no justificaron? La cuestión fué resuelta negativamente por la mayoría, sosteniéndose: que en el caso de Larronde con Descours—fallo de 18 de Abril de 1895—análogo á éste, se sostuvo la doctrina de que debe mediar si no dolo, por lo menos culpa ó imprudencia bien calificada por parte del embargante, para que pueda ser pasible de una acción de daños y perjuicios por causa del embargo. El art. 1109 del Cód. Civ. consagra claramente esta solución. No se demostró que los demandados hubiesen procedido con culpa ó imprudencia al solicitar y obtener el embargo que había dado margen al juicio. La regla predominante en casos coma éste, es que el que usa de su derecho á nadie daña. *Damnun ne facit qui jure suo utitur*—art. 1071, Cód. Civ.—En consecuencia, el actor carecía de acción para reclamar daños y perjuicios.

16—Esta resolución fué dictada aceptando *los fundamentos* del Fiscal de la Cám. Dr. Marengo, y por unanimidad de votos. Se dijo que estas demandas tienen su fundamento principal en los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civ., por los que se establece que todo el que ejecuta un hecho que por su culpa ó negligencia ocasiona un daño á otro, está obligado á la reparación del perjuicio, y que esa obligación se estiende á los daños que causaren los que están bajo su dependencia ó por las cosas de que se sirve. La Ley de ferrocarriles ha podido repetir alguna de estas disposiciones y aun reglas de precaución que, infringidas, induzcan negligencia ó culpabilidad, pero nunca ha podido tener el propósito de sacar del derecho común las responsabilidades generales que la imprudencia ó la culpa llevan consigo. El Dr. Pizarro, como Juez de 1ª Inst., había resuelto la cuestión en el sentido de la incompetencia de los Trib. ordinarios, fundándose en que estas demandas se fundan en infracciones de la Ley Nacional de ferrocarriles de 18 de

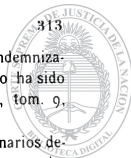


juicios contra una empresa de ferrocarril, corresponden á la jurisdicción ordinaria—Civ., t. 10, p. 386, Ser. 6<sup>a</sup>.

**17. Daños y perjuicios—**Corresponde á la jurisdicción

Set. de 1872, y tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad que ella impone por los perjuicios ocasionados por culpa ó negligencia de sus empleados en el desempeño de sus funciones. El caso está, por consiguiente, especialmente regido por esa ley, desde que se trata de su interpretación y aplicación. El conocimiento y decisión del pleito corresponde, entonces, á los Trib. federales, de acuerdo con lo que dispone el art. 2º, inc. 1º de la Ley de 14 de Set. de 1863. No es un obstáculo para que el juicio corresponda al Fuero federal, la circunstancia de que se trate de responsabilidades que nacen del derecho común, pues todos los derechos y obligaciones en general, reconocen ese mismo origen sin perjuicio de su reglamentación por leyes especiales que, como en este caso, determinan una jurisdicción también especial. Esta es también la doctrina y jurisprudencia establecidas por la S. C. Federal en los casos que se registran en el tom. 11, págs. 260 y 267, Ser. 3ª de sus fallos. A pesar de esta bien fundada sentencia del Juez Pizarro, la Cám. con el desparpajo que la caracteriza se pronunció en sentido contrario, sin aducir un solo fundamento de su propia cosecha. Como el Dr. Pizarro desempeñó después el cargo de Fiscal de la Cám. hizo que se reformara esta jurisprudencia equivocada, siendo hoy doctrina sentada por ese Tribunal que estos asuntos son de competencia de los Tribunales federales.

17—Se demandaba la indemnización de daños y perjuicios que se decían causados en la persona de un hijo menor de edad del actor, por la negligencia de los conductores de un coche de tramway. Ahora bien, el art. 1109 del Cód. Civ. impone la obligación de reparar el perjuicio á todo aquel que por hecho imputable á su culpa ó negligencia causar un daño á otro, y agrega que esa obligación es regida por las disposiciones relativas á los delitos del derecho civil. Fundado en esa prescripción es que el demandante ejercita el derecho que le acuerda el art. 1113. Siendo esto así, la escepción de incompetencia es improcedente, porque en la acción no se pretendía la imposición de una pena corporal como consecuencia del hecho que le servía de base, y en cuyo único caso sería del resorte de los jueces del crimen el aplicarle ó no. Por otra parte, de los términos de los arts. 495 y 496 del Cód. de Proc. Crim., se desprende que cuando hay acusador particular y éste ha reclamado conjuntamente con la aplicación de la pena la in-



civil el conocimiento de las demandas por indemnización de daños y perjuicios, si el demandante no ha sido acusador ante la jurisdicción criminal — Civ., tom. 9, pág. 108, Ser. 6<sup>a</sup>.

18. **Daños y perjuicios**—Los tribunales ordinarios deben conocer en los juicios contra ferrocarriles, por indemnización de daños y perjuicios— Civ., tom. 9, página 228, Ser. 6<sup>a</sup>.

19. **Daños y perjuicios**—Debe desecharse la excepción de incompetencia, si se demanda la indemnización civil del daño por el que no ha sido parte en el juicio criminal —Civ., tom. 8, pág. 358, Ser. 6<sup>a</sup>.

20. **Daños y perjuicios**—Cualquier que sea el monto de la indemnización por daños y perjuicios que demande el damnificado, solo puede acordársele la suma en que los estime al ceder sus derechos á un tercero—Civ., tom. 8, pág. 58, Ser. 6<sup>a</sup>.

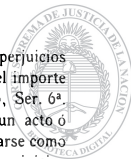
21. **Daños y perjuicios**—Procede el juramento estimación del daño causado, los jueces del crimen son competentes para pronunciarse sobre la responsabilidad civil; pero esto no implica que para la reparación de todo daño emergente de un delito ó cuasidelito tengan competencia exclusiva los referidos jueces. Observando lo dispuesto en los arts. 25 y 31 del mismo Cód., se ve que aquella competencia es de excepción, pues en ninguno de los casos se establece que la jurisdicción criminal ordinaria de los Trib. de la Cap., se estienda al conocimiento de los juicios que se promuevan por daños y perjuicios provenientes de un delito.

18—Este caso fué resuelto en un todo, de acuerdo con el núm. 16. La Cám. oíra vez revocó el auto de 1<sup>a</sup> Inst. del Juez Garay que se declaró incompetente; no se adujo un solo argumento propio para fundar la revocatoria.

19— Véase la nota del núm. 17.

20—Véase el verb. *Cesión*, 5.

21—Se comprobó tan solo en parte los perjuicios sufridos, siendo en este caso de aplicación el art. 220 del Cód. de Proc.



torio, si justificada la existencia de daños y perjuicios emergentes de un acto ilícito, la prueba sobre el importe no permite determinarlos—Civ., t. 8, pág. 66, Ser. 6<sup>a</sup>.

22. **Daños y perjuicios**—La inexistencia de un acto ó un hecho que jurídicamente no puede clasificarse como ilícito, hace improcedente la acción de daños y perjuicios—Civ., tom. 8, pág. 96, Ser. 6<sup>a</sup>.

23. **Daños y perjuicios**—La falta de cumplimiento á una

---

22—Falta á la demanda su base primordial, esto es, la existencia legal de ese acto ó de ese hecho, sin el cual no hay daño reparable en derecho, de acuerdo á los términos del art. 1109 del Cód. Civ. y sus concordantes.

23—Se trataba de los daños y perjuicios causados á una casa de negocio por la supresión del gas. No fué materia de discusión que entre el actor y la compañía, existió un contrato por el que ésta debía suministrarle el gas requerido para la iluminación del negocio de aquél. Estuvieron también conformes las partes en que la empresa privó del gas al negocio del actor; pero no así en cuanto á las causas que motivaron la actitud de la empresa, pues ésta manifestó al contestar la demanda, que había procedido en el sentido espresado porque el actor no quiso entregar la garantía de 100 pesos moneda nacional que le exigió para continuar suministrándole el gas, mientras el demandante lo atribuía á que se le exigía que le abonase el gas que debía el Teatro Onrubia, no obstante ser su negocio completamente independiente del recordado teatro. Las empresas no están autorizadas para cortar el gas á sus consumidores, ó que de estarlo no se demostró el derecho para proceder así. Es de observar, que el demandado al contestar la demanda explicó su actitud manifestando que privó de gas al demandante, porque éste no le entregó la garantía de cien pesos moneda nacional que le exigió en razón de que el negocio del actor era una dependencia del Teatro Onrubia, que se hallaba muy atrasada en el pago del gas. El convenio respecto á la garantía, no se demostró en juicio, pues al contrario, aparecía desautorizado por un documento exhibido, que no lo mencionaba y que demostraba que la compañía contrató con el actor, con prescindencia de la empresa del Teatro Onrubia.» Ahora bien; si la empresa demandada no ha estado autorizada para proceder como procedió, si no demostró tampoco su derecho respecto á la garantía que exigía al demandante, en razón de que su negocio era una dependencia

obligación de dar, sin causa justificada, obliga á resarcir los daños y perjuicios causados—Civ., t. 8, p. 179, S. 6ª.

24. **Daños y perjuicios**—El conocimiento de la acción de daños y perjuicios por la indebida declaratoria de quiebra, corresponde á la jurisdicción comercial—Civ., tom. 8, pág. 299, Ser. 6ª.

25. **Daños y perjuicios**—Declarada indebida la venta judicial de muebles, el culpable debe reponer otros igua-

del teatro, que se encontraba atrasado en el pago del gas, y si por el contrario esta afirmación aparecía desautorizada con la prueba que arrojaba el documento mencionado, parece por demás claro el legítimo derecho que asiste al actor para responsabilizar á la empresa por los perjuicios que le haya causado con ese proceder á todas luces arbitrario. Lo contrario importaría dejar establecido que las empresas, pueden por sí y ante sí despojar á sus deudores de lo que ellos consideran corresponderles, y constituirse en jueces de sus propios actos, suprimiendo de hecho la acción de la justicia encargada de dar á cada uno lo que es suyo. Llevada la cuestión al punto de vista estrictamente legal, y acreditada como una verdad plenamente demostrada, los hechos alegados por el actor, ó sea la existencia del contrato que tenía con la empresa para la provisión de luz para su negocio, y el arbitrario proceder de esta empresa al privarle de esta luz, no puede desconocerse el derecho para pedir la indemnización sobre los perjuicios causados. Se trataba de una obligación contraída por la empresa demandada para la provisión de la luz de gas al negocio que tuvo el demandante, obligación que debe considerarse dentro de lo dispuesto por el art. 574 del Cód. Civ., y que por la violación de esta obligación por parte de la empresa, se hizo responsable de los perjuicios que se hubieran causado.

24—Se trata de un caso que por excepción se encuentra regido por el art. 1401 del Cód. de Com., correspondiendo en consecuencia su conocimiento á los tribunales de aquel fuero—art. 62 de la Ley. Org. de los Trib. de la Cap.

25—Un ejecutante fué nombrado depositario de algunos bienes embargados, los que después se vendieron en remate. Declarado improcedente el embargo se ordenó la devolución, lo que no fué posible á causa de su venta. Se resolvió, como lo establece el sumario, fundándose en los arts. 2204 y 2210 del Cód. Civ.





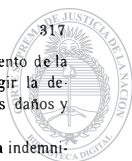
les ó responder por los daños y perjuicios ocasionados—Civ., tom. 7, pág. 14, Ser. 6<sup>a</sup>.

26. **Daños y perjuicios**— Si los daños y perjuicios se rigen por la ley comercial, el conocimiento del litigio corresponde á dicha jurisdicción—Civ., t. 7, p. 143, S. 6<sup>a</sup>.

27. **Daños y perjuicios**—La falta de cumplimiento de la

26— Los daños y perjuicios cuya indemnización se reclamaba, tuvieron su origen en actos exclusivamente regidos por la ley comercial, estándolo igualmente sus consecuencias, según lo dispuesto en la 2<sup>a</sup> parte del art. 1401 del citado Cód. También el art. 62 de la Ley Org. de los Trib. de la Cap., así lo determina.

27—La demanda se dirigió á obtener del demandado, la devolución del precio de un terreno vendido por este último al actor, con más los intereses devengados desde la fecha del otorgamiento del boleto y las costas del juicio, en razón de haberse dejado sin efecto aquella venta. Se espresó que no habiéndose determinado ese precio en el boleto en que fué convenido el contrato, y no conociéndolo tampoco el demandante debía deferirse su fijación á su juramento dentro de la cantidad que al efecto se estableciera, con arreglo á lo preceptuado por el art. 220 del Cód. de Proc. Sustanciado el juicio, el Inferior procedió á resolverlo en definitiva, ordenando la devolución del precio reclamado que debía ser fijado por las peritos que debían nombrar las partes, según bases que allí se establecieron y que debían también pagarse al demandante á título de daños y perjuicios los intereses devengados desde la fecha del contrato convenido en el boleto, á estilo de banco. Ahora bien, ¿cuál era el precio del terreno? El actor declaró que lo ignoraba. Es de observarse que en el boleto no se espresaba el precio del terreno vendido. «El precio de esta venta, decía testualmente el vendedor, es reservado, pero reconozco haberlo recibido en efectivo del comprador.» Partiendo de esta base y teniendo presente las posiciones absueltas, el Inferior declaró que debía ser fijado por peritos que nombrarían las partes, tomando como máximum y mínimum de tasación la cantidad de 8 y 10 pesos por metro cuadrado, porque si bien es cierto que no se estableció el precio por el que se verificó la venta, esto no autoriza la petición de la demanda en cuanto á su fijación por medio del juramento estimatorio, en razón de que aquel precio no son los daños y perjuicios que es lo que podía fijarse en la forma indicada, y porque de las posiciones aparecía que el precio pagado por el vendedor variaba entre 8 y 10 pesos. No resultaba claramente del testo de



sentencia que condena al vendedor al otorgamiento de la escritura pública, permite al comprador á exigir la devolución del precio pagado y sus intereses, ó los daños y perjuicios—Civ., tom. 7, pág. 206, Ser. 6ª.

**28. Daños y perjuicios**—Para que proceda la indemnización de daños y perjuicios, debe justificarse la culpa ó negligencia del demandado—Civ., t. 7, p. 324, S. 6ª.

**29. Daños y perjuicios**—Aun cuando el embargo se haya trabado sobre bienes entregados por el ejecutado como de su propiedad, el ejecutante es responsable de los daños y perjuicios, si aceptándolos pidió su cumplimiento y se opuso á la acción del tercerista—Civ., tom. 7, pág. 350, Ser. 6ª.

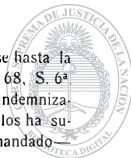
**30. Daños y perjuicios**—La acción por pérdidas é in-

---

la demanda, que los daños y perjuicios consistiesen en los intereses, pero era incuestionable que el demandante pudo limitar á ellos su acción y aun renunciar á su ejercicio. Pero sea lo uno ó lo otro, y resistido por el deudor el cumplimiento de la promesa, es evidente que el actor puede querrellarse directamente por devolución de lo pagado y prescindiendo de las pérdidas é intereses. Ciertó es que esta última acción es la única que le competía en el caso de resolución, según la doctrina del art. 1187 del Cód. Civ., pero su ejercicio no es excluyente del derecho que pueda asistir al acreedor por razón de otras prestaciones estrañas al perjuicio mismo que resulte ó pueda resultar de aquella resolución. No parece que pueda argumentarse con el precepto del art. 1413.

28—Art. 1109 del Cód. Civ.

29—El propietario de unos bienes embargados, inició tercería de dominio sobre ellos en una ejecución seguida, alegando que aquellos bienes eran de su exclusiva propiedad, como lo justificaría oportunamente. Conferido traslado de esta tercería al ejecutante y al ejecutado, espuso el primero, que él no había solicitado ningún embargo directo, que era el ejecutado quien había manifestado que los bienes embargados eran suyos y los había entregado á embargo, espontánea y deliberadamente; que si lo embargado era del ejecutante ó del tercerista resultaría de la prueba que respectivamente presentaran. El ejecutado



tereses que nace de un delito, debe reservarse hasta la terminación del juicio criminal—Civ., t. 6, p. 68, S. 6ª

31. **Daños y perjuicios**—Al que demanda su indemnización, corresponde justificar que efectivamente los ha sufrido y que han sido debidos á culpa del demandado—Civ., tom. 6, pág. 290, Ser. 6ª.

32. **Daños y perjuicios**—Aun cuando por sentencia ejecutoria se responsabilice, al deudor de una obligación de hacer, por los daños y perjuicios, el acreedor que los exija

á su turno alegó, que los bienes eran de su exclusiva propiedad, manifestando que si ellos aparecían á nombre del tercerista, era porque había tenido varios pleitos con su esposa, y por ese medio se proponía eludir las acechanzas y persecuciones de aquélla. Sustanciado el juicio, se resolvió haciendo lugar á la tercería, porque la simulación no se comprobó, quedando evidenciado que los bienes eran de propiedad del tercerista, siendo entonces de aplicación el art. 1109 del Cód. Civ.

30—Siempre que el juicio criminal se hubiese iniciado con antelación—art. 1101 del Cód. Civ.

31—Para que prospere la acción acordada por la ley al que pretende hacer reparar un daño ó agravio, es necesario, no solamente que el daño exista, sino también que sea consecuencia de un hecho voluntario ó de una omisión imputable; porque solamente es responsable y debe indemnizar los perjuicios resultantes, el que los ha originado por su culpa, con arreglo al principio general de derecho elevado á la categoría de axioma: *sua cuique culpa nocet*—art. 1083, Cód. Civ.

32—El demandado había sido condenado por ejecutoria á otorgar, dentro de un término perentorio, escritura pública de trasmisión de dominio de una finca que había vendido. No habiéndose dado cumplimiento por la parte vencida á esta diligencia, el vencedor inició demanda por resarcimiento de daños y perjuicios, que apreció en una suma dada. Cualquiera que sea el punto de vista en que deba considerarse esta acción con referencia á su procedencia y á los derechos preconstituídos que pudieran haber asistido al actor á mérito de la ejecutoria recordada, es incuestionable que *ante omnia* debió justificar la existencia del daño, por cualquiera de los medios autorizados por derecho. Porque no basta que se tenga derecho á exigir el pago de daños y perjuicios, es necesario que estos existan, como se ha dicho en el núm. precedente.

debe justificar en qué consisten y su monto—Civ., tom. 5, pág. 134, Ser. 6<sup>a</sup>.

33<sup>a</sup>. **Daños y perjuicios**—Aunque exista sentencia ejecutoriada que condene al pago de daños y perjuicios, el embargo preventivo no procede mientras no haya suma líquida determinada—Civ., tom. 5, pág. 233, Ser. 6<sup>a</sup>.

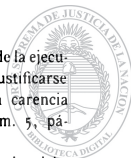
33<sup>b</sup>. **Daños y perjuicios**—No procede embargo preventivo contra el padre, si las sentencias que condenan á pagar daños y perjuicios solo mencionan al menor—Civ., tom. 5, pág. 233, Ser. 6<sup>a</sup>.

34. **Daños y perjuicios**—Para que el tercerista vencido

33<sup>a</sup>—Art. 3443 del Cód. Civ.

33<sup>b</sup>—No procede el embargo preventivo contra el padre, porque no es éste el condenado sino el hijo, quien puede tener algunas escepciones que oponer sobre su responsabilidad en los actos producidos por el menor que ha dado lugar á la condenación.

34—El actor seguía una ejecución contra un deudor suyo, en la que hizo embargar un carruaje con sus correspondientes caballos, que fueron materia de una tercería de dominio promovida por el demandado. Terminada la tercería, con declaración de que los bienes embargados eran del deudor, se procedió á la venta, cuyo producto no alcanzó á cubrir íntegramente el crédito ejecutado. «La tercería, decía el actor, obstruyó la ejecución, dando lugar á la depreciación del bien embargado, y evitando que pudiera ampliarse la traba.» Fundado en estos únicos antecedentes, pretendía que el tercerista fuese responsabilizado por el saldo de la ejecución. Recibida la causa á prueba, el actor se limitó á justificar la existencia de la tercería y su resultado adverso al tercerista, así como que la venta de los bienes embargados no alcanzó á cubrir el crédito ejecutado. Respecto á la depreciación y á la imposibilidad de ampliación de la traba, no se produjo ni se intentó la mínima comprobación. La falsa posición que el actor se creó con los hechos articulados en su demanda y la absoluta carencia de prueba al respecto, lo llevó en su alegato á modificar los fundamentos de su acción, que ya no reposaban en la depreciación de los bienes embargados é imposibilidad de mejorar el embargo, sino en los mayores gastos judiciales y acumulación de intereses que la tercería ocasionó. Como los juicios deben resolverse de acuerdo con lo que



pueda ser responsabilizado por el saldo deudor de la ejecución, en calidad de daños y perjuicios, debe justificarse la depreciación de los bienes embargados y la carencia de otros para ampliar el embargo—Civ., tom. 5, página 309. Ser. 6ª.

35. **Dados y perjuicios**—La concurrencia de culpa debe ser tenida en cuenta al fijar la indemnización por daños y perjuicios—Civ., tom. 5, pág. 314, Ser. 6ª.

36. **Daños y perjuicios**—El autor del delito de violación de domicilio, es responsable de los daños y perjuicios que haya causado—Civ., tom. 5, pág. 360, Ser. 6ª.

37. **Daños y perjuicios**—La Municipalidad que al fijar

---

es materia de la litiscontestación—arts. 108 y 216 del Cód. de Proc.—no hubo porque preocuparnos de los nuevos hechos alegados con posterioridad; pero aun cuando así no fuera, ellos no alterarían las conclusiones legales que el caso impone, desde que no se demostró que esas otras causales de daño debieran imputarse exclusivamente al tercerista, pues bien pudo ser el resultado de las artimañas del ejecutado y producirse con ó sin la intervención de extraños. Eu resumen: no habiéndose comprobado que la tercería ocasionara la depreciación de los bienes embargados, y mucho menos que obstara al ejercicio del derecho acordado por el art. 533 del Cód. de Proc., y no existiendo en consecuencia, elementos para determinar la responsabilidad del demandado, correspondía su absolución de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

35—Así lo consagra la doctrina. Véase: Dalloz, Códigos anotados; Laurent, tom. XX, pág. 522.

36—Este caso no puede formar jurisprudencia pues la sentencia de 1ª Inst. quedó consentida en cuanto á las responsabilidades del demandado y solo fué materia de apelación el monto de los perjuicios.

37—La sentencia del ilustrado Dr. Centeno, Juez de 1ª Inst., que fué confirmada por la Cám., decía así: «Nos son los puntos que han sido materia de la discusión del pleito y que deben ser resueltos en esta oportunidad. El primero consiste en apreciar si le asiste ó no derecho á la parte demandante para exigir indemnización de daños y perjuicios en virtud de los antecedentes ó hechos en que se funda la acción instaurada y que resultan comprobados en autos. El segundo, caso de

una línea de edificación promete la promulgación de una

existir el derecho de referencia, en apreciar cuáles son los daños y perjuicios que la parte demandada debe indemnizar y á cuánto asciende su valor. Después de examinar las constancias del expediente se observan un conjunto de antecedentes que prueban la resolución del primer punto de la litis en un sentido afirmativo. Consta, en efecto, de la prueba rendida en juicio, que habiéndose resuelto la edificación del terreno del actor, contiguo al inmueble de propiedad particular destinado á la prolongación de una calle, se solicitó de la Municipalidad la línea requerida para llevar á cabo la edificación, la que fué dada con restricción del dominio del demandante, por cuanto se le obligó á dejar 60 metros cuadrados de su terreno para que se efectuara la prolongación de la espresada calle. Se ha comprobado también, que la Mun. por intermedio de su inspector, requirió y obtuvo del demandante la construcción de la vereda en toda la extensión del frente, que el edificio tiene sobre la calle que se había dispuesto prolongar. Estos antecedentes ó hechos ocurridos, que la Mun. no desconoce, y que resultan suficientemente demostrados en juicio, constituyen el ejercicio de la facultad que la ley ha conferido á la Mun. para prolongar las calles, y caso de no prolongarla, la responsabilizan por los daños y perjuicios que con su actitud haya causado al actor. Se comprende, en efecto, que la parte demandada esté autorizada á restringir el dominio de los vecinos para llevar adelante una obra de utilidad pública, como es la prolongación de una calle, pero es bien entendido que del ejercicio de tal facultad surge un derecho para que las fincas de los vecinos tengan frente á la vía pública que ellos contribuyen á abrir, ensanchar, ó prolongar—arts. 1º y 2º de la Ley de 4 de Mayo de 1889, y ordenanza de 21 de Set. de 1885.—De no ser así, las facultades de la Mun. á este respecto serían completamente arbitrarias, con perjuicio del dominio de los particulares, que lejos de estar autorizadas por disposición legal alguna son repugnantes á la ley misma y á toda razón de orden jurídico. Pero la Mun. pretende desligarse de la responsabilidad que se le atribuye, manifestando que no ha faltado á ningún compromiso con el actor ni ha practicado acto ilícito alguno de donde pudiera motivarse su responsabilidad. Este razonamiento es equivocado. Es cierto que la Intendencia está autorizada para abrir, ensanchar, ó prolongar las calles cuando lo juzgue oportuno, en la forma ó de la manera que lo prescribe la ley; pero también es cierto, que cuando da principio de ejecución á esa facultad, exigiendo al propietario que se desprenda de parte de su terreno, requiriéndole á que construya la vereda de la calle



vía pública, es responsable de los daños y perjuicios que se causen al propietario, si no cumple su promesa mediante la espropiación del terreno necesario—Civ., tom. 4, pág. 116, Ser. 6<sup>a</sup>.

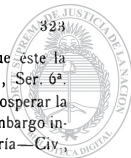
38. **Daños y perjuicios**—El locatario debe devolver al locador el predio arrendado en perfecto estado de uso, siendo de su cargo los daños y perjuicios que le irrogue por su falta de cumplimiento á esta obligación—Civ., tom. 3, pág. 258, Ser. 6<sup>a</sup>.

39. **Daños y perjuicios**—Debe rechazarse la acción de daños y perjuicios por falta de entrega de la finca, si de

que va á prolongar, y aun imposibilitándole á que haga la construcción en toda la estensión de su terreno, queda la Mun. obligada á garantizar al vecino el beneficio ó el derecho que surge de la ley, cual es, el que su finca tenga frente á la calle que se trata de prolongar. El ejercicio, pues, del derecho que la ley confiere á la parte demandada, lo coloca en la obligación de llevar adelante su proyecto, y para el caso de inejecución de esa obligación de hacer, debe reparar las pérdidas é intereses correspondientes. Tan es exacta la veracidad de lo espuesto, que la Mun. misma así parece haberlo entendido, porque de no reconocer que el actor tenía ya derecho adquirido á que su finca tuviese frente á la proyectada calle, no le habría cobrado el impuesto á que alude la boleta presentada. Es erróneo entonces, que no haya mérito para la indemnización de daños y perjuicios como lo pretende la Mun., porque de no poder prolongar la calle ó hasta tanto no tener la seguridad de llevar á cabo el proyecto que se había forjado, debió abstenerse de afectar el dominio del actor á objeto de ejercitar su acción en oportunidad dentro de los preceptos de la ley que rige la materia, esto es, restringiendo el dominio del actor pero garantizándolo del beneficio que le reportaba esa restricción.»

38—Arts. 1559, 1562, 1565 y especialmente la última parte del art. 1556 del Cód. Civ.

39—Se trataba de un contrato de locación de obra: demandado por el pago de ella, el propietario contrademandando dijo, que el obrero no le había entregado la casa en el tiempo convenido, y fundado en este hecho demandó los daños y perjuicios. De la prueba resultó que cuando quería el dueño entraba á la casa, la abría con su llave y la



la prueba del reclamante resulta justificado que este la tenía á su disposición—Civ., tom. 3, pag. 295, Ser. 6ª.

**40. Daños y perjuicios**—Para que pueda prosperar la acción de daños y perjuicios fundada en un embargo indebido, debe existir la correspondiente tercería—Civ., tom. 2, pág. 392, Ser. 6ª.

**41. Daños y perjuicios**—Para que pueda prosperar la acción de daños y perjuicios, debe justificarse la culpa ú omisión del demandado—Civ., tom. 2, pág. 5, Ser. 6ª.

**42. Daños y perjuicios**—Para que el que ha pedido in-

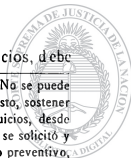
volvía á cerrar: este hecho hacía presumir que la casa estaba en poder del dueño y no del constructor.

40—La que debe deducirse en la forma prescripta por los arts. 529 á 532 del Cód. de Proc. El se disente propietario no protestó del embargo trabado en sus bienes como de pertenencia de otro en el acto de su diligenciamiento.

41—Art. 1109 del Cód. Civ.

42—El art. 1111, Cód. Civ., exime de responsabilidad al autor de un hecho por las consecuencias imputables al que las sufre. Esta misma doctrina se deduce de la teoría de la responsabilidad adoptada en el Cód. y las disposiciones de los arts. 903 y 904. Si solo son imputables al actor las consecuencias inmediatas y las mediatas, en cuanto las hubiere previsto, no puede rasponsabilizársele por los actos ú omisiones con que el perjudicado haya contribuido á agravar su situación—art. 1111, Cód. Civ.—Es un principio de jurisprudencia, recordado constantemente, que no hace daño á otro el que usa de su derecho. *Damnum non facit qui jure suo utitur*. Ese principio tiene su consagración en el art. 1071 del Cód. Civ., que prescribe que el ejercicio de un derecho propio no puede constituir como ilícito ningún acto. Con el propósito de salvaguardar sus intereses, el acreedor había solicitado y obteniendo como medida preventiva la inhibición de su deudor, en razón de no conocerle bienes determinados sobre los cuales pudiera recaer el embargo. Al proceder así, no hizo más que usar del derecho que le acordaban en el caso los arts. 443, inc. 2º, y 461 del Cód. de Proc. ¿Es posible derivar de tal proceder responsabilidad alguna para el embargado? Parece que no, pues como se ha dicho, el que usa de su derecho á nadie daña; el ejercicio de un dere-





hibición pueda ser pasible de los daños y perjuicios, debe

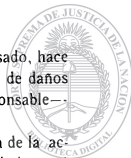
cho propio no puede constituir como ilícito ningún acto. No se puede argumentar con el art. 444 del Cód. de Proc., ni con su testo, sostener que el que ejecuta el hecho es pasible de daños y perjuicios, desde el momento que la sentencia desestima la demanda en que se solicitó y produjo la inhibición. El art. citado dice: que el embargo preventivo, en los casos que corresponda, solo podrá decretarse bajo la responsabilidad de la parte que lo solicitare, quien deberá dar caución por todas las costas, daños y perjuicios que pudiera ocasionar en caso de haberlo pedido sin derecho. Pero, ¿basta que el que ha pedido un embargo ó inhibición pierda el pleito, para que se tenga como cierto que pidió la medida indicada sin derecho? Semejante tesis parece insostenible. Que la parte que pide el embargo responde de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar cuando lo pida sin derecho, solo puede ser exacto y referirse á los casos de estralimitación que cometa el solicitante, ya sea por dolo ó por culpa ó imprudencia. Cuando se pide un embargo con evidente malicia, sin asomo siquiera de razón, con el propósito de dañar al embargado en su crédito y bienes, ó cuando por lo menos media torpeza ó imprudencia culpable de parte del embargante, se explica que responda del daño que causa su hecho. Pero cuando no ha mediado malicia y antes bien se ha procedido con toda corrección al ejercitar un derecho, no se concibe la responsabilidad preindicada. De los espedientes agregados se desprendía de un modo claro, la buena fe del ejecutante. La mala situación en que se colocó en el pleito en que se trabó la inhibición, se debió á un descuido de su representante, á no dudarlo. Hay que conciliar el derecho que los arts. 443 y 461 acuerdan al acreedor, con las garantías que se dan al al deudor — art. 444. — Para armonizar esas disposiciones se impone la interpretación que acaba de hacerse del art. 444, Cód. de Proc. Si por el hecho de ser vencido el acreedor debiera ser tenido por responsable por los daños que causa el embargo, serían poco menos que ilusorios sus derechos, puesto que éste quedaría muy coartado; al paso que el deudor tendría todas las facilidades para burlar al acreedor. La teoría de las responsabilidades por los actos libres, se halla condenada en los arts. 903, 904, 1076, 1077 y 1109 del Cód. Civ. Según estos arts., es indispensable para que surja responsabilidad, que medie dolo, culpa ó imprudencia. Así, el que pide un embargo en juicio, sin dolo, culpa ó negligencia, no incurre en responsabilidades, porque el hecho en tales condiciones solo significa el mero ejercicio de un derecho. La Ley 6ª, tit. 15, Part. 7ª, sustenta el mismo principio. La Cám. de lo

resultar que procedió con dolo y malicia—Civ., tom. 2, pág. 13, Ser. 6ª.

**43. Daños y perjuicios—La sentencia recaída en el juici-**

Civ. lo ha sostenido también en el caso de «Rogers contra Thomas», sentencia de 6 de Mayo de 1890. Hay más; estuvo en manos del actor el evitarse el daño que decía haberle irrogado la inhibición, desde que pudo depositar á la orden del juez una cantidad suficiente, ó dar caución para responder de las sumas que se le reclamaban— art. 543 del Cód. de Proc.—No haciéndolo, demostró negligencia y lo que es más, incurrió en falta, pues su deber en ese caso era presentar bienes á embargo—arts. 455 y 478 del Cód. de Proc.— Ahora bien, el art. 1111, dispone: que el hecho que no cause daño á la persona que lo sufre, sino por una falta imputable á ella, no impone responsabilidad alguna.

43—El actor demandó á una empresa de tramway, por indemnización de daños y perjuicios, procedentes de un accidente de que lo hizo víctima un coche de la empresa, fracturándole una pierna, por culpa ó imprudencia del cochero que lo guiaba. La empresa demandada no desconoció la existencia del accidente de que salió lesionado el actor; pero negó formalmente que hubiese mediado culpa ó imprudencia por parte del cochero, sosteniendo por el contrario que el hecho fué casual y que como tal no le era imputable. En torno de esa afirmación giró toda su defensa y á ella se subordinó la prueba producida. La empresa negó la culpabilidad del cochero y sostuvo como consecuencia su irresponsabilidad por los daños y perjuicios que el hecho había irrogado al actor. La defensa formulada por la empresa es de todo punto ineficaz y no puede escapar legalmente á las consecuencias del hecho de la referencia. Pruducido el accidente, se inició el proceso criminal contra el cochero por ante el Juzgado de Instrucción, quien después de terminado el sumario lo pasó al Juez Correccional, á pedido del Fiscal que no encontró probado sino un delito correccional. Recibido el proceso por éste, convocó á las partes al juicio que prescribe el art. 575 del Cód. de Proc. Crim., y después de oír al Fiscal y al defensor del reo, falló la causa, delarando probado no solo el accidente sino también la culpa ó imprudencia del cochero, y condenándolo por lo tanto á 4 meses y medio de arresto. En presencia de ese proceso criminal y de su resultado, ¿se encuentra habilitada la empresa para discutir ó contestar en el juicio civil la culpa ó imprudencia del cochero? Parece que no. En efecto, el art. 1102 del Cód. Civ. preceptúa que después de la condenación del acusado en el juicio criminal no se po-



cio criminal que declara la culpabilidad del acusado, hace cosa juzgada al tratarse de la indemnización de daños y perjuicios contra el tercero civilmente responsable—Civ., tom. 2, pág. 68, Ser. 6ª.

44. **Daños y perjuicios**—Para la procedencia de la acción de daños y perjuicios por falta de cumplimiento a un contrato de locación, es ineludible justificar la existencia del contrato—Civ., tom. 2, pág. 90, Ser. 6ª.

45. **Daños y perjuicios**—Justificada la existencia de da-  
drá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado. Entonces, pues, condenado el cochero como reo de culpa ó imprudencia por el mismo hecho que sirve de fundamento á la acción, no es admisible la impugnación que la empresa hace á la culpa del condenado. Declarado culpable el cochero por la sentencia ejecutoriada de la referencia, la discusión no podía versar en el juicio civil sino sobre la existencia del daño y sobre su monto, puesto que aquel fallo comprende también la condena de pagar daños y perjuicios, pero nunca acerca de la culpabilidad del cochero, desde que había cosa juzgada sobre el particular. Haciendo la filosofía, de la influencia sobre el juicio civil, de la sentencia pronunciada en el juicio criminal, el Dr. Vélez se espresa en estos términos en la nota al art. citado: «¿Cómo admitir á la inversa que aquel que después de una defensa hecha con toda la libertad y con todas las garantías que la ley concede, ha sido solemnemente condenado como autor de un delito, pueda después ante un tribunal civil sostener y llegar á establecer legalmente que el hecho no ha existido, ó que no le es imputable? Esto sería un escándalo jurídico, contrario á la razón y á la verdad que debe suponerse en los juicios concluidos.» La transcripción precedente condensa elocuentemente la razón del art. 1102 antes citado. Justificada la culpabilidad del cochero, la responsabilidad de la empresa no se discute—arts. 1109 y 1113, Cód. Civ.

44—El hecho capital del pleito es la existencia del contrato, sea para reclamar su cumplimiento, sea para derivar de su incumplimiento la acción de daños y perjuicios.

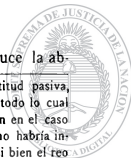
45—El accidente se produjo por culpa del cochero de una empresa de tramways, ésta fué declarada responsable de las consecuencias, debiendo indemnizar á la víctima el daño causado, conforme á lo que disponen los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civ. ¿Cuál es la importancia

ños y perjuicios y la culpa del demandado, corresponde á los tribunales la fijación del monto de la indemnización, teniendo en cuenta la condición social y medios de vida del damnificado—Civ., tom. 2, pág. 217, Ser. 6ª.

**46. Daños y perjuicios—**Procede la acción civil de da-

del daño sufrido por el demandante? El art. 1083 establece que toda reparación del daño debe resolverse en una indemnización pecuniaria que fijará el juez. En el caso ocurrente debería aplicarse por analogía la disposición contenida en el art. 1086, y en tal concepto la indemnización consistiría en el pago de todos los gastos de la curación y convalecencia del herido, y de todas las ganancias que éste dejó de hacer hasta el día de su completo restablecimiento. Pero el demandante no produjo prueba alguna sobre estos puntos, lo que puso al Juzgado en la necesidad de determinar el monto de la indemnización pecuniaria sin una base cierta. Teniendo en cuenta, sin embargo, el tiempo de la curación y su probable convalecencia, habiendo ocurrido el accidente el 19 de Julio y habiendo deducido el actor personalmente su demanda en 1º de Octubre, y habiendo tramitado él mismo todo el juicio, teniendo en consideración las ganancias ordinarias de las personas que como él trabajan de procuraciones, corretajes y remates á la vez; teniendo asimismo presente los gastos de asistencia médica, botica y demás consiguientes á la curación de las lesiones sufridas, según la naturaleza de éstas, el Juzgado estimó la indemnización pecuniaria que debía pagarle la empresa demandada, en la cantidad de 4000 pesos, con más las costas del juicio seguido como parte integrante de la indemnización, no obstante la excesiva estimación hecha en la demanda de los perjuicios reclamados. El juez fijó en 4000 pesos el daño causado, la Cám. lo aumentó á 8000.

46—Esta cuestión fué resuelta por mayoría. El actor demandó por indemnización de daños y perjuicios que le había causado el demandado con motivo de la prisión sufrida durante el proceso que se le siguió á consecuencia de la acusación que éste, conjuntamente con otros, le promovieron ante el Juzgado del crimen por delito de estafa, y del que salió absuelto. El demandado declinó toda responsabilidad, alegando que él no había sido el autor del arresto sufrido por el actor, sino otro querellante, quien denunció la perpetración del delito á la policía y en virtud de lo cual ésta procedió á su detención, poniéndolo á disposición del Juez del crimen, ante quien el mismo se presentó formulando la respectiva querrela y á la que el demandado no hizo

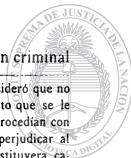


ños y perjuicios contra el acusador, si se produce la ab-

más que adherir por actos posteriores, asumiendo una actitud pasiva, abandonando por completo la prueba al otro querellante, todo lo cual constaba del respectivo proceso. Sostuvo, además, que aun en el caso de ser coautores en igual grado con el otro querellante, no habría incurrido en responsabilidad de ningún género, por cuanto si bien el reo fué absuelto, la acusación no fué calumniosa, condición indispensable para la procedencia de la acción instaurada. El Inferior en su sentencia se pronunció por la solidaridad de los demandados y por la procedencia de la acción, por cuanto, en su concepto, toda acusación improbadamente constituye calumnia y la acusación calumniosa es un delito al que se aplican las disposiciones de los arts. 1089 y 1090 del Cód. Civ. Uno de los Cam. dijo que el caso que se traía á la decisión de la Cám., era de aquellos que aparentan ofrecer grandes dificultades y que en realidad no las tiene por más que se preste á ser encarado bajo diversas fases, cada una de las cuales requiere razonamientos de diverso orden. Desde luego, tal como lo había encarado el Inferior, es evidente que no admite otra solución, en cuanto á la responsabilidad legal de los demandados. Si estos efectivamente son reos del delito de calumnia, su responsabilidad civil no puede ponerse en duda, pues los arts. 1089 y 1090 son terminantes. Pero, ¿son realmente delincuentes? La mayoría sostuvo lo contrario, fundándose en que el caso sometido á la decisión del Trib., era idéntico al que se registra en el tom. 3º, pág. 26, Ser. 3ª de la Jur. Civ., resuelto en el mismo sentido que el pronunciamiento apelado. En este caso, se resolvió que procedía la acción civil de daños y perjuicios contra el acusador si se produce la absolución del acusado en el proceso criminal, y que la falta de intención criminal y la existencia de hechos que pudieran inducirlo en error, solo deben tenerse en cuenta en el juicio por calumnia, careciendo de valor legal en el juicio civil por indemnización de daños y perjuicios. Se tuvo principalmente en cuenta los preceptos legales y la doctrina sobre los cuasi-delitos; cuasi-delito, que en este caso como en el recordado existía, desde que se había causado un daño al demandante en virtud de la imputación de un delito que con arreglo á la ejecutoria resultó falso. La minoría dijo: El juez *a quo* en un breve considerando, sin mayor fundamento que el propio acierto, declara delito de calumnia la acusación improbadamente. Es de lamentar que el Inferior, llamado á calificar, á los efectos civiles, hechos exclusivamente regidos por las leyes penales, haya prescindido en absoluto de los preceptos pertinentes, imposibilitándonos así á juzgar del acierto de la referida declaración que.

solución del acusado en el proceso criminal—Civ., tom. 2, pág. 253, Ser. 6ª.

por mi parte reputo equivocada. Con arreglo al art. 1º del Cód. Pen., concordante con el principio fundamental consagrado por el art. 18 de la Constitución, para que haya *delito* se requiere indispensablemente una infracción á leyes penales, y ¿cuál es la ley penal infringida por los demandados en el caso á que se refiere el juez *a quo*? Si hemos de atenernos á la definición que el citado Cód. dá de la calumnia—art. 177—resulta que el Inferior incurre en una petición de principio que lo conduce á un error jurídico, dando por sentado que la falta de prueba, ó prueba imperfecta del delito imputado, constituye en todos los casos en reo de calumnia al acusador, lo que es inexacto, pues la calumnia es «la falsa imputación, etc.» ó en otros términos, para que exista delito de calumnia, como en todos los demás, se requiere intención criminal en el agente, según lo enseñan la unanimidad de los maestros en la ciencia del derecho penal, entre otros *Chaveau Adolphe*, cuya opinión se transcribe en el informe de la comisión redactora del Código Pen., al hacer el comentario del mencionado art. 177. Y si bien es verdad que el art. 6º del mismo Cód. Pen., establece que «en la ejecución de hechos clasificados de delitos, se presume la voluntad criminal», no lo es menos que, en seguida agrega «á no ser que resulte una presunción contraria de las circunstancias particulares de la causa.» Luego, pues, el Inferior ha debido examinar las circunstancias particulares de la causa, para darse cabal y exacta cuenta de la voluntad criminal que se supone en los demandados, por el solo hecho de no haber comprobado las imputaciones formuladas contra el actor. Si así hubiera procedido, no habría seguramente dejado de apercibirse que todas las circunstancias alejan la presunción de dolo por parte de los acusadores, como lo ponen de relieve el malogrado Dr. Cortés y el Camarista Dr. Barra, al espedirse respectivamente en la causa que origina la presente. El acusado fué absuelto, es verdad, de la acusación formulada, pero ésta no fué declarada calumniosa ni lo habría sido seguramente, si el Trib. que conoció del proceso en ultima instancia, hubiera estado habilitado para pronunciarse al respecto. Y digo que aquel Trib. no habría pronunciado declaración semejante, desde que reconocía que «la conducta del acusado Parodi antes y después de las operaciones verificadas con los acusadores, se prestaba á una apreciación desfavorable y daba motivo aparente á la formación de la causa, aparente cuando menos porque del fondo de la causa se proyectó la sombra que ciertamente no abona mucho los buenos procederes é inocencia



#### 47. Daños y perjuicios—La falta de intención criminal

del acusado. Si, pues, el Trib. que juzgó á Parodi consideró que no podía ni debía proclamarse la absoluta inocencia del delito que se le imputaba, lógicamente se deduce que los acusadores no procedían con malicia ni ruindad por el solo propósito de difamar ó perjudicar al acusado, elementos esenciales para que la acusación constituyera calumnia, como lo enseñan *Ghaudeau Helie* en su magistral obra sobre «Teoría del Cód. Pen. Francés»—tom. 4.<sup>o</sup>, cap. final, núms. 1670 y sig.» —Más adelante agrega: «No basta que la acusación sea temeraria é indiscreta, es necesario que el denunciante sepa que ella no es fundada *calumniare est falsa crimina*. No basta que la prueba de los hechos denunciados no sea hecha, *non utique qui non probat quod intendit protinus calumniare videtur*; es necesario que el denunciante haya sido llevado por un espíritu de odio ó de venganza»—núm. 1679.—«El denunciante se encuentra justificado toda vez que haya tenido una causa *legítima* para intentar su acción. Esta causa excluye la mala fe; ha podido engañarse, pero su error no es un delito. Esta regla estaba consagrada por las Pandectas. El calumniador era absuelto si probaba que un justo error lo había movido *si quidem justum ejus errorem repererit absolvit sum. . . .* » «Se pueden considerar como causas legítimas de error, todos los indicios que han podido parecer suficientes para hacer el hecho denunciado probable. . . . » «La mala reputación de la persona que ha sido llevada á juicio puede excusar al querellante. Se puede aplicar á este caso particular una máxima de *Cicerón*, que no debe servir de regla á las presunciones del Min. Púb.: que vale más juzgar á un inocente y absolverlo que dejar de procesar á un culpable. *Si innocentes accusatus sit absolvi potest; nocens, ni si accusus fuerit condemnari non potest. Utilius autem est absolvi innocentem, quam nocentem causam non dicere*» —núm. 1680.—Y bien, si el absuelto no puede blasonar de inocente, según las espresivas manifestaciones de los magistrados que lo juzgaron; si de las constancias del proceso resultaban un conjunto de circunstancias y antecedentes que autorizaban á los acusadores para alarmarse y suponer fundadamente que el acusado trataba de infligirles un daño efectivo en sus bienes é intereses, como fué reconocido por el mismo juez de la causa al decretar su detención y posteriormente por los ilustrados funcionarios encargados del Min. Público; si por ultimo, la absolución solo ha podido obtenerla por la habilidad de su defensor y por la improba dificultad de una prueba plenísima, como surge evidente de la lectura

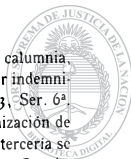
(Sigue en la pág. 331).

47—Véase la nota precedente.

y la existencia de hechos que pudieran inducir en error,

desapasionada del proceso, en presencia de todos estos antecedentes, ¿cabe presumir aún que los acusadores procedieron con intención criminal al formular su denuncia y acusación? No, decididamente no, y como sin dolo no hay delito, falla por su base la aplicabilidad de los arts. 1089 y 1090 del Cód. Civ. en que el actor é Inferior se fundan para declarar la responsabilidad civil de los demandados. En materia de denuncias ó acusaciones criminales no cabe término medio, ó es fruto de un acto doloso, calumnia, ó es el ejercicio de acciones legales que si causan perjuicios no comportan responsabilidad civil á sus actores—art. 1071.—La circunstancia de resultar improbados los hechos denunciados cuando ha habido fundamento para incurrir en error, no basta como hemos visto, para responsabilizar al denunciante ó acusador. Las consecuencias de ese error excusable, deben imputarse en todo caso al acusado, que con su conducta equívoca dió lugar á que se le procesara, y es sabido que los hechos que causan daño por falta imputable al que los sufre, no imponen responsabilidad alguna ni constituyen cuasi-delito—art. 1111.—Se tiene también en cuenta para considerar á los demandados exentos de responsabilidad por los perjuicios que haya podido sufrir el actor, la mínima, por no decir exígua participación que tuvieron en el proceso que motiva este litigio. No existe propiamente base para establecer la solidaridad, en virtud de la cual se les elije para hacer efectiva la responsabilidad civil, pues con ó sin la intervención de ellos, el proceso criminal con todas sus consecuencias se le habría seguido del mismo modo al actor. El proceso en efecto fué originado por denuncia exclusiva de otros, y los demandados no hicieron más que adherir á la acusación formulada cuando el acusado ya había sido constituido en prisión preventiva. Posteriormente asumieron una actitud pasiva, de mera expectación, y tanto, que no se les ve durante la estación de la prueba, producir, ni aun insinuar una sola diligencia probatoria. Todo lo abandonan á la iniciativa y actividad del acusador originario, como que era éste el que aparecía mayormente damnificado por los actos sospechosos del acusado. Este solo antecedente, bastaría para patentizar la irritante injusticia que se cometería, si en la hipótesis de ser procedente la acción de daños y perjuicios, se declarara á los demandados solidariamente responsables. El Inferior ha dicho en el cuarto considerando de su fallo: «Una acusación de estafa improbada, es calumnia, y la acusación calumniosa es un delito al que deben aplicarse las terminantes disposiciones de los arts. 1089 y 1090 del Cód. Civ.» Basado en este argu-





solo deben tenerse en cuenta en el juicio por calumnia, pero carecen de valor legal en el juicio civil por indemnización de daños y perjuicios—Civ., t. 2, p. 253, Ser. 6ª.

48. **Daños y perjuicios**—Procede la indemnización de daños y perjuicios contra el ejecutante, si la tercera se ha declarado justificada—Civ., t. 2, pág. 285, Ser. 6ª.

49. **Daños y perjuicios**—Para que pueda prosperar la

mento, declara responsable al demandado, de los daños que haya sufrido el acusado, en virtud de la acusación de estafa que aquéllos dedujeron contra él, y de que fué absuelto. La teoría sentada por el Inferior es que toda acusación criminal improbadamente constituye calumnia ó es calumniosa. Para terminar, quiero hacer valer una disposición legal que entiendo es aplicable al presente. El art. 496, inc. 3º del Cód. de Proc. Crim., dispone que la sentencia resolverá entre otras cosas, la calificación del carácter de la acusación, declarándola calumniosa si lo hubiere pedido al acusado. Luego, en concepto del mismo legislador, la simple absolución de la acusación hecha en un caso dado, no la constituye á esta en calumniosa, sino que es necesario que la sentencia espresamente la declare tal, y eso á condición de que lo haya pedido el acusado. La sentencia contenida en el proceso criminal agregado, no declara calumniosa la acusación que el demandado interpuso contra el actor, y por consecuencia, falta por su base el fundamento aducido por el Inferior para declarar responsable de daños y perjuicios al demandado.»

48—El derecho para reclamar daños y perjuicios por el embargo indebido de los bienes del demandante, está espresamente consignado por el art. 1109 del Cód. Civ. La imprudencia del demandado en el hecho que originó los perjuicios, el embargo de los bienes, resulta de antecedentes que obraban en el expediente respectivo; la oposición del tercerista á que se llevara á cabo por ser él el dueño de los bienes. La insistencia del ejecutante en que se efectuase el embargo á pesar de la oposición de aquél, constituye una verdadera imprudencia que lo obliga á reparar los perjuicios causados, de acuerdo con el art. citado del Cód. Civ. Esta es, por otra parte, la doctrina que ha sancionado la jurisprudencia de la Cám. de lo Civ.—véase entre otros, el fallo que se registra en el tom. 1º, pág. 381, Ser. 3ª.

49—La ley prescribe los requisitos necesarios é indispensables para que la acción sobre indemnización de daños y perjuicios sea admisible.

acción de daños y perjuicios, el demandante debe justificar su derecho á ser indemnizado—Civ., tom. 2, página 326, Ser. 6ª.

**50. Daños y perjuicios**—Si el demandado por daños y perjuicios no ha intervenido en los actos que fundan la acción, debe rechazarse la demanda sin juzgar sobre su procedencia—Civ., tom. 2, pág. 341, Ser. 6ª.

**51. Daños y perjuicios**—La concurrencia de culpa en la víctima ó sus guardadores, permite modificar el monto de la indemnización por daños y perjuicios—Civ., tom. 1, pág. 27, Ser. 6ª.

**52. Daños y perjuicios**—El dueño de un animal, es responsable de los daños que cause, los que deberán ser fijados equitativamente por los tribunales, si no existe prueba sobre ellos—Civ., tom. 1, pág. 137, Ser. 6ª.

**53. Daños y perjuicios**—Las lesiones por culpa ó ne-

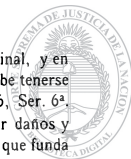
Así, el actor está obligado á comprobar, no solo el daño causado por el delito ó acto ilícito, sino también debe justificar el dolo ó negligencia, el derecho á ser indemnizado y el monto de los perjuicios.

50—Véase: verb. *Acción de daños y perjuicios*, 1.

51—De acuerdo con la doctrina sentada en otros casos. Véase: tom. 7º, pág. 289, Ser. 3ª, Jur. Civ.; y con especialidad la nota del verb. *Daños y perjuicios*, núm. 51 del tom. 5º de la Inst.

52—Art. 1124 del Cód. Civ. Aubry y Rau, tom. 4º, pág. 448, nota 10.

53—El Interior al hacer la fijación de la indemnización, entendió que el sufrimiento por las lesiones recibidas por la víctima, no es civilmente considerado un perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, dentro del art. 1068, Cód. Civ., por no ser posible la indemnización del agravio moral, el que no procede cuando se trata de simples hechos ilícitos como en el caso actual. La víctima cobraba daños y perjuicios en razón de un hecho realizado en su daño por culpa ó imprudencia imputable á la Empresa, según así quedó establecido por la sentencia. Ahora bien: la culpa ó imprudencia se encuentra definida como delito en nuestro Cód. Pen. vigente—Sección 1ª, tít. 1º; y arts. 15 al 20, tít. 3º.—Luego, las lesiones corporales y demás agravios, proceden de un delito de derecho criminal y el daño cuya indem-



gligencia, importan un delito del derecho criminal, y en consecuencia, al fijar los daños y perjuicios, debe tenerse en cuenta el agravio moral—Civ., t. 1, p. 156, Ser. 6<sup>a</sup>.

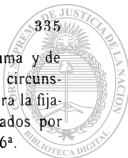
54. **Daños y perjuicios**—Al demandante por daños y perjuicios, corresponde justificar los hechos en que funda su acción—Civ., tom. 1, pág. 254, Ser. 6<sup>a</sup>.

55. **Daños y perjuicios**—En los delitos del derecho civil, no debe tenerse en cuenta para fijar la indemnización por daños y perjuicios, el agravio moral que la ley tiene en cuenta solo en los del derecho criminal—Civ., tom. 1, pág. 283, Ser. 6<sup>a</sup>.

nización se persigue tiene el mismo origen. Esto supuesto, ¿cómo sostener que en estos casos, no procede la indemnización del daño por el agravio moral? Si el hecho culpable que causó el daño á la víctima es delito del derecho criminal, es manifiesto que la indemnización debe versar no solo sobre las pérdidas é intereses, sino también sobre el agravio moral que el delito ha hecho sufrir á la actora. El art. 1068, Cód. Civ., dice: que habrá daño siempre que se causare á otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria. Y el art. 1078, establece: que si el hecho fuese un delito del derecho criminal, la obligación que de él nace, no solo comprende la indemnización de pérdidas é intereses sino también del agravio moral que el delito hubiese hecho sufrir á la persona. En el hecho de disponer el art. 1078, que la obligación que nace de un delito comprende la de indemnizar el agravio moral, ha consagrado el principio de que este último es susceptible de apreciación pecuniaria. Esta interpretación armónica de las disposiciones citadas, ha prevalecido en la jurisprudencia de la Cám. Civ., en repetidos casos, entre otros los contenidos en el tom. 6<sup>o</sup>, pág. 161, y tom. 1<sup>o</sup>, pág. 253, Ser. 4<sup>a</sup>, de los cuales surge la doctrina de que la indemnización en los cuasi-delitos, que no son más que el delito de culpa ó imprudencia definida por el Cód. Pen., procede la indemnización del daño por el agravio moral. Así, para estimar debidamente el monto del daño causado, es indispensable tener en cuenta, como elemento de juicio, el agravio moral sufrido por la misma.

54—Ley 1<sup>a</sup>, tit. 14, Part. 3<sup>a</sup>.

55—Esta cuestión no fué materia de resolución en la Cám., solo el Inferior la había insinuado en su sentencia.



**56. Daños y perjuicios**—La edad de la víctima y de los hijos, así como sus condiciones sociales, son circunstancias que los jueces deben tener en cuenta para la fijación del monto de los daños y perjuicios causados por un cuasi-delito—Civ., tom. 1, pág. 283, Ser. 6ª.

**57. Daños y perjuicios**—Si la víctima excitó al animal, el propietario no es responsable de los daños y perjuicios que debidos únicamente á su culpa, haya causado—Civ., tom. 1, pág. 423, Ser. 6ª.

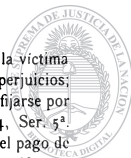
**58. Daños y perjuicios**—Los daños y perjuicios causados por la construcción de una obra por el lindero, deben ser rechazados si el accionante no justifica la propiedad del inmueble—Civ., tom. 8, pág. 25, Ser. 5ª.

**59. Daños y perjuicios**—Justificada la responsabilidad

57—Arts. 1125 y 1128 del Cód. Civ.

58—Para que proceda la obligación de reparar el perjuicio á favor del que lo reclama, es necesario que éste pruebe que se le ha damnificado en las cosas de su dominio ó posesión, ó por el mal hecho á su persona, derechos ó facultades—art. 1068, Cód. Civ.—y por lo tanto, para que pueda prosperar la acción, es indispensable que se acredite que la cosa que dice haberse deteriorado es de propiedad del actor, y desde que funda la demanda en tal derecho, este requisito es indispensable.

59—Dada la condenación, que establece la culpabilidad del demandado y la existencia del delito cometido por él, sobre lo que no puede volverse en el juicio civil, como lo dispone el art. 1102 del Cód. Civ., y justificada por otra parte, la asistencia médica que tuvo que sufrir el actor á consecuencia de las lesiones que le fueron inferidas, parece por demás claro la existencia del daño causado y el legítimo derecho para exigir su reparación. La sentencia del Inferior negó la existencia de los perjuicios reclamados, porque no constaba que el actor hubiese hecho gastos en su curación y convalecencia, ni que á consecuencia de la herida recibida hubiese dejado de obtener ganancia alguna, negando también el agravio moral causado por el delito cometido por el demandado. En cuanto á lo primero, el hecho mismo de la herida recibida, prueba que el actor tuvo necesidad de una asistencia médica para su curación, y que durante este tiempo no pudo tra-



por la sentencia recaída en el juicio criminal, la víctima tiene derecho á la indemnización de daños y perjuicios; aun cuando no justifique los causados, deben fijarse por juramento estimatorio—Civ., tom. 6, pág. 114, Ser. 5ª.

60. **Daños y perjuicios**—Para que proceda el pago de daños y perjuicios fundado en un despojo, debe justificarse plenamente que tal hecho tuvo lugar—Civ., tom. 6, página 183, Ser. 5ª.

61. **Daños y perjuicios**—Si en el juicio de interdicto se reconoció el derecho del actor, el vencido carece de base legal para fundar una acción de daños y perjuicios por la suspensión de la obra—Civ., tom. 6, pág. 189, Ser. 5ª.

62. **Daños y perjuicios**—Deben ser apreciados por el Juzgado si reconocido el derecho, es materialmente imposible justificar su monto -- Civ., t. 8, pág. 238, Ser. 5ª.

63. **Dados y perjuicioe**—Aun reconocidos de contrario, bajar. Por consiguiente, y dado que no haya tenido que gastar en su curación, no puede negarse la existencia del daño, cuando menos por lo que hace á la imposibilidad de trabajar y ganar lo necesario para su existencia y la de su familia. Todo delito hace nacer la obligación de reparar el daño, dice la ley, y éste comprende no solo la indemnización de pérdidas é intereses, sino también del agravio moral que el delito hubiese hecho sufrir á la persona, molestándola en su seguridad personal, ó en el goce de sus bienes, ó hiriendo sus afectaciones legítimas, como lo declaran los arts. 1077 y 1079 del mismo Cód., de acuerdo con una máxima de jurisprudencia universal basada en el principio de eterna justicia, *suum cuique culpa nocet*. Demostrada la existencia del daño, pero no su monto, es incuestionable que procedía el juramento estimatorio, como lo dispone el art. 220 del Cód. de Proc., y lo ha declarado la Cám. de lo Civ. entre otros fallos, en la que se registra en la pág. 396, tom. 2º, Ser. 4ª.

60—Porque ese es el hecho generador del derecho.

61—Porque esa suspensión había sido obtenida con derecho. Siendo un principio consagrado, que el que de su derecho usa á nadie perjudica.

62—Art. 220 del Cód. de Proc.

63—Resultaría siempre incierto su monto, dependiendo su liquida-

no procede embargo preventivo sin previa liquidación—Civ., tom. 6, pág. 274, Ser. 5ª.

**Daños y perjuicios**—Véase: *Accionista*, 1; *Agravio moral*, 1 y 3; *Contrato*, 1; *Acto ilícito*, 1, 2, 3, 6 y 8; *Costas*, 15, 53, 72, 75, 76 y 77; *Crédito*, 3; *Acción de daños y perjuicios*, 1; *Contrato bilateral*, 5; *Cosa juzgada*, 2; *Abolución del acusado*, 1; *Casa locada*, 2; *Contrato comercial*, 1; *Contrato rescindido*, 2; *Comprador*, 29.

**Declaración**—Véase: *Testigos*, 4 y 5; *Declaraciones*, 9.

1. **Declaraciones**—Siendo facultativa la renuncia á la declaración de un testigo, el contrario no puede exigir su presentación después de vencido el término—Com., tom. 7, pág. 159, Ser. 3ª.

2. **Declaraciones**—Deben tomarse las declaraciones de testigos después de vencido el término, si la demora no es imputable á la parte—Com., t. 8, pág. 303, Ser. 3ª.

3. **Declaraciones**—Solo pueden pedirse informes judiciales á las personas, esceptuadas por la ley, de prestar declaración—Civ., tom. 7, pág. 325, Ser. 5ª.

4. **Declaraciones**—Si la demora en las declaraciones

ción del resultado de la prueba á producirse, lo que imposibilita el cumplimiento de las prescripciones legales relativas al modo y forma en que se deben practicar los embargos—arts. 451, 471 y 475 del Código de Procedimientos.

1—Si la parte que presentó el testigo cree que lo que deseaba comprobar con él estaba ya establecido en autos, la declaración sería inútil como redundante. Por otra parte, el sumario está dentro del espíritu del art. 184 del Código de Procedimientos.

2—La Secretaría fué omisa en la notificación, dejando llegar el día de las declaraciones sin notificar á los testigos. Sin embargo, hubo asimismo desidia de parte del interesado, pues dejó pasar hasta doce días después de vencido el término de prueba, sin exigir su producción y sin solicitar la designación de nueva audiencia.

3—La disposición del art. 202 del Cód. de Proc. es taxativa.

4—Las declaraciones no se recibieron porque el juez no concurrió á su despacho.



no es imputable á la parte, debe señalarse nuevo día—Civ., tom. 10, pág. 323, Ser. 6<sup>a</sup>.

5. **Declaraciones**—Deben tomarse las declaraciones aun después de vencido el término, si la demora es imputable á la parte—Civ., tom. 10, pág. 406, Ser. 6<sup>a</sup>.

6. **Declaraciones**—El testigo rechazado por una de las partes durante la declaración, debe ser presentado inmediatamente, si la parte insiste, en caso contrario se considera renunciado—Civ., tom. 9, pág. 65, Ser. 6<sup>a</sup>.

7. **Declaraciones**—No puede citarse, á un testigo domiciliado fuera de la Capital por medio de exhorto, para que comparezca á prestar declaración—Civ., tom. 8, pág. 286, Ser. 6<sup>a</sup>.

8. **Declaraciones**—Si las declaraciones no se tomaron por falta de interrogatorio, no debe señalarse nuevo día, después de vencido el término—Civ., tom. 3, página 432, Ser. 6<sup>a</sup>.

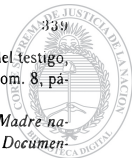
---

5—Art. 118 del Cód. de Proc., última parte.

6—Citado un testigo á declarar, el contrario se opuso á que prestara declaración, alegando que estaba impedido de hacerlo por tratarse de la misma persona que estaba sindicada como autora del adulterio que se imputaba á la esposa, pues se trataba de un juicio de divorcio. La declaración no se tomó, quedando el incidente en este estado; se ordenó después la agregación de la prueba, y entonces la parte pidió se suspendiera el alegato hasta que el incidente se resolviera. No se hizo lugar, fundándose en la manifestación hecha por la parte, y en que no habiendo sido presentado de nuevo en oportunidad el testigo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 118 del Cód. de Proc., no procedía la producción de la prueba, como asimismo teniéndose en cuenta la clase de personas presentadas como testigos, y por la naturaleza de los hechos que se discutían.

7—Se desprende del espíritu de los arts. 113, 114, 122 y 123 del Cód. de Procedimientos.

8—Hay desidia de parte, y debe aplicarse el art. 118 del Cód. de Proc. Se comprende que el término de prueba estaba vencido cuando dejó de presentarse el interrogatorio.



9. **Declaraciones**.—El error en la profesión del testigo, no basta para impedir la declaración—Civ., tom. 8, página 363, Ser. 5ª.

**Declaraciones**.—Véase: *Filiación natural*, 2; *Madre natural*, 12; *Horas*; *Término extraordinario*, 2; *Documentos acompañados*, 3.

1. **Declaratoria de herederos**.—Aun cuando se haya dictado ésta, los que han justificado ese carácter están obligados á absolver posiciones—Civ., t. 10, p. 325, S. 6ª.

2. **Declaratoria de herederos**.—Antes de ella, deben resolverse las cuestiones sobre nulidad ó validez del matrimonio—Civ., tom. 10, pág. 336, Ser. 6ª.

3. **Declaratoria de herederos**.—Los errores en la partida del Registro Civil, deben subsanarse antes de aquélla—Civ., tom. 7, pág. 98, Ser. 6ª.

4. **Declaratoria de herederos**.—Debe ser hecha á favor de la madre, en tanto no se justifique que es de las excluidas por la ley—Civ., tom. 5, pág. 236, Ser. 6ª.

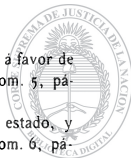
9.—Los requisitos establecidos por la ley para la presentación de testigos, son para su identificación: si á pesar de estar equivocada la profesión atribuida, puede efectuarse esa identificación, el error no puede obstar á la declaración por cuanto los propósitos de la ley se han cumplido.

1.—El interesado se había presentado como parte en el juicio testamentario acompañando la partida de bautismo y la de matrimonio de sus padres. En tal concepto, aun cuando no se haya dictado la declaratoria de herederos, es parte en todo juicio iniciado contra la sucesión en la que él se pretenda heredero, y en tal virtud está obligado á absolver posiciones. Es entendido que solo estará obligado á contestar aquellas preguntas que le sean personales.

2.—Mientras no se decida si el matrimonio tiene ó no existencia legal, no puede darse por comprobado el carácter hereditario de las personas que se atribuyen la calidad de herederas fundadas en ese hecho.

4.—La exclusión es la escepción establecida por la ley, la que debe comprobarse por quien la formula.





5. **Declaratoria de herederos** — Debe dictarse á favor de los que hayan justificado ese carácter—Civ., tom. 5, página 40, Ser. 6ª.

6. **Declaratoria de herederos** — No causan estado, y pueden ser contestadas por terceros—Civ., tom. 6, página 269, Ser. 6ª.

**Declaratoria de herederos**—Véase: *Herederos*, 9 y 10; *Alimentos*, 13; *Bienes hereditarios*; *Testamentaria*, *Padre*.

**Declaratoria de incapacidad**—Véase: *Incapacidad*, 1; *Insania*.

1. **Declaratoria de pobreza** — Debe solicitarse ante el Juez de lo civil cualquiera que sea el juez ante quien se pretenda litigar—Civ., tom. 4, pág. 16, Ser. 6ª.

**Defectos**—Véase: *Nulidad del procedimiento*, 6; *Notificación*; *De oficio*, 1 y 3; *Comprador*, 4, 5 y 16; *Embargo preventivo*, 6; *Nulidad*; *Obra*; *Propietario*; *Título*; *Compromiso arbitral*, 1; *Escepción de defecto legal*.

**Defecto legal**—Véase: *Escepción de defecto legal*, 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10; *Escepción*; *Costas*, 84.

1. **Defectos de procedimiento** — La nulidad del juicio ejecutivo, solo puede fundarse en los defectos de los procedimientos posteriores al mandamiento; las deficiencias de actuaciones anteriores no pueden afectar á la ejecución—Civ., tom. 5, pág. 354, Ser. 5ª.

5 — Establecido por pruebas legales el estado civil de las personas, como asimismo el grado sucesorio, la declaratoria es una sanción de la ley.

6 — Pueden en todo tiempo ser contestadas por terceros — arts. 3417, 3423, 3429 y 3430 del Cód. Civ.

1 — Art. 593 del Cód. de Proc.

1 — Las diligencias preparatorias no forman parte del juicio ejecutivo: son meras actuaciones tendentes á prepararlos en las que no es parte el ejecutado. No siendo parte, no puede reclamar de ellas. Reclaman cuando el juicio contencioso empieza, puede el ejecutado reclamar de cualquier vicio en el procedimiento

**Defensor** Véase: *Ausente*, 3 y 4; *Nulidad de la sentencia*, núm. 1.

1<sup>a</sup>. **Defensor de ausentes**—Aun cuando por el ejecutado haya intervenido el Defensor de ausentes, la sentencia de remate debe serle notificada por edictos—Civ., tom. 5, pág. 208, Ser. 5<sup>a</sup>.

2. **Defensor de ausentes**—La falta de comparecencia de los herederos residentes en el extranjero, hace procedente el nombramiento de defensor, si han sido debidamente citados—Civ., tom. 1, pág. 327, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Deficiencias**—Véase: *Comprador*, 21; *Remate judicial*, 12; *Excepción de falta de personería*, 12.

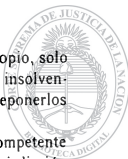
1<sup>b</sup>. **Defraudación**—La distracción de fondos del man-

---

1<sup>a</sup>—El art. 499 del Cód. de Proc. establece que «cuando el deudor no haya comparecido, la sentencia se notificará por edictos en los días durante tres días consecutivos.» La ley exige la citación por edictos, cuando el deudor no hubiese comparecido, sin distinguir si es por rebeldía ó por ausencia. No haciéndose distinción por la ley, no nos es dado hacerla, porque contrariaría la conocida regla que dice: *Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*.

2.—El caso se encuentra regido por los arts. 631, 639 y 640 del Cód. de Proc. En ninguno de ellos se establece que citado uno de los herederos y no compareciendo, debe seguirse el juicio en rebeldía, y si que ignorándose el domicilio, previa citación de edictos, debe nombrársele defensor que lo represente. No puede aplicarse por analogía el art. 433, por cuanto la notificación que debe hacerse al rebelde del auto que lo declara tal, no llegaría á su conocimiento, pues que en autos constaba que no residía en el país; la citación personal que se les haga por exhorto, reemplaza en este caso á la citación por edictos y entonces el nombramiento de defensor, es procedente.

1<sup>b</sup>—El querellante imputó al querellado el delito de defraudación previsto por el art. 202 del Cód. Pen. La intención criminal, en este delito, solo existe cuando aquel á quien se confía una suma de dinero hace uso de ella conociendo su insolvencia y sabiendo, por consecuencia, que no podía devolverla. Pero aquel que en el momento de servirse del dinero ajeno está en situación de devolverlo cuando se le reclama, faltará á sus deberes de mandatario, pero no podrá ser sospechado



dante hecha por el mandatario en provecho propio, solo puede calificarse como defraudación, si por su insolvencia tenía la convicción de la imposibilidad de reponerlos —Crim., tom. 7, pág. 396, Ser. 3ª.

1. **Delito**—El Juez de Instrucción no es competente para conocer de delitos cometidos fuera de la jurisdicción de la Capital —Crim., tom. 8, pág. 22, Ser. 3ª.

2. **Delito**—La constatación de un delito obliga á elevar la causa á plenario; la apreciación de las circunstancias constitutivas corresponde al juez de sentencia—Crim., tom. 8, pág. 30, Ser. 3ª.

3. **Delito**—La simple tenencia del objeto hurtado, no basta para declarar que el tenedor es el autor del delito —Crim., tom. 8, pág. 238, Ser. 3ª.

4. **Delito**—Las presunciones por vehementes que parezcan, no bastan para declarar la existencia del delito —Crim., tom. 8, pág. 352, Ser. 3ª.

5. **Delito**—La falta de prueba en la tercería deducida, no importa la connivencia que la ley exige para castigar

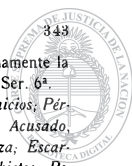
de propósitos fraudulentos—Rivarola, «Exposición y crítica del Cód. Pen.», núm. 845, y autores que cita, Chauveau y Helie, Nypels, Baitard.

2—La calificación del hecho, es como una de las cuestiones de derecho de exclusivo resorte del Juez de sentencia.

3—La persona en cuyo poder se halló el objeto robado dijo que se lo había dado otro individuo para llevarlo á una casa que se le indicó. Cualquier ladrón para esquivar responsabilidades, bien puede encomendar la conducción de la cosa á un extraño; y en este caso, si bien el hecho de encontrarse la cosa en poder del portador, es una presunción de ser él el autor, esa presunción no reúne las circunstancias requeridas por el art. 358 del Cód. de Proc. Crim. para constituir prueba plena.

4—Art. 207 del Cód. de Proc. Crim.

5—Cuando no se logra reunir una prueba directa de esa connivencia, el art. 534 del Cód. de Proc., no es aplicable. Aun cuando la tercería no prospere por falta de prueba, esto no implica que ella haya



al tercerista; el ejecutante debe justificar plenamente la existencia del delito—Civ., tom. 4, pág. 219, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Delito**—Véase: *Agravio moral; Daños y perjuicios; Pérdidas é intereses; Acto ilícito, 2; Adulterio, 2; Acusado, 3; Bienes secuestrados, 1; Acumulación; Fianza; Escarcelación; Incompetencia; Juez de Instrucción; Objetos; Pena; Sobreseimiento definitivo; Querella; Absolución del acusado*, núm. 2.

**Delito civil**—Véase: *Daños y perjuicios; Prescripción; Término*.

1. **Demanda**—Para que proceda el cambio de jurisdicción por cuantía de la demanda, debe modificarse antes de la contestación—Com., tom. 8, pág. 73, Ser. 3<sup>a</sup>.

2. **Demanda**—Vencido el término y acusada rebeldía, debe darse por contestada la demanda—Com., tom. 8, pág. 306, Ser. 3<sup>a</sup>.

3. **Demanda**—La demanda de mejor derecho interpuesta contra un acreedor por el Sindico, interrumpe la prescripción del crédito—Com., tom. 8, pág. 50, Ser. 3<sup>a</sup>.

4. **Demanda**—El silencio del demandado al contestar

sido inmotivada, ni mucho menos que exista connivencia delictuosa. Los delitos no son de presunción legal sino que requieren para que su existencia se declare, que la prueba se produzca al respecto.

1—La competencia del juez se opera en el acto de trabarse el cuasi-contrato de litiscontestación. Las leyes posteriores carecen de efecto retroactivo, pues la competencia de los jueces la establece la ley de fondo.

2—Art. 45 del Cód. de Proc.

3—Art. 3986 del Cód. Civ.

4—Sin embargo que esta actitud no determina la sanción del art. 100 del Cód. de Proc., pero sí, es un antecedente que los jueces deben tener en cuenta en su pronunciamiento, porque es situación de derecho muy distinta la que se crea para una parte cuando niega categóricamente los hechos que fundan la acción, ó cuando se limita a espresar que no tiene conocimiento de ellos.



la demanda, sobre los hechos aseverados por el actor, permite acceder á sus pretensiones, si se produce prueba coadyuvante—Civ., tom. 6, pág. 63, Ser. 5ª.

5. **Demanda**—Cualesquiera que sean los diversos servicios prestados, el acreedor puede formar una sola demanda para su cobro—Civ., tom. 5, pág. 180, Ser. 5ª.

6. **Demanda**—El juez de la testamentaria es el único competente para conocer en las demandas que contra ella se deduzcan—Civ., tom. 10, pág. 76, Ser. 6ª.

7. **Demanda**—Si no ha sido notificada en forma, no procede la rebeldía—Civ., tom. 10, pág. 81, Ser. 6ª.

8. **Demanda**—En los juicios de tercería, el término para contestar la demanda, corre conjuntamente para ejecutante y ejecutado—Civ., tom. 10, pág. 427, Ser. 6ª.

9. **Demanda**—No puede considerarse contestación á la

---

5—La demanda versó sobre cobro de honorarios devengados en varios expedientes. El demandado se opuso alegando que el cobro debiera gestionarse ante cada juez en que fueron devengados. Se resolvió que podía iniciarse una sola acción fuera de los expedientes, por cuanto los servicios jurídicos habían sido prestados por una persona que no era abogado. Aquí no se trataba de saber si esos trabajos podían cobrarse ó no, sino simplemente se trataba de conocer el juez competente para entender en el juicio.

6—Véase: verb. *Competencia*, 9.

7—Art. 77 del Cód. de Proc.

8—El ejecutante acusó rebeldía al ejecutado por haber vencido el término para contestar la demanda: éste dijo que el término no había vencido por cuanto el ejecutante había opuesto excepciones. Se resolvió que esa articulación no suspendía el término para el ejecutado.

9—Se sostuvo que desde el momento en que la parte se presentó oponiéndose al embargo preventivo, había empezado á correr el término para evacuar el traslado de la demanda, y que por consiguiente una excepción dilatoria que se opuso después de vencido el término, contándolo desde la oposición, lo había sido tardíamente. Se resolvió que la oposición al embargo no implica una contestación á la demanda



demanda la oposición al embargo preventivo—Civ., tom. 9, pág. 47, Ser. 6<sup>a</sup>.

10. **Demanda**—Aun dada por contestada, en rebeldía, la demanda, el Juzgado no puede resolver sobre la procedencia de la prueba que pretenda producir el demandado—Civ., tom. 8, pág. 251, Ser. 6<sup>a</sup>.

11. **Demanda**—Las objeciones que no hayan sido propuestas al contestar la demanda, no pueden paralizar el cumplimiento de la sentencia—Civ., t. 8, p. 293, S. 6<sup>a</sup>.

12. **Demanda**—Si son varios los demandados, deben

10—Toda apreciación de la procedencia ó improcedencia de la prueba, debe ser hecha al dictar sentencia; antes importa un prejuzgamiento, según la jurisprudencia sentada por la Cámara.

11—Iniciado un juicio sobre reivindicación de una fracción de tierra poseída por el demandado, dentro de la cual la empresa demandada, había construido una línea férrea y casillas de madera, el demandado en su contestación á la acción, se limitó á invocar sus derechos al terreno reclamado, por haberlo adquirido en mayor proporción de la sociedad «Puerto Madero», sin hacer mérito entonces, ni en ninguna otra oportunidad del juicio, de la circunstancia de que la vía férrea estuviera asentada en terrenos que no formaran parte de los títulos invocados por uno y otro litigante. Solucionada la contienda por sentencias pronunciadas, declarando el derecho del actor en los propios términos solicitados en la demanda, es obvio que en aquella declaración ó reconocimiento estaba comprendida la extensión de tierra en que se había asentado la vía férrea que atravesaba, invadiéndola, el terreno del actor, y ponía de manifiesto un plano. Dados estos antecedentes, no se puede alegar, con motivo de la ejecución de la sentencia, de que la vía férrea no formaba parte de la porción reclamada, porque ella estuviera asentada en vía pública y no en terreno del actor, pues si tal hecho fuera exacto, no se explicaría su silencio en la estación oportuna del juicio, tanto más cuanto que de las varias diligencias periciales practicadas en el terreno, en ninguna de ellas se hacía la menor mención ó referencia á la vía pública que la atravesaba. El demandado, lejos de alegar su posesión fuadada en el nuevo hecho, solo invocó otros hechos, revelando así, que la vía férrea no la había asentado en lo que el venido reputaba de su exclusivo dominio.

12—Todo lo que se relaciona con la unificación de la representa-

unificar su representación—Civ., t. 8, pág. 310, Ser. 6ª.

### 13. Demanda—La recusación del juez no interrumpe

ción, puede verse en la Inst., tom. 5º, verb. *Apoderado*, 1 y 2, sus notas.

13.—Esta es jurisprudencia constante de esta Cám. Así en un caso ha dicho que «la recusación del juez no suspende el término para contestar la demanda»—tom. 10, pág. 258, Ser. 2ª.—Al fundar esta resolución decía que «el hecho de recusar al juez originario, no puede producir una ampliación del término que ni siquiera se ha pedido.» En el tom. 5º, pág. 243, Ser. 3ª, se resolvió la misma cuestión por este mismo Tribunal diciendo que: «El término para contestar la demanda corre desde el día de la notificación; las diligencias en que se hace saber el juez que va á conocer por la recusación, no suspende dicho término.» Los fundamentos de esta resolución fueron dados por el Juez de 1ª Inst. Dr. Pizarro, quien dijo que el término no podría considerarse suspendido, puesto que el juez no lo había declarado en suspenso, lo que por otra parte habría sido legal, puesto que esas actuaciones no impedían que se contestara la demanda.» En un caso resuelto por la Cám. Comercial se dijo que «la recusación de un juez no interrumpe el término para contestar la demanda», porque el ejercicio de esta facultad en nada obsta á la presentación del escrito de contestación ó de excepciones que tuviese que oponer. Véase: tom. 8, pág. 333, Ser. 4ª. La recusación no suspende el término para oponer excepciones se ha dicho en otro caso—Véase: Jur. Civ., tom. 8, pág. 150, Ser. 4ª.—Que la recusación no interrumpe el término para contestar la demanda, se ha resuelto además de los casos que dejamos citados, en varios otros, como puede verse en el tom. 13, pág. 135, Ser. 3ª, Jur. Civ.; tom. 6º, pág. 82, Ser. 6ª, tom. 4º, pág. 13, misma Ser.; tom. 5º, pág. 260, Ser. 5ª. En el mismo sentido corre publicada una resolución de la Cám. de lo Com., en el tom. 6º, pág. 357, Ser. 5ª; este Tribunal compuesto de los Dres. Perez, Esteves y Saavedra, decía en esta circunstancia: «que la suspensión de los términos fijados por la ley para la tramitación de las causas, no puede tener lugar arbitrariamente al producirse por la sola voluntad de una de las partes, en perjuicio y sin el consentimiento de la otra, á menos de burlar los propósitos legales y hacer ilusorios los plazos establecidos por el legislador en interés de los litigantes y hasta con fines de utilidad general; que con arreglo á esta consideración, es fuera de duda que la suspensión de un término solo será legítimo á condición de que haya alguna causa fundada que impida dentro de él, el ejercicio del derecho correspondiente; que esto no sucede en el caso *sub judice*, pues la recusación sin causa de un juez,

el término para contestar la demanda---Civ., tom. 6, página 82, Ser. 6ª.

14. **Demanda**—Lo dispuesto para la notificación de la demanda, no es aplicable al juicio ejecutivo—Civ., tom. 5, pág. 263, Ser. 6ª.

15. **Demanda**—Solo puede considerarse dirigida á conseguir el objeto que forma su *petitum*—Civ., tom. 6, página 377, Ser. 6ª.

16. **Demanda**—Si el juez de la sucesión tiene jurisdicción no impide en modo alguno que el escrito de contestación á la demanda se presente dentro del término ante ese mismo juez ó ante el que debe reemplazarlo; que de otro modo resultaría que el demandado podría prorrogarse por sí solo el plazo para evacuar esa diligencia, violando así el texto espreso del art. 43 del Cód. de Proc., que confiere exclusivamente al juez la facultad de acordar prórroga dentro de los términos legales. Para concluir con las citas que podría hacerlas hasta el cansancio, haremos dos más. En el tom. 5º, pág. 235, Ser. 5ª, la Cám. de lo Civ. dijo que: «La recusación no suspende el término perentorio que la ley fija para oponer excepciones con carácter previo.» En el tom. 4º, pág. 13, Ser. 6ª, resolvió asimismo este Tribunal, que «la recusación no suspende el término para oponer excepciones.»

14—La disposición del art. 77 del Cód. de Proc., solo es aplicable al juicio ordinario, cuando se trata de la citación ó emplazamiento.

16—El Juez de 1ª Inst, tomando como fundamento la vista del fiscal Dr. Barrenechea, resolvió en contra del sumario. La vista decía así: «El art. 703 del Cód. de Proc. resuelve terminantemente el caso en cuestión. Dicho art. dispone lo siguiente: «El juez de la sucesión *ab-intestato*, será el único competente para conocer de las demandas que se deduzcan contra los bienes del difunto, después de promovido el juicio y de las que hubiese pendientes en 1ª Inst. contra el mismo; los autos en que estos últimos se sigan, se agregarán á los del juicio universal.» Según esta disposición, el juez de un juicio sucesorio solo es competente para conocer de las acciones contra la sucesión, pero no de las que ésta tenga que deducir contra terceros. Tratándose en el caso presente de una demanda de la sucesión contra terceros domiciliados fuera de la jurisdicción de V. S., este Juzgado es incompetente.» La Cám. revocó el auto diciendo que: «Denunciándose por domicilio del demandado, la calle Maza núm. 107, en cuyo caso no es de aplicación





ción en el domicilio de los deudores, es competente para conocer en las demandas que contra ellos deduzca la testamentaria—Civ., tom. 4, pág. 43, Ser. 6<sup>a</sup>.

17. **Demanda**—Debe ser notificada personalmente al demandado, salvo que se justifique la existencia de un mandatario especial para dicho juicio—Civ., tom. 1, página 77, Ser. 6<sup>a</sup>.

18. **Demanda**—Debe ser notificada en el domicilio del demandado, aun cuando con anterioridad haya constituido domicilio legal—Civ., tom. 8, pág. 283, Ser. 5<sup>a</sup>.

**Demanda**—Véase: *Costas*, 4, 13, 15, 19, 33, 41, 52, 58 y 84; *Prueba procedente*, 4; *Competencia*, 1, 2 y 3; *Laud arbitral*, 2; *Acción criminal*, 1; *Bienes embargados*, 4; *Escepción dilatoria*, 1 y 2; *Pacto escrito*, 1; *Cosa juzgada*, 1 y 5; *Documentos acompañados*, 6, 7, 11, 16 y 17; *Escepción de defecto legal*, 2, 6, 7 y 10; *Escepciones*, 2, 8 y 13; *Rebeldía*, 2, 4 y 5; *Cantidad demandada*, 1; *Apoderado único*, 1; *Copias*, 1, 4, 5 y 7; *Condominio*, 9; *Po 'er especial*, 3 y 4; *Acto de comercio*, 3; *Intereses*, 8; *Personería*, 5; *Notificación*, 15; *Derecho de retención*, 3; *Acción*, 1 y 3; *Confesión extrajudicial*, 1; *Escepción*, 5; *Documentos*, 3; *Nulidad de sentencia*, 9; *Arrendamiento*, 2; *Escritos*, 6; *De oficio*, 2; *Comerciante*, 4; *Domicilio*, 11; *Interdicto de obra nueva*, 7; *Escepción de incompetencia*, 10;

lo dispuesto en el art. 703 del Cód. de Proc. se revoca el auto, en la parte apelada.»

17—El traslado debe notificarse al interesado en persona para que éste tome las medidas que creyere conveniente á su defensa. Si hay apoderado especial constituido, se presume que ha recibido ya instrucciones de su mandante á los efectos de esa defensa.

18—Se dijo que el domicilio constituido en el otrosí de un escrito presentado con anterioridad, no lo había sido á los efectos del juicio, debiendo en este caso regir la disposición del art. 77 del Cód. de Proc.



*Contrato*, 5; *Embargo preventivo*, 22 y 26; *Recusación*, 10; *Escepciones previas*, 1; *Prueba*, 1; *Prueba procedente*, 4; *Comprador*, 28; *Concurso*, 13; *Herederos*, 23; *Boleto de compraventa*, 3; *Escepción de falta de personería*, 7; *Escepción de litispendencia*, 3; *Jurisdicción común*, 1; *Acción modificada*, 1; *Esposa*, 3; *Simulación*, 2.

**Demanda aclarada**—Véase: *Escepción de defecto legal*, 9.

**Demanda conjunta**—Véase: *Acción conjunta*.

**Demanda contestada**—Véase: *Actor*, 1; *Escritos*, 6; *Escepción de prescripción*, 2.

**Demanda notificada**—Véase: *Escepciones*, 2; *Notificación*, 1; *Copias*.

**Demanda reivindicatoria**—Véase: *Acción reivindicatoria*; *Posesión*, núm. 10.

**Damnificado**—Véase: *Costas*, 72, 75 y 76; *Cesión*, 5.

1<sup>a</sup>. **Demencia** —La declaración de demencia produce efectos legales desde la fecha en que se justifica haberse producido la incapacidad—Civ., t. 7, pág. 313, Ser. 5<sup>a</sup>

**Demencia** — Véase: *Cónsules extranjeros*, 1; *Curador provisorio*, núm. 1.

**Demora**— Véase: *Contrato de construcción*, 4; *Información*, 17; *Embargo preventivo*, 17; *Alegato*, 5; *Prueba vencida*, 4; *Prueba testimonial*, 4.

**Denuncia**—Véase: *Acto ilícito*, 2; *Bienes hereditarios*, 7.

1<sup>b</sup>. **Denunciante**—Pronunciado el auto de sobreseimien-

1<sup>a</sup>—La demencia fué declarada notoria. La declaratoria produce sus efectos legales desde su declaración, á no ser que se justifique que de hecho existía de una manera notoria esa incapacidad.

1<sup>b</sup>—Un denunciante que no asumió el rol de querellante apeló de un auto de sobreseimiento, no haciéndole lugar á la apelación porque el denunciante no es parte en el proceso. Si al apelar se constituye por parte, debe manifestar los fundamentos de la legitimidad de su personería, los cuales, con arreglo al art. 170 del Cód. de Proc. Crim.



to, no puede tenerse por parte en la causa al denunciante --Crim., tom. 8, pág. 206, Ser. 3<sup>a</sup>.

2<sup>a</sup>. **Denunciante**—Después del sobreseimiento, el denunciante no puede ser tenido como parte á los efectos de la apelación--Crim., tom. 8, pág. 221, Ser. 3<sup>a</sup>.

1. **De oficio**—Los defectos del procedimiento permiten declarar de oficio la nulidad del expediente antes de la sentencia—Com., tom. 7, pág. 303, Ser. 3<sup>a</sup>.

2<sup>b</sup>. **De oficio**—El auto que decreta el desalojo es inapelable, cualesquiera que sean los fundamentos del demandante al exigirlo, si de oficio se reconoce que él pro-

consisten en la circunstancia especial de que el querellante haya sido particularmente ofendido con la perpetración del delito acusado.

2<sup>a</sup>—Véase la nota precedente.

1—Habiéndose llamado autos para sentencia, hubo cambio de juez. Se hizo saber el nuevo juez que iba á conocer. Consentido este auto, la parte pidió que se dictase sentencia: el juez anuló todo lo obrado por cuanto la demanda no había sido notificada en forma, y el auto de prueba no se le había notificado en ninguna forma al demandado.

2<sup>b</sup>—Este sumario está equivocado, precisamente la Cám. por mayoría resolvió lo contrario, fué la minoría la que se produjo en el sentido espuesto. La mayoría dijo: «Que en el juicio de desalojo no procede recurso de apelación, sino únicamente en el caso previsto en el art. 590 del Cód. de Proc., según así se preceptúa en el art. 592 del mismo Cód. Que al presente no se trata del caso á que el primero de los arts. citados hace referencia. Por esto, y teniendo además en consideración lo resuelto por esta Cám. en el acuerdo de 28 de Julio del año próximo pasado, estableciendo la procedencia del juicio de desalojo, aun cuando medie contrato escrito de término no vencido, de clárase que esta Cám. carece de jurisdicción para juzgar acerca de la legalidad de la medida que ha motivado el presente recurso, por haber limitado la ley de una manera espresa y terminante á una sola Instancia el conocimiento y decisión de todas las cuestiones de esta naturaleza, siempre que no se trate del caso del art. 590.» La minoría dijo: «Careciendo este Trib. de jurisdicción para conocer del recurso interpuesto á mérito de lo que dispone el art. 592 del Cód. de Proc., devuélvanse al Inferior para que lleve adelante su procedimiento.»

cedía por otras causas—Civ., tom. 5, pág. 157, Ser. 5ª.

3. **De oficio**—Si la demanda adolece de defectos legales, debe rechazarse de oficio—Civ., t. 5, p. 162, S. 5ª.

4. **De oficio**—La revocatoria de un auto sin sustanciación, no puede fundar el recurso de nulidad, si era revocable de oficio—Civ., tom. 9, pág. 13, Ser. 6ª.

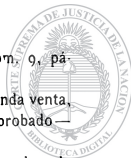
5. **De oficio**—No puede de oficio declararse la incompetencia, después de consentido el auto de prueba—Civ., tom. 6, pág. 95, Ser. 6ª.

6. **De oficio**—No pueden revocarse de oficio las provi-

4—Con arreglo á la Ley 2ª, tit. 22, Part. 3ª, aun de oficio y sin sustanciación previa alguna, está facultado el Interior para dejar sin efecto sus propias resoluciones interlocutorias, cuando en su concepto hubiere mérito para ello. No adolecen en consecuencia, de vicio ó defecto de procedimiento los autos dictados en estos casos, ni existe nulidad.

5—Es cierto que la jurisdicción conferida á los Trib. es improrrogable, á menos que se trate de la jurisdicción territorial; y cierto es también que los jueces deben inhibirse de oficio cuando de los hechos espuestos en la demanda resulte que no son competentes para conocer de ella—arts. 1º y 3º, Cód. de Proc.—pero estas son reglas generales que dejan de tener su aplicación cuando el legislador ha fijado una escepción expresa. El Cód., después de fijar tales reglas, ha dicho en el art. 87: «Los jueces al recibir la causa á prueba en las cuestiones de hecho ó al correr el segundo traslado en las de derecho, se pronunciarán espresamente sobre si la causa es ó no de su competencia. Con sentida esta providencia, no podrá en adelante deducirse incompetencia por las partes, ni de oficio por los jueces inferiores ó superiores.» Con esto se ha establecido una escepción que consiste en que de hecho quede prorrogada la jurisdicción cuando no se ha opuesto escepción de incompetencia, y el juez, después de examinar la naturaleza del asunto en la oportunidad indicada, había declarado que es competente para conocer del asunto.

6—Si bien los jueces están facultados para revocar de oficio sus propias resoluciones interlocutorias, en el caso de que se trata no existía mérito para ejercitar dicha facultad, pues aparte de tratarse de resoluciones que no habían sido reclamadas en forma alguna por las partes, tendían por el contrario, á regularizar el procedimiento.



dencias consentidas por las partes—Civ., tom. 9, página 256, Ser. 6<sup>a</sup>.

7. **De oficio**—Debe quedar sin efecto la segunda venta, si el primer remate ha sido judicialmente aprobado—Civ., tom. 9, pág. 300, Ser. 6<sup>a</sup>.

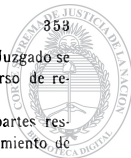
8. **De oficio**—El Juzgado puede de oficio resolver la inhabilidad del título por no haber vencido el plazo de la obligación, aun cuando el ejecutado no haya alegado ese hecho al oponer la escepción—Civ., t. 6, p. 238, S. 6<sup>a</sup>.

9. **De oficio**—No procede nulidad por falta de sustanciación, si la providencia era revocable de oficio—Civ., tom. 4, pág. 34, Ser. 6<sup>a</sup>.

7—Seguido juicio ejecutivo contra un deudor, pendiente éste, se decretó su concurso ante otra jurisdicción. La ejecución debió venir al concurso, pero en vez de esto se siguió ante el otro juez, procediéndose al remate del inmueble y aprobándose. El Síndico no respetó esa venta, solicitó se sacara nuevamente á remate. Así se hizo vendiéndose el inmueble; pero el primer comprador reclamó, resolviéndose la cuestión en favor del primer comprador. Parece evidente el error que encierra esta resolución, pues el juicio de concurso como universal que es, atrae á sí á todos los demás. Las actuaciones producidas ante otro juez son sin ningún valor y por consiguiente, el remate debió quedar sin efecto.

8—Esta cuestión fué resuelta en disidencia. La mayoría dijo: «Resultando del propio instrumento publico con que se ha instruido la ejecución, que se trata de una obligación de plazo no vencido, se confirma, con costas, dicho fallo, sin perjuicio de las medidas de carácter meramente conservatorias que puedan corresponder al acreedor.» La minoría dijo: «No habiéndose hecho mérito en el escrito en que se oponen escepciones, de la circunstancia de no estar aun vencida la obligación cuyo cumplimiento se persigue por el ejecutante, no habiendo podido, en consecuencia, el Inferior hacerla valer de oficio, desde que su misión estaba circumscripita á resolver el caso con arreglo á las acciones y defensas aducidas—art. 216, Cód. de Proc.—máxime cuando se trata de un beneficio que el deudor ha podido renunciar, expresa ó tácitamente—arts. 570 y 791, Cód. Civ.

9—De acuerdo con el num. 4.



10. **De oficio**—El auto en que de oficio el Juzgado se declara incompetente, es susceptible del recurso de reposición—Civ., tom. 3, pág. 72, Ser. 6ª.

11. **De oficio**—La disconformidad de las partes respecto del tasador, hace procedente el nombramiento de oficio—Civ., tom. 3, pág. 87, Ser. 6ª.

12. **De oficio**—La disconformidad del Asesor de menores con el martillero propuesto, hace procedente el nombramiento de oficio—Civ., tom. 1, pág. 346, Ser. 6ª.

13. **De oficio**—Solo pueden revocarse de oficio, providencias de trámite—Civ., tom. 8, pág. 303, Ser. 5ª.

14. **De oficio**—El embargo preventivo decretado por error, puede ser revocado de oficio—Civ., tom. 8, página 312, Ser. 5ª.

**De oficio**—Véase: *Boleto de compraventa*, 3 y 9; *Contrato*, 4; *Auto revocable*, 1; *Abogado*, 9; *Testigos*, 8; *Con-tador*, 4; *Auto inapelable*, 5; *Documentos acompañados*, 11.

**Departamento de higiene**—Véase: *Honorarios*, 7.

**Departamento de ingenieros**—Véase: *Honorarios*, 9.

**Dependiente**—Véase: *Embargo*, 12.

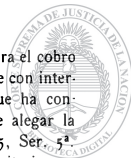
---

10—Esta resolución como que es dictada de oficio, en uso de la facultad que acuerda á los jueces el art. 87 del Cód. de Proc., no puede menos que considerarse como una mera interlocutoria, con arreglo á la doctrina de la Ley 2ª, tít. 22, Part. 3ª, que sirve de antecedente al art. 223 del Cód. de Proc.

12—El art. 512 del Cód. de Proc. es de aplicación al caso, pues el Asesor de menores es parte en los juicios en que interviene.

13—Las facultades acordadas á los jueces para dejar por sí mismos sin efecto las resoluciones que pronuncian, son las que espresa la Ley 2ª, tít. 22, Part. 3ª, que se refiere á providencias de carácter interlocutorio, pero de ninguna manera á todos los procedimientos de un juicio.

14—Los decretos sobre embargos no causan estado, cayendo ellos en consecuencia, bajo el imperio de la Ley 2ª, tít. 22, Part. 3ª.



1. **Depositario**—La acción del depositario para el cobro de los honorarios y gastos, debe sustanciarse con intervención del ejecutante y ejecutado; pero el que ha consentido el procedimiento irregular, no puede alegar la nulidad de la sentencia—Civ., t. 7, pág. 135, Ser. 5ª.

2. **Depositario**—Las acciones contra el depositario por deterioro de los muebles, deben ser deducidas en expediente separado—Civ., tom. 7, pág. 311, Ser. 5ª.

3. **Depositario**—El ejecutado no puede pedir el cambio de depositario, sin la conformidad del ejecutante—Civ., tom. 10, pág. 345, Ser. 6ª.

4. **Depositario**—Solo puede cambiarse el depositario judicial con motivo justificado—Civ., t. 10, p. 347, S. 6ª.

5. **Depositario**—No basta el nombramiento de depositario de la esposa; ésta debe residir en el domicilio designado—Civ., tom. 10, pág. 381, Ser. 6ª.

6. **Depositario**—El Juzgado solo puede nombrar depositario de los menores, si no existe acuerdo entre los esposos—Civ., tom. 10, pág. 394, Ser. 6ª.

---

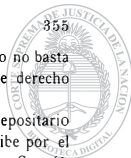
1—El ejecutado consintió durante todo el procedimiento en asumir el rol de exclusivo demandado, oponiendo sus defensas y procurando producir la prueba que le incumbía; en este caso no le es lícito después alegar un vicio que no le afectaba personalmente, porque con respecto á él, el juicio se había seguido con toda regularidad y la sentencia se había dictado observándose todas las formas y solemnidades requeridas para su validez.

2—Las responsabilidades en que puede incurrir un depositario son distintas y pueden fundar una acción de daños y perjuicios.

3—El actor se opuso al cambio de depositario porque éste era persona de responsabilidad. Además, el art. 2736 del Cód. Civ. declara facultativo del actor el pedir el secuestro ó exigir suficientes seguridades al poseedor.

4—El nombramiento recaído en persona abonada había sido confirmado por la Cám.

5—Argumento del art. 68 de la ley de mat. civ.



7. **Depositario**—Si el producido del depósito no basta para pagar los gastos, el propietario carece de derecho sobre él—Civ., tom. 10, pág. 373, Ser. 6<sup>a</sup>.

8. **Depositario**—La acción para exigir del depositario irregular la devolución de la cosa, se prescribe por el término de diez años—Civ., tom. 7, pág. 194, Ser. 6<sup>a</sup>.

9. **Depositario**—Al depositario judicial que alega el caso fortuito en que pereció la cosa, corresponde justificarlo plenamente—Civ., tom. 7, pág. 401, Ser. 6<sup>a</sup>.

10. **Depositario**—Es facultativo del Juzgado nombrar depositario de la esposa durante el juicio de divorcio—Civ., tom. 3, pág. 54, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Depositario**—Véase: *Bienes embargados*, 11; *Apremio*, 1.

1. **Depósito**—No puede decretarse embargo sobre un depósito que no está á nombre del ejecutado—Com., tom. 7, pág. 150, Ser. 3<sup>a</sup>.

2. **Depósito**—Ejecutoriada una resolución que ordena la entrega de un depósito, debe cumplirla cualquier

---

8—Arts. 4017 y 4023 del Cód. Civ.

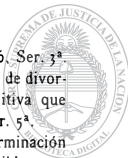
9—Véase: verb. *Caso fortuito*, 1.

10—El art. 68 de la Ley de Mat., faculta al juez para depositar á la mujer en casa honesta dentro de los límites de su jurisdicción. La casa fué elegida, el depositario aceptó el cargo y se recibió del depósito. Para cambiar depositario es necesario alegar razones con fundamento suficiente. Es conveniente que cada parte tenga la completa libertad de acción en el debate sobre divorcio, de manera que debe dársele los medios de hacer efectiva esa igualdad durante el juicio.

1—Se dijo que el depósito estaba hecho bajo un nombre supuesto, pero que en realidad pertenecía al deudor quien para eludir la acción de sus acreedores no había hecho el depósito á su nombre. No se hizo lugar al embargo; la circunstancia de no estar hecho el depósito á nombre personal del deudor se oponía á esa medida, desde que no se acompañaba ningún justificativo que acreditara el extremo alegado.

2—A toda resolución ejecutoriada debe darse cumplimiento porque contra la autoridad de la cosa juzgada no hay recurso alguno.





que sea el depositario—Crim., tom. 8, pág. 276, Ser. 3ª.

3. **Depósito**—De los hijos, durante el juicio de divorcio, no afecta los derechos á la tenencia definitiva que aleguen los padres—Civ., tom. 9, pág. 77, Ser. 5ª.

4. **Depósito**—De títulos al portador, sin determinación de número y valor, se conceptúa de cosa fungible, y en consecuencia debe calificarse de irregular—Civ., tom. 7, pág. 194, Ser. 6ª.

5. **Depósito**—En el juicio de divorcio, no corresponde al marido proponer casa para el depósito de la esposa—Civ., tom. 5, pág. 20, Ser. 6ª.

6. **Depósito**—Si el menor se ha entregado en depó-

---

3—Porque es una medida de carácter meramente preventivo, dictada en beneficio exclusivo de los menores: ella nada innova en la situación legal de las partes, ni afecta al fondo de sus derechos respectivos.

4—Se trataba de títulos de pública cotización que no fueron entregados al depositario en las condiciones previstas por el inc. 2º del art. 2188 del Cód. Civ. para reputarlo depósito regular, y en consecuencia, el depositario podía disponer libremente de ellos, quedando tan solo obligado, como deudor personal, á restituir otro tanto de las cosas depositadas de la misma especie—arts. 2191 y 2220.—La prueba más evidente de que las cosas entregadas al demandado eran fungibles, esto es, que podían ser reemplazadas por otras de la misma especie y cantidad—art. 2324—proporcionaba una carta exhibida por el actor, de la que resultaba que esas mismas cosas estuvieron anteriormente en depósito de otra persona, la que, para restituirlas, tuvo que comprar en plaza parte de los títulos, hasta completar el número que debía entregar el demandado. Si no hubo, pues, más que un cambio de depositario, bien pudo hacer el último lo que hizo el primero, sin reclamo ni observación alguna por parte del depositante: disponer como propias de las cosas depositadas en las condiciones es un genuino depósito irregular.

5—La Ley de Mat. Civ. no confiere al marido el derecho preferente de indicar la casa honesta en que debe ser depositada la esposa.

6—Esta cuestión fué resuelta en disidencia. Un padre entregó voluntariamente su hijo á un tercero; reclamando luego su entrega, se

sito voluntario, la restitución debe tramitarse en juicio ordinario—Civ., tom. 4, pág. 396, Ser. 6ª.

7. **Depósito**—Es ineludible la justificación de este contrato para que la restitución se pueda operar—Civ., tom. 2, pág. 63, Ser. 6ª.

**Depósito**—Véase: *Acción reivindicatoria*, 3; *Contrato de depósito*, 1 y 2; *Comprador*, 7, 13 y 20; *Hipoteca*, 1; *Escritura pública*, 4; *Acción*, 3; *Frutos*, 2; *Tercería*, 3.

**Depósito judicial**—Véase: *Consignación*, 12 y 14; *Atquiler*, 29; *Embargo*, 14.

**Derechos**—Véase: *Consejo de educación*, 1; *Contrato de cesión*, 1; *Acreedores*, 1; *Inventario*, 1; *Posesión*, 11; *Escepción de defecto legal*, 7.

1. **Derechos acordados**—Por una sentencia ejecutoriada, solo pueden hacerse valer justificando que el accio-

le imprimió al juicio la forma ordinaria fundándose en que de la propia exposición de hechos relacionados en la demanda, resultaba que la menor, cuya entrega se reclamaba, se encontraba en poder de la demandada, por habérsela dejado voluntariamente el actor en virtud de convenio lícito que establecía derechos y obligaciones recíprocas, lo que basta para demostrar que no se trataba del caso previsto por el art. 276 del Cód. Civ. en que se fundaba para reclamar la protección de las autoridades públicas á fin de que la menor fuese restituida al poder paterno invocado. No teniendo el caso una sustanciación especial, cae bajo la sanción del art. 66 del Cód. de Proc. La minoría dijo que correspondía la forma sumaria al procedimiento, por cuanto el hecho de haber dejado el padre voluntariamente á la menor, en poder de la demandada, no afecta al carácter sumario del juicio, pues este procedimiento es impuesto por la naturaleza misma de los deberes constitutivos de la autoridad paterna, como lo tiene resuelto la misma Cám. de la Civ. en el tom. 2º, pág. 510, Ser. 2ª.

7—El actor no comprobó el depósito en los términos del art. 2182 del Cód. Civil.

1—La sentencia cuya ejecución se pretendía llevar á debido efecto, había ordenado que se entregara un inmueble previo pago de una suma de dinero. El vencedor pidió la entrega sin pagar la suma espre-

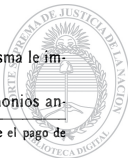


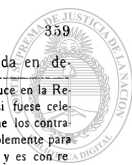
nante ha satisfecho las prestaciones que la misma le imponía—Civ., tom. 5, pág. 330, Ser. 5ª.

1. **Derecho canónico**—La nulidad de matrimonios an-

sada. No se hizo lugar á la entrega del inmueble porque el pago de la suma determinada en la sentencia era previo.

1—El actor había contraído matrimonio ante el cura rector de la parroquia de Catedral al Norte, en 31 de Dic. de 1881. Siendo el esposo israelista y la esposa católica, el impedimento canónico de disparidad de cultos fué dispensado por el señor provisor y vicario general. El actor que no profesaba el cristianismo sostuvo que el matrimonio era nulo, á causa de no haber sido consagrado en la iglesia de su religión, á pesar de que en la época en que tuvo lugar, existía ya una sinagoga en esta Capital. Bajo la base de que se trataba de un defecto de forma sustancial, se presentó, tras largos años de vida marital, deduciendo acción de nulidad del matrimonio, fundado en los arts. 180, 181, 182 y 183 del Cód. Civ., ubicados en el título «del matrimonio», que regia antes de la ley sancionada por el Hon. Congreso sobre la misma materia. Tal fué la cuestión á resolver. El matrimonio fué declarado válido fundándose: 1º En que el caso no está regido por las disposiciones del Cód. Civ. 2º En que el caso está previsto y se rige por el art. 103 de la Ley de Mat. Civ. de 12 de Nov. de 1888, modificada en Nov. del año siguiente. 3º Que la Iglesia católica no impone la necesidad de que en un matrimonio entre un católico y un infiel, una vez celebrado según el rito cristiano, sea consagrado por los sacerdotes del culto del no católico ó no cristiano para su validez y firmeza. 4º En que entre los judíos, el matrimonio no requiere para su validez la consagración religiosa. *Primera proposición.* Se ha dicho que los arts. que informaban legalmente la demanda, son el 180, 181, 182 y 183 del Cód. Civ. El art. 180, dice: «El matrimonio entre católico y cristiano no católico, autorizado por la Iglesia católica, será celebrado como fuese de práctica en la iglesia de la comunión á que perteneciere el esposo no católico.» El 181: «Es nulo el matrimonio celebrado por sacerdotes disidentes cuando uno de los esposos es católico, si no fuese inmediatamente celebrado por el párroco católico.» El 182: «Corresponde á las autoridades de la Iglesia católica conocer en los impedimentos de estos matrimonios, del mismo modo que en los de los matrimonios entre católicos, y conceder dispensas de ellos.» El 183: «El matrimonio celebrado sin autorización de la Iglesia católica, es el que se contrae entre cristianos no católicos,





teriores á la ley de matrimonio civil fundada en de-

ó entre personas que no profesan el cristianismo. Produce en la República todos los efectos civiles del matrimonio válido, si fuese celebrado en conformidad á las leyes y ritos de la iglesia á que los contrayentes pertenecieren.» El primer art. legisla pura y simplemente para los matrimonios entre católicos y cristianos no católicos, y es con relación á tales contrayentes, que dispone que la celebración se verifique como fuese de práctica en la iglesia de la comunión á que pertenezca el esposo no católico. El segundo fulmina con la nulidad los matrimonios celebrados por sacerdotes disidentes, cuando uno de los esposos es católico, si no fuese inmediatamente celebrado por el párroco católico. Como se habrá observado, él se refiere siempre á uniones entre católicos, para los cuales se exige doble consagración, según se desprende de éste y del anterior artículo combinados. El tercero establece nada más que la jurisdicción de la Iglesia para conocer en los impedimentos de esos matrimonios. El cuarto versa sobre matrimonios entre cristianos no católicos y entre infieles. Todos estos arts. tratan de matrimonios entre católicos y cristianos no católicos; entre cristianos no católicos y entre herejes ó personas que no profesan el cristianismo. Pero, es que aquí se trataba de un matrimonio entre un católico y un israelista, caso no previsto ni legislado por el Cód. en las disposiciones recordadas, ni en otras. ¿Dónde está, entonces, la aplicabilidad de aquellas disposiciones á este matrimonio? Cuando este último hace derivar su pretendido derecho de las leyes citadas, sustenta una tesis de todo punto falsa. Los arts. 180, 181 y 183 nada tienen que ver con la cuestión. Y no se diga que el art. 180 al fijar las formalidades para los matrimonios entre católicos y cristianos no católicos, ha impuesto implícitamente las mismas formalidades para los que ocurran entre un católico y un hereje; porque las formas de los actos jurídicos deben resultar de una ley espresa, sobre todo, cuando como en nuestro caso, su omisión pudiera ser causa de nulidad, como debe tenerse presente al estudiar esta cuestión. Si ni siquiera implícitamente se contiene en el art. 180 el mandato de que los matrimonios entre católicos y judíos se celebren según las prácticas de la religión de estos, son fuera de lugar todas las alegaciones sobre la aplicación analógica del art. 181 al caso presente, sosteniendo que así como es nulo el matrimonio celebrado por sacerdotes disidentes cuando uno de los esposos es católico, si no fuese inmediatamente celebrado por párroco católico, debe serlo también en el caso inverso, es decir, si no se celebra ante el sacerdote disidente, ó ante un rabino en su caso. *Segunda pro-*



fectos de forma, debe juzgarse por las disposiciones

*posición.* La prescripción que resuelve la contienda, es el art. 103 de la Ley de Mat. Civ. Su texto es el siguiente: «Cuando se tratase de un matrimonio celebrado con anterioridad á esta ley y la acción de nulidad se fundare en un impedimento, se aplicarán las disposiciones de esta ley; si la acción se fundare en defectos de forma, se aplicarán las leyes canónicas.» El precepto es claro: él dispone que si la acción de nulidad no se funda en un impedimento, sino en defectos de forma, se decida la dificultad según las leyes canónicas. Como el matrimonio del actor se celebró con autorización de la Iglesia católica, y como los de esa clase estaban regidos por los cánones, nada puede objetarse sobre la aplicabilidad del referido art. 103 al juzgamiento que nos ocupa —arts. 181, 201 y 225, Cód. Civ.—Ahora bien, el actor había dicho en su escrito de demanda, que la causal de nulidad que alegaba era meramente de forma, como así lo es efectivamente; luego, las leyes á aplicarse para dilucidar la cuestión son las leyes canónicas, de conformidad con lo dispuesto por el citado art. 103, aplicable para la resolución del pleito, según se deja dicho. *Tercera proposición.* Demostrado que el art. 103 de la Ley de Mat. Civ. en su segunda parte, es el llamado á terminar la controversia, resta poner de manifiesto que los cánones jamás han exigido que un matrimonio entre un católico y un infiel, para ser válido, sea consagrado por los sacerdotes del culto del hereje. La Iglesia ha repudiado en todas las épocas los matrimonios mistos, esto es, entre cristianos y herejes; pero en la imposibilidad de prohibirlos en absoluto, ha determinado las reglas á que deben sujetarse por parte de los católicos, no sin tacharlos de ilícitos, mas no de nulos. La doctrina referente á ellos se encuentra sintetizada en el breve que la Santidad de Gregorio XVI dirigió sobre el particular á los obispos de Baviera, en 27 de Mayo de 1832. Gregorio XVI invita en él á los referidos obispos, después de recordarles la doctrina y antecedentes canónicos de la Iglesia, á que exhorten muy especialmente á sus fieles á no infringir los santos cánones, contrayendo matrimonio con herejes; pero al mismo tiempo les significa que si algún católico, sordo á los consejos, decidiese contraer un matrimonio misto, sean ellos autorizados, siempre que hayan pedido y obtenido, los contrayentes, una dispensa canónica; indicándoles que se abstengan, en caso contrario, de presenciar esas uniones —*Diccionario de legislación y jurisprudencia de Escriche*, anotado por Caravantes, verb. *Matrimonio misto*.—Tenemos, pues, que la Iglesia católica tolera los matrimonios mistos, acordándoles validez y firmeza, con tal de que se haya llenado la for-

del derecho canónico—Civ., tom. 5, pág. 63, Ser. 6ª

malidad previa señalada. La Iglesia exige la dispensa canónica para que pueda efectuarse y producir efectos el matrimonio místico; pero no exige á ese fin la consagración del acto ante el sacerdote del esposo infiel. Se observa muy atinadamente que la Iglesia mira bajo la faz de sus dogmas y doctrinas los actos que autoriza, sin preocuparse de lo que hagan los cultos disidentes, que para ella son erróneos y vituperables. Así se comprende que la Iglesia, al reglamentar la celebración de las matrimonios mistos, se haya ocupado solamente de lo relativo á sus propios ritos, dejando de lado lo referente á la religión del hereje. El Fiscal fué más lejos en el caso que nos ocupa; él demostró con la «Instrucción de la Congregación del Santo Oficio á los obispos de Hannover», de 17 de Feb. de 1864, y con el sentir del canonista Allegre, que la Iglesia prohíbe que sus fieles que han celebrado un matrimonio con israelistas, se presenten ante un ministro heterodoxo á objeto de llevar á cabo una segunda consagración. *Cuarta proposición.* Los israelistas, pueblo religioso por excelencia, no hacen depender la validez de sus matrimonios de formas y solemnidades determinadas, ni de que éstos se cumplan en sus templos ó ante sus ministros, siendo suficiente el mutuo consentimiento de las partes. Conviene traer al campo de la discusión algunos antecedentes, que servirán á lo menos para robustecer esta tesis. El Dr. Díaz, al estudiar esta 4ª proposición, decía en la Cám.: el período legislativo de 1888, ha de figurar en el porvenir como una de las páginas más brillantes de nuestra historia parlamentaria. Un hombre superior por su talento y por su espíritu liberal, que lo hacía accesible á todas las nobles conquistas de la humanidad, el entonces Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública, doctor Filemón Posse, había llevado un proyecto de ley de Mat. Civ., en mira de reivindicar para el Estado una facultad de largo tiempo usurpada por la Iglesia. Remitido el proyecto por el Gobierno al Senado de la Nación, se produjo con tal motivo un debate solemne en ambas Cámaras, en que terciaron preclaros ingenios, levantando todos su oratoria á la altura de la gran reforma. Los impugnadores del proyecto, abroquelados en los principios y doctrinas de la escuela espiritualista cristiana y católica, que reclama para la Iglesia el derecho exclusivo de legislar sobre el matrimonio, habían formulado esta proposición absoluta y excluyente de la idea de intervención del Estado en ese acto: «El matrimonio ha tenido siempre formas religiosas.» El doctor Aristóbulo del Valle, una de las más encumbradas cimas de nuestra tribuna parlamentaria, formaba parte de la alta Cámara, y re-



**Derecho criminal**—Véase: *Agravio moral*, 2; *Daños y perjuicios*, 53 y 55.

futando aquella tesis, probó con referencias del Viejo Testamento, que entre los hebreos, el matrimonio no tiene formas esencialmente religiosas, puesto que se celebra sin formas sacerdotales y á veces sin invocación en el acto á la divinidad. Conviene transcribir los pasajes pertinentes de la elocuentísima oración de la referencia: «Es muy curioso que estudiando la institución del matrimonio desde su origen y habiendo servido de tema fundamental al debate los libros sagrados, se haya omitido hablar de las dos únicas ceremonias del matrimonio que figuran en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento se habla de muchos matrimonios; pero solo hay dos ceremonias descriptas en el libro de Ruth, y otra en el libro de Tobías. Bien, señor Presidente; en el libro de Ruth el matrimonio se celebra sin la mínima intervención sacerdotal, y no solamente sin intervención sacerdotal, sino también sin la menor invocación de la divinidad. En el libro de Tobías, el matrimonio se celebra con invocación á la divinidad, pero sin la intervención sacerdotal. Este hecho tiene una importancia capital para los objetos del debate, porque sirve como primer jalón para llegar al término que me propongo. El matrimonio de los hebreos nos da, entonces, como primer resultante, lo siguiente: que es posible que el matrimonio llene sus fines morales y sociales, que los ha llenado en la historia de la humanidad, sin formas sacerdotales, y aun sin que se haya invocado en el acto, á la divinidad. No quiero detenerme á comprobar con lecturas que serían fuera de lugar, la afirmación categórica que hago, respecto al carácter del matrimonio de los hebreos, porque me parece que este punto no puede ni siquiera ser discutido.» —Diario de sesiones, año 1888.—Para completar las referencias del doctor del Valle, conviene transcribir también los textos sagrados á que alude en su discurso. Una de las ceremonias de matrimonio descriptas es la siguiente: «Entonces Booz dijo á los ancianos y á todo el pueblo: Vosotros sois testigos en este día de que yo entro en posesión de todas las cosas que poseía Elemeleche, Chelím y Mahalon, por entrega que me hace Noemi. Y recibo en matrimonio á Ruth la moabita, mujer que fué de Mahalon, para resucitar el nombre del difunto en su herencia, á fin de que no se borre su nombre de entre su familia, de entre sus hermanos y su pueblo. Vosotros, repito, sois testigos de este acto.» Entonces todo el pueblo, que estaba en la puerta, respondió con los ancianos: «Nosotros somos testigos. El Señor haga que esa mujer que entra en tu casa sea como Rachel y Lia, las cuales

1. **Derechos hereditarios**—Los que pretendan tener de-

fundaron la casa de Israel; para que sea como aquéllas, dechado de virtud, en Ephrata, y tenga un nombre célebre en Betlehemi. Y sea tu casa como la casa de Phares—hijo de Thamai y de Judá—por la posteridad que el Señor te diera de esta joven.»—Versículo 9º, 10, 11 y 12, cap. IV, lib. de Ruth, Viejo Testamento.—La otra ceremonia es esta: «Después que hubieron conversado, mandó Raquel matar un carnero y disponer un convite é instándoles á sentarse en la mesa, dijo Tobías: yo no comeré ni beberé hoy aquí, si primero no me otorgas mi petición prometiendo darme á Sara, tu hija. Oída esta propuesta se contuvo Raquel, sabiendo lo acaecido a los siete maridos que se habían casado con ella, y comenzó á temer no le acaeciese á éste la misma desgracia. Estando, pues, perplejo y sin dar ninguna respuesta. El angel le dijo: no témas dársela á éste que teme á Dios es á quien debe darse tu hija por mujer: que por eso ningún otro ha merecido tenerla. Entonces dijo Raquel: No dudo que Dios ha acogido mis oraciones y lágrimas en su acatamiento. Y creo que por esto os ha traído á mi casa á fin de que ésta reciba esposo de su parentela, según la ley de Moisés. Por tanto, no dudes ya que te la dará. Y cogiendo la mano derecha de su hija, la juntó con la derecha de Tobías, diciendo: El Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, sea con vosotros y Él os junte, y cumpla en vosotros su bendición. En seguida, tomando papel ó un pergamino, hicieron la escritura matrimonial. Y después celebraron el convite, bendiciendo á Dios.»—Versículos 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, cap. VII, lib. de Tobías, Viejo Testamento.—Nos encontramos, pues, delante de dos matrimonios hebreos que se concluyen sin presencia de sacerdote, y aun sin invocación á la divinidad uno de ellos, con la sola asistencia de parientes, amigos y pueblo. Con rigurosa exactitud ha podido decir Dolloz, como lo dice, que el matrimonio entre los hebreos era celebrado en el seno de la familia, en presencia de los parientes reunidos, y que los

(Sigue en la pág. 364).

1.—En los juicios *ab-intestato* como el de que se trataba, solo es parte, hasta tanto se dicte la declaratoria de herederos, el Min. fiscal, pues los que se presenten reclamando derechos, solo son admitidos con el único objeto de acreditar su carácter en incidente por separado—arts. 687, 694, 697 y 699, Cód. de Proc.—En consecuencia, el derecho de recusación acordado á las partes—arts. 366 y 369—no puede ser ejercitado en el juicio principal, mientras no se haya justificado en legal forma el parentesco invocado.





rechos hereditarios, no pueden recusar al juez de la testamentaria, sin justificar el carácter que invocan—Civ., tom. 10, pág. 93, Ser. 6ª.

## 2. Derechos hereditarios—La información para justi-

ministros de la religión no intervenían en él—Repertorio, tom. 31, página 142.—Queda constatado, con la autoridad insospechable de las leyes mosaicas, que para la validez de los matrimonios judíos, no es necesaria la consagración religiosa de la sinagoga, ni la intervención sacerdotal en forma alguna. Es evidente que esta esposición nos conduce á estos resultados: 1º que para la validez de su matrimonio, el esposo no ha necesitado consagrarlo en la sinagoga, ante un sacerdote de su culto; 2º que tal omisión, dándola por suficientemente justificada en autos, no ha podido causar la nulidad de su matrimonio con su señora esposa, que se celebró con autorización de la Iglesia católica y de acuerdo con sus ritos; 3º que en consecuencia, la acción de nulidad de ese matrimonio puesta por el esposo es infundada en derecho y debe rechazarse. Las leyes vigentes en la época de la celebración del matrimonio en cuestión y que son las que deben regir el caso presente, no determinaban forma especial para la celebración de matrimonios entre católicos y judíos, y en consecuencia, si la Iglesia católica los autorizaba, como resultó que autorizó el que estaba en tela de juicio, tiene forzosamente que producir todos los efectos civiles acordados entonces á los matrimonios celebrados ante ella. En una palabra, el matrimonio de que se trataba debía reputarse en cuanto á su forma, á matrimonio entre católicos, aun cuando uno de los contrayentes no fuera ni siquiera cristiano. La única observación que podría aducirse en contra de esta ficción, sería la de ser violatoria de la libertad de cultos consagrada por la Constitución; pero tal observación carecería en absoluto de trascendencia, y aun de fundamento, desde que no se menoscaba en lo mínimo las creencias religiosas de nadie por el hecho de acordársele efectos civiles á los actos de su culto, como sucede con la actual ley de matrimonio, que no se lo acuerda á ninguno.

2—Según el art. 101 de la Ley de Mat., la posesión de estado no puede ser invocada por los esposos ni por los terceros como prueba bastante, cuando se trata de establecer el estado de casados ó de reclamar los efectos civiles del matrimonio. Podrá, tal vez, controversirse la aplicabilidad del citado art. 101 á estos casos, pues no faltarían argumentos para sostener que se refiere á los matrimonios civiles y no á los religiosos, para los que continuaría rigiendo el art. 179 del



ficar la posesión de estado de casados, no basta para conceder derechos hereditarios entre los esposos; debe justificarse plenamente la celebración del matrimonio—Civ., tom. 9, pág. 146, Ser. 6ª.

**Derechos hereditarios**—Véase: *Cesión de herencia*, 1; *Acto civil*, núm. 1.

**Derechos personales**—Véase: *Esposa*, 5; *Inhibición*, 1.

**Derecho público**—Véase: *Calle pública*, 1.

**Derechos peserosios**—V.: *Bienes públicos*, 1; *Posesión*, 9.

**Derecho de repetición**—Véase: *Costas*, 18ª; *Adoquinado*.

1. **Derecho de retención**—Debe alegarse en el mismo juicio sobre desposesión; no puede sobre él fundarse un embargo preventivo—Civ., tom. 6, pág. 310, Ser. 5ª

Cód. Civ., pero aun cuando así fuera, es indudable que la prueba de la posesión de estado sería un medio supletorio, admisible únicamente en el caso de no existir registros parroquiales ó que, por causas no imputables á los contrayentes, se hubiera omitido su inscripción en ellos, siendo en consecuencia, de prueba previa, el hecho que autoriza la admisión de los medios supletorios. En el caso ocurrente, existía el registro parroquial en que debió asentarse el matrimonio en cuestión, según así resultaba del oficio librado al efecto y si en él no aparecía inscripto, al interesado incumbía, antes de apelar al medio supletorio de la posesión de estado, comprobar por cualquier género de prueba, el hecho de la celebración del matrimonio.

1—Para la existencia del derecho de retención es necesaria la posesión de la cosa, respecto de la cual se alega el referido derecho. El derecho de retención no es un privilegio, sino un beneficio acordado por la ley á aquel que tiene en su poder una cosa, á objeto de garantizar el pago de la deuda proveniente de la misma cosa. Este derecho no puede fundarse en los arts. 443 y 446 del Cód. de Proc. El derecho de retención invocado para solicitar el embargo preventivo, debe ejercitarse oportunamente en los mismos autos en que se ordene la desposesión, y si no se hace no puede pretenderse sustituir sus efectos por otros medios en juicio de diversa naturaleza, porque la retención no es un embargo, y aunque pudiera equipararse, esta circunstancia no bastaría para armonizar la efectividad de una garantía en otra forma que no sea la establecida por la ley.



2. **Derecho de retención**—Procede el interdicto de reco-brar la posesión, si el que pretende ejercer el derecho de retención, no justifica el título de acreedor que invoca—Civ., tom. 5, pág. 192, Ser. 6ª.

3. **Derecho de retención**—Los documentos recibidos

2—Arts. 2494 y 3939 del Cód. Civ.

3—Entablada la demanda, que en definitiva tendió á la restitución de unos documentos de crédito á favor del actor y que se encontraban en poder del demandado, éste dejó vencer el término legal para evacuar el traslado conferido, dándosele por contestada en rebeldía. Cualquiera que sea el efecto que deba atribuirse á la contestación, y aun admitiendo que solo importa dejar conclusa la causa para prueba, siempre resultaría que la decisión judicial debe recaer exclusivamente sobre la acción deducida, desde que el demandado no ha hecho valer defensa ni excepción alguna en la oportunidad legal. Se sigue de aquí, que las únicas pruebas que deben tomarse en consideración son las relativas á los hechos invocados en la demanda, desestimando, en consecuencia, toda la producida por el demandado, desde que no versando sobre hechos alegados, tiene forzosamente que rechazarse por imper-tinente—art. 108 del Cód. de Proc.—Ahora bien: él justificó plenamente por confesión del demandado, que le entregó documentos á cobrar por el valor de 18,943 francos, los mismos que fueron convertidos en tres pagarés de 667 pesos 75 centavos cada uno, extendidos á nombre del demandado. Quedando pues, comprobado el hecho principal en que reposaba la demanda, faltando únicamente á resolver si procedía la acción deducida, que consistía, como se ha dicho, en que se obligase al demandado á la entrega de los mencionados pagarés, debiendo previamente hacerse constar, que aunque extendidos á nombre del demandado, pertenecían al actor. No podía haber controversia alguna respecto al derecho que tiene el actor para exigir la restitución de documentos entregados al mandatario, una vez que dé por terminado el mandato conferido. Los arts. 1909, 1911 y 1970 del Cód. Civ., son terminantes. El Inferior sinembargo, fundándose en hechos alegados estemporáneamente, declaró que el demandado tenía derecho á retenerlos hasta tanto se abonase la comisión pactada. En la hipótesis de que fuera lícito admitir la defensa opuesta por el demandado recién al alegar de bien probado, ella sería de todo punto improcedente, pues la comisión pactada y en la que fundaba el demandado su derecho de retener, lo había sido, como el mismo lo reconoció, por los cobros

por el mandatario por cuenta de su mandante deben ser entregados á éste; carece del derecho de retención, si la demanda se dió por contestada en rebeldía—Civ., tom. 3, pág. 368, Ser. 6ª.

**Derecho de retención**—V.: *Alquileres*, 21; *Constructor*, 2.

1. **Desalojo**—La inapelabilidad del auto de desalojo, ha sido establecida solo en beneficio del locador, quien puede siempre apelar de la resolución dictada en todo ó en parte—Civ., tom. 5, pág. 31, Ser. 5ª.

2. **Desalojo**—El auto que decreta el desalojo es inapelable, cualesquiera que sean los fundamentos del demandante al exigirlo, si de oficio se reconoce que él procedía por otras causas—Civ., tom. 5, pág. 157, Ser. 5ª.

3. **Desalojo**—Si el demandado por desalojo niega su

que hiciera, y lejos de haber justificado que cobrara el valor de los documentos que se le entregaron con ese esclusivo objeto, confesó que se limitó á convertirlos en tres pagarés á plazos diferentes y por sumas que no alcanzaban al monto del crédito originario. Las ventajas y utilidades que tales operaciones pudieron reportar al mandante, serán irrefutables si se quiere, pero no bastaron para demostrar que estuvieran comprendidas en la comisión pactada, esto es, que obligaran al mandante á pagar la remuneración convenida. Se dirá que de todos modos debe abonarse alguna retribución al mandatario, con arreglo al art. 1958 del Cód. Civ., pero si tal derecho le asiste, debió ejecutarlo por medio de una reconvención y si no lo hizo no se pudo—ó podía—acordar de oficio, porque de concesión en concesión se concluiría por convertir á la justicia en defensora del demandado, cuyas omisiones supliría en detrimento del actor á quien se condenaría sin oírlo sobre el particular, cuando tal vez tuviera legítimas escepciones que oponer.

1—Porque si se declarasen inapelables los autos para el actor, en vez de beneficiársele con esa disposición como ha sido la mente de la ley, se le perjudicaría, lo que sería un absurdo.

2—Véase: verb. *De oficio*, 2.

3—El demandado dijo que no era locatario, y no habiéndose designado otra persona contra quien podía hacerse efectivo el embargo, no era procedente el mandamiento.



carácter de locatario, no puede decretarse embargo preventivo sobre los objetos que ocupan el predio arrendado—Civ., tom. 5, pág. 213, Ser. 5ª.

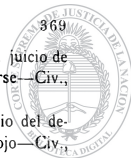
4. **Desalojo**—Justificado el carácter de inquilino y la falta de pago, debe decretarse el desalojo, aun cuando aquél no tenga su domicilio en el predio arrendado—Civ., tom. 9, pág. 281, Ser. 6ª.

5. **Desalojo**—Debe rechazarse el interdicto de despojo, si el lanzamiento se verificó judicialmente y en virtud de acción de desalojo tramitada en forma—Civ., tom. 8, página 199, Ser. 6ª.

---

4—El propietario presentó un documento por el que se establecía que el demandado había vendido á aquél la propiedad cuyo desalojo se pedía, quedando el vendedor como inquilino de ella por el término de seis meses. El inquilino no concurrió á ninguna de las dos audiencias para que fué citado, teniendo presente lo preceptuado en los arts. 587 y 591 del Cód. de Proc, se decretó el desalojo solicitado.

5—Consiguiéndose el lanzamiento con el mandato y la intervención de la autoridad competente, no se comete la violencia, á la tenencia de la cosa y con ella á la persona, que caracteriza el despojo, y que consiguientemente es requerida por la ley para el progreso del juicio de interdicto. Este antecedente por sí solo resuelve la cuestión, y de ahí la razón por la que se juzgó innecesario entrar á apreciar si la actora era ó no poseedora de la cosa vendida y entregada judicialmente en nombre de los dueños al comprador que solicitó la entrega. Las incorrecciones de procedimiento que puedan cometerse en el juicio de desalojo, no modifican la situación de las partes, porque con ellas no se prueba que el demandante por sí y ante sí haya violentado la tenencia ú ocupación del demandado con mayor razón si se observa que por las cédulas del caso, se notificó á los ocupantes de la casa la resolución judicial, y que no constaba de autor que el demandante hubiese hecho entonces observación alguna. Si los procedimientos judiciales son incorrectos y causan perjuicio, podrán ó nó, motivar una acción ordinaria, pero no fundar el despojo. Los precedentes judiciales han declarado en casos análogos la improcedencia de esta acción sumaria. Véase: tom. 7º, pág. 362, Ser. 1ª.



6. **Desalojo**—Justificada la existencia de un juicio de desalojo, el interdicto de despojo debe rechazarse—Civ., tom. 8, pág. 204, Ser. 6ª.

7. **Desalojo**—Negado el carácter de locatario del demandante, no puede prosperar el juicio de desalojo—Civ., tom. 8, pág. 364, Ser. 6ª.

8. **Desalojo**—El interdicto de retener no basta para or-

---

6—Ha quedado consagrado por la jurisprudencia, que contra las resoluciones judiciales legalmente dictadas no proceden los interdictos. Véase el núm. precedente.

7—Vendido un campo con pacto de retroventa, quedando el vendedor como inquilino, éste a su vez lo subarrendó a un tercero. Vencido el plazo no recuperó la propiedad, pero pretendió continuar cobrando el alquiler a los subarrendatarios; éstos alegaron que no eran inquilinos de él sino de los compradores, dueños irrevocables del campo por haber vencido la retroventa. El demandante contestó que no era exacto que hubiese vendido el campo, sino que había celebrado un contrato de hipoteca al que se dió la forma de venta con pacto de retroventa, y que por tanto los demandados continuaban siendo locatarios en virtud del contrato que por cinco años celebraron, y que dada la naturaleza del juicio de desalojo, la cuestión de propiedad no puede ser discutida ni tomada en cuenta, estando comprobado el carácter de locador en legal forma: se resolvió que no procedía el desalojo porque resultaba la enajenación hecha por instrumento público del inmueble cuyo desalojo se demandaba, sin que existiese constancia de que el enajenante hubiese hecho efectivo el derecho de retrotraerlo en el plazo fijado en el mismo instrumento ya vencido con exceso a la fecha de la demanda. Además no había antecedente alguno que hiciera siquiera verosímil el hecho afirmado, de tratarse de un contrato de préstamo hipotecario bajo la forma de una venta con pacto de retroventa, ni de que el comprador hubiese prorrogado en manera alguna el plazo convenido para el pago. Por último, dificultades legales de mayor gravedad que podrían obstar al progreso de la defensa consistentes en la falta de posesión por el comprador de la cota enajenada, no existía en el caso ocurrente, en razón de constar espresamente en el mismo instrumento de venta, que el comprador había tomado posesión de la propiedad.

8—Esta cuestión fué resuelta en disidencia. La mayoría sostuvo

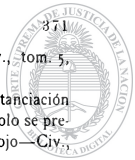


nar la suspensión y acumulación del juicio de desalojo—  
Civ., tom. 7, pág. 96, Ser. 6ª.

9. **Desalojo**—El locatario carece de derecho para deducir interdicto de retener contra el que á título también de locatario exige el desalojo, si ambos reconocen la pro-

lo resuelto en el sumario, fundándose en que el juicio de desalojo y el de interdicto son de distinta naturaleza y que además, en el caso ocurrido, se ventilaban ante jurisdicciones diferentes, por cuyo motivo no procedía la acumulación que se solicitó. El juicio de desalojo se seguía ante el Juez de Paz y el de interdicto ante el de 1ª Inst. La minoría dijo: «Tratándose del interdicto de retener la posesión, que suspende por su naturaleza todo acto y todo procedimiento que tienda á alterar su estado actual y no siendo la oportunidad de tomar en consideración su procedencia ó improcedencia sino en la época determinada por el art. 576 del Cód. de Proc., el juicio de desalojo debió suspenderse.»

9—El art. 574, inc. 1º, Cód. de Proc., requiere que el que intente el interdicto de retener se encuentre en la actual posesión de la cosa, y el 2480, Cód. Civ. establece: «que la posesión para dar derecho á las acciones posesorias no debe ser precaria, sino á título de propietario.» Ahora bien: el mismo actor espresó que solo poseía á título de locatario, pero como representaba al propietario en la posesión del inmueble, estaba habilitado para deducir el interdicto. Como se comprende, esto es un error, porque el hecho de ser inquilino no constituye representación para deducir acciones á nombre del propietario, ni hay ley que lo autorice. El art. 2496 estatuye: «que solo habrá turbación en la posesión cuando, contra la voluntad del poseedor del inmueble, alguno ejerciere, con intención de poseer actos de posesión de los que no resultase una exclusión absoluta del poseedor», y el 2497 dice: «si el acto de la turbación no tuviese por objeto hacerse poseedor el que lo ejecuta, la acción de poseedor será juzgada como indemnización de daños y no como acción posesoria»; de donde se desprende, que aun en el supuesto de que el actor en su carácter de inquilino tuviese derecho para intentar acciones posesorias, la deducida sería de todo punto improcedente desde que el demandado en su esposición reconoció, de acuerdo con el actor, en que el propietario del inmueble era un tercero y desde que con la demanda de desalojo no pretendía para sí la posesión de la finca objeto del interdicto, pues solo alegaba como fundamento de su derecho, un contrato de arrendamiento anterior celebrado con el dueño del inmueble.



piedad y posesión en la misma persona—Civ., tom. 5, pág. 215, Ser. 6<sup>a</sup>.

10. **Desalojo**—No debe hacerse lugar sin sustanciación á la recusación con causa, si con la alegada solo se pretende obstruir la secuela de un juicio de desalojo—Civ., tom. 4, pág. 423, Ser. 6<sup>a</sup>.

11. **Desalojo**—El lanzamiento de los sublocatarios, no puede conceptuarse juicio nuevo; debe conocer el juez del desalojo—Civ., tom. 3, pág. 428, Ser. 6<sup>a</sup>.

12. **Desalojo**—No procede éste en juicio sumario por falta de pago de los alquileres, si la casa ha sido subarrendada en virtud de cláusula facultativa del contrato—Civ., tom. 2, pág. 133, Ser. 6<sup>a</sup>.

13. **Desalojo**—El interdicto de despojo debe ser recha-

---

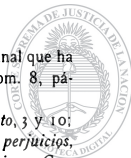
10—Después de haber sido recusado con causa el juez en el juicio de desalojo, se dedujo una nueva recusación alegando el parentesco de la parte con el juez, ofreciendo comprobar los hechos con el testimonio de la misma parte y de su hermano residente en Italia. La Cám. consideró evidente el propósito de asumir el juicio, rechazándolo sin sustanciación, con el solo informe del juez, multando en 80 \$ á la parte que dedujo la recusación.

11—Porque el lanzamiento es la finalización del juicio de desalojo.

12—En caso de subarriendo el subarrendatario queda constituido en la obligación de pagar directamente al locador los alquileres que el locatario dejare de pagar, con la limitación establecida en el art. 1601, inc. 2º del Cód. Civ. Luego pues, no solo el arrendatario debe ser constituido en mora por falta de pago de dos mensualidades, sino también el subarrendatario debe ser requerido en el pago.

13—En este caso no hubo disidencia como en el núm. 8. El desalojo decretado en juicio no puede nunca dar lugar á la acción de despojo, porque ésta supone, por el contrario, la prescindencia de los tribunales, y tiene por objeto evitar que ninguno sea osado de hacerse justicia por su propia mano. Los actos de los tribunales no constituyen pues, un despojo, como tampoco constituirían hurto, tratándose de cosas muebles; y otras han de ser las defensas, recursos y medios á que den lugar sus resoluciones. La violencia y clandestinidad, de





zado, si el actor reconoce que existe un tribunal que ha ordenado el desalojo del inmueble—Civ., tom. 8, página 151, Ser. 5<sup>a</sup>.

**Desalojo**—Véase: *Contrato de arrendamiento*, 3 y 10; *Alquiler*, 6, 8, 9, 11, 27, 29 y 30; *Daños y perjuicios*, 6, 7 y 60; *Casa locada*, 3; *Interdicto de despojo*, 2; *Contrato escrito*, 1; *Interdicto de retener*, 4.

**Desconocimiento**—Véase: *Agente fiscal*, 1.

1<sup>a</sup>. **Descubrimiento**—Y revelación de secretos, debe ser castigado con un año de arresto—Crim., t. 8, p. 5, S. 3<sup>a</sup>.

**Descubrimiento**—Véase: *Cartas*, 1.

1<sup>b</sup>. **Desistimiento**—De una parte de la prueba, no priva de producir la que no se haya renunciado espresamente—Civ., tom. 10, pág. 404, Ser. 6<sup>a</sup>.

2. **Desistimiento**—Cualesquiera que sean las estipulaciones sobre irrevocabilidad del mandato, el mandante

que habla el art. 581 del Cód. de Proc. son incompatibles con la intervención de los tribunales de Justicia, establecidos para impedir la violencia y el fraude, haciendo prevalecer el derecho. Véase: Llerena, tom. 4<sup>o</sup>, pág. 163.

1<sup>a</sup>—Art. 173 del Cód. Pen.

1<sup>b</sup>—La renuncia de una parte de la prueba no implica la renuncia del todo. Además, las renunciaciones no se presumen sino que deben constar espresamente.

2—El mandato irrevocable se había conferido para iniciar y proseguir una acción de filiación natural. El mandante desistió de la demanda y el mandatario se opuso á ese desistimiento, resolviéndose que aquél procedía porque tratándose de cuestiones que afectan el estado civil de las personas, cualesquiera que sean los términos del contrato celebrado entre los contratantes no puede tener el alcance que el mandatario le atribula, porque sería contrario á lo que establece el art. 845 del Cód. Civ. Es inadmisibile en un extraño la facultad de obligar á una persona á que se reconozca hijo natural de otra cuando la ley niega este poder hasta al mismo padre natural. Tal facultad, aun cuando fuese emanada de un contrato, no tendría valor alguno, porque sería violatorio de la disposición del art. 953 del citado Cód., que prohíbe

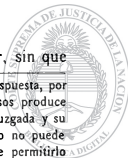
puede desistir, sin perjuicio de su responsabilidad para con el mandatario—Civ., tom. 9, pág. 249, Ser. 6<sup>a</sup>.

3. **Desistimiento**—Las transacciones judicialmente aprobadas, no pueden ser desistidas: solo puede pedirse su cumplimiento—Civ., tom. 8, pág. 335, Ser. 6<sup>a</sup>.

4. **Desistimiento**—Antes de trabado el juicio por celebrar contratos que atenten contra la libertad de las acciones ó de la conciencia. Este desistimiento trae aparejada la responsabilidad del mandante por falta de cumplimiento del mandato-contrato.

3—Arts. 838 y 850 del Cód. Civ.

4—Se trataba de una demanda de filiación de la que desistió el actor después de notificado el demandado, pero antes de ser contestada. El demandado se opuso al desistimiento, fundándose en que á pesar de que su oposición no estuviera de acuerdo con la doctrina común y corriente en todos los casos generales, no puede desconocerse, á la vez que las leyes objetivas solo rijen cuando no están en oposición con las leyes de fondo, y que aquéllas tienen sus efectos y consecuencias jurídicas señaladas, pero jamás para las escepciones consignadas en disposiciones legales más primordiales. Aplicando ese principio tan elemental y sencillo á la controversia suscitada con motivo de los efectos de la *litis-contestatio* y á la discusión producida respecto á la oportunidad legal de desistir, cambiar ó retirar las acciones entabladas, se desprende de suyo naturalmente, que si la prohibición legal invocada, del art. 262 del Cód. Civ. existe en el caso presente, como ésta es una ley de preferencia, ella viene á ser una escepción á las reglas generales conocidas. Y la razón y el fundamento de la escepción, es obvia y facilísima de haberla tenido en cuenta. En todos los casos generales, en que generalmente también, solo se trata de intereses pecuniarios, los efectos de la *litis-contestatio* son bien conocidos, y el desistimiento de las acciones puede hacerse siempre que la demanda no hubiese sido contestada. ¿Por qué? Por el evidentísimo motivo de que se trata de intereses y derechos renunciables, porque son pecuniarios. Aceptada la renuncia, la obligación queda estinguida—art. 868 del Cód. Civ.—y cuando la renuncia versa sobre derechos litigiosos, les son aplicables los reglas de las transacciones—art. 871—y uno de los efectos principales de estos, es que tienen la autoridad de la cosa juzgada—art. 850.—De ahí, pues, que perfectamente se ha establecido en las leyes objetivas, que en las generalidades de los casos, se puede desis-



manda y contestación, el actor puede desistir, sin que

tirantes de estar trabado el pleito por demanda y por respuesta, por que, como se acaba de ver, el desistimiento en esos casos produce para aquel en cuyo favor se hace, el efecto de la cosa juzgada y su derecho queda inconvencible. Pero cuando el desistimiento no puede tener ese efecto de la cosa juzgada, ¿cómo había la ley de permitirlo cuando no produce las consecuencias jurídicas y naturales dejando vacilante é indeciso el derecho de los interesados? Imposible de atribuir semejante intención, ni tal espíritu á la ley. Si el derecho de reclamar la filiación no se extingue por renuncia—art. 262—si ya hemos visto que tratándose de renunciar derechos, es de todo punto imposible desistir sobre las acciones entabladas sobre ellos, porque tal desistimiento ó renuncia no produciría sus efectos legales y naturales, que es, como se ha establecido, la extinción de las obligaciones y el sello, por consiguiente, de la cosa juzgada. Ahora bien, una cosa sobre la cual no se puede desistir. hay que proseguirla, hay que seguirla adelante, porque no se conoce en la práctica forense un caso de un litigio que no pudiendo interrumpirse, paralizarse, ó solucionarse por la simple voluntad de las partes, pueda quedar sin resolución final, por que si la ley prohíbe que se desista, á *fortiori* exige que se resuelva. No cabe otra solución. Todo pleito que se inicia, tiene que terminar por una solución judicial. Solo hay tres escepciones: que se desista del pleito, ó que se transe, ó que se abandone; luego, si no se puede desistir, ni transar, hay que terminarlo por el fallo respectivo, aunque el colitigante lo abandone. No hay disposición legal alguna que permita que haya asuntos sometidos á la jurisdicción de los Trib., que puedan quedar pendientes. A todos hay que imprimir el sello de la cosa juzgada, ya sea que ésta se derive del fallo de los jueces ó del arreglo, de la renuncia, ó transacción de las partes. Y si ésta es la consecuencia lógica del derecho para todos estos casos de escepción en general, con más razón tiene que serlo tratándose de herencias, en las cuales los bienes que constituyen su acervo, no pueden quedar dependiendo tan solo de un título, por decirlo así, provisorio y amenazado de un desconocimiento perpetuo. En las acciones sobre cuestiones de estado, una vez iniciadas, ellas no pueden suspenderse ni dejarse sin resolución final, porque esto es lo que interesa al orden y á la moral de las familias, y á la firmeza, á la seguridad y á la solidez de las transmisiones sucesorias; y otra cosa no han podido jamás disponer las leyes, como efectivamente no lo han dispuesto, según queda establecido. Esta doctrina no fué admitida por la Cám., porque en tanto

ello importe una renuncia de acciones—Civ., tom. 7, página. 146, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Desistimiento**—Véase: *Comprador*, 4, 5, 9, 19, 26 y 28; *Remate judicial*, 4, 9 y 11; *Posesión*, 8; *Costas*, 20, 26, 41 y 62; *Recusación*, 19; *Apelación*, 12; *Arrendamiento*, 1; *Diligencias de prueba*, 8; *Testigos*, 7; *Cédula*, 4.

**Deslinde**—Véase: *Comprador*, 9.

**Despfectos**—Véase: *Casa locada*, 2.

1<sup>a</sup>. **Despojo**—Justificada la posesión y el despojo violento, debe declararse procedente el interdicto de obra nueva—Civ., tom. 6, pág. 423, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Despojo**—Véase: *Interdicto de despojo*, 1; *Interdicto de recobrar*, 2; *Desalojo*, 5 y 6.

**Desposesión**—Véase: *Derecho de retención*, 1.

1<sup>b</sup>. **Desposesión absoluta**—Si los actos en que se funda el interdicto de despojo son meramente una turbación en la tenencia de la cosa, sin que importen desposesión absoluta, debe declararse improcedente—Civ., tom. 6, pág. 227, Ser. 6<sup>a</sup>.

---

la demanda no haya sido contestada, no se crea vinculación alguna entre actor y demandado—Ley 3<sup>a</sup>, tit. 10, Part. 3<sup>a</sup>.—No existiendo, le asiste al actor perfecto derecho para desistir de su demanda, del mismo modo que puede alterar ó modificar sus términos, pues con ello no causa al adversario daño ó trastorno especial, desde que no pudiendo compelerlo al ejercicio de sus acciones, vendría á encontrarse en la misma situación en que se encontraba antes de la demanda ó de sus modificaciones—Ley 4<sup>a</sup>, tit. 1<sup>o</sup>, Part. 3<sup>a</sup>.

1<sup>a</sup>—Arts. 2468, 2469, 2472 y 2494 del Cód. Civ.

1<sup>b</sup>—El art. 2497 del Cód. Civ. dispone, que si el acto de turbación no tuviese por objeto hacerse poseedor el que lo ejecuta, la acción del poseedor será juzgada como indemnización de daño y no como acción posesoria. Es verdad que tratándose del despojo, la ley es más liberal que cuando se trata de la acción posesoria, y de aquí que el art. citado agregue, que si el acto tuviese el efecto de escluir absolutamente al poseedor de la posesión, la acción será juzgada como despojo.



1<sup>a</sup>. **Detentador**—Justificada la propiedad del inmueble, el detentador de los títulos debe ser obligado á su devolución—Civ., tom. 8, pág. 200, Ser. 6<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Deuda**—Negada ésta, corresponde la prueba al demandante—Civ., tom. 8, pág. 18, Ser. 5<sup>a</sup>.

**Deuda**—Véase: *Contribución directa*, 1; *Consignación*, 1, 3 y 12; *Alquiler*, 11; *Embargo preventivo*, 18, 26 y 35; *Locatario*, 2; *Fiador*, 2; *Legítimo abono*, 1; *Albacea*, 2; *Bienes de la esposa*, 3; *Confesión*, 1; *Costas*, 47; *Cantidad líquida*, 1; *Constructor*, 2; *Activo y pasivo*, 1; *Papeles de comercio*, 1; *Testimonio*, 1; *Certificados*, 1; *Cesión de bienes*, núm. 3.

**Deudas**—Véase: *Bienes de la esposa*, 1 y 2; *Excepción de pago*, 6; *Juicio ejecutivo*, 2; *Confesión estrajudicial*, 1; *Embargo preventivo*, 30; *Prueba escrita*, 1; *Certificados*, 1; *Cesión de bienes*, 3; *Herederos*, 12.

**Deudor**—Véase: *Comerciante*, 1; *Inhibición*, 4; *Obligación condicional*, 2; *Banco Nacional*, 1; *Cláusula especial*, 1; *Obligación sin plazo*, 1; *Embargo*, 2 y 7; *Costas*, 32, 43 y 50; *Nulidad de la ejecución*, 2; *Cesión de bienes*, 4; *Concurso*, 6; *Obligación*, 2; *Comprador*, 14; *Bienes embarcados*, 1, 3, 5, 14 y 15; *Domicilio*, 3, 6 y 17; *Ausencia*, 3; *Daños y perjuicios*, 32; *Escritura pública*, 4; *Excepción de incompetencia*, 12; *Acción personal*, 2; *Acción pauliana*, 1 y 2; *Adoquinado*, 2; *Excepción de pago*, 6; *Fiador*, 3 y 4; *Nulidad del remate*, 1; *Contrato de cesión*, 2; *Servicios*, 3; *Frutos*, 2; *Locación de servicios*, 5; *Contrato de préstamo*, 2; *Demanda*, 16; *Peritos*, 6; *Actos del deudor*, 1; *Aval*, 1; *Contrato nulo*, 1; *Embargo preventivo*, 2; *Quiebra*, 3.

**Deudor hipotecario**—Véase: *Comprador*, 14.

1<sup>a</sup>—Arts. 993 y 995 del Cód. Civ.

1<sup>b</sup>—La prueba incumbe al actor—Ley 1<sup>a</sup>, tít. 14, Part. 3<sup>a</sup>.

**Devolución**—Véase: *Detentador*, 1; *Comprador*, 23; *Peritos*, 6 y 8; *Contrato social*, 4.

**Día**—Véase: *Notificación*, 19; *Interrogatorio*, 2; *Audiencia*, 5; *Testigos*, 12 y 13.

**Días inhábiles**—Véase: *Nulidad del procedimiento*, 16.

**Días señalados**—Véase: *Comprador*, 22.

1<sup>a</sup>. **Dictamen**—Adolece de nulidad la resolución que acepta el dictamen de oficinas públicas sobre puntos sometidos á la decisión judicial—Civ., t. 8, p. 268, S. 5<sup>a</sup>.

**Dictamen**—Véase: *Peritos*, 14.

1<sup>b</sup>. **Dictamen pericial**—No puede ser modificado por los

1<sup>a</sup>—Un juez ordenó que para mejor proveer pasaran los autos á la Dirección General de Rentas para que se sirviera dictaminar sobre un punto cuestionado, y devueltos éstos dijo: «téngase por resolución el dictamen de la Dirección General de Rentas.» Ahora bien, el art. 57 del Cód. de Proc. autoriza á los jueces y tribunales para que puedan dictar con calidad de para mejor proveer las diligencias que enumera, pero todas ellas tienen por objeto esclarecer hechos y no buscar ó proporcionarse opiniones sobre las cuestiones declaradas, porque éstas deben ser el resultado de la ciencia del magistrado—art. 60.—Indudablemente un auto semejante es nulo por disenciones de procedimiento, y porque en realidad no se funda en principios jurídicos. Se dirá que el informe de la Dirección invoca leyes relativas al punto en controversia, y que habiendo hecho suya el Inferior la opinión de esa oficina, la resolución debe considerarse fundada en derecho; pero, se contesta que como esa pieza no ha debido figurar en autos, ningún valor debe atribuirse á las leyes ó doctrinas que contenga. La nulidad pronunciada en estos casos, tendrá el doble resultado de dejar imperante el precepto del art. 63 del Cód. de Proc. y de evitar que se compliquen y retarden los procedimientos judiciales con tramitaciones inútiles y desautorizadas por el derecho.

1<sup>b</sup>—Se trataba de una liquidación practicada por peritos en ejecución de una sentencia que mandaba entregar un número determinado de cabezas de ganado lanar con sus frutos correspondientes. El vencido objetó la liquidación en numerosas partidas, siendo atendidas las que estaban basadas en pruebas constantes de autos. El juez consideró algunas de ellas como inconducentes ó inatendibles por falta de prueba,



jueces sin prueba plena de que sus conclusiones son manifestamente erróneas—Civ., tom. 3, pág. 203, Ser. 6ª.

**Diferencia**—Véase: *Alquiler*, 16; *Contrato de compra venta*, núm. 7.

**Dilatorias**—Véase: *Escepción dilatoria*, 1 y 2.

**Diligencia**—Véase: *Notificación*, 6; *Fallecimiento*, 1.

**Diligencias**—Véase: *Herederos*, 11; *Firma*, 3; *Ausencia*, 1; *Notificación*, 18.

1ª. **Diligencias de notificación**—Debe declararse la nulidad de la notificación, si se han omitido las diligencias que la ley prescribe—Civ., tom. 3, pág. 108, Ser. 6ª.

1ª. **Diligencia preparatoria**—Si el documento no tiene carácter ejecutivo, es improcedente el reconocimiento de la firma como diligencia preparatoria del juicio—Com., tom. 7, pág. 148, Ser. 3ª.

2. **Diligencia preparatoria**—No procede como diligencia preparatoria del juicio, la manifestación del poseedor sobre el título de su posesión—Civ., t. 4, p. 48, Ser. 6ª.

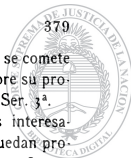
**Diligencias preparatorias**—Véase: *Competencia*, 14.

puesto que tratándose de hechos que requieren conocimientos especiales, el juez no podía olvidar el carácter de peritos que tenían los liquidadores, de manera que para poderse apartar de sus opiniones, habría sido necesario la prueba del error de las apreciaciones de ese dictamen.

1ª—En el emplazamiento se omitió el aviso previo á la notificación por cédula que preceptúa el art. 77 del Cód. de Proc. en su 2ª parte.

1ª—No está comprendida entre las autorizadas por el art. 67 del Código de Proc. como medidas preparatorias del juicio ordinario. Si se pretendiera preparar la vía ejecutiva tampoco sería procedente, porque se prepara la vía ejecutiva cuando por el reconocimiento puede seguirse el juicio ejecutivo, de lo contrario sería una medida legalmente inútil.

2—No está autorizada la medida por el art. 67, inc. 1º del Código de Procedimientos.



1. **Diligencias de prueba**—El juez á quien se comete una diligencia de prueba, no puede resolver sobre su procedencia ó validez—Crim., tom. 9, pág. 104, Ser. 3<sup>a</sup>.

2. **Diligencias de prueba**—Corresponde á los interesados urgir las diligencias de prueba para que puedan producirse dentro del término legal—Com., tom. 8, página 59, Ser. 3<sup>a</sup>.

3. **Diligencias de prueba**—El término extraordinario de prueba concedido á una parte, no aprovecha á la contraria para producir diligencias después de vencido el ordinario—Com., tom. 8, pág. 83, Ser. 3<sup>a</sup>.

4. **Diligencias de prueba**—Para negar las diligencias de prueba después de vencido el término, no es necesario oposición de parte—Civ., tom. 6, pág. 312, Ser. 5<sup>a</sup>.

5. **Diligencias de prueba**—La falta de representación de la parte contraria, no impide activarlas; su paralización en este caso importa negligencia—Civ., tom. 10, pág. 36, Ser. 6<sup>a</sup>.

---

1—El juez comisionado debe limitarse á recibir las pruebas encomendadas sin avocarse el conocimiento de incidentes ajenos á su cometido. Solo al juez de la causa corresponde resolver la oportunidad y procedencia de la prueba.

2—Art. 118 del Cód. de Proc.

3 - Con arreglo al art. 118 del Cód. de Proc. la prueba debe producirse durante el término extraordinario solo para aquella prueba que lo exige y siempre que concurren los requisitos del art. 114. Por lo tanto, es insostenible la pretensión, de que la prueba que ha debido producirse durante el término ordinario pueda incluirse dentro del extraordinario, no solo ante las disposiciones recordadas, sino también porque el término último es el de escepción, y como tal, solo rige para las medidas que lo requieran.

4—El término de prueba es fatal, y basta su solo trascurso para que se pierda el derecho de la parte para usar de las medidas legales que podrían ejercer dentro del término probatorio.

5—Porque debe urgir á fin de que la representación sea integrada en legal forma.





6. **Diligencias de prueba**—No practicadas por negligencia de la parte, no pueden serlo después de vencido el término—Civ., tom. 10, pág. 64, Ser. 6ª.

7. **Diligencias de prueba**—Su denegación causa gravamen irreparable, y es por consiguiente apelable—Civ., tom. 10, pag. 83, Ser. 6ª.

8. **Diligencias de prueba**—Si en oportunidad la parte hace suyas las diligencias solicitadas por la contraria, deben cumplirse aun cuando el que las pidió desista de producirlas—Civ., tom. 7, pág. 106, Ser. 6ª.

9. **Diligencias de prueba**—Si la parte no insta el cumplimiento de las diligencias solicitadas, deben quedar sin efecto—Civ., tom. 7, pág. 141, Ser. 6ª.

10ª. **Diligencias de prueba**—Siendo la prueba, de interpretación ampliativa, pueden pedirse todas las diligencias que no estén espresamente prohibidas por la ley—Civ., tom. 6, pág. 13, Ser. 6ª.

10<sup>b</sup> **Diligencias de prueba**—Los testigos pueden ser presentados cuatro días antes de vencer el término de prueba—Civ., tom. 6, pág. 13, Ser. 6ª.

11. **Diligencias de prueba** —Al que solicita las diligencias

6 - La parte dejó pasar 16 días sin reiterar las medidas de prueba pendientes.

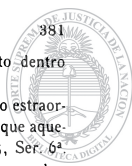
7—Es jurisprudencia constante de la Cám. Véase: Inst., tom. 5º, verb. *Diligencias de prueba*, 9.

8—Porque adquiere respecto de esa prueba, igual derecho que la contraria, ya sea para su producción ó para su desistimiento.

9—Art. 118 del Cód. de Proc.

10<sup>b</sup>—Porque tiene tres días para estar de manifiesto y uno para su examen.

11—Como medida de prueba se solicitó que un escribano de registro certificara cómo era cierto que un testimonio de escritura tenía su nombre equivocado procedente de error de copia. Proveído de conformidad, la parte dejó pasar el término de prueba sin siquiera urgir



de prueba, corresponde urgir su cumplimiento dentro del término—Civ., tom. 6, pág. 94, Ser. 6ª.

12. **Diligencias de prueba**—Durante el término extraordinario, no pueden decretarse otras diligencias que aquellas para que fué concedido—Civ., t. 5, pág. 35, Ser. 6ª.

13. **Diligencias de prueba**—No deben practicarse después de vencido el término, diligencias de prueba, cuya reiteración la parte no solicitó en oportunidad—Civ., tom. 5, pág. 188, Ser. 6ª.

14. **Diligencias de prueba**—No deben cumplirse después de vencido el término, diligencias no practicadas por negligencia de la parte—Civ., t. 5, p. 245, Ser. 6ª.

15. **Diligencias de prueba**—Deben ser pedidas dentro del término—Civ., tom. 4, pág. 381, Ser. 6ª.

16. **Diligencias de prueba**—Si existe negligencia imputable á la parte, no deben cumplirse las diligencias de prueba después de vencido el término—Civ., tom. 4, página 432, Ser. 6ª.

17. **Diligencias de prueba**—Pedidas dentro del término, deben practicarse aun después de vencido, si no es impu-

---

la notificación al escribano. Después de vencido el término, solicitó el cumplimiento de dichas diligencias á lo que no se hizo lugar, por cuanto el interesado había sido desidioso en su producción.

12—El término extraordinario se acuerda al solo objeto de producir las pruebas que en su petición se determinan, sin que pueda ampliarse á otras diligencias probatorias—art. 113 del Cód. de Proc.

13—No se romprobó ni constaba en autos que la parte hubiese urgido el diligenciamiento de la prueba ofrecida—art. 118 del Código de Procedimientos.

15—La prueba se solicitó dos meses después de vencido el término probatorio.

16—Se denegó la prueba retardada, «sin perjuicio de que el Juzgado, si creyere conveniente para mejor proveer, ordene su diligenciamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 55 del Cód. de Proc.»

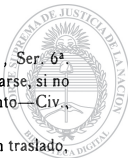


table a la parte el retardo—Civ., t. 3, pág. 21, Ser. 6<sup>a</sup>.

18. **Diligencias de prueba**—No deben decretarse, si no existen términos hábiles para su cumplimiento—Civ., tom. 3, pág. 87, Ser. 6<sup>a</sup>.

19. **Diligencias de prueba**—No importando un traslado, el hacer saber un informe del secretario, no existe término para pedir diligencias—Civ., t. 3, p. 30, Ser. 6<sup>a</sup>.

20<sup>a</sup>. **Diligencias de prueba**—No deben ser agregadas fuera del término, si no consta la causal del retardo—Civ., tom. 3, pág. 433, Ser. 6<sup>a</sup>.

20<sup>b</sup>. **Diligencias de prueba**—Cuando ellas no se producen dentro del término por culpa de las autoridades encargadas de su diligenciamiento, el juez debe señalar un término prudencial dentro del cual la parte debe presentarlas—Civ., tom. 8, pág. 386, Ser. 5<sup>a</sup>.

21. **Diligencias de prueba**—No practicadas por negli-

---

18—Solo quedaban tres días hábiles para el examen de testigos, en cuyo caso no puede darse cumplimiento al art. 184 del Cód. de Proc.

19—Esta cuestión fué resuelta por inayoría, fundándose en que el auto haciendo saber á las partes un informe no es un traslado. Traslado es la comunicación que se dá á una de las partes que litigan, de las pretensiones ó alegatos de la otra, á fin de que responda y concluya para prueba ó definitiva según el estado de la causa, lo que no ocurre con un auto en que se hace saber. Siendo esto así, no es aplicable á ese auto la disposición del art. 24 del Cód. de Proc. que manda que se evacuen en el plazo de seis días los traslados que no tengan un término especialmente fijado por la ley.

20<sup>a</sup>—La ley que admite la agregación de la prueba después de vencido el término, es una escepción al principio general, sentado de que ella debe procurirse dentro del término. Toda escepción debe compararse por quien la alega.

20<sup>b</sup>—Es la única forma de conciliar los dos extremos opuestos. El litigante tiene derecho á que la prueba por él pedida se produzca antes de los alegatos, y el orden público exige que los pleitos no se eternicen.

gencia de la parte, no deben serlo antes de los alegatos—Civ., tom. 1, pág. 356, Ser. 6ª.

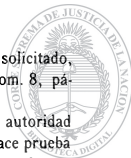
22. **Diligencias de prueba**—Pedidas después de vencido el término, deben rechazarse sin sustanciación—Civ., tom. 1, pág. 350, Ser. 6ª.

23. **Diligencias de prueba**—El término extraordinario

22—Las pruebas deben ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del término—art. 118 del Cód. de Proc.

23—Esta cuestión fué resuelta por la Cám. en el sentido expresado «teniendo en cuenta la jurisprudencia constante del Tribunal en otros casos», lo que es una absoluta inexactitud, bastando comparar este caso con el núm. 12. Son dos resoluciones contradictorias y sin embargo la Cám. con todo aplomo cita la jurisprudencia constante por ella establecida. La doctrina contenida en el núm. 12 es la que está en armonía con los principios que rijen la producción de la prueba durante el término extraordinario, porque como lo decía muy acertadamente el Dr. Evaristo Barrenechea que dictaminó en esta cuestión en su carácter de Agente fiscal, el término no es común para las partes. Su nombre mismo está indicando, que es un término escepcional, que sale de lo ordinario, y que por consiguiente, no puede confundirse con éste, aunque corra juntamente con el ordinario. Por lo mismo que es extraordinario, el juez no puede concederlo de oficio, como concede el término ordinario, por la simple circunstancia de haber hechos contradictos en una causa: es necesario que la parte que lo necesite lo pida, y esto mediante el cumplimiento de ciertos requisitos especiales para el caso; y siendo así, bien se comprende que no puede usarlo sino el que lo pide y el que ha llenado los mencionados requisitos.» El litigante contrario que no ha solicitado el término, no puede pretender que se le admita prueba que solo puede producirse en él, desde que no ha cumplido por su parte con las formalidades previas que tiene que llenar para que se le conceda. No es admisible la consideración de que no necesita cumplir éstas, toda vez que una de las partes las ha cumplido, porque entre los litigantes no hay vínculo alguno ni existen relaciones de derecho, para que lo que haga uno pueda servir al contrario para salvarlo de las consecuencias de su falta de actividad ó de su negligencia. Para que pueda otorgarse el término extraordinario de prueba, se requiere no solo que se solicite dentro de los diez primeros días después de recibido el pleito á prueba, sino también que se espese el nombre y la residencia de los testigos, así como los do-





de prueba es común, y la parte que no lo ha solicitado, puede pedir diligencias probatorias—Civ., tom. 8, página 278, Ser. 5ª.

24. **Diligencias de prueba**—El informe de la autoridad que debe cumplir las diligencias probatorias, hace prueba sobre la imposibilidad de practicarlas—Civ., tom. 8, página 386, Ser. 5ª.

15. **Diligencias de prueba**—Deben quedar sin efecto las no practicadas en oportunidad dentro del término por negligencia de la parte—Civ., tom. 2, pág. 423, Ser. 6ª.

**Diligencias de prueba**—Véase: *Prueba*, 8; *Término*, 5; *Prueba extraordinaria*, 1; *Precio*, 2; *Audiencia*, 5; *Término de prueba*, 1.

**Diligencias de trámite**—Véase: *Feria*, 1.

**Diligencias urgentes** - Véase: *Sentencia*, 1.

cumentos que hayan de testimoniarse, etc.—art. 174 del Cód. de Proc.—¿Cómo puede pretender, entonces, un litigante, que se le considere favorecido con el término extraordinario concedido al otro que ha cumplido con los requisitos mencionados, si él por su parte no lo ha solicitado en tiempo, ni menos ha espresado el nombre ni la residencia de los testigos, ni los archivos ó registros donde se hallan los documentos que hacen á su derecho? Podrá alegar que todas esas cosas las cumplió y espresó su contrario? De ninguna manera; porque los testigos presentados por éste no son los mismos, como no son ni pueden ser los mismos documentos, sino diferentes, era necesario que los designase antes de concederse el término, precisamente como una diligencia previa para que pudiera ser concedido.

24—Se habían pedido testimonios de documentos que obraban en el archivo, á cuyo efecto se libró el oficio el que quedó incontestado durante un año. Teniendo en cuenta esta demora, se ordenó la agregación de la prueba, pero la Cám. dijo, que el informe del archivo acerca de las dificultades en que se encontró para expedir los testimonios, le habían impedido llenar su cometido. Atenta esta causal, la Cám. declaró que la culpa era de las autoridades, y entonces procedía su produccion antes de los alegatos; pero que el Juzgado debía señalar un término prudencial para presentar los testimonios pedidos.



1<sup>a</sup>. **Dinero**—El dinero de menores puede ser entregado á la madre en ejercicio de la patria potestad—Civ., tom. 8, pág. 408, Ser. 5<sup>a</sup>.

**Dinero**—Véase: *Simulación*, 1.

**Directores**—V.: *Persona jurídica*, 3; *Prueba escrita*, 2.

**Director de obra**—Véase: *Compraventa*, 4.

**Directorio**—V.: *Asamblea*, 1; *Posiciones*, 2; *Gerente*, 2.

**Disconformidad**—Véase: *De oficio*, 11 y 12.

**Disolución de sociedad**—Véase: *Contrato social*, 3.

1<sup>b</sup>. **Disparo de arma de fuego**—Sin ánimo de matar, pudiendo hacerlo, se castigará con un año de prisión, aun cuando haya causado lesiones—Crim., t. 8, p. 313, S. 3<sup>a</sup>.

**Dividendos**—Véase: *Acreeedor*, 2.

**Divisibilidad**—Véase: *Excepción de novación*, 1.

**División**—Véase: *Herederos*, 7.

**División de condominio**—Véase: *Condominio*, 9.

1<sup>c</sup>. **División de patrimonio**—Para que el acreedor que

---

1<sup>a</sup>—El art. 293 del Cód. Civ. establece que el padre es el administrador de los bienes de sus hijos. Esta prescripción no tiene más limitación que la consignada en el art. 294 del mismo Cód., y por consiguiente, no puede interpretarse aquélla en el sentido de privar al padre de un derecho que la misma ley le acuerda. Por el art. 287, el padre lo mismo que la madre tienen el usufructo de sus bienes con las limitaciones que la ley espresa, y entre las que se encuentra incluido el dinero, no haciendo por otra parte, distinción dicha prescripción entre el usufructo perfecto ó imperfecto. En el sentido espresado se han pronunciado en reiteradas ocasiones los precedentes judiciales, como puede observarse entre otros, el fallo consignado en el tom. 3<sup>o</sup>, pág. 601, Ser. 2<sup>a</sup> de la Cám. de lo Civ.

1<sup>b</sup>—Arts. 99 y 120, inc. 1<sup>o</sup> del Cód. Pen.

1<sup>c</sup>—Siendo la separación de patrimonio un derecho acordado á los acreedores de la sucesión—art. 3433, Cód. Civ.—para ejercitarlo debe comprobarse previamente el carácter de tal. Para autorizar una medida de tan grave trascendencia como la separación de patrimonios equiparable en sus efectos al embargo preventivo, que solo es procedente cuando la existencia del credito sea indubitable, ó que por lo menos



exija su división pueda conseguir un embargo preventivo, su derecho debe ser indiscutible — Civ., tom. 10, página 111, Ser. 6ª.

1. **Divorcio**—El juez del divorcio, es el competente para conocer en las cuestiones para reintegrar á la esposa al hogar conyugal—Civ., tom. 6, pág. 226, Ser. 5ª.

2. **Divorcio**—La falta de intervención del Ministerio Fiscal en un juicio sobre divorcio, no causa su nulidad si su representante ratifica lo obrado—Civ., tom. 6, página 360, Ser. 5ª

3. **Divorcio**—La omisión del juicio de conciliación en las causas sobre divorcio, no basta para fundar la nulidad de lo actuado—Civ., tom. 6, pág. 360, Ser. 5ª.

4. **Divorcio**—La rectificación de la partida de registro civil, no puede conceptuarse como incidente del juicio de divorcio—Civ., tom. 10, pág. 82, Ser. 6ª.

5. **Divorcio**—Este juicio, no es asunto de feria, sino cuando se soliciten medidas conservatorias—Civ., tom. 10, pág. 349, Ser. 6ª.

---

se acumulen elementos que hagan verosímil el derecho alegado por el actor.

1— El juez dijo que esa gestión era diversa de la motivada por el juicio de divorcio, el que por otra parte estaba ya terminado. La Cám. opinó, que la reintegración de la esposa al hogar era una consecuencia del juicio seguido sobre divorcio.

2—La ratificación hace desaparecer los vicios de procedimientos— art. 1059 del Cód. Civ.—No debe olvidarse la discusión á que pueden dar lugar las ratificaciones de los juicios de los procedimientos nulos. Véase: verb. *Contrademanda*, núm. 1.

3— Véase: verb. *Conciliación*, 1.

4—La ratificación de partidas está regida por la disposición de los arts. 87 y 88 de la Ley de Registro Civ. No puede acumularse al juicio de divorcio, el procedimiento prescripto por esta disposición.

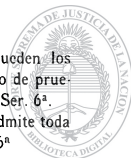
5—Se habilitó el feriado al solo efecto de fijar el depósito de la esposa.

6<sup>a</sup>. **Divorcio**—Justificadas las causales que la ley establece, debe declararse el divorcio—Civ., t. 8, p. 11, S. 6<sup>a</sup>.

6<sup>b</sup>. **Divorcio**—Si bien en estos juicios no procede el

6<sup>b</sup>—La carta fué presentada pidiéndose su reconocimiento, á lo que no se hizo lugar; pero después al dictar sentencia se la tomó en consideración, fundándose en que á ello no se opone ni el art. 70 de la Ley de Matr., ni las providencias no haciendo lugar á su reconocimiento. La disposición legal citada se concreta á prohibir la confesión ó juramento de los cónyuges con el propósito de evitar que el divorcio pueda declararse por la exclusiva cuenta de los esposos; pero ni su testis, ni su espíritu impiden apreciarla cuando existen vehementes presunciones de su autenticidad, estrañas á todo reconocimiento, y cuando no hay el menor peligro de que haya podido ser escrita al solo y único objeto de burlar la ley, ó para conseguir los esposos por mutuo consentimiento, la declaración de su separación personal. Este es el alcance que con toda razón le dado el Sr. Fiscal de las Cámaras al art. 70 de la Ley de Mat. Civ., invocando en su apoyo la autoridad de Aubry Rau.—Vista fiscal inserta en el tom. 4<sup>o</sup>, pág. 339, Ser. 4<sup>a</sup> de la Jur. Civ.—Dando cumplimiento á la disposición de Ley de Mat., se dictó la providencia no haciendo lugar al reconocimiento, porque ese reconocimiento hecho en juicio, de la carta, por la cónyuge habría importado una confesión de la falta que le atribuía su marido. Como no estaba obligada la demandante á reconocer la carta de referencia, á mérito de lo dispuesto en el art. 70 de la ley ya citada, y como el cotejo solo habría sido procedente en el caso de negar su firma la persona obligada á reconocerla—arts. 142 á 144 del Cód. de Proc.—lo que no ocurrió en este caso, el Juzgado así lo declaró, confirmándolo la Cám.; pero ninguno de estos pronunciamientos podía obstar á que la carta fuese apreciada en la oportunidad de sentencia, ni habría podido impedirlo desde que se trataba de providencias interlocutorias, en donde no es posible que el Tribunal aprecie ni haga declaraciones en cuanto al mérito de las pruebas rendidas. El esposo que presentó la carta desde el primer momento procuró, por todos los medios á su alcance, obtener la comprobación de su autenticidad, y el otro, no obstante la gravedad de los cargos que se les imputaron y á pesar de ser indiscutible el derecho que le asistía para demostrar que se le exhibía un documento falso con propósitos calumniosos, se limitó á desconocer la autenticidad de la carta, alegando que la confesión no es prueba en el juicio de divorcio, cuando precisamente se habría evitado de alegar la



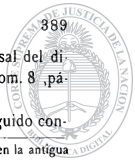


reconocimiento de cartas de los cónyuges, pueden los jueces tomarlas en consideración como elemento de prueba al dictar sentencia—Civ., tom. 8, pág. 11, Ser. 6<sup>a</sup>.

6<sup>c</sup>. **Divorcio**—Tratándose de este juicio, se admite toda clase de prueba—Civ., tom. 8, pág. 11, Ser. 6<sup>a</sup>

prueba de toda confesión para presentar con la mayor claridad los ultrajes calumniosos de su marido. Este antecedente era por demás elocuente para que pudiese pasar desapercibido. De no hacer mérito de él se prescindiría de una importante presunción que arroja la prueba, con evidente falta de razón, dada la empeñosa actividad de parte del esposo, en demostrar la verdad de los cargos que formuló á su esposa, y la circunstancia de que ésta, no obstante la gravedad de esos cargos, prescindió de ejercitar sus derechos para justificar que era víctima de ultrajes calumniosos.

6<sup>c</sup>—Tratándose de los juicios de divorcio, que por lo general se fundan en hechos que se producen en el seno del hogar doméstico, fácil es comprender que los medios de convicción son por demás fáciles. De aquí la razón por la que, en esta clase de juicios, se admiten todos aquellos medios de prueba que directa ó indirectamente demuestren la verdad, pues de no ser así, de restringir la prueba con las exigencias de la ley procesal para los demás juicios, el derecho de los esposos á solicitar el divorcio en la mayor parte de los casos sería ilusorio, no pasaría de ser una promesa escrita en la ley, sin resultados prácticos. Por eso es que el art. 70 de la Ley de Mat., inspirada en la legislación antigua, y en el derecho moderno, ha establecido que en estos juicios se admiten toda clase de pruebas, con la escepción de la confesión ó juramento de los cónyuges, única restricción que se funda en la necesidad de evitar que el divorcio se declare por la sola voluntad ó consentimiento de los esposos. Como se ve pues, nuestra ley de fondo admite la prueba privilegiada en el divorcio, y exime á los medios probatorios, de las restricciones con que la ley procesal reglamenta la prueba en el juicio ordinario. Es consecuencia de esto que el testimonio de los parientes colaterales ó afines de cualquier de los esposos, pueda y deba tomarse en consideración, atribuyéndole, como es natural, la importancia que surja del examen prudencial de sus afirmaciones. Para no entrar en mayores demostraciones relativas á este último punto, bastará recordar que la Ley 15, tít. 9<sup>o</sup>, Part. 4<sup>a</sup>, ya había consignado el principio de que en las causas de divorcio no estaban inhabilitados para declarar los parientes, deudos y domésticos



6<sup>a</sup>. **Divorcio**—Alegado el adulterio como causal del divorcio, no se requiere la prueba directa—Civ., tom. 8, página 11, Ser. 6<sup>a</sup>.

7. **Divorcio**—Adolece de nulidad el juicio seguido con-

de los esposos. Esta misma doctrina ha sido consagrada en la antigua y moderna jurisprudencia, recordando en apoyo de ella, la autoridad de Walter, Bonnier, Aubry, y Rau y Laurent. Explicando esta materia, decía el Dr. Marengo: «La Ley de Mat. dispone que en el juicio de divorcio se admitan toda clase de pruebas, con escepción de la confesión ó del juramento de los cónyuges. Esto no quiere simplemente decir, que las causas alegadas para el divorcio puedan probarse por los medios comunes y ordinarios que sirven de comprobación á los actos jurídicos, sino que en estos juicios se ha de ensanchar el criterio y apreciación de la prueba, en la que se comprende la esclusión de ciertas incapacidades de los testigos, según prudente arbitrio y reglas de sana crítica, teniendo en cuenta la índole de los hechos controvertidos. Darle aquel limitado alcance habría sido una vacuidad legislativa. El legislador ha tenido en cuenta que de la vida íntima de los esposos solo pueden tener conocimiento sus allegados, parientes ó domésticos; que en todos los tiempos y en todas las legislaciones se ha admitido el testimonio de personas así vinculadas con los divorciants, no obstante considerarlas inhábiles para declarar sobre los demás actos de la vida, y ha sido con el propósito de colocarse en las corrientes de la antigua y de la moderna jurisprudencia que ha consignado esa declaración sobre la prueba en el art. 70 de la mencionada ley.»—Vista fiscal, inserta en el tom. 5<sup>o</sup>, pág. 132, Ser. 4<sup>a</sup> de la Jurisprudencia civil.

6<sup>a</sup>—Tratándose del adulterio que se lleva á cabo con las mayores precauciones para ocultarlo, es casi imposible en la generalidad de los casos conseguir testigos presenciales á objeto de rendir la prueba directa; pero cuando hay antecedentes sospechosos que comprometen la moralidad de la esposa y cuando se exhiben documentos que esplican sus faltas sin temor de que por la confesión en juicio se burlaran los propósitos de la ley, forzoso es conocer que hay la demostración suficiente para declarar fundada la petición del divorcio.

7—Como adolecería de nulidad cualquier otro en que se discutieran, pendiente el proceso de divorcio, intereses de la comunidad con prescindencia del marido y con la sola audiencia de la esposa ó de su curador. El esposo debe intervenir en el juicio como representante



tra la esposa, por cobro de los honorarios devengados en el juicio de divorcio, sin la intervención del esposo—Civ., tom. 6, pág. 139, Ser. 6ª.

8. **Divorcio**—El juez que conoce en la demanda de divorcio, es el competente para resolver sobre la tenencia provisoria de los hijos—Civ., tom. 5, pág. 230, Ser. 6ª.

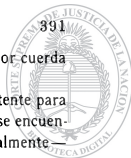
9. **Divorcio**—Los juicios sobre pérdida de la patria potestad y separación de bienes, deben tramitarse ante el

---

legal de su esposa, pues esta representación no se pierde por el hecho de encontrarse en juicio de divorcio. Consecuente con estas opiniones, debe necesariamente considerarse ajustado á derecho cualquier reclamo que se formule por el esposo de la mujer demandada, por no habersele dado la debida intervención en un juicio.

8—Producida la demanda de divorcio, el juez debe resolver sobre la tenencia de los hijos, según lo dispone el art. 68 de la Ley de Mat. Civ. La resolución judicial, en tal caso, debe tener no solo en cuenta el interés y beneficio de los hijos, sino también debe consultar en cuanto sea posible el interés social en la integridad del matrimonio de los padres, sin perder de vista la equidad. Distribuyendo los hijos entre el padre y la madre, se procura el acercamiento entre éstos, vinculándolos por el cariño que les deben tener, y la ocasión que esta distribución ofrece para que se vean con alguna frecuencia, con lo que se facilita que se suavicen los resentimientos que motivan el juicio de divorcio. Como eran dos los hijos, era justo que el menor de ellos quedase interinamente al lado de la madre, á quien debe suponerse movida del celo y cariño necesarios para cuidar eficazmente á sus hijos; tanto más, cuanto la poca edad del niño requería con preferencia los cuidados maternos que el padre no le puede prestar por la naturaleza misma de las cosas. Cualquiera que pudiera ser la verdad de los hechos imputados á la madre en la contrademanda de divorcio del padre, ellos no ponen en peligro al niño confiándolo á aquella, y aun los malos ejemplos, que en caso fuesen ciertos esos hechos, no deben temerse si se tiene presente la edad del hijo.

9—Pendiente el juicio de divorcio, estas acciones deben entablarse ante el mismo juez que entiende en aquél, por la íntima conexión que tienen entre sí. Pero como son de distinta naturaleza, no pueden acumularse.



juez que entiende en el juicio de divorcio, pero por cuerda separada—Civ., tom. 4, pág. 20, Ser. 6<sup>a</sup>.

10. **Divorcio**—El juez del divorcio, es competente para resolver sobre la tenencia de los menores que se encuentren en su jurisdicción, aunque sea accidentalmente—Civ., tom. 4, pág. 25, Ser. 6<sup>a</sup>.

11. **Divorcio**—Pendiente el juicio de divorcio, los menores depositados en un colegio, no pueden ser sacados por los padres, bajo ningún concepto—Civ., tom. 4, página 25, Ser. 6<sup>a</sup>.

12. **Divorcio**—No procede la escepción de litispendencia, si la acción de divorcio se funda en hechos posteriores á la demanda deducida con anterioridad—Civ., tom. 3, pág. 19, Ser. 6<sup>a</sup>.

13. **Divorcio**—Aun después de rechazado el divorcio, no puede decretarse la prisión de la esposa que se niegue á vivir en el domicilio conyugal—Civ., tom. 3, página 83, Ser. 6<sup>a</sup>.

14<sup>a</sup>. **Divorcio**—Justificado el adulterio, procede la declaración de divorcio—Civ., tom. 2, pág. 24, Ser. 6<sup>a</sup>.

11—Este sumario está equivocado, y de los antecedentes de la causa resulta lo contrario. Los padres estuvieron de acuerdo en que los hijos quedaran en el colegio en que estaban. La madre se opuso á que el padre los sacara, pero se resolvió que no era posible disponer que el padre quedase impedido de sacar á los menores del colegio en que se encontraban, pues sería menoscabar los derechos que la ley le confiere sobre la persona de sus hijos, toda vez que no constaba de autos y no se había demostrado que se hallase privado de la patria potestad.

12—Porque á pesar de que hay identidad de personas y de objeto, no la hay de causa.

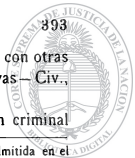
13—Un procedimiento contrario no se ajustaría á lo dispuesto en el art. 53 de la Ley de Mat. Civ.

14<sup>a</sup>—Es una de las causales señaladas por el art. 67 de la Ley de Matrimonio Civil.



#### 14<sup>b</sup>. Divorcio—La confesión es admisible en los jui-

14<sup>b</sup>—Este sumario ha sido omitido en los fallos. Se funda en que la ley ha tenido en cuenta que la sociedad y el orden público están vivamente interesados en la conservación del matrimonio en toda su integridad, y por eso el art. 65 de la ley de la materia, dice: no hay divorcio por mutuo consentimiento de los esposos. Pero á la vez de esta exigencia del orden público, la ley ha tenido también en consideración la dificultad de la prueba de los hechos que constituyen las causas para demandar el divorcio, las que casi siempre están veladas por la inviolabilidad del hogar en que se producen, y mucho más tratándose del adulterio, que por su propia naturaleza escapa á toda comprobación directa, á no ser en el rarísimo caso de flagrante delito. Combinando prudentemente estas circunstancias, la ley ha privado á los esposos, en el juicio de divorcio, de la prueba de la confesión, porque de no hacerlo así habría sido mera disposición doctrinaria, la del art. 66. Pero en cambio los ha autorizado para justificar las causas legales para el divorcio por toda otra clase de pruebas. Toda clase de prueba, dice el art. 70, será admitida en este juicio, con escepción de la confesión ó juramento de los cónyuges. Esta prueba que se califica de privilegiada, es la que se hace por presunciones, bastando que ellas sean de tal naturaleza que lleven al ánimo del juez el convencimiento de los hechos sobre que versan. Y al decir el art. 70 que se exceptúa la prueba de confesión ó juramento de los cónyuges, no ha entendido escluir en absoluto ese medio probatorio, sino cuando es exclusivo, para evitar el fraude á la misma ley que no admite el divorcio por mutuo consentimiento; pero no la confesión que es uno de tantos elementos de convicción traídos al juicio y cuando ella está corroborada por otras pruebas y aun por meras presunciones siendo éstas graves, precisas y concordantes. Sostener que la prueba del adulterio en el juicio de divorcio, solo es tal cuando se trata de delito flagrante, es exigir para el juicio civil mayor y mejor prueba que en el juicio criminal, puesto que para la imposición de las penas no se requiere esa circunstancia; y sobre todo, es desconocer el alcance de la disposición consignada en el art. 70 citado. El adulterio por regla general no deja rastros ni se pueden encontrar testigos de su consumación, porque éste se lleva á efecto *clam et occulte et non coram multis*. Nuestra moderna legislación ha abandonado con razón la estrema exigencia de la prueba de la *seminatio intra vos*, de los antiguos juristas, de la sorpresa de los culpables *in ipso flagitio in rebus veneris in ipso turpitudinem* de las leyes romanas, y del *solum cum sola, nudum cum nuda in eadem lecto iacentem* de las decretales

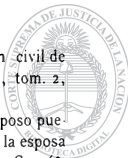


cios de divorcio cuando ella está corroborada con otras pruebas concomitantes, aunque sean presuntivas—Civ., tom. 2, pág. 24, Ser. 6ª.

15ª. **Divorcio**—El desistimiento de la acción criminal

y erigido el principio de que toda clase de prueba será admitida en el juicio de divorcio, con escepción de la confesión ó del juramento de los cónyuges como prueba exclusiva—art. 70 de la Ley de Mat.

15ª—Las disposiciones de nuestro Cód. Civ. sobre las acciones por indemnización de pérdidas é intereses procedentes de delito en su relación con el ejercicio de las acciones criminales, no son aplicables al divorcio, no solo porque las acciones civiles tienen un objeto diferente en uno y otro caso, sino también porque la ley ha establecido marcada diferencia por razones que fácilmente se comprenden. En las cuestiones civiles por daño ocasionado por un delito, cuando la acción criminal hubiese precedido á la acción civil, ó fuere intentada pendiente ésta, no puede haber condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal—art. 1101 del Cód. Civ.—lo que demuestra, así como los arts. 1102 y 1103, la influencia decisiva del juicio criminal sobre la acción civil. En el divorcio sucede todo lo contrario, puesto que la sentencia que se dicta en el juicio civil cuando es absolutoria, impide el ejercicio de la acción penal. Pendiente juicio de divorcio por adulterio, dice el art. 126 del Cód. Pen., no podrá intentarse la acción penal. Tampoco podrá intentarse, agrega, si la sentencia fuere absolutoria. El desistimiento, del marido, de la acción penal, sobre todo, en caso como el que nos ocupa, en que el cónyuge entendió remitir la pena con espresa reserva de la acción de divorcio como resultaba de un expediente traído *ad affectum videndi*, no implica la renuncia de la acción civil. Se sostuvo asimismo que ese desistimiento tuvo toda la importancia de una reconciliación entre las esposos, cuya consecuencia es la de extinguir la acción de divorcio, con arreglo á lo que dispone el art. 71 de la Ley de Mat. Civ. Bastaba leer el escrito del expediente criminal, para advertir que, á la renuncia de la acción penal hecha por el esposo, podía atribuirse los efectos de una reconciliación, la que como dice Escriche en su Diccionario razonado de leg. y jur., no es otra cosa que la renovación de la amistad que se había quebrado ó la reunión de los ánimos que estaban desunidos. En efecto, en ese escrito decía así el apoderado del marido: «Mi hermano no quiere ver en la penitenciaría á su esposa, pero no puede olvidar la ofensa ni continuar ligado en su persona y



de adulterio, no implica renuncia de la acción civil de divorcio fundada en los mismos hechos—Civ., tom. 2, pág. 24, Ser. 6<sup>a</sup>.

15<sup>b</sup>. **Divorcio**—Justificado el adulterio, el esposo puede revocar las donaciones ó ventajas hechas á la esposa en el contrato matrimonial—Civ., t. 2, pág. 24, Ser. 6<sup>a</sup>.

16. **Divorcio**—Justificado el abandono voluntario y malicioso, procede la declaración de divorcio—Civ., tom. 1, pág. 40, Ser. 6<sup>a</sup>.

17. **Divorcio**—Justificada la sevicia y malos tratamientos, debe declararse el divorcio—Civ., t. 1, p. 277, S. 6<sup>a</sup>.

18. **Divorcio**—No procede el reconocimiento de cartas

en sus bienes á la que se la infirió.» No son ciertamente esas palabras la expresión de la renovación de una amistad quebrada y menos la de la reunión de ánimos que estaban desunidos. Por más que se dé á la palabra reconciliación una latísima acepción y se procure atribuir sus efectos legales á cualquier acto de bondad ó de equívoca manifestación entre los esposos, era imposible conciliar con ella los términos del escrito en que el esposo desistió de la querrela criminal. Por otra parte, este es el principio consagrado por el art. 1097 del Código Civil.

15<sup>b</sup>—Art. 75 de la Ley de Mat. Civ.—Este sumario no está en el índice oficial publicado.

16—Este hecho constituye una causal de divorcio, con arreglo al art. 67, inc. 7<sup>o</sup> de la Ley de Mat. Civ.

18—Esta cuestión fué votada en disidencia. La minoría sostuvo la procedencia del reconocimiento fundándose en que la única limitación establecida por la ley para la prueba de los hechos sobre que reposa una demanda de divorcio, es la consignada en el art. 70 de la Ley de Mat., según el cual en los juicios de divorcio, se admiten todos los medios probatorios admitidos por el derecho común, con escepción de la confesión de los cónyuges. Con el reconocimiento, no se pretendía producir ese medio probatorio, sino instrumental de la carta misiva y cuya autenticidad se procuraba establecer por medio del reconocimiento. Esta diligencia no puede reputarse incluida en la limitación recordada, porque ella no tiende á obtener la confesión de hechos relacionados con la demanda, prueba negada por el cap. 2<sup>o</sup> de la misma sección,

de los esposos en juicios de divorcio —Civ., tom. 1, página 357, Ser. 6<sup>a</sup>.

**Divorcio** — Véase: *Cosa juzgada*, 4; *Depositario*, 10; *Adulterio*, 2 y 3; *Agente fiscal*, 1; *Depósito*, 3 y 5; *Alimentos*, 1 y 10; *Costas*, 55; *Abandono*, 3; *Cartas*, 5.

1. **Documentos** — No procede la prueba supletoria para justificar un matrimonio, si se indica el lugar donde existen los documentos que lo comprueban—Civ., tom. 6, pág. 37, Ser. 6<sup>a</sup>.

2. **Documentos** — La traducción de documentos para que haga fe en juicio, debe ser verificada por traductor público—Civ., tom. 4, pág. 41, Ser. 6<sup>a</sup>.

3. **Documentos** — Si el actor designa aquellos en que funda su derecho, el demandado no puede exigir que se agregue testimonio antes de contestar la demanda—Civ., tom. 2, pág. 429, Ser. 6<sup>a</sup>.

---

referente á la prueba instrumental por documentos privados, y entre éstas la principal y de que no puede prescindirse, es precisamente la de que se trata—art. 140.—De no admitirse el reconocimiento de firmas con las formalidades exigidas por la ley, importaría en el hecho, proscribir la prueba instrumental de las causas de divorcio, estableciendo por consiguiente, una limitación más á la libertad y amplitud de la defensa, no consignada en el art. 70 de la Ley de Mat. Puede verse el núm. 6<sup>b</sup>.

1— El matrimonio se decía celebrado en Francia: esta nación no puede considerarse país distante á los efectos establecidos en el art. 179 del Cód. Civ. La prueba supletoria procede en el caso de que hubiese imposibilidad de producir la prueba legal.

2—De acuerdo con la jurisprudencia establecida en el tom. 12, página 379, Ser. 4<sup>a</sup>, Jur. Civ

3—El art. 72 del Cód. de Proc. dispone, que cuando no se tuvieren á disposición las escrituras ó documentos en que se funda la acción, bastará con que se mencione con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte y designándose el archivo, oficina pública ó lugar donde se encuentren.





**Documentos**—Véase: *Autenticidad*, 1, 2, 3 y 4; *Papel sellado*, 5; *Personas jurídicas*, 3; *Término*, 8; *Copias*, 5; *Diligencias preparatorias*, 1; *Prueba escrita*, 2; *Cartas*, 1; *Adulteración*, 1; *Cantidad indeterminada*, 1; *Derecho de retención*, núm. 3.

1. **Documentos acompañados**—No puede abrirse á prueba la causa, sin oír al actor sobre los documentos acompañados por el demandado—Com., t. 7, p. 299, Ser. 3ª.

2. **Documentos acompañados**—Cualquiera que sea la parte que ha presentado los documentos, la multa por infracción á la ley de sellos, debe pagarla el que peticione en el espediente—Civ., tom. 5, pág. 250, Ser. 5ª.

3. **Documentos acompañados**—El testigo no puede agregar documentos para corroborar su declaración—Civ., tom. 10, pág. 54, Ser. 6ª.

4. **Documentos acompañados**—La pertinencia ó valor de los documentos agregados como prueba, solo puede resolverse al dictar sentencia—Civ., t. 10, p. 425, Ser. 6ª.

1—Art. 102 del Cód. de Proc.

2—La ley ha querido tener en los mismos interesados en la prosecución de un juicio, personas que se encarguen de hacer cumplir sus prescripciones, y por esto es que ha dispuesto que no se dé curso á una solicitud que puede interesar á uno ú otro litigante, mientras no se reponga el sello de la multa.

3—Lo que abona la declaración de un testigo es, por una parte, el juramento que presta, y por la otra, la razón de su dicho, sin que tenga obligación de justificarla por medio de documentos, ni proceda la agregación de los mismos, como lo tiene resuelto la Cám. Civ., entre otros casos, en el que se registra en la pág. 134, tom. 14, Ser. 4ª.

4—No es la oportunidad de juzgar de su pertinencia, pues ignorándose su contenido no puede saberse si se refiere al derecho del actor, ó solo tiende á comprobar un hecho relacionado con la demanda; debiendo, en consecuencia, postergarse este pronunciamiento al fallo definitivo—art. 108 y argumento de los arts. 130 y 209, Cód. de Proc.



5. **Documentos acompañados**—Solo es obligatorio acompañar á la demanda los documentos en que se funda el derecho: los demás pueden agregarse en la estación de prueba—Civ., tom. 9, pág. 37, Ser. 6ª.

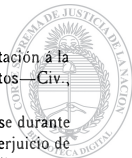
6. **Documentos acompañados**—Como prueba, no se encuentran comprendidos entre los que el actor debe acompañar á la demanda y en los cuales funda su derecho—Civ., tom. 7, pág. 28, Ser. 6ª.

7. **Documentos acompañados**—Al evacuar el traslado

5—El art. 72 solo exige del actor que acompañe los documentos en que funde su acción. Este art. tiene su origen en un principio establecido por la Ley 1ª, tít. 3º, lib. 2º de la Novísima Recopilación, principio que pasó á formar parte del Reglamento Provisional de España en su art. 48; fué más tarde sancionado por la antigua ley de Enjuiciamiento española y reproducido en la nueva, en su art. 504. Los conceptos y el espíritu de estos dos arts.—504 de la Ley Española, y 72 de nuestro Código, se armonizan en un todo—de donde resulta que la interpretación dada á la Ley Española, debe ser aplicable á la nuestra. Reus al comentar el art. citado de la Ley Española en la pág. 370, tom. 1º, hace las siguientes preguntas: ¿Deberán acompañarse todos los documentos que justifiquen el derecho de la parte que los acompaña? ¿Podrá prescindirse de alguno? Este autor resuelve la cuestión en el sentido de que hay obligación de acompañar tan solo *aquellos documentos en que las partes funden sus derechos*, mas no los que puedan tener más ó menos relación con el pleito: al comentar el art. 506 ratifica esta doctrina.—Véase: pág. 374 del mismo tom.—También esta es la jurisprudencia sentada por la Cám. Com., como puede verse en el tom. 9º, pág. 349, Ser. 4ª, Jur. Com. Este caso resuelto por la Cám. citada, es tan análogo al que nos ocupa, que exime citar otros en apoyo de la tesis sostenida.

6—De acuerdo con el núm. precedente.

7—Porque el traslado que se confiere en este caso es al solo efecto de que el actor se espida sobre ellos, estableciendo de esta manera la igualdad entre los litigantes, pues si al demandado se le da traslado de los que presenta el actor, nada más justo que se haga lo propio con los del demandado. El art. 72 prescribe, que el actor acompañe á su demanda los documentos en que funda su derecho: los demás solo deben presentarse en la estación de prueba, porque éstas deben ser pe-



de los documentos acompañados con la contestación a la demanda, no pueden presentarse otros documentos—Civ., tom. 7, pág. 113, Ser. 6<sup>a</sup>.

8. **Documentos acompañados**—Deben agregarse durante el término de prueba los documentos, sin perjuicio de juzgar de su pertinencia al dictar sentencia—Civ., tom. 6, pág. 13, Ser. 6<sup>a</sup>.

9. **Documentos acompañados**—La falta de presentación de la copia de los documentos acompañados, no puede fundar las excepciones de falta de personería y defecto legal—Civ., tom. 6, pág. 85, Ser. 6<sup>a</sup>.

10. **Documentos acompañados**—No procede el reconocimiento de documentos presentados después de vencido el término de prueba—Civ., tom. 6, pág. 286, Ser. 6<sup>a</sup>.

11. **Documentos acompañados**—Debe dejarse sin efecto, de oficio, el auto de prueba, si se omitió el traslado de documentos acompañados al contestar la demanda—Civ., tom. 6, pág. 289, Ser. 6<sup>a</sup>.

---

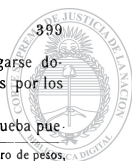
didas, ordenadas y practicadas dentro del término de prueba—art. 118. —Si á las partes se les permitiese presentar documentos fuera de este estado del juicio, se produciría una confusión que perjudicaría el buen orden que debe seguirse en la tramitación de los pleitos.

8—Si antes se hiciese, se prejuzgaría á su respecto, autorizando la separación del juez del conocimiento de la causa.

9 La parte recibió las copias sin reclamar: solo después de algunos días se apercibió de su falta, según él. La Cám. tiene declarado que no es causal de excepción la falta de copias; pero en la práctica los jueces suspenden los términos, cuando no hay copias ó éstas son ilegibles.

10—Vencido el término de prueba queda perdido todo derecho para producir prueba, salvo las de excepción establecidas espresamente por la ley.

11—Es deber de los jueces imprimir la marcha legal que corresponda á los juicios, y si por error se comete cualquiera transgresión deben repararla sin que las partes lo pidan. La Ley 2<sup>a</sup>, tít. 22, Part. 3<sup>a</sup> así lo autoriza.



12. **Documentos acompañados**— Pueden agregarse documentos que comprueben hechos desconocidos por los herederos— Civ., tom. 5, pág. 253, Ser. 6ª.

13. **Documentos acompañados**—Durante la prueba pue-

12— Entablada contra una sucesión una demanda por cobro de pesos, el actor dijo al instaurarla, que los documentos justificativos obraban en su poder y que los presentaría en caso de negarse el crédito reclamado. Los herederos manifestaron ignorar la existencia de dicho crédito y que el actor debía justificarlo en forma. Entonces presentó aquél los justificativos, oponiéndose los herederos a su agregación. La Cám. no hizo lugar a la oposición, fundándose en que «habiéndose manifestado al entablar la demanda, que los documentos justificativos del crédito reclamado obraban en poder del demandante, los que serían presentados en caso necesario, como el representante de los herederos dice que sus representados ignoran la existencia de crédito, y que debe comprobarse, la agregación de los documentos presentados, es arreglada a derecho.»

13—Los arts. 72 y 105, inc. 4º del Cód. de Proc. prescriben que el actor en la demanda y el reo en la contestación, deben acompañar los documentos en que funden su derecho. Cuando el art. 73, establece que después de interpuesta la demanda, no se admitirán al actor sino documentos de fecha posterior, ó anteriores bajo juramento de no haber antes tenido conocimiento de ellos, se refiere a los documentos aludidos, esto es, a los que funden el derecho del demandante ó demandado. De suerte que la regla es, que no deben admitirse en juicio los documentos en que las partes funden su derecho, siempre que se presenten después de la demanda y contestación, bajo la pena de que los tribunales no puedan tomarlos en consideración, ni fundar en ellos su fallo — Manresa, tom. 2º, pág. 525, comentario al art. 506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España.—El documento de la referencia no fué presentado, como fundamento del derecho en que el demandado se amparara al pedir el rechazo de la acción en su escrito de contestación a la demanda, sino para justificar un hecho que podía tener toda la relación que se quiera con el pleito, pero que no contraría lo dispuesto por el art. 73 citado, como lo hace notar Manresa en el comentario antes transcrito, al art. 506 de la Ley Española, análogo al 73 del nuestro. Entonces y dado que las partes pueden producir prueba instrumenta<sup>1</sup>, la parte estuvo habilitada para presentar documentos sin la formalidad del juramento. Manresa, co-



den agregarse documentos para justificar hechos articulados; con la demanda y contestación solo es obligatoria la agregación de aquellos que se refieren al derecho — Civ., tom. 5, pág. 291, Ser. 6ª.

14. **Documentos acompañados** — La falta de conocimiento anterior de los documentos que se pretenda agregar, debe ser personal del interesado y no de su apoderado en el juicio — Civ., tom. 2, pág. 128, Ser. 6ª.

15. **Documentos acompañados** — Pueden agregarse documentos en el acto de las posiciones, si se refieren á los hechos en ellas consignados — Civ., tom. 2, página 425, Ser. 6ª.

16. **Documentos acompañados** — Pueden agregarse á las mentando una disposición de la Ley de Enjuiciamiento española, el art. 505, idéntico al 73 de nuestro Código, se expresa en estos términos: «Nótese que la ley no exige que se acompañen á la demanda y contestación todos los documentos que tengan relación más ó menos inmediata con la cuestión del pleito, sino solamente aquellos en que la parte interesada funde su derecho; esto es, respecto del actor, los que sirvan de base y fundamento á la acción que ejercite ó á la petición que deduzca, y respecto del demandado, los que sirvan para enervar ó destruir la acción ó justificar sus excepciones.» Manresa y Reus sustentan la misma tesis, en el tom. 2º, pág. 52 de su conocida obra sobre procedimientos. Véanse los núms. precedentes

14 — El art. 245 del Cód. de Proc dice, que *las partes* podrán presentar los documentos de que juren no haber tenido conocimiento hasta entonces.

15 — Los documentos acompañados por la parte en el acto de la absolución de posiciones no eran de los que fundan el derecho á la acción instaurada, sino que fueron presentados como elementos de prueba respecto de los hechos controvertidos sobre los que aparecía interrogado el absolvente. Por consiguiente, y estando establecido por el Cód. de Proc. la prueba instrumental para toda clase de juicio, procedía la agregación de los documentos.

16 — Habiéndose dado cumplimiento al art. 72 del Cód. de Proc., y habiéndose pedido las posiciones para el reconocimiento de los documentos dentro del término de prueba, no es culpa de la parte que

posiciones, si éstas fueran pedidas dentro del término y de ellos se hizo referencia en la demanda—Civ., tom. 1, pág. 70, Ser. 6<sup>a</sup>.

17. **Documentos acompañados**—Pueden agregarse durante el término de prueba, documentos en que el actor no haya fundado su demanda—Civ., t. 1, p. 345, S. 6<sup>a</sup>.

18. **Documentos acompañados**—La infracción a la ley de sellos suspende la petición en que se acompañan los documentos, pero no la tramitación del juicio—Civ., tom. 8, pág. 364, Ser. 5<sup>a</sup>.

1<sup>a</sup>. **Documentos extranjeros**—Deben ser vertidos al idioma patrio para que su contenido forme prueba—Civ., tom. 3, pág. 80, Ser. 6<sup>a</sup>.

1<sup>b</sup>. **Documentos inventariados**—Consentido el auto que ordena el inventario de documentos, debe desecharse la oposición que se formula en el acto del inventario—Civ., tom. 10, pág. 363, Ser. 6<sup>a</sup>.

1. **Documento privado**—Hacen prueba los documentos privados cuya autenticidad no se niega por el firmante—Com., tom. 8, pág. 273, Ser. 3<sup>a</sup>.

2. **Documento privado**—Para que puedan presentarse

---

se señale al efecto la audiencia fuera del término probatorio; tal circunstancia debe imputarse exclusivamente á retardo del Juzgado.

17—Sin embargo, el juez resolvió así, sin perjuicio de que el Juzgado se pronunciase sobre su mérito al dictar sentencia, de acuerdo con el art. 108 del Cód. de Proc.

18—Los efectos de las infracciones de la ley de sellos están limitados única y exclusivamente á la solicitud en que se presentasen los documentos incurso en multa—art. 47 de la ley de sellos de 1893—sin que por esto deba entenderse alterado ó modificado el estado del juicio.

1<sup>a</sup>—Cuando se agregan documentos en idioma extranjero, el juez debe considerarlos legalmente ignorados.

1<sup>b</sup>—No se puede volver sobre autos consentidos y ejecutoriados.



como principio de prueba escrita, deben ser emanados del contrario—Com., tom. 8, pág. 403, Ser. 3ª.

3. **Documento privado**—Su reconocimiento, hecho sin observación por el demandante, de documentos acompañados á la contestación á la demanda, le da igual fuerza probatoria que la resultante de instrumento público—Civ., tom. 6, pág. 44, Ser. 5ª.

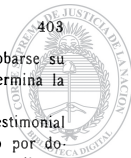
4. **Documento privado**—No procede un embargo preventivo fundado en documento privado, sin autenticar la firma de testigos—Civ., tom. 6, pág. 390, Ser. 5ª.

5. **Documento privado**—No forman prueba contra ter-

3—Arts. 994, 995 y 1026 del Cód. Civ.

4 Art. 443, inc. 2º del Cód. de Proc.

5—El art. 1034 del Cód. Civ. establece que: «Los instrumentos privados, aun después de reconocidos, no prueban contra terceros ó contra los sucesores por título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos.» La ley, en efecto, ha establecido el precepto que se deja transcripto, porque debía evitar que los terceros ó personas extrañas al acto jurídico contenido en el instrumento privado, pudiesen ser víctimas de la voluntad de los que lo han suscrito, pues se comprende que podían antedatár ó modificar á su antojo la fecha del instrumento, perjudicando los intereses de los terceros. A objeto, pues, de evitar las ulterioridades que se dejan apuntadas, ha establecido el art. 1035 del mismo Cód., «aunque se halle reconocido un instrumento privado su fecha cierta en relación á los sucesores singulares de las partes ó á terceros, será la de su exhibición en juicio ó en cualquiera repartición pública para cualquier fin, si allí quedase archivado; la de su reconocimiento ante un escribano y dos testigos que lo firmaren; la de su transcripción en cualquier registro público; la del fallecimiento de la persona que lo firmó ó del de la que escribió ó del que firmó como testigo.» Esta disposición de la ley, si bien no puede considerarse limitada á los casos que preceptúa, que son meramente enunciativos ó simples ejemplares, ha consagrado la regla de que, para que la fecha del instrumento privado quede probada para los terceros, es necesario que esté claramente garantizado que dicha fecha no ha sido alterada posteriormente á su eficacia probatoria. Estos principios están declarados en los precedentes judiciales, como puede observarse en el



ceros, sino desde la fecha que puede comprobarse su autenticidad por los diversos medios que determina la ley—Civ., tom. 7, pág. 43, Ser. 5<sup>a</sup>.

6. **Documento privado**—Procede la prueba testimonial para justificar la existencia del reconocimiento por documentos privados de una obligación, independiente de su origen y monto—Civ., t. 8, p. 165, S. 6<sup>a</sup>.

7<sup>a</sup>. **Documento privado**—El que lo invoca como obligación, debe justificar que fué estendido en el sello correspondiente ó pagar la multa—Civ., t. 8, p. 291, S. 6<sup>a</sup>.

7<sup>b</sup>. **Documento privado**—El contenido de un documento

tom. 3<sup>o</sup>, pág. 498, Ser. 2<sup>a</sup> de la Jur. Civ.—Véase á Goyena sobre el art. 1209; Aubry y Rau, pág. 756; Llerena sobre los arts. citados.

6—El reconocimiento de una obligación es un acto jurídico que por sí solo basta para constituir en acreedora á la persona en cuyo favor se ha hecho, sin necesidad de probar la causa de que proviene—art. 718 del Cód. Civ.—y en consecuencia, desde que se justificase el reconocimiento de la obligación de pagar la suma demandada, no puede ser dudoso que al cobrar ese crédito se ejercita un derecho espresamente consagrado por la ley—art. 505, Cód. Civ.—En cuanto á la procedencia de la prueba testifical en este caso no cabía cuestión, pues él fué reconocido por todos los demandados que el instrumento privado había sido depositado en mano de uno de los deudores, y que éste lo estravió ó perdió, es el caso de aplicar el art. 1192 del Cód. Civ., según el cual son admitidos todos los medios de prueba, cuando hay imposibilidad por parte del acreedor de presentar la prueba escrita del contrato.

7<sup>b</sup>—El acto jurídico que motivó la ejecución fué un contrato de compraventa de un bien raíz, cuyo precio quedó en parte adeudado por el ejecutado, hipotecando en garantía de la deuda el inmueble comprado y otra finca de su propiedad. Para la existencia legal de este acto jurídico fué necesaria la escritura pública, porque así lo manda el art. 1184 del Cód. Civ., bajo pena de nulidad. Ahora bien, el documento privado sin hacer desaparecer el anterior, tendia á modificarlo sustancialmente, pues que á cuenta del precio adeudado se estipuló una dación en pago, quedando obligado el deudor á abonar en dinero efectivo el excedente de la deuda. Tal convenio es un acto accesorio del otro, porque debía ser redactado en escritura pú-





privado, no puede modificar la fuerza ejecutiva de una escritura pública, si el acto que pretenda justificar re-

blica, y por consiguiente, para que aquél tenga existencia legal y pudiera afectar ó modificar á éste, debió también ser hecho en escritura pública—art. 1184, inc. 10 del Cód. Civ.—Por actos accesorios, dice acertadamente el Dr. Segovia, no deben entenderse los que engendran obligaciones accesorias, como la cláusula penal, fianza, prenda é hipoteca, sino actos jurídicos ó contratos accesorios que vienen á explicar, reconocer, confirmar, alterar ó modificar—restringiendo ó ampliando—derogar ó revocar, prorrogar y quizás también renovar los contratos anteriores—tom. 1º, nota al art. 1185.—Como se ve, la ley no habla del mismo acto sino de actos nuevos que son accesorios, porque deben su existencia á otro acto que ya existía y el cual deben modificar, que es precisamente lo que trataron de hacer los interesados, según resultaba del instrumento privado que se agregó. Si la ley, consecuente con las razones que ha tenido para requerir la escritura pública como condición esencial para la existencia de ciertos actos, la ha exigido también para la existencia y eficacia de otro acto que tiende á modificar de cualquier manera al que ha sido redactado, porque ha debido redactarse en escritura pública, ¿podría dudarse que no lo haya exigido tratándose de los convenios contenidos en los instrumentos privados, que modifican sustancialmente la venta de un inmueble por que con la dación en pago, aquélla queda con carácter misto de venta ó permuta, ó sea un contrato innovado? No es posible la duda, con tanta mayor razón si se observa que, aun suponiendo que el acto de que instruía el instrumento privado, no fuera un acto accesorio del de compraventa, sino un contrato nuevo é independiente, también requeriría la escritura pública para su existencia legal, como todo acto de enajenación de un inmueble. No afecta en manera alguna lo anteriormente espuesto, la disposición contenida en el art. 996 del Cód. Civ., por la que se dispone que el contenido de un instrumento público puede ser modificado por un contradocumento público ó privado que los interesados otorgarán con las limitaciones que la ley preceptúa respecto á su eficacia con relación á terceros. Ese artículo, como resulta de su nota, no es aplicable al caso, porque él establece cuáles son los efectos que puede tener entre las partes y con relación á terceros un contradocumento que acredite la simulación de un acto hecho en instrumento público, lo que no ocurría en el caso presente, porque no había habido ningún acto simulado. Más aun, fácil es comprender que la ley haya permitido á las partes modificar los actos nuevos hechos

quería para su validez ser estendida en instrumento público—Civ., tom. 7, pág. 172, Ser. 6ª.

**Documento privado**—Véase: *Boleto de compraventa*, 4.

1ª. **Documentos reconocidos**—Solo procede reconocimiento de firma contra el mismo firmante del documento—Com., tom. 8, pág. 214, Ser. 3ª.

2. **Documentos reconocidos**—La notificación para el reconocimiento de un documento, debe hacerse personalmente ó por cédula—Civ., tom. 10, pág. 72, Ser. 6ª.

1. **Documentos sin fecha**—Y sin precisa referencia á la cuenta que se pretende cobrar, no pueden considerarse como principio de prueba por escrito para admitir la testifical—Com., tom. 8, pág. 160, Ser. 3ª.

**Dolo**—Véase: *Daños y perjuicios*, 15 y 42; *Acusación calumniosa*, 1; *Contrato nulo*, 1.

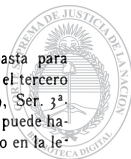
1ª. **Dolo grave**—La falsedad de un hecho constante de

en instrumento público, por medio de documentos privados, pero si bien esto se esplica tratándose de convenciones en que no es de precepto la escritura pública, no puede admitirse cuando la ley lo requiere, porque entonces ella misma facilitaría el desconocimiento de sus preceptos, fundados en las razones de orden público.

1ª—Art. 1031 del Cód. Civ.

2—En la estación de prueba se pidió el reconocimiento de un documento: como se ignorase el domicilio del firmante, se pidió que se le citase por edictos, fundándose en la prescripción del art. 80 del Cód. de Proc. á lo que no se hizo lugar, porque ese artículo solo se refiere á la citación y emplazamiento de la demanda, y no á las medidas de prueba que como el reconocimiento de que trataba, debía ser personal y notificarse por cédula como lo dispone el art. 146 del Cód. de Proc.

1ª—El dolo revestía los caracteres fijados en el art. 932 del Cód. Civ. Fué grave, pues se afirmó la verdad de un hecho que por otra parte se apoyaba en la exhibición de una escritura pública que lo acreditaba. «Tal hecho pudo inducir en error aun á un hombre prudente.»—Chardón, *Du dol*, tom. 1º, pág. 21.—Es en materia de dolo y tratándose del punto de si él ha sido determinante del contrato ó meramente incidente, que los Tribs. tienen un gran poder de apreciación.



una escritura pública, importa dolo grave y basta para justificar el error de hecho en que ha incurrido el tercero que lo tuvo por verídico—Com., t. 7, pág. 259, Ser. 3ª.

1. **Domicilio**—La citación por edictos solo puede hacerse si no existe el deudor en el domicilio fijado en la letra—Com., tom. 7, pág. 115, Ser. 3ª.

2. **Domicilio**—El que no ha incurrido en la multa por infracción á la ley de sellos, no está obligado á denunciar los domicilios de los penados—Com., t. 7, p. 323, S. 3ª.

3. **Domicilio**—Si la letra no tiene lugar designado para el pago, puede ejecutarse en el domicilio del deudor—Com., tom. 7, pág. 335, Ser. 3ª.

4. **Domicilio**—La notificación hecha en el estudio del letrado es nula, si no fué constituido como domicilio—Crim., tom. 7, pág. 351, Ser. 3ª.

5. **Domicilio**—Si no existe designado el lugar del pago, es competente el juez del domicilio del firmante de la letra—Com., tom. 8, pág. 77, Ser. 3ª.

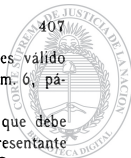
6. **Domicilio**—Si la notificación de la sentencia de remate ha sido hecha por cédula en el domicilio legalmente constituido por el deudor, debe rechazarse la nulidad—Com., tom. 8, pág. 167, Ser. 3ª.

1 - El domicilio indicado en una letra es siempre el del pago, y es bien sabido que el deudor debe ser requerido en su domicilio.

3—Art. 606 del Cód. de Com., y 4º del Cód. de Proc.

4—El abogado había cambiado de domicilio y se pretendió notificar á su patrocinado en el domicilio anterior de aquél.

5—El domicilio designado en la letra es para hacerse allí el requerimiento, pero no importa constituir un domicilio especial para el pago. El art. 606 del Cód. de Com. que determina que la letra se entienda pagadera en el lugar donde ha sido firmada, cuando no se ha designado el lugar para este efecto, no excluye el ejercicio de la acción judicial en el domicilio del demandado, pues se trata de una facilidad espresamente acordada para el ejercicio de los derechos creditorios.



7. **Domicilio**—Constituido en el poder, no es válido para la notificación de las posiciones—Civ., tom. 6, página 391, Ser. 5<sup>a</sup>.

8. **Domicilio**—Ignorándose el domicilio del que debe absolver posiciones, debe fijarse término al representante para que lo averigüe—Civ., tom. 6, pág. 391, Ser. 5<sup>a</sup>.

9. **Domicilio**—Debe rechazarse la escepción de incompetencia, si el demandado tiene en el lugar del contrato su domicilio, aunque sea accidentalmente—Civ., tom. 6, pág. 405, Ser. 5<sup>a</sup>.

10. **Domicilio**—La nulidad del juicio ejecutivo fundada

---

7—El domicilio indicado por una parte al otorgar el poder para un juicio, no puede servir para la citación de la absolución de posiciones, bajo el apercibimiento del art. 127 del Cód. de Proc., desde que ese domicilio podría ser accidental ó cambiado á voluntad por aquel que lo constituyó. Según nuestra ley procesal, el domicilio que se considera subsistente, entre tanto no se indique otro, es el constituido á los efectos del juicio—art. 12, Cód. de Proc.

8—De acuerdo con el caso resuelto en el tom. 1º, pág. 344, Ser. 3<sup>a</sup>.

9—Art. 4º, inc. 4º del Cód. de Proc.

10—El representante de un ejecutado, después de sentenciada la causa de remate, se presentó diciendo de nulidad del juicio, porque el domicilio denunciado en autos era falso. Se le tuvo por parte, y recién después de once días de notificado de esta providencia, presentó su escrito solicitando se declarase nulo todo lo actuado, invocando lo dispuesto en el art. 77 del Cód. de Proc. El Inferior, previa sustanciación de la nulidad alegada, se pronunció declarándola, porque en su concepto había sido alegada en tiempo, habiéndose comprobado suficientemente. Pero, si bien con arreglo á las disposiciones del juicio ejecutivo, la nulidad solo puede alegarse como escepción en la estación oportuna; ésta presupone necesariamente la intervención del interesado, en virtud de emplazamiento conforme á la ley. Cuando esto no sucede, cuando el emplazamiento, raíz de todo juicio es completamente nulo, cuando la ejecución se sigue contra persona á quien no se ha dado intervención en legal forma, ésta podrá alegar, con perfecta razón, que los procedimientos invocados son para ella *res inter alios acta* y estará habilitada para decir de nulidad de los mismos, toda vez

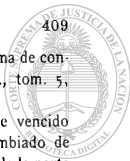


en la falsedad del domicilio denunciado, solo puede interponerse, sea como escepción ó como recurso, en el término que fija la ley desde la fecha de la notificación—Civ., tom. 5, pág. 133, Ser. 5<sup>a</sup>.

11<sup>a</sup>. **Domicilio**—La presentación del citado por edictos haciendo saber su domicilio fuera de la jurisdicción del

que ejercite en tiempo ese derecho. Ahora bien: ¿el apoderado del ejecutado reclamó en tiempo la nulidad que motivó el incidente? Parece que no. Según anteriormente se ha espuesto, dicho apoderado dijo de nulidad recién á los once días de serle notificada la providencia que mandaba tenerlo como parte. ¿Qué alcance tiene esa notificación? Indudablemente el de hacerle saber todas las resoluciones dictadas con anterioridad, entre ellas la de citación de remate—art. 40 del Cód. de Proc. en su parte final.—Desde entonces, si el demandado reputaba falso el domicilio denunciado para el emplazamiento, debió ejercitar el derecho acordado en el art. 489 del Cód. de Proc., dentro de tercero día, como si hubiera sido oportunamente notificado de la citación de remate. Habiendo vencido con esceso dicho término, no es cuestionable que la nulidad ha sido deducida intempestivamente, cuando por el transcurso de los once días que mediaron entre la notificación y la interposición de la nulidad se encontraban virtualmente notificadas y consentidas las resoluciones anteriores. El art. 526 del Cód. de Proc. se refiere al juicio ordinario que el art. 500 autoriza á promover. Ese juicio no fué iniciado. En el escrito presentado se promovió un incidente de nulidad en el mismo juicio ejecutivo, y así sin duda lo entendió el juez ante quien pasó cuando de las peticiones ante él deducidas, se limitó á conferir traslado por el término de seis días, que es el señalado para los que no tienen uno especialmente marcado en la ley—art. 24—en tanto que el art. 76 fija el de nueve días para contestar el traslado de una demanda ordinaria.

11<sup>a</sup>—El demandado se presentó diciendo, que había tenido conocimiento de la demanda por los edictos, y que él vivía en la provincia, denunciando así su domicilio real y constituyendo domicilio legal en esta ciudad. En él se le notificó todas las providencias, incluso el traslado de la demanda. Vencido el término se le acusó rebeldía declarándose ésta y notificándosele en el domicilio constituido, quedando todo consentido. Por consiguiente, no podía deducir recurso alguno contra providencias pasadas en autoridad de cosa juzgada.



Juzgado, no importa una escepción que lo exima de constatar la demanda dentro del término —Civ., tom. 5, pág. 163, Ser. 5ª.

11<sup>b</sup>. **Domicilio**—No puede citarse después de vencido el término de prueba, á un testigo que ha cambiado de domicilio, antes de ser citado, por negligencia de la parte —Civ., tom. 5, pág. 161, Ser. 5ª.

12. **Domicilio**—El conocimiento del juicio de insania, corresponde al juez del domicilio del incapaz—Civ., tom. 5, pág. 188, Ser. 5ª.

13. **Domicilio** — Las notificaciones hechas en el domici-

---

11<sup>b</sup>—Solo cuando no hay negligencia de la parte puede producirse prueba fuera de término—art. 118 del Cód. de Proc.

12—El art. 475 del Cód. Civ. establece que las leyes sobre la tutela de los menores se aplicará á la curaduría de los incapaces. Cuando se trata de discernir el cargo de tutor á un menor, se procede investigando el domicilio de los padres, que son los representantes legales, y es el juez de ese domicilio el competente para aquel discernimiento y ulteriores de la tutela. Si para estos autos se tiene en cuenta el domicilio, debe tenerse también para la curatela, y como el juicio de demencia tiene por objeto el nombramiento de curador, es el juez del domicilio del demente el que debe conocer en el juicio. Parece que esta resolución es equivocada, porque el demente no es tal, mientras no es declarado judicialmente incapaz. Hasta entonces carece de representante legal; por consiguiente, no puede tener el domicilio de un representante que no existe. En el caso ocurrente no se solicitaba la declaración de demencia, sino que se denunció el hecho de la existencia de un presunto demente, para que se tomasen las medidas del caso. Es insostenible que el Ministerio Pupilar no deba preocuparse de la persona ó bienes de un presunto insano, á título de que éste es simple transeunte, puesto que en el caso de resultar tal demente, no tendría domicilio, por carecer del *animus morandi*; que son, entonces, las autoridades de su residencia las competentes para entender en la declaratoria de demencia, so pena de dejarlo desamparado en su persona y bienes, lo que no ha sido seguramente el espíritu de la ley. Es necesario no confundir el domicilio con la residencia.

13—El art. 12 del Cód. de Proc. establece que el domicilio una vez constituido, subsiste para todos los efectos legales.



lio constituido son válidas, aun cuando la parte contraria conozca el domicilio real—Civ., t. 10, pág. 99, Ser. 6<sup>a</sup>.

14. **Domicilio**—El domicilio constituido en la testamentaria, sirve legalmente en el incidente sobre cobro de honorarios—Civ., tom. 10, pág. 108, Ser. 6<sup>a</sup>.

15. **Domicilio**—No basta el nombramiento de depositario de la esposa; ésta debe residir en el domicilio designado—Civ., tom. 10, pág. 381, Ser. 6<sup>a</sup>.

16. **Domicilio**—Las notificaciones practicadas en un domicilio legal constituido en otro espediente, carecen de valor legal—Civ., tom. 9, pág. 253, Ser. 6<sup>a</sup>.

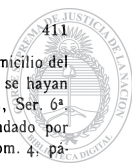
17. **Domicilio**—Cualquier que sea el monto de los honorarios y el juez que haya practicado la regulación, ellos pueden ser ejecutados ante el juez del domicilio del deudor—Civ., tom. 6, pág. 233, Ser. 6<sup>a</sup>.

14—En un juicio testamentario renunció el apoderado de uno de los herederos presentándose á cobrar sus honorarios. El Juez de 1<sup>a</sup> Inst. dijo que el cobro de ellos debía instaurarse ante el juez en turno, porque no era de aplicación al caso la disposición del art. 12 del Cód. de Proc. La Cám. revocó la resolución diciendo, que se trataba de un incidente por cobro de honorarios devengados en el juicio testamentario.

15—El depósito debe ser real y efectivo porque así lo exigen las condiciones de recato y reclusión en que debe encontrarse la esposa durante el juicio de divorcio, dejándosela sinembargo, en plena libertad para preparar y producir su defensa en juicio. A este último respecto debe existir la más completa igualdad entre los litigantes.

16—El domicilio constituido en un espediente es especial, y por consiguiente, no es bastante para surtir efecto respecto de otros juicios.

17—Un abogado que había patrocinado á su cliente en varios asuntos pidió regulación en todos ellos, recabando el correspondiente testimonio. Reunidos éstos se presentó demandando el cobro de todos ante un solo juez. Se dijo que debieron haberse cobrado por separado y en cada uno de los juicios en que se devengaron. La escepción no prosperó porque las acciones eran acumulables en el sentido del art. 74 del Cód. de Proc.



18. **Domicilio**—Si el apoderado ignora el domicilio del mandante, no deben llamarse autos hasta que se hayan absuelto las posiciones—Civ., t. 4, pág. 382, Ser. 6ª.

19. **Domicilio**—Solo puede citarse al demandado por edictos, cuando se ignore el domicilio—Civ., tom. 4, página 383, Ser. 6ª.

20. **Domicilio**—Es improcedente la escepción de arraigo, si el demandante tiene domicilio en el lugar del juicio—Civ., tom. 3, pág. 405, Ser. 6ª.

**Domicilio**—Véase: *Escepción de arraigo*, 2 y 3; *Testigos*, 5 y 11; *Acción personal*, 2 y 3; *Arraigo*, 4, 6, y 8; *Demanda*, 16 y 18; *Alquiler*, 17; *Declaraciones*, 7; *Acción posesoria*, 2; *Desalojo*, 4; *Contrato*, 4; *Acto ilícito*, 5; *Ausente*, 1 y 5; *Competencia*, 6; *Acusado*, 2; *Posiciones*, 24; *Divorcio*, 13.

1. **Dominio**—Debe recibirse prueba en la tercería, si está controvertido el dominio—Civ., t. 5, p. 245, S. 5ª.

18—De lo contrario se quebrantaría la igualdad de la defensa en juicio, pues mientras uno habría hecho uso de ese derecho el otro no podría hacerlo efectivo.

19—Esta ignorancia debe comprobarse, según la Cám., por medio de testigos que declaren que *conocieron* el domicilio del que debe ser citado, y que luego lo perdieron de vista sin conocer después su domicilio. Para resolver así se funda en que el art. 80 del Cód. de Proc. dispone que la citación á personas inciertas ó cuyo domicilio se ignore, se hará por edictos. Así, para que proceda la citación por edictos á una persona, no basta que el actor diga que ignora el domicilio del demandado, sino que es indispensable la prueba de que se ignora ese domicilio; lo que demuestra que la ignorancia del domicilio debe ser un hecho justificado, para que pueda dar lugar á la citación en la forma que prescribe el art. 80 del Cód. de Proc. En este sentido hay varias resoluciones de esta Cám., pero salta á la vista el error que entrañan. Véase el verb. *Edictos*, 1, donde se estudia el punto.

20—Art. 85 del Cód. de Proc.

1—Art. 104 del Cód. de Proc.





2. **Dominio**—Debe rechazarse la reivindicación, si el accionante no justifica plenamente el dominio—Civ., tom. 5, pág. 367, Ser. 5<sup>a</sup>.

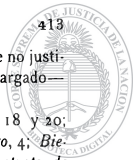
3. **Dominio**—La Municipalidad que pretenda objetar la información adquisitiva por prescripción, debe deducir acción en forma, si existe prueba de haber salido el inmueble del dominio público—Civ., t. 10, p. 297, S. 6<sup>a</sup>.

4. **Dominio**—El vendedor de un inmueble con pacto de retroventa carece de dominio para demandar á los locatarios, si de la escritura consta que perdió la posesión—Civ., tom. 8, pág. 364, Ser. 6<sup>a</sup>.

2—Ley 1<sup>a</sup>, tit. 14, Part. 3<sup>a</sup>.—Arts. 2758 y 2759 del Cód. Civ.

3—Constaba de autos que el terreno materia de la información producida había salido del dominio público hacía más de 40 años. Siendo esto así, no es fácil establecer qué interés puede tener la Municipalidad en impedir la aprobación de una información producida, ni cuáles sean los derechos de aquella corporación que resultarían lesionados con la aprobación de esa información en que el terreno disputado haya sido poseído por un interesado el tiempo suficiente para adquirir su propiedad, no se seguiría que aquél debiera volver á la Municipalidad, puesto que hacía más de cuarenta años que salió del dominio público. Además, el interesado había probado con la información y demás recaudos que obraban en autos, que había poseído el terreno de la referencia por el tiempo y con las condiciones requeridas para adquirir por prescripción, con arreglo á los arts. 3999, 4005, 4008 y 4010 del Cód. Civ. Por consiguiente, el procurador municipal no puede oponerse á la aprobación de esa información, porque ningún interés tiene la Municipalidad, por tratarse de un inmueble que hacía más de 40 años salió del dominio público. Si algún derecho tuviese sobre el terreno, lo habría ejercitado, deduciendo la correspondiente acción, y no oponiéndose á la información. Y precisamente con ese objeto es que se da á la Municipalidad intervención en los juicios de esta naturaleza, sin que le sea dable oponerse á la aprobación de informaciones sin deducir acción alguna, puesto que ello contribuiría á mantener en la incertidumbre la propiedad territorial, con menoscabo del interés público y privado.

4—Véase el verb. *Desalojo*, 7.



5. **Dominio**—Debe rechazarse la tercería que no justifica la posesión ni el dominio del inmueble embargado—Civ., tom. 8, pág. 178, Ser. 5ª.

**Dominio**—Véase: *Muebles embargados*, 17, 18 y 20; *Costas*, 82; *Bienes embargados*, 7 y 8; *Embargo*, 4; *Bienes públicos*, 1; *Prescripción*, 4; *Acción*, 3; *Contrato de compraventa*, núm. 17.

1. **Donación**—Para la aceptación de la donación que el padre haga á sus hijos menores, debe nombrárseles tutor—Civ., tom. 9, pág. 90, Ser. 6ª.

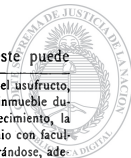
2. **Donación**—El donante que se reserva el usufructo

---

5—De acuerdo con el núm. 2.

1—Se trataba de la cesión de derechos á la herencia de la esposa que hacía el viudo en favor de sus hijos, con reserva del usufructo. Este acto no es una renuncia de herencia, sino que importa una donación, desde que se hacía gratuitamente y en favor de determinadas personas—arts. 1437 y 1789, Cód. Civ.—Hay renuncia de herencia cuando ésta se repudia por acto privado ó público y se defiere como si el renunciante no hubiese nunca existido—arts. 3349 y 3353, Cód. Civ.—Toda donación debe aceptarse espresamente por el donatario, por lo que siendo el padre donante y ejerciendo á la vez la patria potestad de sus hijos en favor de quienes hacía donación de sus derechos, debía nombrarse una persona con quien se entendiese aquélla. El art. 357, inc. 1º del Cód. Civ., prescribe que cuando los intereses del padre están en oposición con los de los hijos que están bajo su tutela, debe nombrarse un tutor especial.

2—El donante de un inmueble que se había reservado el usufructo, transfirió después el dominio á un tercero. El donatario se presentó pidiendo en su demanda se le reconociera su derecho á la finca y se obligase, á los demandados que la poseían, á su restitución con los frutos que hubieran percibido como poseedores de buena fe, y al pago de las costas del juicio en caso de resistencia, sin perjuicio de los derechos que le correspondieran, dado que aquella posesión carreciera de las condiciones espresadas. Se fundaba esta demanda en un título que se acompañó consistente en una escritura de donación otorgada á su favor en 11 de Octubre de 1879. De esta escritura, resultaba que le fué transferida la nuda propiedad de la finca en cuestión por la do-



posee por el donatario, y en consecuencia, éste puede

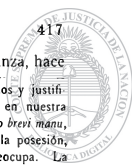
nación mencionada, reservándose la donante tan solamente el usufructo, uso y habitación, así como la administración del mismo inmueble durante su vida, con declaración, de que ocurrido su fallecimiento, la donante entraría al pleno goce de sus derechos de dominio con facultad de disponer á su arbitrio del inmueble donado, declarándose, además, que en el caso de ocurrir el fallecimiento de la donataria antes que el de la donante, sin hacer testamento, ó sin tener descendientes, la propiedad donada volvería plena á la otorgante, y finalmente, que la propiedad reconocía un gravamen hipotecario, cuyo servicio tomaba á su cargo la otorgante hasta su total cancelación, y que dado que en la oportunidad de entregarse la finca á la donataria no se hallase aun solventada esta deuda, debería reconocerse á su favor un crédito en dinero igual al saldo que en la fecha indicada existiese á favor del Banco Hipotecario, á efecto de que la transmisión del pleno dominio se hiciera libre de todo gravamen. Es de advertir, que en la época de esta donación, la donataria era menor de edad y que para la perfecta validez de su aceptación se nombró un tutor especial. Fundada en el derecho de pleno dominio que le corresponde por la acepción expresada por haber ocurrido el fallecimiento de la donante, la demandante pidió, se reconociera su derecho á la propiedad donada. Se trataba de una acción de reivindicación fundada en un título, que no adolecía de vicio alguno, ni por la forma de su aceptación por el tutor nombrado al efecto con ese objeto exclusivo, ni por la falta de anotación en la escritura de donación en el título de la donante y de su inscripción en el Registro de la Propiedad, puesto que la donación tuvo toda la publicidad que podía entonces exigirse y que no existía disposición alguna que sancionase la nulidad del título por esa razón. Por lo demás, á contar desde la fecha de la donación, la donataria principió á poseer el inmueble donado por intermedio de la donante, sin conservar ésta otra cosa que el usufructo, uso y habitación que se reservó durante su vida. La donante se convirtió en simple tenedora del inmueble y representante de la posesión de la donataria, con arreglo á lo dispuesto por los arts. 2351 y 2352, Cód. Civ. La cláusula de la escritura, en la parte en que la donante se reservaba el usufructo durante la vida, no es más que una cláusula de constituto. En el núm. 45 «*De la Posesión*» de Molitor, se lee el siguiente pasaje: «Convertirse de poseedor en detentador en nombre de otro á quien se transfiere la posesión, resolviéndose á poseer por él, es lo que los jurisconsultos modernos han llamado *constitutum possessorium*.» El cons-

reivindicar el bien de poder de terceros, aun cuando el

titulo posesorio de las antiguas leyes, se encuentra reproducido en principio por los arts. 2351, 2352, 2380, 2387 y concordantes del Cód. Civ. Es de la esencia del constituto, que la posesión de un inmueble se adquiere sin necesidad de tradición material, pues esta formalidad se entiende cumplida mediante una ficción de derecho. El efecto de la escritura citada, ha sido transferir la posesión civil del inmueble a la donataria, no quedando la donante más que con la posesión natural ó corporal, vale decir, como poseedora á nombre de la donataria. La ley 18 del Digesto *De adquirir vel omiti posses*, dice así: «Lo que poseo en mi nombre, lo puedo poseer en nombre de otro, porque no mudo la causa de la posesión, sino que dejo de poseer, y por mi propio hecho y voluntad hago que otro posea, porque no es lo mismo poseer, que poseer en nombre de otro, pues solo posee aquel en cuyo nombre se posee, y el poseedor funda su propio hecho y consentimiento para la posesión de otro.» Las leyes 47, tít. 28, y 9ª, tít. 30 de la Part. 3ª, legislan sobre el particular: y sus espositores, haciendo doctrina de acuerdo con la opinión de la mayoría de los intérpretes, llegan á la conclusión de que basta que coexista el titulo traslativo de dominio con el acto mismo de tomar la cosa en arriendo, ó con la retención del usufructo, para que estos induzcan la tradición ficta de la posesión. La donataria ha tenido la posesión de la finca y concurre, por lo mismo, el requisito esencial que pudiera exigirse para la procedencia de la acción reivindicatoria, sin que los demandados puedan alegar mejor derecho acogiendo á la sanción del art. 2791, desde que la posesión que alegan es posterior á la adquirida por la demandante. En resumen: dada la perfecta validez y legalidad del título sobre que se basaba la acción deducida por la demandante y la posesión del inmueble de que ha gozado por intermedio de la donante, es incuestionable, de que ningún valor tienen en el caso los títulos presentados por los demandados, desde que aquélla no pudo transmitir á su causante el derecho de propiedad de que ya se había desprendido, ni éstos pudieron adquirirlo en consecuencia —art. 3270, Cód. Civ.—La otra defensa consiste en sostener que la donataria no adquirió el dominio del bien que reivindicaba, porque no se le hizo tradición de la cosa. No constaba, en efecto, que la cosa donada no fué entregada á la donataria. La circunstancia de haber vivido en ella en compañía de la usufructuaria, que es el hecho que acredita la prueba producida, no importa la posesión material de la cosa, que de hecho y de derecho la tenía la demandante en su calidad de usufructuaria; eso es necesario

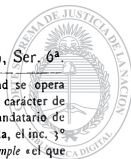
donante lo hubiese enajenado —Civ., t. 4, p. 261, S. 6<sup>a</sup>.

siempre con arreglo á nuestra ley la tradición material de la cosa, en el sentido de su entrega para la adquisición del dominio? ¿Era necesario en el caso especial de que se trataba? El art. 2587 del Cód. Civ. responde negativamente. Ese artículo, reproduciendo la *traditio brevi manu* de los romanos, revela categóricamente que no siempre es menester la tradición material de la cosa para la adquisición de la posesión y para que por consiguiente, se entienda hecha la tradición traslativa del dominio. ¿Cuál es la razón para que, en los casos á que se refiere el art. citado, los romanos y nuestro legislador digan que no es necesaria la tradición de la cosa, es decir, que no se requiere la entrega material de ésta por parte del tradente? Porque en realidad en todos ellos no hay posibilidad de entrega, desde que la cosa es ya tenida con anterioridad y porque concurriendo la detención y el *ánimus domini*, la posesión así adquirida reúne sus dos elementos esenciales—Savigny, «*De la posesión*», pág. 225.—Los romanos conocían también otro caso en que la tradición se operaba sin la entrega de la cosa. Cuando el que poseía á nombre propio empezaba á poseer para otro convirtiéndose en mero detentador, el segundo adquiría la propiedad ó posesión por ese acto, sin dependencia de la entrega material de la cosa, y con tal que concurrieran las otras condiciones que enumera Mainz, en la nota 12, pág. 729, tom. 1<sup>o</sup> de su obra. ¿Por qué razón no se necesitaba tampoco la entrega en ese caso? En primer lugar, porque de otro modo, como lo observa Mainz, habría sido preciso un rodeo, entregar la cosa é inmediatamente volverla á tomar, acto poco serio, en efecto, y que por consiguiente, las leyes no debían sancionar. En segundo lugar, porque hay razones jurídicas de otro orden que demuestran la perfecta conformidad de esa conclusión, con las reglas generales del derecho á este respecto. La siguiente transcripción de Molitor, núm. 45, expresa mejor que nada la razón de derecho que justifica plenamente el *constitutum possessorium*, «así como la *traditio brevi manu* no se separa en nada de las reglas ordinarias sobre adquisición de la posesión, así también el *constitutum* no se separa de esas mismas reglas, pues encierra todas las condiciones requeridas para la adquisición de la posesión por un tercero. En efecto; cuando se analiza este acto se encuentran: 1<sup>o</sup> la voluntad de poseer por un tercero, que es aquí el transmitente mismo el cual manifiesta la intención de transmitirnos lo posesión; 2<sup>o</sup> la voluntad de un tercero de poseer para nosotros; y 3<sup>o</sup>, la *rei presentia* ó la detención corporal del tercero que preexiste al *ánimus* como en la *traditio brevi manu*.» Ahora bien:



### 1. Duda.—La duda sobre el valor de la fianza, hace

este caso del constituto posesorio, previsto por los romanos y justificado en la forma que queda espuesta, ha sido adoptado en nuestra ley? Si el Cód. Civ. ha reconocido espresamente la *traditio brevi manu*, ha sido porque ha visto en ella todos los elementos de la posesión, lo cual está revelando que es ésta lo que al legislador preocupa. La tradición la exige para la trasmisión de la posesión, porque fuera de los casos de violencia para entrar en la posesión de una cosa tenida por otro, se requiere que éste desista de su posesión y que el adquirente la tome, realizándose así lo que propiamente constituye la tradición. Pero, como se ve el fin de la ley, no es la tradición sino la posesión y solo exige aquélla en cuanto conduce á ésta. Siendo, pues, éste el espíritu y verdadero propósito de la ley, parece que el constituto posesorio no está en pugna con nuestra legislación. Puesto que habiendo en él toma de posesión con consentimiento del poseedor actual, hay también tradición.»—Mainz, lugar citado.—Pero no es esta la única razón general que nos decide á pensar en el sentido indicado. Hay en el Cód. Civ. disposiciones que reconocen espresamente el constituto posesorio, la eficacia jurídica de la tradición material. La posesión se adquiere por medio de otras personas que hagan la adquisición de la cosa con intención de adquirirla para el comitente, dice el art. 2394 del Cód. citado. En este precepto se encierran los mismos elementos que el derecho romano exigía para la adquisición de la posesión por un tercero y que son las que enumera Molitor en el párrafo que antes se ha transcripto. Ahora bien, como en el caso del constituto posesorio todos esos elementos están reunidos, según lo demuestra el autor nombrado en el mismo párrafo, tenemos entonces, que la adquisición de la posesión por medio del constituto posesorio está terminantemente reconocido por nuestro derecho. Y como esa adquisición no se opera sino por la toma de posesión del tercero con consentimiento del poseedor actual, resulta que hay en el constituto verdadera tradición aunque no haya entrega material debido á la presentación del *corpus*. «Lo que en el constituto hace aparecer complicada la operación, dice Mainz, es que la misma persona obra á la vez en su propio nombre y como mandatario del otro contratante.» Pero una vez que se reconoce este doble rol de mandatario y de poseedor y que se comprende cuál es la operación que se presume realizada, esto es, que el poseedor entrega al mandatario y que éste recibe para el mandante, que es lo que ocurriría si se tratase de personas distintas, se ve que la adquisición de la posesión en esa forma, en nada com-



procedente su tasación—Civ., tom. 7, pág. 139, Ser. 6<sup>a</sup>.

promete al principio de la tradición desde que en realidad se opera una tradición implícita ó virtual, en el hecho de que en el carácter de poseedor se desista de la posesión para tomarla como mandatario de un tercero. Concorre también á justificar la tesis sostenida, el inc. 3º del art. 3462 del Cód. Civ., al disponer que será *tenedor simple* «el que transmitió la propiedad de la cosa y se constituyó poseedor á nombre del adquirente.» Esta disposición y la del art. 2352, importan, á nuestro juicio, la consagración más completa del constituto posesorio. Inútilmente se argüirá en contra de estas opiniones con lo dispuesto por la última parte del art. 2378. En los casos de constituto posesorio, existe verdadera posesión, puesto que concurren los dos elementos que la caracterizan. También se encuentra en él una verdadera tradición implícita, es verdad, pero no menos cierta, y desde luego, es claro que en tales condiciones no puede sostenerse que la posesión es el resultado de la sola declaración del tradente. Demostrado, pues, que el constituto posesorio no es una institución ajena á nuestro derecho, vamos á ver en seguida, que nos encontramos en presencia de un caso típico de transmisión de la posesión y del dominio por medio de él. Se trataba, en efecto, en este juicio, de la donación de una cosa con reserva por parte de la donante de los derechos del usufructo, uso, habitación y administración de la misma cosa. Pues bien: á propósito de un contrato como ese, dice Molitor en el mismo pasaje antes citado: «En el caso en que el donante se reserva el usufructo de la cosa donada, no se puede creer que quiera contrar las obligaciones de usufructuario y permanecer al mismo tiempo como propietario; hay pues tradición implícita y constituto posesorio.» Savigny, en la pág. 305 establece idéntica cosa: «Aquel que dona ó vende una cosa reservándose el usufructo ha transferido, realmente por *constitutum* la posesión y la propiedad de la cosa y no hace más en adelante que representar como todo usufructuario la posesión de otro.» Pero aun en la hipótesis de que no existiera en nuestro derecho la institución especial del constituto, se sostiene que de todos modos sería éste un caso esceptuado de la regla de la tradición material, dada la naturaleza misma del contrato y la imposibilidad legal de efectuar la tradición en esa forma. Desde luego, cuando el que transmite la propiedad debe quedar con la detención de la cosa, no se admite que la ley pueda exigir que sea entregada y vuelta á recibir inmediatamente. Sería esto, dar para quitar, un verdadero juego de niños, impropio completamente de la seriedad de las leyes. Pero es el caso, que con arreglo á la

**Duda**—Véase: *Fianza*, 4.

**Dueño**—Véase: *Acción reivindicatoria*, 8.

ley misma, esa doble entrega no sería posible. El enajenante que se ha reservado el derecho de usufructo, no puede ser compelido a desprenderse de la cosa que detiene, siquiera sea momentáneamente, por que su derecho de poseerla ha nacido en el mismo instante que el derecho del nudo propietario, de modo, que teniendo la posesión y el derecho de poseer, no puede ser legalmente despojado ni aun para la restitución inmediata de la cosa. Esto es obvio, porque desde que él puede resistir, amparado de su derecho, cualquiera acción tendente a exigirle la entrega de la cosa, es claro que no puede haber el medio de despojarlo de ella en ninguna forma. Siendo su derecho absoluto puede resistir la entrega, cualquiera que sea su objeto. Así, pues, tenemos que cuando el nudo propietario podría exigir la entrega, ya habría nacido en el usufructuario el derecho de negarla. La tradición material de la cosa al nudo propietario, es por consiguiente, legalmente imposible en un caso como el actual. Y como, por otra parte, es de derecho espreso—art. 2814 del Cód. Civ.—la facultad de celebrar contrato de esta naturaleza, resulta que, pudiendo y debiendo transmitirse el dominio en virtud de ese contrato y no siendo posible la tradición material, el único medio de efectuarlo es constituirse poseedor á nombre del propietario—art. 2462, inc. 2º.—Finalmente, debe recordarse también que la nuda propiedad no es compatible con la posesión material de la cosa, lo que hace ver también, que para su adquisición no puede exigirse la misma forma de tradición que cuando se trata del dominio pleno. En vista de estas consideraciones, que á mi juicio prueban plenamente la adquisición del dominio por parte de la demandada, y teniendo en cuenta lo que disponen los arts. 1329, 2758, 2772 y 3270 del Cód. Civ., se considera perfectamente procedente la acción de reivindicación deducida. Pero antes de terminar, y en apoyo de esta conclusión, se transcribe un párrafo de Molitor, que ha previsto un caso exactamente igual al presente: «En derecho romano, la cláusula que se llama constituto hace al adquirente poseedor perfecto, y por efecto de la justa causa, propietario de la cosa. Inútilmente, en este caso, el vendedor, que ha continuado deteniendo la cosa á nombre del comprador, habría vendido y entregado el mismo objeto; el primer adquirente en favor de quien se estableció la cláusula de constituto, tendrá la reivindicación hacia todos y contra todos»—pág. 70.







# FE DE ERRATAS

## TOMO VIII — PRIMERA PARTE



Pág.	Núm.	Línea	Dice	Debe
6	13	3	Civ.	Com.
43	1 <sup>b</sup>	4	5 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>
81	8	3	396	296
82	12	3	1	2
90	7	3	4 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>
114	1 <sup>b</sup>	3	507	307
121	1 <sup>a</sup>	4	6 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>
211	2	4	6	7
228	1	4	6	7
240	2	5	3 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>
260	15	4	tom. 3	tom. 4
260	16	4	369	360
266	1	5	309	209
268	66	2	214	42
304	6	3	tom. 6	tom. 8
323	40	4	tom. 2	tom. 3
335	59	5	tom. 6	tom. 8
336	60	3	tom. 6	tom. 8
336	61	4	tom. 6	tom. 8
347	15	2	tom. 6	tom. 5
351	5	3	tom. 6	tom. 9
356	3	3	Ser. 5 <sup>a</sup>	Ser. 6 <sup>a</sup>
375	1 <sup>a</sup>	3	tom. 6	tom. 7
376	1 <sup>a</sup>	3	Ser. 6 <sup>a</sup>	Ser. 5 <sup>a</sup>
379	1	3	tom. 9	tom. 7
382	20 <sup>a</sup>	3	433	430
403	7 <sup>b</sup>	5	172	178